

CAPÍTULO 1:

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES

Somos un país muy diverso, con culturas y sociedades regionales diferentes y una topografía compleja. Esta es una afirmación que subyace en cualquier análisis de nuestra realidad. La heterogeneidad que caracteriza al Perú, producto de la historia de interrelación de sus diferentes culturas, sociedades regionales y clases sociales, signa también, es obvio, el desarrollo del conflicto armado entre 1980 y el 2000.

Si bien la estrategia de expansión del PCP-SL es prácticamente la misma en todas las regiones a partir de su inicial trabajo político en el circuito educativo, que le permite incorporar docentes y estudiantes a su organización, la historia del conflicto armado en cada región está signada por las particularidades de los conflictos regionales. El PCP-SL buscó, en cada espacio regional, aprovecharse de estos conflictos, como veremos en detalle en el presente tomo. La marginalidad y la pobreza, el reclamo por la redistribución de tierras, la ausencia del Estado, las falencias del sistema judicial, la ausencia de institucionalidad, la prepotencia de las organizaciones de narcotraficantes, son algunos conflictos mayores notorios de los cuales se valió el PCP-SL para atraer sectores importantes de la población hacia su proyecto de construcción de un «nuevo estado».

Estos problemas fueron exacerbados por la estrategia del PCP-SL, que conforme incrementó sus métodos terroristas perdió la aprobación inicial de sectores de la población que habían aceptado su presencia en espacios vacíos –o vaciados- de presencia estatal.

Los estudios regionales de la CVR han sido elaborados retomando testimonios de actores y testigos directos de los miles de hechos de violencia ocurridos en los espacios locales. Además de estos testimonios, hemos recurrido a entrevistas y, evidentemente, a la profusa información periodística de veinte años de conflicto interno. Como era de esperar, muchos eventos y procesos locales pueden recién ser conocidos en las Historias Regionales de la CVR, que organizó su trabajo a partir de la división del territorio en cinco regiones:

1. La Región Sur-Central compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, fue el escenario original del conflicto armado interno y la región donde se constata la mayor cantidad de muertos. El mayoritario territorio de comunidades pobres, quechua hablantes, con muy débil presencia estatal y con marginal integración a los mercados, donde la educación es casi la única alternativa de movilidad social, se complementa con el espacio colonizado de la selva alta del Río Apurímac.
2. La Región Central, compuesta por los departamentos de Junín y Pasco y las provincias de Huancavelica, Tayacaja, Huaytará, Churcampá y Castrovirreyna del departamento de Huancavelica, reúne escenarios y procesos muy diversos, desde las alturas de Junín donde se ubican las SAIS, hasta territorios de comunidades nativas ashaninkas de la selva central, pasando por los sindicatos mineros, la ciudad de Huancayo y la Universidad Nacional del Centro. En esta región, además, al igual que en la región nororiental, están presentes las dos organizaciones subversivas, el PCP-SL y el MRTA.
3. La Región Sur Andina, compuesta por los departamentos de Puno y Cuzco y las provincias de Abancay, Grau y Cotabambas del departamento de Apurímac, reúne desde las comunidades quechuas de altura entre Cuzco y Apurímac, con mayor índice de eventos violentos, hasta el norte ganadero del departamento de Puno, donde el PCP-SL fue derrotado por una alianza efectiva de diversos actores regionales que incluía organizaciones campesinas, iglesias, partidos políticos y fuerzas del orden.
4. La Región Nororiental, compuesta por los departamentos de Huanuco, San Martín, Ucayali (particularmente las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo) y Loreto ha sido la región donde el conflicto armado duró por más tiempo, y se cruzó con otra fuente de violencia y corrupción como es el narcotráfico. El ciclo del conflicto armado casi corresponde a la curva de precios de derivados ilícitos de la coca, cuyo boom finaliza en la década de 1990.
5. La Región de Lima Metropolitana fue, para el PCP-SL y el MRTA una «caja de resonancia» vital en relación directa con la centralización del país. En 1992, cuando Abimael Guzmán fue apresado, la mayor cantidad de atentados ocurría en la ciudad de Lima, en cuyos distritos populares además el PCP-SL pretendía imponer su presencia de diversa forma.

En estos cinco espacios regionales se concentra el 97% de los muertos del conflicto armado interno, así como la mayor cantidad de atentados, de destrucción de infraestructura y de pérdida del capital social. Cada una de estas cinco regiones ha sido subdividida en zonas, diferentes entre sí tanto por sus características socio-culturales y económicas como por las particularidades del conflicto armado interno. Además, a estas cinco regiones hemos agregado la reconstrucción histórica de dos espacios complementarios que hemos llamado ejes: (1) Ancash-Lima; (2) La Libertad-Cajamarca.

Si bien el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000 es uno solo, los ritmos, tendencias y actores divergen en el tiempo y en las zonas de cada región, precisamente por la diversidad social de nuestro país, que se explica en espacios distintos.

El territorio rural quechua hablante de la región surcentral es el punto de partida, en 1980, de veinte años de conflicto interno. Las comunidades campesinas, tanto de altura como de valles interandinos, y los espacios de colonización de la selva alta, son los primeros involucrados del conflicto. Entre 1980 y 1986 el trabajo de organización del PCP-SL, la aplicación de sus métodos terroristas, el rechazo de algunos sectores campesinos a estos métodos y luego la contraofensiva de las fuerzas armadas, convierten a la región sur central en el principal escenario del conflicto y la que acumula la mayor cantidad de muertos a lo largo de veinte años. Cuando la ofensiva militar y los Comités de Autodefensa habían desarticulado el trabajo del PCP-SL y casi debilitado sus columnas armadas, el PCP-SL impulsó desde 1986 su presencia con mayor intensidad en otras regiones del país. Es decir, la subversión se expande en el país, aunque parezca paradójico, cuando el PCP-SL ha perdido buena parte de su base social en amplias zonas.

Posteriormente, entre 1989 y 1992, la mayor violencia se concentra fundamentalmente en dos espacios diferentes: la selva nororiental y central, de una parte, y las ciudades -especialmente Lima- de otra parte. La captura en 1992 de Abimael Guzmán, líder máximo del PCP-SL, ocurre cuando las acciones terroristas se sucedían con intensidad creciente en Lima metropolitana, que desde un principio fue considerada «caja de resonancia» de los subversivos.

Por su parte, las estrategias contrasubversivas de las fuerzas del orden fueron variando en el tiempo pero también tienen relación con los espacios diferentes en que fueron desplegándose y en las alianzas que construyeron en esos espacios.

En las páginas siguientes, que relatan la historia de las cinco regiones y los dos ejes, se puede apreciar la complejidad de nuestro país en la diversidad del conflicto armado y, lo que es más importante, cuán ignoradas fueron algunas zonas en la vida nacional.

1.1. LA REGION SUR CENTRAL

La región sur central del país, a la cual se ha denominado como «*espacio regional ayacuchano*», comprende al departamento de Ayacucho, parte del departamento de Apurímac (provincias de Andahuaylas y Chincheros) y parte del departamento de Huancavelica (provincias de Acobamba y Angaraes). Esta región está considerada como una de las zonas más pobres del país. Cuna del PCP-SL, terminó siendo desde 1980 el principal escenario de la guerra interna desatada entre esta agrupación política y las fuerzas del orden.

En esta región no sólo se registra la mayor cantidad de víctimas entre 1980 y el 2000 (10,686 que representan el 42.5% del total de víctimas a nivel nacional), sino que se constata además el descenso poblacional sin parangón con otras regiones del país, como veremos más adelante, que se expresa en un tercio de su población desplazada hacia otros lugares, sumándose a lo anterior un conjunto de secuelas de las que aún no se recupera, como la destrucción económico-productiva y de servicios, tanto comunales como estatales; pérdida de derechos civiles y políticos; destrucción de la institucionalidad estatal y social; y daños psicológicos y emocionales en su población.

Las provincias norteñas de Huanta, Huamanga, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo suman la mayor cantidad de muertos a lo largo del ciclo de violencia. El ingreso de las Fuerzas Armadas explica, en buena medida, los muertos en Víctor Fajardo y Huanta en 1983, en una primera ofensiva militar contra el «Comité Principal» del PCP-SL.

Datos generales

El departamento de Ayacucho tiene una superficie de 43,800 Km. cuadrados (3.9 % del territorio nacional). La región natural predominante es la sierra y un porcentaje menor de su territorio forma parte de la región natural de selva alta, ubicada en el valle del río Apurímac y en el valle del río Mantaro en su confluencia con el río Apurímac, o sea, en los límites con los departamentos de Cuzco y Junín.

Desde Huancavelica hasta Parinacochas, cual columna vertebral de la región, la puna constituye una franja continua, ensanchándose conforme se avanza hacia el sur. En el núcleo central, encerrado entre el río Pampas, el río Apurímac y el río Mantaro, se distinguen de norte a sur tres cuencas principales: el valle de Huanta, el valle de San Miguel y la denominada «cuenca de Ayacucho». En comparación con la sierra norte del país, denominada por algunos autores como los «Andes Verdes», en esta región las condiciones ambientales se caracterizan por humedad muy variable y periodos secos muy extendidos durante el año, razón por la cual se la ha denominado los «Andes amarillos».

Predominan en la región las tierras de secano y los pastos naturales, aunque existen también considerables extensiones bajo riego. Los principales cultivos son papa, maíz, cebada grano, trigo y habas. La zona de pastos naturales alto andinos, ubicados mayormente a partir de los 3,800 m. sustenta una ganadería variada de tipo extensiva donde sobresalen los camélidos (alpacas, llamas y vicuñas), el ganado ovino y en menor escala el ganado vacuno. Caracteriza a esta región la pobreza de recursos y el

alto número de comunidades que dependen básicamente de la agricultura de secano y de los pastos naturales, situación por la cual se encuentran sujetas a las condiciones climáticas que implican una producción altamente riesgosa. La organización de la producción sigue siendo eminentemente rural y el intercambio económico se realiza principalmente en los distintos circuitos de ferias semanales y anuales, en las que los comerciantes llevan productos de primera necesidad y la población campesina acude con sus productos.

A nivel regional, en el ámbito rural se pueden distinguir zonas de cierta especialización debido fundamentalmente a dos factores: condiciones ecológicas y acceso a mercados. Al sur de la región, zona con considerables superficies a una altitud mayor a 4000 msnm, que limitan la producción agrícola, se caracteriza por una producción ganadera. Esta producción es destinada tanto al mercado local y regional (ganado en pie, lana de ovino, queso) como al mercado extra regional (fibra de alpaca y vicuña, ganado en pie, queso). Además esta zona cuenta con mayor facilidad en el acceso a mercados costeros. Hacia el norte y centro de la región, resalta una mayor producción agrícola la cual es destinada básicamente al mercado local y regional. En la selva de las provincias de Huanta y la Mar y las inmediaciones del valle del río Apurímac, la producción de café, cacao y cítricos es destinada al mercado local y regional, aunque la producción más importante es la coca y sus derivados, cuyo destino es el mercado ilegal internacional. En el ámbito urbano, conformado básicamente por la ciudad de Ayacucho, las capitales de provincia y en mucha menor medida las capitales distritales, casi no existen industrias y las principales actividades giran en torno al comercio -mayormente informal- y a los servicios.

1.1.1. Antecedentes y contexto regional.

La lenta modernización (1950-1980)

Este espacio regional se ha caracterizado por mostrar una desarticulación creciente desde inicios del siglo XX. Hacia mediados de siglo, el proceso de desarticulación había desarrollado hasta tres espacios diferenciados: el norte ayacuchano, con las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar (el «*núcleo histórico*» regional), conectado con las provincias huancavelicanas de Acobamba y Angaraes; el centro ayacuchano, con las provincias de Cangallo, Víctor Fajardo –de las que luego se crearían las provincias de Vilcashuaman (1984) y Huancasancos (1984)- al que podríamos añadirle las provincias apurimeñas de Andahuaylas y Chincheros; y el sur ayacuchano con las provincias de Lucanas y Parinacochas, de las que se desprenderían las provincias de Sucre (1986) y Paucar del Sara Sara (1986).

La región tendrá en la Universidad de Huamanga -reabierto en 1959- su principal centro de formación, y en la creación del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (1966) y la lucha por la gratuidad de la enseñanza en Huanta y Huamanga (1969), las principales manifestaciones de su accionar político. Poco después, en 1970, se constituiría el núcleo principal del PCP-SL, grupo político que tras intensas discusiones políticas e ideológicas con el resto de agrupaciones de izquierda existentes en la

región, optó abiertamente -desde 1977- por la lucha armada para alcanzar el poder, simbólicamente iniciada en mayo de 1980, con la quema de las ánforas electorales en el distrito de Chuschi, en Cangallo.

El desarrollo del capitalismo en el país priorizó determinadas regiones en detrimento de otras, entre éstas la región ayacuchana. Sin ningún recurso atractivo para el capital extranjero o nacional, ni tampoco ningún polo económico dinámico, a lo que se agregaba una escasa y pésima infraestructura vial, la consecuencia fue una subordinación a otros circuitos económicos más dinámicos, a la vez que una suerte de «desenganche» y de encajonamiento geográfico. En gran medida como consecuencia de todo ello, hacia mediados del siglo XX, la región ayacuchana mostraba signos visibles de depresión económica, con uno de los PBI más bajos del país y con una fuerte emigración, especialmente en las provincias sureñas de Lucanas y Parinacochas, hacia otras áreas más dinámicas, principalmente a la costa. Los censos nacionales muestran el lento crecimiento poblacional del departamento, muy por debajo de los promedios nacionales.

De otro lado, según el censo de 1981, casi al inicio de la conflicto armado interno, los ayacuchanos residentes en Lima ya conformaban numéricamente la segunda colonia de migrantes provincianos. Esta situación se incrementaría explosivamente en los años siguientes.

Perú 1961-1981: Población del departamento de Ayacucho

Provincias	1961	1972	1981	1993
Huamanga	69,779	97,166	128,813	163,197
Huanta	58,350	67,417	76,074	64,503
La Mar	49,356	62,739	74,455	70,018
Cangallo	71,144	69,872	69,155	33,833
Víctor Fajardo	41,193	44,361	43,386	27,079
Lucanas	81,445	79,465	75,731	55,830
Parinacochas	39,502	36,421	35,778	22,769
Andahuaylas/Chincheros (Apu)	121,504	98,535	145,066	176,871
Acobamba (Hca)	36,504	36,918	37,721	43,435
Angaraes (Hca)	36,144	38,644	42,399	43,060

El departamento de Ayacucho contaba en 1993 con una población total de 492,507 habitantes (1.7% de la población nacional), de la cual el 51.9 % vivía en el ámbito rural, y un 71.7 % tenía al quechua como idioma materno. Como otra consecuencia de la conflicto armado interno, durante las últimas décadas Ayacucho ha sido el único departamento del país que ha mostrado una tasa negativa de crecimiento poblacional (-0.2) durante el periodo intercensal 1981-1993.

Las provincias huancavelicanas de Acobamba y Angaraes contaban en 1993 con una población de 43,435 y 43,060 habitantes, mostrando una tasa de crecimiento para el periodo intercensal 1981-1993 de 0.8 y 0.1, y contando con un porcentaje de población rural de 77.6% y 74.0% respectivamente. De otra parte, las provincias de Andahuaylas y Chincheros tenían 176,871 habitantes en 1981

El campo y la ciudad

Hacia mediados del siglo XX, la presencia estatal en las áreas rurales era muy débil. Las haciendas y las comunidades campesinas convivían en espacios contiguos, con múltiples conflictos de diversa intensidad. Cabe resaltar que, en la región, el término «hacienda» aludía tanto a los grandes latifundios - como los de la quebrada de San Miguel, los del río Pampas o los de las zonas alto andinas- como también a los pequeños fundos de los valles adyacentes a la ciudad de Ayacucho, mientras que el término «comunidad campesina» abarca desde las extensas comunidades de Huancasancos, con miles de hectáreas de pasto, hasta minúsculas comunidades como Pacaicasa, en las cercanías de Huamanga.

Las principales haciendas se ubicaban hacia el norte del departamento, en las provincias de La Mar, Huanta y Huamanga. Hacia 1959, las 205 haciendas de esta zona representaban el 81.3% del número total del departamento, concentradas principalmente en la provincia de Huamanga, donde habían 120 haciendas y fundos, mientras en la provincia de Huanta se registraba un total de 51 haciendas y 25 en La Mar.

Por otro lado, según el censo nacional de 1961, estas tres provincias representaban en conjunto, la mayor concentración poblacional, alcanzando al 43.2% de la población total del departamento. Aquí también se hallaban algunas de las comunidades más grandes de la región —tales como Vinchos, Socos, Quinoa, Huamanguilla, Tambillo— que fueron convirtiéndose en importante fuente de mano de obra y también de conflictos para la gran propiedad. Sin embargo, la existencia de comunidades constituidas siempre fue relativamente menor que en las otras zonas de la región.

En el espacio del centro del departamento, en las provincias de Cangallo —de la que se desprendería la provincia de Vilcashuaman— y Víctor Fajardo —de la que se desprendería la provincia de Huancasancos—, vivía en 1961 el 23.3% de la población departamental, 77.1% de la cual eran habitantes rurales quechua hablantes. En esta zona, la forma fundamental de organización eran las comunidades campesinas, especialmente las de altura que se dedicaban principalmente a la ganadería, mientras que la existencia de haciendas fue proporcionalmente menor que en el norte del departamento. Las 18 haciendas, algunas de ellas de propiedad de órdenes religiosas, se concentraban en Cangallo y Vilcashuaman, mientras que en Víctor Fajardo las tierras estaban enteramente en poder de comunidades campesinas. Como veremos luego, el proyecto senderista se asentó en esta zona de manera especial, generando que en 1983 la mayor cantidad de muertos ocurriera en la provincia de Víctor Fajardo.

Hacia el sur del departamento, se ubican las provincias de Lucanas, Parinacochas, Sucre y Paucar del Sara Sara, estas dos últimas creadas en 1986 por desprendimiento de las dos primeras

respectivamente. Más vinculadas con los mercados costeros que con la capital departamental, se trata de una zona de emigración sostenida. Esta zona ha sido ocupada mayormente por comunidades campesinas y pequeños propietarios, dedicados a la ganadería, predominando la comercialización de ganado vacuno y ovino en las zonas costeras de Ica, Arequipa y Lima. La presencia de haciendas fue poco relevante, registrándose 29 haciendas y fundos a inicios de la década de 1960.

Como dijimos anteriormente, las distintas formas de articulación con el mercado originarían un proceso de desarticulación regional, ubicando a estas provincias sureñas prácticamente fuera del control de la capital departamental. Por otro lado, las provincias norteñas se articulaban con la región central y Lima a través de la carretera Huamanga-Huanta-Huancayo y, desde fines de la década de 1960, con la Vía de los Libertadores que une Huamanga con la costa.

Las provincias del centro -Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y Huancasancos- por las condiciones propias de su geografía, se vieron limitadas en el acceso a los principales circuitos comerciales al no existir una red vial que pudiera conectarlas. Es importante señalar que fue en esta zona, en la cuenca del río Pampas, donde el PCP-SL inició sus acciones y logró importantes adhesiones.

Un caso especial lo constituye el corredor hacia el valle del Apurímac (selva de las provincias de Huanta y La Mar), que en las tres últimas décadas ha devenido en uno de los polos de desarrollo agrícola más dinámicos de toda la región, produciendo principalmente café, cacao, kube, frutales y mas recientemente coca.

Por su parte, las comunidades campesinas empezarían a cobrar un importante protagonismo, movilizándose por alcanzar su reconocimiento por parte del Estado. En algunos casos, las comunidades se enfrentaron a los terratenientes por la recuperación de sus tierras con el fin de ampliar sus recursos. Este movimiento por la recuperación de las tierras comunales, de menor escala en nuestra región que en otras zonas del país, no tuvo un carácter violento, sino que fue un proceso lento y sostenido en el que las muchas comunidades —con el producto de la venta de ganado— al igual que muchos colonos de haciendas, compraron tierras a los empobrecidos hacendados. Un buen ejemplo es el caso de la hacienda Cangari, en el valle de Huanta, en donde el paulatino empobrecimiento de los propietarios los obliga a ir vendiendo parte de sus propiedades a sus trabajadores, convertidos de colonos en pequeños propietarios: Este proceso fue de tal envergadura que la reforma agraria del gobierno militar afectó una cantidad de tierras bastante reducida de propiedad de las haciendas, pues algunos hacendados habían comenzado una suerte de «reforma agraria privada», parcelando y vendiendo sus propiedades.

Además, ante la inminencia de la Reforma Agraria, algunos hacendados cedieron parte de sus propiedades a las comunidades vecinas, o simplemente abandonaron sus haciendas temor.

Las cifras al respecto son rotundas y muestran el profundo desfase existente entre el discurso «anti terrateniente y anti feudal» que sostiene el PCP-SL, y la realidad agraria departamental. En efecto, en el período comprendido entre los años 70 y 80, el Estado expropió en el país 1,493 fundos y haciendas, con un área total de 7'677,083 hectáreas. En Ayacucho, el área total expropiada durante el proceso de reforma agraria apenas fue de 324,372 hectáreas, área menor a la suma de los departamentos de

Apurímac y Huancavelica, beneficiando a 18,101 familias agrarias, distribuidas en diversas modalidades: individual, en cooperativas agrarias de producción (CAP's), en grupos de agricultores, en comunidades campesinas, y en una sola Sociedad Agrícola de Interés Social.

El escaso impacto de la RA se refleja en la creación de sólo 4 Cooperativas, que reunieron a 155 familias con 6,505 hectáreas de tierra. Más aun, en todo el departamento se creó una única SAIS, a la cual se adjudicó 1,432 hectáreas, beneficiando a 26 familias, mientras que 91 comunidades recibieron 98,697 hectáreas involucrando a 12,086 familias. Revisando estas cifras es difícil, por decir lo menos, sustentar la existencia de un «régimen servil» vigente en la región en la década de 1970. Por su parte, el área urbana de la región prácticamente se reducía a las ciudades de Huamanga, y si exageramos un poco, también Huanta y Puquio, mientras que las otras capitales provinciales eran casi aldeas.

Tanto Huamanga como Huanta fueron tradicionales centros de residencia de los terratenientes de la región y se habían constituido con los siglos en las sedes indiscutibles del poder regional. A lo largo del siglo XX, podemos ubicar dos momentos importantes dentro de la modernización urbana de Huamanga, el primero durante la década del 1920, bajo el Oncenio leguista, y el segundo desde la reapertura de la UNSCH, en 1959, hasta las reformas del gobierno militar, en 1968.

Entre 1961 y 1972 la ciudad de Huamanga apenas creció de 24,301 a 34,706 habitantes, mostrando a Huamanga como la capital departamental serrana de menor crecimiento demográfico en el país, situación que se modificaría drásticamente a consecuencia de la guerra interna.

A pesar de su lento crecimiento, algunos procesos urbanos deben ser resaltados por su vinculación con el ciclo de violencia que se iniciará en 1980. En primer lugar, la movilización de los habitantes de las zonas periféricas de la ciudad —conocidos como *laderistas*— que demandan la entrega en propiedad de las «tierras de laderas» al municipio local propietario de las mismas. Los barrios de la ciudad se organizan para ello, en 1964, en la Federación de Barrios de Ayacucho (FBA). El segundo proceso se desencadena con la reapertura de la UNSCH desde 1959, que generó el arribo de un contingente de docentes y estudiantes foráneos y en los años siguientes se convirtió en el foco dinamizador de la región en varios aspectos: cultural, político, económico, difusora de ideas progresistas y distanciada de los sectores tradicionales, llegando a generar un verdadero terremoto social, en momentos en que el orden terrateniente y señorial, como vimos, estaba casi en extinción.

En 1966, en un intento del gobierno central de recortar el presupuesto de la UNSCH, el rector de entonces, Efraín Morote Best, convocó a la sociedad civil local a conformar un «Frente pro-rentas para la UNSCH». A este llamado acudieron desde las asociaciones barriales agrupadas en la Federación de Barrios, los artesanos y las vendedoras del mercado, hasta los comerciantes medianos y grandes y los colegios profesionales. De este modo se evidenció el peso de la UNSCH, la que pudo convertir una demanda institucional en una fuerza política regional. El corolario de esta coyuntura fue la creación del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FDPA), precursor de este tipo de organizaciones que en los años siguientes se extenderían a distintas zonas del país. Tanto en la Federación de Barrios como en el FDPA se cuajaron algunos de los militantes del PCP-SL, quien pretenderá, desde inicios de la década de

1970, controlar estas organizaciones centrales en la vida política de la ciudad. En la «Entrevista del siglo», A. Guzmán afirma: «Fuimos nosotros quienes creamos el primer frente de defensa del pueblo en Ayacucho, ejemplo que después, como creación heroica, deformándolo, se apropió Patria Roja para hacer sus «FEDIP» hasta cuyo nombre es erróneo, pues si es un frente de defensa del pueblo ¿cómo no va a defender los intereses del pueblo?». ».

La radicalización política y sus actores (1950-1980)

El movimiento campesino

Recordando la importante presencia comunera en la región, debemos completar esa visión con la organización de algunos sectores campesinos en torno a la necesidad de recuperar las tierras, destacando que esta recuperación no implicaba necesariamente el uso de la violencia, sino que en todo momento se hizo uso de la ley para conseguir los objetivos propuestos. Son poco comunes en la historia regional los asesinatos de hacendados o de administradores; por el contrario, la violencia por lo general vino del lado de los hacendados o de la policía.

El movimiento campesino de Pomacocha, cuyos inicios datan de la década de 1940, se constituyó en el paradigma de este proceso de lucha campesina en la región, habiendo logrado, a fines de la década de 1960, apropiarse definitivamente de las tierras que pertenecían a un convento de monjas de Huamanga.

Pomacocha es ejemplo clásico, y también casi único en la región, de movilización campesina para apropiarse de tierras de una hacienda. Aquí se conjugan las acciones de fuerza (huelgas y autodefensa) por parte de los campesinos, las acciones legales de los comuneros residentes en Lima y las actividades de la Confederación Campesina del Perú (CCP), liderada primero por el Partido Comunista Peruano (PCP) y posteriormente por el PCP-Bandera Roja (PCP-BR).

Está probado y lo sabemos desde los años sesentas y por un nuevo estudio que hiciéramos en los años setentas, que la simple consecución de la tierra, si no está ligada a una guerra popular, a una lucha por la conquista del Poder, lo que genera es simplemente un acoplamiento al sistema, y se deviene en un sostén del mismo, y se sigue en el mismo proceso vegetativo semifeudal, pruebas al canto: Pomacocha y Ccaccamarca, en el departamento de Ayacucho, creo que esas son cosas que tenemos que pensar (A. Guzmán, Entrevista del siglo)

De otra parte, en una vía distinta de ampliación de recursos, los comuneros de Huancasancos deciden la expropiación de tierras pertenecientes a una cofradía. Este dinamismo comunal conduce, en varios casos, a la agudización de conflictos intercomunales, muchos de los cuales tenían sus raíces en el periodo colonial.

En 1965 se organiza la Federación de Comunidades y Campesinos de Ayacucho (FEDCCA), en la que tuvieron influencia decisiva las agrupaciones de izquierda -sobre todo el PCP-BR, escindido recientemente del PC, y un sector de estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

En 1959 reabría sus puertas la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) luego de casi ocho décadas de clausura. En efecto, fundada como «Real y Pontificia» el 3 de julio 1677, siendo además la segunda universidad fundada en el país, persistió como «Nacional y Pontificia» durante la República, hasta ser clausurada durante el gobierno de Andrés A. Cáceres, tras el desastre económico derivado de la guerra con Chile. Durante el tiempo en que permaneció clausurada, se sucedieron intermitentemente, desde el poder y la prensa locales, diversas acciones conducentes a su reapertura. Pero no es sino hasta mediados del siglo XX que estas acciones se intensifican hasta lograr finalmente dicho objetivo.

En palabras del Dr. Manuel Beltroy, impulsor desde la Universidad de San Marcos de la reapertura, esta universidad no debería ser:

[...] un mero claustro doctoral, vivero de licenciados en teología, letras y derecho, sino que, en conformidad con los requerimientos actuales, sería una Escuela Superior formativa de técnicos, de investigadores, de maestros orientados al planteamiento y a la solución de los problemas de toda índole del centro de la República.

No llama la atención entonces el hecho de que durante buen tiempo no se estableciese una facultad de Derecho, lo cual sucedió casi obligatoriamente con la fusión de la Universidad Particular por disposición del gobierno, en 1977.

Desde el primer momento, la UNSCH pareció decidida a demostrar que pretendía ser parte de un nuevo concepto de universidad, en el que se incorporaría el desarrollo regional como el centro de sus actividades. Su diseño curricular, su sistema de administración, los haberes de docentes y administrativos, fueron bastante diferentes a los existentes en las otras universidades públicas del país.

El vertiginoso crecimiento de la población estudiantil, que muestra entre otras cosas el acceso a la educación superior de sectores urbanos y rurales que la consideran como la vía ideal para su ascenso social, queda expresado en el incremento de la población universitaria de 228 alumnos en 1959 a 6095 en 1980. Este crecimiento sólo se detendrá, como observamos en el cuadro, en 1980, al iniciarse el ciclo de conflicto armado interno, que coloca a la UNSCH en el centro de las sospechas oficiales como centro de subversión» y obliga al retiro a muchos estudiantes.

Los partidos políticos tradicionales

La actividad política previa a la reapertura de la UNSCH estuvo prácticamente dominada por los sectores conservadores, dentro de los cuales podríamos ubicar a los militantes locales del partido aprista. Décadas atrás, el aprismo regional había alcanzado un importante protagonismo no sólo en el terreno electoral sino también en su accionar en las luchas políticas locales. Un momento importante lo constituyó la rebelión de 1934, un movimiento urbano, en la que participó un importante sector de la elite y de la

juventud huamanguina, y que tuvo algunas reverberaciones en las provincias de Huanta y La Mar. La rebelión aprista de 1934 en Ayacucho y Huancavelica formaba parte de un intento mayor de insurrección nacional que este partido iba a poner en marcha. En la hora undécima, la dirección nacional aprista dio marcha atrás y no alcanzó a comunicar su decisión a sus correligionarios en la región, los que dirigidos por el abogado Arístides Guillén Valdivia lograron tomar el cuartel de la policía, el local de la prefectura y otras dependencias estatales, alzándose victoriosos en Huamanga por algunos días, confiados en una insurrección nacional. Enterados de la real situación, abandonados por su propia dirección partidaria y ante la inminente llegada de los efectivos militares desde Lima, se desbandaron y huyeron hacia el campo.

Después de este episodio las actividades del APRA se fueron limitando a algunas actividades gremiales, sobretudo entre los abogados y los maestros de escuela, y a la participación en las coyunturas electorales. Durante el periodo que reseñamos, su accionar en la región se había reducido ostensible y, al igual que los sectores terratenientes -donde reclutaron buena parte de sus miembros- y el clero local, el aprismo local estaba prácticamente en repliegue, reducido en gran medida a los descendientes y al entorno cercano de aquellas familias que se vincularon con la rebelión del 34 y se fortalecían con el recuerdo de aquel suceso.

Para entonces —década del sesenta— lo que quedaba del aprismo local se activaba casi exclusivamente en las jornadas electorales o a través de la visita de algún dirigente partidario que visitaba la ciudad, en momentos en los que era necesario explicar a su militancia los virajes políticos del partido. Cabe decir que estos virajes no generaron mayor cuestionamiento en la militancia local, más bien se dio una cerrada defensa de las acciones tomadas por la dirigencia nacional y una casi nula disidencia (Entrevista A.López Mayorga)

Sin embargo, tras la reapertura de la UNSCH, iniciarían una nueva cruzada, esta vez en defensa de un orden que consideraban amenazado. Según su evaluación, la novel universidad se había convertido en un «nido de comunistas» y de «enemigos de la religión». Por ello, junto al clero local y a sectores conservadores, decidieron cerrarle el paso a la UNSCH e iniciaron gestiones para abrir otra universidad, esta vez de orientación católica y lo más alejada posible del marxismo. Estas gestiones —en las que Luis Alberto Sánchez, por entonces presidente del Senado, tuvo una participación decisiva— dieron frutos y hacia 1967 se iniciaron las actividades de la Universidad Católica de Ayacucho «Víctor Andrés Belaunde», prontamente convertida en Universidad Particular de Ayacucho (UPA). Los profesionales apristas intentaron copar las distintas facultades acompañados por intelectuales locales que no habían podido acceder a una cátedra en la San Cristóbal. Pero esta cruzada no pudo resistir al escenario y al nivel de politización existente. Una muestra de ello es que cuando ocurrió la primera elección para su federación de estudiantes, ésta fue ganada por sectores vinculados al PCP-Patria Roja, partido político que dominó la actividad del gremio universitario en dicha universidad. Finalmente esta universidad, en medio de una crisis administrativa, fue absorbida por la UNSCH en 1977, fracasando en los objetivos de

su cruzada. Por su parte los apristas, se mantuvieron inactivos durante casi todo el gobierno de las FFAA., salvo en las coyunturas electorales de 1978 y de 1980.

Por su parte, sin estar propiamente en el campo conservador, las actividades de la Democracia Cristiana y de Acción Popular también fueron limitadas. La primera se movía en pequeños círculos de estudiantes universitarios y alcanzaron algún nivel de protagonismo, mientras que los segundos se movían al compás de las acciones de su caudillo y fundador. Varios de los accio populistas locales provenían de las canteras apristas, de aquellos militantes desencantados con los virajes apristas y que veían en el discurso de Belaunde una posición moderada de cambio en momentos en que era visible la debilidad del régimen del latifundio (Entrevista a A. Martinelli).

El discurso radical de cambio social, altamente ideologizado, fue el que alcanzó mayor adhesión y difusión, y tuvo a la izquierda local, en sus distintas vertientes, el principal espacio de organización para las nuevas generaciones de ayacuchanos, sobre todo para los estudiantes. El sentido común construido tenía como eje central la conquista del poder a través de la revolución.

La Iglesia católica

La iglesia católica, de reducidas dimensiones en la región, era en gran medida el sostén del discurso conservador, y se había replegado sobre los espacios urbanos, particularmente sobre Huamanga, habiendo abandonado el campo, en un proceso paralelo al repliegue terrateniente. Su relación con los sectores campesinos era muy débil. Los templos existentes en las áreas rurales permanecían cerrados la mayor parte del año. Los sacerdotes se limitaban a hacer breves incursiones en periodos de fiestas religiosas y aprovechando la ocasión para otorgar algunos sacramentos como bautizos, confirmaciones y matrimonios, los que además les daban algunos ingresos.

Pero si bien la jerarquía y el aparato eclesiástico eran de dimensiones reducidas, las ordenes religiosas, en especial los conventos de monjas de Santa Clara y Santa Teresa, habían acumulado con el tiempo importantes haciendas en propiedad que arrendaban, en diversas modalidades, a *locatarios*. La hacienda Espíritu Santo, en Muyurina (Huamanga), era propiedad de las monjas dominicas; la hacienda Pomacocha pertenecía al monasterio de Santa Clara; el latifundio de Culluchaka, en las alturas de Huanta era propiedad del monasterio de Santa Teresa.

Es decir, como mencionamos líneas antes, la iglesia católica actuaba también como parte del régimen latifundista, enfrentándose muchas veces a los campesinos. Es lógico pensar que un clero de estas características veía con mucho recelo el desarrollo de una institución como la UNSCH.

La izquierda regional y el surgimiento del PCP-SL

La izquierda regional previa a la reapertura de la UNSCH tuvo al parecer presencia muy limitada, teniendo que sortear el problema de la ilegalidad a la que fueron sometidas sus actividades por los distintos gobiernos. Sus pequeños núcleos estaban constituidos principalmente por maestros de escuela, empleados públicos, abogados, y estudiantes universitarios ayacuchanos formados en Lima o Cuzco.

Apenas se registran algunas acciones del Partido Comunista (PC) en Huanta a mediados de los años cuarenta.

Sin embargo, tras la reapertura de la UNSCH, también se dinamizarían las acciones de la izquierda regional la que, durante la década del sesenta, seguiría de cerca los debates y las pugnas en los que se enfrascó la izquierda nacional. Con la llegada de contingentes de profesores y estudiantes universitarios, llegan también varios activistas de las distintas facciones que iban apareciendo dentro del espectro de la izquierda nacional, aunque ninguna -salvo el PC- alcanzó a tener una vida orgánica regular ni tampoco una presencia importante en la escena política local. En 1962, con la convocatoria a elecciones presidenciales, se organiza la representación local del Frente de Liberación Nacional (FLN), al interior del cual activaba el PC, que postulaba a la presidencia al general (r) César Pando Egúsqiza. Durante esa coyuntura fueron importantes las actividades en Huanta, y sobretudo entre los sectores de jóvenes quienes tuvieron enfrentamientos con militantes apristas (Entrevista a José Coronel).

Cabe decir que el ambiente generado desde el exterior por la revolución cubana y desde el interior del país por el movimiento campesino de La Convención y Lares en el Cuzco, dirigido por el trotskista Hugo Blanco, generó en los predios izquierdistas una inusitada actividad, que aumentó con la formación de grupos guerrilleros como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), este último, liderado por Héctor Béjar, quien abrió un frente guerrillero en la provincia ayacuchana de La Mar, zona que además colinda con la provincia cuzqueña de La Convención, y desde donde buscaban establecer un enlace para una ofensiva guerrillera mayor. Asimismo, buscando apoyo local, el ELN estableció algunos nexos con sectores universitarios y con militantes del PC. La acción que concitó mayor atención fue el ajusticiamiento del hacendado Carrillo, propietario de la hacienda Chapi, en la zona selvática al sur de la provincia de La Mar, y de su administrador.

Pero al ser un grupo pequeño, con poco conocimiento de la difícil zona, fueron fácil y rápidamente capturados y desarticulados. Sin embargo, este hecho logró generar pánico entre muchos hacendados de la zona, quienes se retiraron vendiendo apuradamente sus propiedades o incluso abandonando sin más sus tierras en toda la provincia.

Casi paralelamente a estos hechos, se venían produciendo fuertes tensiones al interior del PC, derivadas de la polémica chino-soviética, las que finalmente terminarían en 1964 con su ruptura en dos grupos que se distinguirían en adelante por los nombres de sus respectivos periódicos: Unidad (pro-soviéticos) y Bandera Roja (pro-chinos). Esta ruptura significó, además, que el trabajo con los sectores obreros (CGTP) quedaría en manos del PC-Unidad (PC-U), mientras que el principal trabajo con los sectores campesinos (CCP) quedó bajo control del PC-Bandera Roja (PC-BR). En Ayacucho, el Comité Regional «José Carlos Mariátegui», liderado por entonces por Abimael Guzmán, terminó alineándose con esta última tendencia. Cabe resaltar que al interior del PCP-BR ya empezaba a desarrollarse la denominada «fracción roja» —el grupo de Guzmán— con importante presencia, básicamente en la

UNSCH, el FDPA y el SUTE, y también en el trabajo con las bases campesinas de la región, entre otras con las importantes experiencias de Pomacocha y Cangallo.

Ayacucho me sirvió para descubrir al campesinado; entonces Ayacucho era un pueblo muy pequeño, mayormente campo, si uno va a las barriadas, incluso hoy, hay campesinos y si uno sale un cuarto de hora ya está en el campo. Ahí también empecé a entender al Presidente Mao Tsetung, avancé en comprender el marxismo...Ayacucho ha tenido para mí trascendental importancia, tiene que ver con el camino de la revolución y lo que el Presidente Mao enseña. Así me fui haciendo marxista y el Partido me fue modelando con temple, con paciencia creo.(A. Guzmán, Ent. Del siglo)

En 1968 se produjo otra división al interior del PC-BR, surgiendo el PC-Patria Roja (PC-PR), que en esta etapa concentraría su accionar básicamente entre los sectores universitarios. En el caso de Ayacucho, el trabajo partidario en la UNSCH estaba prácticamente copado por el PC-BR, así que el PC-PR decidió concentrar su trabajo político en la Universidad Particular de Ayacucho, enviando para ello militantes con cierta experiencia en el trabajo universitario, enfrentando con éxito al aprismo y llegando a controlar la federación de estudiantes de ese centro de estudios, hasta la clausura de la UPA en 1977. De esta manera, el maoísmo y las distintas agrupaciones maoístas, alcanzaron en Ayacucho mayor difusión con respecto a las otras vertientes de la izquierda nacional, y fueron también las que desarrollaron el trabajo más importante, llegando casi a monopolizar el discurso de los principales sectores de la izquierda regional. En el ambiente universitario ayacuchano de la década de 1970, podemos afirmar que ser militante o simpatizante izquierdista era casi sinónimo de ser maoísta.

Las ideas radicales impregnaron no sólo los ambientes académicos, sino también circularon en kioscos, librerías ambulantes, polémicas callejeras en los barrios y en los espacios de la bohemia local, ejerciendo casi un monopolio sobre la opinión pública y modelando el sentido común local.

En octubre de 1968 se produjo el golpe militar del Gral. Juan Velasco Alvarado, dando inicio al autodenominado *Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas* (1968-1980). Desde el inicio, éste demostró no sólo una prédica y actitudes nacionalistas, sino que elaboró un plan de gobierno —el «Plan Inca»— en el que se proponía implantar un conjunto de reformas —agraria, industrial, educativa— consideradas necesarias para la modernización del país, intentando además movilizar para su proyecto a vastos sectores populares. Estas actitudes generaron desconcierto dentro de los predios izquierdistas, que debieron plantearse una «caracterización del régimen» para luego tomar posición frente a él. Se generó con ello un abanico de posiciones que fueron desde un «apoyo crítico» considerando que el gobierno militar era «antiimperialista, antioligárquico y representaba intereses populares» (PCP-U); hasta la abierta oposición calificándolo como «reformismo burgués con aspectos de reivindicación democrática y nacional» (MIR, PC-PR, Vanguardia Revolucionaria) y «fascista, agente del imperialismo y enemigo principal» (PC-BR, PC-SL).

A su vez, el estado se convirtió en un competidor —poco exitoso por cierto— para las agrupaciones de izquierda al impulsar organismos que buscaban tener incidencia en los sectores populares tales como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), la Confederación

Nacional Agraria (CNA) y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), este último con gran despliegue en las áreas rurales.

En la región, en junio de 1969, un decreto dado por el gobierno militar que intentaba recortar la gratuidad de la enseñanza escolar, generó un fuerte movimiento de rechazo en las ciudades de Huanta y Huamanga, que se prolongaría durante casi todo el mes, y en el que se involucraron vastos sectores de la población y de las organizaciones sociales regionales, enfrentados a la represión policial con un considerable saldo de muertos, heridos y detenidos. Este hecho permitió observar el nivel de organización de los distintos sectores de la sociedad regional —entre ellos los grupos de izquierda— y además quedó registrado en la memoria histórica de la región como un hito importante del enfrentamiento entre los intereses regionales y el estado central, limitando grandemente la adhesión social que el proyecto militar buscaba en la región.

Ese mismo año, al interior del PCP-BR se produce un nuevo periodo de tensión interna, que enfrentaba esta vez a su secretario general, el abogado ancashino Saturnino Paredes y a su secretario de organización, el profesor Abimael Guzmán, líder de la «fracción roja» de Ayacucho. El enfrentamiento empezó a tomar el carácter de ruptura hacia fines de 1969, cuando la dirección nacional decidió a expulsar a Guzmán, acusándolo de «oportunist» y arrebatándole además -en el marco del congreso de la Federación Departamental de Comunidades y Campesinos de Ayacucho (FEDCCA), celebrado ese año en el mismo Ayacucho- el control de su única base campesina, la Federación Provincial de Campesinos de Huamanga. Desde ese momento, la «fracción roja» decide construir una nueva alternativa maoísta, Sendero Luminoso (PCP-SL). Este momento resulta importante en tanto que es el momento en que el grupo de Guzmán, tras salir derrotado en el PC-BR, queda reducido a una fuerza política regional, con presencia importante sólo en Ayacucho, y con escasos y pequeños núcleos fuera de la región.

Coincide esta ruptura con el incremento estudiantil de la UNSCH, que implicó la llegada de nuevos contingentes de estudiantes y docentes foráneos, en cierta medida ajenos y distantes de toda esta historia previa, y en búsqueda de otros referentes políticos. De casi 1500 estudiantes en 1968 la cifra se duplica menos de un lustro después, en 1971, con 3319 matriculados.

También en contexto, favorecidos indirectamente por las medidas de reforma dictadas por el gobierno militar que abren espacios de participación, organización y reivindicación inéditos, empiezan a activarse progresivamente los núcleos del MIR y de Vanguardia Revolucionaria (VR), iniciando una dura y muchas veces exitosa competencia en el terreno político ya tratinado por el maoísmo local, sobre todo por el PCP-SL. La pugna se trasladó entonces a la UNSCH, al FDPA, al SUTE y al trabajo campesino.

El PCP-SL se atrincheró en la UNSCH, particularmente en la Facultad de Educación, que a su vez controlaba los planteles de aplicación «Guamán Poma de Ayala», lo que le permitió una fuerte presencia e influencia en los gremios de maestros, particularmente en el SUTE-Huamanga, a la vez que disponía el desplazamiento de sus profesores militantes a zonas rurales, inaugurando lo que hemos denominado un circuito educativo de construcción del partido. El paulatino crecimiento de la cobertura

educativa en la región, expresado en la progresiva inauguración de escuelas, sobre todo en las áreas rurales, fue muy bien aprovechado para el trabajo que venía realizando el PCP-SL, que empieza a utilizar la infraestructura y la logística educativa para desarrollar organizadamente su labor proselitista, buscando copar las plazas rurales con su militancia.

En suma, a mediados de los años setenta, las otras agrupaciones de izquierda habían logrado una notable influencia en la región, controlaban gran parte de los gremios locales, salvo el SUTE y el FDPA bajo influencia del PCP-SL, e iniciaban procesos de unidad para enfrentar al gobierno de Morales Bermúdez, asumiendo la tarea de participar en procesos electorales nacionales. En la dirección opuesta, el PCP-SL abandonaba luego de 1977, al acordar el inicio de la lucha armada, el trabajo de masas, replegándose hacia la construcción de un «partido de cuadros» y hacia un fundamentalismo político, que tras la muerte de Mao Tse Tung en 1976 y el viraje político que seguía la dirección del PC Chino, los llevaría a auto designarse como los continuadores de la «revolución mundial».

Las elecciones de 1978

Durante el gobierno del General Morales Bermúdez, «segunda fase» del gobierno militar, se produciría una inusitada actividad de la izquierda, que la colocaría, aún fragmentada, como una importante interlocutora de los sectores populares. Mientras que para el APRA, la supuesta beneficiaria de las reformas, o para la derecha, la salida natural era la convocatoria a elecciones, dentro de la izquierda la decisión de participar no fue tan sencilla. La mayor parte de su militancia no estaba acostumbrada a los procesos electorales, sea por su juventud o por convicción ideológica. Pero evaluando que las elecciones también podrían ser un importante espacio para la lucha social, la mayor parte de ella decidió impulsar procesos de unificación, conformándose alianzas como la Unidad Democrático Popular (UDP) —que agrupaba entre otros al MIR y a VR— solicitar su inscripción legal e ingresar al terreno electoral. Sin embargo, la mayor parte del espectro maoísta decidió no participar (PC-BR y PC-PR) o boicotear (PCP-SL) —promoviendo el ausentismo— el inminente proceso electoral. En Ayacucho, la participación electoral de la población, a pesar del boicot maoísta, fue mayoritaria.

Cabe aclarar que en estas elecciones participaban aquellos ciudadanos mayores de 18 años, que sabían leer y escribir, es decir que estaba ausente la mayor parte de la población campesina. El ausentismo regional registró un 19.46% frente a un 16.3% nacional. Cabe señalar que el ausentismo en esta región ya mostraba un porcentaje elevado aún antes de la guerra interna, y que por lo tanto no todo es achacable a la conflicto armado interno.

Es importante remarcar el porcentaje alcanzado por las agrupaciones políticas de izquierda, las que en conjunto obtuvieron la mayoría de votos en el departamento de Ayacucho, ganando en las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo y Víctor Fajardo. En el resto de las provincias —La Mar, Lucanas y Parinacochas— la mayoría de votos fue lograda por el PAP. La dinámica de las provincias sureñas incluía una presencia importante del partido aprista, a diferencia de las provincias norteñas, influidas grandemente por los discursos radicales de la izquierda.

1.1.2. Zonificación de la violencia

Zona I. El Comité Zonal fundamental: las cuencas de los ríos Pampas-Qaracha: Incluye las provincias originales de Cangallo y Víctor Fajardo y las recién creadas de Vilcashuaman y Huancasancos

Zona II. Valles interandinos de las provincias de Huanta, La Mar y Huamanga: En esta zona se considera el espacio serrano de estas tres provincias norteñas del departamento

Zona III. Valle del río Apurímac: Incluye el espacio selvático de las provincias de Huanta y La Mar, en Ayacucho, y los distritos de Quimbiri y Vilcabamba, de la provincia de La Convención, en Cuzco, sobre la margen derecha del río Apurímac.

Zona IV. Provincias de Andahuaylas y Chincheros, del departamento de Apurímac.

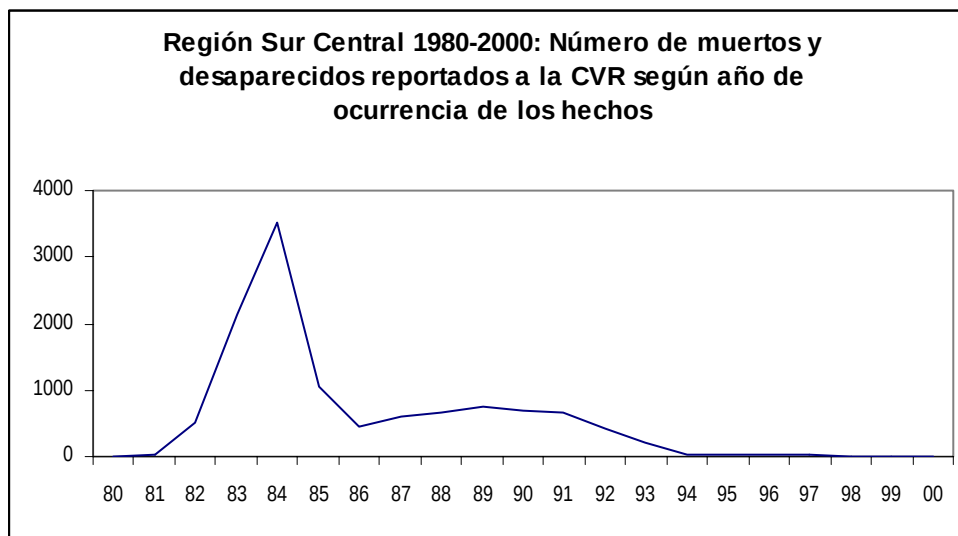
Zona V. Provincias de Angaraes-Acobamba, del departamento de Huancavelica.

Zona VI. Sur ayacuchano, que reúne las antiguas provincias de Lucanas y Parinacochas, y las nuevas de Sucre y Paucar del Sara Sara.

1.1.3. Periodificación y cronología de la violencia

REGIÓN SUR CENTRAL 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN ZONAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

ZONAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	12,007	10	32	516	2,160	3,594	1,059	466	601	659	767	714	668	418	201	42	41	22	23	7	5	2
ZONA I	3,151	5	10	175	966	616	372	146	151	151	110	95	123	97	95	15	15	1	5	1	2	-
ZONA II	4,643	4	11	210	717	1,476	345	135	207	234	402	335	288	195	53	8	3	6	10	3	-	1
ZONA III	2,704	1	4	80	320	1,149	252	143	181	178	109	101	48	63	42	7	14	5	4	1	2	-
ZONA IV	220	-	4	11	35	24	21	22	14	14	22	15	22	6	3	3	2	2	-	-	-	-
ZONA V	721	-	2	29	71	150	37	7	20	43	59	124	138	24	1	3	6	3	3	1	-	-
ZONA VI	568	-	1	11	51	179	32	13	28	39	65	44	49	33	7	6	1	5	1	1	1	-



Tras una serie de discusiones abiertas y clandestinas, el PCP-SL inicia la lucha armada contra el estado peruano en 1980; ante la incredulidad de la clase política, consigue una inicial adhesión de importantes sectores urbanos y campesinos de la región, lo cual le permite expandirse a casi todo el departamento y establecer contactos con otras áreas del país. Igualmente el Estado, tras un inicial desconcierto, encarga a las FFAA. la lucha contrasubversiva, lo cual en la práctica significó una subordinación del poder civil ante el poder militar, con sus lógicas consecuencias. Consideramos en la reconstrucción de la historia de la violencia en la región los siguientes períodos:

a) Inicio de la violencia: 1980-1982

Despliegue de la «*propaganda política armada*» y posicionamiento regional del PCP-SL. El «*inicio de la lucha armada*» y el despliegue del «*Plan de desarrollo de la guerra popular*» obligan al repliegue policial. Resalta el impacto mediático regional y nacional del asalto al CRAS de Huamanga y del entierro de Edith Lagos en la ciudad de Huamanga.

b) Ingreso de las FFAA: 1983-1984

Declaración del estado de emergencia en la región. El PCP-SL inicia el «*Plan de Conquistar Bases de Apoyo Revolucionarias*». Intervención militar e inicio de la «*guerra sucia*» y del fenómeno de desplazamiento de población campesina. Años de mayor cantidad de muertes en todo el ciclo de violencia.

c) Cambios en la estrategia de las FFAA: 1985-1987

Intento de cambio en la estrategia de las FFAA. Expansión de los CAD's. Traslado de fuerzas del PCP-SL a otras zonas del país, continuación del «*Plan de Conquistar Bases...*» e inicio del «*Plan de Desarrollar Bases de Apoyo*».

d) Intensificación del conflicto armado interno 1988-1991

Periodo de intensificación del conflicto armado interno y expansión de los Comités de Autodefensa Civil. Cambio de la estrategia contrasubversiva por parte de las FFAA. Los planes del PCP-SL son de «Desarrollar Bases en Función de la Conquista del Poder» y de «Construir la Conquista del Poder».

e) Final de la violencia: 1992-2000

Tras la captura de A. Guzmán en 1992 y la virtual derrota del PCP-SL en el campo, este periodo estuvo caracterizado por el paulatino decrecimiento de las acciones armadas, concentradas mayormente en las ciudades, y la persistencia focalizada de la conflicto armado interno en zonas determinadas de la región. El PCP-SL solicita el denominado «Acuerdo de Paz» y desde el Estado se implementaría el discurso de la *pacificación nacional*. Igualmente se implementarían un conjunto de programas sociales estatales y se produciría un importante crecimiento de las actividades de las ONG's y de la cooperación internacional en la región. El levantamiento del estado de emergencia en la región no se produciría sino hacia fines de 1999.

1.1.4. Cronología

Junio 1980	El PCP-SL irrumpe en la comunidad de Chuschi boicoteando las elecciones presidenciales.
1980	En las elecciones municipales, en la provincia de Acobamba, el ausentismo llega a 39.99% casi la mitad de la población. En Angaraes el 51% de la población no asistió a las Urnas.
1980/08	Ataque al puesto policial de San Francisco, Ayna
1980/11	Una columna de Subversivos incursiona en Anchonga, Angaraes, frustrando el proceso de elecciones municipales
1980/12	Atentado contra las torres de Alta Tensión dejando a oscuras a la provincia de Angaraes
1981	Ataque al Puesto Policial de Ocobamba Andahuaylas
Jul-81	Asesinato del Alcalde del distrito de Concepción, Vilcas, por el PCP-SL.
12/10/81	El gobierno decreta en «estado de emergencia» a cinco de las siete provincias de Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo)
1982	S.L. conformó 3 zonas de operaciones: Cocharcas, Andarapa y Antabamba
1982	Se suspenden garantías en Andahuaylas y Angaraes, en el departamento de Apurímac
1982/02	Detención y desaparición de 4 autoridades comunales por la Policía en la localidad de Chanta, Umaca
1982/02	Detención y asesinato de 3 autoridades comunales por la GC en Andarapa, Andahuaylas
1982/03	Asesinato de Gamonal Echeagaray en la zona de Pincos sometido a «Juicio Popular».
1982/03	Guardias Republicanos llegaron a Cocayro, comandados por el comandante Salas, detención de comuneros
1982/03	Ataque al penal en la ciudad de Huamanga por el PCP-SL.
1982/03	Ataque al puesto policial en Luricocha
Mar-82	Asesinato de Teniente Alcalde de Lucanamarca por el PCP-SL
03/03/82	Senderistas asaltaron penal de Ayacucho. Fugaron 304 presos
01/04/82	Asalto al puesto de la Guardia Civil de Pacucha

04/04/82	Toma de Andarapa por el PCP-SL
08/04/82	La Cooperativa de Pincos fue asaltada por segunda vez, y sus instalaciones casi destruidas íntegramente
26/05/82	Un grupo de aproximadamente 200 senderistas encabezados por «Rene» ingresa a Chalcos, y bajo el cargo de soplónaje asesinan una profesora y su novio, un ingeniero de CORFA-Ayacucho
1982/06	Asesinato de Martina de la Cruz y otros 11 pobladores, Buena Vista, Los Morochucos. Cangallo, asesinados por el PCP-SL. Los pobladores de Buena Vista se trasladan, luego de los ataques a Pampa Cangallo donde existía una base militar, para regresar después de 1 año
1982/07	Muere el teniente alcalde de Santa Rosa detenido por la policía
1982/07	Asesinato de comuneros en Hualla, Fajardo, 5 encapuchados vestidos de civil llegan al lugar identifican y asesinan a autoridades en la plaza. A raíz de este hecho los «Sinchis» incursionan en varias oportunidades.
Jul-82	Asesinato de Marciano Huancahuari, Lucanamarca por el PCP-SL, por «Rico», luego de que le robaran 600 ovejas y 100 vacas.
22-Ago-82	El PCP-SL ataca puesto de la GC en Vilcashuamán, 5 horas de enfrentamientos deja saldo de 7 policías muertos.
02/09/82	Muerte de Edith Lagos, «Lidia», en enfrentamiento con la Guardia Republicana en Umaca, Chincheros.
10/09/82	Entierro multitudinario de senderista Edith Lagos en Huamanga
1982/10	Llegan a los distritos de Soras, Larcay y Paucaray un grupo de militantes del PCP-SL y realizan un trabajo de adoctrinamiento con escolares.
1982/10	Incursionan por primera vez los Sinchis de la GC, con el objetivo de buscar a la columna Senderista, capturan a 5 comuneros de Santo Tomas de Pata, liberados luego de ser torturados
01/10/82	En asalto a puesto Guardia Civil de Erapata, Vilcabamba, Quillabamba, muere un Guardia Civil
1982/11	Asesinato 4 personas en Uchuraccay por el PCP-SL
1982/12	Asesinato de doce pobladores de Pumahuasi (Rumichaca) Santillana por el PCP-SL
1982/12	Asesinato de doce personas en Ccarhuaurán, Santillana, el PCP-SL
1982/12	Asesinato de Alejandro Huamán en Uchuraccay por el PCP-SL
1983	Se producen ataques de grupos armados a los puestos policiales de Andamarca, Cabana y Aucará saqueando luego los establecimientos comerciales de dichos lugares.
1983	En el distrito de Andarapa, la policía empieza las primeras Rondas Campesinas. Las CC forman comités de Autodefensa
1983	Las Fuerzas Armadas amplían su presencia en Andahuaylas
1983/01	Asesinato de ocho senderistas por pobladores de la comunidad de Huaychao
1983/01	Masacre en Umasi Víctor Fajardo, Cerca de 55 senderistas se habían instalado en la escuela del lugar. Luego llegaron los militares y se produjo un enfrentamiento. Los senderistas fueron asesinados y los pobladores sacados de sus casas y obligados a cocinar y trabajar para los militares. Con los efectivos se encontraban 5 jovencitas (entre 10 y 18 años) que fueron violadas y asesinadas.
1983/01	Asesinato de 12 personas en Vilcanchos Víctor Fajardo por el PCP-SL El 3 de abril, más de un centenar de integrantes del PCP-SL irrumpieron en las comunidades de Lucanamarca y Huancasancos en Víctor Fajardo, dando muerte a 45 comuneros en Lucanamarca y a 35 en Huancasancos.

26/1/1983 .	8 periodistas de diarios nacionales y un guía son asesinados por comuneros en Uchuraccay, Huanta.
Feb-83	Asesinato de comuneros en Sacsamarca por el PCP-SL. A partir de 1982 el PCP-SL estaba presente en el pueblo. En 1983 la situación se agravó. Luego de que cometieran asesinatos en el lugar, un grupo de 20 personas salió camino a Ayacucho para pedir ayuda. El líder fue asesinado y los demás detenidos por el PCP-SL.
1983/04	Detención de varios pobladores en Totos, Cangallo, y asesinato de algunos de ellos por miembros del Ejército Peruano.
1983/04	Asesinato colectivo en Llusita, Víctor Fajardo, por el PCP-SL.
1983/04	Desaparición de 4 comuneros en Circamarca, Víctor Fajardo por ronderos de Llusita y militares de la base de Cangallo. Se acusó a los pobladores del lugar de ser los culpables de la masacre en Llusita
03/04/83	El PCP-SL ingresó a la comunidad de Lucanamarca y asesinó de forma cruel a 67 comuneros (ver Estudio en Prof. de la CVR.).
20/04/83	En Juqisa, Ocros, Cangallo, 18 campesinos fueron asesinados por negarse a seguir consignas del PCP-SL, registrados en una lista del PCP-SL por ser «perros del gobierno»
1983/05	Arrasamiento de Matará, Accocro, por miembros del EP,. quemaron casas, asesinaron torturaron y desaparecieron a aproximadamente 25 personas
1983/05	Asesinato de 4 comuneros en incursión del PCP-SL en Huaychao
1983/05	Asesinato de 7 personas en Huantaccasa por el PCP-SL
1983/05	Detención Y Desaparición de 2 autoridades de Quispillacta, Cangallo Detenidos por militares, conducidos al cuartel y desaparecidos.
1983/05	Detención y desaparición de pobladores en Hualla, Víctor Fajardo. Militares separan a 17 personas (mujeres, hombres, niños y ancianos) y los conducen al Cuartel de Canaria donde desaparecen.
1983/06	Relevan a la Guardia Republiana por la Guardia Civil en el distrito de Andarapa
1983/08	Asesinato de 5 personas por los Linces en Limonchayoc, Ayna.
1983/08	Se producen los primeros asesinatos a campesinos, dinamitan el local del Juzgado de Acobamba y en la comunidad de Llamacancha atacan contra 5 viviendas y varios locales públicos.
1983/08	Asesinato de 5 comuneros en incursión del PCP-SL en Huaychao
1983/08,	Asesinato de pobladores de Uchuraccay
Ago-83	Matanza de campesinos en la estancia de Yaquia- Lucanamarca por el PCP-SL, 8 muertos y 2 heridos.
1983/08	Arrasamiento y masacre de 13 pobladores en Ñununhuayco, Cangallo, por el PCP-SL
1983/08	Desapariciones de Panfilo Chuchon Prado y Nelly Salvatierra. P. Chuchon era maestro de la Escuela de Mujeres No 38174, Pomacocha, Vischongo, Vilcas. Fueron desaparecidos por militares de la base de Asquipata.
1983/09	Asesinato de 10 comuneros de Bellavista, Chiara, por el PCP-SL
1983/09	Asesinato 5 de autoridades comunales por el PCP-SL en Cayramayo, Santillana, Huanta
1983/09	Ejecuciones extrajudiciales de 13 comuneros de San Pedro de Pampay, Luricocha, por policía y efectivos de la marina de guerra.
1983/10	Una columna senderista ingresa al pueblo de Morcolla y captura a 4 personas y luego de un Juicio Popular son obligados a ingresar a sus filas

09/10/83	Un grupo combinado de 35 efectivos de Sinchis y miembros del ejercito, llegan en tres helicópteros a la localidad de Ayalca, anexo de Chalcos, 60 personas fueron detenidas 18 de los cuales terminan asesinados, a la altura de la localidad de Pitecc.
1983/11	Asesinato de 11 personas en Accomarca, Vilcas, por la Fuerzas Armadas.
1983/11	Muerte de 32 personas perpetrada por miembros de la GC de Socos, Huamanga.
26/11/83	El PCP-SL ejecuta 3 lideres de la comunidad de Soras acusándolos de soplones
1983/12	Enfrentamiento de Senderistas con una patrulla combinada de las FFAA y la Policía resultando varios muertos
1983/12	El PCP-SL saquea viviendas y establecimientos comerciales en el pueblo de Morcolla
08/12/83	Un destacamento de Sinchis instalado recientemente en la zona de Soras se enfrenta con una columna del PCP-SL, muriendo uno de los subversivos
1984	Se intensifica en Acobamba los asesinatos por parte de Sendero contra la población civil, además victimaron a las Autoridades de los distritos y comunidades bajo el cargo de colaborar con las Fuerzas del Orden.
1984/01	El PCP-SL llega a Chilcayoc con un herido, solicitando un curandero de la comunidad, los comuneros dan muerte al herido y detienen a los demás senderistas.
Ene-84	En Mayocc, Ocros, Cangallo, 15 campesinos fueron asesinados por negarse a integrar el PCP-SL
24/01/84	En un nuevo «juicio popular» asesinan a 4 pobladores de Morcilla acusados de soplones.
1984/02	El Ejercito instala una base militar en Chipao, donde controlaría todo el valle del Sondando y patrullaría el territorio de Soras
1984/02	Incursión y asesinato de pobladores en Carhuac, Santillana, por parte de la Marina
1984/02	Desaparición de 17 pobladores de Viscachayocc, Pampa Cangallo, por militares de la base de Cangallo.
1984/04	Asesinato de 32 pobladores de Huarapite, Chiara por miembros del ejército
1984/06	Asesinato de 8 pobladores de Rosario, Ayna, por militares.
1984/06	Detención, tortura y desaparición de pobladores de Ticllas, por EP 08 desaparecidos y 02 liberados.
1984/06	Ataque del PCP-SL al puesto policial de Huamanguilla
Jun-84	Asesinato colectivo en Huancasancos por el PCP-SL, mientras se celebraba la fiesta del Corpus Christi. Mueren 14 personas.
1984/06	Asesinato de 6 senderistas en Tantar, Vilcas, por soldados de la base de Concepción.
1984/07	Asesinato colectivo en Pucayacu, Ayna por miembros del EP. Mueren cerca de 80 personas.
1984/07	Secuestro de pobladores de San Queruato, Ayna y asesinato de 02 personas por miembros del Comité de Autodefensa
1984/07	Secuestro y asesinato de pobladores en Chontacocha, Santa Rosa, por el PCP-SL luego de que los pobladores participaran de un censo a pesar de las advertencias senderistas.
1984/07	Enfrentamiento del PCP-SL con ronderos de Trigopampa, San José de Ticllas; mueren 02 ronderos
1984/07	En Incapampa, San José de Ticllas, el PCP-SL asesina a 10 personas
1984/07	Asesinato del alcalde de Huamanguilla, juez de paz y otros por el PCP-SL
1984/07	La comunidad de Chaupihuasi detiene a 4 integrantes del PCP- SL Cesar Molina «Jhon», Rosendo Pichihua(22 años), Severo Valencia (20 años), y Mamerto Rojas (55años), los entregan a los Sinchis quienes terminan ejecutándolos
1984/07	Asesinato de tres personas en una comunidad de Marccaraccay, Santillana, por el PCP-SL

1984/07	Desaparición de Ramón Vicaña, Sebastián de la Cruz y seis pobladores de Macachacra , Iguain por marina de guerra
1984/07	40 personas asesinadas por el PCP-SL en Ccanis
1984/07	Asesinato de 12 personas en Hualla Fajardo por el PCP-SL
Jul-84	Senderistas llegan San Martín de Tiopampa, Lucanamarca, y disparan contra los pobladores «por no apoyar a la lucha armada». Dejan 8 muertos.
1984/07	Detención y desaparición de 10 personas de Huarayoc, Vilcashuaman, por militares que los detienen durante celebración de la fiesta patronal y los conducen a la base de Ocos.
14.7.1984	En Coracora, miembros del PCP- SL saquean tiendas comerciales del pueblo, e incendian la municipalidad provincial y algunas oficinas estatales, asesinando además al director zonal de Educación Félix Gallegos y a un miembro de la policía
16/07/84	En Negro Mayo, militantes del PCP- SL disfrazados de Militares, secuestran un ómnibus de la empresa «Cabanino» que se dirigía a Soras, asesinando a 30 personas, la misma columna en los días siguientes iniciaría un «arrasamiento» asesinando 40 personas en Chaupihuasi, luego asesinan a 30 personas mas en Doce Corral, terminando en Soras con la matanza de 18 personas.
1984	Aproximadamente 500 comuneros de Soras, San Pedro de Larcay y Paico organizan una contraofensiva - sin mucho éxito- contra los miembros del PCP-SL
27/07/84	Miembros de la GC detienen y asesinan en Puquio al dirigente campesino Jesús Oropesa, incinerando su cadáver que aparecería recién el 10 de agosto
28/07/84	Incursión del PCP-SL a Morcilla asesinan a 36 personas y saquean e incendian unas 60 viviendas
1984 entre julio y agosto	Un grupo de autoridades de Querobamba viaja a Canaria (Victor Fajardo) solicitando apoyo militar para la zona, varios de ellos pierden la vida por esta gestión. Como respuesta los militares se dirigen a Querobamba, enfrentándose a los senderistas y provocándoles 20 bajas.
1984/08	Detención y desaparición de 4 pobladores de San Antonio de Pichihuillca, Ayna por EP
1984/08	Detención, tortura y muerte de 2 ronderos en Santa Rosa por miembros del EP; otras 15 personas habrían sido asesinadas
1984/08	Asesinato de más de 40 pobladores (48 aprox.) en Pampacancha por el PCP-SL
01/08/84	6 jóvenes pertenecientes a la iglesia evangélica presbiteriana son asesinados por la marina en el «pago» de Callqui, Huanta. Al día siguiente 2 de agosto, desaparece en la base de la infantería de marina acantonada en el estadio municipal, el periodista huantino Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario «La República».
13/08/84	Un grupo de comuneros de Chilcayoc que se dirigían a Lima es asesinado en Cochayoc, Belén por senderistas
23/8/1984.	Se descubren 49 cadáveres de detenidos por la base de la marina de Huanta, enterrados en fosas en Pucayacu, Huancavelica.
1984/09	Asesinato de 9 comuneros en Huanchi por el PCP-SL
1984/09	Asesinato de 19 comuneros en San Pedro, Santa Rosa por las fuerzas del orden.
1984/09	Asesinato de 6 comuneros y secuestro de 4 en Nuevo Paraíso por el PCP-SL
29/09/84	Miembros del PCP- SL disfrazados de Policías asesinan a otro grupo de campesinos de Chilcayoc
1984/09	Se instala una Base Militar en Soras a pedido de sus pobladores y comunidades vecinas
1984/10	En Huayllay, Luricocha, militares desaparecen a 04 y asesinan a 06 campesinos
1984/10	Asesinato de 16 personas en Ayna por miembros del PCP-SL; cadáveres encontrados a orillas del río San Francisco.

1984/10	Asesinato de 7 comuneros por el PCP-SL en Huanchi, Santa Rosa
1984/10	Secuestro y desaparición de 22 comuneros de Callqui alta, Iguain
1984/11	Incursión senderista en Huanchi, Santa Rosa, 09 personas resultaron muertas
1984/11	Se Instala Base Militar por espacio de 2 años en el distrito de Santo Tomas de Pata.
1984/11	Asesinato de pobladores en Hualla, Fajardo. Encuentran a 12 personas muertas en la casa de Eustaquio Pariona, asesinadas por el PCP-SL
26/11/84	El PCP-SL se enfrenta con la GC en Vilcabamba, Cuzco. Ese mismo día se produce un ataque del PCP-SL y varios asesinatos en Lucmahuayco
1984/12	Detención, torturas y desaparición de comuneros de Hualla, Fajardo, Militares de la base de Hualla. 09 víctimas.
1985	En el distrito de Huaccaña son asesinados el alcalde y pobladores
1985	Formación de Rondas Campesinas en principales comunidades y anexos
18/02/85	13 terroristas muertos y 4 guardias civiles heridos en la zona de Pichari, Cuzco
14.4.85	El PCP-SL asesina al dirigente de rondas en Choquezafra, Vilcabamba, Cuzco
17.4.85	Los ronderos de Hatunpampa se enfrentan al PCP-SL. En noviembre, el PCP-SL reinicia sus acciones tomando varios poblados en Vilcabamba y reclutando a jóvenes entre 10 y 18 años de edad. El 6 de diciembre los ronderos de Totorá se enfrentan al PCP-SL.
13/05/85	Autoridades, jefes de instituciones y vecinos de Vilcabamba declaran que hace tres años el PCP-SL viene incursionando en la zona
1985/07	Asesinato de comuneros del pago Sol Naciente, Ayna, por miembros del PCP-SL. Mueren 05 personas
1985/07.	Asesinato de 7 pobladores en Pampay, Luricocha, por militares que incursionan durante supuesta reunión del PCP-SL
1985/08	Asesinato de 21 personas por el ejercito en Santa Rosa
1985/08	Asesinato de 15 pobladores en Huarcatán
14/08/85	25 soldados al mando del Sub Tte. Telmo Hurtado Hurtado ingresaron a la comunidad de Accomarca, en Vilcashuaman y asesinaron 69 campesinos.
27/08/85	Militares detuvieron a varios campesinos de las comunidades de Umari y Bellavista, Provincia de Vilcashuamán en Ayacucho, rodearon a la población que trató de huir. Mataron a 59 campesinos.
21/11/85	Senderistas incendian 26 viviendas en Incahuasi. En la zona de Vilcabamba, saquearon 60 casas y se llevaron cuatro rehenes hacia La Mar (Ayacucho), de estos lograron escapar Antonio Estalla y Nemesio Infantas, continuando como rehenes Teodocio Aldarrás Huanaco y Epifanio Vásquez Balandra.
07/12/85	Victimaron a treinta y cinco «senderistas y cuatro campesinos» en la zona de Totorá, Vilcabamba. Entre los muertos figuran los campesinos Melquiades Ccoyao, Ladislao Mendoza y dos no identificados, se trató de un operativo de los ronderos con apoyo de licenciados del Ejército en la zona de Accobamba. Capturaron otros 20 senderistas
21/12/85	Asesinato colectivo en la comunidad de Irquis, Sivia por el PCP-SL. Mueren cerca de 30 personas
1986	Se estableció base militar contra subversiva en Julcamarca y otra en Ccayarpachi.
1986	Durante la primera mitad del año, en la provincia de La Convención se suceden los asesinatos de campesinos (en Usnuyoc el 28 de abril; en Totorá y Vilcabamba el 22 de junio, y el gobernador de Huallán y su hijo el 7 de julio), y los ataques a poblados como Totorá y Usmayo el 10 de mayo. En la provincia de La Convención, 50 ronderos son asesinados en la zona de Quimbiri, el 16 de mayo

1986	Dos profesores (Alata y Chuquichauca) asumen el en el distrito de Oyolo, Parinacochas e inician el trabajo Político del PCP-SL y de propaganda entre estudiantes
22-Jun-86	Continúa violencia senderista luego de la matanza de los penales. Cinco ingenieros son asesinados en Minas Canaria, provincia de Víctor Fajardo (22 Jun)
1986/07	Fosas comunes descubiertas en Ayahuanco
1986/07	Asesinato de autoridades de Sarhua, Fajardo, por el PCP-SL. Responden los comuneros asesinando a autoridad nombrada por el PCP-SL.
1986/10	Asesinato de 13 pobladores de Pomatambo y Parcco Alto, Vilcashuaman, por militares.
1987/07	Muerte de 5 comuneros en Putis, distrito de San José de Santillana.
1987/12	Asesinato del alcalde de Huanta, Víctor Raúl Yangali Castro por el PCP-SL
1987/12	Se instala un puesto policial en Querobamba
1988	Según algunos, el camarada «cojo Nildo» (Feliciano) dirige personalmente las acciones en toda la provincia, estableciendo además, algunos «Comisarios».
18/01/88	Asesinato de cuatro trabajadores del Banco Agrario por el PCP-SL entre Huahuapuquio y Cangallo: René Cárdenas, José Medina, Luis Cabrera y Eliseo Flores
13/05/88	Ataque a convoy militar en Erusco, Cayara, Fajardo. Mueren un capitán, dos cabos y un sargento. Al día siguiente una patrulla EP incursiona en represalia en Cayara, reúne a toda la población y procede a victimar a más de 28 campesinos.
1988/06	Asesinato colectivo en San Gerardo, Sivia, por el PCP-SL. Mueren 17 personas
1988/12	Se retira la base militar de Soras, de lo cual aprovechan un grupo de Sinchis provenientes de la base de Pomacochaen Andahuaylas, quienes se hicieron pasar por senderistas, ingresan a Soras, Larcay y Paucar para saquear casas y tiendas.
1989	Un grupo de Subversivos vestidos de militares sorprenden a la población y asesinan a Rogelio Jurado, líder de la comunidad de Huaycahuacho.
1989	La zona es administrada por el comando político militar, tercer intento de las FFAA de consolidar los comités de Rondas.
1989	Subversivos incursionan en los poblados de Chupacc y Santo Tomas de Pata, donde asesinaron a 30 y 25 campesinos respectivamente.
1989/01	Asesinato de la familia Farfán Gonzáles en Huamanga
1989/02	Masacre de 37 pobladores de Canayre, Llochegua, por el PCP-SL. Según testimonios llegó al poblado un grupo de más de 300 senderistas en botes procedentes del río Ene, mataron a los ronderos vigilantes y luego pidieron las autoridades una lista de los propietarios de tierras, asesinando a algunos
1989/06	Asesinato colectivo de 7 personas en Isccana, Luricocha, Huanta, por el PCP- SL
1989/06	Enfrentamiento del PCP-SL con rondas en Llochegua; mueren 3 ronderos.
1989/07	Incursión del PCP-SL en Choimacota, Sivia, luego que el EP organizara a los pobladores en CAD. Los senderistas quemaron casas, robaron ganado y asesinaros por lo menos a 3 personas.
1989/07	Asesinato mas de 20 pobladores en Mutuyccocha, Iguain por el PCP-SL
1989/09	Asesinato del alcalde provincial de Huamanga, Fermín Azparrent Taipe, por el PCP-SL
1989/09	Asesinato de Isaac Salvatierra y del alcalde Juan Pando Prado, en Ccaccamarca, Ocros, por el PCP- SL
1989/10	El PCP-SL asesina en Sallalli, Vinchos, a 10 comuneros
1989/10	Muerte de 12 personas en Huayllay, Luricocha, por el PCP-SL
1989/11	Asesinatos 4 ronderos de ronda campesina de Santa Rosa, Ayna, La Mar por el PCP-SL.

1989/11	Muerte de 5 senderistas por EP en Palmayocc, Luricocha
1989/11	Asesinato de Hugo Luna Ballon, abogado UNSCH, por el PCP-SL
1989/11	Asesinato de 22 campesinos, ronderos y autoridades por el PCP-SL en Paccha, Vinchos.
1989-1990	Incursiones senderistas en Pausa, se incendian oficinas estatales y se producen asesinatos
1990/01	Asesinato de 48 comuneros en Acosvinchos por el PCP-SL
1990/05	Arrasamiento en la localidad de Yahuar Machay, Ayahuanco; 47 personas asesinadas por miembros del EP
1990/08	Masacre de 32 pobladores en Canaire, Sivia por el PCP-SL. Según testimonios se trataba de 32 pobladores de religión evangélica.
1991/01	Miembros del PCP-SL atacan el puesto policial de Querobamba, quedando totalmente demolido, resultando dos muertos, un policía y un subversivo
1991/01	En San Pedro de Cachi, Santiago de Pischa asesinato por EP de 18 personas.
1991/03	Asesinato de comuneros en Ñuñunhuayco, distrito de Cangallo Mueren 08 comuneros luego de que aproximadamente 100 senderistas tomaran Ñuñunhuayco y Patahuasi casi simultáneamente. En Patahuasi murieron 06 comuneros.
1991/06	El ejército obliga a formar Rondas Campesinas en la zona de Huaycahuacho.
1991/06	Miembros del PCP-SL ingresan a Huaycahuacho y asesinan a 6 ronderos.
1991/07	Enfrentamiento de las rondas con el PCP-SL. Un grupo de patrullas de Sivia (ronderos de distintas comunidades) se dirigió a Sello de Oro, lugar en el que se enfrentan con senderistas resultando muertas 13 personas
1991/11	Una columna Senderista incursiona en el distrito de Santo Tomás de Pata y asesinó a 37 miembros de las Rondas Campesinas
1991/12	El Ejército instala una Base Militar en Pausa.
1992	Las comunidades de Julcamarca, con el apoyo del ejército y de los ronderos de Lircay, consolidaron las Rondas.
1992	SL ataca un destacamento policial; mueren 4 policías.
May-92	Emboscada del PCP-SL contra autoridades civiles y custodios militares en las alturas de Huancasancos. Asesinan a 18 personas.
01/07/92	SL incursiona en Huamanquiquia, V. Fajardo, y degolló a 18 comuneros.
1992/11	Enfrentamiento entre el PCP-SL y las rondas campesinas en Torrerumi, Sivia Los ronderos del lugar van a buscar a los senderistas después de que estos asesinaran a 02 pobladores en una incursión
1993/07	Asesinato de 10 pobladores cerca de Sivia en por grupo no identificado
1993/07	Detención de 4 personas y muerte de 21 por los ronderos en Santa Rosa
1994/02	Una columna senderista incursiona en los poblados de Balcón y Picota cuando intentaban ingresar al distrito de Santo Domingo.
1994/06	La base Militar se retira del distrito de Marcas.
1995/08	Enfrentamiento entre el PCP-SL y el CAD de Quispincancha, Iguain.

1.1.5. Zona I: El Comité Zonal fundamental: las cuencas de los ríos Pampas-Qaracha

Las primeras acciones violentas del PCP-SL, llevadas a cabo desde 1980 en cumplimiento de su decisión de iniciar la guerra, suceden en esta zona, considerada por la organización subversiva como el Comité Zonal Cangallo-Víctor Fajardo (CZCF), Comité Principal, encargado de los Comités Regionales de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En CZCF, comenzó el PCP-SL su proyecto de subversión, aquí ensayó sus propuestas de organización de un «nuevo estado» y sus estrategias de «conquistar bases de apoyo», aquí también logró el apoyo de muchas comunidades y pueblos pero aquí también se enfrentó, desde el inicio, al rechazo de otros. En respuesta, en este espacio ingresó desde 1983 el ejército con la estrategia de «todos son sospechosos». Aquí se concentra por lo tanto, entre 1983 y 1985, un alto índice de acciones de violencia y de muertos, en relación directa con el importante nivel de aceptación logrado por el PCP-SL en amplios sectores rurales de la población de la región pero también en relación directa con el rechazo de otros.

Datos Generales

Desde los 4500 msnm hasta menos de 1000 msnm, el río Pampas, cuya naciente es la laguna de Choclococha, en la puna del departamento de Huancavelica, forma un cañón que, antes de desembocar en el río Apurímac, divide las provincias de Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y La Mar, en el departamento de Ayacucho, de las de Chincheros y Andahuaylas en Apurímac. En su curso medio confluye, sobre la margen derecha, el río Qaracha cuyas nacientes se encuentran en las extensas punas de Huancasancos pero discurre también por la provincia de Víctor Fajardo hasta desembocar en el Pampas.

Cuadro de densidad poblacional en Cangallo y Víctor Fajardo según los censos nacionales de 1981 y 1993

Población (*)	1981	1993	Crecimiento
Cangallo+Vilcashuaman	69155	56135	-19%
Víctor Fajardo+Huancasancos	43386	37292	-14%

Vilcashuaman y Huancasancos fueron creadas como provincias recién en 1984

En estas provincias de muy lento crecimiento demográfico hasta 1980, un impacto importante de la violencia ha sido, como vemos en el cuadro, el descenso de su población, tanto por las muertes ocurridas como, sobre todo, por la intensa emigración de pobladores que buscaron refugio en otras regiones.

La provincia de Cangallo tiene dos zonas claramente definidas: la zona oeste, donde están los distritos de Totos y Paras, totalmente incomunicados con la capital provincial y ligados

estrechamente con Huamanga; y, la zona de central, en la que encontramos dos espacios que se corresponden con los dos ejes viales existentes: Huamanga-Toqto-Cangallo, que se proyecta al sur hacia Huancapi-Cayara-Canaria y se interconecta con la que viene de Nazca-Puquio-Andamarca-Canaria, y por Huamanga-Tocto-Pampa Cangallo-Chuschi-Quispillacta. Ambas zonas de Cangallo se caracterizan por la presencia de comunidades campesinas marginales, para quienes la ayuda estatal se convierte en prioritaria. Al momento de la aplicación de la Reforma Agraria en Ayacucho, sólo se consignaron 5 haciendas en la provincia de Cangallo y apenas una en la provincia de Víctor Fajardo.

La Provincia de Vilcashuamán, creada en medio de la guerra interna en 1984, se encuentra en la parte Sur del Departamento de Ayacucho. El centro poblado de Vilcashuamán está a 3200 msnm. Cuenta con una superficie total de 20,288.940 Has, con una población de 22,302 habitantes. Todas las comunidades de la provincia, muchas de ellas surgidas a lo largo del siglo XX en territorio de ex-haciendas, tienen activos litigios de linderos, lo cual limita el trabajo futuro pues la identidad comunal, muy bien marcada, supone la defensa a ultranza del espacio comunal frente a las reivindicaciones de las comunidades vecinas. Tributaria de la cuenca del Pampas es la cuenca del río Qaracha, que articula las comunidades de Victor Fajardo.

Cabe anotar que en la provincia de Victor Fajardo existía una sola hacienda al llegar la RA, estando su territorio, desde épocas coloniales, enteramente en poder de las comunidades campesinas. La situación en la provincia de Huancasancos, junto con la de Vilcashuamán en 1984, es similar, con la diferencia que ésta es mucho más rica en recursos en relación con las comunidades que alberga y que, desde inicios del siglo XX, están articuladas a los mercados ganaderos.

Huancasancos es una zona tradicionalmente ganadera que cuenta con importantes recursos como extensiones de pastos naturales y agua, que permitieron el desarrollo de una ganadería de calidad. A inicios de los 80 esta región, a diferencia de otras zonas (como las zonas bajas del río Pampas), tenía una economía vinculada al mercado, especialmente la costa del departamento de Ica.

Coexisten en estas provincias numerosas comunidades campesinas de larga historia, algunas de ellas con litigios que datan del S. XVII, como Chuschi y Quispillacta, además de la desigualdad en el acceso a la tierra al interior de los territorios comunales.

Número de Comunidades Campesinas en 4 provincias ayacuchanas

Provincia	CC
<u>Cangallo</u>	52
Huancasancos	8
Victor fajardo	39
Vilcashuaman	57

A estas comunidades, que disponen de la mayor cantidad de recursos en la cuenca, se deben sumar los pocos pequeños fundos que lograron sobrevivir a la reforma agraria y a la presión comunera por la tierra, de los cuales Ayzarca es quizás el mayor ejemplo y, por último, las ex-cooperativas creadas por la reforma agraria, parceladas desde antes de 1980 por los socios en las antiguas haciendas, sobre todo cañeras, de la cuenca media (Ninabamba, Pajonal, Ayrabamba, Qaqamarca, La Colpa, Astanya, etc.)

En efecto, al iniciarse el proceso de violencia, las haciendas existentes en el «bolsón cañero» del Pampas eran cooperativas en quiebra casi parceladas por los socios beneficiarios, haciendo que el «gran latifundio» quedaba reducido a «haciendas» como San Agustín de Ayzarca, que era en realidad un fundo que contaba apenas con 48 hectáreas, 18 de las cuales estaban en producción y cuyo propietario, Benigno Medina, y luego su yerno, fueron «gamonales de viejo cuño» asesinados por el PCP-SL:

Acciones contundentes que remecen las bases semif feudales del Estado, descargando el peso de la acción reivindicadora armada contra gamonales de nuevo y viejo cuño como en Airabamba, Aisarca, Urpihuata, Palermo, Toxama y Pincos, entre otras, verdadera alegría campesina que ve renacer vibrante su esperanza y combatividad nunca desfallecidas (Desarrollemos la guerra de guerrillas, 1982)

Los de «nuevo cuño», como veremos luego, serán los comuneros de mayores recursos identificados como «ricos» por los grupos senderistas.

Todas estas comunidades formaban parte de un tejido social marcado por una articulación sumamente débil, tanto con el Estado como con el mercado. Cangallo y Victor Fajardo, las dos antiguas provincias de las cuales se desprenderán las de Vilcashuaman y Huancasancos en 1984, eran en la década de 1970 una suerte de bolsones campesinos con débil articulación al mercado, signadas por la marginación de parte del Estado. Incluso hoy, las provincias de las cuencas del Pampas y del Qaracha se encuentran casi en los últimos lugares en cuanto a la disponibilidad de servicios públicos. Quizás la actual provincia de Huancasancos pueda escapar de esta clasificación, por la disponibilidad de mayores recursos e ingresos provenientes del comercio de ganado. Esta situación de marginalidad, sin carreteras, postas médicas, o servicios básicos como agua y luz, otorgó a la educación oficial una importancia crucial pues el acceso a la escuela y a los Colegios nacionales se percibió, entre los campesinos, como la vía más expeditiva para superar, a través de sus hijos, la situación de pobreza y marginalidad ancestrales.

Pero cabe señalar, sin embargo, que desde mediados del siglo XX, importantes procesos comenzaron a redibujar el perfil de las comunidades de la zona. En primer lugar la ampliación de los recursos de las familias campesinas comuneras a través de la adquisición de fragmentos de haciendas en decadencia. Esta compra de tierras estuvo sustentada básicamente en la capitalización de algunos sectores comuneros sobre la base del comercio ganadero, facilitado por la apertura de

carreteras. La mejora en las vías de comunicación implicó también el aumento de la movilidad espacial de campesinos que pudieron trabajar como peones eventuales en un primer momento, pero que cedieron el paso a migrantes definitivos cada vez en mayor proporción. Estos procesos se conjugan con otro que será crucial en la historia de la violencia, cual es la ampliación del sistema educativo formal, especialmente acentuado desde la década 1960, que junto con la migración se convirtió en el canal más importante de movilidad social en esta Zona, en la cual la frustración generada por la marginación y la marginalidad parece ser contrarrestada, parcialmente, por estos mecanismos de movilidad espacial y social.

El contexto en 1980

A pesar de los procesos mencionados, para el PCP-SL la estructura social «gamonal y terrateniente», no había desaparecido, pues continuaba en la reproducción de actitudes y comportamientos de las autoridades. Así, a falta de hacendados gamonales propiamente tales, los comuneros con mayor cantidad de tierras, los alcaldes, gobernadores, jueces de paz o presidentes comunales, se convirtieron en enemigos porque formaban parte de una estructura «semi feudal y semicolonial» la cual, en el concepto del PCP-SL, engendraba una forma de capitalismo llamado «burocrático», entendiéndose éste *«como el capitalismo que genera el imperialismo en los países atrasados, atado a la feudalidad que es caduca y sometido al imperialismo que es la última fase del capitalismo»*. El trabajo proselitista del PCP-SL con los jóvenes se basa en estos conceptos particulares de destrucción del «gamonalismo», en beneficio de:

Un campesinado con una varias veces centenaria reivindicación fundamental: «La tierra para quien la trabaja» que pese a su indesmayable lucha aún no logra satisfacerla; un campesinado al que en los últimos veinte años se ha pretendido engañar con tres supuestas leyes de reforma agraria las que luego de aplicadas con rimbombante demagogia lo han dejado con su misma vieja sed de tierra insatisfecha. Pugna y combate en los campos contra los gamonales y gamonalillos, base del poder estatal reaccionario en el agro (Doc. PCP-SL 1982)

Los jóvenes afiliados al PCP-SL se impregnaron de este discurso, que trataron de relacionar con la frustración de campesinos con menor acceso a recursos, hacia quienes iba dirigida en principio su labor proselitista para la formación de bases de apoyo. Los ganaderos y agricultores más prósperos eran, y son, los detentores de los poderes locales en pueblos y comunidades, pero esta supuesta legitimidad de la cual gozaba la elite empezó a ser cuestionada conforme la población fue accediendo a la educación y muchas veces la gente se alió al PCP-SL para «vengarse» de todos los abusos que los «poderosos» de la comunidad habían cometido contra ellos.

Aunque desde una lógica estricta de acumulación de capital, la mayor parte de la población en estas provincias podría aparecer en un mismo rango de pobreza, el proceso de diferenciación campesina genera la percepción de «ricos» y «pobres» en contextos locales. Por ejemplo, en comparación con las comunidades ubicadas en la zona baja del río Pampas y del Qaracha (como Umaru, Sarhua,

Alcamenca, Espite, Hualla, etc.), probablemente los «pobres» de Huancasancos hubieran podido ser los «ricos» de estas comunidades.

Los centros educativos, en este contexto, eran objetivo de todos los partidos de izquierda, pero el PCP-SL, con su proyecto de lucha armada, convirtió en una de sus características centrales lo que hemos denominado «circuito educativo», que analizaremos más adelante.

El trabajo político inicial fue realizado en gran medida por maestros de escuela y estudiantes universitarios, pues el PCP-SL no tenía, antes de iniciar sus acciones violentas, mayor ascendiente en las organizaciones campesinas de la Zona, especialmente Pomacocha, símbolo histórico de la lucha antiterrateniente en el discurso maoísta de Bandera Roja, partido que mantenía allí su influencia. Cabe decir que en esta zona, al momento de la aplicación de la Reforma Agraria, las haciendas ya eran escasas, pues sólo se consignan cinco en la provincia de Cangallo (Ichocca, Rurunmarca, Vilcapucro, Ayzarca y Occenay) y apenas una en la provincia de Víctor Fajardo (Chincheros). Como ya lo dijimos en el capítulo anterior, la Reforma Agraria logró importantes adhesiones de los sectores campesinos y en cierta medida dejaría sin sustento a las organizaciones de izquierda. Los militantes del PCP-Bandera Roja proponían que las tierras tomadas y expropiadas se convirtieran en terrenos comunales buscando impulsar una «*reforma agraria auténtica*», que implicaba además el reconocimiento de comunidades campesinas, y la creación de escuelas, postas médicas, entre otros, buscando un desarrollo integral, mientras que los militantes del PCP-SL planteaban la parcelación de las tierras.

Sin embargo, el régimen militar —vía el SINAMOS— tuvo mayor iniciativa, generando una fuerte oposición de los grupos de izquierda que trabajaban en el área rural. Cabe destacar que el estado impulsó organizaciones campesinas como la CNA, organización a la que se afiliaría la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), la mayor organización campesina de Ayacucho.

A pesar de ello, para el PCP-SL la estructura social «*gamonal y terrateniente*» no había desaparecido, pues continuaba en la reproducción de actitudes y comportamientos de las autoridades. Así, a falta de hacendados gamonales propiamente tales, los comuneros con mayor cantidad de tierras, los alcaldes, gobernadores, jueces de paz o presidentes comunales, se convirtieron en enemigos porque formaban parte de una estructura «semi feudal y semicolonial».

Un campesinado con una varias veces centenaria reivindicación fundamental: «La tierra para quien la trabaja» que pese a su indesmayable lucha aún no logra satisfacerla; un campesinado al que en los últimos veinte años se ha pretendido engañar con tres supuestas leyes de reforma agraria las que luego de aplicadas con rimbombante demagogia lo han dejado con su misma vieja sed de tierra insatisfecha. Pugna y combate en los campos contra los gamonales y gamonalillos, base del poder estatal reaccionario en el agro (Doc.PCP- SL 1982)

En 1979 se realizó el 5° Congreso Nacional de la Confederación Campesina del Perú (CCP) –agrupación asesorada por el PCP-BR– en Pomacocha, en el que el PCP-SL pretendió

participar, pero fue rechazado por los dirigentes de la CCP, quienes acusaron al PCP-SL de encarnar una tendencia «oportunista».

La instalación del PCP-SL: El circuito educativo

Como ya dijimos, tanto la educación como la migración y la lenta capitalización, se habían convertido en procesos importantes que incidieron en el ascenso social y de alguna manera contribuyeron a ampliar la democratización de nuestras provincias marginadas y marginales. Como se ha señalado en diversas investigaciones, el PCP-SL es no sólo un proyecto político sino también educativo, basándose en la alta estima y valoración existente en la sociedad rural hacia los «letrados», los «leídos», que gozan de un ascendiente marcado sobre la mayoría de campesinos, comuneros o no. Los principales líderes del PCP-SL en la región fueron profesores, muchos de ellos egresados de la UNSCH.

La presión de la demanda educativa se tradujo en la creación de escuelas y colegios para los estudiantes provenientes de comunidades aledañas alas capitales provinciales. El ejemplo de Vilcashuaman muestra como, en la década de 1960, la red educativa se amplía:

Cuadro 1.1

Vilcashuamán: Creación de centros educativos

<u>Niveles de educación</u>	<u>Vilcashuamán</u>	<u>Accomarca</u>	<u>Pujas</u>
Educación inicial	1964		
Educación Primaria	1969	1971	1971
Educación secundaria	1965	1976	1978

Fuente: DREA Ayacucho

En el ejemplo de Vilcashuamán, desde 1965, año en que se crea el General Córdova, su población estudiantil fue creciente, y pasó de 109 estudiantes en 1966 hasta 414 en 1977. Aunque los primeros colegios secundarios estuvieron ubicados en las capitales de provincia, el Colegio «Los Andes», en Huancasancos, es una excepción debido posiblemente a la capacidad económica de los comuneros. Allí llegaron a estudiar jóvenes provenientes de comunidades ubicadas en la zona baja del río Pampas, lo que los huancasanquinos designan como «*los interiores*» (Sarhua, Tiquihua, Umaru, Cayara, Hualla, entre otras), es decir las comunidades de donde provenían (y provienen) los peones que venían a trabajar a chacras y estancias de las familias «ricas». En plena guerra, las comunidades «del interior» participaron en los repartos de animales de Huancasancos hechos por el PCP-SL.

La utilización «democratizadora» de la educación por los campesinos fue capitalizada por el PCP-SL al punto de convertir las escuelas y los colegios en sus principales centros de captación

y adoctrinamiento. El incremento de la población estudiantil se plasma en el aumento de estudiantes, provenientes de Cangallo, por seguir estudios en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En efecto, de esta zona (Cangallo y Vilcashuamán) provino en 1976, el segundo grupo más grande de estudiantes ayacuchanos (364 de una cifra total de 2309 estudiantes) y también de la especialidad de educación (41 de 316 estudiantes) después de Huamanga. Más aún, la población estudiantil que procede de Cangallo, había crecido seis veces (de 58 a 364 estudiantes) en menos de ocho años (1968 a 1976). En otras palabras, el trabajo político del PCP-SL en esta Zona no sólo se inició temprano, casi la fundación del partido, sino que muchos de sus primeros cuadros fueron profesores y estudiantes universitarios oriundos de la zona, muchos de ellos hijos de campesinos.

En esta primera etapa, el PCP-SL utilizó también algunas organizaciones sindicales como el SUTEP, para vincular sus luchas reivindicativas con sus propios intereses. El 21 de agosto de 1979, el Subprefecto de Cangallo envía un oficio que da cuenta del apoyo de las comunidades a la huelga magisterial a la vez que reclama mayor dotación policial:

«Últimamente se han suscitado actos que dejan mucho que desear en los distritos de Vilcashuaman y Carhuana, en el primer distrito aprovechando los acontecimientos magisteriales y la falta de resguardo policial, los maestros huelguistas con apoyo de una parte de los comuneros de Pomacocha y otros obligaron a abandonar la población de Vilcashuaman al director del NEC 10-35 Zósimo Jiménez Vargas, bajo pretexto de que este haya evacuado informes antojadizos a la Zonal de profesores; y en el segundo distrito, siempre los mismos profesores con apoyo de comunidades han llevado a cabo varios mítines, donde han atacado al Gobierno e incluso han desglosado los afiches relacionados a la inscripción de analfabetos en el Registro de identificación, además lanzaron gritos en contra de las elecciones generales del año 1980.

Estos actos enojosos vienen sucediendo en vista de la ausencia del servicio policial dentro de una zona donde se ha proliferado de elementos politizados de tendencia izquierdista, quienes están logrando tomar puestos claves dentro de las organizaciones de base; por lo que para reprimir mayores actos bochornosos, es indispensable el restablecimiento del servicio policial en los mencionados distritos...

Dios Guarde a Ud Jaime Escalante, subprefectura Cangallo

Fueron los mismos hijos de la comunidad quienes empezaron a desarrollar un adoctrinamiento, a través del poder que les confería la educación y el estatus de profesor. El PCP-SL se aprovechó de esta ventaja, de una tendencia creciente de los jóvenes por la educación y del hecho de ser recibidos por la comunidad sin ningún reparo y para así iniciar con su prédica revolucionaria y de lucha armada que se sustentaba en discursos que moldeaban e interpretaban la realidad campesina y así convencerlos de la importancia de la «lucha armada».

Finalmente este «circuitos educativo» constituía una cadena donde los primeros que debían de ser captados eran los profesores, luego los estudiantes y finalmente los padres de estos estudiantes, es decir los comuneros, participantes en Escuelas populares. Pero si bien el PCP-SL se inició como un movimiento de profesores y estudiantes que decían luchar por el campesinado, sin

embargo los campesinos rara vez ocuparon alguna posición importante dentro de la estructura organizativa del PCP-SL, fueron considerados como «la masa» de apoyo al partido.

Los conflictos locales

Tal como se constata en todas las regiones donde inició su proyecto violentista, el PCP-SL utilizó e incluso exacerbó algunos conflictos y tensiones existentes, en algunos casos se vio incluso rebasado por las «venganzas» locales. Un primer conflicto importante nos remite a la rivalidad existente entre anexo y capital de distrito y entre comunidades. La contradicción capital-anexo fue exacerbada por el PCP-SL, quien pretendía enfrentar directamente a los comuneros contra los «gamonales» detentores del poder local y residentes en la capital de la provincia, el distrito o el poblado mayor. Otro conflicto deriva de la desigual tenencia de parcelas y tierras al interior de las comunidades, colocando como enemigos a quienes disponían de mayores recursos, tal como sucedió en Huambalpa o en Huancasancos, y se tradujo en el asesinato de comuneros considerados «ricos» (*Ver Estudio Huancasancos CVR*).

Un tercer conflicto importante es el generacional, que desemboca en algunos casos en tragedia colectiva, como en Huancasancos o Lucanamarca. Los jóvenes, educados y politizados en la Universidad o el Colegio secundario, convertidos en militantes y mandos senderistas, se enfrentan a sus padres, considerados como «reaccionarios».

Constituida su base inicial de militantes con docentes y estudiantes de la zona, el PCP-SL buscó la aceptación del PCP-SL en las comunidades de esta Zona combatiendo a los que llamaba «gamonales de nuevo cuño», es decir los campesinos que en el proceso de diferenciación interna disponían de acceso mayor a la tierra y los pastos y, en consecuencia, manejaban las instancias de poder locales.

El PCP-SL ofreció a los comuneros cambiar este orden de cosas, difundiendo un discurso de igualdad que, paradójicamente, se basaba en agudizar tensiones y conflictos locales: eliminar «gamonales», autoridades, ricos, indeseables, traidores, soplones, es decir «enemigos de la revolución», será componente principal de la actuación del partido en los próximos años y signará los cursos del ciclo de violencia en la Zona.

Historia de la violencia

Inicio de la violencia: 1980-1982

Luego de la quema de las ánforas electorales en Chuschi, el 17 de mayo de 1980, el PCP-SL atenta, el 29 de julio, en medio de la celebración de fiestas patrias, contra el local de la municipalidad, la subprefectura y la oficina de correos de Cangallo Ese mismo día también dinamita el local de la municipalidad de Huancapi, en Víctor Fajardo. La subprefectura y el local del registro electoral serían nuevamente atacados el 10 de noviembre, en medio de las elecciones municipales, pero la primera víctima de la lucha armada del PCP-SL en la región ocurre con la incursión de un grupo de

senderistas a la hacienda Ayzarca, el 24 de diciembre. Aquel día, 200 a 300 campesinos fueron reunidos por el comando del PCP-SL en la comunidad vecina de Pujas para asaltar durante la noche la hacienda de Ayzarca, donde asesinaron a Benigno Medina, el propietario, y a su mayordomo, el Sr. Morales.

Durante 1981, el PCP-SL ataca sostenidamente a la policía, haciéndola retroceder, generando un «vacío de poder» en el campo y dejando tras de sí un terreno favorable para convertir las comunidades de esta zona en sus «bases de apoyo». El 10 de enero de 1981 es atacado el puesto de la Guardia Civil de Vischongo (Vilcashuamán); el 21 de ese mes es asaltado el puesto de la GC de Mollebamba (Cangallo), donde son detenidos 6 subversivos. El 25 de agosto se escuchan detonaciones en Huancapi. El 10 de diciembre se realiza un ataque contra el puesto policial de Totos (Cangallo). Es el inicio del retroceso policial en el área rural, pero también se insinúan los primeros síntomas de rechazo hacia el PCP-SL. En diciembre, en la localidad de Sacsamarca, es asesinado el profesor Alejandro Avilés García, acusado de «soplón».

En 1982 continuarían los asaltos a puestos policiales: el 18 de marzo los subversivos atacan el puesto policial de Minas Canarias (Víctor Fajardo), el 22 de marzo atacan nuevamente el puesto policial de Vischongo, el 28 de marzo el de Huancapi, el 31 de marzo atacan por primera vez el puesto policial de Vilcashuamán, que posteriormente sería atacado dos veces más, el 28 de julio y el 22 de agosto.

La organización del nuevo Estado

Además de utilizar los conflictos locales para ejercer su justicia en las comunidades, el PCP-SL instruyó a jóvenes en estrategias de guerra a través de las Escuelas Populares, ganando así militantes para formar parte del Ejército Guerrillero Popular (EGP), soporte capital de la organización del «nuevo Estado». Ganadas a su causa u obligados a retirarse de sus cargos, las autoridades dieron paso a jóvenes que asumieron las responsabilidades mayores de los Comités populares. Cada Comité Popular, con algunas variaciones, tenía un primer responsable, un comisario de seguridad, un comisario de producción, un comisario de asuntos comunales y un comisario de organización. De hecho, al ser un grupo de jóvenes los que detentaban ahora el poder se provocó un fuerte conflicto con la tradición de la comunidad en la cual eran las personas mayores las que decidían.

Cuando el PCP-SL tomaba el control en una comunidad ésta era declarada Zona Liberada (ZL) en la cual, como dijimos, las autoridades tradicionales eran reemplazadas por autoridades que el Partido nombraba; así muchas comunidades de nuestra Zona fueron declaradas ZL entre 1980 y 1982. Debemos sin embargo reconocer que el asentamiento del PCP-SL en cada comunidad fue distinto; existiendo variaciones y matices en la organización local que estableció el PCP-SL. Igualmente, en algunos casos el PCP-SL se sirvió de los líderes de la comunidad, que se convirtieron en los responsables locales de la nueva organización senderista.

A diferencia de lo que puede haber ocurrido en otras zonas del departamento -como Chungui- en esta región no existieron parcelas de producción comunal, destinadas a beneficiar al grupo pero una parte de la producción debía darse en forma de «colaboración» para la alimentación de los destacamentos senderistas.

Los «soplones» eran identificados por pobladores-espías designados por el PCP-SL. Cuando ocurría una incursión del ejército, se le encomendaba a campesinos de la comunidad — generalmente mujeres— vigilar quiénes hablaban con los militares y quiénes no. Los primeros eran acusados de «soplones» ante los mandos políticos y militares del PCP-SL, los cuáles a su vez tenían la responsabilidad de informar a un mando superior. Remarcamos una vez más que la estrategia del PCP-SL se monta sobre conflictos familiares, exacerbándolos, por los que no es raro encontrar el caso de miembros de un mismo núcleo familiar que -víctimas de celos, rencores y envidias- se acusan mutuamente ante el PCP-SL o, posteriormente, ante los militares.

El Ejército Guerrillero Popular (EGP) —que a partir de 1992 adoptó el nombre Ejército de Liberación Popular (ELP)— se sostenía en la Fuerza Principal armada, de gran movilidad espacial, sobre todo nocturna, lo que originó el nombre de «tutaq puriq», los que caminan de noche, o simplemente caminantes, «puriq», reconocidos como «visitas» que los pueblos recibían cada cierto tiempo.

Para la Fuerza Principal del PCP-SL la zona del Pampas-Qaracha fue una zona importante porque a través de un trabajo de adoctrinamiento temprano habían logrado consolidar numerosas bases de apoyo, pero siempre llamará la atención la escasa capacidad de fuego de los destacamentos armados senderistas en cualquiera de las zonas donde actuaron, y de sus pelotones, formados por jóvenes adscritos a ella. Escasos fusiles y pistolas, algunas escopetas, complementadas por «quesos rusos» y artefactos caseros, ese era todo su poderío bélico.

Los mandos locales dirigían la Fuerza Local (FL) integrada por militantes senderistas que residían en la localidad, encargados de guardar los víveres, cereales y animales para alimentar a la FP, aunque en algunas ocasiones repartían los bienes saqueados entre quienes habían participado de los asaltos. Ante la ofensiva militar iniciada en 1983, el EGP se verá obligado a desplazarse en las zonas más altas de la cuenca del Pampas utilizando diversos campamentos, que serán detectados con mayor facilidad por las patrullas militares.

Esta organización del «nuevo estado», con variaciones locales mínimas, en comunidades convertidas en bases de apoyo y luego Comités populares, alcanza su máximo desarrollo a lo largo de 1982, paralelamente a las acciones armadas dirigidas a expulsar a la policía de las áreas rurales. El objetivo militar de los puestos policiales se complementaba con el ataque a los «símbolos del gamonalismo» en la zona: el 26 de marzo de 1982, los militantes del PCP-SL vuelven a incursionar en el fundo Ayzarca, enfrentado a los seis policías encargados de la vigilancia y asesinando a

Andrés Gutiérrez, nuevo administrador del fundo. El 1 de abril ingresan a la hacienda Astanya en Vilcashuamán, saqueándola y llevándose víveres.

La incursión a poblados y el acoso a las autoridades son también continuos: el 1 de junio, luego de ser acusados de haber dado alojamiento a los policías y tras un «juicio popular», un destacamento senderista asesina a un ex gobernador y a un campesino de Concepción, en Vilcashuamán. El 2 de julio ocurre la toma de los poblados de Chuschi y Canchacancha, en Cangallo. Días después, el 6 de julio, es la incursión a la localidad de Paras, Cangallo, y el 8 de setiembre el asalto a la cárcel de Huancapi, Fajardo.

El sabotaje a la infraestructura pública era también un objetivo importante: el 31 de julio de ese año, son destruidas simultáneamente la minicentral hidroeléctrica de Vischongo (Vilcashuamán) y la central eléctrica de Vilcashuamán.

Pero todas estas estrategias cederán en notoriedad frente al asesinato de autoridades y «enemigos» en general, acción central en la propuesta del PCP-SL de «batir el campo»: luego de asesinar al Teniente gobernador de Concepción, Vilcas, el 1 de junio mueren el Alcalde y a un comerciante de Hualla, Fajardo; el 9 de julio, son asesinados mineros de Canarias, Fajardo, acusados de soplones en esta mina que cumpliría por mucho tiempo un rol importante en la zona como abastecedora de dinamita para los subversivos; el 14 de julio es asesinado el gobernador de Cayara, Fajardo; el 9 de agosto caería asesinado un poblador de Llusita, Fajardo, tras juicio sumario, mientras un grupo de campesinos de Chuschi acusados de abigeos son asesinados el 22 de setiembre y un profesor en Pomacocha, que se negó a leer una proclama subversiva, el 23 de setiembre. De igual forma, son asesinados el 5 de noviembre el gobernador de Alcamenca, Fajardo, el 10 de noviembre una profesora de Huancaraylla, el 25 de noviembre un campesino de Taca, Fajardo y empleados de correos de Huancapi, Fajardo, todos ellos acusados de «soplonaje».

La lista es, obviamente, mucho más extensa pero los casos citados muestran no sólo las intenciones del PCP-SL sino su expandida presencia, que cuenta con el apoyo de muchos pero también generaliza el temor. Destaca, en esta paradójica combinación de apoyo y temor, la implantación de los «juicios populares». Los juicios populares que desembocaron en ejecuciones no fueron los únicos asesinatos que cometieron los destacamentos senderistas, sin embargo fueron los más impactantes para la población porque se desarrollaron de forma pública. Por ejemplo, el primer Juicio Popular en Huancasancos se realizó contra «Moisés» el 19 de noviembre de 1982. Obligada toda la comunidad a reunirse en la plaza del pueblo, los comuneros escucharon todos los cargos que se le imputaban: abusivo, explotador, mujeriego, etc. Una vez concluidas las acusaciones, se dio la sentencia de muerte y se le disparó un tiro en la sien. Este ritual será repetido cientos de veces en todos los distritos de la Zona.

Al parecer, el avance logrado en la provincia de Cangallo y en Huancapi entre 1980 y 1982 condujo al PCP-SL a decidir la ampliación de sus operativos hacia el territorio de Huancasancos, con consecuencia imprevisibles pues generará, luego de poco tiempo, el rechazo activo de buena

parte de la población. En efecto, en esta provincia de mayores recursos, las columnas senderistas el PCP-SL no sólo ajustician autoridades y «ricos», sino que también arrasan el ganado, saquean las tiendas y las casas de los «poderosos» de Huancasancos, sancionan adúlteros, abigeos, borrachos, etc. Al inicio, la confiscación de ganado de las familias más poderosas les genera simpatía entre comuneros de menores ingresos pues el ganado expropiado es repartido, aunque también participan del reparto comuneros de comunidades más pobres. En julio de 1982 es asesinado por el PCP-SL en Lucanamarca Marciano Huancahuari, acusado de «rico», siendo repartidas 600 ovejas y 100 vacas. En noviembre, otro «rico», Alejandro Marquina, cae asesinado en Huancasancos. La simpatía pronto se diluirá cuando algunos jóvenes locales senderistas asuman los cargos locales de mando en franca oposición de la mayoría de comuneros.

Ataques cruciales

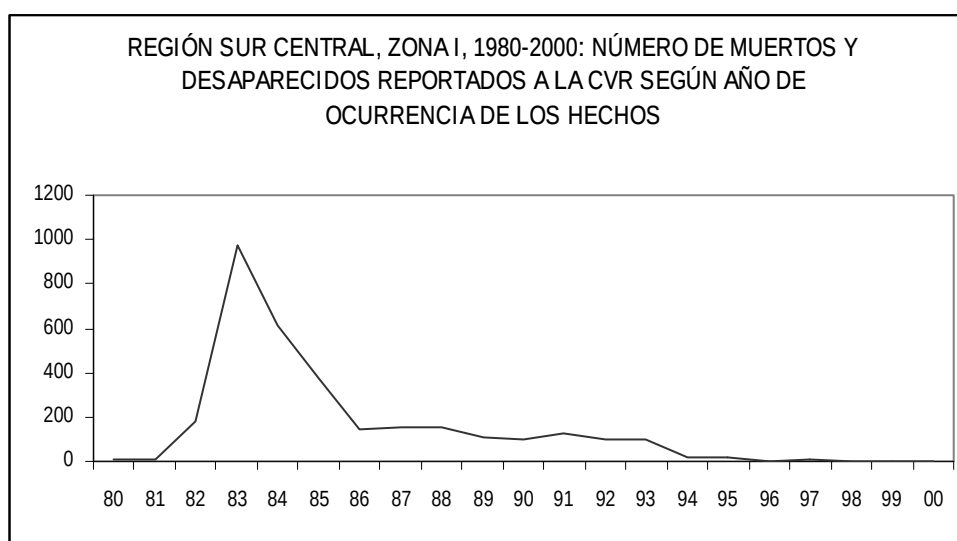
El punto culminante de los sucesivos ataques a los puestos policiales se dará en Vilcashuamán el 22 de agosto de 1982, cuando un grupo de senderistas armados bombardea el puesto con el saldo de siete policías muertos y varios heridos. Este sería la peor ofensiva que sufriría el puesto policial de Vilcashuaman desde los ataques perpetrados el 31 de marzo y 25 de julio del mismo año. El local municipal y el puesto policial quedaron completamente destruidos. A la mañana siguiente del ataque, la prensa nacional llegó a Vilcashuamán junto con el Ministro del Interior Gagliardi, el general de la GC Humberto Catter y el Jefe de la GC.

Pero los ataques senderistas no quedan reducidos a puestos policiales, como hemos visto. Uno de los acontecimientos más importantes que tuvo repercusiones a nivel regional fue el arrasamiento por el PCP-SL de la Granja Comunal de Qaracha, en diciembre de 1982, de propiedad de Huancasancos. A esta acción de gran envergadura acudieron cientos de personas de diferentes comunidades de los «interiores» que participaron en el reparto: Lucanamarca, Sacsamarca, Sarhua, Tiquihua, Manchiri, Umaru, Hualla, incluso Pampa Cangallo, etc. Los comuneros de Huancasancos recuerdan hoy con resentimiento y amargura como la gente de las zonas bajas, gente de los «interiores», «vinieron felices a recoger su ganado y una porción de carne». En Lucanamarca el PCP-SL también saqueó la tienda comunal y repartió los bienes obligando a los comuneros a hacer fila para recibirlos. En Sacsamarca sucedió lo mismo con la Granja Comunal, que aunque no tenía el número ni la calidad de los animales de la Granja de Huancasancos, generó la crítica de la población local que vio como se repartía su ganado a comuneros de otras localidades.

La ofensiva de las Fuerzas Armadas, los ajusticiamientos/arrasamientos del PCP-SL y la rebelión campesina: 1983-1984

REGIÓN SUR CENTRAL, ZONA I, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	3,151	5	10	175	966	616	372	146	151	151	110	95	123	97	95	15	15	1	5	1	2	-
CANGALLO	580	1	1	41	261	98	64	16	27	19	7	6	10	9	16	-	2	-	2	-	-	-
HUANCA SANCOS	402	1	-	19	211	84	14	4	9	6	23	3	3	18	2	2	1	-	-	-	2	-
VÍCTOR FAJARDO	869	1	1	62	300	212	31	36	41	84	20	13	22	33	10	1	1	-	-	1	-	-
VILCAS HUAMAN	1,300	2	8	53	194	222	263	90	74	42	60	73	88	37	67	12	11	1	3	-	-	-



Entre 1983 y 1985 se suceden los años con mayor cantidad de muertos en esta Zona I, principalmente en la provincia de Víctor Fajardo, que en 1983 concentra el mayor índice de muertos de todo el departamento de Ayacucho, como vemos en las cifras siguientes.

Muertos en Cangallo y V. Fajardo

	1982	1983	1984	1985	1986
Cangallo-Vilcashuamán	95	460	320	327	107
V.Fajardo-Huancasancos	81	517	296	46	41
Total	176	977	616	373	148
Total Regional	516	2145	3529	1043	465
% de Total regional	34%	46%	17%	36%	32%

Es evidente que las cifras anteriores tienen relación directa con la contraofensiva contra el PCP-SL lanzada desde el momento mismo del ingreso del ejército en enero de 1983, y la respuesta senderista contra la población sospechosa de colaborar con las patrullas militares. En efecto, según numerosos entrevistados, el ingreso de las Fuerzas armadas en enero de 1983 cambia el comportamiento del PCP-SL en relación con la población pues entre 1983 y 1984 los grupos

senderistas adoptan una actitud mucho más coercitiva, aumentando los asesinatos de quienes se mostraban en contra.

El EP instala, progresivamente, numerosas Bases contrasubversivas que dependen de algunos cuarteles importantes, centro de operaciones, entre los cuales destacan los de Pampa Cangallo, Huancapi y Vilcashuaman. La instalación de bases militares se complementa con destacamentos policiales de Sinchis que se instalan en algunos puestos policiales.

En territorio básicamente hostil, habitado por campesinos de diferente comportamiento cultural, incluso con otro idioma, sin disponer de información pertinente de sus servicios de inteligencia, los militares y policías recién llegados arremeten desde su llegada, en algunos distritos considerados como «zonas rojas», es decir ZL en el lenguaje del PCP-SL, contra la población casi sin discriminar. En otras zonas, como Huancasancos y Lucanamarca, encontrarán la guerra ya declarada por las comunidades contra el PCP-SL. Luego del enfrentamiento de los comuneros contra el PCP-SL el 21 de mayo de 1983 en Sacsamarca, se instala una base policial compuesta *Sinchis*, mientras que en Huancasancos, luego de la incursión senderista del 24 de Junio del mismo año, el puesto policial es reemplazado por la base militar, que permanece en el lugar hasta 1994.

Sin embargo, si bien la presencia de militares y policías calzaba, en muchas comunidades, con la demanda y la necesidad de la población, la carencia de una adecuada estrategia contrasubversiva posibilita la utilización de métodos que aumentan el nivel de violencia, incluyendo asesinados colectivos, detenciones, secuestros, torturas, violaciones a mujeres.

Desde su instalación en la zona, los objetivos de las bases contrasubversivas fueron varios: patrullar el territorio en busca de destacamentos armados, incursionar en poblados considerados bases senderistas, detener a simpatizantes senderistas denunciados por la población y presionar a las comunidades a que se respondan activamente contra el PCP-SL. Cuando el EP instaló la base de Vilcashuamán en 1983, una de sus primeras órdenes fue que todas las autoridades debían de reportarse a la Base para informar. Asimismo, el sistema de vigías que había sido un sistema de defensa impuesto por el PCP-SL trató de ser reutilizado, con el apoyo de las fuerzas del orden, esta vez en contra de las columnas senderistas. Sin embargo, en 1983 el ejército prioriza los operativos militares contra supuestas bases de apoyo del PCP-SL. En enero de aquel año, en Umasi, Víctor Fajardo, cerca de 55 senderistas que se habían instalado en la escuela del lugar son sorprendidos por una patrulla militar, muriendo la mayoría de ellos. Desde ese momento, el PCP-SL comprende que la guerra ha incorporado nuevos y mayores enemigos, el ejército y los sinchis, a los cuales se sumarán pronto algunas comunidades que no aceptan más el «nuevo orden» senderista,

La respuesta de Sacsamarca contra el PCP-SL constituye el punto de inicio que pone fin el poder del PCP-SL en Huancasancos, Sacsamarca y Lucanamarca. En efecto, a mediados del mes de febrero de 1983 se produce el primer enfrentamiento entre la población y los responsables del Comité Popular de Sacsamarca, que conduce a la muerte de los principales líderes senderistas

locales a manos de los comuneros. De la misma manera, en las semanas siguientes se manifiestan reacciones similares de la población en las comunidades de Huancasancos y Lucanamarca, en donde la población también dio muerte a los líderes locales del PCP-SL.

Esta reacción comunera se vincula, en buena medida, al incremento de los asesinatos realizados por el PCP-SL. desde 1983 previo «juicio popular». En Sacsamarca, el primer «juicio popular» se realizó en enero de 1983 contra el profesor Emilio, acusado de traidor y ejecutado en la plaza del pueblo. El primer «juicio popular» en Lucanamarca ocurrió el 17 de febrero de 1983, contra un comunero de 74 años de edad y vicepresidente de la comunidad, que había pasado por casi todos los cargos tanto de la comunidad como del distrito, pero fue acusado de rico y abusivo. Junto con él fueron asesinados su esposa y su yerno.

Se puede distinguir, de manera general, la reacción de estas comunidades de Huancasancos de la persistencia, en Cangallo y Vilcashuaman, de las redes de apoyo al PCP-SL, lo cual explica que en la primera zona los asesinatos colectivos más resaltantes hayan sido producto de incursiones senderistas mientras que en estas dos provincias el ejército realizara operativos que merecieron la condena nacional, como en Accomarca, Cayara o Umaro.

La reacción de las comunidades de Huancasancos surge de un número no precisado de comuneros de la comunidad de Sacsamarca, que se organizan clandestinamente y deciden aprovechar los carnavales, en febrero de aquel año de 1983, para llevar adelante su revuelta, que se cumple con éxito asesinando a los dos responsables del PCP-SL de la localidad. Pero al día siguiente deben enfrentar las represalias de una columna del PCP-SL que llega desde Huancasancos a Sacsamarca, tomando presos a un número aproximado de 40 personas, entre ellos a 14 participantes de la rebelión, quienes son conducidos a Huancasancos para ser ejecutados. Alertados por los comuneros, los Sinchis llegan a bordo de dos helicópteros y al percatarse, la población que se había concentrado en la plaza para asistir al «juicio popular», decide escapar, mientras los militares disparan indiscriminadamente matando a 14 personas, entre ellas 9 senderistas siendo el resto comuneros inocentes. Los militares instan a la población a tomar posición contra el PCP-SL, les ordenan matar al principal líder del PCP-SL, camarada «Víctor», de lo contrario se atenderían a las respuestas del ejército. El 20 de febrero de 1983, cuando «Víctor» y sus seguidores hacen su aparición en Huancasancos, los comuneros los asesinan.

Cuatro días después, en Lucanamarca, el ejército incursiona de manera sorpresiva, en momentos en que algunos de los líderes locales del PCP-SL estaban reunidos, produciéndose un enfrentamiento, en la cual mueren 9 personas, entre éstas uno de los importantes jefes del PCP-SL en la zona, el «camarada Nelson». Una vez controlada la situación, el ejército reúne a la población en la plaza en donde, al igual que en Huancasancos, nombra autoridades en la intención de reestablecer el orden y demanda a la población a rebelarse contra el PCP-SL, exigiendo a la comunidad a tomar preso otro importante líder local del PCP-SL, natural del lugar, quien es

capturado en efecto días después, asesinado por los comuneros a pedradas y palazos, rociado con kerosene e incinerado.

El episodio más conocido de este brutal enfrentamiento entre las comunidades y el PCP-SL ocurre el 3 de abril de 1983, cuando un número aproximado de 80 senderistas, entre hombres y mujeres, arremete de la manera más despiadada contra Lucanamarca, y conforme la columna desciende de las estancias, va asesinando campesinos, mujeres y hombres, niños y ancianos, que suman al final 67 muertos. La magnitud de este evento lo convierte en uno de hechos más traumáticos de la violencia en la Zona, ocultando los múltiples y pequeños episodios ocurridos a lo largo del proceso de la guerra (*Ver Est. en prof. CVR, casos judiciales, etc.*). Algunas personas que habían logrado escapar de la masacre acuden a Huancasancos a pedir auxilio al ejército mientras que, al día siguiente, otros sobrevivientes irrumpen violentamente en el domicilio de los padres del líder senderista local asesinado anteriormente, a quienes matan en señal de venganza.

Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca, ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de 80, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso, como se analizara en el año 83, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones, como en ésta, fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido (A. Guzmán, Ent. Siglo)

Empero, no sólo Lucanamarca debía ser «sancionado» por sublevarse contra la «revolución». El PCP-SL organiza otra respuesta para sancionar a Sacsamarca. En la madrugada del 21 de mayo de 1983, un número no precisado de senderistas entre varones y mujeres, venidos esta vez de la «parte baja» (Hualla, Tiquihua, Canaria, etc.), dirigidos por el «*camarada Omar*», preparan el ataque. Sin embargo, cuando éstos se encontraban en el anexo de Pallqa, uno de los comuneros que habían detenido logra escapar y llega a Sacsamarca, donde se encontraba un Mayor de la policía quien había ido en misión de inspección con un grupo de efectivos. Al ser informado de la posible incursión senderista, éste organiza a la población para responder el ataque. Tres efectivos, más un aproximado de 20 personas van al encuentro, y se produce el enfrentamiento en las alturas de Sacsamarca, cayendo abatidos varios senderistas, entre ellos los «*camaradas Omar y Andrés*», mientras que por el otro bando mueren 11 personas, entre ellos un Sinchi apellidado Dueñas. Según los testimonios recogidos, veinte senderistas son apresados y conducidos a Sacsamarca, y después de tres días son conducidos a Jinquilpata, paraje cerca de la carretera que va a Huancasancos, donde los Sinchis los fusilan.

Aunque no sea la variable principal, cabe preguntarse también hasta qué punto las rebeliones que se produjeron contra el PCP-SL no tienen un trasfondo de rebelión contra el poder y el control ejercido por los comuneros de Huancasancos, sobre todo en Sacsamarca; es necesario recordar que

en el «nuevo orden» establecido por el PCP-SL, los Comités de Lucanamarca y Sacsamarca estaban subordinados al de Huancasancos.

[...] existe mucho resentimiento contra Sancos, siempre han sido centralistas, ellos querían que la carretera fuese por Llauta y no por Putaqasa, así nos obligaban a trabajar en la carretera. Al día siguiente de la rebelión los sanquinos llegan y nos toman presos, me duele en el alma como me llaman hermano (refiriéndose a los sanquinos)... (Arturo, 38 años, Sacsamarca)

Este testimonio refleja cómo el rencor contra Huancasancos está presente en la memoria de las personas. Según este comunero, quien va a reprimir la primera rebelión que se produce en Sacsamarca, no es propiamente un grupo del PCP-SL sino «los sanquinos» en conjunto.

La lista de asesinatos en 1983 es muy extensa y cubre casi todos los distritos de las provincias incluidas en esta Zona I, escenario principal de la guerra iniciada por el PCP-SL en 1980. Todos los actores –SL, EP, Policía, Rondas- están presentes en el siguiente resumen de los eventos de 1983:

1983/01	En Umasi, Víctor Fajardo, cerca de 55 senderistas instalados en la escuela del lugar mueren en enfrentamiento con patrulla militar.
1983/01	Asesinato de 12 personas en Vilcanchos, Víctor Fajardo, por el PCP-SL
Febrero 83	Asesinato de comuneros de Sacsamarca por el PCP-SL.
Febrero 83	Comuneros asesinan a cinco senderistas, en la plaza de Huancasancos
3/4/1983	SL ingresó a la comunidad de Lucanamarca y asesinó a 67 comuneros
9/4/1983	Senderistas asesinan al gobernador y a cuatro campesinos en Chuschi, luego de someterlos a «juicio popular».
20/4/1983	En Juqisa, Ocros, Cangallo, 18 campesinos fueron asesinados por negarse a seguir consignas del PCP-SL y ser «perros del gobierno»
1983/04	Detención de varios pobladores en Totos, Cangallo, y asesinato de algunos de ellos por miembros del ejército peruano.
1983/04	Asesinato colectivo en Llusita, Víctor Fajardo, por el PCP-SL
1983/04	Desaparición de 4 comuneros en Circamarca, Víctor Fajardo por ronderos de Llusita y militares de la base de Cangallo. que acusan a los pobladores del lugar de ser los culpables de la masacre de Llusita
1983/04	Desaparición de 15 pobladores de Huancaraylla, Víctor Fajardo, por militares de la base de Cangallo
1983/05	Detención de 15 autoridades y comuneros de Quispillacta, Cangallo, por militares, conducidos al cuartel de Totos, asesinados y enterrados en una fosa común
1983/05	Detención y desaparición de pobladores en Hualla, Víctor Fajardo por militares del cuartel de Canaria
1983/07	Desaparición de 6 personas de Tiquigua, V. Fajardo, en el cuartel militar de Canaria
1983/07	Masacre de ronderos y comuneros en Buenavista, Los Morochucos, Cangallo, por el PCP-SL
Agosto 1983	Matanza de 8 campesinos en la estancia de Yaquia, Lucanamarca, por el PCP-SL.
1983/07	Enfrentamiento entre el PCP-SL y ronderos de Vilcashuaman.
1983/08	Masacre de 13 pobladores en Ñuñunhuayco, Cangallo, por el PCP-SL
1983/11	Asesinato de 11 personas en Accomarca, Vilcashuaman, por una patrulla militar.

La violencia generalizada en 1983, como podemos deducir de esta selección de eventos registrados por la CVR, incluye los enfrentamientos de las comunidades contra el PCP-SL, los contundentes operativos militares y las incursiones del PCP-SL. Asimismo, entre 1983 y 1984 se expande entre los comuneros el temor de perder sus vidas debido a la actitud tanto del PCP-SL como de las FFAA. Por lo tanto, en estos años se registra un importante desplazamiento de muchos pobladores hacia Huamanga o Lima, buscando refugio.

La propia dinámica de la guerra nos hace ver que la arbitrariedad de las ejecuciones y de los castigos se acentúa en 1983, cuando los conflictos internos comenzaron a hacerse más latentes porque finalmente el grupo senderista que tiene el poder en cada comunidad aprovecha éste para realizar también venganzas personales.

Una de las estrategias que desarrolló el PCP-SL desde 1983 para protegerse de la base militar de Vilcashuaman y de posibles incursiones de los militares fue mantener «autoridades de fachada». Es decir, mientras el PCP-SL mantenía el control de una ZL, el presidente de la comunidad, gobernador y otras autoridades actuaban de «autoridades pantalla» para ellos, informando sobre la normalidad del funcionamiento de la comunidad, reportándose todos los domingos al izamiento de bandera en la capital. En Pujas y en Huambalpa esta estrategia funcionó hasta la década del 90 pero en el caso de Accomarca terminó con la masacre de Lloqllapampa en 1985.

En 1984 la violencia continuó casi bajo el mismo esquema, aunque el número de muertos descendió significativamente a menos de la mitad del año anterior. La organización comunal contra los destacamentos senderistas pretendió ser frenada con incursiones punitivas; por ello, un nuevo episodio sangriento de la guerra en Huancasancos resulta del ataque del PCP-SL a ese pueblo durante la fiesta del Corpus Christi, el 24 de Junio de 1984, que ocasiona treinta heridos y ocho muertos, entre los cuales estaba el capitán jefe de la base militar. Al mes siguiente, los senderistas ingresan a San Martín de Tiopampa, distrito de Lucanamarca y disparan contra los pobladores «por no apoyar a la lucha armada», asesinando 8 personas.

Desde 1984, ante la ofensiva militar y la resistencia de algunas comunidades, el PCP-SL opta por utilizar con mayor frecuencia sus refugios-campamentos en espacios cercanos a sus bases de apoyo, convertidas en blanco privilegiado de las patrullas militares. Los pelotones senderistas mantenían su recorrido a lo largo del Pampas utilizando esta red de refugios, de los cuales se han logrado identificar algunos en Umari, Mayupampa, Huamanmarca (anexo de Huambalpa), Lloqllapampa (en Accomarca) y Parqocucho, en Vilcashuaman.

Cambios en la estrategia de las FFAA: 1985-1987

Precisamente en Llocllapampa, Accomarca, en Vilcashuaman, el 14 de agosto de 1985 una patrulla militar de 25 soldados al mando del Sub-Teniente Telmo Hurtado Hurtado ingresó a la comunidad y asesinó, según afirman los testimoniantes, a 69 campesinos. Pocos días después, el 27 de agosto,

otra patrulla militar incursiona en las comunidades de Umaro y Bellavista, igualmente en Vilcashuamán, y mata a 59 campesinos.

La conocida como «masacre de Accomarca» tuvo importantes repercusiones a nivel local pues significó el final del control del PCP-SL en esa zona y el inicio del dominio militar. Fue el portavoz senderista «El Diario» quien en primer lugar difundió la noticia casi un mes después, el 11 de septiembre de 1985. El informe proporcionado por el ejército a la Comisión investigadora del Congreso, señala que días antes de la masacre los militares detuvieron un grupo de personas que se encaminaban a Accomarca desde el campamento senderista de Llocllapampa, donde estaban escondidos varios FAL, dos SIMA, granadas caseras, 15 cajas de dinamita y otras armas menores, utilizadas por «la compañía Accomarca con un total de sesenta hombres que conformaban los pelotones 13, 14, 15, 16, 17 pertrechada de seis FAL y dos metralletas». Teniendo en cuenta esta información, la Base militar de Vilcas dispuso una operación conjunta de varias patrullas que el ocho de agosto de 1985 salieron hacia varias localidades, entre ellas Accomarca, Accomay, Cayara y Llocllapampa. La patrulla comandada por el subteniente EP Hurtado incursionó el 14 de agosto en la quebrada de Huancayocc, y al llegar a un lugar denominado Llocllapampa disparó y mató a cinco individuos, capturando otras a numerosas personas, incluyendo cinco niños. Finalmente, fueron: «conducidos a una casa, donde Hurtado ordena a los soldados abrir fuego. para rematar el acto, arroja una granada de mano al interior de la casa, además de reunir a las cinco personas eliminadas anteriormente y las introduce a otra casa, la misma que también es incendiada»(Informe Comisión).

Ante el descubrimiento de estos hechos, el gobierno obliga a renunciar al General FAP César Enrico Praeli, presidente del Comando Conjunto el 15 de setiembre de 1985. El 17 de setiembre, el general FAP Luis Abraham Cavallerino, nuevo presidente del Comando Conjunto, anuncia mediante comunicado oficial el relevo del general de división EP Sinesio Jarama Dávila, comandante general de la II Región Militar y al general de brigada EP Wilfredo Mori Orzo, jefe político militar de la Sub- Zona de Seguridad Nacional No. 5. En el mismo comunicado, se explica que había sido aceptada la solicitud de pase al retiro de este último. Interrogado por la Comisión Investigadora en Ayacucho, el subteniente Telmo Hurtado justificó su actuación con un argumento que explica la estrategia militar de aquellos años: «uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño...los (terroristas los) comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas...poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa».

Los sucesos de Llocllapampa del 14 de agosto se suman a operativos similares ocurridos desde inicios de agosto en Huampalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuamán, Vischongo y Cangallo, mediante los cuales el ejército pretendía asestar golpes definitivos a la red de apoyo del PCP-SL.

Como dijimos anteriormente, mientras que en algunas zonas (como Huancasancos, o en otros espacios, como las alturas de Huanta, Vinchos y la selva del Río Apurímac) el PCP-SL se enfrentaba a los comuneros y sus rondas, en este espacio de la margen izquierda del Pampas fueron las bases militares quienes suplieron la resistencia de la mayoría de comunidades a organizarse en rondas de autodefensa.

En efecto, en términos generales, tal como concluye la investigación sobre Comités de Autodefensa (*ver Estudio de la CVR sobre CAD's*), las provincias del centro de Ayacucho, a diferencia de las del norte, se mostraron más renuentes a conformar rondas campesinas contrasubversivas. Los testimonios recogidos en este caso señalan que los grupos de autodefensa en las comunidades de Cangallo y Vilcashuaman se forman en su mayoría tardíamente, desde 1987, y casi a la fuerza, por iniciativa de las Bases militares de esas localidades.

Para la derrota del PCP-SL en la región fueron importantes los cambios en la estrategia contrasubversiva que desarrolló el Estado, destacando en ella los asesinatos selectivos, que evitaban sobre todo repetir errores como la masacre de Accomarca en 1985. Los CAD, aunque se formaron tardíamente, jugaron un papel importante para restablecer las autoridades estatales en las comunidades. Tanto los militares como los CAD's empezaron a ganar los espacios y la gente que el PCP-SL había abandonando.

En el transcurso de la guerra, llegado el final de la década de 1980, el PCP-SL se va debilitando tanto como organización como moralmente. Ello repercute en las localidades pues las «visitas» de las columnas senderistas dejan de producirse, alejándose el PCP-SL de las comunidades y de la población, desplazado completamente por el EP, la policía y los CAD's, en los cuales, como en muchos casos ocurridos en todo el país, algunos de sus integrantes eran ex-militantes senderistas que por venganza o rencillas familiares, se «voltean» hacia el lado del EP, amparándose en las normas que proponían el arrepentimiento desde 1991.

A la vez que la intensidad de la violencia disminuye considerablemente muchos de los eventos ocurridos pasan a segundo plano o son opacados por los «grandes eventos». Sin embargo, ha quedado grabado en la memoria de la gente algunos hechos importantes que son necesarios mencionar: el 14 de septiembre de 1987 el PCP-SL incursiona en Putaqasa, comprensión del distrito de Sacsamarca, asesinando a 9 comuneros e incendiando viviendas. El 10 de febrero de 1989 el PCP-SL vuelve a incursionar en Putaqasa asesinando a dos comuneros, mientras que el 19 de diciembre del mismo año se produce un enfrentamiento en el anexo de Palqa, perteneciente al distrito de Sacsamarca en el que mueren 11 campesinos, desconociéndose el número de muertos por parte del PCP-SL.

Intensificación del conflicto armado interno 1988-1991

Debemos remarcar que en las provincias en esta Zona I, donde el PCP-SL inició la guerra interna contando con una sólida red de colaboración establecida en varios años de preparación, a diferencia

de lo que se constata en otras zonas donde se producen puntos de quiebre claramente distinguibles en el proceso de violencia, no encontramos, salvo en Huancasancos y la rebelión de sus comunidades, momentos de quiebre netamente definidos a partir de una respuesta de la población ante la presencia y el dominio del PCP-SL. Pero si podemos afirmar que desde 1987 la cantidad de muertos disminuye ostensiblemente y luego de 1993, cuando se registran 30 muertos en la provincia de Vilcashuamán, prácticamente no existen muertos por conflicto armado interno en estas provincias.

Según la información disponible, la pérdida de bases de apoyo y los golpes asestados por las patrullas militares no logran sin embargo eliminar definitivamente a los grupos del PCP-SL que son aún capaces de realizar incursiones y emboscadas. Entre éstas, la acción más conocida en el primer semestre de 1988 es la emboscada perpetrada el 13 de mayo a un convoy militar en Erusco, cerca de Cayara, en la cual mueren un capitán, dos cabos y un sargento. Al día siguiente, una patrulla del EP incursiona en represalia en Cayara, reúne a toda la población y procede a victimar a más de 28 campesinos. Cinco años después del ingreso del ejército, la respuesta a los atentados del PCP-SL seguía siendo la misma, pues los responsables de las bases militares aún consideraban que la población brindaba apoyo activo a las columnas senderistas.

Los planes del PCP-SL de «Desarrollar Bases en Función de la Conquista del Poder» y de «Construir la Conquista del Poder» sostienen una nueva ofensiva nacional en busca del «equilibrio estratégico», entre 1988 y 1990, pretendiendo entre otros objetivos, contrarrestar la expansión de los Comités de Autodefensa Civil a la vez que aprovecharse del repliegue de algunas bases militares y policiales. En 1990, por ejemplo, cuando son retirados los puestos policiales de los distritos de Huambalpa, Carhuanca y Vischongo, el PCP-SL inmediatamente las columnas senderistas organizan incursiones en estos poblados. El ligero repunte de la violencia en esta Zona I entre 1987 y 1992 es de menor magnitud que el que se constata en la ciudad de Huamanga o en la Zona del Río Apurímac. Las provincias de Víctor Fajardo y Vilcashuaman parecen ser el epicentro de este último capítulo del proceso de violencia en la Zona I en 1992.

El final de la violencia: 1992-2000

Si bien los CAD's en esta Zona I se han organizado en pocas comunidades, el PCP-SL ha perdido buena parte del apoyo de la población local al recibir duros golpes en su red organizativa, sin poder además, con su escasa capacidad de fuego, hacer frente a la abrumadora superioridad de las patrullas militares. Por lo tanto, es posible afirmar que en esta Zona I, antes que la acción de los CAD's, la derrota del PCP-SL proviene de los operativos realizados desde las numerosas BCS instaladas en estas provincias del centro de Ayacucho. Quizás en ninguna otra Zona, salvo las alturas de Huanta y algunos espacios de Río Apurímac, se encuentren tantos «arrasamientos» de poblados enteros hechos por el PCP-SL y también por las fuerzas militares: Pujas, Umaru,

Accomarca, Cayara, Huancasancos, Lucanamarca, son sólo algunos de los nombres más conocidos de una larga lista de asesinatos colectivos que aceleran una emigración masiva de sus pobladores.

A la constante presencia de las fuerzas armadas y policiales, con patrullajes sostenidos desde numerosas bases contrasubversivas instaladas en la zona, se suman en 1992 la captura de Abimael Guzmán y la creación de algunos CAD's tardíos, como dijimos anteriormente. A fines de 1992, el PCP-SL estaba militarmente derrotado, remachándose su derrota con los acuerdos de paz suscritos por Guzmán con el gobierno, aunque la facción de «*Feliciano*» —«SL Rojo»— mantuvo, en la selva del Río Apurímac-Ene, su intención de continuar la lucha armada.

Mientras *Feliciano* se resguardaba en la selva de los militares, al parecer cuadros senderistas de su facción fueron enviados a la zona de Vilcashuaman para intentar recomponer las bases de apoyo del Comité Zonal Cangallo-Fajardo. Así, la guerra continuó a través de algunos episodios sangrientos, destacando el asesinato de quienes intentaban organizar los CAD's en sus comunidades y los retornantes que intentaban romper todo vínculo con el PCP-SL estableciendo relaciones estrechas con el EP y el Estado a través del apoyo a obras de infraestructura. Así, muere asesinado en 1995 Miguel Rivera —líder de la comunidad de Pujas, aquella que participó en el asalto del PCP-SL al fundo Ayzarza en 1980— y a otros comuneros que empezaron a formar su CAD que transportaba autoridades de Huancasancos y su custodios militares, vuelan por los aires en las alturas de esa provincia: murieron 17 personas,

El 19 de junio de 1992, en el paraje de Challhuamayo, ocurre una de las emboscadas más sangrientas en esta Zona I cuando es dinamitado un vehículo de la municipalidad de Huancasancos en el que viajaban 17 personas, entre ellas el alcalde gestor del proceso de provincialización de Huancasancos, el subprefecto, el fiscal provincial, el juez de paz, el gerente de la micro-región, además del conductor, un capitán EP y diez soldados que brindaban seguridad a las autoridades. Todos perecieron en el acto. Este es uno de los últimos eventos de violencia, junto con el asesinato por el PCP-SL, el mes siguiente, de 8 personas en la comunidad de Pallcca. Casi como epílogo aislado de un ciclo de violencia cerrado dos años atrás, aún se registra en junio de 1994 el asesinato por el PCP-SL de Manuel Barrientos García, alcalde de Sacsamarca.

Además de los acuerdos de paz suscritos por Guzmán, las normas que facilitan el arrepentimiento, las acciones militares y las de los CAD's, debemos reconocer al final del ciclo de violencia en esta zona el papel jugado por los retornantes, agredidos también por el PCP-SL, sobre todo en 1992, pero a pesar de ello importantes agentes de cambio pues además de convertirse muchos de ellos en integrantes de los CAD's, realizan trámites para que el Estado incremente su presencia en la Zona a través de programas sociales e inversiones en infraestructura básica como construcción de postas médicas, refacción de colegios, etc. Si la marginación de las comunidades de esta Zona I fue una de las principales razones para que el PCP-SL obtenga una importante adhesión a su propuesta de «nuevo orden», al final del ciclo de violencia las demandas al Estado

son casi las mismas de siempre pero los demandantes son ahora, además, víctimas de la conflicto armado interno.

Cronología zona I

El comité zonal fundamental: las cuencas de los ríos pampas- caracha

Agosto 1980	SL Asesina al hacendado Benigno Medina y al administrador de Ayzarca en Pomatambo, Vilcas Huamán.
Julio 81	Asesinato del Alcalde del distrito de Concepción, Vilcas, por el PCP-SL.
12/10/1981	El gobierno decreta en «estado de emergencia» a cinco de las siete provincias de Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo)
3/3/1982	Senderistas asaltaron penal de Ayacucho. Fugaron 304 presos
Marzo 82	Asesinato de Teniente Alcalde de Lucanamarca por el PCP-SL
Mar 82	Asesinato del subprefecto Romani, Vilcashuaman
1982/06	Asesinato de Martina de la Cruz y otros 11 pobladores, Buena Vista, Los Morochucos. Cangallo, asesinados por el PCP-SL. Los pobladores de Buena Vista se trasladan, luego de los ataques a Pampa Cangallo donde existía una base militar, para regresar después de 1 año
1982/07	Asesinato de comuneros en Hualla, Fajardo, 5 encapuchados vestidos de civil llegan al lugar identifican y asesinan a autoridades en la plaza. A raíz de este hecho los «Sinchis» incursionan en varias oportunidades.
Julio 82	Asesinato de Marciano Huancahuari, Lucanamarca por el PCP-SL, por «Rico», luego de que le robaran 600 ovejas y 100 vacas.
22 ago 82	SL ataca puesto de la GC en Vilcashuamán, 5 horas de enfrentamientos deja saldo de 7 policías muertos.
	Se suspenden garantías en Andahuaylas y Angaraes, en el departamento de Apurímac
	Se registra el mayor número de atentados de los últimos 2 años: 34 acciones terroristas y 5 incursiones masivas a pequeños poblados
1982/12	Secuestro de Valentin Loayza Cuya-Tiquihua/Hualla, Fajardo. Miembros del PCP-SL lo sacaron de su escuela. En 1983 y 1984 Tiquihua estaba bajo el mando de los «desconocidos» (SL) por lo que se establecieron bases militares en Tiquihua, Hualla y Chincheros.
1982/12	Asesinato de Modesto Melgar, por el PCP-SL que había instalado un cuartel a orillas de río Pampas jurisdicción de Cangallo en el lugar denominado Chillcapampa. Habían atacado el puesto de la Guardia Civil en Totos y organizado la milicia en Chacabamba, nombrando dirigentes senderistas en cada comunidad
1983/01	Asesinato de pobladores de Llusita por el PCP-SL
1983/01	Masacre en Umasi Víctor Fajardo, Cerca de 55 senderistas se habían instalado en la escuela del lugar. Luego llegaron los militares y se produjo un enfrentamiento. Los senderistas fueron asesinados y los pobladores sacados de sus casas y obligados a cocinar y trabajar para los militares. Con los efectivos se encontraban 5 jovencitas (entre 10 y 18 años) que fueron violadas y asesinadas.
1983/01	Asesinato de 12 personas en Vilcanchos Víctor Fajardo por el PCP-SL El 3 de abril, más de un centenar de integrantes del PCP-SL irrumpieron en las comunidades de Lucanamarca y Huancasancos en Víctor Fajardo, dando muerte a 45 comuneros en Lucanamarca y a 35 en Huancasancos.
Febrero 83	Asesinato de comuneros en Sacsamarca por el PCP-SL. A partir de 1982 el PCP-SL estaba presente en el pueblo. En 1983 la situación se agravó. Luego de que cometieran asesinatos en el lugar, un grupo de 20 personas salió camino a Ayacucho para pedir ayuda. El líder fue asesinado y los demás detenidos por el PCP-SL.
Febrero 83	Civiles asesinan a cinco senderistas en la plaza de Sancos
3/4/1983	SL ingresó a la comunidad de Lucanamarca y asesinó de forma cruel a 67 comuneros (ver Estudio en Prof. de la CVR.).
20/4/1983	En Juquisa, Ocros, Cangallo, 18 campesinos fueron asesinados por negarse a seguir

	consignas del PCP-SL , registrados en una lista del PCP-SL por ser «perros del gobierno»
1983/04	Detención de varios pobladores en Totos, Cangallo, y asesinato de algunos de ellos por miembros del Ejército Peruano.
1983/04	Asesinato colectivo en Llusita, Víctor Fajardo, por el PCP-SL.
<u>1983/04</u>	<u>Desaparición de 4 comuneros en Circamarca, Víctor Fajardo por ronderos de Llusita y militares de la base de Cangallo. Se acusó a los pobladores del lugar de ser los culpables de la masacre en Llusita</u>
1983/05	Detención Y Desaparición de 2 autoridades de Quispillacta, Cangallo Detenidos por militares, conducidos al cuartel y desaparecidos.
1983/05	Detención y desaparición de pobladores en Hualla, Víctor Fajardo. Militares separan a 17 personas (mujeres, hombres, niños y ancianos) y los conducen al Cuartel de Canaria donde desaparecen.
1983/07	Desaparición de personas en Tiquigua Víctor Fajardo Con la instalación del cuartel militar de Canaria este año, desaparecen 06 personas
Agosto 83	Matanza de campesinos en la estancia de Yaquia- Lucanamarca por el PCP-SL, 8 muertos y 2 heridos.
1983/08	Arrasamiento y masacre de 13 pobladores en Ñununhuayco, Cangallo, por el PCP-SL
1983/08	Desapariciones de Panfilo Chuchon Prado y Nelly Salvatierra. P. Chuchon era maestro de la Escuela de Mujeres No 38174, Pomacocha, Vischongo, Vilcas. Fueron desaparecidos por militares de la base de Asquipata.
1983/11	Asesinato de 11 personas en Accomarca, Vilcas, por la Fuerzas Armadas.
Ene/1984	En Mayocc, Ocos, Cangallo, 15 campesinos fueron asesinados por negarse a integrar el PCP-SL.
1984/02	Desaparición de 17 pobladores de Viscachayocc, Pampa Cangallo, por militares de la base de Cangallo.
Junio 84	Asesinato colectivo en Huancasancos por el PCP-SL, mientras se celebraba la fiesta del Corpus Christi. Mueren 14 personas.
1984/06	Asesinato de 6 senderistas en Tantar, Vilcas, por soldados de la base de Concepción.
1984/07	Asesinato de 12 personas en Hualla Fajardo por el PCP-SL
Julio 84	Senderistas llegan San Martín de Tiopampa, Lucanamarca, y disparan contra los pobladores «por no apoyar a la lucha armada». Dejan 8 muertos.
1984/07	Detención y desaparición de 10 personas de Huarayocc, Vilcashuaman, por militares que los detienen durante celebración de la fiesta patronal y los conducen a la base de Ocos.
1984/08	Asesinatos en el distrito de Hualla, Fajardo La mayoría de asesinatos que aparecen en los relatos fueron cometidos por el PCP-SL. Muerte de más de 65 personas.
1984/11	Asesinato de pobladores en Hualla, Fajardo. Encuentran a 12 personas muertas en la casa de Eustaquio Pariona, asesinadas por el PCP-SL
1984/12	Detención, torturas y desaparición de comuneros de Hualla, Fajardo, Militares de la base de Hualla. 09 víctimas.
14/8/1985	25 soldados al mando del Sub Tte. Telmo Hurtado Hurtado ingresaron a la comunidad de Accomarca, en Vilcashuaman y asesinaron 69 campesinos.
27/8/1985	Militares detuvieron a varios campesinos de las comunidades de Umato y Bellavista, Provincia de Vilcashuamán en Ayacucho, rodearon a la población que trató de huir. Mataron a 59 campesinos.
	Continúa violencia senderista luego de la matanza de los penales. Cinco ingenieros son asesinados en Minas Canaria, provincia de Víctor Fajardo (22 Jun)
1986/07	Asesinato de autoridades de Sarhua, Fajardo, por el PCP-SL. Responden los comuneros asesinando a autoridad nombrada por el PCP-SL.
1986/10	Asesinato de 13 pobladores de Pomatambo y Parcco Alto, Vilcashuaman, por militares.

18/1/1988	Asesinato de cuatro trabajadores del Banco Agrario por el PCP-SL entre Huahuapuquio y Cangallo: René Cárdenas, José Medina, Luis Cabrera y Eliseo Flores
13/5/1988	Ataque a convoy militar en Erusco, Cayara, Fajardo. Mueren un capitán, dos cabos y un sargento. Al día siguiente una patrulla EP incursiona en represalia en Cayara, reúne a toda la población y procede a victimar a más de 28 campesinos.
1991/03	Asesinato de comuneros en Ñuñunhuayco, distrito de cangallo Mueren 08 comuneros luego de que aproximadamente 100 senderistas tomaran Ñuñunhuayco y Patahuasi casi simultáneamente. En Patahuasi murieron 06 comuneros.
Mayo 92	Emboscada del PCP-SL contra autoridades civiles y custodios militares en las alturas de Huancasancos. Asesinan a 18 personas.
1992/06	Asesinato colectivo en Llusita, Fajardo, Militares de la base de Cangallo
1/7/1992	SL incursiona en Huamanquiquia, V. Fajardo, y degolla a 18 comuneros.
Junio 94	Asesinato de Sergio Manuel Barrientos García, alcalde de Sacsamarca por senderistas vestidos como militares

1.1.6. Zona II: Las provincias de Huanta, Huamanga y La Mar

Hemos incluido en la Zona II de la región sur central a las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar, excluyendo de estas dos últimos el territorio perteneciente a la ceja de selva, que forma parte de la dinámica del Río Apurímac. La Zona II de la región Sur central es el espacio donde se concentra, junto con la Zona del río Pampas en Cangallo y Víctor Fajardo, la mayor cantidad de muertos de todo el ciclo de violencia en el país, sobre todo entre 1983 y 1985.

Datos generales

Si extraemos las ciudades de Huamanga y Huanta, la Zona que ahora reseñamos representa un espacio rural de producción básicamente campesina, con importante presencia de comunidades y comuneros minifundistas, limitados la mayoría de veces por la pobreza de los recursos que poseen.

Provincia	CC's
HUAMANGA	159
HUANTA	82
LA MAR	32

La agricultura de secano y la ganadería son las principales ocupaciones de esta población rural que emigra sostenidamente hacia las ciudades o viaja temporalmente, sobre todo al Río Apurímac, a procurarse ingresos monetarios como trabajador agrícola eventual en la época de apañe de productos selváticos, especialmente la coca.

En esta Zona II otro dato fundamental nos remite al crecimiento demográfico de la ciudad de Huamanga, a contracorriente del descenso poblacional del departamento de Ayacucho que, como

dijimos en capítulo anterior, es el único que arroja una tasa negativa de crecimiento en el periodo intercensal 1981-1993

Pob. Ciudad Huamanga

1966	1970	1981	1993
31638	33181	73699	111603

La ciudad de Huamanga concentra casi el 33% de la población departamental mientras que Huanta, la segunda ciudad en importancia, apenas tiene 25,000 habitantes aproximadamente. Las cifras provinciales son aún más claras respecto al proceso de despoblamiento rural en esta Zona II:

Población 1981-1983

	1981	1993	% creci.
<i>Huamanga</i>	128813	163197	27%
<i>Huanta</i>	76074	64503	-15%
<i>La Mar</i>	74455	70018	-6%
<i>Total dpto.</i>	503392	492507	-2%

Estas modificaciones demográficas tienen por supuesto relación directa con la alta incidencia de la violencia en los espacios rurales pero también se vinculan a procesos anteriores a ella, derivados de las limitaciones productivas existentes. Si nos aproximamos al territorio provincial, además de la ciudad de Huamanga debemos considerar el entorno campesino de la capital departamental, en el cual destacan los pequeños valles de la zona quechua que la rodean y que abastecen de productos a Huamanga a través de innumerables ferias; las zonas alto andinas hacia el oeste de la ciudad, en el eje de la vía Los Libertadores (Socos, Vinchos, Totos) representan un espacio con importante crianza ganadera, y las zonas alto andinas del sur, colindantes con la provincia de Cangallo, igualmente son de preponderancia ganadera..

De otro lado, son tres los espacios más o menos definidos que caracterizan la provincia de Huanta. En primer lugar, el espacio minifundista del valle de Huanta y la capital provincial, que tiene la particularidad de ser un valle inclinado en cuyo extremo occidental, al inicio de este plano inclinado, en el fondo del valle y no en el centro del mismo, discurre el río Cachi, que luego cambia de nombre por el de Huarpa y establece la frontera entre la provincia de Huanta y las de Angaraes y Acobamba, en Huancavelica, fuertemente vinculadas a Huanta al igual que la provincia de Churcampá, también en Huancavelica. Este espacio está cubierto por una población rural compuesta básicamente de minifundistas, dedicados al cultivo de hortalizas, verduras y frutales, que complementan sus ingresos con diversas actividades en el valle del río Apurímac, donde muchos de ellos también poseen parcelas. Articulados al mercado, bilingües, con bajo porcentaje

de analfabetismo, con estancias periódicas en la zona selvática del Valle del Río Apurímac, sus hijos estudian en los Colegios secundarios de la ciudad de Huanta, como el «González Vigil» y el «María Auxiliadora».

El segundo espacio definido en Huanta reúne a la población quechua alto andina de la provincia, en la cual haciendas como Chaca, Uchuraccay, Purus, Pallcca, Cunya, Huaynacancha, Huaychao, Ccarasencca, Culluchaka, entre otras estuvieron basadas en su gran mayoría en el régimen servil de trabajo, caracterizadas por su baja rentabilidad y por la privatización del poder por parte del propietario, orden liquidado por la RA entre 1972 y 1976, haciendo que los «hacienda runas» («gente de Hacienda») pasaran a conformar formalmente «Grupos Campesinos», aunque en la práctica se administraron como comunidades campesinas, manteniendo a sus Varayoq como sistema de autoridad paralelo. El tercer espacio huantino, del cual nos ocuparemos en el capítulo siguiente, nos remite a la selva del Valle del río Apurímac.

La provincia de La Mar tiene características similares a la de Huanta, con el valle de San Miguel, el espacio alto andino de Tambo y Chungui y la selva del Río Apurímac. La diferencia estriba en que el valle de San Miguel fue un territorio casi exclusivo de grandes haciendas, igualmente modificado con la RA. De otra parte, la importancia de la capital provincial ha disminuido conforme el pueblo de Tambo, en el eje vial Huamanga-Río Apurímac, ha ido adquiriendo importancia. Es precisamente en Tambo donde se concentra la mayor cantidad de acciones violentas de la sierra de La Mar, convirtiendo los alrededores de este pueblo en un refugio importante para poblaciones enteras desplazadas desde las alturas de Huanta.

Antecedentes, contexto en la década de 1970

Con el convencimiento de que estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas para iniciar la lucha armada, el PCP-SL realizó un intenso trabajo en diversos espacios de la sociedad ayacuchana preparando clandestinamente su organización para la guerra:

Entre los años 77, 78, y 79 es bastante notorio que (los militantes senderistas) viajaban específicamente a las provincias de Víctor Fajardo y Cangallo a formar escuelas populares y captar estudiantes; al mismo tiempo que trabajaban en estas zonas seguían consiguiendo militantes en la universidad, específicamente de las facultades de Educación, Sociales y Agronomía. (Ponencias del taller Universidad y conflicto armado interno)

Mientras que en el país el gobierno militar anunciaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente como paso previo a la entrega del poder a los civiles, en medio de un clima de intensa agitación popular; Sendero mantuvo una constante actitud de boicot y abstención frente a las movilizaciones populares y los procesos electorales convocados, definiendo su perfil básico de un partido localista, nacido y arraigado en Ayacucho, cuyas posiciones expresadas mediante su periódico generaban la burla de las otras formaciones de izquierda, que los ubicaban como uno más

de la constelación de grupos casi meramente universitarios, denominados como «infantiles de izquierda».

El resumen histórico del surgimiento del PCP-SL y sus principales características ideológicas y organizativas han sido estudiadas por la CVR en un estudio específico (*ver Estudio de la CVR sobre el PCP-SL*), al cual remitimos.

A fines de 1970 las acciones de Sendero se vuelven más beligerantes contra las agrupaciones de izquierda que deciden participar en los procesos electorales: un ejemplo de ello es que en el marco de la llegada a Ayacucho de una delegación de dirigentes nacionales de la UDP (grupo que participaba en la Asamblea Constituyente y las elecciones generales de 1980), Sendero no sólo agrede a uno de esos dirigentes sino que por la noche una treintena de senderistas lanza petardos al mitin organizado por la UDP.

Pasando decididamente a la acción, el PCP-SL organiza una despedida definitiva de sus militantes el día internacional del trabajo, el primero de mayo de 1980, en un mitin en la universidad de Huamanga en el cual flameaban banderas rojas, y los militantes senderistas estaban vestidos con chaquetas y gorros similares a los usados por los guardias rojos en la Revolución Cultural China, anunciando el inicio de la guerra popular:

[...] (ese día) todos los senderistas, (estaban) con vestido chino, con uniforme chino, con el gorrito chino de Mao, escarapela de Mao...con sus banderas rojas...el discurso central lo dio (Julio) Casanova, del tercer piso de la Facultad de Derecho, de ahí habló. Fue un discurso de despedida, todo un discurso antielectoral... (ellos gritaban) ¡guerra popular! ¡guerra popular!. (Docente UNSCH).

El PCP-SL culminaba así una labor organizativa rural y urbana que, desde su escisión del PCP-BR casi una década atrás, en 1971, le permitió no sólo avanzar en su ofensiva contra la policía, sino asentarse con rapidez en numerosas comunidades a las cuales incluiría en su estructura como bases de apoyo para sus pequeños contingentes siempre precariamente armados.

Historia de la violencia

Inicio de la violencia: 1980-1982

Como ocurría en todo el país, en Ayacucho las elecciones generales movilizaron a los distintos sectores políticos, existiendo mucha expectativa por la inclusión novedosa del voto campesino, particularmente importante en esta región. Ningún sector político optaba por el abstencionismo electoral, salvo el PCP-SL, cuyos repetitivos y anunciados llamados a la «guerra popular» nadie tomaba en serio, de la misma manera que nadie prestó atención a una cierta lógica de acciones públicas previas a lo que el propio PCP-SL consideraría como el «inicio de la lucha armada» (ILA).

En mayo de 1980 en momentos que se organizaban las elecciones presidenciales que permitirían transferir el poder hacia los civiles, un grupo armado del PCP-SL quema las ánforas y padrones electorales del poblado de Chuschi, hecho que pudo pasar como anecdótico si no fuera porque representa el acto de inicio de la guerra interna que pronto pondrían en alerta a todo el país.

A pesar del incidente de Chuschi, las elecciones se realizaron con normalidad, dando el primer lugar de las preferencias al candidato de Acción Popular, partido que obtuvo además tres de los cuatro diputados regionales, el otro pertenecía al APRA. El porcentaje del ausentismo electoral en el departamento (24.28%) no distaba mucho del promedio nacional (21.3%). Por su parte, las agrupaciones de la izquierda política mostraban -como en casi todo el país- una importante presencia.

Durante 1980, los primeros atentados tuvieron como objetivo llamar la atención de la opinión pública y de la prensa, y estuvieron dirigidos principalmente contra instituciones públicas: la Dirección Regional de Educación, ORDE-Ayacucho, la PIP, el Municipio Provincial de Huamanga en dos oportunidades, el Municipio distrital de San Juan Bautista, la Casa del Campesino, el Banco Popular, e incluso el hospital y un colegio. Durante la realización del desfile escolar de julio de ese año también se produjeron atentados dinamiteros tanto en Huamanga como en Huanta. También se iniciaron los asaltos a estaciones de radio para difundir proclamas del PCP-SL. Por su parte, la policía empezaría a realizar las primeras capturas, y también los primeros excesos, acosando constantemente a los dirigentes de la izquierda legal y a los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo. Sin embargo, a pesar de todo ello, la vida todavía transcurriría con relativa normalidad durante un tiempo más. En las elecciones municipales realizadas en noviembre de ese año, Acción Popular ganaría en seis de las siete provincias ayacuchanas y la Izquierda Unida, frente izquierdista recientemente constituido, se alzaría con la victoria en la provincia de Huanta. En Huamanga, sería elegido el acciopopulista Víctor Jáuregui y la IU quedaría en segundo lugar. El primero de enero de 1981 circuló en la ciudad un volante firmado por el «Comité Central del PCP» haciendo llamados a la lucha armada:

[...] ¡pueblo peruano! ¡la lucha armada ha comenzado! obreros, campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, hijos del pueblo, masas populares, pongámonos en pie de combate y con nuestra propias manos armadas construyamos el futuro, el gran futuro de nuestro pueblo. ¡viva el marxismo leninismo pensamiento maotsetung (sic)! ¡viva el Partido Comunista del Perú! ¡desarrollemos la lucha armada!.(Volante PCP-SL)

Es notorio el hecho de que aún no se haga alusión al «Camarada Gonzalo» ni al «Pensamiento Gonzalo». Por otro lado, durante ese año, continuarían los atentados dinamiteros contra organismos estatales y privados y se iniciarían los ataques contra autoridades, periodistas y funcionarios públicos, pero al ruido de los petardos en los atentados se sumarían luego los asesinatos, instalando el temor entre la población: el 16 de setiembre se produciría el primer asesinato en la ciudad de Huamanga, en el cual la víctima fue la propietaria de un pequeño bazar,

«La Pequeñita». También se iniciarían los ataques contra puestos policiales: en Luricocha el 21 de abril, en Quinua el 15 de agosto, y el más impactante, en Tambo, el 11 de octubre, que determinaría por primera vez el establecimiento del Estado de Emergencia en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo, y el toque de queda de 11 p.m. a 5 a.m. otorgándole a la policía la labor de la custodia, arribando además destacamentos especializados de «sinchis».

Pero los continuos e impunes desmanes policiales empiezan a generar no sólo una mala imagen frente a la población, sino que alimentan el rechazo. Acusaciones de robo, de abuso de autoridad, e incluso de asesinato hacen que el propio alcalde de Huamanga se pronuncie pidiendo «ley seca para policías», calificándolos además de indisciplinados y faltos de moral. Esta situación de desprestigio sería largamente capitalizada por el PCP-SL y les daría un poderoso argumento frente a la población.

Durante 1982 la violencia empieza a cobrar mayor intensidad y el número de muertos empieza a incrementarse ostensiblemente. Ese año, los atentados dinamiteros contra establecimientos públicos y privados se volvieron asuntos cotidianos, tanto en las áreas urbanas como en el campo. También se incrementarían los enfrentamientos con la policía, la que empezaría a replegarse hacia los poblados mayores y las áreas urbanas, concediendo importantes zonas al control del PCP-SL.

En la ciudad de Huamanga, el hecho más significativo en los primeros meses de ese año fue el asalto a la cárcel de Huamanga, el 2 de marzo. El objetivo del PCP-SL era liberar a un importante sector de militantes que habían ido cayendo detenidos en las diversas acciones, y cuya presencia era importante para la continuación de sus actividades subversivas. En el hecho, lograron fugar 247 detenidos —entre los que se hallaban numerosos presos comunes— y se informó de la existencia de catorce muertos y seis heridos. Fue una acción exitosa tanto desde el punto de vista del objetivo principal rescatando a sus militantes recluidos, como del impacto que esto generaría en la opinión pública local e incluso nacional, mostrando al PCP-SL como una organización mucho más eficaz que la policía. Aquel día, algunos miembros de la GR, custodios de la cárcel, al verse derrotados y no soportar la afrenta, asesinaron a tres subversivos que se hallaban detenidos e internados en el hospital: Carlos Alcántara, Russel Wensjoe y Amilcar Urbay. Fue una victoria moral para el PCP-SL, debido a que la opinión pública local, resentida ya desde hacía varios meses con las actitudes policiales, condenaría fuertemente este hecho, y terminaría solidarizándose mucho más con las víctimas del PCP-SL —estudiantes universitarios huamanguinos en el caso de Alcántara y Urbay— que con las de la policía.

La primera semana de agosto de 1982, un destacamento del PCP-SL atacó el fundo Allpachaca, propiedad de la universidad de Huamanga y centro experimental y de prácticas de los estudiantes, arrasándolo pues consideraba que desde allí «se servía al imperialismo y se traficaba con los bienes producidos». Pero lo más importante de este hecho fue que en la acción participaron campesinos que vivían en las zonas aledañas:

[...] por lo menos 300 a 400 campesinos [...] que destruyen la infraestructura, matan el ganado destruyen los tractores, porque la tecnología no era una cosa que estaba en sus esquemas y representaba a la burguesía, además de ello se justifican diciendo que el queso y el vino que se maceraba en este fundo beneficiaban a un pequeño grupo y no al campesinado entonces reparten los quesos y la carne a los campesinos que habían ido. (Ponencias del taller Universidad y conflicto armado interno).

En la segunda mitad del año, otro hecho que concitó la atención de la opinión pública local y nacional, fue el multitudinario entierro de la joven senderista Edith Lagos, huída durante el asalto al penal, muerta luego en un enfrentamiento con la GR en Umaca, provincia de Andahuaylas. El diez de setiembre de 1982 su entierro significó el punto más alto de la simpatía de la población huamanguina hacia el PCP-SL, aunque aún la ciudad no vivía el terror que la caracterizaría en años posteriores. El 14 de noviembre de 1982 un comando senderista ataca de nuevo el fundo Allpachaca, pero esta vez el ataque es sumamente violento y mueren dos mujeres no identificadas.

La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

El hecho que algunos dirigentes del PCP-SL hubieran ocupados importantes cargos en la Universidad San Cristóbal, puso a la universidad en la mira de los informes policíacos y periodísticos, que mencionaban supuestos nexos entre la UNSCH y el PCP-SL. Ello obligó a que el 18 de septiembre de 1980 las autoridades de la Universidad de Huamanga convocaran a una conferencia de prensa para negar que la institución se encontrara comprometida en actos terroristas. Las fuerzas políticas que se encontraban al interior de la universidad en un primer momento tendieron a subestimar las intenciones del PCP-SL; sin embargo, a medida que fueron aumentando las acciones subversivas, el senderismo logra inicialmente obtener la simpatía de un sector de la población que sentía que esta era una respuesta al abandono que vivía Ayacucho, combinando así una suerte de regionalismo ayacuchano con la apuesta por la revolución nacional y mundial.

En junio de 1981 la Policía anunció la captura de dos células senderistas señalando que sus integrantes eran estudiantes de la Universidad San Cristóbal, hecho que fue utilizado para reforzar la hipótesis sobre la existencia de nexos entre la Universidad y el senderismo, reforzando el estigma sobre los sancristobalinos como potenciales terroristas.

El 14 de octubre de 1981, ante el avance de las acciones del PCP-SL, se declara el estado de emergencia en cinco provincias del departamento de Ayacucho, y de inmediato la Policía procede a allanar la residencia universitaria y detener a medio centenar de estudiantes, sin encontrar arma alguna ni ningún tipo de indicio que relacionara a la Universidad con actos de terrorismo.

A fines del 1982 la violencia se tornará más aguda, y el gobierno central autorizará el ingreso de las fuerzas armadas a Ayacucho. En este nuevo escenario de militarización, la Universidad de San Cristóbal quedará atrapada entre dos fuegos: Sendero y los Militares.

En el campo

Por otro lado, en las áreas rurales el PCP-SL sustentó su trabajo inicial —como en todas partes en el país— en el circuito educativo que generó a través de profesores rurales y estudiantes secundarios, llegando a involucrar sectores importante de jóvenes de las comunidades. En general, durante el periodo 1980-1982, el PCP-SL amplía su presencia en el campo a través de varias estrategias: la primera es la imposición de su autoridad armada en el orden local, cubriendo los flagrantes vacíos del estado, logrando captar entusiasmo entre muchos campesinos de la zona por el «ejercicio de justicia» que eliminaba personas indeseables para las comunidades. Esta estrategia se complementa con un objetivo militar sostenido cual es atacar los puestos policiales rurales obligando a su cierre y al paulatino retroceso policial. La tercera estrategia es la presión —sugerir, amenazar y asesinar son tres gradientes de esta presión— sobre autoridades de toda índole, desde Alcaldes distritales hasta presidentes de comunidades, intentando ganar su apoyo y, por ende, el del grupo que representaban.

Pero si bien el avance del PCP-SL en los espacios rurales se constata con notoriedad a partir del año 1982, es preciso también reconocer que se registran a la vez las iniciales respuestas violentas al proyecto autoritario de Sendero. Quizás la primera acción de esta naturaleza, con seguridad la más sonada, fue la de los comuneros que en enero 1983 mataron a siete senderistas en Huaychao, en las alturas de la provincia de Huanta, como reacción al asesinato de autoridades comunales. En febrero del mismo año se produce la «sublevación» de Sacsamarca en Huancasancos (Ver estudio de la CVR sobre Huancasancos), cuando los comuneros, hartos de los abusos de los mandos senderistas, los emborrachan y los matan a puñaladas y pedradas. Son reacciones aisladas, locales y no coordinadas, que provocaron una contra respuesta violenta por parte de los senderistas; más de cien comuneros de Uchuraccay victimados por Sendero y la matanza de Lucanamarca dan fe sobre ello.

Pero hacia mediados de 1982 estos desencuentros entre el PCP-SL y algunas comunidades campesinas se ahondarían básicamente por tres razones. la primera, fue la intromisión de los grupos senderistas en las relaciones comerciales comunales, pretendiendo el cierre de las ferias rurales - prácticamente el único vínculo comercial entre las comunidades y el mercado- intentando obligar a los campesinos a producir exclusivamente para su subsistencia bajo la consigna de «hambrear la ciudad»: «...nosotros (debíamos) producir para nosotros nada más. Ya no vamos a dar a esos perros, decían. Producir para el pueblo nada más, ya no es para vender, ya no es para llevar a los comerciantes» (Comunero de Vinchos).El cierre transitorio de las importantes ferias semanales de Secce, en Huanta, o la de Seqeslambras, en Accocro, Huamanga, son dos buenos ejemplos de esta pretensión de autarquía propuesta por el PCP-SL.

La segunda razón fueron las ejecuciones sumarias de autoridades y comuneros, previos «juicios populares», tal como sucedió en Huaychao, bajo las genéricas acusaciones de «soplonaje» o de «gamonales», a comuneros que expresaban su disconformidad o eran considerados «ricos» por el PCP-SL: «...si no hubieran matado cómo ya estarían...ellos se han ido a matar al campesino mismo, diciendo éste es terrateniente, éste es gamonal, el que tiene cinco, seis yugadas, ya era terrateniente. Y ellos lo mataban» (id.) A falta de gamonales o de terratenientes, cualquier autoridad o campesino con algunos recursos por encima del promedio justificaba el discurso de lucha antiterrateniente.

La tercera razón importante en este desencuentro fue el desconocimiento de las autoridades establecidas y la imposición de jóvenes autoridades para hacer acatar las directivas partidarias. Alcaldes electos, varayocs tradicionales, jueces de paz también comuneros, fueron sistemáticamente amenazados y, en muchos casos, asesinados por el PCP-SL.

Debemos recordar, asimismo, como hemos visto en todas las otras regiones, que la violencia se nutre en buena medida de los conflictos locales existentes, sobrepasando los mecanismos tradicionales de solución de los mismos con una nueva opción: el asesinato.

El ejemplo más conocido y trágico en esta Zona II lo representan las comunidades de las alturas de Huanta pues a la violencia que el PCP-SL desata contra esta población, se suma luego la de las fuerzas contrasubversivas y las rondas campesinas, generando las decenas de muertos registrados en la lista de nombres entregada a la CVR.

El manuscrito de un militante senderista expresa su presencia en la zona:

Desde 1981, Uchuraccay, Iquicha y Huaychao eran bases de apoyo donde existían ya pelotones de la fuerza local y unidades guerrilleras. Entre los combatientes de esta zona figuraba el compañero Severino, comisario del Comité Popular de Uchuraccay. Varias de nuestras compañías de la fuerza principal habían permanecido en esta zona por varios días. Desde aquí fueron nuestros combatientes a sacudir al soñoliento enemigo que dormían en los puestos G.C. de Huanta y de Tambo (Suni Puni, manuscrito senderista, 1985).

Aun cuando el manuscrito senderista podía magnificar la presencia del PCP-SL, es innegable que estuvieron en la zona jóvenes que en su mayoría venían de Huanta y Tambo. El mes de diciembre de 1982 el PCP-SL asesinó al presidente de la comunidad de Uchuraccay, Alejandro Huamán Leandro, y al presidente y teniente gobernador de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, éstos en plena plaza del pueblo acusados de representar el poder.

Pero casi al mismo tiempo que el Estado entrega la dirección de la lucha contrasubversiva al Ejército, las comunidades de la puna huantina actúan en respuesta al PCP-SL y el 21 de enero de 1983 reaccionan asesinando a siete senderistas en las comunidades de Macabamba y Huaychao; tal como dijimos anteriormente, era la primera acción de esta naturaleza, y el hecho trasciende los medios locales, especialmente por el reconocimiento público que hiciera el presidente de la república Fernando Belaunde, quien señaló esta respuesta campesina como ejemplo de patriotismo

y como el «resurgimiento de Ayacucho» frente a la «basura ideológica» del PCP-SL (El Comercio, 24.1.83:1). En Uchuraccay, 26 de enero de 1983, en medio de su enfrentamiento contra el PCP-SL, los comuneros asesinan a 8 periodistas, un guía, y a Severino Huáscar Morales Ccente, responsable senderista de la localidad. Fue el final trágico de la fatal asociación que los campesinos establecieron de los periodistas con el PCP-SL.

Frente a la estrategia del PCP-SL de liberar el campo desde mediados de 1982, amenazando, destituyendo, asesinando a las autoridades locales la policía se batía en retirada de las capitales distritales ante los ataques del PCP-SL. El ataque al puesto policial de Tambo, el 11 de octubre de 1981, muestra la deficiencia y debilidad de estos puestos policiales, conformados en su mayoría por seis miembros. Cinco meses después de este ataque, el 15 de mayo de 1982, el PCP-SL vuelve a asaltar Tambo, encontrando un pueblo sin vigilancia policial.

El panorama de abandono de puestos policiales tiene, en la región, su momento máximo en Vilcashuaman donde el 22 de agosto de 1982 el PCP-SL ataca el puesto, matando cuatro policías. En suma, entre 1980 y 1982, basándose en la red partidaria establecida desde años atrás especialmente a través de maestros rurales y estudiantes, la acción del PCP-SL se sujeta a una estrategia exitosa que combina amenazas y asesinatos, acciones de sabotaje y ataques a puestos policiales, con su labor política de organización de bases de apoyo en la mira de constituir Comités Populares, destruyendo para ello el sistema de autoridades locales existente y obligando a la policía, por su parte, a replegarse de las zonas rurales, que quedan así despejadas para el accionar de los grupos senderistas. Pero este despeje se enfrentó, en las alturas de Huanta, con el rechazo comunero a las columnas del PCP-SL, rechazo que se ampliaría luego a otras zonas y se traduciría en el surgimiento de las primeras rondas campesinas de la zona.

Ingreso de las FFAA: 1983-1984

El flamante jefe del comando político-militar de Ayacucho, el general Clemente Noel Moral, llegaría a la región con la idea compartida por los sectores «duros» del ejército de un Ayacucho «senderizado». Esta situación hizo que desde el principio los cambios en la lucha contrasubversiva fueran notorios. Muchos sintieron la humillación de la civilidad, como resume el testimonio de un docente de la UNSCH:

[...] el ejército llega y toma posición de las cosas, no pide permiso a nadie...¡identifíquese!...¡papeles!...¡Nadie me entra, nadie me sale de acá!, ¡esto se cierra! ¡Esto se bloquea! ¡todas las instituciones públicas al desfile!, ¡a la plaza de armas!...Te obligan a que vayas, pero vienes con tus papeles y que lo pide un soldado con pasamontañas y te impide el pase con una metralleta...¡soy presidente de la CORFA!...¡Papeles!...¡yo soy el alcalde! ¡papeles señor!...no tengo...(entonces) ¡no pasa!... un soldadito te puede cuadrar en la calle y tú con tu título de prefecto, de alcalde, de presidente de la CORFA no eres nada frente a ese soldadito... la autoridad civil se siente que ya no es autoridad civil...ahora es el comando político militar el que ejerce el gobierno, él te la hace sentir que él es el gobierno...(J. Camborda).

Desde la primera quincena del mes de enero de 1983 ocurrirían los primeros casos de detenidos-desaparecidos, práctica que después sería una constante. El ingreso de las fuerzas armadas en 1983 y la instalación del comando político militar cambiarán por lo tanto radicalmente la vida en la Huamanga y su región.

En Huanta, la infantería de marina —denominada «los navales» por la población local— bajo la dirección del comandante Vega Llona (asesinado por subversivos en 1988 en La Paz, Bolivia) se haría cargo del control de la zona el 21 de enero de ese año. Días después se conocería el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay, y tiempo después serían conocidas las víctimas de Pucayacu, Callqui o la desaparición del periodista Jaime Ayala, y en el área rural de Huamanga, ocurrirían las masacres de Acocro (en mayo y junio de 1983), Chiara (julio y setiembre. 1983), Socos (13 de noviembre de 1983), por mencionar las de mayor impacto público.

Una de las primeras medidas que los Infantes de Marina aplican es agrupar a los campesinos en núcleos poblados y organizarlos en Comités de Defensa Civil, al estilo de las «aldeas estratégicas» organizadas por ejército norteamericano en Vietnam y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de Guatemala. La comunidad de Pampacancha, en las alturas de Huanta, sirvió como campo de experimentación de esta estrategia. Un destacamento de doce infantes de marina se instala en la localidad y empieza a entrenar a los campesinos para que pudieran defenderse solos. En febrero de 1984, los «navales» consideran que Pampacancha está lo suficientemente bien organizada y se retiran para entrenar a otra comunidad. Sendero aprovecha de inmediato la oportunidad y ataca el pueblo, quema varias casas y asesina a 15 personas. Después regresa la Marina, y esta vez procede a instalar una aldea estratégica, obligando a comunidades vecinas como Huanccacancha, Sacsahuilca, Mutuypata, Culluchaca y Yanasaccay a dejar todas sus pertenencias e instalarse en Pampacancha. La medida provoca resentimientos y una resistencia pasiva entre los comuneros de estos pueblos, debido no solamente a la incertidumbre económica que implica, sino también a la profunda rivalidad que desde tiempo atrás existe entre estas comunidades obligadas a convivir.

Cuando los marinos se retiran nuevamente en abril de 1984, Sendero, con el apoyo de cientos de campesinos mal armados, lanza un nuevo ataque devastador contra Pampacancha, asesinando a 40 hombres y mujeres. Como consecuencia, la población concentrada en Pampacancha migra masivamente hacia el valle de Huanta. Mientras tanto, en las alturas de la provincia se agudizan aún más los conflictos intercomunales cuando la restante milicia pampacanchina, junto con los marinos, empieza una «caza de brujas» contra las comunidades supuestamente comprometidas con Sendero, incursionando en localidades vecinas.

Tratando de capitalizar el malestar generado por el estado de emergencia, el PCP-SL convocaría, a mediados de 1983, al primer «paro armado» de una larga serie que no tuvo el éxito esperado y el ejército permaneció imperturbable, sin reacción alguna. Mientras tanto, el impacto de la guerra en la zona se hace evidente también en el temor y la inseguridad para organizar las

elecciones municipales de 1983. Estas se realizarían sólo en Huamanga y en las provincias del sur (Lucanas y Parinacochas), arrojando el ausentismo electoral más elevado del país, situación que se mantendría por más de una década. En Huanta y en La Mar se prolongaría el mandato del gobierno local elegido en 1980. En Huamanga, saldría elegida la representante del Partido de Integración Nacional (PADIN), Leonor Zamora Concha, años después asesinada por paramilitares. Pero las acciones subversivas y los operativos contra subversivos han generado tal temor en la población que en noviembre de 1983 no se realizan elecciones en ninguno de los distritos de Huanta, ni siquiera en la capital provincial, como tampoco las hubo en los diez distritos de la vecina Huamanga.

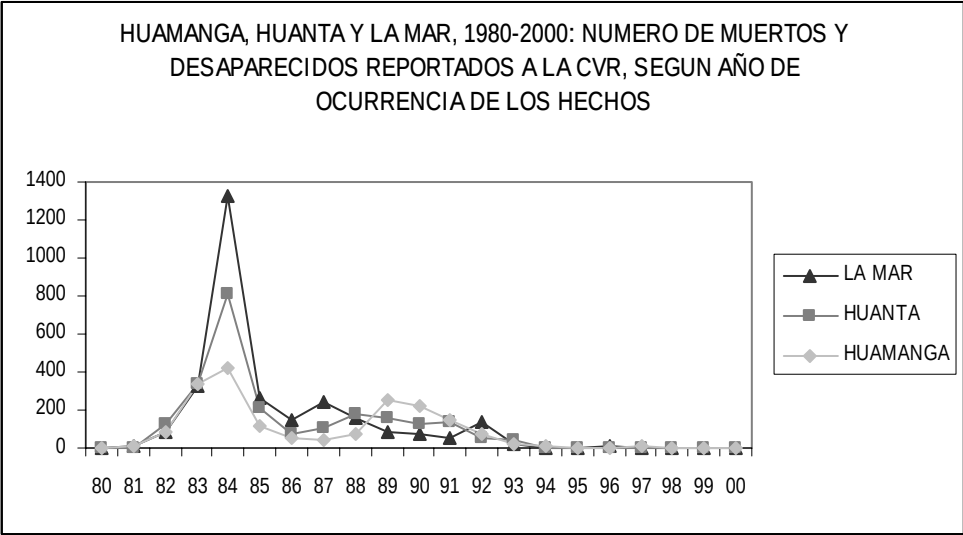
Mientras tanto, en las alturas de Huanta, el PCP-SL se ensaña con Uchuraccay e incursiona sangrientamente en esta comunidad en tres oportunidades: el 20 de mayo, el 16 de julio y el 24 de diciembre de 1983. En el primer ataque habrían muerto alrededor de 20 campesinos, en el segundo ataque otras 20 personas fueron asesinadas y en el tercer ataque, perdieron la vida 8 campesinos más. 135 muertos de 470 comuneros registrados en el censo de 1981, es decir, la tercera parte de la población de Uchuraccay fue asesinada por la acción violenta principalmente del PCP-SL y también las rondas de comunidades y pueblos vecinos.

En efecto, las rondas empezaron agresivas campañas de «rastrillaje» por toda la zona buscando senderistas, lo que en el lenguaje de los ronderos de Vinchos se empezó a llamar «busqueo». Las rondas de Ccaccas, Ccanis y Patasucro, en las partes altas de la ciudad de Huanta, así como las de Tambo, Balcón, Qarhuapampa, Acco, Challhuamayo y Qarhuahurán, entre Huanta y Tambo, son ejemplos de que la arremetida de las FFAA. fue de la mano con el crecimiento de las rondas campesinas en 1984.

A la estrategia de «batir el campo» del PCP-SL, que implica su enfrentamiento a autoridades y a cualquier forma de organización existente, se sumó la acción indiscriminada de las instituciones militares, que organizan patrullas punitivas contra la población rural sospechosa de simpatizar con el PCP-SL apoyando a sus columnas armadas sumamente móviles. Según algunos testimonios, data del 20 de mayo de 1983 el asesinato de cerca de 80 campesinos en San José de Secce, en el distrito de Santillana; que habrían sido previamente secuestrados por efectivos de la Marina, a quienes los testimoniantes designan como responsables de estos muertos.

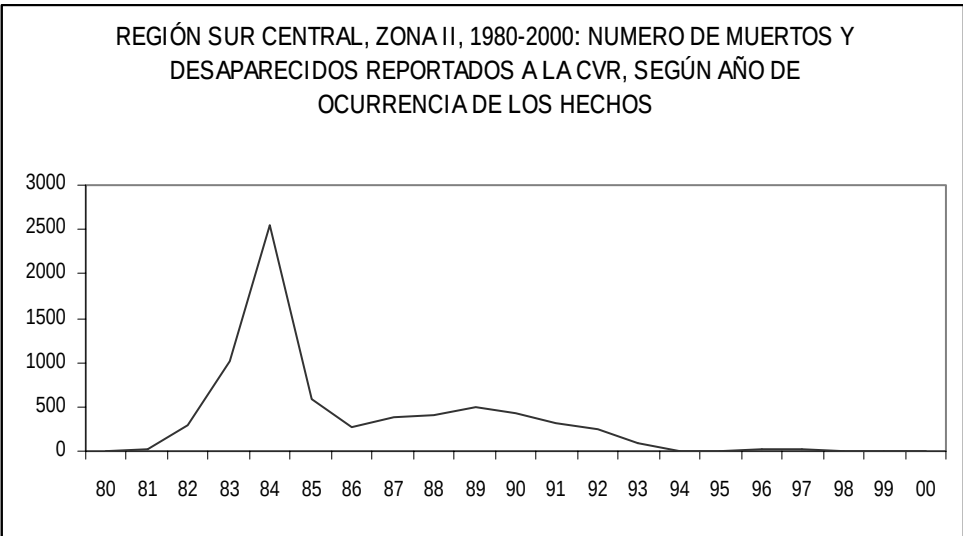
Por su parte, el PCP-SL se ve obligado a enfrentar a estos ronderos mal armados dispuestos a todo y sus comunidades, muchos de los cuales habían sido sus bases de apoyo originales. En 1984 las agresiones contra las autoridades aumentan, entre ellas se cuenta el secuestro y desaparición por la Marina del alcalde de Iguain, Víctor Cordero, así como el asesinato del alcalde del distrito de Huamanguilla, Juan Contreras Marmolejo, ahorcado por Sendero el 22 de abril de 1984, en la plaza principal del pueblo, junto con el juez de paz. De la misma manera, el alcalde del distrito de Santillana, Alberto la Rosa, es asesinado por el PCP-SL el 28 de julio de 1984, junto con Juan Contreras ex - alcalde del mismo distrito.

1983, y sobre todo 1984, han quedado registrados como los dos años donde se constata la mayor cantidad de asesinatos de civiles en las provincias de Huanta, Huamanga y La Mar, convirtiéndolas en uno de los escenarios de mayor intensidad de la conflicto armado interno en todo el departamento de Ayacucho, como consecuencia del accionar insurgente del PCP-SL y la respuesta represiva indiscriminada de las FFAA, entre 1983 y 1984.



REGIÓN SUR CENTRAL, ZONA II, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	4,643	4	11	210	717	1,476	345	135	207	234	402	335	288	195	53	8	3	6	10	3	-	1
HUAMANGA	1,834	2	5	83	337	415	111	52	43	67	243	216	144	71	23	8	2	1	7	3	-	1
HUANTA	2,032	2	3	117	295	713	174	67	90	137	139	104	119	46	21	-	1	1	3	-	-	-
LA MAR	777	-	3	10	85	348	60	16	74	30	20	15	25	78	9	-	-	4	-	-	-	-



Las cifras reúnen, entre 1981 y 1984, en las provincias de Huanta, Huamanga y La Mar, la misma cantidad de muertos que en todos los años restantes del ciclo de violencia en la región. Más aún, la provincia de Huanta presenta la mayor cantidad de muertos de todo el departamento de Ayacucho y por ende de todas las provincias del país entre 1980 y 1984, de la misma manera que es la provincia con mayor número de muertos en todo el período investigado por la CVR, 1980-2000. En ese ciclo de violencia, aunque Huanta encabeza la lista de provincias afectadas cabe observar, sin embargo, la ofensiva desplegada por el ejército y la respuesta senderista en la provincia de Víctor Fajardo en 1983, que conduce a la mayor cantidad de víctimas civiles entre todas las provincias ayacuchanas de aquel año. Sin embargo, a diferencia de Víctor Fajardo en donde el número de muertos disminuye drásticamente en 1984, en Huamanga, Huanta y La Mar los muertos aumentan significativamente aquel año. Podemos afirmar que la represión indiscriminada, constatable en el aumento significativo de muertos, se explica en buena medida por la carencia de una estrategia definida y eficiente que ahorrara la vida de civiles inocentes.

El conflicto armado interno obliga a miles de personas a desplazarse fuera de sus comunidades, tal como vimos en los datos demográficos al inicio del capítulo. El desplazamiento de pueblos enteros cambia el paisaje rural, vaciando de población a muchas zonas, e incrementa significativamente la población de Huanta y Huamanga, sin descontar los miles de emigrantes que se desplazan a Lima, Huancayo o Huamanga.

La CVR ha realizado investigaciones específicas de eventos acaecidos en 1984 en esta zona, especialmente en Huanta: el asesinato de 6 jóvenes pertenecientes a la Iglesia Evangélica Presbiteriana, en el «pago» de Callqui, el 1 de agosto de 1984. al día siguiente 2 de agosto, el secuestro y desaparición en la base de la Infantería de Marina acantonada en el Estadio Municipal, del periodista huantino Jaime Ayala Sulca, corresponsal del Diario «La República» y algunos días después, el 23 de agosto, el descubrimiento de 49 cadáveres enterrados en fosas en Pucayacu, algunos kilómetros al norte de la ciudad de Huanta, todos ciudadanos detenidos previamente en el Estadio de Huanta por la Infantería de Marina, y luego trasladados en una suerte de «caravana de la muerte» a territorio perteneciente a la provincia de Acobamba, Huancavelica, donde fueron asesinados masivamente entre el 16 y 19 de agosto de 1984.

La represión indiscriminada pretende ser acompañada con el apoyo a la formación de rondas campesinas de autodefensa. En el mes de agosto de 1984, el nuevo jefe del comando político-militar, el general andahuaylino Adrián Huamán Centeno, participaría de una reunión en Vinchos que congregaría aproximadamente a ocho mil campesinos provenientes de 44 comunidades que se habían organizado en rondas campesinas.

Rondas campesinas, Montoneros, DECAS (Ver Estudio de la CVR sobre Rondas)

La iniciativa de las Fuerzas Armadas de formar aldeas estratégicas, impulsada en 1983, no prospera, y ante la presión de formar Comités de Defensa Civil muchos jóvenes prefieren emigrar

masivamente a otros lugares más seguros. Pero las agresiones del PCP-SL y las amenazas de las patrullas militares revierten esta resistencia hacia la conformación masiva de CAD's en las tres provincias de esta Zona II. En otros estudios de la CVR se cita el ejemplo de Ccarhuapampa, en las afueras de la ciudad de Tambo, donde en noviembre de 1983 se agrupan refugiados procedentes de diez comunidades alto andinas. Desde el comienzo, Ccarhuapampa se organiza alrededor de su Comité de Defensa Civil, CDC, que no sólo establece un rígido sistema de vigilancia, sino se preocupa por el desarrollo de la naciente comunidad, emprende la lotización del terreno (la «urbanización») e implementa las normas sociales necesarias para la convivencia. El pueblo está organizado según una lógica militar; el CDC restringe la movilidad de la población, expidiendo pases y las trasgresiones a las normas son sancionadas con castigo físico.

El ejemplo de Vinchos y distritos contiguos muestra el proceso con mayor claridad: a partir de 1984, los campesinos que en un inicio simpatizaban con Sendero empiezan cambiar su simpatía por la organización de CAD's por varias razones. La primera es que Sendero restringe la movilidad de la población sin dejar salir a nadie previa autorización. La segunda se origina en el retiro de la primera generación de mandos, reemplazados por jóvenes locales, sin formación política, que empiezan a mezclar la lucha por el «nuevo poder» con intereses personales (hemos señalado varias veces que la ola de violencia a partir de 1983 no se deja entender sólo con la lógica senderista, sin tomar en cuenta los conflictos locales, que se fusionan con la lucha armada senderista y obtienen una nueva dimensión, violenta y sanguinaria). La tercera explicación de la oposición al PCP-SL también ha sido mencionada y es la más contundente: los asesinatos de autoridades comunales y campesinos de mayores ingresos. En resumen, los nuevos mandos senderistas no respetan ni a las autoridades comunales, su blanco principal, ni los mecanismos tradicionales para solucionar conflictos sin atentar contra la vida. En Vinchos, como en otras partes, se produce una mezcla entre «guerra popular», lucha contrainsurgente, ajuste de cuentas, abigeato y robos comunes.

A fines de 1984, entonces, encontramos que en estas provincias del norte de Ayacucho, el campesinado organizado en rondas contrasubversivas desbarata las formas de organización impuestas por el PCP-SL, tal como el manuscrito del senderista Suni Puni reconoce en 1985:

En tan corto tiempo estas bandas han desaparecido a miles de personas despoblado muchos distritos. En todos los caminos que controlan hacen difícil el tránsito de personas desconocidas. Han aniquilado decenas de comités populares e igualmente a cientos de compañeros de masa. Debido a esto se han perdido muchas bases de apoyo y el 90 por ciento de nuestros combatientes han desertado o caído en manos del enemigo. La fuerza local se ha debilitado, muchos de sus pelotones han entregado al enemigo sus responsables y se han pasado a las filas de las bandas paramilitares. ... La plaza fuerte paramilitar de la zona es el que tiene en Socos Vinchos, cuyo seno guarnece por lo menos a 800 montoneros, los cuales de tiempo a tiempo azuzan [sic] a los demás grupos vecinos a cazar senderistas empleando un cerco al que han denominado 'Busqueo (Suní Puni, ms. Militante del PCP-SL)

Los distritos ayacuchanos de Vinchos y San José de Ticllas, así como Santo Tomás de Pata en Huancavelica fueron considerados a inicios de la década de 1980 como «zonas rojas» pero, al igual que lo sucedido un año atrás en la alturas de Huanta, a partir de 1984 los mismos campesinos que en un inicio simpatizaban con Sendero empieza a formar sus primeras organizaciones contrasubversivas. La situación en el valle de San Miguel era exactamente la misma, como reconoce Suni Puni, hablando de un campamento de ronderos en ese valle, que el PCP-SL ataca, sufriendo una grave derrota:

Porque era y, es hasta hoy el núcleo paramilitar de la zona. Desde aquí partieron cientos de montoneros y capturaron decenas de compañeros de masa y, más de una vez sorprendieron pelotones guerrilleros a los cuales tras haberlos desarmado y golpeado lo entregaron al enemigo. Desde Pillo partieron las mesnadas a organizar más grupos paramilitares en Ninabamba, Magnopampa, Llacuapampa, etc. conquistando así bases de apoyo para el enemigo que dormía en San Miguel y Chacco.

Cambios en la estrategia de las FFAA: 1985-1987

Mientras las rondas campesinas se expanden rápidamente en los espacios rurales, el PCP-SL mantiene sus acciones en la ciudad de Huamanga. El 11 de abril de 1985 un comando senderista incursiona en el comedor universitario anunciando un paro armado para los días 13, 14 y 15 de abril, haciendo un llamado a los estudiantes para que apoyen el boicot a las elecciones presidenciales. Pero, en general, entre 1985 y 1987 el conflicto armado interno en la región se reduce en intensidad. Tras la victoria aprista y en medio del cambio de gobierno, y tras los errores en la estrategia contrasubversiva que significaron las masacres de Parco, Umari y Accomarca, en la zona del Pampas, la flamante administración de Alan García decidió destituir al jefe del comando político militar de la región. Esta situación generó cierto malestar ocasionando un repliegue militar en determinadas zonas controladas por las FFAA. y un cierto desgano por parte de su Estado Mayor, ante el recorte de sus prerrogativas. La Marina se retiraría de Huanta, y el ejército optaría por una represión mucho más selectiva, buscando cierta aproximación con la población y sus autoridades, y apoyando con decisión a las rondas campesinas. Por su parte, el PCP-SL expandiría su accionar en otras zonas del país, trasladando para ello algunos de sus cuadros fuera del ámbito regional ayacuchano.

Varios factores contribuyen a que, entre los años 1986 y 1988, se produjera una relativa calma en Ayacucho. Por un lado, el PCP-SL significativamente el número de sus acciones en el departamento, debido a la decisión tomada en el IV Pleno de su Comité Central de expandir la guerra a toda la sierra del país, y como consecuencia de la arremetida de las FFAA y de las rondas que habían afectado seriamente sus bases de apoyo. Por otro lado, en julio de 1985 se retira la Infantería de Marina y es reemplazada por el Ejército, que aplica una represión más selectiva y busca cierto acercamiento a la población. Además, el relevo de varios generales de alto nivel después de las matanzas de Accomarca y Pukayacu produce «un gran desconcierto dentro de las FFAA» (Tapia 1997: 41) y un «cierto desgano del Estado Mayor... en la acción contrasubversiva»

(Degregori y Rivera 1993: 12). En otras palabras, los militares se retiran a los cuarteles y el PCP-SL aprovecha para lanzar una nueva ofensiva en búsqueda del «equilibrio estratégico».

En las elecciones municipales de 1987, IU se alzaría con la victoria en la provincia de Huamanga y el APRA lo haría en Huanta y en La Mar. Como es de esperarse, las nuevas autoridades municipales de los principales centros urbanos se convertirían en blanco privilegiado del PCP-SL, aunque las acciones violentas en el campo hayan disminuido ostensiblemente. En Huanta, el recién electo alcalde provincial Yangali, fue asesinado por subversivos, que posteriormente asesinarían a un regidor. El 3 de diciembre de 1987, miembros del PCP-SL asesinan al sacerdote Víctor Acuña Cárdenas mientras celebraba una misa en la iglesia de la Magdalena, en Huamanga, acusándolo de negociar alimentos donados para Caritas.

Intensificación de la conflicto armado interno 1988-1991

En 1988 asumiría la jefatura del comando político-militar el general José Valdivia Dueñas. Las relaciones con las autoridades civiles volvieron a endurecerse y surgiría un nuevo actor en el ya intrincado panorama del conflicto armado interno: el comando Rodrigo Franco. Por su parte, el PCP-SL convocaría ese año a otros dos «paros armados», uno en julio y el otro en noviembre. El hartazgo de la población ante una guerra prolongada y sin resolución, empieza a hacerse cada vez más evidente, ya que la paralización de las actividades, a veces por semanas enteras, afectaba la exigua economía local. Al no contar con electricidad, los pequeños industriales, los empleados públicos, los talleristas, los artesanos, las amas de casa, se vieron directamente afectados. Este malestar de la población inesperadamente pareciera haber sido sintonizado por el comando político-militar, el cual, en un afán de contrarrestar al PCP-SL, empieza a convocar a «falsos paros armados», repartiendo volantes en los que se hacían llamados a paralizar todas las actividades. Esto causaría una inmediata reacción del PCP-SL:

Por enésima vez el llamado Frente Huamanga decretó un falso paro armado para los días 25-26 de octubre, pero, una vez más, el tiro les salió por la culata, pues nuestro pueblo sabe muy bien cuando es el PCP el que convoca a los paros y cuando son los reaccionarios los que montan estúpidas patrañas...en los volantes fraguados que hicieron circular hay cacacenadas que sólo podridos cachacos aprendices en el manejo de guerra sicológica podrían vomitar... (Volante del PCP-SL).

Asimismo, pomposamente se anunciaba que se encontraban ya en una fase superior de la «guerra popular», el llamado «equilibrio estratégico». Por esta razón, entre los meses finales de 1989 y los primeros de 1990, en una importante coyuntura electoral, se lanzarían a boicotear las elecciones, desplegando para ello su ofensiva en las áreas urbanas y rurales. Por su parte, las rondas campesinas, cada vez más numerosas, también intensificarían su accionar empantanando las actividades del PCP-SL, obligando a las columnas de subversivos a replegarse sobre las áreas urbanas.

Las rondas vivirían una segunda experiencia de enfrentamientos sostenidos entre 1989 y 1990, años que coinciden con pésimas cosechas por razones climatológicas, acentuando el rechazo a las columnas del PCP-SL que pretenden obtener su manutención del apoyo campesino.

En marzo de 1988 un grupo de desconocidos detonan bombas al interior de la universidad; en julio del mismo año la universidad aparece embanderada con estandartes en los que se leía «Comando Rodrigo Franco – CRF». Estas acciones marcarán el inicio de las de una creciente actividad de comandos paramilitares en la ciudad de Huamanga, actividad que se tornará más agresiva entre 1988 y 1991.

En 1988, como dijimos, el PCP-SL lanza una nueva ofensiva. Había realizado su primer congreso y llegado a la conclusión de que era el momento de dejar atrás la primera etapa de la «guerra popular», aquella de la «defensiva estratégica», declarando el tránsito hacia una nueva y superior etapa de «equilibrio estratégico». Esta segunda etapa de la guerra tendría que contar con mayor participación del campesinado, por lo cual se incrementan las presiones sobre las comunidades campesinas y se desata una nueva ola de violencia.

El 3 de julio de 1988 es nombrado como obispo auxiliar de Ayacucho Juan Luis Cipriani, quien poco a poco adquirirá cierta influencia en la vida política del departamento y mantendrá una posición justificatoria de la violación a los derechos humanos, avalando con sus palabras y omisiones los numerosos asesinatos cometidos por aquellos grupos «paramilitares» que continúan sus operativos, los cuales conducen entre 1989 y 1991 al registro del mayor saldo de víctimas de los tres estamentos universitarios de la UNSCH, particularmente por la acción de estos grupos de militares encubiertos, aunque el PCP-SL también se responsabiliza de algunos otros, como el asesinato el 29 de mayo de 1989, en pleno dictado de su curso en la Universidad, del abogado Marcial Capeletti, uno de los dirigentes del entonces gobernante Partido Aprista, así como del Alcalde provincial de Huamanga, Fermín Azparrent, abaleado mortalmente por el PCP-SL en setiembre de 1989.

Mientras los agentes de inteligencia y los grupos del PCP-SL asesinan selectivamente en la ciudad, a fines de 1989 existían, en todas las provincias norteñas de Ayacucho, rondas campesinas contrasubversivas activas, mientras que al sur de ellas, los pueblos de las provincias de Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y Huancasancos se mostraban más reacios a hacer lo mismo, tal vez por haber sido, en muchos casos, bases de apoyo para Sendero. En Vilcashuaman, el primer Comité de Defensa Civil se formó recién en 1988 bajo presión del Ejército y se ganó una mala fama por los numerosos abusos que cometió.

La lista de asesinados por grupos «paramilitares» es extensa: el 26 de junio desaparecen los hermanos estudiantes José Carlos Mansilla (Ingeniería de Minas) y Alexander Mansilla (Educación), hijos de un docente de la UNSCH; el 28 de octubre son dinamitados los locales de la residencia, el comedor universitario, el tópico de salud universitario, además de once unidades de transporte y los equipos de la imprenta; el 27 de noviembre asesinan en su domicilio al abogado

Hugo Luna Ballón, ex asesor legal y docente de la UNSCH. El 28 de enero de 1990 es asesinado por el PCP-SL el trabajador no docente Tomás Evangelista Carranza, el cual pertenecía al Partido Aprista y, como Capeletti, había ejercido un cargo de confianza en la Corporación de Desarrollo de Ayacucho. Los agentes encubiertos responden con el asesinato, el 21 de julio, de Fernando Colonio, abogado que trabajaba para la Universidad, quien había realizado una serie de denuncias sobre violaciones a los derechos fundamentales de parte de las fuerzas del orden; tres días después, el 24 de julio, es asesinado en similares circunstancias Ciro Aramburú, jefe de Bienestar Universitario de la UNSCH. Aquel año, las elecciones presidenciales se realizaron en medio de una serie de amenazas y paros armados organizados por el PCP-SL en su intento de boicotear el proceso electoral, agudizando el clima de incertidumbre y de violencia.

Los operativos de grupos vinculados a los servicios de inteligencia no se detienen en Huamanga: en julio de 1991, en pleno mediodía y en el centro de la ciudad, es asesinado el periodista Luis Morales Ortega por militares de civil, quizás los mismos que el 19 de julio de 1991 realizan una operación encubierta en el domicilio del docente universitario Francisco Solier García, asesinado junto con su esposa y su hijo con armas con silenciadores. A los dos días del asesinato de Solier, aparecen sin vida los cuerpos de Mariscote Santa Cruz y Leoncio Espinoza, ambos estudiantes de la especialidad de Obstetricia, secuestrados una semana antes; el 12 de octubre desconocidos asesinan al estudiante Antonio Huacache Chávez; el 19 de octubre es asesinado Camilo Fernández Flores, estudiante de la Facultad de Educación; el día 23 se produce un atentado contra Juan Luis Pérez Coronado, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales; el abogado docente de la UNSCH Hugo Luna muere abaleado en noviembre y el 21 de diciembre de 1991 es asesinada en la puerta de un centro educativo, igualmente por agentes militares de civil, la ex-Alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha, quien laboraba como docente en la especialidad de Servicio Social de la UNSCH.

Final de la violencia: 1992-2000

En la sierra de La Mar, el final del ciclo de violencia puede fecharse a fines de 1989 e inicios de 1990, cuando los ronderos de Río Apurímac «suben» a los distritos serranos de la provincia y permanecen un año en Tambo organizando y apoyando a las rondas lugareñas. Por su parte, a inicios de 1990, la ciudad de Huanta estaba relativamente pacificada gracias a la acción de los comités de autodefensa, mientras que entre los años 1990 y 1991 tanto las acciones de Sendero como del Ejército se concentraron, como hemos visto, en Huamanga.

En 1992 la actividad subversiva comienza a decaer, los paros armados paulatinamente dejan de ser acatados y en septiembre de 1992 es capturado Abimael Guzmán junto con dirigentes nacionales del PCP-SL; posteriormente, parte de la dirección de la organización subversiva se compromete a un ‘acuerdo de paz’ con el gobierno de Alberto Fujimori y se produce la división interna en el PCP-

SL; todos estos hechos explican la significativa reducción de la conflicto armado interno en Huamanga, plenamente instalados los CAD's con el apoyo de las fuerzas militares.

Huamanga, Huanta 1981-2000. Número de CADs

UNIDAD	ÁREA	Nro. CAD	Nro. Personas
BIM Nro. 51	Huanta	465	44,295
BIM Nro. 02	CHuamanga	669	69,864

A principios de los años noventa, la impresión generalizada era que el PCP-SL se había retirado de Ayacucho y actuaba con intensidad en otras regiones del país como el Huallaga, Junín y Lima. De hecho, sus acciones, a pesar que continuarían, ya no tenían el efecto paralizante de años anteriores. Apenas en la zona de Viscatán, en la selva del Río Apurímac, Oscar Ramírez, «Feliciano», desacata el acuerdo de su dirección y sostiene la posición de continuar con la guerra contra el Estado.

Tras la captura de Abimael Guzmán, surgieron espontáneamente reacciones que en años anteriores hubieran resultado temerarias: «...en 1993 en los carnavales...hay una comparsa, de palomilla donde hay un borracho, el borracho es un hombre vestido de rayas, barbón...otro es un vestido de militar, después un cura y después una Monja. En la comparsa ese vestido de rayas era Guzmán» (docente UNSCH).

Cronología

Zona II: Las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar

1982/03	Ataque al penal en la ciudad de Huamanga por el PCP-SL.
1982/03	Ataque al puesto policial en Luricocha
1982/09	Asesinato de los hermanos Nieto Cisneros en Matara, Accocro por el PCP-SL
10/9/1982	Entierro multitudinario de senderista Edith Lagos en Huamanga
1982/11	Asesinato 4 personas en Uchuraccay por el PCP-SL
1982/12	Asesinato de doce pobladores de Pumahuasi (Rumichaca) Santillana por el PCP-SL
1982/12	Asesinato de doce personas en Ccarhuaurán, Santillana, PCP-SL
1982/12	Asesinato de Alejandro Huamán en Uchuraccay por el PCP-SL
1983/01	Asesinato de ocho senderistas por pobladores de la comunidad de Huaychao
26/1/1983 .	8 periodistas de diarios nacionales y un guía son asesinados por comuneros en Uchuraccay, Huanta.
1983/05	Arrasamiento de Matará, Accocro, por miembros del EP,. quemaron casas, asesinaron torturaron y desaparecieron a aproximadamente 25 personas
1983/05	Asesinato de 4 comuneros en incursión del PCP-SL en Huaychao
1983/05	Asesinato de 7 personas en Huantaccasa por el PCP-SL
1983/06	Asesinato de 14 personas en Accocro a manos del PCP-SL
1983/07	Asesinato de 20 comuneros en Sachabamba, Chiara , por el PCP-SL
1983/07	Asesinato de 19 pobladores en Iribamba, Luricocha por los Sinchis-GC
1983/08	Asesinato de 5 comuneros en incursión del PCP-SL en Huaychao
1983/08,	Asesinato de pobladores de Uchuraccay
1983/09	Asesinato de 10 comuneros de Bellavista, Chiara, por el PCP-SL

1983/09	Asesinato 5 de autoridades comunales por el PCP-SL en Cayramayo, Santillana, Huanta
1983/09	Ejecuciones extrajudiciales de 13 comuneros de San Pedro de Pampay, Luricocha, por policía y efectivos de la marina de guerra.
1983/11	Muerte de 32 personas perpetrada por miembros de la GC de Socos, Huamanga.
1984/02	Incursión y asesinato de pobladores en Carhuac, Santillana, por parte de la Marina
1984/04	Asesinato de 32 pobladores de Huarapite, Chiara por miembros del ejército
1984/06	Detención, tortura y desaparición de pobladores de Ticllas, por EP 08 desaparecidos y 02 liberados.
1984/06	Ataque del PCP-SL al puesto policial de Huamanguilla
1984/07	Enfrentamiento del PCP-SL con ronderos de Trigopampa, San José de Ticllas; mueren 02 ronderos
1984/07	En Incapampa, San José de Ticllas, el PCP-SL asesina a 10 personas
1984/07	Asesinato del director del colegio estatal San Ramón, Huamanga
1984/07	En Pacucro, Huamanguilla, más de 40 personas asesinadas por el PCP-SL
1984/07	Asesinato del alcalde de Huamanguilla, juez de paz y otros por el PCP-SL
1984/07	Asesinato de tres personas en una comunidad de Marccaraccay, Santillana, por el PCP-SL
1984/07	Desaparición de Ramón Vicaña, Sebastián de la Cruz y seis pobladores de Macachacra, Iguain por marina de guerra
1984/07	40 personas asesinadas por el PCP-SL en Ccanis
1/8/1984	6 jóvenes pertenecientes a la iglesia evangélica presbiteriana son asesinados por la marina en el «pago» de Callqui, Huanta. Al día siguiente 2 de agosto, desaparece en la base de la infantería de marina acantonada en el estadio municipal, el periodista huantino Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario «La República».
23/8/1984.	Se descubren 49 cadáveres de detenidos por la base de la marina de Huanta, enterrados en fosas en Pucayacu, Huancavelica.
1984/08	Asesinato de más de 40 pobladores (48 aprox) en Pampacancha por el PCP-SL
1984/10	En Huayllay, Luricocha, militares desaparecen a 04 y asesinan a 06 campesinos
1984/10	Secuestro y desaparición de 22 comuneros de Callqui alta, Iguain
1985/07.	Asesinato de 7 pobladores en Pampay, Luricocha, por militares que incursionan durante supuesta reunión del PCP-SL
1985/08	Asesinato de 15 pobladores en Huarcatan
1986/07	Fosas comunes descubiertas en Ayahuanco
1987/07	Muerte de 5 comuneros en Putis, distrito de San José de Santillana.
1987/12	Asesinato del alcalde de Huanta, Víctor Raúl Yangali Castro por el PCP-SL
1988/07	Desaparición de cinco personas en Musuccllaccta por militares de Ayahuanco
1988/11	Asesinato del periodista Hugo Bustios Saavedra en Huanta por EP
1989/01	Asesinato de la familia Farfán Gonzáles en Huamanga
1989/06	Asesinato colectivo de 7 personas en Isccana, Luricocha, Huanta, por el PCP-SL
1989/07	Asesinato mas de 20 pobladores en Mutuyccochoa, Iguain por el PCP-SL
1989/09	Asesinato del alcalde provincial de Huamanga, Fermín Azparrent Taipe, por el PCP-SL
1989/09	Asesinato de Isaac Salvatierra y del alcalde Juan Pando Prado, en Ccaccamarca, Ocros, por el PCP-SL
1989/10	SL asesina en Sallalli, Vinchos, a 10 comuneros
1989/10	Muerte de 12 personas en Huayllay, Luricocha, por el PCP-SL
1989/11	Muerte de 5 senderistas por EP en Palmayocc, Luricocha
1989/11	Asesinato de Hugo Luna Ballon, abogado UNSCH, por el PCP-SL
1989/11	Asesinato de 22 campesinos, ronderos y autoridades por el PCP-SL en Paccha, Vinchos.
1990/01	Asesinato de 48 comuneros en Acosvinchos por el PCP-SL
1990/05	Arrasamiento en la localidad de Yahuarmachay, Ayahuanco; 47 personas asesinadas

	por miembros del EP
1991/01	En San Pedro de Cachi, Santiago de Pischa asesinato por EP de 18 personas.
1991/07	Asesinato de periodista Luis Antonio Morales Ortega, en la ciudad de Huamanga, por militares.
1991/07	Asesinato de pobladores de Quinua por rondas campesinas de Quinua y otras rondas
1995/08	Enfrentamiento entre el PCP-SL y el CAD de Quispincancha, Iguain.

1.1.7. Zona III: el valle del río Apurímac

El valle del Río Apurímac pertenece, en su margen izquierda, al Departamento de Ayacucho y en la derecha al de Cuzco, razón por la cual hemos incluido los distritos de Vilcabamba y Quimpiri, pertenecientes a éste último, en el proceso de violencia de este espacio selvático dominado por cultivos mercantiles como café, cacao y, sobre todo, coca. Al igual que en la zona del Huallaga, el Río Apurímac atravesó una historia compleja de violencia donde el narcotráfico aparece como telón de fondo, aunque con una importancia menor que en aquella región. En la historia de violencia del valle del Río Apurímac (VRA), además de las fuerzas armadas y los grupos senderistas, se reconoce como actor principal a los Comités de Defensa Civil, CAD's o DECAS, ronderos o «montoneros», a los cuales el PCP-SL llama «mesnadas», reconociéndolos, desde 1985, como el principal enemigo de su proyecto de expansión.

Como se afirma en el estudio realizado por la CVR sobre los CAD's, en ningún otro actor de la guerra, la línea divisora entre perpetrador y víctima, entre héroe y villano es tan delgada y tan porosa como en los Comités de Autodefensa. Pacificadores para unos, asesinos para otros, son inquietud para todos: la Defensoría del Pueblo, los ministerios de Defensa y del Interior, el PAR, el Congreso donde se han presentado varios proyectos de ley, y para sus víctimas que aún buscan justicia y familiares de ronderos caídos que reclaman indemnización.

Datos generales

El Valle del Río Apurímac (VRA) tiene antecedentes coloniales de colonización y producción cocalera, especialmente hacia el norte de la provincia de Huanta, donde a inicios del S. XIX, se ubicaban, en diferentes quebradas, decenas de propiedades productoras de coca en lo que era territorio de la Intendencia de Huamanga. Igual sucede hacia el sur, en Chungui, donde igualmente se registran numerosas propiedades cocaleras coloniales.

Pero la colonización más importante nos remite a emigrantes de la sierra ayacuchana desde la primera mitad del S. XX, pero sobre todo desde la década de 1950, siguiendo el eje Huamanga / Huanta hasta Tambo, punta de carretera cuya feria importante irá «descolgándose» hacia la selva conforme la carretera avance hasta llegar al pueblo-puerto de San Francisco, sobre el mismo río Apurímac, en la década de 1960. A diferencia de la cuenca del Huallaga, ocupada por emigrantes de muchas regiones del país, la colonización del río Apurímac es hecha principalmente por campesinos provenientes de las provincias del norte ayacuchano, que prolongan de esta manera un espacio cultural homogéneo.

El dinamismo económico del Río Apurímac contrasta con la limitada capitalización y débil articulación de la mayor parte del espacio serrano ayacuchano, tierra de comunidades estancadas en su crecimiento y limitadas a actividades agropecuarias poco productivas, salvo algunos bolsones ganaderos, como Huancasancos, por ejemplo.

La colonización estatal de Pichari en la década de 1960 y la carretera desde Tambo hasta el puerto de San Francisco, abierta en 1964, aceleraron el proceso de ocupación del valle por colonos campesinos ayacuchanos cuyas propiedades son mayores en extensión que las disponibles por las familias campesinas en la sierra. Esta ocupación desplazó a la población originaria ashaninka río abajo del Apurímac, hacia el río Ene, y también la diluyó a través del mestizaje aunque en el valle aún persisten comunidades nativas, pequeñas y con reducido territorio. El puente de San Francisco, el principal poblado de la zona en la década de 1970, inaugurado en 1971, incrementó la ocupación de la margen derecha, territorio del departamento de Cuzco, donde se encuentra la colonización de Pichari.

El VRA está dividido entre distritos de la provincia de Huanta (Llochegua y Sivia), otros de la provincia de La Mar (Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco y Chungui), algunos de los cuales se prolongan hasta la puna, por lo tanto la población residente en el valle es menor, y los distritos de Quimbiri y Vilcabamba, de la provincia de La Convención, en Cuzco. Todos estos distritos mantienen desde tiempo atrás una relación dinámica con la parte baja del valle, donde disponen en muchos casos de parcelas familiares e incluso comunales, como es el caso de Chungui, Chiquintirca, Anchiuay, Punqui, Huayllaura.

Población del Río Apurímac 1983-1991

	1983	1991
Total Ayacucho	503392	492507
<i>Provincia Huanta</i>	76074	64503
Distrito Sivia		18001
<i>Provincia La Mar</i>	74455	70018
Distrito Ayna	13752	8607
Distrito Sta Rosa		9930
Distrito San Miguel	22056	19520
Distrito Anco	10821	11618
Distrito Chungui	8257	4338
	54886	54013
Total Cuzco	832504	1028763
<i>Provincia La Convención</i>	106228	157240
Distritos Quimbiri+Vilcabamba	14570	40518

Un tercio de la población de la provincia de Huanta residía en 1990 en la selva del Apurímac, mientras que en La Mar, donde se confunden los residentes en las alturas serrana con aquellos del valle, la proporción es con seguridad mayor. El aumento de población en la margen derecha, perteneciente al departamento del Cuzco, se refleja en el crecimiento de la participación de los distritos de Quimbiri y Vilcabamba en la población total de La Convención, que se incrementa de 14% a 26% en el período intercensal.

En el valle se cultiva café, cacao, frutas y coca, esta última de manera creciente desde los años ochenta. Es la zona agrícola más dinámica de Ayacucho, por ende la de mayor crecimiento demográfico, con un campesinado estrechamente vinculado al mercado y casi en su totalidad proveniente de las provincias serranas ayacuchanas.

En el VRA, la ocupación del territorio desde la segunda mitad del S. XX también permitió el surgimiento de amplias concesiones de tierra, como la hacienda Teresita o la de Luisiana del ex – diputado Parodi, de AP, convertida en base de la Marina de guerra en 1983.

Presentaremos en estas páginas al distrito de Chungui como un espacio que tiene particularidades en relación con el resto del valle, ocupando tres pisos ecológicos básicos, el valle del Pampas, el territorio alto andino y la selva del Río Apurímac, entre los cuales se desplaza su población desde tiempos muy antiguos, trabajando parcelas en la selva con café, cacao, maní y, en las últimas décadas cada vez más coca. El norte del distrito de Chungui, zona de comunidades tradicionales, se distingue del sur del mismo distrito, zona comúnmente llamada «Oreja de Perro», donde las haciendas fueron, hasta 1965, el rasgo distintivo.

Contexto antes de 1980

Desde mediados de la década de 1960, momento en el cual se iniciaría el boom del café en la zona, se produciría un masivo y sostenido flujo migratorio de campesinos serranos, los que en su mayoría, casi sin ningún tipo de planificación ni control estatal, empezaron a ocupar tierras «libres».

En el VRA, habitaban poco más de 100000 habitantes en 1980, aunque debemos señalar que la población flotante es igualmente numerosa pues se trata del principal espacio de captación de mano de obra, empleando temporalmente a miles de migrantes transitorios en épocas de apañe de cultivos, sobre todo la coca, que ha reemplazado al café como cultivo principal.

Con la creciente colonización de la zona, se incrementarían también los flujos comerciales, dando lugar al surgimiento de una capa de comerciantes intermediarios y también a sus arbitrariedades con la población campesina. En un intento por frenarlas, se constituyó en 1975 una Asociación de Pequeños Agricultores y en 1979, la Federación Campesina del Valle del Río Apurímac (FECVRA), la que se convertiría en una de las más grandes e importantes organizaciones sociales de todo el departamento de Ayacucho, llegando a agrupar a más de cien bases hasta 1983, momento en que se desactivó, atrapada entre el terror y la violencia represiva, tanto del PCP-SL como de la Marina.

Por su parte, el escenario particular del distrito de Chungui está marcado por dos eventos importantes. El primero de ellos fue la guerrilla de 1965, dirigida por un grupo del ELN encabezado por Héctor Béjar. La visión sobre la guerrilla del 65 cobró fuerza en los jóvenes — sobre todo en los hijos de los ex feudatarios de las haciendas— y posteriormente empataría con la imagen que el PCP-SL proyectaba en la zona. El segundo hecho, que afectó de forma indirecta la

zona conocida como «Oreja de perro», fue la toma de tierras en Chincheros y Andahuaylas en 1974, cuyo antecedente más importante es la muerte en Ongoy de 20 campesinos en la década de 1960 (véase la historia de la violencia en la zona VI de Andahuaylas).

En el distrito de Chungui existieron Chapi, Cunaywa, Sarabamba y Ninabamba, haciendas cañavereras y de aguardiente de caña explotadas en condiciones en donde el poder económico y político se concentraba en manos de los hacendados, estando los campesinos obligados a prestar sus servicios personales gratuitamente, a cambio del acceso a parcelas de tierras. La guerrilla de 1965 trastocó definitivamente este orden de cosas en la provincia de La Mar, y el proceso de apropiación de las tierras se aceleró con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Muchos ex feudatarios se convirtieron en comuneros de comunidades campesinas nacies, como Tastabamba, Ninabamba, Soccos, Sonccopa, Pallqas, siendo la más grande de ellas la comunidad campesina de Chapi, hoy llamada Belén Chapi.

Salvo los terrenos en la yunga, prolongación de algunas comunidades serranas como Chungui,, no existen comunidades campesinas en este espacio del VRA donde la inmensa mayoría de los colonos destinaron los esfuerzos de su economía familiar a cultivos mercantiles que han tenido ciclos de precios fluctuantes: las curvas de precios del barbasco o kube, ajonjolí, café, cacao, frutales, coca signan el devenir de esta Zona, pero debemos destacar que el valle del Río Apurímac fue, desde la década de 1970, un territorio de creciente cultivo de coca, crecimiento que no se detuvo con el inicio de la conflicto armado interno sino que, por el contrario, aumentó las actividades de narcotráfico en la región, de manera paralela a la instalación del PCP-SL y al posterior desarrollo de los CAD's.

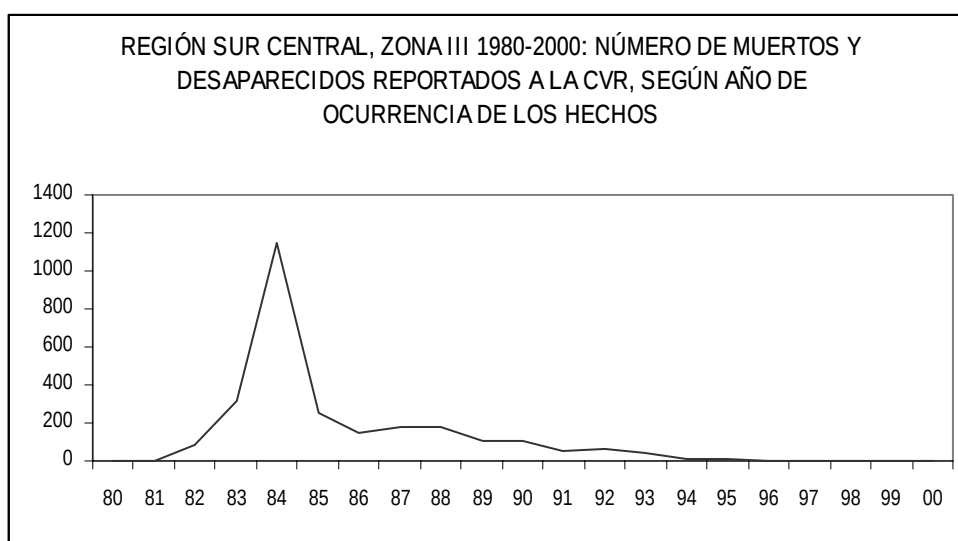
Pero los colonos del VRA aunque inmersos en otra dinámica económica que las de sus comunidades de origen, igualmente prolongaban sus expectativas por la educación como vía fundamental para la movilidad social. La educación, al igual que en otras zonas del departamento, se convirtió también en demanda central, más aún en aquellos espacios que habían sido territorios de haciendas opuestas a la instalación de escuelas, como el distrito de Chungui. Así, además de crear escuelas primarias, la comunidad de Chungui decidió solventar en 1978 la creación del colegio secundario Túpac Amaru II, donde enseñarían profesores formados en la UNSCH, y en el cual también, desde un inicio, trabajaron como docentes algunos estudiantes universitarios senderistas, quienes preparaban a los jóvenes para el inicio de la lucha armada. Igual sucedió en el colegio comunal secundario en Orongoy, creado en 1978 por iniciativa de un joven de la comunidad que había estudiado en Andahuaylas.

En suma, también en el VRA la creación de escuelas en la década de 1970 fue muy importante para el trabajo de organización y adoctrinamiento previo del PCP-SL, como se constata en los estudios realizados por la CVR en Huancasancos y la zona del Pampas-Qaracha.

Historia del conflicto armado interno

REGIÓN SUR CENTRAL, ZONA III, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	2,704	1	4	80	320	1,149	252	143	181	178	109	101	48	63	42	7	14	5	4	1	2	-
HUANTA	329	-	-	7	43	98	33	2	12	42	19	24	14	4	26	-	1	2	1	-	1	-
SIVIA	255	-	-	7	33	76	13	1	12	39	7	23	13	3	26	-	-	1	1	-	-	-
LLOCHEGUA	74	-	-	-	10	22	20	1	-	3	12	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-
LA MAR	2,145	-	4	72	242	973	198	134	164	131	64	56	23	55	13	3	5	3	3	1	1	-
SAN MIGUEL	541	-	2	4	64	266	51	21	25	64	8	8	10	12	-	-	3	2	1	-	-	-
ANCO	332	-	2	12	19	221	16	14	10	24	-	9	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
AYNA	217	-	-	4	27	75	28	13	9	9	10	14	4	10	6	3	2	-	2	1	-	-
CHUNGUI	746	-	-	47	102	273	78	76	110	21	30	5	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA ROSA	309	-	-	5	30	138	25	10	10	13	16	20	5	29	7	-	-	-	-	-	1	-
LA CONVENCION	230	1	-	1	35	78	21	7	5	5	26	21	11	4	3	4	8	-	-	-	-	-
KIMBIRI	51	1	-	-	-	9	5	3	1	3	8	6	2	4	-	4	5	-	-	-	-	-
VILCABAMBA	95	-	-	1	2	64	14	2	3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PICHARI	84	-	-	-	33	5	2	2	1	2	9	15	9	-	3	-	3	-	-	-	-	-



El inicio de la violencia: 1980-1982

El VRA no fue prioritario para el PCP-SL durante los años iniciales de su insurgencia. A mediados de julio de 1982, la FECVRA decidió incursionar directamente en la comercialización de los productos del valle, buscando romper el monopolio de los grandes comerciantes. En medio de esa situación es que aparece por primera vez en la zona un pequeño grupo de jóvenes militantes del PCP-SL, buscando establecer vínculos locales, organizando reuniones y participando en asambleas en las que explicaban sus ideas. Podría afirmarse que los conflictos con los grandes comerciantes generaban un ambiente propicio para la receptividad del discurso senderista pero se trata de un escenario con una economía dinámica y en constante búsqueda de mercados, por lo tanto la idea de «hambrear las ciudades» esgrimida recurrentemente por el PCP-SL en esos momentos —que implicaba bloqueo de caminos y voladura de puentes— resultaba desconcertante ante los campesinos del VRA.

El 29 de octubre de 1982, un grupo de subversivos asaltó y saqueó en Santa Rosa el almacén de uno de los principales acaparadores de kuba, dándoles a los grandes comerciantes la

mejor oportunidad para achacar la autoría a la FECVRA a fin de perseguir y encarcelar a sus dirigentes. Poco tiempo después, en Machente sería volado el puente Tutumbaru e incendiado un vehículo de la FECVRA que transportaba productos de sus socios.

El apoyo, o si se quiere la aceptación pasiva que Sendero logró al inicio de su lucha armada entre amplios sectores del campesinado ayacuchano, probablemente no se debe a una posición clasista antigamonal ya que como mencionamos anteriormente la mayoría de hacendados de La Mar había abandonado sus fundos incluso antes de la reforma agraria, sino al trabajo proselitista de jóvenes universitarios y maestros rurales encargados en preparar el campesinado para la lucha armada. Fue entonces -una vez más- el circuito educativo el punto de partida para la organización partidaria del PCP-SL en esta zona.

Sabemos que en menos de dos años de «guerra popular» habían conseguido «batir el campo» de los representantes del «viejo estado», primero la policía, proverbialmente abusiva y corrupta, y después las autoridades políticas, con el consentimiento de una población tradicionalmente olvidada por los gobiernos de turno. Esta aprobación inicial es reconocida por los mismos dirigentes que después encabezarían la lucha contrasubversiva del campesinado, muchos de los cuales estaban, en esta primera etapa, comprometidos con Sendero.

El circuito educativo fue, como siempre, el punto de partida para la organización partidaria del PCP-SL en esta zona. Al igual que los casos de Huancasancos y el valle del Pampas, el inicio del PCP-SL en Chungui se dio a través de la formación de jóvenes en el colegio y en la escuela. Las autoridades tradicionales son cuestionadas por los jóvenes y ello conduce, en una asamblea comunal en noviembre de 1983, al castigo público de algunos jóvenes senderistas.

Entre 1980 y 1982, en la zona del VRA, las acciones de violencia política son escasas y poco significativas si las comparamos con lo que sucedería un año después. Estas acciones casi se concentraron en amedrentar autoridades. Debemos reconocer que, desde el inicio de las acciones violentas de los grupos del PCP-SL, se originó el rechazo a su presencia en muchas comunidades colonas de la selva.

La policía de la base de Illahuasi de Andarapa ingresa a Mollebamba, en Chungui, donde toman presos a 7 comuneros. Con esta incursión logran «expulsar» a los senderistas de Mollebamba y forman un sistema de vigías. Este grupo de vigías junto con los policías iniciaron incursiones en la zona de la «Oreja de perro» entre 1982 y 1983, previniendo a los comuneros de no aliarse con el PCP-SL. En 1982 ingresaron a Oronqoy, considerada base de apoyo del PCP-SL, reunieron a toda la comunidad en la plaza y frente a ellos asesinaron a Valerio Flores, líder del grupo subversivo en la localidad.

El hecho más sonado de esta reacción violenta contra el PCP-SL ocurrió en las punas de Huanta, en enero de 1983, cuando los comuneros de Huaychao mataron a golpes a siete senderistas en respuesta al asesinato de sus autoridades comunales. En febrero del mismo año se produce la «sublevación» de Sacsamarca contra el PCP-SL, en la cual los comuneros, hartos de los abusos de

los mandos senderistas, los emborrachan y los matan a puñaladas y pedradas (*Ver: Estudio de la CVR*).

El 27 de septiembre de 1982 se produce un asalto al puesto policial de Erapata, en el distrito de Vilcabamba, en el Cuzco, en el cual según el comunicado oficial de la policía «27 elementos terroristas armados» destruyen el puesto policial y dan muerte al guardia Luis Chávez Ordóñez, hiriendo gravemente al Cabo Manuel Yataco Ramírez. En este tramo del Río Apurímac, en el mismo distrito de Erapata, la GC informará sobre casi dos años después sobre su enfrentamiento el 30 de abril de 1984 con una columna de senderistas, en el cual murieron un sargento de la policía y 22 subversivos, y la policía detuvo a 10 mujeres y 15 varones. Lo peor sucedería en esta zona, desde el año siguiente, en el poblado de Lucmahuayqo, también sobre la margen derecha del río, donde diversas incursiones de ronderos, militares y policía lo convierten en pocos años en un poblado totalmente desierto.

Mientras el PCP-SL aplicaba su consigna de «batir el campo», las fuerzas del orden respondían con la estrategia de represión indiscriminada en algunos poblados. Los conflictos entre poblados alimentan los arrasamientos, como sucede con Erapata contra Lucmahuayqo, base de apoyo senderista.

Por otro lado, a fines de 1982, miembros del PCP-SL provenientes de Chapi, San Miguel, se harían presentes en las comunidades de Chiquintirca y Anchiuay, en Chungui. Al comienzo se acercaron a la población para informarle sus planes. Sin embargo, cuando las autoridades se negaron a colaborar y a dejar su lugar a los nuevos comisarios senderistas, empezaron los asesinatos y la población empezó a huir.

El ingreso de las Fuerzas Armadas: 1983

Con la designación del Comando político-militar, en enero de 1983, las provincias de Huanta y La Mar son asignadas a la Infantería de Marina. Desde el momento que toman el control de la región, la actitud de los «navales» es la de una profunda desconfianza hacia los campesinos cuya idiosincrasia es incomprensible. Una de las primeras medidas que los Infantes de Marina ensayan es agrupar a los campesinos en núcleos poblados y organizarlos en Comités de Defensa Civil, al estilo de las «aldeas estratégicas» organizadas por ejército norteamericano en Vietnam y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de Guatemala, pero fracasa en este intento inicial por los innumerables inconvenientes que tenía esta propuesta para las familias campesinas que valoran los aspectos negativos de los reagrupamientos: alejarse de las chacras familiares, exponerse a represalias senderistas, carecer de servicios, hacinarse.

En algunos casos la represión militar tiene efectos contrarios, generando mayor apoyo al PCP-SL. Así sucede por ejemplo luego de múltiples asesinatos cometidos en setiembre de 1983 en varios centros poblados y caseríos de Sivia (Boca Mantaro, La Unión, Pacífico, Canayre Alta,

Canayre Baja, Villa Virgen y Portillo) que impulsa a muchos pobladores a vivir en el monte, donde son agrupados por el PCP-SL.

Mientras tanto, la FECVRA empezó a ser vista con mucha desconfianza por «los navales», llegando a ser tildada de «fachada senderista», y desatándose una abierta persecución contra los dirigentes que aún quedaban en el valle. En agosto de 1983 es asesinado en la hacienda Luisiana, base principal de la Marina, el dirigente máximo de la Federación Campesina del Valle del Río Apurímac, FECVRA, Julio Orozco Huamani. El principal gremio del valle quedó así descabezado y dejó de ser actor en la zona, a pesar de haber llegado en años anteriores a reunir más de 100 bases en el valle con el objetivo de obtener mejores precios en la comercialización de café y cacao, principalmente.

En el transcurso de 1983, las acciones de «los navales» obligaron a los miembros del PCP-SL a replegarse hacia Santa Rosa y a las comunidades al norte del valle, situación que aprovechan los comuneros de Chiquintirca, Anchihuay y anexos para organizarse en su contra. En Santa Rosa el ejército empezó a concentrar a la población de las alturas en la zona del valle, mientras que el PCP-SL aceleraba el enrolamiento masivo y el «cierre de territorios» con pueblos que formarían la «masa» de sus comites populares. En Llochegua y Sivia, provincias actuales de Huanta, la situación fue similar.

En el primer semestre de 1984, ocurren los asesinatos masivos, de parte de las fuerzas del orden y ronderos, de los pobladores de Lucmahuayqo, en la margen derecha del Apurímac, a pocos kilómetros río arriba del poblado de Quillabamba, de donde partiría la columna de «montoneros» un año después, al mando del capitán «Vic» (también nombrado como «Mayor Rick»), hito central en la masificación de los CAD's del VRA. Lucmahuayco fue arrasado por constituir, según los ronderos de Inkawasi, «un poblado senderista» y quedó en abandono total hasta el retorno recién el año 2000 de algunos sobrevivientes. Este ejemplo muestra la presencia senderista en la margen derecha del Apurímac, frente al distrito de Chungui, en poblados que pertenecen a la provincia de La Convención pero están plenamente articulados al VRA ayacuchano, como Lucmahuayqo.

La oposición al PCP-SL era un obstáculo que debía ser barrido por ello el 15 de diciembre de 1983 una columna senderista ingresó a la comunidad de Santa Carmen, en Chungui, asesinando a 9 personas. Luego en el anexo de Marco ejecutó a un campesino acusándolo de gamonal y repartiendo sus bienes. Las columnas senderistas buscaban «ajusticiar a los «soplones» que se habían comprometido con la organización de vigías, que generalmente eran las autoridades de la comunidad, es decir los comuneros de mayor edad. La eliminación de «gamonales» y «gamonalillos», según las definiciones senderistas, implicó que en la totalidad de comunidades y anexos del distrito de Chungui se produjo al menos un asesinato sea de una autoridad o de una persona que tuviese más animales que el promedio, acusándolo de gamonal.

La presión militar y los abusos del PCP-SL generan el rechazo creciente de la población del VRA, por ello cuando los «montoneros» de la sierra bajan a la selva en 1984 para «organizar» a la población contra Sendero, encuentran a un campesinado dispuesto de aliarse con ellos.

Como muestra de la complejidad de escenarios de la guerra podemos contrastar la masificación de los CAD's en casi todo el VRA, salvo parcialmente en el sur, en la zona de «Oreja de perro», donde el PCP-SL desplaza sus columnas y «su masa campesina» hacia el «monte», en lo que llamaron «retiradas».

El «nuevo estado» del PCP-SL y las «retiradas: 1984-1985

En el VRA, al igual que en toda la region ayacuchana, el PCP-SL logró montar una sólida red de bases de apoyo con las cuales sustentaba a sus columnas móviles. La información disponible para el VRA sobre estas bases de apoyo es más confusa y fragmentada que en otras zonas de la región, posiblemente porque la memoria local está marcada por la acción de las DECAS o CAD's, dueños casi totales del espacio del VRA desde 1985. El mismo accionar de muchos CAD's se explica por la existencia previa de bases de apoyo a las columnas senderistas, bases que se «voltean» contra el PCP-SL ante la presión militar, la de los CAD's y por los mismos abusos senderistas.

El PCP-SL establece, al igual que en la zona del río Pampas, algunos campamentos importantes, destacando el denominado «Sello de Oro» en la zona de Simariva del distrito de Santa Rosa. Allí organiza «su masa» de campesinos según su concepción de «nuevo estado». Lo mismo decide hacer, ante la presión de militares y ronderos campesinas, desde febrero de 1984 en Chungui, organizando «retiradas» de diferentes localidades. Las «retiradas» consistían en desalojar el centro poblado y refugiarse en los cerros y en el monte de la ceja de selva, en zonas de difícil acceso. En otras palabras, el PCP-SL traslada sus «bases de apoyo» radicalmente, para evitar su arrasamiento. Esta situación es comparable a la ocurrida con algunas bases del PCP-SL entre la población ashaninka, en la selva central, igualmente «retirada» hacia el monte para evitar los operativos militares (véase el estudio de la CVR sobre los ashaninkas y capítulo VI de la historia de la Región Central). La gente de la *Oreja de Perro* vivió en retiradas, dispuestas por el PCP-SL, entre tres y cuatro años, organizados en una suerte de «comunidad perfecta» en la cual todos vivían juntos, se ayudaban y compartían los bienes que tenían: «Todos vivíamos en el monte en armonía...» (Grupo focal mujeres, Oronqoy). La jerarquía senderista es la misma que en todas las regiones: la dirección local, la Fuerza Principal (FP), la Fuerza Local (FL) y la *masa*, compuesta en este caso por la población de las localidades que fueron organizadas en «retiradas». Esta vida armónica duró hasta que la falta de alimentos y las presiones internas del PCP-SL sobre la «masa» empezaron a ser cada vez más críticas, por lo que las ejecuciones al interior del PCP-SL se intensificaron.

A diferencia de la parte norte de Chungui, la zona de «Oreja de perro» había sufrido la incursión de los sinchis de Andarapa que, desde 1982, ingresaban esporádicamente a la zona para

supervisar el funcionamiento del sistema de vigías, desaparecido en la mayor parte de las comunidades con las ejecuciones que el PCP-SL realizó en 1983, salvo en Mollebamba donde continuaron funcionando hasta que se convirtieron en CDC.

Cuando los militares incursionaron con mayor fuerza en la zona de «Oreja de Perro», hacia fines de 1985, la vida en zonas de «retirada» del «nuevo estado» senderista se volvió muy dura e inestable. Un número no despreciable de comuneros huidos con las columnas del PCP-SL al monte, logró escapar a las ciudades, con mayor frecuencia desde 1986, aprovechando algún descuido de los mandos que los tenían muy bien vigilados, especialmente en la época de sequía, cuando se puede cruzar el río con mayor facilidad. Otros grupos que escapaban eran atrapados por los militares, y los que se entregaban pacíficamente y «colaboraban» eran liberados y podían migrar hacia Andahuaylas. También se registra el caso de un campamento con 20 personas, en Tastabamba, que escapó junto con sus mandos hacia Ongoy. Paralelamente, la estrategia de los militares empezó a cambiar y la orden fue rastrear toda la zona sin matar a nadie. Ello favoreció aún más las deserciones del PCP-SL.

El caso de los poblados de la margen derecha, en distritos cusqueños, muestra por su parte algunas particularidades. Los organismos de DDHH de Cuzco han recogido testimonios que afirman que en Lucmahyacco los muertos acumulados en el proceso de violencia suman 120 personas. Al parecer convertida en Base de apoyo y luego Comité popular del PCP-SL, Lucmahuaycco debió enfrentar las arremetidas de poblados vecinos, en una dinámica resumida por Maria Pantoja, dirigente del PCP-SL actualmente presa en Yanamayo: «(En Lucmahuaycco) creo que ahí la situación es que el partido organizó poder en las zonas, estaban las masas organizadas en el Comité Popular y ha habido una lucha cruenta en los años 83, 84, de los restablecimientos y contra-reestablecimientos»

Según los testimonios recogidos, la organización de las bases senderistas en Vilcabamba es posible por la presencia de militantes procedentes de la margen ayacuchana del Apurímac, que realizan trabajo proselitista en Incahuasi, Lucmahuayco, Erapata y otros poblados hasta lograr la constitución de una ZL; «de Jatumpampa bajaba hasta Amaybamba y era una zona liberada», dice un sacerdote que ha trabajado en la zona:

Esas comunidades cercanas como la comunidad de Soncco, de Jatumpampa, la comunidad de Amaybamba sintieron que ahí había un poder totalmente diferente del poder comunitario, y que ahí se estaba instalando un sistema de vida que en el cual los ciudadanos o los comuneros no tenía nada que hacer, era un sistema totalmente tiránico, dictatorial, propio de Sendero...llega sendero luminoso y construye una especie de comité popular y se vale del combate al abigeato en esta zona (Padre Pandera).

En Lucmahyacco se repiten procesos que encontramos en todas las zonas de conflicto armado interno, como la reacción contraria de la población ante el asesinato de sus autoridades, la mortal combinación de la violencia con conflictos intercomunales e interfamiliares, la imposición de un «nuevo orden» por el PCP-SL, las tensiones intercomunales, etc. Cuando el ejercito y los

CAD's emprendieron su ofensiva en el lado ayacuchano desde 1985, la margen derecha servirá de vía de escape, estrategia conocida en las «retiradas» organizadas en Chungui:

Cruzaban el río y era mucho mas fácil defenderse en esta otra parte que es no tan rocosa como la zona de Ayacucho sino que tiene también vegetación en la cual ellos podían incluso sembrar maíz para alimentarse...

Hemos tenido incluso la presencia de un contingente de la zona de Ayacucho de Sendero...en la zona donde había un grupo de mujeres en esa época no se el 85, el 86, un poco mas el 87, se rescataron algunas mujeres que estaban que eran ayacuchanas y que estaban en la zona convenciana, decían que las habían traído que estaban en sus campamentos flotantes cocinando, incluso algunos niños (Padre Panera).

Poblados como Incahuasi, Choquetira, Amaybamba, Jatumpampa, Erapata, luego de reaccionar contra la presencia de militantes del PCP-SL, integran una red de autodefensa que arremete contra el poblado de Lucmahuaycco, el Comité más importante del PCP-SL en el distrito de Vilcabamba. Al parecer, estos grupos de autodefensa surgen por iniciativa de las mismas comunidades, sin ingerencia de militares o policías.

La instalación de BCS

Entre 1984 y 1988 se registra la etapa más cruel y sangrienta de la guerra en la selva del Río Apurímac, por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que realizaron tanto las patrullas militares y los mismos ronderos de los CAD's, así como los destacamentos del PCP-SL. Por ejemplo, el primer presidente del comité de defensa civil de Chungui fue Maurino Quispe, quien fue asesinado en 1985 por orden del Capitán «Samuray» junto con su vice-presidente, José Jaycuri, bajo la acusación de ser «senderistas encubiertos». Como hemos dicho, la instalación de bases militares fue un elemento crucial para el retroceso senderista. Así, en la comunidad de Chungui se estableció la base militar en 1984, que dependía de Ayacucho, mientras que en Mollebamba se estableció la base militar en 1985, dependiente de Apurímac. En San Francisco, Santa Rosa, Pichari, Llochegua, Luisiana, y varios poblados más se instalan BCS, de diferentes dimensiones, que tienen la iniciativa militar frente a las columnas móviles del PCP-SL, tratando de imponer a veces la «militarización» de la vida cotidiana como sucede con la base militar en Chungui, que obligó desde 1984 a la población que no se había «retirado» con el PCP-SL, a concentrarse en el pueblo, restringiendo la salida a la selva y a las ferias. Incluso, la población en un primer momento debía dormir en la base, que era el local municipal.

La marcha de los «montoneros», la expansión de los CAD's

Pero las comunidades en «retirada», bases del PCP-SL, ocupan un espacio menor en Chungui frente al conjunto del VRA, cuya historia de conflicto armado interno está signada por los CAD's. Los testimonios concuerdan en señalar que las bases militares impulsaron, casi desde el momento de su instalación, la organización de CAD's, logrando que algunos de los antiguos senderistas se

pasen del lado de los militares, tal como sucedió en Mollebamba, como hemos mencionado anteriormente.

Las matanzas y el arrasamiento de los pueblos abarcaron todo el VRA, y en algunos distritos, como Chungui, casi no existe comunidad o anexo que no haya sufrido alguna incursión combinada de militares y CAD' s, con su secuela de robo de bienes y animales, ejecuciones y quema de casas. En la zona de Oreja de Perro, se dio un especial grado de violencia entre los ronderos, asesinando a los presuntos senderistas que encontraban en el monte. Al norte de Chungui el nivel de violencia en sus anexos fue menor comparativamente, lo cual no quiere decir que no hubieron torturas ni ejecuciones extrajudiciales. La guerra se convirtió en el VRA en algo natural donde el castigo al enemigo, sea de la naturaleza que fuere, estaba permitido.

La iniciativa de organizar CAD' s provino, en el VRA, de comunidades de los distritos de Anco y Chungui, hacia el sur del valle: Anchihuay, Chiquintirca y Quillabamba son sindicados como los primeros poblados donde los comuneros deciden defenderse de los «extraños» y se organizan en «montoneras»: «... la primera ronda se ha organizado en Quillabamba, en la selva por el lado de Anco, la comunidad de la selva ha venido a nuestra comunidad de la sierra y a la fuerza nos han organizado».

Desde esta zona, entre el norte del distrito de Chungui y el sur del vecino distrito de Anco, los «montoneros» organizaron una marcha siguiendo el curso del valle río abajo, a la cual se unieron cientos de campesinos en el camino. Dirigidos por un militar que, con el tiempo, se ha convertido en un personaje mítico en el valle, el Mayor —algunos dicen Capitán— «Vic» o «Rick», la marcha de los comuneros baja por el río Apurímac incontenible:

Ya mas o menos por el mes marzo, abril, mayo ya había un rumor de que los montoneros estaban viniendo, vienen como hormigas desde Chungui. La gente nos decía que los montoneros ya estaba en Lechemayo, dicen que en dos semanas van a estar acá. Después nos decían dice ya están cerca por Monterrico y Anchihuay, que han formado el primer sede de defensa civil, han nombrado el primer sede en Lechemayo, segunda sede han nombrado en San Antonio, tercer sede van a nombrar en Monterrico(Nimas Meneses)

Esta «marcha», convertida casi en epopeya por la memoria de los lugareños, llega hasta la ciudad de San Francisco, la principal del VRA. En el recuerdo de los pobladores de San Francisco está grabado el día, 10 de noviembre de 1984, cuando los militares reunieron a toda la población en el aeropuerto de Quimbiri. En el segundo piso de una casa colindante se encontraba el mayor «Vic» con una persona encapuchada, obviamente un senderista capturado. Todos tenían que pasar en fila, y los supuestos colaboradores de Sendero, señalados por el encapuchado, fueron separados, entre ellos Nimas Meneses quien después fue liberado debido a la intervención de algunos vecinos.

Hemos estado sesenta ahí tendidos, de los cuales cincuenta y nueve se lo llevaron para Luisiana, donde estaba la base de los lince. Han llegado solamente veinte o treinta personas y el resto muertos, flotando en el río de noche pasarían. ... Ese es Vic, el mayor

Vic, su nombre no sé, él es el que hizo esos estragos en el valle del río Apurímac (Nimas Meneses).

Los testimonios resaltan, por lo tanto, la presencia decisiva de los militares desde el mismo inicio de las rondas campesinas contrasubversivas y si bien las primeras organizaciones de autodefensa podrían haber sido espontáneas en el VRA, el crecimiento y la expansión de los CAD's fue un proceso apoyado, y muchas veces dirigido, por los militares, como se puede constatar en numerosos testimonios recogidos de todas las provincias ayacuchanas

La llegada de los «montoneros» a Pichiwillca —centro poblado a pocos kilómetros de Palmapampa— marca un hito en la organización campesina contrasubversiva. Es aquí donde se constituye formalmente, el 21 de junio de 1984, la «Defensa Civil Contrasubversiva» (DECAS) del Valle del Río Apurímac, y desde Pichiwillca se inicia -con Antonio Cárdenas, quien después se convertiría en el líder indiscutido de la organización- su expansión a todo el valle. Pichiwillca y Palmapampa son dos poblados en los cuales muchos pobladores estuvieron vinculados directamente con la red de acopio de coca y producción de pasta básica para compradores de carteles del narcotráfico.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de los ronderos son un tema escasamente tratado y, por otro lado, las población todavía no están dispuestas a hablar sobre el tema, pero son numerosas las denuncias contra la DECAS, de la mano con su «mala fama» entre algunos sectores de la población. Hasta la actualidad, se encuentra opiniones muy controvertidas en relación con las DECAS. Ellos mismos mantienen un discurso en el cual se auto atribuyen una contribución decisiva a la pacificación, «los militares solos no hubieran hecho nada», dice Ungarico Salazar, Comando «Chanco», de Quimbiri; en cambio, en entrevistas con pobladores que no estaban directamente involucrados con la autodefensa encontramos posiciones mucho más críticas y contrarias (Ver Estudio de la CVR sobre CAD's).

A pesar de -o quizás debido a- estos métodos, las DECAS fueron la primera milicia campesina que logró constituir una red de organizaciones que abarcaba toda una región, en este caso el valle del Río Apurímac. Hacia mediados de 1985, Sendero estaba en pleno retroceso y las Fuerzas Armadas y DECAS habían logrado el control del valle. Cabe resaltar el papel jugado en algunos poblados por fieles evangélicos que jugaron un rol especial en la conformación de CDC, sobre todo en la zona de Anchiuay.

Aparte del apoyo de los militares (que en los años subsiguientes disminuiría debido al descontento con la política contrainsurgente de Alan García), un factor importante fue la alianza temporal de las DECAS con narcotraficantes que pagaron cupos. Cabe recordar el boom del precio de la coca y sus derivados ilícitos entre 1984 y 1986.

Los cupos no solamente les permitieron a los ronderos comprar armas mucho antes de que Alan García o Fujimori les entregaran escopetas sino que les permitieron formar grupos de ronderos especializados, a tiempo completo, nombrados como los «rentados». Pero todo indica que la

alianza con los narcos sirvió exclusivamente para la autodefensa. Ninguno de los comandos entrevistados por la CVR muestra signos de prosperidad; al contrario, la guerra ha perjudicado severamente su economía.

En 1985, los mismos senderistas reconocen su derrota ante las «mesnadas» en el VRA:

«En las dos márgenes del río Apurímac...descubriremos las bandas más numerosas y de sumo peligro. Estas bandas han nacido el mes de julio del año pasado (1984) y casi la mayoría en enero de 1985. Han crecido con demasiada rapidez dado a la mayor concentración de tropas que el enemigo realizó en la zona el año pasado y...se hayan muchas personas de la clase acomodada y narcos. Casi todos los poblados de esta vasta zona a partir de 1983 a 1984 eran nuestras bases de apoyo...Pero al sentirse el peso del enemigo las bases de apoyo no consolidadas se derrumbaron para convertirse en bases de apoyo del enemigo. Como principales plazas fuertes de las bandas en la zona figuran Punqui, Chungui, Monterrico, Pichihuilca, San Agustín, Lechemayo, Palmapampa, el anexo de Quillabamba, Santa Rosa, San Francisco, Quimbiri, Sivia, Llohegua, Rosario, Quintabamba y Machente... Por lo menos los montoneros de esta zona suman aproximadamente 15,000». (Suní Puni, ms. de senderista).

Este virtual ejército campesino de CAD's tiene, según el mismo escrito senderista, ventajas decisivas que se resumen en:

1. Las bandas apoyadas por el ejército conquistan a sangre y fuego nuestras bases de apoyo...
2. Muchos compañeros pesimistas se pasan a sus filas con pelotón y todo...
3. Los ex guerrilleros bandidos conocen nuestros refugios por eso las operaciones BUSQUEO de las mesnadas son muchas veces exitosas...
4. Las fuerzas del EGP en las zonas enemigas ya no pueden transitar...ya no pueden aprovisionarse de víveres y vestido...
5. Las mesnadas controlan todas las carreteras de la región... (Ibid.).

Este analista de la derrota del PCP-SL reconoce que:

Los montoneros se están tomando justicia por propia cuenta. El pillaje, el saqueo y los múltiples asesinatos de inocentes acusados de guerrilleros o simplemente enemigos personales de los comandantes bandidos son las características de las bandas paramilitares (Ibid.).

La máxima violencia: 1986-1989

Hasta mediados de 1985 las DECAS y el ejército estuvieron a la ofensiva, mientras que el PCP-SL se batía en retirada. Las DECAS se multiplicaron y lograron un progresivo control del valle. Luego de los sucesos de Accomarca, en Vilcashuaman, la flamante administración de Alan García destituyó al jefe del comando político militar de Ayacucho, sin ofrecer una estrategia alternativa. Las FFAA. entraron en un compás de espera, y en el caso del VRA, en julio de 1985 se retira la Infantería de Marina y es reemplazada por el Ejército. Las fuerzas armadas se colocan casi en una actitud pasiva defensiva y el PCP-SL aprovecha para lanzar una nueva ofensiva, dirigida centralmente, en el Apurímac, contra las «mesnadas», ahora su principal enemigo. Esta contraofensiva del PCP-SL encuentra a las DECAS desamparadas, debiendo los campesinos

enfrentar prácticamente solos las represalias senderistas. En pleno boom de la vinculación entre los productores de hoja de coca y los compradores narcotraficantes, las columnas senderistas intensifican entre 1986 y 1987 sus acciones en el Apurímac, que ayudarían, según sus afirmaciones, a ingresar a una nueva y superior etapa, la del «equilibrio estratégico». Pero esta segunda etapa de la guerra requería contar con mayor participación del campesinado, por lo cual se incrementan las presiones sobre las comunidades campesinas y se desata una nueva ola de violencia. El PCP-SL organiza sus bases de apoyo sobre todo en la cabecera de las quebradas afluentes del Apurímac, las «partes altas» del valle. Allí enrola la «masa» necesaria para sus ataques a poblados donde los CAD's están instalados.

Una fecha es clave, el 13 de abril 1988. Ese día, una columna de 40 senderistas fuertemente armados y escoltada por cientos de campesinos de la Fuerza Local ataca Pichiwillca, la base principal de las DECAS en el VRA. Con la ayuda de los ronderos de Anchiuay, que al recibir la noticia inmediatamente salen en defensa de Pichiwillca, y el apoyo de un destacamento militar, el ataque es rechazado después de una tenaz batalla, con el saldo de más de una decena de senderistas muertos.

Es el punto de partida de la respuesta de los poblados que se convierte en ofensiva de los CAD's, que esta vez no se limitan a controlar el valle, sino extienden su accionar a la sierra. El 9 de agosto 1989, un grupo de 200 ronderos parte de Santa Rosa hacia Tambo, La Mar, en las alturas del eje carretero Huamanga-San Francisco, en una acción llamada «Operación Halcón». El motivo de esta operación es reorganizar las rondas en los distritos serranos de la provincia La Mar, cuyas autoridades, ante la nueva ofensiva del PCP-SL y al no lograr movilizar suficientemente los Comités de Defensa Civil, habían mandado una solicitud pidiendo apoyo a Pichiwillca. Para ese entonces, las DECAS ya se habían ganado la reputación de ser una fuerza contrasubversiva sumamente eficiente. La central de Pichiwillca no sólo acude al pedido y envía un grupo de «comandos especiales» por el lapso de un año a Tambo, sino que además asume los costos para su manutención. Son ronderos «rentados», es decir con sueldo y dedicados exclusivamente a la lucha contra Sendero.

Es medio de fuerte polémica se producen las primeras entregas de armas a los ronderos por el entonces presidente Alan García, quien visita el VRA, y en Rinconada, tierra de «Huayhuaco», entrega personalmente un centenar de escopetas a las DECAS. Este es todavía un acto aislado que no pasa de lo simbólico, pero calza perfectamente con la decisión de amplios sectores del campesinado del VRA de luchar contra el PCP-SL.

El final de la violencia: 1990-2000

A fines de 1989, prácticamente todas las provincias norteñas de Ayacucho estaban organizadas en rondas campesinas contrasubversivas, mientras que los pueblos de las provincias del centro (Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo) se mostraron más reacios, tal vez por haber sido, en

muchos casos, bases de apoyo para Sendero. En esta situación, la comunidad misma, en su totalidad, se convierte en un Comité de Autodefensa y la estructura de mando se altera. Los que asumen el liderazgo son jóvenes ronderos, muchos licenciados del Ejército y, como vimos, en algunos casos (los llamados «tigres») incluso pagados por la comunidad para dedicarse, a tiempo completo, a las tareas de defensa, desplazando estos combatientes a toda una generación de autoridades mayores.

La relación con los militares es compleja. Obviamente es una relación vertical, con una subordinación fáctica de los ronderos a las Fuerzas Armadas, que se expresa en la coacción para organizarse, en el control de las armas, en la obligación de reportarse cada cierto tiempo en el cuartel, y en órdenes para salir a patrulla donde los campesinos muchas veces son utilizados como escudo. Pero, por otro lado, la vinculación con el Ejército les da también cierto orgullo a los ronderos; es una forma de pertenecer a la sociedad nacional y no sentirse marginados y excluidos. Además, el verticalismo no descarta el tutelaje. Cuando se acumulan denuncias por violaciones a los derechos humanos contra los comandos, son los militares quienes los defienden.

Sin embargo, en pleno estado de emergencia las Fuerzas Armadas debían lidiar con fuerzas civiles que trataron de mantener -o recuperar- un mínimo de Estado de Derecho, y no pueden evitar el temporal encarcelamiento de muchos ronderos. A comienzos de los noventa, la lista de comandos de los CAD's presos en la cárcel de Huamanga reunía sus principales líderes:

Los comandos que estuvimos en la cárcel somos: primero Huayhuaco, después de dos meses entré yo, después me siguió el comando «Sombra» de Pichari, el comando «Chihuaco» de Acocro, «Gavilán», «Lobo» de Quinua, el comando «Noventa» de Sachabamba, el comando «Puma» de Vilcashuaman, «Zorro» de Tambo, «Cristoffer» de Vinchos, Susano y su hermano de Quinua, el comando «Kaimán» de Huanta, «Centurión», «Rayo», «Halcón».

Aunque la formación de las rondas es, en general, una reacción de la población ante los abusos senderistas, muchas veces es también un proceso impuesto, fuese por las Fuerzas del Orden o por los mismos ronderos de pueblos vecinos. Hemos mencionado el caso de Nimas Meneses de San Francisco a quien intentaron matar, según él los ronderos de Pichiwillca porque se negó formar Comités de Defensa Civil.

En la zona de Chungui, el PCP-SL fracasó principalmente por dos razones. La primera -similar a la citada en los estudios de la CVR sobre Huancasancos y el Frente del Pampas- es que no imaginó o no calculó que las rencillas personales, familiares e intercomunales terminarían desbordando los cuatro años de retirada de sus bases y Comités. La otra razón, válida para todo el VRA, es el cambio de la estrategia militar que retoma su apoyo a los CAD's, buscando con ellos recuperar —por convencimiento o por la fuerza— los poblados identificados como bases del PCP-SL.

Cronología

Zona III: el valle del río Apurímac

1980/08	Ataque al puesto policial de San Francisco, Ayna
1982/07	Muere el teniente alcalde de Santa Rosa detenido por la policía
01-10-82	En asalto a puesto Guardia Civil de Erapata, Vilcabamba, Quillabamba, muere un Guardia Civil
1983/08	Asesinato de 5 personas por los Lince en Limonchayoc, Ayna.
1983/11	Desaparición de 5 comuneros en San Agustín, Santa Rosa, por el ejército
30-04-84	En choque con GC mueren 22 subversivos y un sargento de sanidad de la FFPP en Erapata, Lucmahuayco,
3/5/1984	El 3 de mayo es tomado el poblado de Villa Virgen en Vilcabamba y el 17 es asaltado el poblado de Pomabamba, Vilcabamba, La Convención
1984/06	Asesinato de 8 pobladores de Rosario, Ayna, por militares.
1984/07	Asesinato colectivo en Pucayacu, Ayna por miembros del EP. Mueren cerca de 80 personas.
1984/07	Secuestro de pobladores de San Queruato, Ayna y asesinato de 02 personas por miembros del Comité de Autodefensa
1984/07	Secuestro y asesinato de pobladores en Chontacocha, Santa Rosa, por el PCP-SL luego de que los pobladores participaran de un censo a pesar de las advertencias senderistas.
1984/08	Detención y desaparición de 4 pobladores de San Antonio de Pichihuillca, Ayna por EP
1984/08	Detención, tortura y muerte de 2 ronderos en Santa Rosa por miembros del EP; otras 15 personas habrían sido asesinadas
1984/09	Asesinato de 9 comuneros en Huanchi por el PCP-SL
1984/09	Asesinato de 19 comuneros en San Pedro, Santa Rosa por las fuerzas del orden.
1984/09	Asesinato de 6 comuneros y secuestro de 4 en Nuevo Paraíso por el PCP-SL
1984/10	Asesinato de 16 personas en Ayna por miembros del PCP-SL; cadáveres encontrados a orillas del río San Francisco.
1984/10	Asesinato de 7 comuneros por el PCP-SL en Huanchi, Santa Rosa
1984/11	Incursión senderista en Huanchi, Santa Rosa, 09 personas resultaron muertas
26/11/1984	SL se enfrenta con la GC en Vilcabamba, Cuzco. Ese mismo día se produce un ataque del PCP-SL y varios asesinatos en Lucmahuayco
18/2/1985	13 terroristas muertos y 4 guardias civiles heridos en la zona de Pichari, Cuzco
14.4.85	SL asesina al dirigente de rondas en Choquezafra, Vilcabamba, Cuzco
17.4.85	Los ronderos de Hatunpampa se enfrentan al PCP-SL. En noviembre, el PCP-SL reinicia sus acciones tomando varios poblados en Vilcabamba y reclutando a jóvenes entre 10 y 18 años de edad. El 6 de diciembre los ronderos de Totorá se enfrentan al PCP-SL.
13-05-85	Autoridades, jefes de instituciones y vecinos de Vilcabamba declaran que hace tres años el PCP-SL viene incursionando en la zona
1985/07	Asesinato de comuneros del pago Sol Naciente, Ayna, por miembros del PCP-SL. Mueren 05 personas
1985/08	Asesinato de 21 personas por el ejército en Santa Rosa
21-11-85	Senderistas incendian 26 viviendas en Incahuasi. En la zona de Vilcabamba, saquearon 60 casas y se llevaron cuatro rehenes hacia La Mar (Ayacucho), de estos lograron escapar Antonio Estalla y Nemesio Infantas, continuando como rehenes Teodocio Aldarrás Huanaco y Epifanio Vásquez Balandra.
07-12-85	Victimaron a treinta y cinco «senderistas y cuatro campesinos» en la zona de Totorá, Vilcabamba. Entre los muertos figuran los campesinos Melquiades Ccoyao, Ladislao Mendoza y dos no identificados, se trató de un operativo de los ronderos con apoyo de licenciados del Ejército en la zona de Accobamba. Capturaron otros 20 senderistas

21/12/1985	Asesinato colectivo en la comunidad de Irquis, Sivia por el PCP-SL. Mueren cerca de 30 personas
1986	Durante la primera mitad del año, en la provincia de La Convención se suceden los asesinatos de campesinos (en Usnuyoc el 28 de abril; en Totorá y Vilcabamba el 22 de junio, y el gobernador de Huallán y su hijo el 7 de julio), y los ataques a poblados como Totorá y Usmayo el 10 de mayo. En la provincia de La Convención, 50 ronderos son asesinados en la zona de Quimbiri, el 16 de mayo
1988/06	Asesinato colectivo en San Gerardo, Sivia, por el PCP-SL. Mueren 17 personas
1989/02	Masacre de 37 pobladores de Canayre, Llochegua, por el PCP-SL. Según testimonios llegó al poblado un grupo de más de 300 senderistas en botes procedentes del río Ene, mataron a los ronderos vigilantes y luego pidieron las autoridades una lista de los propietarios de tierras, asesinando a algunos
1989/06	Enfrentamiento del PCP-SL con rondas en Llochegua; mueren 3 ronderos.
1989/07	Incursión del PCP-SL en Choimacota, Sivia, luego que el EP organizara a los pobladores en CAD. Los senderistas quemaron casas, robaron ganado y asesinaron por lo menos a 3 personas.
1989/11	Asesinatos 4 ronderos de ronda campesina de Santa Rosa, Ayna, La Mar por el PCP-SL.
1990/08	Masacre de 32 pobladores en Canaire, Sivia por el PCP-SL. Según testimonios se trataba de 32 pobladores de religión evangélica.
1991/07	Enfrentamiento de las rondas con el PCP-SL. Un grupo de patrullas de Sivia (ronderos de distintas comunidades) se dirigió a Sello de Oro, lugar en el que se enfrentan con senderistas resultando muertas 13 personas
1992/11	Enfrentamiento entre el PCP-SL y las rondas campesinas en Torrerumi, Sivia Los ronderos del lugar van a buscar a los senderistas después de que estos asesinaran a 02 pobladores en una incursión
1993/07	Asesinato de 10 pobladores cerca de Sivia en por grupo no identificado
1993/07	Detención de 4 personas y muerte de 21 por los ronderos en Santa Rosa
1993/07	Asesinato de 16 personas en Charapa, Ayna, por miembros del PCP-SL interceptan en el lugar a varios vehículos y decomisan mercadería (fideos, arroz, azúcar) de los pasajeros. Eligen a 17 varones para que ayuden a trasladar los productos. Luego los obligan a echarse en el suelo, les atan las manos y los asesinan con armas blancas. Sólo uno logró escapar

1.1.8. Zona IV: Andahuaylas y Chincheros

La provincia de Andahuaylas —de la cual se desprende en 198 la de Chincheros— forma parte del departamento de Apurímac, situado al sur este de los Andes centrales. La particularidad de estas dos provincias dentro del contexto del presente estudio, radica en que posee características económicas, políticas, sociales y culturales similares al departamento de Ayacucho; es más, Andahuaylas perteneció a este departamento hasta la creación departamento de Apurímac en 1873. Cuando se creó la Región Libertadores Wari, la provincia de Andahuaylas se incorporó a ella. Chincheros, por su parte, era un distrito de Andahuaylas pero en 1984 se convirtió en provincia incorporando los distritos de Huaccana, Ongoy, Ocobamba, Chincheros, Cocharcas, Uranmarca y Anco Huallo.

Andahuaylas y Chincheros se encuentran en una zona importante para los intereses del PCP-SL. Su proximidad a la zona sur de Chungui, denominada «Oreja de perro», y a las provincias

de Vilcashuamán y Cangallo, todas éstas zonas muy convulsionada por el accionar de este grupo armado (*ver Estudios en prof. de la CVR*), constituyen un factor muy importante en el análisis del surgimiento y crecimiento del PCP-SL. Más aún, es desde la provincia de Andahuaylas que el PCP-SL expande sus acciones a la zona de Chungui.

Andahuaylas fue durante la década del 1970 un gran foco de movilizaciones campesinas, debido básicamente al descontento del campesinado con la aplicación de la Reforma Agraria propugnada por el «Gobierno Revolucionario» del Gral. Juan Velasco Alvarado. Aquí se gestaron importantes líderes campesinos que lucharon por la tierra, alguno de los cuales van a integrarse luego al PCP-SL.

Datos Generales

La provincia de Andahuaylas, según el censo nacional de 1972, tenía una población de 131,923 habitantes, de los cuáles, el 15.87% vivía en las zonas urbanas, mientras que el 84.13% se ubicaba en las zonas rurales. La mayor parte de la población (56%) era analfabeta. El crecimiento poblacional de Andahuaylas es el más importante del departamento de Apurímac. Si en 1980 la población andahuaylina representaba el 56% del total departamental, en 1999, en el espacio de las provincias de Andahuaylas y Chincheros se concentraba el 58% de la población total departamental de Apurímac, mostrando una dinámica opuesta al estancamiento e incluso retroceso de las otras provincias del departamento.

Si nos referimos por lo tanto al departamento de Apurímac cabe diferenciar a las provincias contiguas de Chincheros, Andahuaylas y Abancay de las otras provincias, territorio básicamente de altura, continuación de las provincias altas de Cuzco y Arequipa.

Cuadro comparativo de la población de Andahuaylas y Chincheros según los censos de 1980 y la encuesta de 1999

censo 1980		pob 1999	
Andahuaylas	145066	Andahuaylas	128390
		Chincheros	48481
		Total	176871
% del depto	56%		58%
Apurímac	261322		306719

Las principales actividades económicas de las dos provincias son, de una parte la agricultura de trigo, maíz, tubérculos y hortalizas; de otra parte la ganadería, rubros que sostienen en mucho el comercio dentro de la región y con las regiones vecinas. Andahuaylas y Chincheros constituyen un importante centro abastecedor de productos agropecuarios para la región de Ayacucho, en especial la ciudad de Huamanga.

Las pugnas por la tierra entre comunidades y haciendas son de larga data pero aumentan desde mediados del siglo XX y más aún en la movilización generalizada de tomas de tierras en la sierra peruana en los primeros años de la década de 1960, destacando la movilización de los comuneros de Callapayoc, en Ongoy, que originó la muerte en 1963 de, por lo menos, 17 campesinos en lo que se conoce localmente como «la masacre de San Pedro», nombre de la hacienda en pugna. Allí, en Callapayoc, se instalará Julio C. Mezzich para hacer su trabajo político. En 1965 las acciones del ELN en Chungui, en la provincia de La Mar, impactaron también en la provincia de Andahuaylas, registrándose más movilizaciones campesinas contra el régimen de haciendas en Chicmo, Pampachiri, Pacucha, Ocobamba y Ongoy.

Los campesinos reaccionaban así contra un sistema de haciendas que hasta inicios de la década de 1970 fue predominante y dominó la sociedad provincial. Aunque se trataba en realidad de una clase terrateniente en decadencia, ésta disponía de gran poder político y económico. Solo por citar un caso, el propietario de la hacienda La Laguna, el Sr. Samanéz Concha, era viceministro de Agricultura a mediados de los años 70 y, por supuesto, retardó todas las acciones de reforma agraria en la provincia, en donde existían extensas propiedades como Toxama, Pincos, La Laguna, Sierra Alta, Mozobamba, etc. motivando, como veremos, una impactante movilización campesina. Este sistema de haciendas «transitaba» de una estructura semicolonial a una estructura capitalista desde inicios de 1940; sin embargo, se trataba de un proceso lento que, por el contrario, incrementaba la explotación del campesinado como sustento del incremento de la producción.

Al promulgarse la Ley N° 17716 se abrió una esperanza para miles de campesinos, sin embargo el proceso de afectación y posteriormente de adjudicación de tierras fue tan lento y de tan larga duración, que exacerbó más los ánimos de la población campesina, motivando protestas dentro de las haciendas, como en el caso de la hacienda Toxama, y posteriormente movilizaciones masivas, como la ocurrida el 1^{ero} de mayo de 1973, en el que más de 2000 campesinos tomaron las calles de Andahuaylas reclamando por la aplicación plena de la reforma agraria.

El proceso de toma de tierras.

La situación en el campo permitió la gestación de un movimiento «político» en la zona promovido por el partido Vanguardia Revolucionaria (VR) cuyos militantes se «infiltran» en SINAMOS para poder aprovechar sus recursos y hacer proselitismo político contra el Estado y las cooperativas. Este trabajo condujo a la formación, en 1973, de la Federación Provincial de Campesinos de Andahuaylas (FEPCA), organización agraria que adquirió gran notoriedad al año siguiente de su creación, con la mayor de las movilizaciones campesinas de la década, teniendo como propuesta básica la eliminación total del sistema de haciendas para adjudicar la tierra a sus «dueños por derecho», es decir a familias campesinas.

Las acciones de Vanguardia Revolucionaria y de la FEPCA eran dirigidas por Julio César Mezzich, asentado en Ongoy, Lino Quintanilla, radicado en Cocharcas (Chincheros) y Félix

Loayza, vecino de Andarapa. Ellos motivaron a la masa campesina para organizarse y tomar las tierras de las haciendas, principalmente en esos tres distritos.

Pero no solo Vanguardia Revolucionaria «trabajaba» en la zona de estudio, pues el PCP-Patria Roja también se encontraba en Andahuaylas y Chincheros. Patria Roja desplegó su trabajo a partir de los maestros, mediante el dominio de la SUTEA, pero sin competir con Vanguardia Revolucionaria por el «control» de la zona. La presencia del PC-Bandera Roja es casi imperceptible.

De la misma manera, los «partidos tradicionales», el Partido Aprista Peruano (PAP) y Acción Popular (AP), casi no tuvieron actividad importante en esos momentos, aunque Andahuaylas fue cuna este último: «...Acción Popular (AP) y el APRA eran el poder local, o sea eran pequeños propietarios, funcionarios del Estado, hacendados no? [...] el APRA nunca logró ser un partido campesino, era poder local» (Loayza, VR).

Como mencionamos anteriormente, la FEPCA decide en 1974 tomar las haciendas con el objetivo no sólo de ocupar las tierras, sino también de «desalojar al propietario». Así, desde Manchaybamba, lugar escogido para el planeamiento estratégico de las tomas, se dirigieron «triangularmente» las operaciones: Cocharcas era zona de operaciones de Lino Quintanilla; Andarapa y Pacucha estaban bajo la supervisión y dirección de Félix Loayza y J.C. Mezzich; y finalmente la zona de Ongoy estaba al mando del propio Mezzich.

De las 118 haciendas existentes en Andahuaylas y Chincheros, 68 de ellas fueron tomadas simultáneamente. Decimos «simultáneamente» porque era la estrategia más adecuada para poder contrarrestar la posible «ofensiva» de las fuerzas del orden

Si bien la represión policial y la participación activa de SINAMOS controlaron el movimiento campesino, arrestando a los principales dirigentes de la FEPCA y a algunos campesinos, la suscripción de las actas de Toxama y Huancahuacho canceló definitivamente la presencia de haciendas tradicionales en la provincia. En 1977 la tierra estaba en manos de quienes participaron en el movimiento. Las tomas de tierras en Andahuaylas constituyen un hecho casi similar a lo acontecido en La Convención y Lares a finales de la década de 1960, igualmente exitoso.

Debemos recordar, sin embargo, que el PCP-SL era un crítico de las tomas de tierras:

[...] son críticos con las tomas de tierra, porque en la concepción de ellos, el hacendado es aliado de la burguesía compradora [...] y lo que había que hacer era un gran frente nacional contra Velasco, en ese frente estaban los hacendados [...] Guzmán se opuso a la toma de tierra. (Entrevista a Juan Mendoza, organizador de Vanguardia Revolucionaria en Oscollo–Cocharcas).

Años más tarde, el PCP-SL ingresará en la zona contando con la militancia de Julio César Mezzich, el principal «caudillo» de las tomas de tierra en 1974, quien al salir de prisión, formaría el

grupo *Vanguardia Revolucionaria–Proletario Comunista*, y posteriormente pasaría a las filas del PCP-SL como uno de sus principales cuadros regionales.

En suma, las tomas de tierra en las provincias de Andahuaylas y Chincheros constituyeron, para los intereses del PCP-SL, un precedente muy importante para iniciar la lucha armada y poder llegar a cercar las ciudades desde el campo, ya que estas dos provincias constituían la mayor despensa de alimentos, ganado y mercancías del departamento.

Historia de la violencia

Expandiendo el discurso: «Iba a gobernar el país el presidente Gonzalo». 1980-1981

La presencia del PCP-SL en Andahuaylas y Chincheros data aproximadamente de 1975, cuando las movilizaciones campesinas han sido reprimidas, y los principales dirigentes de la FEPCA estaban en prisión, a excepción de Lino Quintanilla. El PCP-SL inicia su accionar en las zonas de Andarapa, Ongoy, Ocobamba, zonas proximas a la llamada «Oreja de perro», visitada por profesores provenientes de Huamanga, que buscaban adoctrinar a las comunidades de la zona de Oronccoy, Pallqas, etc, en el distrito de Chungui, en un corredor que vinculaba Oronccoy-Andarapa-Ongoy, siendo la otra vía de penetración senderista el distrito de Cocharcas, en Chincheros, que también fue objetivo de Sendero desde un inicio.

En estos dos corredores la presencia del PCP-SL y la experiencia de organización de las movilizaciones campesinas constituyeron un precedente importante para facilitar la concientización del campesinado respecto a la propuesta senderista de «Nuevo Estado».

Para el PCP-SL fue fundamental en su insercion inicial el circuito educativo con el cual construye su original estructura partidaria y amplía su influencia hacia las zonas rurales. En Andahuaylas, el trabajo inicial del PCP-SL estuvo focalizado en los colegios secundarios de Ongoy, Ocobamba y Andarapa, que contaban con docentes oriundos de la zona, egresados de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que habían retornado a su localidad con la finalidad de formar cuadros para la lucha armada que el PCP-SL pretendía iniciar. En Ongoy, de otra parte, se educaban los comuneros procedentes no sólo de los distritos cercanos sino también de la zona de «Oreja de perro», especialmente Oronccoy, que será luego punto de partida de la presencia senderista en el distrito de Chungui (véase el estudio sobre *Oreja de perro*).

Incluso, según el estudio citado de la CVR, uno de los entrevistados aseveró haber conocido a Abimael Guzmán, siendo estudiante secundario, cuando dictó charlas en el colegio de Ongoy en 1975 invitado por los docentes de este centro de estudios. Según su declaración, las charlas de Guzmán fueron sobre la realidad nacional y el problema del campesinado, centrando su discurso en criticar la Reforma Agraria y la toma de tierras, así como las debilidades de la guerrilla de 1965, entre las cuales resaltaba la falta de formación de cuadros y la carencia de bases de apoyo

en el campesinado; todo ello derivado de la ausencia de una ideología sólida para enfrentar una revolución a largo plazo.

La campaña proselitista inicial del PCP-SL en las comunidades y anexos de los distritos de Andarapa, Ocobamba, Ongoy y Huaccana da paso luego al ejercicio de «justicia» contra abigeos, abusivos, etc., táctica común en todos los escenarios iniciales de la guerra. A este ejercicio de «justicia», ampliamente aceptado por la población campesina, se sumó el ataque a campesinos considerados ricos y a las cooperativas.

En 1981 también se produce el ataque al puesto policial de Ocobamba, la primera acción armada del PCP-SL contra objetivos policiales en Andahuaylas. De allí en adelante, el avance senderista en la zona no hizo sino incrementarse hasta 1982, con incursiones frecuentes a los poblados de Andarapa, Pacucha, Caquiabamba, Huaccana, Ocobamba y Ongoy: «...Los senderistas llegaron a Cocayro en varias oportunidades, obligando a los pobladores a preparar comida. Izaron la bandera con la hoz y el martillo y luego se iban...» (Relato N° 202243).

De esta manera, el PCP-SL comenzó a dominar el espacio rural de la zona iniciando además el reclutamiento de comuneros: «...reclutaban a los comuneros diciendo que iban a vencer y que serían uno solo, que no habría propiedad privada, que todo sería del partido y que iba a gobernar el país el presidente Gonzalo...» (Relato N° 202243).

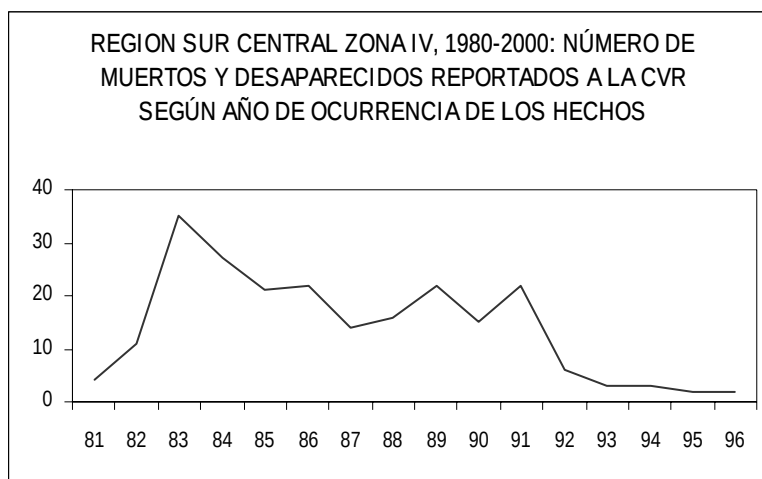
En este primer período de la conflicto armado interno, sin embargo, no se registraron muertes, y las acciones del PCP-SL, como hemos descrito, apuntaron a adoctrinar a la población, ahuyentar a las autoridades y obligar al retiro de los puestos policiales.

<u>Andahuaylas</u>	1980	1981
Ataques a la propiedad	1	1
Ataques a las FFAA y FFPP	1	2
Detenciones y torturas	1	1
Muertos	0	0

La muerte se instala: 1982-1987

REGIÓN SUR CENTRAL, ZONA IV, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	220	-	4	11	35	24	21	22	14	14	22	15	22	6	3	3	2	2	-	-	-	-
ANDAHUAYLAS	139	-	-	9	20	9	15	15	6	6	17	12	20	6	1	-	2	1	-	-	-	-
CHINCHEROS	81	-	4	2	15	15	6	7	8	8	5	3	2	-	2	3	-	1	-	-	-	-



Pero el contexto provincial cambia radicalmente desde 1982, cuando se inicia el ciclo de violencia que durará hasta 1987. Tanto por el número de muertos como por el número de acciones, este período es el más intenso del conflicto armado interno en Andahuaylas y Chincheros, tal como se refleja en las siguientes cifras:

En el mayor año de violencia, 1983, perdieron la vida en las dos provincias 33 personas, entre campesinos, policías y senderistas. Además, hasta 1985 las muertes en el departamento de Apurímac ocurrieron casi en su totalidad en Andahuaylas.

Según Benedicto Jimenez, en 1982 el PCP-SL había conformado tres zonas guerrilleras: Cocharcas, Andarapa y Antabamba. La zona de Cocharcas, distrito de Chincheros, situada frente a Ayabamba y Ayzarca, río Pampas de por medio —zonas de intensa actividad senderista en Ayacucho— abarcaba Ongoy, Ocobamba, Quichuas y Uripa. Para el PCP-SL se trataba de una zona de «campesinos pobres con tradición de lucha». En el inicio de sus acciones violentas, las más importantes fueron el beneficio de ganado en Tancayllo, la cosecha de Moyobamba y la invasión de Ccechopampa, además de ataques y hostigamientos a puestos de la GC.

Por su parte, la zona de Andarapa abarcaba los distritos de Huancaroma, Quishuará, Andarapa y Pacucha, cercanos a la ciudad de Andahuaylas. En esta zona las principales acciones iniciales fueron el asalto a la hacienda de Andarapa y el ataque al puesto policial de Huancaroma. Por último, la zona de Antabamba era, para el PCP-SL, «zona de miseria, atraso social y económico que hacía explosiva a la masa».

Al igual que en otras partes del país (Puno, Junín, La Libertad, principalmente), los grupos del PCP-SL en Andahuaylas, apuntaron a la destrucción de las CAP's surgidas de la RA., como Pincos y Toxama. Según el mismo Jimenez, un informe-balance del responsable político de Andahuaylas a su dirección central enumera, en 1982, sus principales acciones:

- Saqueo al local de CENCIRA- Holanda
- Asalto a los puestos policiales de Pacucha y Ocobamba
- Toma de pueblos en Cocharchas y Andarapa
- Ajusticiamiento de un gamonal de apellido Echegaray
- Rescate de presos
- Toma de radio en Abancay
- Ajusticiamiento de un capitán GC en Talavera «por torturador»
- Asalto a un camión de azúcar
- Conquista de medios al «Turco», alcalde de Andahuaylas.

El «ajusticiamiento» del capitán GC Luis Rodriguez Hernandez, en Talavera, ocurrió el 3 de marzo de 1982, poco antes del asesinato del «gamonal» Echegaray en la zona de Pincos, sometido a «juicio popular», mientras que el asalto al puesto de la Guardia Civil de Pacucha ocurrió el 1 de abril de 1982, tres días antes de la toma de Andarapa. La cooperativa de Pincos fue asaltada por segunda vez, y sus instalaciones casi destruidas íntegramente, el 8 de abril.

En esos días, el 2 de marzo de 1982, los senderistas asaltaron el penal de Ayacucho propiciando la fuga de 304 presos, entre los que se encontraba Edith Lagos, «Lidia», quien morirá el 2 de setiembre de ese año en un enfrentamiento con la Guardia Republicana en Umaca, Chincheros.

La muerte de Lagos es sólo un ejemplo de la respuesta de las Fuerzas Policiales que a través de operativos intentan desarticular al PCP-SL, dándole la importancia que realmente merecía, realizando incursiones en las distintas comunidades consideradas como «zonas liberadas». Lamentablemente, la represión policial trajo como consecuencia la detención de innumerables campesinos acusados de pertenecer al PCP-SL, aumentando notoriamente las denuncias por detenciones arbitrarias y torturas.

Estas detenciones de la policía estaban acompañadas de saqueos y robo de pertenencias de los campesinos, quienes eran encarcelados, y en algunos casos hasta asesinados o desaparecidos.

En marzo de 1982 los Guardias Republicanos llegaron a Cocayro comandados por el Comandante Salas, este comenzó a leer una lista y llamó a algunos comuneros. Los guardias los agarraban a patadas, los tomaban del pescuezo y los botaban a un carro de los policías... (Relato N° 202031)

Otro ejemplo data de febrero de 1982, cuando en la localidad de Chanta, Umaca, fueron detenidas y desaparecidas cuatro autoridades comunales en manos de la policía (Testimonio N° 202067); el mismo mes, en Andarapa, son detenidas tres autoridades comunales, posteriormente

asesinadas por elementos de la Guardia Civil (Relato N° 202052). Son numerosos los testimonios similares recogidos en esta zona.

Por su parte, el PCP-SL, a partir de 1982, no sólo amenaza sino que asesina a las autoridades comunales acusándolas de colaborar con el gobierno y de interferir con sus propósitos. Se inician así los «juicios populares»:

[...] entraron 500 senderistas, nos acorralaron por las cuatro esquinas, estaban armados y encapuchados, buscaron y capturaron al gobernador y otras autoridades, lo llevaron al medio de la plaza de armas a golpes, y les dijeron que renuncien a sus cargos porque no servían para nada, hablaron a la población de su política y viviendo por la Lucha Armada se retiraron... (Testimonio N° 202010)

El aumento de la violencia no se reduce al número de muertos en ascenso pues las violaciones a derechos fundamentales son múltiples y aumentan notoriamente desde 1982. Como podemos deducir, la población de esta zona se encontraba entre dos fuegos que hacían difícil la sobrevivencia; muchos campesinos tuvieron que ir a los cerros y a las montes a pernoctar por el temor a que puedan entrar los senderistas o los policías, en un clima de intranquilidad y desesperanza, mientras los enfrentamientos entre senderistas y las fuerzas policiales, sean patrullas de la Guardia Republicana (Llapan Atic) o de la Guardia Civil (Sinchis), se suceden.

En marzo de 1982 se suspendieron las garantías en la provincia de Andahuaylas pero la ola de violencia obliga al gobierno a prorrogar, en noviembre de 1982, el estado de emergencia en Ayacucho y Apurímac, situación que se prolonga hasta la instalación del Comando político militar en 1983, que incrementa los niveles de violencia.

Por lo tanto, desde 1983, las Fuerzas Armadas amplían su presencia en Andahuaylas y, además del antiguo cuartel de esa ciudad, instalan otras bases importantes como en Chincheros o en Ocobamba. La policía igualmente asienta su presencia. Hasta 1983 el PCP-SL controlaba buena parte del espacio rural de Andahuaylas pese a la resistencia campesina y gracias a que los puestos policiales habían se habían retirado. Sin embargo, al intensificarse los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los senderistas, la estrategia del Estado fue instalar nuevos puestos policiales. En Illahuasi, se instala el puesto de la Guardia Civil en el mes de marzo de 1983 y en junio relevan a la Guardia Republicana por la Guardia Civil en el distrito de Andarapa (testimonio 202041 y Relato N° 202007).

Las patrullas combinadas del Ejército y la policía intensifican sus actividades en busca de senderistas, pero tal como sucede en Ayacucho y Huancavelica en esos momentos, la carencia de una estrategia hábil convierte las acciones, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, muchas veces en excesos, sin variar sustancialmente respecto al accionar de 1982; es más, la violencia por parte del Estado se acrecienta con detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos. Se acentúa entonces el éxodo de la población rural hacia las zonas urbanas, más seguras, incluyendo en ellas la ciudad de Lima, Ica o Cuzco. Esta migración ocasionó una pérdida sustancial

de la fuerza de trabajo en el campo, especialmente de los jóvenes entre los 18 y 28 años, que prefirieron migrar antes de caer en las «redes» del PCP-SL o en la cárcel acusados de senderistas.

Tempranamente también, en 1983, en el distrito de Andarapa, la policía empieza las primeras organizaciones de Rondas Campesinas para poder hacer frente al creciente incremento del terrorismo, motivo por el cuál, las comunidades campesinas comienzan a formar sus comités de autodefensa. El PCP-SL contrataca incursionando en las comunidades para victimar a los que «colaboraban con la policía». Hasta 1984 el PCP-SL fue capaz de organizar estas incursiones brutales, como sucedió el 15 de mayo de 1984, cuando una columna de senderistas asaltó el poblado de Pilcas, y asesinó a 35 campesinos. Pero el rechazo campesino y, sobre todo, las acciones policiales y militares lograron el retiro casi definitivo de las columnas senderistas.

1988-2000: fin de la violencia

Durante este período, el número de víctimas disminuyó considerablemente, así como las acciones armadas y el número de autoridades asesinadas. Prácticamente desde 1988 los hechos de violencia son aislados, registrándose 96 muertos en Andahuaylas y Chincheros entre 1988 y el 2000.

Por otra parte, en este período también disminuyeron los ataques a la infraestructura privada y estatal, se redujeron los atentados contra torres de energía eléctrica, contra municipios, etc. Además, las desapariciones, detenciones y torturas de campesinos a manos de las fuerzas del orden o del PCP-SL se redujeron bruscamente al igual que las incursiones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales en las comunidades de la zona de Andahuaylas y Chincheros.

Podemos afirmar que las rondas campesinas no funcionaron extensivamente en Andahuaylas y Chincheros puesto que la ofensiva militar bastó para desarticular los grupos subversivos y sus bases de apoyo. El ciclo de violencia termina en Andahuaylas y Chincheros en el momento en que Sendero está abriendo nuevos frentes de guerra en casi todo el país.

En cuanto a los partidos políticos, en Andahuaylas desde los años de 1981 hasta 1986, las elecciones municipales fueron ganadas por un militante de Acción Popular, quién se mantuvo en el cargo hasta 1986 para posteriormente dar paso al alcalde Aprista Germán Necochea Osorio, quién gobernó desde el año 1987 hasta el año 1989.

En la provincia de Chincheros en cambio, las elecciones y el gobierno de la municipalidad provincial para el período 1987-1989 fueron para el partido Aprista, para luego dar paso durante dos períodos al candidato ganador perteneciente a Izquierda Unida (IU).

Cabe mencionar que durante los procesos electorarios desde el año 1980 hasta el año 1995, se registró un ausentismo considerable en Andahuaylas y Chincheros, básicamente por el temor generado por el PCP-SL. El mayor porcentaje de ausentismo se registró en las elecciones generales de 1980 donde, tras los sucesos ocurridos en Chuschi, Ayacucho, el 49.82% de la población se ausentó de ir a las mesas de sufragio. Asimismo, otro año crucial fue 1983, cuando se llevaron a cabo elecciones municipales, con un ausentismo de la población que bordeó el 36.47%.

Cronología

Zona IV: Las provincias de Andahuaylas y Chincheros

1981	Ataque al Puesto Policial de Ocobamba Andahuaylas
1982	S.L. conformó 3 zonas de operaciones: Cocharcas, Andarapa y Antabamba
1982/02	Detención y desaparición de 4 autoridades comunales por la Policía en la localidad de Chanta, Umaca
1982/02	Detención y asesinato de 3 autoridades comunales por la GC en Andarapa, Andahuaylas
1982/03	Guardias Republicanos llegaron a Cocayro, comandados por el comandante Salas, detención de comuneros
03-03-82	Asesinato del Capitán GC Luis Rodríguez Hernandez en Talavera
1982/03	Asesinato de Gamonal Echegaray en la zona de Pincos sometido a «Juicio Popular».
1982/03	Se suspendieron las garantías en la Provincia de Andahuaylas
01-04-82	Asalto al puesto de la Guardia Civil de Pacucha
04-04-82	Toma de Andarapa por el PCP-SL
08-04-82	La Cooperativa de Pincos fue asaltada por segunda vez, y sus instalaciones casi destruidas íntegramente
02-09-82	Muerte de Edith Lagos, «Lidia», en enfrentamiento con la Guardia Republicana en Umaca, Chincheros.
1983	Las Fuerzas Armadas amplían su presencia en Andahuaylas
1983/03	En Illahuasi, se instala el puesto de la Guardia Civil
1983/06	Releva a la Guardia Repiublicana por la Guardia Civil en el distrito de Andarapa
1983	En el distrito de Andarapa, la policía empieza las primeras Rondas Campesinas. Las CC forman comités de Autodefensa
15-05-84	Militantes del PCP- SL asaltaron el poblado de Pilcas provincia de Andahuaylas y asesinaron a 35 campesinos

1.1.9. Zona V: Huancavelica, Angaraes y Acobamba

Datos generales

Huancavelica es quizás el departamento más desarticulado del país. Las provincias de Tayacaja, Churcampá, Acobamba, Huancavelica, tienen una alta dependencia de Huancayo y el valle del Mantaro, mientras que algunos distritos de Angaraes y Churcampá orientan sus dinámicas hacia Huanta. Por último, Castrovirreyna y Huaytará se vinculan directamente con la región costera del departamento de Ica. El ciclo de conflicto armado interno también refleja estas articulaciones, por tal razón la CVR incluyó en la región de Ayacucho a las provincias de Angaraes y Acobamba, algunos de cuyos distritos sostienen su vida económica en los intercambios con las provincias de Huanta y Huamanga.

Las provincias de Angaraes y Acobamba forman parte del departamento de Huancavelica, y limitan con la parte norte del departamento de Ayacucho, especialmente con la provincia de Huanta, con la cual mantienen vínculos comerciales activos. La violencia que vivieron estas dos

provincias desde el año 1980 hasta 1996 tiene las mismas características en los mismos trechos cronológicos que los registrados para el departamento de Ayacucho.

Cuadro comparativo de la población de Acobamba y Angaraes según los censos de 1980 y la encuesta de 1993.

Población	1981	1993
Acobamba	37721	42096
Angaraes	42399	43060
Total	80120	85156
% del total Hca.	23%	22%
Total Hca.	346797	385162

Acobamba tiene 7 distritos, siendo la actividad económica predominante la agricultura de cebada, avena, papa y maíz, principalmente. Además, es una zona ganadera, principalmente de ovinos, porcinos, alpacas, caprinos y vacunos. Estas actividades económicas muestran los mismos niveles de producción en las últimas décadas, signando así un estancamiento tan visible como el estancamiento demográfico provincial. Lo mismo sucede en Angaraes, cuya capital es el pueblo de Lircay, y está conformada por doce distritos, siendo los más importantes los distritos de Lircay, Julcamarca, Secclla, Santo Tomás de Pata, San Antonio de Antaparco, Chincho y San Pedro de Congalla.

La actividad económica más importante de la provincia es la agricultura, especialmente la producción de maíz y papa. Angaraes también es una zona ganadera, principalmente de ovinos, vacunos y alpacunos. Otra actividad importante de la provincia de Angaraes es la minería, sin embargo, las actividades de producción agrícola y pecuaria son las más significativas, como queda dicho.

Al igual que lo sucedido en Ayacucho y Andahuaylas, el proceso de afectación, valorización y adjudicación de tierras mostró grandes limitaciones que agudizaron el descontento del campesinado, a la vez que permitió la descapitalización de las haciendas por los propietarios expropiados y luego la instalación de administradores de las Sociedades Agrícolas de Interés Social. Pero estas empresas asociativas instaladas en las haciendas afectadas por la Reforma Agraria en Angaraes y Acobamba no funcionaron como se había previsto, es más, dejaron de cumplir el rol por el cuál habían sido creadas, imperando la corrupción y un tipo de organización vertical que suprimía el tipo de organización campesina. Es por estas razones que las empresas asociativas tuvieron dificultades para consolidarse dentro de la estructura campesina, lo que posibilitó que años más tarde se disolvieran cooperativas y empresas asociativas.

El descontento campesino estaba latente debido a las «experiencias» que le había tocado vivir mucho antes de la promulgación de la ley de reforma agraria, y en este panorama es cuando el

PCP-SL empieza su trabajo proselitista en estas dos provincias huancavelicanas muy golpeadas, años más tarde, por las acciones, tanto subversivas como contra subversivas.

En la década de 1970 se crearon tanto la creación de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica como el Comité de Productores de Alpaca, organizaciones que tendrán un rol importante en la lucha de las comunidades contra el accionar del PCP-SL.

En Angaraes y Acobamba las comunidades campesinas y los pequeños propietarios dominan el espacio rural. La presencia comunera se puede apreciar con claridad en los siguientes cuadros que reúnen, respectivamente, la proporción de población comunera en las provincias y la superficie agropecuaria en poder de comunidades campesinas

Proporción de Comunidades en Acombamba y Angaraes

Provincias	Nº de CC	Nº de comuneros*	Población en CC	Pob total	% Pob. en CC
Acobamba	53	6739	33697	42096	80.00%
Angaraes	58	7375	36876	43060	85.60%

Superficie Agropecuaria en poder de comunidades campesinas

PROVINCIAS	Superficie Agrop	Nº de CC	Superficie Agrop. en manos de CC	
Acobamba	80,080	53	28,654.99	36%
Angaraes	113,604	58	90,380.09	80%

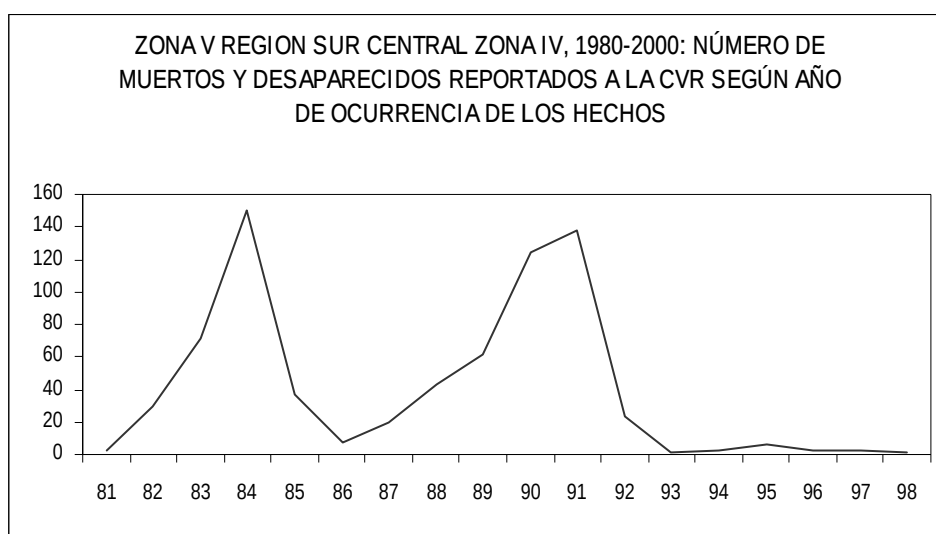
Al realizarse las elecciones presidenciales en 1980, el partido Acción Popular obtuvo una amplia votación: en Acobamba, el 45.35% de los votantes se inclinó a favor de Fernando Belaunde, seguido por el partido de izquierda (29%), mientras que en Angaraes, Acción Popular obtuvo el 62.72% de la votación, seguido por el APRA (14.85%). El ausentismo de los votantes no fue significativo, como si lo fue en el departamento de Ayacucho y en la provincia de Andahuaylas (Apurímac); en Acobamba el ausentismo bordeó el 31.5% mientras que en Angaraes la cifra de ausentismo fue de 27.56%.

Para las elecciones municipales de 1980, en Acobamba triunfó el candidato de Izquierda Unida con 54.35%, mientras que en Angaraes el candidato de Acción Popular fue el vencedor. En estos comicios municipales el ausentismo de la población votante si es importante: en Acobamba alcanzó el 39.99%, es decir, poco menos de la mitad de la población no asistió a las urnas a sufragar, pero el caso de Angaraes es aún más dramático pues el 51% de la población no asistió a las urnas. Se constata entonces que en elecciones generales el porcentaje de ausentismo es mucho menor que en los procesos de elecciones municipales, que en muchos casos llega a representar el 71.74%, como sucedió en las elecciones municipales de 1983 en Acobamba y Angaraes (69.07%). Otro dato muy importante es la «simpatía» de la población de Acobamba y Angaraes por el frente de Izquierda Unida, que en todos los comicios municipales entre 1980 y 1993, ha obtenido un considerable porcentaje de votantes, seguidos por el PAP y AP

Historia de la violencia

REGIÓN SUR CENTRAL, ZONA V, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	721	-	2	29	71	150	37	7	20	43	59	124	138	24	1	3	6	3	3	1	-	-
ACOBAMBA	77	-	-	9	13	16	16	2	5	-	5	4	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-
ANGARAES	644	-	2	20	58	134	21	5	15	43	54	120	134	24	1	2	6	3	2	-	-	-



En 1984 el peor año de violencia en la zona, la mitad de los muertos del departamento de Huancavelica se concentra en Acobamba y Angaraes. Además, como vemos en el cuadro, entre 1983 y 1985 la violencia tiene mayor impacto en estas dos provincias, con un rebrote significativo en 1990 y 1991.

Inicio de la violencia: 1980-1982

Acobamba y Angaraes, provincias básicamente rurales y campesinas, no vivieron mayores actos de conflicto armado interno hasta 1983. Es decir, mientras la conflicto armado interno se expandía en el departamento de Ayacucho y en provincias de Apurímac, el PCP-SL movilizó militantes a Acobamba y Angaraes fundamentalmente para expandir su discurso de «nuevo poder» y captar bases de apoyo. Como en cualquier otro lugar, fue crucial en esta estrategia la incorporación de algunos maestros y estudiantes universitarios provenientes de la UNSCH. La presencia senderista en Angaraes y Acobamba se registra ya a fines del año 1979, con este trabajo de asentamiento en el espacio rural comunero hecho por jóvenes universitarios huancavelicanos que lograron captar algunos dirigentes campesinos

Si bien en los años 80-81 casi no se registraron muertes, este «período de propaganda», cuyo objetivo principal fue captar al mayor número de campesinos dispuestos a brindar apoyo a la

lucha armada, fue intenso en estas provincias, buscando eliminar todo vestigio de poder estatal y reemplazar la autoridades comunales reacias para constituir, según los planes senderistas, bases de apoyo vitales para el desplazamiento de sus columnas armadas. Esta «propaganda» intensa incluía, desde 1980, incursiones y asambleas, pintas, embanderamientos, saqueos, robos, amenazas a autoridades, amenazas a «indeseables» sociales y delincuentes reconocidos, etc. Pero a partir de diciembre de 1982, al igual que en el departamento de Ayacucho, las amenazas contra autoridades distritales y comunales aumentaron sensiblemente, conminándolos a renunciar a sus cargos con la amenaza directa de muerte.

Conseguir bases de apoyo que permitieran establecer Comités populares y «zonas liberadas» fue el eje del trabajo de los grupos senderistas que llegaron así a «dominar» gran parte del espacio rural de los distritos de Marcas y Espíritu Santo, instalando en ellos sus Comités y la red de autoridades que los sustentaban. Evidentemente, esta labor política logró sus objetivos en muchas zonas gracias al apoyo de algunos jóvenes y maestros huancavelicanos.

Entre las primeras acciones de las columnas del PCP-SL en la provincia de Angaraes destaca a fines del año 1980 la incursión de un grupo de subversivos en la comunidad de Anchonga, frustrando el proceso de elecciones municipales nacionales. Junto con esta primera acción debemos recordar que un mes después se realizaría un atentado contra las torres de alta tensión dejando a oscuras a la provincia de Angaraes.

En el año 1982, las acciones del PCP-SL se centraron básicamente en incursiones a localidades, anexos, comunidades y distritos de la provincia de Angaraes, donde además de realizar acciones de propaganda, saquearon tiendas de comerciantes poder robar víveres y destruyeron maquinarias y equipos, tal como sucedió en octubre del año 1982 en Santo Tomás de Pata.

Precisamente en respuesta a este atentado de octubre de 1982, a los pocos días incursionaron por primera vez los «Sinchis» de la policía en la zona, con el objetivo de buscar a la columna senderista, sin embargo, en su misión de persecución detuvieron a 5 comuneros de Santo Tomás de Pata, acusándolos de pertenecer al PCP-SL, después de varios días de tortura, los comuneros fueron liberados al no encontrarse cargos en su contra.

Según los testimonios recogidos, el PCP-SL privilegió las zonas altas del distrito de Julcamarca, logrando un importante asentamiento en las comunidades de Chíncho, Santo Tomás de Pata y otras de Julcamarca que casi colindan con el valle de Huanta, en Ayacucho, con lo cual se puede afirmar la existencia de un corredor que vinculaba la zona de Ayacucho, Huanta en particular, en plena ofensiva del Ejército, con estas provincias huancavelicanas por donde se desplazaron las fuerzas subversivas.

Resalta igualmente, en Angaraes, la importante presencia del PCP-SL en el distrito de Santo Tomás de Pata, sobre todo en la comunidad de Cuticsa, que sufrió incursiones tanto del PCP-SL como de las Fuerzas Armadas y policiales. El pueblo de Cuticsa, como tantos otros pueblos que debieron vivir los años de violencia a salto de mata, fue según los testimonios recogidos,

«engañado» en dos oportunidades, la primera por una columna del PCP-SL que ingresó al pueblo haciéndose pasar por militares a fin de identificar a los «yana umas», para ejecutarlos previo «juicio popular». El otro «engaño» proviene de las patrullas militares, cuyas acciones destructivas, sumadas a las acciones senderistas, provocaron la migración de la población la capital provincial, Lircay, a las ciudades de Huamanga o Huancayo y la selva, quedando el pueblo totalmente despoblado, donde se mantuvieron algunos ancianos.

Al igual que Cuticsa, destaca el caso de la comunidad de Chacapunto, ubicada en el distrito de Anchonga, zona norte de la provincia de Angaraes. En Chacapunto, el PCP-SL logró una presencia importante, involucrando a varios comuneros en sus filas. Tal como vimos en el caso de Cuticsa, los comuneros de Chacapunto manifiestan actualmente que también fueron «engañados» por el PCP-SL y por miembros del Ejército. De hecho, Chacapunto es una de las comunidades más afectadas por las incursiones que realizaron en ella tanto las Fuerzas Armadas como el PCP-SL, que había logrado involucrar, voluntaria e involuntariamente, a un buen número de jóvenes y adultos comuneros dentro de sus filas. Esta situación hizo que, para las otras comunidades del distrito, Chacapunto sea conocida y considerada como «zona roja».

Un tercer ejemplo en la larga lista de poblados que sufrieron con mayor intensidad la conflicto armado interno es San Pablo de Occo. De acuerdo a la información recopilada, el PCP-SL habría formado en Occo cuadros políticos pertenecientes a la comunidad, convertida en base de apoyo a las columnas senderistas. Las incursiones a la comunidad fueron desarrolladas fundamentalmente por miembros del Ejército y la Policía Nacional, y los enfrentamientos provocaron muertes, desaparición de pobladores, destrucción del tejido social comunal, destrucción de la base económica de la unidad familiar campesina por muerte de animales, destrucción de cultivos, de viviendas, y otros.

Ingreso de las FFAA: 1983-1984

Al igual que en Ayacucho, 1984 es el año de mayor violencia en las provincias de Acobamba y Angaraes. Habiéndose constituido el Comando político militar en Ayacucho, bajo cuya jurisdicción quedaban estas provincias de Huancavelica, las fuerzas de orden empiezan a recorrer el campo en busca de los grupos del PCP-SL y se producen, según los partes oficiales, diversos «enfrentamientos», produciéndose en total 77 muertos en 1983 y 160 en 1984, siendo Angaraes la provincia más afectada.

En agosto de 1983 se producen los primeros asesinatos a campesinos a la vez que es dinamitado el local de juzgado en Acobamba, mientras en la comunidad de Llamacancha los senderistas atacan contra cinco viviendas y varios locales públicos. Este año se intensificaron los asesinatos por parte del PCP-SL contra la población civil, pues el objetivo de «vaciar el poder existente» en el campo se traduce en la muerte de autoridades de los distritos y las comunidades, bajo la acusación de colaborar con las fuerzas del orden o simplemente por no haber hecho caso de

las directivas y ordenes de los mandos senderistas: campesinos, autoridades, comerciantes son muertos en Julcamarca, Lircay, Parcco, Acobamba.

Quizás el evento más importante es el registrado el 30 de octubre de 1983 en Acobamba, cuando presuntos subversivos se enfrentan con efectivos policiales, dejando un saldo de más de 20 muertos y 15 heridos, entre ellos 4 policías. La mayoría de las víctimas eran según los testimonios campesinos inocentes.

En resumen, aquel año de 1983 está caracterizado tanto por las incursiones militares como por acciones de amedrentamiento contra autoridades con el fin de conminarlos a renunciar a sus cargos para así controlar la zona y establecer «zonas liberadas». Un buen ejemplo nos remite, en setiembre de 1983, a la incursión de una columna subversiva en el distrito de Lircay, que obligó a las autoridades a renunciar a sus cargos. Ese mismo mes, otra columna senderista incursiona en un poblado del distrito y asesinó a dos autoridades que no había hecho caso a las amenazas hechas anteriormente por miembros del PCP-SL. Es así como el PCP-SL impone su presencia en comunidades alejadas como Cuticsa, Mesacocha, Cahua, etc., las primeras en ser víctimas de la violencia desatada por una ofensiva que buscaba desmontar «viejo Estado», para instalar las autoridades de los «Comités populares», pero es indudable que los asesinatos de autoridades socavan la simpatía hacia el PCP-SL, más aún si a los asesinatos se suma la destrucción de la infraestructura pública con atentados contra los locales municipales, locales comunales, postas sanitarias, oficinas de los gobernadores y jueces de paz, oficinas de los correos y telégrafos, e inclusive algunas iglesias.

En la provincia de Acobamba, la violencia socio política afectó en mayor medida los distritos de Anta, Cajas y Marcas, cercanos a Huanta, situación que obligó a la población a migrar, primeramente hacia la capital del departamento, a la provincia de Huanta en Ayacucho o a la ciudad de Huancayo.

La instalación de bases militares es quizás el factor más importante para contrarrestar la presencia senderista en el campo huancavelicano. Las acciones senderistas disminuyen considerablemente debido, en buena medida, a la instalación de estas Bases Militares, y también a la formación de las rondas campesinas en diversas comunidades y anexos.

Los primeros esfuerzos de resistencia campesina a través de comités de autodefensa datan de 1984, principalmente en las comunidades de Cuticsa, Yuracocha, Anchahuay, Julcamarca, Secella y Atunakihuay.

Tal como constatamos en otras zonas, la oposición a la propuesta violenta del PCP-SL se puede constatar incluso en comunidades donde constituyó bases de apoyo, como en Cuticsa. En esta comunidad se formó, en efecto, una de las primeras rondas para enfrentarse a la organización senderista. El nivel de rechazo en la comunidad alcanzó tal nivel que incluso el ichu de pastoreo de sus animales era quemado en las noches para evitar que los «terrucos» se escondieran, según explican los mismos comuneros. De otra parte, en noviembre de 1984 se instala la Base Militar en

Santo Tomás de Pata, en Angaraes, zona considerada como «bastión rojo» y donde la violencia se inició tempranamente debido a la cercanía con la parte norte del departamento de Ayacucho. La base funcionará durante dos años, hasta conseguir la pacificación plena de la zona. Igualmente se establecieron Bases Militares contra subversivas en Julcamarca y Ccayarpachi. La violencia fue cediendo en Acobamba ante la acción de las patrullas militares y las rondas, limitándose a esporádicos enfrentamientos e incursiones aisladas del PCP-SL en algunas comunidades de la provincia de Angaraes donde en 1989 y 1990 se produce un rebrote en el curso de una ofensiva nacional senderista en pos del «equilibrio estratégico».

Cambios en la estrategia de las FFAA, ofensiva del PCP-SL: 1985-1992

Desde 1986 hasta 1988 casi no se registran acciones violentas del PCP-SL en las provincias de Acobamba y Angaraes debido, como dijimos, al accionar de las bases militares y al impulso que dieron las fuerzas armadas a la conformación de las rondas campesinas, en una nueva estrategia de alianza con la población, amenazada por los grupos senderistas de muchas maneras. Debemos sin embargo reconocer que varias comunidades de la provincia de Acobamba se negaron a conformar las rondas campesinas porque consideraban que «era una provocación a la violencia», como es el caso de Choclococha, Pomacocha, Cuñi y Parisa. Sea como fuere, es notoria la pérdida casi definitiva de apoyo social del PCP-SL en las provincias de Acobamba y Angaraes desde 1986. La eficiencia de la labor de las bases militares se relaciona directamente con la modificación de su concepción de que «todos son sospechosos», por otra de reconocimiento de comunidades, grupos y personas opuestas al PCP-SL, intentando reorganizar a las autoridades comunales en torno a los nacientes Comités de Autodefensa Civil, de cuyo adiestramiento se encargaban las mismas BCS.

Sin embargo, después de dos años de relativa «tranquilidad», casi sin registrarse muertos en ambas provincias, Sendero reinicia en 1988 sus acciones en la provincia de Angaraes, aprovechando el retiro de la Base Militar de Santo Tomás de Pata, situación que permitió a las columnas senderistas incursionar nuevamente en diversos poblados y comunidades. En junio de 1988, en la zona de Cuticsa, una columna de senderistas disfrazados de militares ingresa al pueblo y asesina a 11 campesinos. Asimismo, en octubre del mismo año, otra columna subversiva ingresa a Puyhuán y asesina a 15 pobladores.

A partir del año 1989, en la zona administrada por el Comando Político Militar el objetivo era consolidar las rondas campesinas para poder hacer frente a la creciente ola de violencia desatada por el PCP-SL en la zona, dirigida centralmente contra estas «mesnadas» consideradas por el PCP-SL como obstáculo principal a su proyecto político-militar, registrándose así un gran incremento en el número de víctimas, 128 en 1990 y 149 en 1991.

Los ataques de las columnas senderistas contra los ronderos se suceden uno tras otro. Así, los subversivos incursionaron en poblados como Chupacc y Santo Tomás de Pata, donde asesinaron a 30 y 25 campesinos respectivamente. En noviembre de 1991, cuando una columna

senderista incursionó nuevamente en el distrito de Santo Tomás de Pata y asesinó a 37 miembros de las rondas campesinas. El mismo mes, otra columna senderista incursionó en la localidad de Huari asesinando a 10 campesinos.

Estas muertes fueron producto del enfrentamiento directo entre las columnas senderistas y los campesinos organizados en CAD's, decididos a responder frontalmente al PCP-SL y por ello cargando con el mayor peso de la guerra interna. De esta manera, a pesar de los muertos, la resistencia campesina empieza a dar sus frutos pues las columnas armadas del PCP-SL comienzan a replegarse hasta dejar de actuar en estas zonas.

Por estas razones, las acciones de Sendero se redujeron notablemente, aunque persistía la incertidumbre debido a que Sendero seguía incursionando ocasionalmente en comunidades y poblados, si bien sus ataques se centraban en la destrucción de infraestructura tanto pública como privada, como en marzo de 1990 cuando se produce un atentado contra el local del Registro Electoral en Acobamba, meses antes de realizarse las elecciones generales.

El final de la violencia: 1992-2000

En 1992 sólo se registra un ataque contra un destacamento policial donde mueren 4 policías. Luego vendría la captura de Abimael Guzmán y la cúpula del PCP-SL en Lima, que desarticula la organización y conduce a los «acuerdos de paz» entre Guzmán y Montesinos un año después. En febrero del año 1994 aún se registra la incursión de una columna senderista en los poblados de Balcón y Picota, en Santo Domingo pero el accionar de los subversivos es tan bajo que en junio de 1994 se retira del distrito de Marcas, en Angaraes, la Base Militar que había funcionado durante casi una década.

Como sucede en otras zonas, actualmente la población comunera dice conocer los lugares donde se ubican fosas comunes, pero igualmente expresa su temor de dar a conocer esa información porque podrían ser objeto de represalias por parte de los autores o cómplices de los crímenes. Los comuneros manifiestan que algunos de ellos se encontrarían al interior de la comunidad aunque otros habrían migrado a Lima o a ciudades intermedias como Huancayo y Chanchamayo. Actualmente muchos pobladores que fueron acusados de «terroristas» y que habían cumplido pena de encarcelamiento en el Frontón y Lurigancho, se encuentran en condición de requisitoriados, sus casos no han sido cerrados y no cuentan con las resoluciones correspondientes.

Cronología

Zona V: Angaraes y Acobamba

1980	En las elecciones municipales, en la provincia de Acobamba, el ausentismo llegó a 39.99% casi la mitad de la población. En Angaraes el 51% de la población no asistió a las urnas.
1980/11	Una columna de Subversivos incursiona en Anchonga, Angaraes, frustrando el

	proceso de elecciones municipales
1980/12	Atentado contra las torres de Alta Tensión dejando a oscuras a la provincia de Angaraes
1982/10	Incursionan por primera vez los Sinchis de la GC, con el objetivo de buscar a la columna Senderista, capturan a 5 comuneros de Santo Tomas de Pata, liberados luego de ser torturados
1983/08	Se producen los primeros asesinatos a campesinos, dinamitan el local del Juzgado de Acobamba y en la comunidad de Llamacancha atentan contra 5 viviendas y varios locales públicos.
30-10-83	En Acobamba, presuntos subversivos se enfrentan con efectivos de la GC, dejando un saldo de mas de 20 muertos y 15 heridos, la mayoría de las victimas son campesinos inocentes
1983/12	Enfrentamiento de Senderistas con una patrulla combinada de las FFAA y la Policía resultando varios muertos
1984	Se intensifica en Acobamba los asesinatos por parte de Sendero contra la población civil, además victimaron a las Autoridades de los distritos y comunidades bajo el cargo de colaborar con las Fuerzas del Orden.
1984/11	Se Instala Base Militar por espacio de 2 años en el distrito de Santo Tomas de Pata.
1985	Formación de Rondas Campesinas en principales comunidades y anexos
1986	Se estableció base militar contra subversiva en Julcamarca y otra en Ccayarpachi.
1988/06	Una columna senderista disfrazados de militares ingresa al poblado de Cuticsa y asesinan a 11 campesinos
1988/10	Una columna subversiva ingresa a Puyhuan y asesinan a 15 pobladores
1989	La zona es administrada por el comando político militar, tercer intento de las FFAA de consolidar los comités de Rondas.
1989	Subversivos incursionan en los poblados de Chupacc y Santo Tomas de Pata, donde asesinaron a 30 y 25 campesinos respectivamente.
1990/03	<u>Atentado contra el local del Registro electoral</u>
1991/11	Una columna Senderista incursionó en el distrito de Santo Tomas de Pata y asesinó a 37 miembros de las Rondas Campesinas
1991/11	Terroristas asesinan 10 campesinos por pertenecer a las rondas en la localidad de Huari
1992	Las comunidades de Julcamarca, con el apoyo del ejército y de los ronderos de Lircay, consolidaron las Rondas.
1992	SL ataca un destacamento policial; mueren 4 policías.
1994/02	Una columna senderista incursiona en los poblados de Balcón y Picota cuando intentaban ingresar al distrito de Santo Domingo.
1994/06	La base Militar se retira del distrito de Marcas.

1.1.10. Zona VI: el sur ayacuchano: Lucanas y Parinacochas

Datos generales

La Zona VI corresponde al espacio sur del departamento de Ayacucho, y está conformada por las provincias de Lucanas, Parinacochas, Sucre y Paúcar del Sara Sara, estas dos últimas creadas recién en 1985 y 1986 respectivamente, como desprendimiento de las dos primeras.

Esta zona se caracteriza por una fuerte presencia de comunidades campesinas, cuyo principal sostén económico es la actividad ganadera (vacuna, ovina y camélida). Es también un área que se encuentra prácticamente desarticulada, desde mediados del siglo pasado, de Huamanga y el resto de la región ayacuchana.

Pero la principal característica de estas provincias del sur ayacuchano es la sostenida emigración hacia los valles y centros urbanos costeros desde la primera mitad del siglo pasado, configurando un crecimiento demográfico negativo que tiene ya medio siglo de duración.

Las grandes distancias existentes entre esta zona y el norte del departamento y la ausencia de vías de comunicación, trajeron como consecuencia que esta zona se encuentre mucho más vinculada con los circuitos comerciales de la costa, a través de las vías Puquio-Nazca y Coracora-Chala.

Según los datos censales, al inicio de la conflicto armado interno esta zona continuó perdiendo peso poblacional con respecto a otras zonas del departamento.

Población de las cuatro provincias del sur ayacuchano

	1981	1993	
Lucanas + Sucre	75731	68453	-10%
Parinacochas + Paucar	35778	32909	-8%

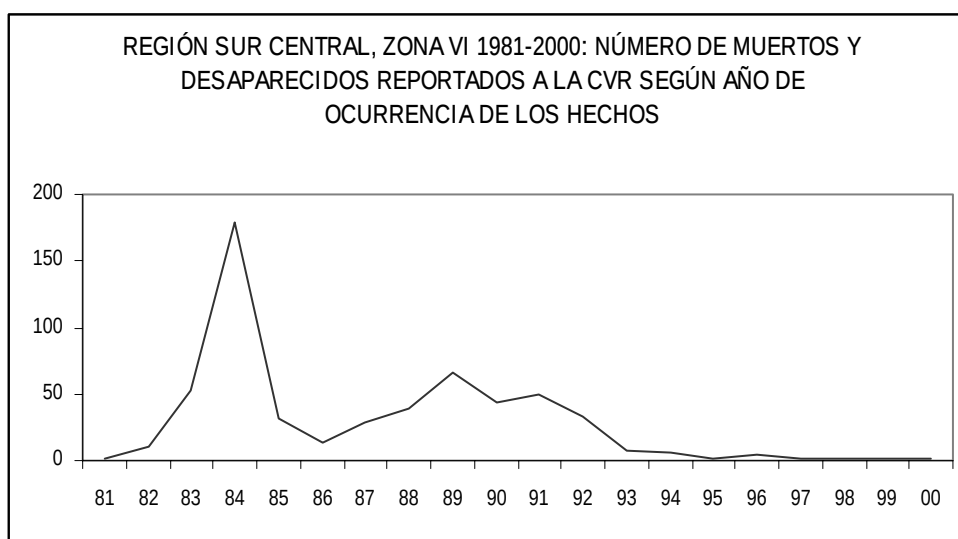
La población las cuatro provincias de sur, junto con la vecina de Huancasancos, muestran, de otra parte, tasas de analfabetismo inferiores a las otras provincias del departamento, con una red de infraestructura escolar más densa que en las provincias del norte de Ayacucho.

El proceso del conflicto armado interno

Si comparamos con las otras provincias de Ayacucho, esta zona estuvo menos expuesta al conflicto armado interno, aunque algunos años «pico» muestran especial incremento de muertos: 1983 y 1984 en Sucre, y 1988 y 1989 en Lucanas.

REGIÓN SUR CENTRAL, ZONA VI, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	568	-	1	11	51	179	32	13	28	39	65	44	49	33	7	6	1	5	1	1	1	1
LUCANAS	230	-	-	5	17	28	15	5	21	31	34	16	23	19	7	6	-	1	1	-	-	1
PARINACOCHAS	72	-	-	-	-	11	4	-	5	5	13	16	7	11	-	-	-	-	-	-	-	-
PAUCAR DEL SARA																						
SARA	36	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	9	17	3	-	-	-	-	-	-	-	-
SUCRE	230	-	1	6	34	139	13	6	2	2	15	3	2	-	-	-	1	4	-	1	1	-



Inicio de la violencia: 1980-1983

Los principales núcleos organizativos del PCP-SL no consideraron el sur ayacuchano como zona prioritaria para su proyecto político, quizás debido antes que a la lejanía, a la extensión del territorio de estas provincias del sur, en su mayor parte punas con muy baja densidad poblacional. Por estas razones, el conflicto armado interno recién se expresa de manera significativa en 1983.

Sin embargo, numerosos casos de saqueos de pueblos muestran que fue un corredor transitado que conectaba sobre todo el territorio de la actual provincia de Sucre, con ambos márgenes de la cuenca del río Pampas y, por el este, con la zona de Andahuaylas.

En los Distritos de Chilcayoc, Chalcos y Belén, colindantes con Andahuaylas y ahora pertenecientes a la provincia de Sucre, por entonces parte de Lucanas, la presencia del PCP-SL se remonta a 1982. En ese año se hace presente en Chilcayoc una persona desconocida en la zona a quienes nuestros entrevistados nombran como «René», el cual se hacía pasar por técnico de radios, que ofrecía sus servicios técnicos, en ocasiones gratuitamente.

Algunas personas lo identifican inmediatamente con el PCP-SL pues «René» también realizaba labores de adoctrinamiento con jóvenes, estudiantes y campesinos de Chalcos. En esta comunidad, es denunciado ante la policía por una profesora. El 26 de mayo, un grupo de aproximadamente 200 senderistas —según los testimonios— encabezados por «René» y procedentes posiblemente de Vilcashuaman, ingresa a Chalcos, y bajo el cargo de soplónaje asesinan a esta profesora y a su novio, un ingeniero de la CORFA-Ayacucho.

Hacia los primeros días de noviembre de 1982, llegan a los distritos de Soras, Larcay y Paucaray un grupo de militantes del PCP-SL, y realizan un trabajo de adoctrinamiento con escolares, los que con el tiempo amplían su red de contactos con otros estudiantes de las cercanas comunidades de San Pedro de Larcay y Santiago de Paucaray. Un estudiante de Soras —César Molina Jáuregui— asume el mando de la zona. Se reproduce, una vez más, con maestros y

estudiantes, el circuito educativo a partir del cual el PCP-SL estructura su organización partidaria inicial.

Al año siguiente, 1983, el PCP-SL intensifica sus actividades en los distritos de Soras, Larcay y Paucaray logrando cierto apoyo en Soras, donde sus columnas móviles consiguen alojamiento y alimentación. Tal como se constata en otras zonas, la reacción campesina es ambivalente al inicio, encontrándose tanto simpatía en algunos comuneros como rechazo en otros. Cuando las exigencias de la guerra empiezan a ser más apremiantes y el apoyo de los comuneros deviene cada vez en más forzado, aparecen las manifestaciones públicas de rechazo, sobretudo en algunos líderes de la comunidad, aumentando las tensiones hasta el 26 de noviembre de 1983, cuando el PCP-SL ejecuta a tres de ellos acusándolos de soplones. A los pocos días de este evento, se instala en la zona un destacamento de sinchis, los cuáles se enfrentarán el 8 de diciembre a una columna del PCP-SL, muriendo uno de los subversivos. Como consecuencia de estos acontecimientos, el pueblo de Soras ensaya organizarse en rondas, presionando además sobre las comunidades vecinas de Larcay, Paucaray y Paico para que hagan lo mismo.

Esta voluntad de organizarse contra el PCP-SL de parte de muchas comunidades se ve frenada algunas veces por la actuación represiva indiscriminada de las fuerzas del orden, como ocurre el 9 de octubre de 1983 en el ámbito de los distritos de Chilcayoc, Chalcos y Belén, cuando un grupo combinado de 35 efectivos de sinchis y miembros del ejército, llega en tres helicópteros a la localidad de Ayalca, anexo de Chalcos, obligando a los pobladores a reunirse en la plaza de armas. Al final de esa reunión, alrededor de 60 personas fueron encerradas en el local de la iglesia y en el de la Municipalidad. Al día siguiente, aproximadamente 18 personas seleccionadas entre los detenidos son conducidas hacia Belén, pero terminan siendo asesinadas en el trayecto, a la altura de la localidad de Pitecc. De allí, este grupo combinado de sinchis y militares se dirige a Carhuanca, en Vicashuamán.

En el Valle de Sondondo, Lucanas, integrado por los distritos de Huaycahuacho, Aucará, Cabana, Andamarca y Chipao, a pocas horas de viaje de la ciudad de Puquio, la capital provincial, las actividades del PCP-SL se iniciaron a través de algunos docentes que conforman círculos de estudio con estudiantes secundarios. Pero ya en 1983, se producen ataques de grupos armados a los puestos policiales de Andamarca, Cabana y Aucará, saqueando luego los establecimientos comerciales de dichos lugares. Ese año también se registra la existencia de bases de apoyo del PCP-SL en los Distritos de Morcolla y Huacaña, en Lucanas, realizando intensa labor de adoctrinamiento entre los estudiantes de la zona, algunos de los cuales se unirían a sus filas mientras otros prefieren migrar, tal como sucedió en todos los pueblos.

A fines de octubre de 1983, una columna senderista ingresa al pueblo de Morcolla y captura a cuatro personas, entre los que se encontraban un profesor y un comerciante puneño, quienes fueron conducidos a la plaza y sometidos a un «juicio popular», acusados de ser «gamonales y lacayos del gobierno». Sin embargo, sólo fueron sometidos a castigos psicológicos

durante todo el día, liberándolos posteriormente cuando «aceptaron» brindar su apoyo. A fines de ese año, miembros del PCP-SL vuelven a incursionar en el pueblo, esta vez saqueando viviendas y establecimientos comerciales.

El 24 de enero de 1984, en un nuevo «juicio popular», el PCP-SL asesina a cuatro pobladores de Morcolla acusados de «soplonaje». Estos pobladores habían denunciado los saqueos realizados por los senderistas el año anterior. Luego de estos hechos, con el apoyo del ejército, se organizó una ronda campesina en el lugar. El 28 de julio de ese mismo año, ocurre otra incursión del PCP-SL, la más sangrienta, pues la columna senderista asesina a 36 personas, y saquea e incendia unas 60 viviendas. Las rondas eran, como vimos en las otras Zonas de Ayacucho, un enemigo central para los senderistas, lo cual explica su ensañamiento con lo que denominaban «mesnadas» al servicio del gobierno.

**

Instalación de BCS y expansión de CAD's: 1984-1988

Mientras que en 1983 el ejército priorizó en su estrategia la instalación de BCS en las provincias involucradas en el escenario principal de la guerra, en la cuenca del Pampas y la provincia de Victor Fajardo, en 1984 amplía la instalación de BCS hacia esta zona. Las acciones violentas aumentan, en Sucre sobre todo, convirtiendo este año en el de mayor cantidad de muertos en todo el ciclo de la violencia en la Zona VI.

El PCP-SL también logró constituir una base de apoyo en Chipao, Lucanas, lo que motivó que en febrero de 1984 el ejército instale una base militar en esa población, desde donde controlaría todo el valle del Sondondo y patrullaría el territorio de Soras. De la misma manera, se instalará meses después otra BCS importante en Soras.

Como hemos dicho anteriormente, la historia de la violencia registra desde un inicio y paralelamente tanto el apoyo de algunas comunidades y comuneros, como el rechazo de otras y otros, que podía llegar incluso a un rechazo activo. Un buen ejemplo ocurrió a inicios de 1984, cuando un grupo del PCP-SL llega a Chilcayoc con un herido, solicitando un curandero de la comunidad. Las autoridades comunales deciden detener a los miembros del grupo y dar muerte al herido. Casi de inmediato, los comuneros también deciden organizar una ronda campesina en la zona. La represalia del PCP-SL es dura pues el 13 de agosto de aquel año, un grupo de comuneros de Chilcayoc que se dirigía a realizar gestiones a Lima, es asesinado en Cochayoc, Belén, por senderistas, provenientes al parecer de la comunidad de Belén. Más adelante, el 29 de setiembre de ese año, miembros del PCP-SL disfrazados de policías asesinan a otro grupo de campesinos de Chilcayoc

En este contexto de oposición creciente a las acciones de los grupos del PCP-SL, la zona vivió uno de los momentos más violentos desde el 16 de julio de 1984, cuando en Negro Mayo, un grupo de militantes del PCP-SL disfrazados de militares, secuestró un omnibus de la empresa «Cabanino» que se dirigía a Soras, asesinando a 30 personas. En los días siguientes la misma

columna iniciaría un «arrasamiento» en la zona, dirigiéndose primero hacia Chaupihuasi, donde asesinarían a 40 personas, luego continuarían hacia Doce Corral donde asesinarían a 30 personas más, terminando en Soras, donde asesinarían a otras 18 personas. Más de 100 muertos serían, según los declarantes, el saldo de esta «batida del campo» realizada por la columna senderista contra las comunidades que días después del ataque senderista, la comunidad de Chaupihuasi detiene a cuatro integrantes del PCP-SL, César Molina Jáuregui, conocido como «John», Rosendo Pichihua Ccaclla (22 años), Severo Valencia Torres (20 años) y Mamerto Rojas Castillo (55 años) y los entregan a los sinchis, quienes terminan ejecutándolos.

En respuesta a estos ataques, los comuneros de los distritos de Soras, San Pedro de Larcay y Paico, según los testimonios aproximadamente unas 500 personas entre hombres y mujeres, con un precario armamento, organizan sin mucho éxito una contraofensiva contra los miembros del PCP-SL por la zona de Soras, llegando hasta Querobamba y Chipao.

Todas las muertes que hemos recapitulado en las líneas anteriores no tuvieron casi ninguna repercusión nacional dada la lejanía de las localidades afectadas. Por el contrario, sí se convirtió en ejemplo de la brutalidad policial y tuvo la mayor relevancia nacional lo ocurrido el 27 de julio de ese año, cuando miembros de la GC detienen y luego asesinan en Puquio al dirigente campesino Jesús Oropesa, incinerando su cadáver que aparecería recién el 10 de agosto. Oropesa, dirigente de la CNA nacional y de la comunidad de Uteq, proponía la mantención de la hacienda de Viseca como empresa comunal, mientras que integrantes de la familia Pusa, derrotados en las elecciones comunales, pretendían la parcelación del predio y por ello se convierten en autores intelectuales del asesinato. El caso de Oropesa muestra de manera fehaciente la compleja relación entre el conflicto armado interno y los conflictos locales, involucrando incluso a las fuerzas del orden, en este caso la policía.

En septiembre de 1984, a pedido de los pobladores de Soras y de las comunidades vecinas acosadas por los destacamentos del PCP-SL, se instala una base militar. Los comuneros recuerdan con amargura que, hacia fines de 1986, asumió el mando de esta base el denominado capitán «Cobra», de triste recordación por la serie de abusos y tropelías cometidas bajo su mando, principalmente el robo de ganado. Los constantes reclamos de la población local logran que se destituya a este militar.

En la zona de Querobamba, actual capital provincial de Sucre, las autoridades y docentes que trabajaban en la zona, fueron abandonándola progresivamente, con lo que se intensificaría la presencia del PCP-SL, quien designó al «camarada Julio» como responsable, el cual empieza a reclutar forzosamente a estudiantes, quienes luego participarían en acciones armadas y de propaganda en los alrededores. Un grupo de autoridades viaja a Canaria (Víctor Fajardo) solicitando el apoyo militar para la zona, pero esta gestión les costaría la vida a varios de ellos. Luego de este incidente, un grupo de militares se dirige hacia Querobamba, produciéndose un

enfrentamiento, con numerosas bajas del lado de los subversivos (20 personas según los testimonios).

Las Provincias de Parinacochas y Páucar del Sara Sara son las más desvinculadas del entorno ayacuchano, estando más conectadas a los circuitos comerciales de la costa iqueña y arequipeña. Por esta razón, dentro de las prioridades del accionar del PCP-SL, cumplirían un rol secundario, y las primeras acciones se inician recién a mediados de los ochentas. Desde Parinacochas hasta Páucar del Sara Sara se conformó un corredor geográfico aproximadamente sobre los contornos de la cuenca del río Huancahuanca, que conectaban los distritos de Pacapauza, Upahuacho y Rivacayco, en Parinacochas, y Pausa y Oyolo en Páucar del Sara Sara. Las acciones realizadas en Coracora fueron esporádicas y selectivas, como la realizada el 14 de julio de 1984, donde en una incursión, miembros del PCP-SL saquean tiendas comerciales del pueblo, e incendian la municipalidad provincial y algunas oficinas estatales, asesinando además al Director Zonal de Educación, Félix Gallegos y a un miembro de la policía.

En el distrito de Huaccaña, en 1985 son asesinados el alcalde y dos pobladores? A fines de 1987 se instala un puesto policial en Querobamba. En enero de 1991, miembros del PCP-SL atacan durante casi cuatro horas el puesto policial de Querobamba, el cual quedó totalmente demolido. Para la realización de este hecho, este ataque fue organizado por tres grupos: el primero que fue directamente al puesto policial, donde habían sólo cuatro efectivos, el segundo que se encargó que evitaba que los pobladores huyeran del pueblo, y el tercero encargado de saquear las tiendas. El resultado de esta acción fueron dos víctimas, un policía y un subversivo. En 1989, un grupo de subversivos vestidos de militares sorprenden a la población y asesinan a Rogelio Jurado, líder de la comunidad de Huaycahuacho.

El distrito de Oyolo, en Parinacochas, fue considerado como el estratégicamente más importante, debido a que además de inaccesible, facilita la comunicación con la provincia de Aymaraes en Apurímac. En 1986, dos profesores originarios del lugar y egresados de la UNSCH, de apellidos Alata y Chuquichanca, inician el trabajo político del PCP-SL en la zona. Alata asumiría el mando y el trabajo de propaganda sobretodo entre los estudiantes. En 1988, el camarada «cojo Nildo» (¿Feliciano?) dirige personalmente las acciones en toda la provincia, estableciendo además algunos «comisarios».

Ofensiva del PCP-SL y el fin de la violencia: 1989-1993

Luego de tres años de descenso significativo de las acciones de violencia las provincias del sur de Ayacucho viven una nueva ofensiva senderista entre 1989 y 1992, confirmando lo que representa una decisión de la dirección del PCP-SL de impulsar una ofensiva nacional, si bien en estas provincias sureñas las cifras de muertos son menores que en otras regiones. El retiro de bases militares facilita los ataques senderistas. Así., entre 1989 y 1990 se producen incursiones subversivas en Pausa, donde las columnas senderistas incendian oficinas estatales y cometen

algunos asesinatos. La llegada muy tardía de la violencia a la provincia de Paucar del Sara Sara explica que recién a fines de 1991, el ejército instale una base militar en Pausa, desde la cual destacaría a Oyolo unos efectivos 100 militares de forma permanente, que según los testimonios recogidos también cometieron algunos abusos contra la población.

De la misma manera, a fines de 1988, luego del retiro de la base militar de Soras, un grupo de sinchis proveniente de la base de Pomacocha, en Andahuaylas, haciéndose pasar por senderistas, ingresa a Soras, Larcay y Paucaray para saquear casas y tiendas.

Ante el aumento de las acciones del PCP-SL a mediados de junio de 1991, el ejército obliga a formar rondas campesinas en la zona de Huaycahuacho, en Lucanas pero como sucedió tantas veces en años anteriores en diversas comunidades organizadas en CAD's, ese mismo mes, miembros del PCP-SL ingresan a Huaycahuacho y asesinan a seis ronderos.

En 1992 se constata, especialmente en Lucanas, el aumento de muertos como resultado del nuevo impulso del PCP-SL, pero este ascenso queda cortado definitivamente con la captura de A. Guzmán en setiembre de aquel año, que marca el hito final del ciclo de violencia para estas provincias, aún antes de la suscripción de «los acuerdos de paz» entre el jefe del PCP-SL y el asesor Montesinos.

Resumen

1. El ingreso del PCP-SL en el sur ayacuchano replica el modelo senderista de militancia de docentes y utilización de las escuelas para captar estudiantes secundarios, que se convierten en militantes.
2. A pesar de su cercanía al frente principal y original de la guerra, la violencia se instala un poco más tarde en estas provincias del sur.
3. La vastedad del territorio, casi en su totalidad punas de muy dispersa población, al igual que las limitadas vías de comunicación precarias, hacían que los pocos destacamentos policiales existentes resultasen insuficientes para controlar las acciones subversivas, convirtiéndose en blancos fáciles de atacar.
3. Las áreas con mayor actividad subversivas fueron las comunidades y poblados más cercanos al río Pampas, en lo que actualmente es la provincia de Sucre.
4. Los responsables políticos del PCP-SL eran foráneos, razón por la cual al momento de instalar sus bases de apoyo, si bien alcanzaban a involucrar a algunos estudiantes, mostraban fragilidad frente a la población, consiguiendo que en muchos casos los pobladores terminen denunciándolos ante las FF.OO. Esto explicaría los sucesivos ataques por parte del PCP-SL a numerosas comunidades de la zona, cometiendo asesinatos bajo el cargo de «soplonaje».
5. Desde las primeras acciones del ejército en la zona, se manifestó su intención de propiciar la conformación de los comités de autodefensa civil, forzando en algunos casos la organización de éstos allí donde la iniciativa no existía entre los comuneros. Si observamos a los principales actores de los hechos de la violencia en esta zona de la región, llama la atención la presencia sostenida de las Fuerzas Policiales casi en la misma magnitud que el ejército.

Cronología

Zona VI: Lucanas y Parinacochas

26-05-82	Un grupo de aproximadamente 200 senderistas encabezados por «Rene» ingresa a Chalcos, y bajo el cargo de soplónaje asesinan una profesora y su novio, un ingeniero de CORFA- Ayacucho
1982/10	Llegan a los distritos de Soras, Larcay y Paucaray un grupo de militantes del PCP-SL y realizan un trabajo de adoctrinamiento con escolares.
1983	Se producen ataques de grupos armados a los puestos policiales de Andamarca, Cabana y Aucará saqueando luego los establecimientos comerciales de dichos lugares.
1983	SL intensifica sus actividades en los distritos de Soras, Harcay y Paucaray.
1983	Se registra bases de apoyo del PCP-SL en los distritos de Morcolla y Huacaña
09-10-83	Un grupo combinado de 35 efectivos de Sinchis y miembros del ejército, llegan en tres helicópteros a la localidad de Ayalca, anexo de Chalcos, 60 personas fueron detenidas 18 de los cuales terminan asesinados, a la altura de la localidad de Pitecc.
1983/10	Una columna senderista ingresa al pueblo de Morcolla y captura a 4 personas y luego de un Juicio Popular son obligados a ingresar a sus filas
26-11-83	SL ejecuta 3 líderes de la comunidad de Soras acusándolos de soplones
08-12-83	Un destacamento de Sinchis instalado recientemente en la zona de Soras se enfrenta con una columna del PCP-SL, muriendo uno de los subversivos
1983/12	SL saquea viviendas y establecimientos comerciales en el pueblo de Morcolla
1984/01	SL llega a Chilcayoc con un herido, solicitando un curandero de la comunidad, los comuneros dan muerte al herido y detienen a los demás senderistas.
24-01-84	En un nuevo «juicio popular» asesinan a 4 pobladores de Morcilla acusados de soplones.
1984/02	El Ejército instala una base militar en Chipao, donde controlaría todo el valle del Sondando y patrullaría el territorio de Soras
14.7.1984	En Coracora, miembros del PCP- SL saquean tiendas comerciales del pueblo, e incendian la municipalidad provincial y algunas oficinas estatales, asesinando además al director zonal de Educación Félix Gallegos y a un miembro de la policía
16-07-84	En Negro Mayo, militantes del PCP- SL disfrazados de Militares, secuestran un ómnibus de la empresa «Cabanino» que se dirigía a Soras, asesinando a 30 personas, la misma columna en los días siguientes iniciaría un «arrasamiento» asesinando 40 personas en Chaupihuasi, luego asesinan a 30 personas mas en Doce Corral, terminando en Soras con la matanza de 18 personas.
1984/07	La comunidad de Chaupihuasi detiene a 4 integrantes del PCP-SL César Molina «Jhon», Rosendo Pichihua(22 años), Severo Valencia (20 años), y Mamerto Rojas (55años), los entregan a los Sinchis quienes terminan ejecutándolos
1984	Aproximadamente 500 comuneros de Soras, San Pedro de Larcay y Paico organizan una contraofensiva - sin mucho éxito- contra los miembros del PCP-SL
27-07-84	Miembros de la GC detienen y asesinan en Puquio al dirigente campesino Jesús Oropesa, incinerando su cadáver que aparecería recién el 10 de agosto
28-07-84	Incursión del PCP-SL a Morcilla asesinan a 36 personas y saquean e incendian unas 60 viviendas
1984	Un grupo de autoridades de Querobamba viaja a Canaria (Victor Fajardo) solicitando apoyo militar para la zona, varios de ellos pierden la vida por esta gestión. Como respuesta los militares se dirigen a Querobamba, enfrentándose a los senderistas y provocándoles 20 bajas.
13-08-84	Un grupo de comuneros de Chilcayoc que se dirigían a Lima es asesinado en Cochayoc, Belen por senderistas
29-09-84	Miembros del PCP-SL disfrazados de Policías asesinan a otro grupo de campesinos de Chilcayoc
1984/09	Se instala una Base Militar en Soras a pedido de sus pobladores y comunidades

	vecinas
1985	En el distrito de Huaccaña son asesinados el alcalde y pobladores
1986	Dos profesores (Alata y Chuquichauca) asumen el en el distrito de Oyolo, Parinacochas e inician el trabajo Político del PCP-SL y de propaganda entre estudiantes
1987/12	Se instala un puesto policial en Querobamba
1988	Según algunos, el camarada «cojo Nildo» (Feliciano) dirige personalmente las acciones en toda la provincia, estableciendo además, algunos «Comisarios».
1988/12	Se retira la base militar de Soras, de lo cual aprovechan un grupo de Sinchis provenientes de la base de Pomacochaen Andahuaylas, quienes se hicieron pasar por senderistas, ingresan a Soras, Larca y Paucar para saquear casas y tiendas.
1989	Un grupo de Subversivos vestidos de militares sorprenden a la población y asesinan a Rogelio Jurado, líder de la comunidad de Huaycahuacho.
1989-1990	Incursiones senderistas en Pausa, se incendian oficinas estatales y se producen asesinatos
1991/01	Miembros del PCP-SL atacan el puesto policial de Querobamba, quedando totalmente demolido, resultando dos muertos, unpolicía y un subversivo
1991/06	El ejército obliga a formar Rondas Campesinas en la zona de Huaycahuacho.
1991/06	Miembros del PCP-SL ingresan a Huaycahuacho y asesinan a 6 ronderos.
1991/12	El Ejército instala una Base Militar en Pausa.

1.2. REGIÓN CENTRAL

La Región Central de la CVR reúne los departamentos de Pasco y Junín, y tres provincias del norte de Huancavelica (Huancavelica, Tayacaja y Churcampa), todos escenarios importantes de la violencia política entre 1980 y el 2000. En cada una de estas zonas, la violencia tuvo un desarrollo diferente y cada actor de la guerra (PCP-SL, MRTA, Policía Nacional, Ejército Peruano, Rondas de Autodefensa Civil) se desenvolvió de manera distinta. La importancia de esta región para el desarrollo de las estrategias políticas y militares de los grupos alzados en armas, se sustenta en las condiciones geográficas, sociales, económicas y políticas que la región ofrece, en particular el departamento de Junín, por su alta densidad demográfica, su inigualable ubicación estratégica que facilita la comunicación de la costa con la sierra sur y con la selva central y norte; su rol como plaza comercial; así como su cercanía a algunos de los núcleos mineros más importantes del país (Manrique 1999:199).

El 17 de mayo de 1980, el mismo día que en Chuschi un grupo de militantes del PCP - SL quemó las ánforas y el material electoral dando inicio a su «guerra popular», otro grupo de senderistas arrojó petardos de dinamita contra el Concejo Provincial y el CE No. 34004 en la ciudad de Cerro de Pasco. Cuatro años después, en octubre de 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) aparece en Junín con un acto simbólico, el izamiento de su bandera en diferentes puntos de Huancayo.

La cantidad de acciones subversivas fue aumentando de manera sostenida en toda la región durante los primeros años de la década del 80, sobre todo en las provincias del norte de Huancavelica, que presentan una cronología de la violencia similar a la del departamento de Ayacucho, con su máximo impacto durante los años 1983 y 1984, descendiendo significativamente en esas provincias luego de esos años. Por el contrario, en Junín la violencia aumenta después de 1984 y se mantiene en niveles importantes hasta fines de 1992, año de la captura de A. Guzmán, luego de lo cual desciende abruptamente.

Teniendo como escenario los departamentos de Junín, Pasco y las provincias del norte de Huancavelica, la reconstrucción de la Historia Regional de la violencia política busca entender y explicar la lógica de cada uno de los actores de la guerra, describir los hechos que marcaron hitos en el curso de la guerra y que fueron condicionando el desenlace final.

1.2.1. Datos regionales

Es común escuchar menciones sobre la importancia estratégica de la región central. Sin lugar a dudas lo es, no sólo en el aspecto productivo, económico o comercial, sino también geopolítico y militar. Por supuesto, esta importancia está en relación directa con Lima y el diseño centralista del país.

En la región central, hace más de 35 años, fueron derrotados los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), liderados por Guillermo Lobatón.

Región Central: Población 1981 – 1983

Según departamento y provincia

Población	1981	1993	%
Junín			
Jauja	102439	104828	2%
Junín	30169	39627	24%
Concepción	59060	64785	9%
Huancayo	321549	437391	26%
Yauli	77639	65229	-19%
Tarma	105422	115686	9%
Satipo	66901	94250	29%
Chanchamayo	89059	114045	22%
Total Junín	563670	683091	17%
Pasco			
Pasco	125829	129899	3%
D.A. Carrión	34654	36098	4%
Oxapampa	52642	60398	15%
Total Pasco	213125	226395	6%
Huancavelica			
Huancavelica	90388	107055	16%
Tayacaja	124522	108764	
Churcampa (1985)		41130	17%
Total Huancavelica	214910	256949	16%
Total	346797	385162	10%

Fuente: INEI

Una rápida mirada a la evolución demográfica regional permite destacar, en primer lugar, el importante crecimiento poblacional de la provincia selvática de Satipo (29% entre 1981 y 1993), contrastable con el extremo opuesto de la provincia de Yauli, cuyo descenso poblacional alcanza a 19% en el mismo período. Chanchamayo y Oxapampa muestran también cifras de crecimiento demográfico mayores al promedio regional. En realidad, el mayor crecimiento de la población en las provincias selváticas es constatable en toda la región amazónica del Perú.

La expansión urbanística de la ciudad de Huancayo explica las cifras de crecimiento poblacional de esa provincia (26%), mientras que la provincia de Junín, en la puna colindante con Pasco, arroja una cifra similar de crecimiento poblacional, debido al crecimiento del centro poblado de Junín, capital de aquella provincia, mientras que las provincias vecinas de Pasco y Daniel Alcides Carrión muestran casi un estancamiento poblacional en esta década signada por la violencia política. Por su parte, las tres provincias de Huancavelica incluidas en nuestra región, presentan índices de crecimiento superiores al promedio de ese departamento. La concentración demográfica mayor en el departamento de Junín nos remite a la ciudad de Huancayo, una de las más grandes de toda la sierra peruana.

La región central cuenta con dos grandes ecosistemas o regiones naturales con un rango altitudinal entre 400 y 4200 msnm., la sierra y la selva alta. En la Sierra existen dos espacios diferenciados: (a) los Valles y cuencas interandinas propicias para la agricultura intensiva y extensiva, producción de tubérculos, hortalizas, cereales y granos, y ganadería vacuna y (b) las Zonas altas, aptas para la ganadería ovina, de vacunos y camélidos, y cultivos como papa, maca, trigo, cebada.

La selva alta, constituida fundamentalmente por las provincias de Chanchamayo y Satipo, abarca el 54,2 % del ámbito departamental, constituyendo una zona propicia para la producción frutícola, silvicultura, agroindustria y ganadería bovina. Debemos agregar a esta zona selvática la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco.

En estas dos grandes regiones naturales se distinguen dos espacios de gran importancia por sus características geográficas, la concentración demográfica que poseen y el dinamismo económico que los caracteriza:

- El Valle del Mantaro, que reúne cuatro provincias -Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja- concentra al 57.4% (675183 hab.) de la población del departamento de Junín, poseyendo el 26,10% de la superficie departamental que es de 44 197,23 km². El valle del Mantaro abarca, básicamente, la amplia planicie comprendida entre las ciudades de Jauja y Huancayo, y su hinterland, constituido por las zonas medias (entre 3 400 y 3 800 msnm) y altas (arriba de 3 800 msnm), que se encuentran económicamente articuladas con la parte baja del valle.

- La Selva Central, que comprende las provincias de Chanchamayo y Satipo, reuniendo en conjunto a 256 433 hab., es decir, el 21.8% del departamento en el 54,2% del territorio departamental. Existe un importante volumen de población nativa (amueshas, ashaninkas y nomatsigüengas) en esta zona, que representa el 15,7% de su población, siendo el 16.9% del total de indígenas nacional. En realidad, la selva central abarca también la provincia de Oxapampa, perteneciente al departamento de Pasco, que comprende, territorialmente el 73.7% de este departamento pero tiene mucho menos población.

Diversas trochas carrozables y caminos de herradura vinculan los valles con las zonas altas y la región selvática, permitiendo la relación entre núcleos urbanos y comunidades campesinas que podrían ser clasificadas —en la vertiente que da al Valle del Mantaro— en tres categorías: comunidades urbanas de zonas bajas, comunidades semi-urbanas de zonas intermedias y comunidades agro-pastoriles de zonas altas.

Las *Comunidades urbanas de zonas bajas* tienen como eje la ciudad de Jauja, a 3390 msnm. Con cerca de 20 mil habitantes, la ciudad subsiste de actividades terciarias (comercio, empleocracia) y la agricultura (muchas familias poseen tierras de cultivos en los alrededores y distritos vecinos) en suelos de secano mayormente, con algunos sectores de riego, siendo los cultivos predominantes el maíz, la papa, cebada y trigo. Jauja es el centro dinamizador de la parte norte del

valle, pues confluyen en ella —especialmente los días de ferias: jueves y domingo— gran número de comuneros habitantes en esta zona.

Las *Comunidades agrícolas y semi-urbanas de zonas baja e intermedia*, como Huertas y Molinos en la zona baja y Julcán y Masma en la intermedia. El sustento de las economías familiares en estas comunidades se basa en actividades agrícolas, pecuarias y artesanales; esta diversificación ocupacional no les inhibe su articulación con el mercado regional, ya que por la calidad de sus tierras obtienen lo necesario en productos básicos -papa y maíz- para el consumo familiar, destinando a la venta los excedentes; comercializando no sólo el sobrante de cultivos, sino también, el fruto de sus actividades de crianza animal (reses, ovinos, porcinos, aves, cuyes, etc.) y artesanales (por ejemplo, en Molinos la talla en madera es una actividad artesanal tradicional, como la fabricación de zapatos en Julcán o la preparación de hormas para zapatos en Quero).

Una amplia franja de familias sin tierra o con escasez de ella depende del trabajo asalariado en tiempos de labor intensa en las zonas bajas del valle o la selva central, especialmente para la cosecha de café, o hacia los asentos mineros de la región.

Las *Comunidades agro-pastoras en la zona alta e intermedia* son pueblos, eminentemente rurales que obtienen sus principales ingresos del pastoreo y actividades conexas —venta de carne, fibras e hilados y tejidos—, practicando una agricultura de auto subsistencia tanto en la misma zona alta como en la parte superior de la zona intermedia.

Organizativamente estas comunidades están bastante cohesionadas y practican una administración colectiva de los espacios de pastoreo, totalmente comunales, que las familias usufructúan atendiendo al ciclo de rotación que la comunidad decide.

En la zona selvática podemos identificar dos tipos de ocupación espacial: centros urbanos y comunidades rurales.

Los *Centros urbanos* como San Ramón y La Merced, son aglomeraciones que superan los 20 000 hab. y, de manera similar a Jauja para la sierra, juegan un importante papel dinamizador de la economía de la Selva Central, concentrando actividades terciarias (comercio, empleocracia estatal, etc.), y agricultura, pues gran parte de la población posee sus chacras en los alrededores o distritos aledaños, dedicándose al cultivo del café y frutales, especialmente. San Ramón, que fue consolidándose como ciudad gracias al desarrollo de un conjunto de proyectos en los últimos treinta años (mina San Vicente, asfaltado de la carretera central, construcción del puente e hidroeléctrica Yanango, construcción de la hidroeléctrica «Chimay»). Separándose de Satipo, la provincia más extensa de la selva central, San Ramón fue creada como provincia en 1977, con seis distritos: Vitoc, San Ramón, Chanchamayo, San Luis de Shuaro, Perené y Pichanaki.

- Las *Comunidades rurales* de la vertiente oriental, están mayormente ubicadas en las quebradas formadas por las estribaciones de la cordillera en ceja de selva, como es el caso de Uchubamba o Monobamba y sus centros poblados menores Chacaybamba, Rundayacu, Cedruyoj, Paltay.

Bastante accidentadas pero con abundancia de agua y potencialidades naturales para producir café, caña de azúcar, yuca, zapallo, cítricos y la ganadería, estos centros poblados pertenecen políticamente a la provincia de Jauja, pero geográficamente son más cercanos a Chanchamayo y sus pobladores se sienten más «selváticos» que «serranos».

La población indígena tiene también importante presencia en el espacio selvático, sobre todo los Ashaninkas quienes, como veremos luego, se vieron inmersos brutalmente en el ciclo de violencia.

1.2.1.1. Actores de la violencia

Los antecedentes históricos más cercanos de la violencia política en el departamento de Junín los encontramos en la fugaz acción de los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1965, cuyas acciones aún se mencionan entre pobladores de la selva central. Pero en términos generales, durante el siglo XX, la zona no conoció conflictos de envergadura, y la lucha social campesina o la vinculada al trabajo en las minas, aún siendo importante, no llegó a tener nunca la envergadura ni el costo económico o en vidas humanas que tuvo en otras zonas andinas. Por otro lado, la minería, el desarrollo del mercado y la colonización, relativamente tempranas en la sierra central, se extendieron cómoda y pacíficamente como puntales de la modernización, al punto que la sierra central ha sido considerada siempre la zona andina más moderna y próspera, base de una economía mercantil de «carácter andino» y de una «nueva» cultura popular que enlaza las características rurales andinas con la impronta urbana moderna.

Las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

La década del 60 en el Perú correspondió, como en tantos otros países de América Latina, a una progresiva radicalización de ciertos sectores sociales, en particular de las clases medias. En el campo, en algunas regiones sobre todo del sur del país, predominaba un sistema servil de explotación de la tierra sobre el cual se había construido una cultura patriarcal autoritaria. En términos generales, ésta consistía en el sometimiento del campesinado al gran hacendado rentista, quien ejercía el poder de impartir justicia y mantenía a los siervos (feudatarios, yanaconas o colonos) en una situación de semiesclavitud. En aquella década de 1960 comenzó a operarse un gradual proceso de organización y movilización del campesinado consistente en una serie de acciones de recuperación de tierras impulsado por militantes de diversas organizaciones y partidos de izquierda.

En aquel proceso, aparecen en el país las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ambos movimientos inspirados en la revolución cubana. El MIR abrió tres frentes militares, aunque sin realizar un sólido trabajo político previo, circunstancia que contribuye a su rápida derrota en 1965 a manos del Ejército. El Frente

Central, conocido también con el nombre de «Túpac Amaru», uno de los tres frentes guerrilleros del MIR, abarcó algunas zonas de la provincia de Satipo (departamento de Junín) y del distrito de Andamarca (provincia de Concepción, departamento de Junín).

A pesar de su rápida derrota, en estas zonas el recuerdo de las guerrillas del 65 se mantiene vivo hasta la década del 90. Más aún, antiguos militantes del MIR, como Antonio Meza Bravo, se incorporaran años después a las filas del MRTA. Por ello la acción del frente guerrillero «Túpac Amaru» es el antecedente más inmediato, aunque lejano, de la violencia política en la región central.

En resumen, la violencia política iniciada en 1980 tiende a considerarse un fenómeno propagado por agentes que aparecieron relativamente tarde, debido a las circunstancias que imponía la estrategia insurgente. Aunque la presencia del PCP-SL y MRTA en Junín y Pasco se puede rastrear desde los primeros años de la década de los 80, cuando la guerra subversiva ya había cobrado gran notoriedad en Ayacucho, durante los primeros años no tuvo mayor trascendencia en la región central, limitándose los grupos subversivos a recorrer ambos departamentos, con muy pocas acciones destructivas, arengando a los campesinos sobre su guerra y pidiéndoles alimentos y cobijo ocasionalmente.

El PCP-SL

En el periodo de 1981-1985, Oscar Ramírez Durán, conocido como «Feliciano», se encargó del *Comité Regional Centro* (CRC) del PCP-SL, conformado por los departamentos de Junín y Pasco, mientras que las provincias norteñas de Huancavelica formaban parte del *Comité Regional Principal* (CRP) conformado, a su vez, por los departamentos Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Dentro del ámbito del Comité Regional del Centro, el departamento de Pasco es considerado como fundamental porque aquí, desde los primeros años de los 80, el PCP-SL abre la primera zona guerrillera en la quebrada de Chaupihuaranga, cualificando a sus cuadros, militantes y simpatizantes en la lucha armada. Se podría decir que, en la práctica, esta zona funcionó como el espacio de entrenamiento en la táctica y estrategia militar maoísta. Es aquí también donde se «ajustician», por primera vez en la región, alcaldes, dirigentes comunales y policías.

Aprovechando el trabajo político previo de la tendencia maoísta de Vanguardia Revolucionaria, así como el del PCP Puka Llacta y otras organizaciones estudiantiles maoístas en el campo y las ciudades del departamento de Junín y Pasco durante fines de la década del setenta y los primeros años de la década siguiente, el PCP-SL logra consolidarse en la región central contra el pronóstico de todos los analistas que consideraban que el desarrollo económico y político de la región central eran, de por sí, territorio de imposible conquista para la propuesta senderista.

Hacia fines de 1986 la actividad del PCP - SL ataca profundamente la economía y política de la región central, con un despliegue incesante de esfuerzos por reivindicar y resolver mediante la

acción armada las demandas y problemas de la población y provocar de esa manera su simpatía y adhesión. Pero el asentamiento del PCP-SL en Junín sigue diferentes caminos y ritmos: En Huancayo, el trabajo político militar se centra en la Universidad Nacional del Centro (UNCP), en los institutos superiores y colegios secundarios, y en los principales asentamientos humanos que rodean a la ciudad, cual «cinturones de hierro». En el campo, realiza su trabajo político y militar en las comunidades campesinas de los valles y de las alturas, con mayor o menor énfasis según su ubicación geopolítica y el momento particular que atravesaba su «guerra popular». Asimismo, el PCP-SL actuó en los principales asientos mineros ubicados en las provincias de Yauli y Tarma del departamento de Junín, y en el departamento de Pasco, intimidando y, en algunos casos, asesinando a dirigentes mineros durante los años 1986-1988, panorama que se agravó por la presencia de grupos paramilitares y de las propias Fuerzas Policiales y Armadas, que también hostigaban a los gremios sindicales (Manrique, 1989).

El MRTA

Es difícil precisar la real dimensión que alcanzó el MRTA en la región central, pero es innegable que, al igual que en el departamento de San Martín, su presencia fue importante en ella. El inicio de sus actividades «públicas» en los últimos meses de 1984 se redujo a actividades de propaganda y agitación armada —embanderamientos en ciudades, pintas, difusión de mensajes en radioemisoras tomadas, y distribución de víveres «expropiados» a grandes distribuidores luego repartidos en sectores empobrecidos de la ciudad—. También se notaba la participación de sus militantes en los debates y actos de protesta que se realizaban en la Universidad Nacional del Centro, contrariamente a la actitud de los senderistas, quienes afirmaban que nada había para discutir y sólo cabía definirse a favor o en contra de su propuesta de lucha armada ya en curso.

En un segundo momento, a partir de 1987, los destacamentos del MRTA desarrollan acciones de hostigamiento a puestos policiales en el valle del Mantaro (Concepción, San Jerónimo, Apata, Chupaca y otros) y en la selva central (Pichanaki, Santa Ana). Estas acciones constituían formas de preparación militar para acciones posteriores de mayor envergadura, a partir de columnas militares preparadas en lugares de entrenamiento ubicados en la selva central y en la quebrada de Pariahuanca desde 1984 y 1985.

Anteriormente, entre 1983-84, el MRTA había fracasado en su esfuerzo de formación de un frente militar en el Cuzco. En esa experiencia participaron militantes de diferentes puntos del país, como Antonio Meza Bravo, antiguo integrante de la guerrilla del centro en 1965, José Porta Solano, joven estudiante de la UNCP, Santiago Villaverde Segura, militante de larga data del MIR, los tres participantes de la reunión fundacional del MRTA. Luego del fracaso del Cuzco, ellos retornan a la región central para iniciar la construcción del «Ejército popular tupacamarista».

Esta organización define dos tipos de escenarios para sus actividades. En el primero priorizan el trabajo político de propaganda y agitación y el logro de influencia en gremios

sindicales y populares y en asentamientos humanos, lugares donde repartían los víveres que tomaban. Más adelante, entre los años 1988 y 1989, el MRTA libraría dura lucha con el PCP-SL para mantener estos espacios. El segundo escenario fue el campo; aquí replicaban en menor medida las preocupaciones urbanas, especialmente en gremios campesinos, centrando su atención en la formación de sus unidades guerrilleras. Durante 1988 y 1989 se forman dos columnas, una en la sierra y otra en la selva del departamento de Junín. La columna de la sierra se denominó «Sócrates Porta Solano», mientras que la de la selva se llamó «Miguel Pasache».

En un inicio, los emerretistas ubicaron dos zonas estratégicas: la selva central, especialmente la provincia de Chanchamayo, en Junín, con esporádicas incursiones hacia la provincia de Satipo, por un lado, y por otro los espacios geográficos fronterizos entre la sierra y la selva del departamento de Junín, en distritos como Pariahuanca, Santo Domingo de Acobamba, Monobamba y Uchubamba. El MRTA también estuvo presente, en algunas provincias y distritos de Junín, en la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco, con mejor armamento, y sin destruir u hostigar a las autoridades locales y población tal como sí hacía el PCP-SL.

El Ejército Popular Tupacamarista (EPT) era una estructura regular estable formada por los combatientes y por las milicias campesinas que se unían a ellos para operar y luego se desmovilizaban y continuaban su vida en sus comunidades. El EPT alcanzó importantes niveles de convivencia con las poblaciones de la Selva central, y sus combatientes siempre fueron campesinos.

El desenvolvimiento del MRTA en la región tuvo dos períodos marcados. La llamada «batalla de Molinos», el 28 de abril de 1989, es un hito en la historia regional del MRTA que, a manera de parte aguas, divide su historia en la región entre una primera etapa, 1988 –1989, en la cual la composición campesina y popular tuvo predominancia y una segunda etapa en la cual el trabajo político y militar desarrollado posteriormente le permitirá sobrevivir hasta 1997.

Las Fuerzas Armadas

Como efecto inmediato de las primeras acciones subversivas durante 1980-1982, las instancias encargadas de administrar justicia y brindar seguridad pública a la población, el Poder Judicial y la Policía, prácticamente abandonaron las zonas afectadas por la violencia política. En esas circunstancias, el gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) ordenó a las Fuerzas Armadas el restablecimiento de la seguridad y el orden interno en aquellos lugares golpeados por la subversión. En la mayoría de los casos, esas zonas fueron declaradas como Zonas de Emergencia, bajo el control político militar de las FFAA.

En Junín, ante el incremento del número de atentados y de víctimas por acción del PCP-SL y el MRTA, el gobierno de Alan García decreta en noviembre de 1988 el Estado de Emergencia en todas las provincias y distritos de Junín, designando como Jefe del Comando Político Militar al

General del Ejército Manuel Delgado Rojas. Dos meses antes se había declarado en emergencia la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco.

Tras la declaración del estado de excepción y luego que el Ejército asumiera el control político militar del departamento, aumentan las amenazas, secuestros, torturas de los detenidos, asesinatos extrajudiciales y desapariciones de personas, convirtiéndose estas violaciones a derechos fundamentales en parte de la vida cotidiana, como ya había sucedido en Ayacucho.

La policía había recibido duros golpes de la subversión; muchos puestos policiales fueron atacados directamente por el MRTA en Apata, Concepción, San Jerónimo, San Agustín de Cajas, Chupaca, Comas, Ulcumayo, Pichanaki; muchos también fueron desactivados, replegando sus efectivos a centros poblados mayores.

Sin embargo, del Ejército Peruano ya existía una imagen formada en la opinión pública, imagen derivada de la forma de intervención que venía desarrollando en los departamentos sureños de Ayacucho y Huancavelica. La desconfianza era enorme en la población, y el clima de inseguridad y temor se acrecentó grandemente.

Durante 1989 se notó un accionar marcado por el paulatino despliegue del control militar a partir de los centros urbanos donde existían cuarteles (Huancayo, Jauja, La Merced) hacia las periferias rurales. En las ciudades, especialmente Huancayo, el control militar fue intenso, se estableció el toque de queda, la universidad local fue allanada en varias oportunidades y el patrullaje por las calles de la ciudad así como los operativos de rastrillaje eran constantes en asentamientos humanos. En un inicio, en las zonas rurales cercanas a las ciudades se ejecutaban patrullajes esporádicos mientras que no se notaba la presencia del Ejército en zonas rurales alejadas donde el PCP-SL o el MRTA tenían significativa presencia, como Chongos Alto, Jarpa, Sincos, por la cordillera occidental del Valle del Mantaro, de fuerte presencia senderista, y por el lado oriental Pariahuanca, Andamarca, Santo Domingo, Comas, Cochas, Mariscal Castilla, Curimarca, Monobamba, Uchubamba, con presencia senderista y emerretista.

El Ejército ejecutó algunas operaciones «punitivas» en algunas comunidades del Valle del Mantaro. Los ejemplos más saltantes son los de San Juan de Jarpa, donde asesinaron a 5 pobladores y Pucará, donde mataron a 8; en ambos casos atribuyeron las incursiones al MRTA, pero cabe señalar que en estos dos distritos el MRTA no tenía presencia alguna ni había incursionado en ellos anteriormente.

Pese a estos actos punitivos, la respuesta militar en los espacios que estamos estudiando no fue indiscriminada. Existe una gran diferencia entre la intervención militar en Ayacucho o Huancavelica y la realizada en la región central, pues si bien la represión indiscriminada fue una tentación que caracterizó los primeros momentos de intervención del ejército, a partir de 1991 se percibe con claridad que el ejército actúa con objetivos más claros, pues ya la convicción de que el arrasamiento indiscriminado de población civil provocaba reacciones contrarias a las buscadas, otorgando por lo tanto prioridad al trabajo de inteligencia y de acercamiento a la población. La

instalación de bases contrasubversivas y el impulso a la formación de comités de autodefensa pasaron a ser componentes de una misma estrategia que también incluyó la eliminación de estudiantes universitarios y de personas signadas como subversivos por los agentes de inteligencia militar.

Comités de autodefensa

En efecto, desde 1989 los altos mandos de las Fuerzas Armadas empezaron a contemplar la participación activa de la población civil en la lucha contra los grupos terroristas en aquellas zonas rurales donde ambos movimientos realizaban sus mayores acciones políticas y militares. La organización de la población civil para su autodefensa se venía llevando a cabo en algunas zonas declaradas en emergencia, como Ayacucho, desde 1983, con altibajos y sin contar con apoyo gubernamental suficiente; recién a fines de 1989 tendrán el aval del gobierno de Alan García.

La participación de la población como actor activo incrementó los niveles de violencia y el número de víctimas entre la población rural, además de aumentar las violaciones de los derechos fundamentales a través de torturas, secuestros y desapariciones. En Junín primero y luego en Pasco, el Ejército se preocupó por lograr mayores niveles de organización y centralización de las rondas. A mediados de julio de 1990, en las postrimerías del gobierno de Alan García, el general Delgado Rojas, Jefe Político Militar de la zona de emergencia de Junín, organizó el I Congreso Regional de Rondas en Bellavista, distrito de Jarpa, en la provincia de Chupaca. En el certamen participaron delegados ronderos de los valles del Cunas, del Tulumayo, del Pichis y del Palcazú, éstos dos últimos ubicados en el departamento de Pasco. En el congreso se trataron temas relacionados con la estrategia contrasubversiva y el papel asignado a las rondas campesinas en ella, como fuerzas contrasubversivas. La reunión fue propicia para que el Ejército ordenara a los ronderos la organización de rondas contrasubversivas en aquellas comunidades donde no las había, advirtiéndoles que si algunas comunidades se resistían, serían consideradas por los militares como «zonas rojas», ateniéndose a las consecuencias que ello implicaba.

A mediados de diciembre, el Comando Político Militar organizó otro evento en la provincia de Concepción. Uno de los acuerdos principales fue la formación de la Federación Regional de Rondas del Centro y la elección de su primera Junta Directiva. En esta ocasión, los dirigentes de las rondas contrasubversivas reafirmaron su lealtad y compromiso con el Ejército y solicitaron más apoyo para su lucha contra el PCP-SL. El 8 de noviembre de 1991 fue promulgado el DL N° 741: «Ley de reconocimiento de los Comités de Autodefensa», marco legal que acepta la existencia de múltiples y diversas organizaciones de la población civil, sobre todo rural, cuya función principal era luchar contra la subversión. De acuerdo al decreto, los Comités de Autodefensa son

[...] anizaciones de la población surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad, evitar la infiltración del terrorismo,

defenderse de los ataques de éste y apoyar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación, cuya característica es la de ser transitorias.

Este Decreto había sido antecedido por el DL N° 740, promulgado unos días antes, donde se señala que

[...] las rondas campesinas reconocidas por la Ley No. 24571 ubicadas dentro del ámbito territorial de las zonas declaradas en Estado de Excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, podrán adquirir por compra, donación por parte del Estado, particulares, armas de caza [...] previa autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En otras palabras, se autorizaba legalmente el empleo de armas de fuego para luchar contra los insurgentes, con el monitoreo y entrenamiento militar correspondientes. De esta manera se oficializaba y formalizaba lo que ya se daba en los últimos años en las zonas declaradas en emergencia. Un año después de la promulgación de ambos decretos, el 11 de noviembre de 1992, el gobierno promulgó el *Reglamento de organización y funciones de los Comités de Autodefensa*. En suma, la presencia militar significó una represión mayor y la formación de rondas campesinas contrasubversivas, pero no siguió el mismo tipo de política que la seguida en Ayacucho. En primer lugar, la represión no arrasó indiscriminadamente las comunidades sino que optó por las desapariciones y asesinatos selectivos. En segundo lugar, si bien existen diferentes versiones sobre la formación de las rondas campesinas contrasubversivas —en unos casos se habla de la formación compulsiva a manos de los militares, en otros las organizaciones ronderas reivindican su formación autónoma— la realidad es que ambos factores tuvieron importancia desigual en cada micro región y localidad.

Sea como fuere, la población organizada para la autodefensa expulsa en muchas zonas a los grupos senderistas, siendo los casos más representativos los de Tulumayo y Andamarca. En Tulumayo, literalmente con las manos, las rondas asesinan a cerca de una docena de senderistas, cortándoles la cabeza a nueve de ellos y llevando sus cabezas al puesto militar. En Andamarca, las rondas emboscaron a los senderistas luego de hacerlos comer pachamanca y emborracharlos, y enseguida asesinaron una veintena de subversivos, igualmente degollados.

1.2.2. Zonificación de la violencia

El espacio regional

El presente recuento histórico incluye los departamentos de Junín, Pasco y las provincias de Churcampá, Tayacaja y Huancavelica, ubicadas en la zona norte del departamento de Huancavelica. El Comité Regional del Centro (CRC) del PCP-SL abarcaba los departamentos de Pasco y Junín, mientras que el Frente Central del MRTA incluía el territorio del departamento de

Junín y de la provincia de Oxapampa (Pasco). Por último, las Fuerzas Armadas dividían el espacio geográfico de Junín y de algunos departamentos colindantes (Pasco y Huancavelica) en Sub Zonas de Seguridad (SZS).

Esta particular disposición del espacio geográfico condicionó en buena medida la actuación de los grupos subversivos y las Fuerzas del Orden. Por ejemplo, mientras que el PCP-SL y el MRTA mostraron flexibilidad a la hora de movilizar a sus fuerzas militares en todo el territorio definido como su teatro de operaciones, las Fuerzas del Orden se vieron imposibilitadas de desplazar con la misma flexibilidad sus contingentes fuera de cada Sub Zona de Seguridad. En otras palabras, el Ejército actuaba únicamente en el área comprendida dentro de cada SZS, siendo poco probable que incursionara en otra.

La caracterización del espacio geográfico como zonas de operaciones y guerrilleras, y los momentos de la expansión territorial estuvo sujeta a la estrategia del PCP-SL y del MRTA. Algunas variables como la densidad poblacional, la presencia del Estado, la organización gremial y política y la ubicación geopolítica, fueron tomadas en cuenta para señalar algunas zonas como guerrilleras y de operaciones. En ese sentido, las zonas elegidas por el MRTA para desenvolver sus acciones en Junín fueron el valle del Mantaro, los distritos de Andamarca, Pariahuanca, Santo Domingo de Acobamba y Mariscal Castilla, y las provincias de Oxapampa (Pasco) y Chanchamayo (Junín). Algunas de estas áreas fueron terreno de disputa con las fuerzas del PCP-SL.

Entretanto, el PCP-SL actuó también en el valle del Mantaro, en las provincias de Concepción y Huancayo; en la selva central, controló la provincia de Satipo e incursionó de manera frecuente en la provincia de Chanchamayo. En Pasco, la quebrada de Chaupihuaranga, del distrito de Yanahuanca, y algunas zonas de la provincia de Oxapampa fueron los escenarios principales de la acción senderista; al igual que los distritos de Moya, Vilca, Manta y Acobambilla, en el norte del departamento de Huancavelica.

Zonificación

Zona I: Zonas altas de Junín:

- a. La cuenca del Canipaco
- b. La cuenca del Cunas

Zona II: La cuenca del Tulumayo

Zona III: El valle del Mantaro

Zona IV: Departamento de Pasco

Zona V: Departamento de Huancavelica

- a. Huancavelica y Cuenca del Vilca
- b. Tayacaja y Churcampá

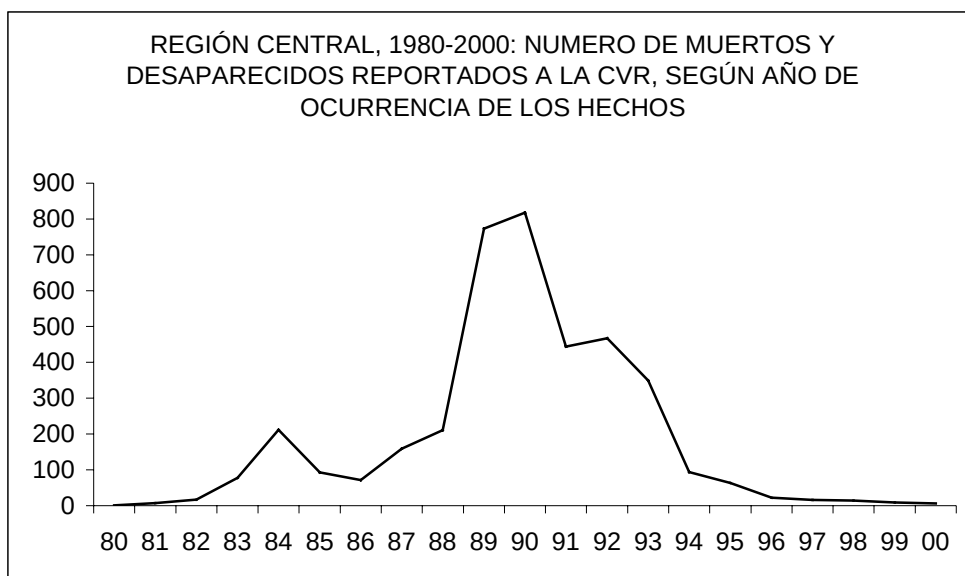
Zona VI: Selva central: (Perené, Oxapampa, Satipo, Chanchamayo, Gran Pajonal)

1.2.3. Periodificación de la violencia

Los muertos registrados entre 1981-1985 nos remiten, casi en su totalidad, a las provincias huancavelicanas de Huancavelica y Tayacaja, en el mismo ciclo de violencia que el vecino Ayacucho. El otro ciclo de violencia, entre 1988 y 1993, ocupa centralmente las provincias de Huancayo, Satipo y Chanchamayo.

REGIÓN CENTRAL 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN ZONAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

ZONAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	3,618	1	6	14	75	189	82	51	132	182	708	785	424	438	322	89	60	20	14	12	8	6
ZONA I	123	-	-	-	-	-	-	-	4	16	75	14	5	4	5	-	-	-	-	-	-	-
ZONA II	77	-	-	-	1	-	-	-	1	3	40	24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZONA III	903	-	1	3	1	8	4	9	16	29	213	182	164	189	46	11	13	4	2	5	2	1
ZONA IV	177	1	-	2	13	22	13	14	13	14	21	12	10	34	2	1	-	3	-	2	-	-
ZONA V	782	-	4	6	50	139	37	14	50	63	122	156	77	31	8	8	14	1	-	-	2	-
ZONA VI	1,556	-	1	3	10	20	28	14	48	57	237	397	160	180	261	69	33	12	12	5	4	5



En la región central, los 20 años de violencia política pueden ser divididos en cuatro períodos, según el incremento cuantitativo de las acciones subversivas, la creciente expansión territorial de los grupos subversivos, los altibajos de la respuesta estatal contrainsurgente y, por último, el declive de la violencia.

1.2.3.1. Inicio de la violencia: 1980-1982

Durante 1980, el PCP-SL inicia sus acciones violentas en Huancavelica, Junín y Pasco. En Huancavelica, los sabotajes contra torres de alta tensión, los ataques dinamiteros a los locales de

algunas instancias del Poder Judicial y de otros locales públicos, y el hostigamiento a los puestos policiales, fueron la tónica del accionar del PCP-SL durante 1980. Mientras que en Junín, sus acciones se concentran en el valle del Mantaro, en especial en la provincia de Huancayo y en su ciudad capital. El blanco eran los locales de los concejos distritales y provinciales, los puestos policiales, los locales de los partidos políticos y de entidades estatales. Asimismo, el PCP-SL asalta algunas minas para apropiarse de dinamita, mechas y fulminantes. Por último, atenta contra las instalaciones de servicios públicos (agua, transporte ferroviario y electricidad). En cambio, en Pasco, las acciones de sabotaje del PCP-SL son esporádicas. En los tres departamentos, las acciones ejecutadas por el PCP-SL tienen como objetivo principal golpear a los representantes e instituciones del «viejo poder». En tanto, la respuesta del Estado se reduce a encargar la represión de la insurrección senderista a las fuerzas policiales y sus organismos especializados en lucha contra insurgente.

Entre 1981 y 1982, las acciones de propaganda y agitación armada (embanderamientos, pintas e iluminaciones), sabotaje a la red de transmisión de energía eléctrica y el hostigamiento a los puestos policiales se incrementaron, aunque de manera desigual, en cada uno de los departamentos. En Junín, los sabotajes contra los establecimientos bancarios y entidades estatales son constantes. Se producen las primeras voladuras de puentes y se mantiene las acciones de sabotaje contra las vías férreas y la infraestructura minera. Se presume que desde 1982, el PCP-SL comienza su inserción en el valle del Ene, provincia de Satipo. En Huancavelica, ocurren las primeras incursiones de militantes maoístas armados. Los asaltos a los puestos policiales buscan «conquistar» armas y en las minas «medios» (dinamita, mechas y fulminantes). En tanto en Pasco, el sabotaje contra las instalaciones de CENTROMIN es sistemático. El PCP-SL comete los primeros asesinatos de miembros de las fuerzas del orden, campesinos y autoridades políticas locales. En 1981, la quebrada de Chaupihuaranga, provincia de Yanahuanca, departamento de Pasco, se convierte en la primera zona guerrillera del PCP-SL. Un año después, en junio, militantes del PCP-SL asaltan la cárcel de Pasco liberando a 11 presuntos subversivos. Esta acción formó parte de la «política de fuga» aplicada por el PCP-SL durante esos dos años.

De manera general, las acciones del PCP-SL buscaron abrir zonas guerrilleras y de operaciones y crear «vacíos de poder». A fines de diciembre de 1982, el propio Abimael Guzmán reconoció que la mayor conquista lograda durante esos dos años fue la formación de Comités Populares, verdaderas instancias de poder y autoridad senderista que reemplazaban a las autoridades del «viejo poder». La respuesta contrainsurgente siguió en manos de las Fuerzas Policiales, reducida a montar operativos policiales sin mayores éxitos.

1.2.3.2. Expansión de la violencia: 1983 - 1986

La violencia se agudiza en la región entre 1983 y 1986, cobrando numerosas víctimas, sobre todo en Huancavelica y Tayacaja. Esta situación provoca los primeros flujos de desplazamiento de la población afectada a nivel local y regional. Hay dos hechos que ayudan a explicar el incremento de las acciones subversivas y la expansión de los grupos subversivos hacia otras zonas de la región: de un lado, el ingreso de las Fuerzas Armadas para luchar contra el PCP-SL en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac a fines de 1982 y el consecuente desplazamiento de sus cuadros, dirigentes y militantes hacia otras zonas aledañas como Junín y Pasco; y, de otra parte, la aparición del MRTA en Junín a fines de octubre de 1984. La declaratoria en estado de emergencia de numerosos distritos y provincias es la respuesta de los gobiernos de Belaunde y luego de García al avance de la insurrección del PCP-SL y el MRTA. Esta situación contribuye a la sistemática violación de los derechos humanos en las zonas declaradas en emergencia.

En Pasco, Junín y Huancavelica se intensifican los atentados a las torres de alta tensión; los asaltos a las minas para aprovisionarse de dinamita y a los puestos policiales para proveerse de armamento, previo «aniquilamiento de las fuerzas vivas de la reacción», es decir el asesinato de autoridades locales, especialmente alcaldes, regidores y dirigentes comunales. Asimismo, el PCP-SL comete las primeras masacres y arrasamientos de comunidades para sofocar cualquier atisbo de oposición entre los pobladores y comuneros de la región.

En el valle del Mantaro, La Oroya y Tarma, las acciones de propaganda y agitación armada del PCP-SL se incrementan de manera ostensible. Asimismo, El PCP-SL no descuida sus labores de proselitismo y captación de militantes y simpatizantes en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en los institutos superiores y colegios secundarios. En tanto, en la selva central, sus destacamentos ejecutan sus primeras acciones en la cuenca del río Tambo, y hacia 1986 tienen el control de algunos anexos y distritos.

Mientras tanto, el MRTA despliega una intensa labor de agitación y propaganda en las ciudades de Huancayo y Jauja. En Andamarca y Pariahuanca primero, y luego en las provincias de Oxapampa (departamento de Pasco) y Chanchamayo (departamento de Junín), el MRTA ya deja sentir su presencia política y militar.

1.2.3.3. La violencia máxima: 1987-1993

El espiral de violencia regional tiene su mayor desarrollo entre 1987 y 1993. Entre esos años, la violencia se extiende en forma incontenible en toda la región. El PCP-SL continúa ampliando sus zonas guerrilleras y de operaciones, actuando en casi todo el departamento de Pasco; en el valle y las zonas altas del Mantaro, el Alto y Bajo Tulumayo (distritos de Comas, Cochas, Mariscal Castilla provincia de Concepción), Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba, al este de

Huancayo; en todo el territorio de las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampá, en Huancavelica.

A fines de 1987, el PCP-SL tiene columnas armadas que se desplazan, con relativa libertad, entre una y otra zona de la sierra y selva de Junín, situación que le posibilitará decretar, cada vez con mayor frecuencia, «paros armados» en las zonas donde tiene influencia y ejerce mayor control.

El PCP-SL empieza a ganar mayor presencia en la selva central, en particular en la cuenca del río Ene, provincia de Satipo, y en menor medida en Oxapampa (Pasco) y Chanchamayo (Junín).

Desde el segundo semestre de 1987, el PCP-SL organiza comités populares en el territorio de muchas comunidades de Junín, asentándose en el valle del Canipaco desde mediados de 1988. Las comunidades del Alto y Bajo Tulumayo son convulsionadas por la acción de las columnas del PCP-SL, al igual que las comunidades de San Juan de Jarpa y San José de Quero (Alto Cunas). La ocupación de estas zonas se vincula directamente con la destrucción de las SAIS.

El MRTA empieza a disputar y desplazar al PCP-SL de algunos escenarios y zonas donde los senderistas tienen presencia, registrándose varios enfrentamientos armados en la Universidad Nacional del Centro y en los distritos de Andamarca, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba. El rechazo de los pobladores y campesinos al PCP-SL es aprovechado por el MRTA para ganar presencia en algunos sectores campesinos y sindicales.

El MRTA da inicio en 1987 a operativos militares de mayor envergadura, siendo la selva central el escenario principal de las acciones del Ejército Popular Tupacamarista. El Alto y Bajo Yurinaki, Pichanaki; Villarica, Palcazú y Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa y, en menor medida, por muy poco tiempo, en los distritos de Río Negro y Pampa Hermosa, en Satipo, se concentran el mayor número de acciones militares. A partir de 1988, las columnas del Frente Central del MRTA se desplazan con facilidad para «tomar» pueblos y comunidades.

Ante el incremento de las acciones subversivas y la expansión territorial del PCP-SL y el MRTA, el gobierno de Alan García declara a las provincias de Chanchamayo, Oxapampa y Satipo en estado de emergencia en 1988. Pocos meses, se amplía el estado de emergencia en todo el departamento de Junín. El estado de excepción facilita la respuesta contrainsurgente militar. Sin embargo, dicha respuesta se caracteriza por una represión indiscriminada con escasos resultados y un alto costo de víctimas inocentes.

A mediados de 1989, en la selva central, el PCP-SL logra el control absoluto de la cuenca del río Ene y parte de la cuenca del río Tambo, con lo que tiene expedito el dominio de toda la provincia de Satipo (Junín) a costa del arrasamiento de decenas de comunidades, el asesinato de nativos y colonos y el enrolamiento compulsivo de cientos de nativos.

En 1989, la pugna entre el PCP-SL y el MRTA en la UNCP se hace visible alcanzando ribetes sangrientos. El campus universitario se convierte prácticamente en frente de batalla de los grupos subversivos, las FFPP, las FFAA y los paramilitares. Así por ejemplo, el 12 de marzo de 1989 militantes del PCP-SL asesinan a un efectivo policial en la ciudad universitaria. El 28 de

abril, el PCP-SL asesina a tres estudiantes de filiación aprista en el mismo campus. Unos meses después, el 18 de julio, el catedrático Luis Aguilar Romaní es herido mortalmente por presuntos senderistas en la sala de profesores de la Facultad de Pedagogía.

De igual modo, a fines de 1989, «paramilitares» no identificados inician sus acciones, desapareciendo y ejecutando extrajudicialmente a una gran cantidad de estudiantes universitarios, de institutos superiores y colegios secundarios, presuntamente vinculados con los grupos subversivos.

En el transcurso de 1989, el MRTA sufre una serie de reveses a manos de las fuerzas contrasubversivas que diezman de manera evidente su capacidad política y militar en la región. Un duro golpe para esa organización es la captura, en febrero de 1989, del líder emerretista Víctor Polay Campos en Huancayo. Pero el revés más importante, que signa el devenir del MRTA, es el enfrentamiento de Molinos, en Jauja, en el cual mueren 6 militares y 58 emerretistas, de los cuales el MRTA reivindica sólo a 42.

Un tercer revés, ocho meses después, en diciembre, es el asesinato por el MRTA de Alejandro Calderón, presidente de la ANAP (Apatyawaka Nampitsi Asháninka), organización que representa a 52 comunidades nativas del río Pichis y sus afluentes. La respuesta de los nativos fue organizarse en un «Ejército Asháninka» para expulsar al MRTA de su territorio. El MRTA se retira de la zona sin enfrentar a los nativos, asentándose luego en los distritos de Perené y Pichanaki, en Chanchamayo. El 18 de marzo de 1990 el «Ejército Ashaninka» se disuelve, señalando que ya había cumplido su misión.

A los pocos días en diciembre del mismo año, en Iscozacín, Oxapampa, el Ejército destruye un campamento del MRTA y ultima a 43 presuntos subversivos, aunque existe la versión de que la mayoría de las víctimas podrían ser agricultores del lugar.

Todos estos golpes debilitan de manera incuestionable la presencia política y militar del MRTA en Junín y Pasco. Las diezmadas fuerzas del MRTA se repliegan en la selva central, aprovechando el PCP-SL para capitalizar los reveses del MRTA e intensificando sus acciones en la región. En los meses de mayo y junio de 1989 convoca a «paros armados» regionales que paralizan todas las actividades e impiden el normal abastecimiento de productos a la capital. El paro de mayor impacto fue el realizado durante los días 10 y 12 de mayo en los departamentos de Junín, Pasco y Huánuco.

En el campo de las fuerzas del orden se producen algunas modificaciones en su estrategia contrainsurgente. Por un lado, de la represión indiscriminada se pasa a una represión más selectiva; y por otro, el Ejército impulsa la organización de la población rural para su autodefensa. Además toma la iniciativa, y junto a las fuerzas policiales patrulla en zonas consideradas como «rojas».

En noviembre de 1989 se realizan las elecciones municipales, y en abril y junio de 1990, las elecciones presidenciales; las Fuerzas Armadas y Policiales garantizan que estos sufragios se realicen en casi todos los centros de votación de la región. Desde entonces, se hacen comunes los

operativos conjuntos de las fuerzas del orden. Muchas veces, en estos mismos operativos, toman parte algunas rondas campesinas contrasubversivas.

En junio de 1990, el Ejército y la policía ingresan a la UNCP y detienen a más de un centenar de estudiantes presuntamente subversivos, realizando en los meses siguientes operativos similares hasta que en 1991 el Ejército asume el control de la UNCP.

En la selva central, el Ejército da un nuevo impulso a su ofensiva contrasubversiva. A fines de 1991 ingresa a Satipo y organiza de manera compulsiva a la población en rondas urbanas y campesinas; las rondas nativas, que venían haciendo frente al PCP-SL por iniciativa propia, reciben el apoyo del ejército. En 1991, los asháninkas de los ríos Ene y Tambo se organizan en Comités de Autodefensa para enfrentar al PCP-SL. Desde la óptica militar, la zona comienza a ser «pacificada» con numerosos muertos y detenidos-desaparecidos.

En 1992, la violencia alcanza su mayor cúspide en la región. Los atentados dinamiteros, apagones, sabotajes, asesinatos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y «combates guerrilleros» son hechos cotidianos y el temor y la zozobra se apoderan de la población.

1.2.3.4. Final del ciclo de violencia: 1994 - 2000

Se puede señalar que, a fines de 1992, tanto el MRTA como el PCP-SL ya están derrotados, aunque el PCP-SL cuente con capacidad militar para desarrollar acciones contra la población y las fuerzas del orden en la región, incluso después de la detención de Abimael Guzmán ocurrida en setiembre de 1992.

Al parecer, tanto el PCP-SL como el MRTA tuvieron problemas en la región para reponer a sus dirigentes, cuadros y militantes detenidos, desaparecidos, heridos y muertos por acción de las fuerzas del orden y las rondas campesinas contrasubversivas. Se constata que la capacidad militar de ambos grupos, sobre todo del MRTA, disminuye de manera indudable.

En muchos lugares, como el Alto y Bajo Tulumayo, el Cunas y el Alto Canipaco, PCP-SL es desalojado gracias a la acción de las rondas campesinas. Se producen algunos enfrentamientos entre las fuerzas del PCP-SL y los ronderos llevando la peor parte los combatientes del ejército senderista. En tanto, el MRTA continúa replegado en algunas zonas de la selva central. En 1991, reorganiza una columna en Pariahuanca que realiza esporádicas incursiones en los pueblos.

Entre 1993 y 1995 se consolida la derrota y desarticulación del PCP-SL en la región central. El PCP-SL sufre golpes consecutivos en diferentes zonas y deserciones que anulan su capacidad de reagruparse en el campo y las ciudades. Su presencia se reduce a algunas zonas rurales, como la margen izquierda de la cuenca del río Ene, en Satipo, desde donde esporádicamente incursiona en comunidades de los distritos de Pangoa y Río Tambo,

desplazándose a la sierra por Andamarca y Santo Domingo de Acobamba y a la selva de Ayacucho, capacidad que finalmente perderá tras la captura de Oscar Ramírez Duran, «Feliciano», en julio de 1999.

Debemos señalar, sin embargo, que aunque la región prácticamente está pacificada, y las organizaciones subversivas han sido derrotadas política y militarmente, éstas no han sido erradicadas totalmente pues el PCP-SL todavía mantiene presencia en algunas zonas de la selva de Junín (cuenca del Ene, provincia de Satipo) y Ayacucho (cuenca del Apurímac, provincia de La Mar), desde donde todavía incursiona esporádicamente en algunos poblados y caseríos de ambas zonas.

1.2.4. Cronología región central

17/05/80	Pasco. Presuntos subversivos arrojan petardos de dinamita contra el Consejo Provincial y el CE No. 34004.
08/07/80	Yauli. Presuntos miembros del PCP-SL intentan volar con cargas de dinamita el reservorio de agua de CENTROMIN Perú.
17/08/80	Santa Rosa de Sacco, Yauli. Militantes del PCP-SL incendian el local del Concejo Distrital de Santa Rosa de Sacco
01/10/80	Pasco, Pasco. Presuntos subversivos dinamita la mini central de la Cooperativa Agropecuaria de Pacoyán
16/10/80	Tayacaja, Pampas. Presuntos subversivos atacan con dinamita el local de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP).
19/01/81	Huancavelica. El local de la PIP de la ciudad de Huancavelica es dinamitado.
02/03/81	Pasco, Pasco. Subversivos dinamitan la caseta ventiladora y las maquinarias de las instalaciones de Centromin.
18/05/81	Pasco, Pasco. El puesto policial de Atacocha, en Cerro de Pasco, es atacado con cargas de dinamita.
23/06/81	Huancavelica. El puente que une a los distritos de Vilca y Moya es destruido con dinamita.
28/06/82	Pasco. Militantes del PCP-SL asaltan la cárcel de Pasco, liberan 11 inculcados por terrorismo. Mueren un GR y otro queda herido.
16/07/82	Pasco, Daniel A. Carrión, Yanahuanca. Presuntos subversivos atacan con cargas de dinamita la oficina de reclutamiento militar.
30/07/82	Pasco, Pasco. Subversivos dinamitan el local del Banco de la Nación de la ciudad de Cerro de Pasco.
4/08/82	Ingenio, Concepción,. Militantes del PCP-SL asaltan un polvorín del Banco Minero del Perú. Se llevan dinamita y fulminantes.
23/10/82	Huancayo. Presuntos subversivos dinamitan una torre de alta tensión. La ciudad de Huancayo queda a oscuras.
09/12/82	Pasco, Pasco. Militantes del PCP-SL, al mando de una mujer, incursionan en la cooperativa «Racracancha». Luego de saquearla le prenden fuego.
08/12/82	Tayacaja, Colcabamba. Subversivos atacan con cargas de dinamita el puesto de la GC y la vivienda del Juez de Paz. Además izan una bandera roja y cuelgan un perro en la Plaza de Armas.
22/06/83	Pasco, Daniel A. Carrión. Presuntos subversivos asesinan a 8 personas en las localidades de San Juan de Yacán y Paúcar (provincia de Daniel A. Carrión, Pasco).
11/12/83	Integrantes del PCP-SL asaltan las Unidades de Producción de la

	SAIS «Cahuide». En «Laive» incendian la casa hacienda y dinamitan un tractor.
11/1/84	Churcampa. 10 campesinos de las comunidades de Soccos, Palermo y Manzanayocc fueron asesinados por efectivos militares.
30/01/84	Asaltan la mina de Cobriza, dinamitan el puesto de la GC, saquean los puestos comerciales, matan a un obrero y hieren a otro.
18/02/84	Tayacaya y Churcampa. 11 campesinos son asesinados en los distritos de Pampas (Tayacaja) y Chinchihuasi (Churcampa). No se llega a determinar quiénes son los autores.
14/04/84	Huancavelica, San José de Acobambilla. El PCP-SL asesina 20 comuneros en la comunidad de Anccapa.
22/12/85	Pachacayo – Jauja. Senderistas asaltan la Cooperativa Pachacayo (dejan herido un trabajador) y la SAIS Tupac Amaru.
25/10/86	Pachacayo, Jauja,. Columna armada toma la Unidad de Producción CONSACC de la SAIS Tupac Amaru, asesinan al administrador y hieren al sub administrador.
1987	La aparición pública del PCP-SL en la zona del Cunas.
1987	En Chongos Alto arriba el «nuevo poder» del PCP-SL, cuando algunas de sus columnas incursionan reiteradamente en ese distrito.
1987	Sistemáticos ataques del PCP-SL contra la Unidad Laive de la SAIS Cahuide destruyendo el mobiliario y sacrifica un número indeterminado de ganado de raza.
1987	El PCP-SL inicia sus actividades violentas en la cuenca del Tulumayo
1987	A fines de ese año el MRTA también ingresó, aunque de manera esporádica, a algunas comunidades y poblados del Tulumayo.
10/07/87	Pachacayo, Jauja, Grupo senderista ataca instalaciones de la SAIS Pachacutec, asesinan al administrador y saquean el almacén.
Enero 1988	El PCP-SL organiza un encuentro de pobladores de Chongos Alto, con el objetivo de implantar un Comité Popular.
02/01/88	Junín, Satipo. Más de una decena de senderistas en forma sorpresiva llegaron a la localidad de Puerto Ocopa en 2 lanchas, después de saquear el pueblo dieron muerte a un colono de varios balazos en la cabeza.
28/01/88	Junín, Concepción, Comas. 15 presuntos subversivos asaltaron numerosas tiendas comerciales, apoderándose de especies de valor por un monto de un millón de intis.
18/02/88	Huancavelica. 9 militares y 2 civiles que integraban un grupo de apoyo del ejército fueron muertos por senderistas en la localidad de Lachocc. Las víctimas viajaban por carretera hacia Villa Armas.
13/03/88/	Junín, Chanchamayo, Pichanaki. MRTA ataca el puesto policial. Mueren 3 policías y 50 presuntos subversivos.
20/04/88	Junín, Satipo, Pichanaki. MRTA toma la localidad de Pichanaki y arengan a la población a integrarse a la «lucha armada».
24/6/1988	Ante la posibilidad de que ocurriera un hecho similar al de Chongos Alto, los comuneros de Llamapsillón decidieron organizarse en una ronda de autodefensa que fue reconocida por las Fuerzas Armadas en la localidad de Chaquicocha.
17/11/88	Pasco, Daniel A. Carrión. Presuntos subversivos de PCP-SL asesinan al Alcalde, agente municipal y 2 dirigentes comunales en Pillao y Astobamba.
2/2/1989	Militantes del PCP-SL toman la Hacienda Colpa, matan a cuchillazos a 157 ovinos y 6 vacunos, hiriendo a otros 10 animales y llevándose 8 vacunos.
3/2/1989	Víctor Polay Campos, jefe militar del MRTA, es capturado en el Hotel de Turistas de Huancayo.

4/4/89	Huancavelica. Asesinato de 10 campesinos, presuntamente senderistas, en la comunidad de Santa Rosa de Pachaclla.
28/04/89	Jauja. 63 presuntos miembros del MRTA mueren en un enfrentamiento con el Ejército en el distrito de Molinos..
11/5/1989	El Ejército y la Policía Nacional intervienen en dos oportunidades la Universidad Nacional del Centro en busca de elementos terroristas, debido al reparto de volantes que anuncian un paro armado los días 10, 11 y 12 en el departamento de Junín.
17/5/89	Junín, Satipo. 14 campesinos fueron asesinados, según versiones de diversos pobladores, por miembros del Ejército, en el poblado de Calabazas.
7.12.89	Huancavelica. 20 campesinos, integrantes de las rondas campesinas contrasubversivas fueron asesinados por senderistas, en San José de Acobambilla.
11/1989	Al igual que en las zonas altas del Canipaco y Cunas, la oposición al orden senderista también fue alentada por el Ejército, como se constata cuando una patrulla militar visitó la comunidad de Pusacpampa, reunió a la población y los instó a que se organicen en rondas campesinas.
17/12/89	Pasco, Oxapampa. En Iscozacín, 43 presuntos miembros del MRTA mueren en un enfrentamiento con el Ejército. La mayoría de las víctimas podrían ser agricultores del lugar.
8/1/90	Pasco, Oxapampa. Ejército ejecuta a 6 presuntos miembros del MRTA y a 20 campesinos acusados de colaborar con el MRTA.
19/1/90	Los pocos pobladores que aún quedaban en el pueblo de Cochas, acordaron <i>organizar rondas campesinas</i> y dirigirse al pueblo de Tunzo. Allí, junto con pobladores de las comunidades de Parco, Huancamanta, Lucmayo y Macon (anexos del distrito de Cochas), y Comas, Talhuis, y Racracalla (anexos del distrito de Comas).
Marzo/1990	Los delegados de todas las comunidades se reunieron en una asamblea general, acordando la formación del Comité Central de las Rondas Campesinas del Alto y Bajo Tulumayo.
7/3/90	Tayacaja. Un grupo de paramilitares asesinó a 18 desplazados refugiados en el distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Entre las víctimas se encuentran mujeres, ancianos y niños. También desaparecieron 7 personas.
13/3/90	Tayacaja. Se produjo la muerte de 18 personas de origen ayacuchano en el Barrio de Picca Junco, Pampas por parte de 8 encapuchados, presuntamente miembros del ejército peruano.
19/6/90:	Junín, Satipo. El PCP-SL arrasa la comunidad nativa de Marankiari (zona alta de Satipo), las versiones sobre el número de víctimas son contradictorias, unos hablan de 30 a 40, otros de 70 a 80.
17/11/90	Junín, Satipo. El PCP-SL asesina en Puerto Ocopa a 5 dirigentes de la Central Asháninka de Río Tambo que organizaban la resistencia.
1990	Junín, Satipo. 76 profesores desaparecen en la selva durante 1990. Los docentes que prestaban servicios en la selva de Satipo fueron capturados por el PCP-SL. Según el Director de la USE-Satipo, muchos murieron y otros fueron ganados por el PCP-SL.
22/5/1991	El PCP-SL asesina en Huasahuasi, Tarma, a la monja Irene Mc Cornack, al presidente dela comunidad Pedro Pando, al exteniente alcalde Alfredo Morales y al dirigente Agustín Vento.
7 /6/91	Un contingente del PCP-SL ingresó a La Merced y asesina 4 ersonas entre ellas el alcalde distrital.
18/6/91	Treinta y cinco estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo), desaparecen. Presunta responsabilidad de paramilitares.
08/02/92	Ulcumayo, Junín, 15 campesinos muertos es el saldo de una incursión

	subversiva en la comunidad de Ulcumayo.
1/03/92	Junín, Concepción, Comas: Los ronderos capturan a los asesinos del subprefecto de Huancayo, los ajustician y los «fondean» en la laguna de Huacracocha.
04/03/92:	Huancayo. El PCP-SL asesina 8 profesores y 2 empleados del Colegio Secundario Ramiro Villaverde.
27/4/92	Junín, Satipo, Puerto Ocopa. El EP rescata de manos de PCP-SL 127 asháninkaS.
3/5/92	Pasco, Oxapampa, Villa Rica. Unos 400 subversivos de PCP-SL atacan el puesto policial. Mueren 3 policías, 1 soldado y 1 subversivo.
18/05/92	Junín, Satipo, Pichanaki. Unos 150 subversivos atacan al puesto policial de Pichanaki: 1 muerto y 3 heridos de los sinchis.
10/06/92	Pasco, Oxapampa-Villa Rica-Sanchiria: El EP da muerte a 20 subversivos del MRTA.
19/06/92	Junín, Satipo, Mazamari-Dos de Mayo: Subversivos toman el pueblo y dan muerte a 7 pobladores.
27/7/92	Chupaca, Junín: Marcelino Arrieta La Torre, ex-alcalde de Chupaca, es asesinado por presuntos subversivos.
2/8/92	Huancayo. Fueron identificados los cuerpos de dos jóvenes asesinados a balazos en Quebrada Honda y en las inmediaciones del cementerio de Umuto. Se trata de una estudiante de Servicio Social de la UNCP y de Judith Betzabé Huamán Quispe, ex-alumna del Colegio María Inmaculada.
12/10/92	Huasahuasi, Tarma,: 5 autoridades han desaparecido misteriosamente y sus familiares indagan por sus paraderos.
15/10/92	Moyobamba, Jauja: Ronderos matan a tres abigeos luego de torturarlos.
21/10/92	Sincos, Jauja: Masacre en Sincos: 8 asesinados, podrían estudiantes de la UNCP. Mientras en Sicaya aparece universitaria victimada.
25/10/92	Sincos, Jauja y Huancayo: aparecen otros 5 cadáveres: 2 en Sincos, 3 en Huancayo.
6/12/92	San Pedro de Cajas, Tarma: PCP-SL ataca pueblo y degüellan a 7 comuneros en la plaza de armas del lugar.
7/6/93	Jauja. En ceremonia castrense de entrega de armas a los ronderos, algunos presuntos subversivos se entregaron a la justicia.
Julio 1993	La Fiscal de la Nación Blanca Nélica Colán viaja a Huancayo para investigar las desapariciones de 89 estudiantes, entre ellos 20 universitarios, secuestrados por presuntos paramilitares.
11/8/93	Junín, Satipo. 54 nativos asháninkas son asesinados a machetazos por presuntos senderistas.
14/8/93	Pasco, Huachón. Entregan armas a los ronderos de Huachón. Participan delegaciones de las rondas de Quipacra, Chipó, Pugmaray, Ranyac, Liriopampa, Socorro y Florida.
19/8/93	Junín, Chanchamayo, La Merced, Kivinaki. PCP-SL mata a machetazos a 8 personas.
20/8/93	Satipo: Comunidades de Santa Isabel, Santa Rosa, Monte Rico, Jerusalén, San Isidro, Tahantinsuyo e Irriari. Unos 200 subversivos, distribuidos en tres grupos, llegaron a las comunidades referidas y atacaron a los pobladores.
16/10/93	Pasco: En ceremonia castrense se entregan armas a los ronderos para que luchen por la pacificación.
29/5/94	Junín, Chanchamayo. Enfrentamiento con el MRTA en San Juan Boca Tigre. El EP dio muerte a dos sediciosos no identificados.
Junio-Julio	Satipo: PCP-SL mata alrededor de 70 nativos cautivos en Quenteroni

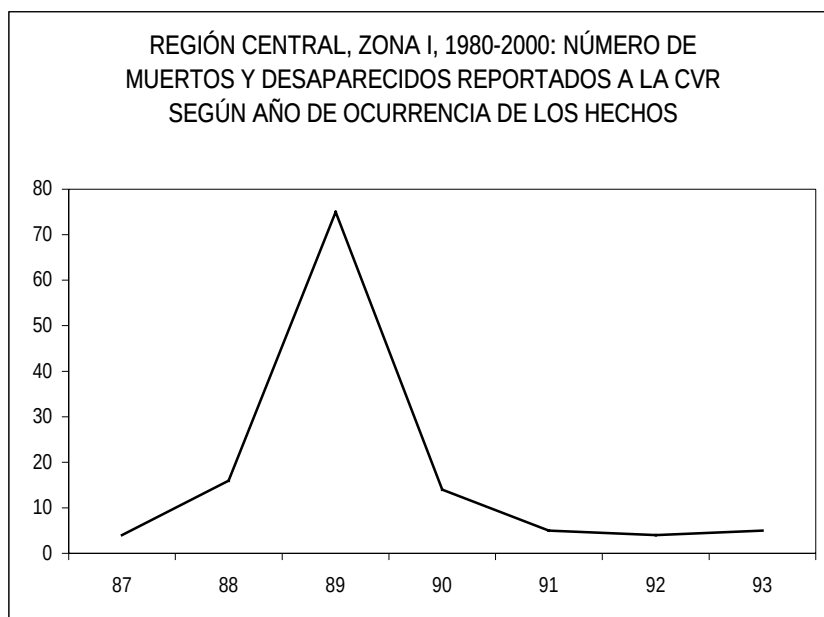
1994	(zona alta de la comunidad nativa de Samaniato, río Ene).
14/7/94	Junín, Chanchamayo, La Merced. En una emboscada del MRTA dos policías son asesinados.
26/03/95	Huancayo, Margie Clavo Peralta fue capturada en El Tambo, junto a ella, detienen a Rodolfo Gutiérrez Muñoz, mando militar.
10/05/95	Pasco, Yanacancha Presuntos subversivos atacan contra Bravo Quispe, alcalde de Yanacancha, resultando muerto su chofer y otras personas.
07/06/95	Junín, Satipo, Puerto Tambo: El EP dio muerte a dos varones y una mujer presuntos integrantes del PCP-SL.
27/07/95	Junín, Satipo, Pichanaki. 12 presuntos subversivos mueren en enfrentamiento con el EP.
24/1/96	Junín, Satipo, San Martín Pangoa, En enfrentamiento con los ronderos, PCP-SL asesina a tres ronderos. En la refriega Mueren 5 presuntos senderistas.
7/7/98	Huancayo. Soldados desocupan la ciudad universitaria de la UNCP
14/7/99	Huancayo. La policía captura a Oscar Ramírez Duran, «camarada Feliciano».
11/7/99	Tayacaja, Huachocolpa: Subversivos acribillan a dos campesinos de 15 y 25 años.

1.2.5. Zona I: zonas altas de Junín

En esta Zona I de la Región Central hemos incluido las zonas altas de Junín conocidas como las zonas del Canipaco y del Alto Cunas, en las actuales provincias de Huancayo y Chupaca. Se trata de historias paralelas en el tiempo y en mucho similares en eventos, por lo tanto nuestra división es meramente expositiva a fin de facilitar la comprensión del ciclo de violencia política en estos espacios alto andinos del departamento de Junín.

REGIÓN CENTRAL, ZONA I, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN DISTRITOS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

DISTRITOS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	123	-	-	-	-	-	-	-	4	16	75	14	5	4	5	-	-	-	-	-	-	-
HUANCAYO																						
CHACAPAMPA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHICCHE	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CHONGOS ALTO	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-
CONCEPCIÓN																						
CHAMBARA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN JOSE DE QUERO	43	-	-	-	-	-	-	-	3	8	22	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
CHUPACA																						
AHUAC	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN JUAN DE JARPA	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YANACANCHA	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.2.5.1. Canipaco: Chongos Alto, Chicche y Yanacancha

1.2.5.1.1. Datos Generales

Los distritos de Chongos Alto, Chicche, Chacapampa y Yanacancha, 60 Km. al oeste de la ciudad de Huancayo, se ubican en la cuenca del río Colca, cuyos afluentes más importantes son los ríos Canipaco y La Virgen. A este espacio geográfico se le suele denominar *zona del Canipaco*, en la parte meridional del valle del Mantaro, abarcando llanuras quechuas entre 3000 y 4000 msnm, y zonas de puna por encima de esta cota.

Los principales complejos ganaderos pertenecientes a las SAIS se encontraban a inicios de la década de 1980 en Tucle, Antapongo-Canipaco, La Virgen y Laive, habiéndose modernizado la actividad ganadera con la introducción de pastos extranjeros, aclimatando nuevas razas de ovinos y vacunos, además del cruce de camélidos. Con ello, se incrementó la producción de leche y sus derivados (mantequilla, yogurt, manjar), así como de carne y lana de alta calidad. Trigo, cebada, papas y habas son los principales cultivos y la economía de la mayor parte de la población gira en torno a la comercialización de estos productos agrícolas.

Durante la década de 1980, en estos tres distritos, la organización comunal fue perdiendo capacidad de convocatoria, gestión e intermediación con el Estado, mientras que los gobernadores, tenientes gobernadores, jueces, alcaldes y regidores se encontraban muy deslegitimados, debido al desdén y la apatía en el cumplimiento de sus funciones pero sobre todo a su imagen de autoridades corruptas. En este contexto, el PCP-SL aparece en la zona, aunque por sus extensas planicies alto andinas y el poco número de habitantes, el Alto Canipaco no fue considerado como área privilegiada para el accionar del PCP-SL.

1.2.5.1.2. Historia de la violencia

1.2.5.1.2.1. «Batiendo el campo»: 1987-1989

Como parte de sus planes de expansión luego de 7 años de experiencia política y militar en Ayacucho y Huancavelica, recién en 1987 los militantes del PCP-SL incursionaron por primera vez en la zona, desplazándose posiblemente algunos de ellos desde la cuenca vecina del Vilca, en Huancavelica. Los senderistas tomaron contacto con los pobladores de algunas localidades, entablaron diálogos amistosos con los lugareños y fueron muy receptivos a sus reclamos y demandas. Este acercamiento cordial del a «las masas campesinas» les permitió detectar algunos de los problemas más sentidos de la población, y a partir de ellos utilizar hábilmente una serie de reivindicaciones bajo su perspectiva, sobre todo los conflictos surgidos por la presencia de la SAIS y los linderos en disputa entre comunidades, además del sentimiento compartido contra la corrupción de las autoridades y los «malos elementos» (adúlteros, mentirosos y ladrones de ganado). El discurso senderista, levantado de manera insistente, propone poner fin a la secular marginación, olvido y pobreza de los campesinos, despertando expectativa entre los pobladores. Sin embargo, el objetivo central de la estrategia senderista fue el ataque, saqueo y destrucción de la Sociedad Agraria de Interés Social Cahuide.

En Chicche, la ex hacienda Laive, convertida en una Unidad de Producción de la SAIS Cahuide en la margen derecha del río Mantaro, sería visitada una y otra vez por los militantes senderistas. En cada una de estas visitas, los senderistas congregaron a los trabajadores y les hablaron del «pensamiento Gonzalo», de los avances de la «guerra popular» y de la necesidad de acabar con «la continua explotación de los patrones y el viejo Estado».

Hacia fines de 1987, el PCP-SL obligó a renunciar a las autoridades locales, las mismas que en algunos lugares seguirían en funciones en la más absoluta clandestinidad. De otro lado, las incursiones senderistas a la SAIS Cahuide se alternaban con el hostigamiento a los puestos policiales ubicados en la zona del Canipaco, atacando ese mismo año el puesto policial de Chongos Alto, hasta lograr que los policías se retiren de la zona.

Los sistemáticos ataques contra la Unidad Laive de la SAIS Cahuide se incrementan a fines de 1987, cuando un grupo senderista destruye el mobiliario y sacrifica un número indeterminado de ganado de raza. Estas tropelías del PCP-SL ocurren en un momento crítico para la SAIS Cahuide. En 1988, la Asamblea General de Socios discutía sobre el futuro de la Empresa, mientras negociaba sus propiedades y llegaba a rematar sus tierras a precios irrisorios, llegando en una ocasión a vender 40 Hectáreas de tierras en \$500. Esta situación era criticada acremente por los trabajadores, que denunciaron una y otra vez la nefasta gestión de la «cúpula» gerencial.

El PCP-SL pretendió capitalizar el descontento de los trabajadores asesinando a algunos directivos de la «cúpula», como el gerente de la SAIS, asesinado en Lima, o el administrador, en un paraje muy cercano a la Unidad de Producción de Antapongo.

En Chongos Alto, el arribo del «nuevo poder» data también del segundo semestre de 1987, cuando las mismas columnas del PCP-SL incursionaron de manera reiterada en el distrito reuniendo a los pobladores, en particular a los más jóvenes, para decirles que «los pobres no debían estar marginados sino alcanzar el poder para cambiar los rumbos».

Las incursiones y el hostigamiento contra las fuerzas policiales continuaron los primeros meses de 1988. Poco tiempo después la policía abandona la zona, refugiándose en Huancayo. Del mismo modo, la consigna senderista de que todas las autoridades renunciasen a sus cargos fue acatada sin ninguna oposición. Sin embargo, las autoridades elegidas se mantuvieron en la clandestinidad hasta 1992. Así, las autoridades se reunían «a escondidas» para evaluar el trabajo de las personas designadas en los cargos de la comunidad.

En la rápida expansión de su influencia en la zona, el PCP-SL organiza en enero de 1988 un encuentro de pobladores de Chongos Alto, con el objetivo de implantar un Comité Popular, designándose algunos comuneros como responsables del mismo.

En este encuentro, los comuneros de Chongos Alto solicitaron que los menores de 18 años no participasen de las incursiones senderistas. Asimismo, demandaron que se les diera libertad a los jóvenes para abandonar el distrito si así lo deseaban. En tanto que, si alguno de ellos se quedaba por propia voluntad, los Comisarios locales serían los encargados de supervisar su comportamiento. Los mandos de la columna senderista aceptaron los pedidos de los pobladores, pero la vida cotidiana empezó a ser supervisada por las nuevas autoridades. El discurso senderista al parecer caló entre algunos comuneros más jóvenes, designados precisamente como nuevas autoridades.

Un mes después, los senderistas destruyeron la sucursal del Banco de la Nación ubicada en la capital del distrito, continuando sus «juicios populares» de adúlteros y abigeos del lugar. Los mandos consultaban a los comuneros reunidos por el destino del infractor, llegando algunas veces a perdonarles la vida a pedido de la población.

En el primer semestre de 1988, los militantes del PCP-SL, posiblemente integrantes de la misma columna que actuó en Chongos Alto, incursionan en el distrito de Chacapampa. Eran alrededor de una treintena de hombres y mujeres armados que llegaron a la plaza principal, y con arengas y disparos al aire reunieron a los pobladores, anunciándoles que la «guerra popular arde victoriosa» y que «el partido lucha por los pobres». Un pequeño grupo de senderistas ingresó al Municipio y la Gobernación, incinerando documentación de dichas dependencias en medio de la plaza.

Tiempo después, siguiendo la misma estrategia, el PCP-SL amenazó a las autoridades locales de Chacapampa, quienes renunciaron a sus cargos o huyeron del lugar. El PCP-SL nombró a sus delegados, como parte del «nuevo orden», según el cual cualquier desobediencia a sus reglas

se pagaba con la muerte, mientras que en cualquier momento del día, la población podía ser convocada para dirimir cualquier problema, sea familiar o comunal, y los pobladores acudían a los mandos senderistas para que solucionen algunos de sus problemas y conflictos. En el vecino distrito de Huasicancha, la columna asesinó en esa época a tres personas: una enfermera, un aserrador y un agricultor.

El mismo año de 1988, el PCP-SL incursionó en Palmayoc, anexo de Chongos Alto, provocando desconcierto y miedo entre la población, manteniéndose el temor constante al escuchar que «batallones subversivos rondaban el lugar». El avance organizativo senderista llegó en 1989 a Llamapsillón, anexo del distrito de Chongos Alto. En un primer momento, la prédica del PCP-SL fue escuchada con mucha expectativa por los comuneros, quienes consideraron que el PCP-SL tenía razones suficientes para levantarse en contra de un orden injusto. Sin embargo, el encanto inicial se irá perdiendo en años posteriores ante los comuneros masacrados, alcaldes asesinados y comunidades incendiadas que el PCP-SL dejaba a su paso, generando una creciente oposición en las comunidades.

A inicios de 1989, el PCP-SL lanza una ofensiva de envergadura contra la Unidad de Producción Laive, destruyendo la maquinaria para el procesamiento de la leche y sus derivados, incendiando los pastos, saqueando la casa-hacienda y distribuyendo el ganado entre los trabajadores.

Esta ofensiva senderista también destruyó las Unidades de Producción de Tucle-Río La Virgen y Antapongo. Cerca de 80 trabajadores de Antapongo y aproximadamente 50 de la Hacienda Tucle, se repartieron los muebles y dinero de manera equitativa. En tanto, las comunidades de Palmayoc, Palaco, Llamapsillón y Chongos Alto, instigadas por los senderistas, terminaron de saquear y repartirse los bienes y enseres de dichas Unidades de Producción. La mayor parte de los trabajadores de ambas Unidades de Producción pertenecían a estas cuatro comunidades. Todas las acciones mencionadas quedan resumidas en el lema enarbolado por las columnas senderistas: «Arrasando con la semi feudalidad en el campo...Destrucción total de la SAIS, obra del pueblo, con dirección del PCP-SL».

El reparto de los bienes acrecentó aún más las simpatías de la población, en particular de los jóvenes. Muchos de ellos se enrolaron en las filas del PCP-SL por propia voluntad, aunque otros fueron incorporados a la fuerza. El eco y aceptación que tuvo la prédica del PCP-SL entre los campesinos se puede entender teniendo en cuenta dos razones: los beneficios concretos que obtenían, como por ejemplo la repartición del ganado, y de otro lado la promesa de sacarlos de la pobreza, del secular abandono y la marginación.

Meses después, una pequeña columna senderista, integrada por doce personas, llegó a la misma zona. La fase inicial de acercamiento y convencimiento de la población se cortó abruptamente, reemplazándose el trato amical de los primeros militantes por las órdenes y el

maltrato verbal de los recién llegados. Pocas semanas después, casi se completó la renuncia de las autoridades de la zona, por temor a ser asesinados.

Se creó así, un vacío de poder y autoridad que no pudo ser reconstituido inmediatamente por El PCP-SL, incapaz de nombrar y mantener en el cargo a sus propias autoridades, ya que en muchos casos las personas designadas como representantes del «nuevo poder» o bien no aceptaban el cargo o bien huían del lugar. En otros casos, los pobladores desobedecían los mandatos e imposiciones de las autoridades senderistas. Asimismo, el PCP-SL no tuvo en cuenta que, en algunas localidades, muchas de las autoridades, sobre todo comunales, actuaban en la clandestinidad.

Una vez que el ganado repartido por El PCP-SL durante su incursión a la SAIS Cahuide se fue muriendo por falta de una atención adecuada y los ingresos de los pobladores se redujeron al mínimo, muchos comuneros optaron por migrar a las ciudades más cercanas.

El 12 de enero de 1989, Manuel Soto, director el Centro de Investigación Campesina y Educación Popular (CICEP), además de Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y Víctor Lozano, dirigente campesino, fueron asesinados por el PCP-SL.

1.2.5.1.3. La matanza del 12 de abril de 1989: fin del buen entendimiento

Los maltratos verbales y físicos, la exigencia cada vez mayor de alimentos para sus militantes, la incorporación forzada de muchos jóvenes a sus fuerzas militares, la destrucción de la poca infraestructura local y la prohibición de comerciar con otras regiones, fueron creando las condiciones para la oposición de los pobladores. Sin embargo, el miedo a la muerte contuvo la respuesta de la población.

En esas circunstancias, algunas autoridades que actuaban en la clandestinidad se reunieron para evaluar la situación y proponer una respuesta colectiva contra los senderistas. Estos acuerdos llegaron a oídos del PCP-SL que organizó una acción punitiva para «ajusticiar» a varias de las personas que tomaron parte en aquella reunión, junto a otros pobladores. Esta acción se desarrolló el 12 de abril de 1989, cuando entre las 4:30 y las 5:00 a.m., una columna de aproximadamente cincuenta senderistas tomó la plaza de armas de Chongos Alto. Cinco de ellos portaban armas de largo alcance y el resto estaban armados con palos, fierros y cuchillos. De inmediato convocaron a la población del lugar. Los senderistas tenían 12 personas detenidas, 11 autoridades y ex autoridades, y un poblador, de Chicche, Llamapsillón y Chongos Alto.

En medio de las arengas y vítores al presidente Gonzalo y la guerra popular, los senderistas degollaron a una de las personas y acribillaron a las 11 personas restantes. Entre las personas asesinadas figuraban Amadeo Vilcapoma Campuzano, de 26 años, presidente de la comunidad de Chongos Alto, Melanio Castellón Román, vice-presidente de la comunidad, Genaro Chanco Ricse, ex gobernador de Chongos alto, Julián Porta, comunero, y Víctor Castellón, profesor. Luego incendiaron la Municipalidad, el local de la Policía Nacional y el Banco Agrario antes de retirarse

Debemos mencionar, de otra parte, que Chongos Alto y Huasicancha disputaban la propiedad de 10 mil Has. de tierras desde mucho tiempo atrás, y ambas comunidades buscaron resolver su litigio acudiendo a los mandos de la columna senderista. Los mandos prometieron a ambas comunidades que resolverían el problema de manera «justa». Algunos comuneros opinan que la matanza del 12 de abril fue instigada por los comuneros de Huasicancha, pues algunos de éstos acusaron a los pobladores de Chicche, Llamapsillón y Chongos Altos de querer denunciar a los integrantes de la columna senderista.

1.2.5.1.4. Rondas y ofensiva militar: 1990-1992

La cruenta represalia senderista aceleró la decisión de los pobladores de Chongos Alto de enfrentarlos abiertamente. Por ello, una comitiva integrada por unas cuantas autoridades y pobladores del lugar, marcharon luego de los asesinatos al cuartel del Ejército en Huancayo para manifestar su decisión y voluntad de luchar contra los subversivos del PCP-SL. Ante la posibilidad de que ocurriera un hecho similar al de Chongos Alto, los comuneros de Llamapsillón decidieron organizarse en una ronda de autodefensa que el 24 de junio de 1989 fue reconocida por las Fuerzas Armadas en la localidad de Chaquicocha.

A mediados de 1991, las Fuerzas Armadas se instalaron en Vista Alegre, distrito de Chicche, zona de ingreso al valle del Canipaco. La relación inicial entre los militares y los pobladores de la región era de mutua desconfianza. De un lado, el Ejército consideraba al Alto Canipaco como una «zona roja» y por lo tanto, dudaba de la intención de los pobladores de acabar con la subversión. Por otro, los pobladores tenían justificadas sospechas del comportamiento militar reñido con el respeto irrestricto de sus derechos ciudadanos.

Los efectivos militares detenían a los pobladores sin mediar motivo alguno, y en otras mataban algunos animales de la comunidad «por matar el tiempo». Se conoce asimismo que, en no pocas ocasiones, el ejército detuvo y desapareció a algunos pobladores de la zona. Entre ellos se menciona a Clímaco Vásquez, detenido y desaparecido luego de ser asediado de manera frecuente por el ejército al considerarlo integrante del PCP-SL. Los efectivos militares le ordenaron que fuera a la base militar para recoger un documento que le permitiese transitar con libertad. Se le vio ingresar al cuartel y desde ese momento se desconoce su paradero.

Otros casos son los de Nuncia Machacuay, detenida y desaparecida por efectivos militares acantonados en Vista Alegre, y Levi Vivas quien una noche encontró a sus dos hijos muertos en su vivienda. Al parecer, el ejército los había asesinado y Vivas denunció el hecho ante las autoridades correspondientes, pero la última vez que se le vio vivo había sido intervenido por efectivos militares.

Los militares jugaron un papel de primer orden en la organización de la población para su propia defensa. Así, durante los primeros meses siguientes a su asentamiento en Vista Alegre recorrieron los anexos de Chongos Alto, Chicche y Yanacancha invocando a los comuneros a que

se organicen en rondas campesinas. El 15 de Septiembre de 1992 se forma la Ronda Campesina de Chongos Alto, designándose como Presidente a Zenón Lapa Campuzano.

El Ejército puso particular atención en organizar a la población en cada una de las 17 comunidades campesinas del Alto Canipaco. En 1992, el Ejército tenía agrupados y registrados a 1586 ronderos. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, fueron entrenados en el manejo de armas, en elementales tácticas militares y en ejercicios físicos. Las labores de patrullaje y la vigilancia de la región fueron asumidas por las rondas tal y como el Ejército lo dispuso, cumpliendo los ronderos muchas veces turnos de 24 horas al día. A fin de tener un control más efectivo de la población rondera, los militares aparecían de manera imprevista en alguna comunidad para verificar si los ronderos llevaban a cabo las tareas asignadas. El incumplimiento de las mismas era sancionado con extenuantes ejercicios físicos. En algunos casos, las rondas patrullaron la región junto a los efectivos militares, pero la mayoría de veces los ronderos patrullaban solos, previa autorización militar.

La violencia cambio el contexto de la zona radicalmente pues las Unidades Productivas de la SAIS desaparecieron destruidas, con la colaboración activa de una parte de la misma población campesina mientras que las autoridades habían renunciado masivamente. En apenas tres años, el PCP-SL pasó de ser aceptado, al menos pasivamente por las comunidades, a ser rechazado activamente por las mismas.

La presencia del Ejército, como reconoce la población, trajo la paz en la zona. La instalación de una base contra subversiva y la organización de la población en rondas, fueron las condiciones para que la columna senderista no volviera a aparecer y se retirara sin ofrecer ningún enfrentamiento a ronderos y militares. El orden social se fue restableciendo lentamente, algunas autoridades comunales asumieron sus cargos, mientras que la presencia del Estado se reducía al Ejército.

1.2.5.2. La cuenca del Cunas: San Juan de Jarpa y San José de Quero

1.2.5.2.1. Datos Generales

La cuenca del río Cunas, comúnmente dividida en Alto y Bajo Cunas, comprende los distritos de Yanacancha, San Juan de Jarpa, San José de Quero y parte de los distritos de Chambará y Ahuac. Se trata, al igual que la zona que vimos anteriormente, de una zona alto andina con altitudes entre 3,640 y 4,100 msnm, perteneciente a la reciente Provincia de Chupaca, del departamento de Junín, y limítrofe con el distrito de Chongos Alto, de la provincia de Huancayo, que vimos en el acápite anterior.

La población es básicamente comunera, y el total de más de 10000 habitantes en 1994 incluía 3620 habitantes de seis comunidades en el distrito de San Juan de Jarpa (San Juan de Jarpa (1432), Chucupata (323), Santa Cruz de Ranra (256), Acac Bellavista (429), Misquipata (408) y Shicuy (772); y ocho comunidades, con 7528 pobladores, en el distrito de San José de Quero (San José de Quero (800), Chaquicocha (585), Usibamba (2083), Santa Rosa de Huarmitá (1250), San Roque de Huarmitá (740), Chala Alta (410), Chala Baja (560) y San Pedro de Sulcán (1100).

El acceso a esta zona básicamente ganadera y de cultivos de altura, es posible por una vía carrozable de penetración que vincula centralmente los distritos de Yanacancha y San Juan de Jarpa y el anexo de Chaquicocha, en el distrito de San José de Quero, que tienen la mayor fluidez de vehículos de transporte. En los otros distritos y anexos el servicio de transporte es restringido y en algunos casi nulo. Pero, como se constata en el valle del Mantaro, el acceso a servicios es bastante más amplio que en la mayoría de áreas rurales del país; así, el 95% de la población en la zona cuenta con energía eléctrica domiciliaria, y existen centros de salud en las capitales de los distritos, mientras algunos anexos disponen de Puestos de Salud.

Asimismo, todos los distritos y sus anexos cuentan con locales de educación inicial. En el nivel primario, existe una escuela en cada distrito y en cada uno de sus anexos, cumpliendo con el funcionamiento de sus 6 grados. Además todos los distritos y sus anexos cuentan con Colegios secundarios, teniendo un normal funcionamiento los 5 grados de estudios.

1.2.5.2.2. .Historia de la violencia

1.2.5.2.2.1. La organización de Comités populares: 1987-1989

La aparición pública del PCP-SL en la zona del Cunas ocurre el mismo año, en 1987, que en la zona del Canipaco, de la misma manera que su presencia es cancelada en 1991.

La columna senderista se instalan inicialmente en las comunidades, cercanas entre sí, de Shicuy (San Juan de Jarpa) y San Pedro de Sulcán (San José de Quero), desplazando a las autoridades locales por Comisarios elegidos entre comuneros jóvenes, con cierta ascendencia en la comunidad. Aquí, una vez más se confirma la estrategia nacional del PCP-SL de ahuyentar o eliminar a las autoridades elegidas por el voto popular, y a los representantes del Estado como Gobernadores y Tenientes Gobernadores, estrategia complementada con la destrucción de instalaciones institucionales, como el Centro de Promoción y Capacitación (PROCAD).

Shicuy y San Pedro de Sulcan se organizan como Comités Populares, cuyos responsables locales organizan pintas, volanteo y bloqueo de carreteras, mientras el Comisario de Seguridad amenaza a todo aquel que se oponga a su causa, tal como sucede en el «ajusticiamiento» de comuneros y autoridades ejecutados por los integrantes de la columna.

El apoyo recibido de parte de sectores comuneros tiene relación directa, entre otros, como vimos anteriormente, con la propuesta de desaparición de las Unidades de Producción de las SAIS «Cahuide», «Heroínas Toledo» Y «Túpac Amaru», ubicadas en el distrito de Yanacancha, en los anexos de Chaquicocha y Usibamba.

En 1987 las amenazas del PCP-SL se expanden en el distrito de San José de Quero, en el Alto Cunas, obligando a las autoridades para que renuncien a sus cargos. El 9 de junio de 1988, en Chala, es asesinado de dos balazos en la cabeza el Ing. Jefe del Proyecto de Agua Potable de la entonces CORDE-JUNÍN, junto con su hijo, estudiante de la UNCP.

Pocas semanas antes se registran las primeras víctimas en el Bajo Cunas, el 14 de mayo de 1988, cuando los senderistas victiman de dos balazos en la cabeza al empleado de una empresa auditora en la Unidad de Producción Colca de la SAIS «Heroínas Toledo», ubicada en el distrito de Chabará.

Asimismo, en Chaquicocha, en Quero, el 21 de agosto de 1988 el PCP-SL asesina al hermano e hijo de un ex-dirigente del Partido Aprista Peruano. Pocos días antes, en la madrugada del 18 de agosto, el PCP-SL había incursionado violentamente en la capital del distrito de San Juan de Jarpa, asesinando al Gobernador Alejandro Molina Alvarado, dinamitando e incendiando además locales públicos y privados como los de la Municipalidad, el Centro de Promoción y Capacitación (PROCAD), y la casa de Benedicto Melgar Quispealaya, alcalde distrital, ubicada en la plaza de armas.

La destrucción de las empresas asociativas continúa en 1989 en el Bajo Cunas. Así, en la madrugada del 2 de febrero de 1989, militantes del PCP-SL toman la Hacienda Colpa, matan a cuchillazos a 157 ovinos y 6 vacunos, hiriendo a otros 10 animales y llevándose 8 vacunos. Al igual que la destrucción de las empresas, el asesinato de autoridades no se detiene. En la madrugada del 13 de febrero de 1989, un número no determinado de senderistas ingresó a San José de Quero, extrajo violentamente de su domicilio a Ciro Clemente Cairo, Alcalde del distrito, y lo asesinó de dos balazos en la carretera que da acceso a dicha comunidad, procediendo luego a incendiar los locales de la Municipalidad, de la Comunidad y la casa del Juez de Paz. El Alcalde y el Juez de Paz eran las únicas autoridades que no habían renunciado a sus cargos, pues todos los regidores y el Gobernador habían dimitido tiempo atrás.

El 5 de abril de 1989, los senderistas asesinaron, en la plaza del pueblo de Chaquicocha, a un Agente Municipal y a un vigilante de la Unidad de Producción de la SAIS «Túpac Amaru», matando 150 ovinos de raza que pertenecían a la SAIS. En el mismo Chaquicocha, el 10 de mayo, la columna armada senderista asesinó a 10 comuneros, entre ellos varias autoridades, incendiando además una camioneta y un camión.

El mismo día, otro grupo de senderistas incursionó en el anexo de Accac Bellavista, en San Juan de Jarpa, reunió a los comuneros del lugar en el estadio y previo «juicio popular», asesinó a tres comuneros: Tobías Bastidas Alvarado, presidente de la comunidad, Felipe Quispealaya López

y Benigno Melgar Casallo. Unos días después, Filemón Lázaro Aquino y Eloy Huaynalaya Velasco, profesores del colegio «San José», en San José de Quero, y Evencio Rojas Socualaya, comerciante de ganado, fueron desaparecidos, presumiendo la población que fueron esta vez los militares.

El 4 de noviembre de 1989, en Misquipata, en Jarpa, el PCP-SL asesinó a Inés Lazo Alvarado, esposa del policía Mamerto Melgar Pomahuali; en Accac Bellavista, siega la vida de Antonia López Yarupaita, Marcelina Quispealaya López y de la niña de 3 años Daysi Cerrón Quispealaya, suegra, esposa e hija respectivamente de otro policía, Bartolomé Cerrón.

Una de las acciones más impactantes en la zona ocurrió los días 9 y 10 de noviembre de 1989, cuando el PCP-SL tomó el pueblo de Quero asesinando a cuatro pobladores. Divididos en dos grupos, los senderistas, degollaron a Alfredo Aquino, cobrador de luz del anexo, Néstor Ortiz Aquino, comunero, ultimado a pedradas; Gilberta Pérez Quiñones, esposa de Juan Aquino Pino, servidor estatal, y nuera de Eugenio Aquino Pérez, gobernador del distrito, y Kostka Macha Churampi, degollada delante de su madre y sus cuatro hijos cuando indagaba por su esposo Evencio Rojas Socualaya, presuntamente desaparecido por los senderistas.

Dos días después, el 11 de noviembre de 1989, cuatro dirigentes campesinos del anexo de San Blas, distrito de Chambará, en el Bajo Cunas, fueron secuestrados por presuntos senderistas y asesinados con tiros en la cabeza al llegar al paraje de Chorrillos.

En esos días, en el anexo de Chaquicocha, el Agente Municipal Antonio Bruno Quinto es asesinado en la plaza pública, mientras que a la altura del distrito de Pilcomayo son emboscadas y asesinadas tres autoridades de Chaquicocha: Viviano Cueva Macha, Presidente de la Comunidad, Víctor Enedino Damián Macha, Administrador, y Javier Macha Tacza, Fiscal de la Comunidad.

Las muertes continúan en Usibamba, donde en distintas fechas de ese mismo año son asesinados los comuneros Aquilino Samaniego, César Damián Macha y Juan Inga, mientras que Pedro Canchumanya Mananí, Amando Aquino Macha y Carlos Damián Damián son secuestrados por los senderistas. En el anexo de San Blas, los subversivos congregan a la comunidad en la Escuela Estatal de Menores, realizando un «juicio popular» que concluye con el asesinato de Vidal Paredes Ballasco, presidente de la Comunidad. El mismo día otro grupo de senderistas incursiona en el anexo de Angasmayo y asesina a un ingeniero que trabajaba en el Proyecto Coyllor, apellidado Maraví y al propietario del único restaurante del lugar.

Uno de los últimos asesinatos ocurrió dos años después, el 5 de mayo de 1991, cuando cinco personas encapuchadas ingresan a la casa de Emiliano Inga Quispealaya, ex teniente gobernador de Quero, a quien torturan y luego asesinan de cinco balazos. La víctima era Presidente del Proyecto de Irrigación Alwin.

Esta ola de asesinatos y destrucción de las unidades productivas de las SAIS, así como de la infraestructura pública y de muchas propiedades particulares, obliga a muchos comuneros a rematar los bienes comunales, repartiéndose el dinero y los animales restantes para retirarse hacia

la capital de la provincia o del departamento. El mejor ejemplo de este éxodo lo encontramos en Quero, en donde del total de 210 comuneros sólo quedaron residiendo en la comunidad 25.

1.2.5.2.2. La acción militar y las rondas: 1989-1992

El éxodo de comuneros se inicia en 1987 pero se acentúa en 1989, conforme la violencia se acrecienta. Este mismo año se despliega una ofensiva militar y policial que ejecuta acciones punitivas basándose en la información acumulada por los agentes de inteligencia desplegados en la zona.

El MRTA como coartada

En 1989, tanto la Policía como el Ejército ingresaron a la zona de manera esporádica, intentando contrarrestar el avance senderista. En estas incursiones iniciales utilizaron, según todos los indicios acumulados, la estrategia de presentarse como militantes del MRTA, organización que no tuvo presencia en la zona ni realizó nunca una incursión en ella, y cuyos métodos además difieren mucho de los «ajusticiamientos» que se constatan en Cunas.

En efecto, el día 30 de octubre de 1989, en el anexo de San Pedro de Sulcán, personas vestidas de paisano, al parecer policías, ingresaron al anexo realizando pintas a favor de la lucha armada, afirmando ser integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La mayoría de los comuneros se encontraba en una faena comunal en un lugar ubicado a 4 Km. de distancia. Los supuestos integrantes del MRTA congregaron a los pocos comuneros que quedaron en el pueblo, en su mayoría ancianos y niños, a un costado del colegio secundario «San Pedro». Luego los encerraron en la iglesia de la localidad y pretendieron quemarlos vivos. Sin embargo, la falta de combustible hizo que desistieran de su propósito. Del grupo de comuneros congregados fueron separados Lopicino Calixto Inga, Magno Inga Mucha, Dacio Castillo y Justo Inga Inga, quienes poco después fueron asesinados. Los presuntos emerretistas indagaron por Justo Inga Lazo, pero encontraron a Justo Inga Inga, estudiante del IST «San Agustín de Cajas», quien fue asesinado, mientras que Justo Inga Lazo, capturado posteriormente, purga una condena de 20 años por delito de terrorismo y traición a la Patria.

La coartada contrasubversiva de utilizar el nombre del MRTA tiene su ejemplo mayor en la zona el 4 de noviembre de 1989, día en el cual alrededor de 30 personas fuertemente armadas y con el rostro cubierto con pasamontañas tomaron la capital de San Juan de Jarpa, a donde ingresaron por diversos puntos dando vivas al MRTA. De inmediato, reunieron a los pobladores en la Plaza de Armas. Una vez reunidos los separaron en «pelotones» de hombres, mujeres, niños y ancianos. Uno de los encapuchados, con una lista en la mano, llamó por su nombre a varios comuneros. Entre los nombrados figuraban Nicolás Reyes Pariona, el profesor Simeón Clemente Salvatierra, Uberto Macha Solano, Isidora Solano Carhuamaca y Román Quispe Solano, agente municipal del barrio

La Unión. Los cinco fueron introducidos en la casa de Pelayo Yauri Hinostroza, ubicada en la plaza principal. Al resto de pobladores se les ordenó que se tendieran en el piso. Tiempo después los encapuchados abandonaron la casa donde fueron asesinados los comuneros detenidos. Mientras esto ocurría, otros encapuchados saqueaban las tiendas del lugar. Los comuneros presumen que los atacantes eran militares porque todos sin excepción «tenían porte militar», estaban armados con el mismo tipo de fusil y uno de ellos fotografiaba lo que ocurría en ese momento. Según los pobladores entrevistados por la CVR, Simeón Clemente Salvatierra tenía vínculos con el PCP-SL, en tanto que Nicolás Reyes Pariona fue confundido con otra persona.

Con la misma modalidad y en la misma época, en el Bajo Cunas, en el anexo de Roncha, un grupo armado que dijo pertenecer al MRTA torturó y asesinó a Luciano Legua Quinto, Juan Quinto Arana y Dámaso Mucha Estrada, acusándolos de pertenecer al PCP-SL, repitiéndose este esquema de actuación en el anexo de Usibamba la madrugada del 5 de diciembre de 1989, donde dos comuneros fueron sacados violentamente de sus casas, desconociéndose hasta hoy su paradero.

Las Rondas

Esta contraofensiva militar es paralela a la creciente organización de los Comités de Autodefensa. Félix Damián Huaynalaya, presidente de la comunidad campesina de Quero, ante los sucesos que relatamos anteriormente del 9 y 10 de noviembre de 1989, exhorta a sus directivos a organizar la resistencia contra el PCP-SL. El acuerdo se cumple el 22 de diciembre de 1989, con la visita al Cuartel del Ejército para solicitar apoyo para organizar a la población en rondas campesinas, es decir en Comités de Autodefensa. Esta iniciativa es seguida rápidamente por los comuneros del anexo de Quero, Santa Rosa de Huarmitá, San Roque de Huarmitá, Chaquicocha y Usibamba, quienes se reúnen el 8 de enero de 1990 para acordar lo mismo, llevándose a cabo una segunda reunión el mes siguiente a la cual se incorporan representantes de los anexos de Chala Alta y San Pedro de Sulcán. En la tercera reunión, en marzo, se designan a los Presidentes Sectoriales de Ronda de Quero, Jarpa, Chambará y Yanacancha.

Estas iniciativas se suman a la instalación, en abril de 1990, de una base militar en el anexo de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, que impulsa a todos los anexos a organizarse como rondas campesinas para combatir a la subversión. El ejército se compromete en proporcionarles armas.

La cuarta reunión, el 15 de junio de 1990, se realiza en Shicuy donde, como recordamos al inicio de este recuento, el PCP-SL había formado un Comité Popular desde 1987, siendo casi el punto de partida de su despliegue en la zona. En esta cuarta reunión, se conforma el Primer Comité Central de las Rondas Campesinas del Alto y Bajo Cunas, bajo la presidencia de Félix Damián Huaynalaya, el cual juramenta ante el Coronel EP Espinoza en el estadio del anexo de Accac, Bellavista, el 15 de julio de 1990.

En enero de 1991, el Comité Central tiene una reunión con el General EP Luis Pérez Documet, Jefe del Comando Político Militar del Frente Mantaro. El General les comunica que van a recibir armamento y movilidad. El 24 de junio de 1991, en el anexo de Chaquicocha, Alberto Fujimori entrega escopetas y camionetas a los ronderos del lugar.

Con la instalación de la base militar y la organización de las rondas campesinas se completa la ofensiva contrasubversiva. Usualmente los comuneros tenían que desplazarse por lo menos una vez por semana a la base Militar para recibir instrucción y entrenamiento militar. La falta, incumplimiento o indisciplina era castigada duramente por los efectivos militares. Como ocurrió en otros lugares del país, la relación de los efectivos militares con la población civil incluye excesos contra inocentes. Así, en abril de 1991, los militares detuvieron y torturaron a los ronderos Higinio Quispe Pérez y Eleuterio Inga Quispilaya. En otra oportunidad, en 1992, tres ronderos faltaron a los ensayos para el desfile de Fiestas Patrias, siendo detenidos y llevados al «bote» de la base de Misquipata por espacio de 6 horas. El «bote» era una fosa de tres metros de profundidad por 1.5 mts. de diámetro.

Otra de las constantes del comportamiento militar fue la «colaboración para el rancho», que no era otra cosa que la demanda a los pobladores de productos agrícolas (papas, habas, oca, etc.) o animales para la alimentación del personal de la base. En una oportunidad, los militares se llevaron gran cantidad de ovinos de los anexos de Shicuy y San Pedro de Sulcán, las comunidades más afectadas pues eran consideradas como importante bastiones del senderismo.

Pero en suma la actuación de los efectivos militares fue muy distante de la que realizaron años atrás en las zonas vecinas de Huancavelica, logrando ganar el apoyo de las comunidades de la zona organizados en CAD's que casi no tuvieron bajas en su lucha contra el PCP-SL. La presencia militar en la zona cesó en 1995.

1.2.5.3. Cronología

Zona 1: zonas altas

11/12/83	Integrantes del PCP-SL asaltan las Unidades de Producción de la SAIS «Cahuide». En «Laive» incendian la casa hacienda y dinamitan un tractor; llevan alimentos y gran cantidad de dinamita del polvorín de la SAIS. En «Antapongo», lugar donde incendiaron la oficina contable y otros ambientes, acuchillaron a 45 reproductores de ganado ovino. También se dirigieron a «Río de la Virgen» y finalmente, la hacienda «Tucle» fue atacada por otros militantes maoístas.
7/11/89	Junín, Chupaca, San Juan de Jarpa. 6 campesinos fueron asesinados por presuntos paramilitares.
18/10/92	Junín, Huancayo. Reconocimiento oficial de los Comités de Autodefensa de Carhuallanga, Chacapampa, Chongos Alto, Chicche, Colca, Los Ángeles, Canipaco, Cucho, Antabamba, Antacocha, Vista Alegre, Rosa TitiTayo, Santa Rosa de Magdalena, Santa Rosa de Pachacayo, San Miguel, Huasicancha, Llamapsillón, Palaco, Palcamayo, Yanacancha, Acobamba, Huaylacancha, Achipampa, Santo Domingo de Cachi.

1.2.6. Zona II: la vertiente oriental: Tulumayo

1.2.6.1. Datos generales

La cuenca del Tulumayo comprende los distritos de Comas, Cochas y Mariscal Castilla, todos ubicados en la provincia de Concepción, sobre la vertiente oriental de la cordillera, en un importante y antiguo corredor que permite articular la sierra con la selva de Junín, en particular con la provincia de Satipo. La movilidad de los campesinos entre la zona de sierra y la selva alta configura la economía y la sociedad de esta zona.

Población 1981 – 1993 según distrito

Población	1981	1993
Comas	8671	10022
Cochas	2529	3038
Mariscal Castilla	1678	1441

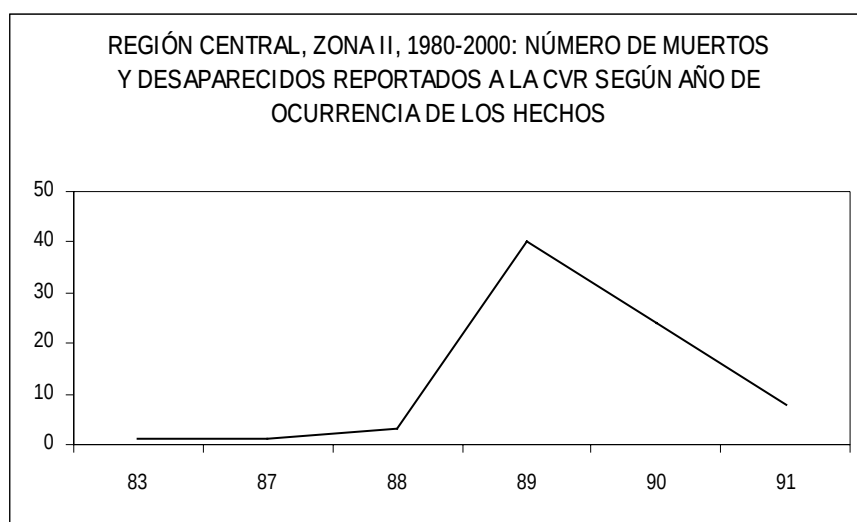
Fuente: INEI

El ciclo de violencia en la cuenca del Tulumayo muestra algunas diferencias con Canipaco y Cunas, las dos zonas alto andinas que hemos presentado en páginas anteriores. La complejidad de la guerra es mayor pues aquí actuaron activamente tanto el PCP-SL cuanto el MRTA, que incorporaba en su discurso de identidad las acciones realizadas por la guerrilla del MIR en 1965 en esta misma zona.

Para ambos grupos, la cuenca del Tulumayo estaba vinculada, en sus planes, a la región de la selva central, sobre todo la zona de Satipo donde el PCP-SL actuaba, mientras que el MRTA se concentraba un poco más hacia el norte, en la provincia de Chanchamayo centralmente.

REGIÓN CENTRAL, ZONA II, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN DISTRITOS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

DISTRITOS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	77	-	-	-	1	-	-	-	1	3	40	24	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COCHAS	31	-	-	-	1	-	-	-	-	1	16	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMAS	37	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARISCAL CASTILLA	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.2.6.2. Historia de la violencia

1.2.6.2.1. Inicio de los tiempos de guerra: 1987

Como sucede en otras zonas de la región central, el PCP-SL inicia sus actividades violentas en la cuenca del Tulumayo en 1987. En los dos años siguientes, combinando sus acciones armadas y asesinatos con un trabajo político de organización de la población luego del retiro de los puestos policiales, las fuerzas senderistas instalaron en muchas comunidades sus Comités Populares, nombraron sus autoridades, realizaron acciones de propaganda, agitación armada y hostigamiento, destruyeron infraestructura pública y privada, bloquearon las carreteras y aniquilaron a elementos considerados enemigos a su causa.

La fecha clave en esta expansión progresiva de la organización senderista es el 12 de setiembre de 1987, día en que tanto en Cochas como en Comas una columna senderista incursionó sucesivamente en ambas capitales de distrito. En Cochas, la columna quemó el local municipal, la gobernación y la carcelita, exigiendo que las autoridades renunciaran a sus cargos, en particular el alcalde, los regidores, el juez de paz, el gobernador y los tenientes gobernadores. «*Si no renuncian, ya saben lo que pasará*», fue el mensaje senderista.

A las pocas horas, en Comas, el mismo destacamento, formado por 20 personas armadas aproximadamente, capturó al único policía que se encontraba en el puesto policial, convocó a una asamblea en la plaza, y asesinó a Hugo Garay, un poblador de filiación aprista, que en evidente estado de ebriedad lanzó vivas al APRA.

El discurso pronunciado en ambas poblaciones es el mismo que se escuchó en cientos de poblados del país. En él, además de amenazar a las autoridades y pedir su renuncia, se afirmaba que el Partido Comunista del Perú dirigía la revolución en el país desde 1980 y su triunfo era

inevitable; que el Ejército vendría a reprimir a la población y tendrían que huir a los cerros; que, por últimos, la población debía sembrar sólo para su consumo y no para vender en el mercado.

Como corolario de sus arengas, Adolfo Mercado, gobernador del distrito de Comas, fue sometido a un «juicio popular» y unos cuantos disparos acabaron con su vida.

Después de la incursión subversiva en Comas, el puesto policial fue abandonado. En los meses siguientes, esta columna senderista, su Fuerza Principal en la zona, recorrería Comas, Cochabamba y Mariscal Castilla y los distritos de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba,

El MRTA

El MRTA también ingresó, aunque de manera esporádica, a algunas comunidades y poblados del Tulumayo desde fines de 1987. Los pobladores de Racracalla recuerdan la incursión, en diciembre de 1988, de un grupo de militantes del MRTA, uniformados, armados con fusiles y otros pertrechos militares, que convocaron al pueblo a una asamblea en la plaza para decirles que su lucha era «para conquistar el poder para el pueblo» y que en esa tarea todos tenían «un lugar y un papel que cumplir», instando a las autoridades comunales y el teniente gobernador a que trabajen en pro del desarrollo del pueblo. Luego llamó a incorporarse a sus filas a todos aquellos que estén dispuestos a luchar «para acabar con la explotación de los ricos y el hambre que sufre el pueblo peruano». Por último, compraron víveres en las tiendas y partieron con rumbo a Comas.

Quedaba así claro que la tónica del accionar del MRTA, al menos en el Tulumayo, contrasta con la puesta en práctica por los destacamentos armados del PCP-SL. En primer lugar, no reemplazaba ni menos amenazaba a las autoridades locales. En segundo lugar, exhortaba a las autoridades elegidas a que trabajaran en beneficio de su pueblo; y por último, instaba a la población a que se defendiera de cualquier ataque que vulnerara sus derechos. Quizá es por ello que los pobladores recuerdan de buena manera a los militantes emerretistas, resaltando las diferencias de su comportamiento con el de los militantes del PCP-SL.

1.2.6.2.2. La violencia se expande: 1988-1989

A lo largo de 1988, en numerosos poblados del Tulumayo, las autoridades renunciadas por las amenazas senderistas, fueron reemplazadas por responsables de Comités Populares organizados por el PCP-SL, integrado cada uno de ellos por cinco comisarios: Comisario Secretario, Comisario de Seguridad, Comisario de Producción, Comisario de Asuntos Comunales y Comisario de Organizaciones Populares. El cargo de Comisario Secretario debía recaer en manos de un militante de la organización, sin embargo, ante la escasez de tales militantes, dicho puesto fue encargado algunas veces a un poblador.

A la par de la designación de las Comisarios y Delegados, la Fuerza Principal del PCP-SL recorrió permanentemente el Tulumayo, visitando y organizando a los poblados de los tres

distritos. Unas veces transitaban 40 hombres, otras 20 o 30. Siempre portaban algunas armas de guerra y en cada una de sus incursiones mostraban disciplina y evidenciaban su entusiasmo ante la inminente victoria de la guerra popular. *«Ellos decían que 'ya estamos ganando, avanzando, estamos rodeando [la ciudad de Lima], si todos salimos en un ratito ya terminamos».*

En los primeros meses de 1988, las incursiones de los destacamentos del PCP-SL no provocaron un rechazo abierto de importantes sectores de la población del Tulumayo, salvo de algunas familias dedicadas al comercio que, debido a su mejor posición económica, podrían ser blanco de la acción de los subversivos, y optaron por migrar a la capital de la provincia de Concepción o a la ciudad de Huancayo. Es difícil cuantificar el número de personas que emigró de la zona durante el primer año de presencia activa de los grupos senderistas, sin embargo, se estima que oscila entre 5 y 10% de la población total.

El avance en la organización de los Comités Populares en Comas, Cochas y en menor medida en Mariscal Castilla durante 1988 se basaba en el establecimiento de algunas Bases de Apoyo en el Tulumayo:

Antes, muchos de los que estaban en la Fuerza Principal, andaban con pasamontañas. Luego ya no. No tenían ningún problema en caminar con el rostro descubierto [...] Ya todos éramos compañeros [...] La gente de la Fuerza Principal jugaban fulbito con los de la Fuerza Local.

Pero desde mediados de 1989 en adelante, los destacamentos subversivos comenzaron a perder la fuerza y empuje que tan solo unos meses antes los había caracterizado. La Fuerza Principal seguía recorriendo la cuenca del Tulumayo, pero se notaban visibles modificaciones en su composición y en su estado de ánimo. Las municiones escaseaban pero sobre todo su grado de violencia aumentaba. Es por ello que los «ajusticiamientos» a los disidentes eran hechos con armas blancas. Según testimonios recogidos, cuando las columnas senderistas arribaban a alguna comunidad de Cochas o de Comas, el comentario habitual de los insurgentes era que no habían descansado ni comido bien en varios días. De otra parte, la disminución de la cantidad de integrantes de estas columnas se hacía evidente.

Este cambio se explica, en parte, por la pérdida de algunos de sus combatientes, entre muertos y heridos, en enfrentamientos con las FFAA ocurridos en algunas localidades de Satipo, prolongación, como dijimos al inicio, del corredor que significaba la cuenca del Tulumayo. La ausencia de combatientes trató de ser compensada recurriendo a los pobladores que formaban parte de la Fuerza Local en las Bases de apoyo, con ninguna o muy poca experiencia en combate. El reclutamiento de jóvenes a la fuerza fue incrementándose para así suplir la falta de combatientes.

Otra explicación del cambio es el incremento de las incursiones del Ejército en Comas y Cochas. En junio de 1989, una patrulla del Ejército, de aproximadamente cuarenta efectivos al mando del capitán «Davis», llegó a la comunidad de Cochas, preguntando a la población por el paradero de los subversivos. La población respondió que desconocía donde estaban los

subversivos, entonces los militares remarcaron a la población: «Nosotros venimos a cuidarlos a ustedes y no tienen por qué preocuparse». En cumplimiento de su oferta, los militares se instalaron en el local municipal durante algunos días, incursionando en diferentes comunidades de Cochas, en muchas de las cuales no encontraron a ningún poblador porque ante el solo rumor de la presencia de los militares, la población se escondía en los cerros, temiendo posibles represalias. Además, los subversivos advirtieron a los pobladores que cualquier tipo de colaboración con el Ejército sería sancionada con la pena máxima.

El tercer factor en el cambio del actuar senderista se relaciona con las limitaciones de cultivar que impusieron en muchas comunidades y poblados del Tulumayo, en las cuales la orden de los subversivos de sembrar solo para el autoconsumo y de no comerciar se cumplió por el terror impuesto. «No hay que dar de comer al estado caduco», fue la sentencia senderista. Para octubre de 1989 los pobladores no tenían que sembrar y la escasez de alimentos era general. «El hambre crecía día a día. Ya se vivió tal desesperación... caótica. Ya no había nada que comer».

1.2.6.2.3. Los pobladores organizados en rondas, la historia cambia: 1990-1992

Estos factores fueron creando las condiciones para la sublevación de los pobladores contra el nuevo orden senderista, pero los intentos de oposición iniciales se pagaron con la vida. Así fue desaparecido por los senderistas, en octubre de 1989, Valuis Maravi, poblador de Andas, en Cochas, quien propuso a sus vecinos denunciar a los senderistas.

Unos días después, en la madrugada del 11 de octubre de 1989, un grupo numeroso de militantes senderistas, armados y encapuchados, ingresaron a Runatullo y asesinaron a Emilio Kamel Llacua, Rigoberto Pariona, Andres Unchupaico y Antonio Barja, acusados de «oponerse al partido».

Al igual que en las zonas altas del Canipaco y Cunas, la oposición al orden senderista también fue alentada por el Ejército, como se constata en noviembre de 1989, cuando una patrulla militar visitó la comunidad de Pusacpampa, reunió a la población y los instó a que se organicen en rondas campesinas. «Ustedes saben quiénes mataron a su gente. Agárrenlos y mátenlos. Hagan justicia ustedes mismos. Nosotros los garantizamos. Mátenlos igual».

La muerte de los pobladores de Runatullo en octubre, causó estupor entre los pobladores de Talhuis, quienes cansados de abusos, acosados por el hambre y las amenazas de muerte, decidieron sublevarse y acabar con los insurgentes. En los días siguientes algunos pobladores y antiguas autoridades locales se reunieron con la intención de organizarse para enfrentar a los subversivos, poniéndose en contacto con pobladores de las comunidades de Runatullo, Torolumi, Todos los Santos, Marayniyoq y Villa Muchca. A fines de diciembre de 1989, los pobladores de esas comunidades se reunieron en Talhuis. Allí acordaron en forma unánime defenderse de las

incursiones senderistas y encargaron a un grupo pequeño de comuneros la tarea de visitar el Fuerte Cáceres, ubicado en la ciudad de Concepción, para solicitar apoyo militar.

Los militares se mostraron incrédulos del pedido de ayuda para acabar con la subversión en el Tulumayo. Su escepticismo se basaba en la imagen que tenían del Tulumayo, considerado como «zona roja» controlada por las fuerzas del PCP-SL. Pero el apoyo fue acordado, y un contingente del Ejército, fuertemente armado, marchó junto a la delegación de pobladores hasta Talhuis. Allí, el oficial al mando de los efectivos militares exhortó a los pobladores que se organicen en rondas campesinas tal y como los campesinos de Cajamarca se habían organizado para defenderse de los abigeos, como única manera de derrotar a los subversivos.

El rumor de la organización de los pobladores de Talhuis y otros poblados para luchar contra los subversivos se difundió entre las comunidades y poblados vecinos de Cochas. El 19 de enero, los pocos pobladores que aún quedaban en el pueblo de Cochas, acordaron «plantar una bandera blanca y organizar las rondas campesinas», y dirigirse al pueblo de Tunzo. Allí, junto con pobladores de las comunidades de Parco, Huancamanta, Lucmayo y Macon (anexos del distrito de Cochas), y Comas, Talhuis, y Racracalla (anexos del distrito de Comas), protegidos por un contingente militar, eligieron a los presidentes de las rondas campesinas de las comunidades presentes, acordando las acciones que ejecutarían en el más breve lapso de tiempo sobre vigilancia, control y desplazamiento por las comunidades.

El enfrentamiento con los destacamentos subversivos no tardó en producirse, muy cerca de la comunidad de Talhuis. Una columna de 45 senderistas aproximadamente fue rodeada por 200 comuneros ronderos, armados de piedras, palos y armas blancas, provenientes de los poblados vecinos de Runatullo, Torolumi, Todos los Santos y Marayniyoq. Los subversivos se dieron cuenta que los ronderos los superaban numéricamente y optaron por retirarse con dirección al distrito de Mariscal Castilla, muriendo de un balazo en la refriega el rondero Marcelino Paredes.

Una semana después, los ronderos ubicaron a otra columna de aproximadamente 20 subversivos en un paraje cercano a Cochas:

Aquella mañana vinieron los comuneros de la otra margen [del río], se convocó con corneta [...] se fueron el encuentro de los subversivos y se les encontró a los subversivos. Hubo un enfrentamiento. Murieron en él siete subversivos y dos fueron detenidos, uno de ellos una joven mujer embarazada y un adolescente.

Los comuneros procedieron a cortar la cabeza a los subversivos caídos, y los que lograron escapar fueron encontrados al día siguiente «gracias a que las rondas conocemos todos los lugares, caminos, senderos por los cuales transitan los subversivos», produciendo otro enfrentamiento en el que resultaron muertos otros cuatro senderistas, mientras uno fue capturado y posteriormente entregado al Ejército.

El 2 de febrero de 1990, en la comunidad de Marayniyoc, en una sorpresiva incursión senderista, caen abatidos los ronderos Bernardino Parado, Felipe Sosa, Erquinio Sosa y Avelino Salazar, así como Feliciano Suárez, presidente de la comunidad.

El esfuerzo de los pobladores, convertidos en ronderos para acabar con los subversivos, fue acompañado algunas veces por las fuerzas del orden con la misma coartada utilizada en Cunas y Canipaco de presentarse a nombre del MRTA para ubicar y ejecutar presuntos senderistas o colaboradores de los grupos armados. La noche del 19 de febrero de 1990, un grupo de personas, cubiertos el rostro con pasamontañas y armados con fusiles de guerra, tomó la capital del distrito de Cochas, presentándose ante la población como militantes del MRTA. Uno de los encapuchados leyó una lista de nombres, entre los cuales figuraban los de Cirilo Muñoz, Benedicto Muñoz, Serafina Vasquez y Eli Orihuela, quienes fueron ubicados, torturados y asesinados en el interior de una casa. Ese mismo día, efectivos del Ejército arribaron a Cochas y ordenaron a los pobladores que desaparecieran los cuerpos de las víctimas en un lugar descampado, tal como ocurrió.

El enfrentamiento de las rondas y las patrullas del ejército con las columnas senderistas, así como los asesinatos selectivos son la causa de mayor cantidad de muertos en este período.

Tomando el modelo de los Comités senderistas, las 48 comunidades del Tulumayo se organizaron en sendos Comités de Autodefensa, sin mayor coordinación entre sí, integrado cada uno por un número variable de Grupos de Rondas, a la manera de los pelotones senderistas. En marzo de 1990 los delegados de todas las comunidades se reunieron en una asamblea general, acordando la formación del Comité Central de las Rondas Campesinas del Alto y Bajo Tulumayo. Unos meses después, en julio de 1990, los dirigentes del Comité Central elaboraron su primer Estatuto.

Desde inicios de 1990, y en estrecha coordinación con el Ejército, las rondas campesinas recorrían el Tulumayo sin armas de fuego, hasta que en 1991 el Comité Central de Rondas Campesinas del Tulumayo recibió escopetas, iniciándose a la vez la instrucción militar de los ronderos a cargo de los militares. La presencia del Ejército se fue volviendo incómoda para la población «a cada rato nos llamaban para los desfiles, para la preparación militar, manejo de armas... pero nosotros ya sabíamos eso. Nos enseñó, pero si ya sabíamos», aunque dicha incomodidad fue sobrellevada por el sentimiento de culpa de los ronderos por lo que habían aceptado, en algunos casos voluntariamente, el orden senderista, lo que se consideró razón suficiente para someterse a las ordenes del Ejército. «Nosotros un tanto tímidos por lo que había pasado, en el fondo teníamos culpabilidad de pertenecer a la subversión... tenías que humillarte».

El destacamento militar instalado en Comas desde 1991 se convierte en julio de 1992 en una Base Contrasubversiva. Hasta ese momento, desde los primeros meses de 1990, las rondas se encargaron del control del orden interno y la administración de justicia, con relativa autonomía, asumiendo todas las funciones de las autoridades comunales y locales (gobernadores y teniente

gobernadores), municipales y de justicia, con el aval de los militares, cometiendo los ronderos algunas veces abusos que generaron denuncias.

En 1994, los efectivos del Ejército se retiraron del Tulumayo. El control de la región continuó bajo las rondas campesinas del Tulumayo, que habían logrado, junto con los operativos del ejército, la destrucción definitiva de los grupos senderistas en toda la cuenca.

1.2.6.3. Cronología

Zona II: Tulumayo

1987	El PCP-SL inicia sus actividades violentas en la cuenca del Tulumayo
12/9/1987	En Cochas como en Comas una columna senderista incursiona sucesivamente en ambos distritos.
1987	A fines de ese año el MRTA también ingresó, aunque de manera esporádica, a algunas comunidades y poblados del Tulumayo.
12/1988	Un grupo de militantes del MRTA, uniformados, armados con fusiles y otros pertrechos militares, que convocaron al pueblo a una asamblea en la plaza para decirles que su lucha era «para conquistar el poder para el pueblo.
28/01/88	Junín, Concepción, Comas. 15 presuntos subversivos asaltaron numerosas tiendas comerciales, apoderándose de especies de valor por un monto de un millón de intis.
6/1989	En junio una patrulla del Ejército, de aproximadamente cuarenta efectivos al mando del capitán «Davis», llegó a la comunidad de Cochas, preguntando a la población por el paradero de los subversivos.e instalan base una militar por unos días.
10/1989	Es desaparecido por los senderistas, Valuis Maravi, poblador de Andas, en Cochas, quien propuso a sus vecinos denunciar a los senderistas.
11/10/1989	Un grupo numeroso de militantes senderistas, armados y encapuchados, ingresaron a Runatullo y asesinaron a Emilio Kamel Llacua, Rigoberto Pariona, Andres Unchupaico y Antonio Barja, acusados de «oponerse al partido».
11/1989	Al igual que en las zonas altas del Canipaco y Cunas, la oposición al orden senderista también fue alentada por el Ejército, como se constata cuando una patrulla militar visitó la comunidad de Pusacpampa, reunió a la población y los instó a que se organicen en rondas campesinas.
19/1/1990	Los pocos pobladores que aún quedaban en el pueblo de Cochas, acordaron <i>organizar rondas campesinas</i> y dirigirse al pueblo de Tunzo. Allí, junto con pobladores de las comunidades de Parco, Huancamanta, Lucmayo y Macon (anexos del distrito de Cochas), y Comas, Talhuis, y Racracalla (anexos del distrito de Comas), protegidos por un contingente militar, eligieron a los presidentes de las rondas campesinas.
2/1990	El enfrentamiento con los destacamentos subversivos no tardó en producirse, muy cerca de la comunidad de Talhuis. Una columna de 45 senderistas aproximadamente fue rodeada por 200 comuneros ronderos, armados de piedras, palos y armas blancas, provenientes de los poblados vecinos de Runatullo, Torolumi, Todos los Santos y Marayniyoq. Los subversivos optaron por retirarse con dirección al distrito de Mariscal Castilla.
2/2/1990	En la comunidad de Maraynioc, en una sorpresiva incursión senderista, caen abatidos los ronderos Bernardino Parado, Felipe Sosa,

	Erquinio Sosa y Avelino Salazar, así como Feliciano Suárez, presidente de la comunidad.
3/1990	Los delegados de todas las comunidades se reunieron en una asamblea general, acordando la formación del Comité Central de las Rondas Campesinas del Alto y Bajo Tulumayo.
1991	El destacamento militar instalado en Comas desde 1991 se convierte en julio de 1992 en una Base Contrasubversiva.
1/03/92	Junín, Concepción, Comas: Los ronderos capturan a los asesinos del subprefecto de Huancayo, los ajustician y los «fondean» en la laguna de Huacracocha.
8/2/93	Junín, Huancayo, Pariahuanca: Presuntos subversivos asesinan al rondero Fernando Molina y hieren a Efraín Rojas Vilcahuamán.

1.2.7. Zona III: El valle del Mantaro y Tarma

La guerra en el valle del Mantaro y en Tarma está ajustada a la tendencia departamental, siendo la selva el principal escenario en el departamento de Junín, reconociéndose algunas particularidades en el amplio valle del Mantaro que presentamos en esta sección. Una de estas especificidades fue la concentración de las acciones subversivas en las ciudades de La Oroya, Jauja, Concepción, y en particular Huancayo, la capital departamental. Cualquier acción en esta última tenía, evidentemente, mayor repercusión en la sociedad regional y en la opinión pública nacional. y generaba igualmente mayor temor. Al igual que la ciudad de Lima, Huancayo fue una caja de resonancia privilegiada para acciones subversivas. Otra característica de la zona es la presencia tanto del PCP-SL como del MRTA, que se disputaron este espacio con estrategias distintas. Desde que apareció públicamente en octubre de 1984, el MRTA desarrolló acciones políticas militares tanto en la ciudad de Huancayo como en Jauja y en menor medida en Concepción.

Por último, los sucesos en el distrito de Molinos, Jauja, en 1989 y los de la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, durante los primeros años de la década de los noventa, permiten apreciar las respuestas contrasubversivas del Estado implementadas en la región.

1.2.7.1. Datos generales

Los estrategias del PCP-SL y los del MRTA tuvieron muy en cuenta las características sociales, políticas y económicas que ofrecían el departamento de Junín, y en particular el valle del Mantaro, a la hora de diseñar sus estrategias políticas y militares. Militantes del PCP-SL desarrollaron sus actividades proselitistas desde fines de la década de 1970, al igual que el Movimiento de Izquierda Revolucionaria -El Militante y el Partido Socialista Revolucionario, marxista-leninista, partidos que dieron origen el MRTA. En octubre de 1984, las primeras acciones del MRTA que se ejecutaron fuera de Lima ocurrieron en la ciudad de Huancayo.

La Carretera Central es vía troncal de comunicación que permite articular a los departamentos costeros con los de la sierra y la selva. La Oroya, además de importante centro metalúrgico, es nudo importante en el sistema de comunicación terrestre pues por allí transitan los vehículos y mercaderías procedentes o destinadas a la selva de Ucayali, a la selva Central, al valle del Mantaro.

El «eje minero» formado por las provincias de Yauli, Junín y Tarma, concentra una importante producción de minerales, principal fuente de divisas de la economía nacional, empleando al 20% del total de trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del país, organizado en innumerables sindicatos agrupados a su vez en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

La producción agrícola del departamento de Junín, y en particular de las provincias ubicadas a lo largo del valle del Mantaro, representa una de las más importantes de la sierra peruana, abasteciendo buena parte de la demanda de la capital del país. En efecto, es un lugar común afirmar que Junín es la despensa de la ciudad de Lima. Asimismo, el sistema de transmisión eléctrica generada en la hidroeléctrica del Mantaro, aunque con instalaciones en Tayacaja, Huancavelica, atraviesa Junín y es vital al ser la más importante fuente de producción de energía eléctrica en el país.

Población 1981 – 1993 según provincia

Población	1981	1993
Huancayo	321549	437391
Concepción	59060	64785
Jauja	102439	104828
Junín	30169	39627
Yauli	77639	65229
Tarma	105422	115686
Total	698259	829539

Las ciudades de La Oroya, Jauja, Concepción y Huancayo se encuentran en el curso del río Mantaro, siendo esta última, que reúne más de la mitad de población de las provincias consideradas, el eje económico de ese espacio. La Zona III que ahora presentamos tiene, entonces, como escenario principal a la ciudad de Huancayo, de rápido crecimiento en las últimas décadas, cuya intensa actividad económica configura un espacio de influencia regional que incorpora - además de poblados y ciudades del valle del Mantaro como Jauja y La Oroya- desde las ciudades de Huamanga y Huanta, en Ayacucho, hasta Cerro de Pasco, en Pasco, incluyendo en ese espacio regional ciudades intermedias como Huancavelica, Tarma, Chanchamayo, La Merced, Satipo, que hemos presentado en otros capítulos.

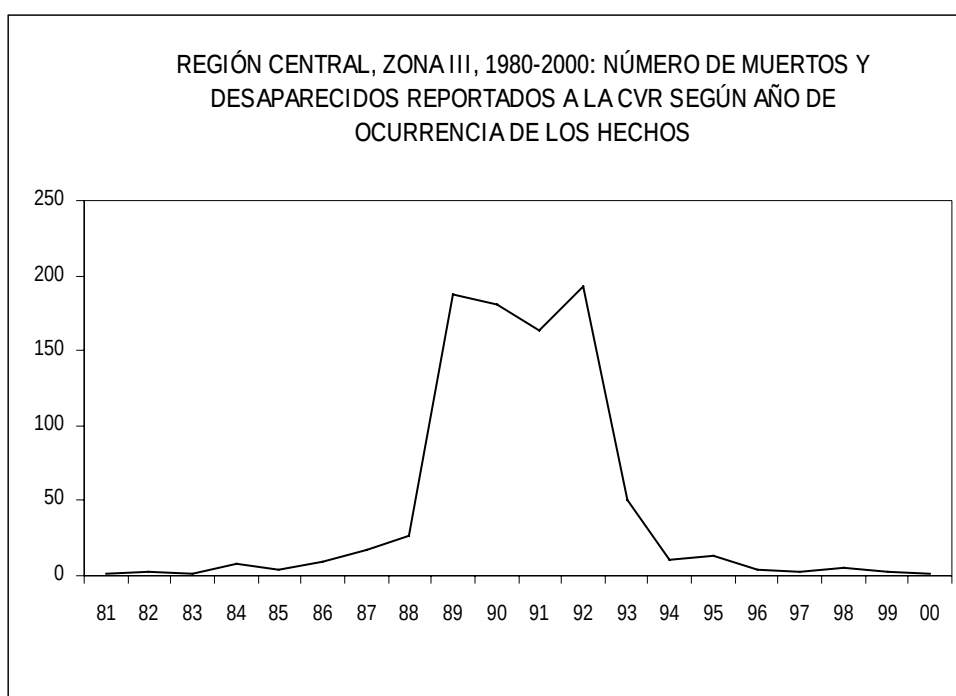
El valle del Mantaro, territorio de comunidades campesinas independientes y con amplios recursos, sufrió un vital proceso de municipalización desde la década de 1950. Precisamente, las comunidades del valle fundaron la Universidad Comunal del Centro del Perú en esa misma década, convertida luego en la Universidad Nacional del Centro del Perú, protagonista central de la historia de la violencia en el Mantaro, a cuyas aulas concurren jóvenes de todas las provincias de Junín y los departamentos vecinos. En Huancayo y en el valle del Mantaro, por último, podemos reconocer la existencia de un importante tejido social sustentado en múltiples sindicatos, gremios, organizaciones populares, campesinas y de supervivencia.

1.2.7.2. Historia de la violencia

Desde sus primeras acciones violentas aisladas en 1980 hasta 1986, la presencia senderista aumenta lenta pero firmemente en el valle del Mantaro. Como hemos señalado en las Zonas anteriormente descritas de la Región Central, las columnas senderistas inician una nueva escalada en sus operativos desde 1987, por ello la mayor violencia en el valle del Mantaro se concentra en el período 1989-1992, cuando el PCP-SL se encuentra otra vez a la ofensiva en las zonas rurales de la región central. La provincia de Huancayo, especialmente la ciudad de Huancayo, donde ocurren más de la mitad de las muertes registradas, es el centro principal de la violencia en esta zona

REGIÓN CENTRAL, ZONA III, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																							
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00			
TOTAL	903	-	1	3	1	8	4	9	16	29	213	182	164	189	46	11	13	4	2	5	2	1			
HUANCAYO	374	-	1	2	1	4	3	6	12	15	75	95	36	80	20	4	9	3	2	4	1	1			
CONCEPCIÓN	88	-	-	-	-	-	-	-	1	2	22	38	12	12	-	-	1	-	-	-	-	-			
JAUIJA	167	-	-	-	-	-	1	-	-	9	94	7	30	22	2	1	-	-	-	-	1	-			
JUNÍN	78	-	-	1	-	3	-	2	2	1	-	2	25	40	1	1	-	-	-	-	-	-			
TARMA	177	-	-	-	-	1	-	1	1	-	17	33	60	31	23	5	3	1	-	1	-	-			
YAULI	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-			



1.2.7.2.1. Inicio de la violencia: 1980-1982

La presencia clandestina del PCP-SL en la Universidad Nacional del Centro del Perú y las primeras acciones subversivas

Desde fines de la década de los 70's algunos militantes del PCP-SL desarrollaban discretas acciones de proselitismo y captación de futuros militantes dentro de la comunidad universitaria de la UNCP, que combinaban con algunas presentaciones públicas de sus propuestas políticas, a diferencia de otras organizaciones maoístas como Patria Roja, Puka Llacta o Bandera Roja, cuya presencia y acción eran evidentes, en franca competencia con otras organizaciones y partidos políticos de izquierda. En los años siguientes, el trabajo político del PCP-SL en la UNCP cobrará importancia y jugará un rol particular en el contexto de violencia en la región.

La primera acción subversiva en la ciudad de Huancayo es el lanzamiento de cargas explosivas contra el puesto policial y el Municipio distrital de Chilca, el 1 de setiembre de 1980. El 22 del mismo mes, ocurren atentados contra la Corte Superior de Justicia de Junín, el Juzgado de tierras y el Municipio distrital de Chilca; el 11 de diciembre la oficina del Plan Meris, ubicada en el distrito de El Tambo, es dinamitada, y dos días después los subversivos derriban una torre de alta tensión de la línea de interconexión de la Central Hidroeléctrica del Mantaro en el distrito de Chambará, en Concepción. Al día siguiente, en el distrito de El Tambo, dinamitan el depósito de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) y por último, el 16 del mismo mes, los

milитantes del PCP-SL atacan con cargas de dinamita el local de Acción Popular, ubicado en la ciudad de Huancayo.

En suma, las primeras operaciones de mera propaganda han dado paso a actos de sabotaje directo a la infraestructura pública y privada. El objetivo privilegiado serán las torres de transmisión eléctrica que abastecen, desde la central hidroeléctrica del Mantaro ubicada en Tayacaja, la mayor del país, de energía eléctrica a Lima, y a buena parte del país. Desde el inicio mismo de la «guerra popular», también las grandes empresas mineras, en particular CENTROMIN Perú, fueron blancos de la acción del PCP-SL. Así, el 8 de julio de 1980, los subversivos intentaron dinamitar el reservorio de agua de CENTROMIN Perú en La Oroya. La destrucción sistemática de infraestructura minera y la consecuente parálisis de la producción ocasionó grandes pérdidas al Estado durante la década de los ochentas y los primeros años de la década siguiente.

En los primeros años, entre 1980 y 1985, casi no se registran víctimas pero son numerosos los atentados, diversificándose los blancos: puestos policiales, locales públicos, puentes, torres de transmisión, minas para apropiarse de dinamita, mechas y fulminantes. El 17 de agosto, con el derribamiento de un poste de alta tensión la ciudad de Huancayo conoce su primer apagón general. A la par de estas acciones, el trabajo proselitista en la UNCP continuaba.

La policía fue la encargada de intentar frenar el avance de la subversión en el valle del Mantaro. El incremento de los patrullajes en algunas zonas, sobre todo urbanas, de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, algunas detenciones de dirigentes de izquierda, vinculados según la policía a la subversión, y la movilización de algunas unidades especializadas en la lucha contrainsurgente como los Sinchis o los Llapan Atic, fueron las medidas puestas en práctica por las fuerzas del orden. Sin embargo, el incremento sostenido de las acciones subversivas se mantuvo sin mayores variaciones durante los meses siguientes.

1.2.7.2.2. Expansión de la violencia: 1983-1986

El número de acciones subversivas en el valle del Mantaro aumenta durante el período 1983 y 1986 y provoca graves daños en la infraestructura pública y privada. Es posible pensar en un repliegue parcial de las fuerzas del PCP-SL hacia el departamento de Junín como consecuencia de la ofensiva lanzada por las fuerzas del orden en el departamento de Ayacucho desde enero de 1983, mientras que la aparición pública del MRTA en la ciudad de Huancayo en octubre de 1984 contribuye a la intensificación de la violencia en la región.

Por consiguiente, los atentados contra el sistema de transmisión de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, los asaltos a las minas para aprovisionarse de dinamita, los ataques con explosivos a los puestos policiales, el robo de armas a miembros de las fuerzas del orden, las incursiones a las instalaciones de las Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) y las acciones de propaganda y agitación armada al incursionar en poblados del valle, son las principales

acciones que acometen los militantes del PCP-SL, mientras el MRTA privilegió las acciones de agitación y propaganda armada en las ciudades de Jauja, Concepción y Huancayo. Ambos grupos subversivos, continuaron con sus labores de proselitismo y captación de militantes y simpatizantes en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en los institutos superiores del valle y en algunos colegios secundarios de la región.

La acción de las fuerzas policiales se redujo a patrullar las zonas aledañas a las ciudades de Jauja, Concepción y Huancayo, deteniendo a presuntos implicados en las acciones de sabotaje. Las armas que el PCP-SL utilizó provinieron, muchas veces, del asalto a policías y puestos policiales. El 10 de enero de 1983, un Guardia Republicano fue despojado de su arma por dos presuntos militantes del PCP-SL en la ciudad de Huancayo, lo mismo harán esos días al robar tres metralletas a los soldados que brindaban seguridad durante el izamiento de la bandera nacional en la ciudad de Huancayo. Los ejemplos abundan a lo largo de los años de violencia.

El sabotaje contra las redes de transmisión de energía eléctrica fue, como hemos dicho, otra de las constantes del accionar del PCP-SL. Así, el 18 de enero, un grupo de subversivos intenta derribar una torre de micro ondas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en un paraje distante 20 Km. de Huancayo. Dos días después, se produce la primera aparición pública de los militantes armados del PCP-SL, cuando el 20 de enero cuatro subversivos irrumpen en el comedor de la Universidad Nacional del Centro del Perú y tras un breve discurso distribuyen un documento referido al desenvolvimiento de la guerra de guerrillas en todo el país, pidiendo colaboración económica a los comensales. Unas cuantas horas después, efectivos policiales ingresan a la universidad en busca de los subversivos, retirándose sin detener a ningún sospechoso. Los años siguientes, las apariciones abruptas de subversivos se volverían frecuentes en el campus universitario, al igual que los atentados contra torres de alta tensión. En los primeros meses de 1983, los militantes del PCP-SL iniciaron sus ataques sistemáticos a las instalaciones de las SAIS. El 3 de marzo de 1983, en el distrito de Chupuro (provincia de Huancayo), incendian un vehículo de transporte que pertenecía a la SAIS Cahuide. Durante el atentado, dos empleados de la SAIS resultaron heridos. En un acto de gran impacto regional y nacional, un grupo de senderistas asesina al alcalde IU de Huancayo, Saúl Muñoz Menacho, el 16 de julio de 1984.

Las acciones violentas se intensifican a raíz de la elección presidencial programada para el 14 abril de 1985, sucediéndose los atentados dinamiteros contra locales partidarios de Acción Popular, del Partido Popular Cristiano, del APRA y de Izquierda Unida, y la amenaza de muerte contra los candidatos al Congreso en una campaña dirigida a boicotear las elecciones generales. El 13 de marzo, subversivos arrojaron explosivos contra los locales del APRA y del PPC en la ciudad de Huancayo. Un mes después, el 13 de abril de 1985, es el turno de un local del APRA y el Registro Electoral Provincial. Pero a pesar de los esfuerzos por boicotear las elecciones, los pobladores acudieron masivamente a los centros de votación

La destrucción de las SAIS continúa el 22 de diciembre de 1985, en la SAIS «Túpac Amaru», con la quema de siete vehículos y el incendio de las instalaciones de la SAIS. El 22 de julio de 1986, otro contingente subversivo tomó la casa hacienda de la Unidad de Producción Atoccsaico, una de las siete unidades de producción de la SAIS Túpac Amaru, y asesinó al Administrador de la misma.. Un hecho similar ocurrió el 25 de octubre en Consacc, otra unidad de producción de la SAIS Túpac Amaru, ubicada en la provincia de Jauja, donde en donde los militantes del PCP-SL asesinaron al Administrador e hirieron al Sub Administrador.

En agosto de 1986, el Comité Central del PCP-SL publicó un documento titulado «Desarrollar la guerra popular sirviendo a la Revolución Mundial» en el cual se evaluaba el desempeño de su organización a nivel nacional hasta ese momento. Respecto a la región central, afirmaba que «la guerra popular avanza firmemente en la región central del país, muy importante para la economía peruana como centro minero, emporio agrícola, tronco de red de comunicaciones y corazón de planes geopolíticos del Estado».

El recuento en el valle del Mantaro de acciones y de víctimas producto de la violencia política, evidencia hasta entonces un aumento sostenido, ocupando la provincia de Huancayo el primer lugar en cuanto a personas muertas y atentados cometidos por las fuerzas subversivas.

1.2.7.2.3. La mayor violencia: 1987-1992

Como señalamos en el capítulo introductorio, cuando en los departamentos vecinos de Ayacucho y Huancavelica el curso de la guerra interna generó el repliegue notorio de los grupos armados senderistas, la provincia de Huancayo, junto con las selváticas de Satipo y Chanchamayo que veremos en la Zona V en páginas siguientes sufre, entre 1987 y 1992, la mayor incidencia de la violencia en 20 años, concentrándose en ese período el 80% aproximadamente de los muertos y desaparecidos¹ de todo el ciclo de violencia en el valle del Mantaro y Tarma.

Hemos visto en las zonas anteriormente descritas de la región central que entre 1987 y 1988, la violencia se extiende en forma aparentemente incontenible en todo el departamento de Junín y en particular en el valle del Mantaro. Los destacamentos armados del PCP-SL incursionan de manera sistemática en el campo, tanto en el valle como en las zonas altas del Mantaro. A las acciones violentas en el alto y bajo Tulumayo, San Juan de Jarpa y Chongos Alto que presentamos en capítulos anteriores, se suman las realizadas en Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca (provincia de Huancayo), Andamarca y San José de Quero (provincia de Concepción), Yanacancha (provincia de Chupaca), inmersos también en el proceso de violencia política.

Los destacamentos senderistas ensayan la organización de Comités Populares en el territorio de muchas comunidades de Junín, tratando de establecer su «nuevo poder» en el valle del

¹ Según datos obtenidos por la CVR

Canipaco (Chongos Alto, Chinche y Yanacancha), o en comunidades del Alto y Bajo Tulumayo al igual que en San Juan de Jarpa y San José de Quero , en el Alto Cunas). A diferencia de todos esos espacios alto andinos, débilmente comunicados, los grupos senderistas no ensayan ningún Comité Popular en el valle del Mantaro y en la zona de Tarma, densamente poblados. El peso de las ciudades (Huancayo, Jauja, La Oroya, Tarma) es determinante para ello, y mientras el PCP-SL «bate el campo» (casi podríamos decir que «bate la puna»), sus actividades de sabotaje y propaganda se concentran en esas ciudades. Aumentan igualmente los asesinatos selectivos y se intensifica el trabajo proselitista en los asentamientos humanos y en los principales mercados de la ciudad de Huancayo, al igual que en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en clara competencia con el MRTA.

Los «aniquilamientos selectivos» se incrementaron desde el 14 de enero de 1987, cuando un contingente del PCP-SL asesinó a un comandante del Ejército en la ciudad de Huancayo. Poco después, el 5 de febrero, otro ataque acribilló a un sargento de la policía y su esposa, mientras que el 6 de marzo un mayor de la policía fue asesinado en una calle céntrica de la ciudad. Los asesinatos continúan con el de los funcionarios públicos Félix Ortega, presidente de la Corporación de Desarrollo de Junín, muerto el 8 de mayo y Juan Berrospi, presidente de Cooperación Popular, asesinado en la ciudad de Huancayo

Las redes de transmisión de energía eléctrica eran, como dijimos, blanco privilegiado y relativamente fácil para los dinamiteros del PCP-SL. El 26 de febrero de 1987 caen varias torres de alta tensión en el distrito de Pilcomayo, en Huancayo, provocando uno de los innumerables apagones de la ciudad, que duró varias horas. Numerosos también son los atentados a locales públicos y privados: El 14 de junio, en la ciudad de Jauja, los subversivos del PCP-SL lanzaron cartuchos de dinamita contra un local de la firma Carlessi. Semanas después, el 3 de julio, atacaron las instalaciones del Banco Industrial, Banco de Los Andes, Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes en la ciudad de Huancayo y asesinaron a un policía en el distrito de El Tambo (provincia de Huancayo).

La oleada de atentados continúa al mes siguiente en la ciudad de Huancayo, con el ataque, el 8 de agosto, a locales de los bancos Hipotecario e Interbanc, la Central de Crédito Cooperativo, el Seguro Social, Carsa, el local del Juzgado en lo Civil y la Casa Zambrano. Incluso, el 10 de setiembre, un local de la policía, ubicado en el Concejo Distrital de Chilca, en el corazón de la ciudad de Huancayo, fue atacado con explosivos de alto poder causando destrozos de magnitud. Los asesinatos selectivos se cobran nuevas víctimas el 25 de octubre, cuando mueren dos policías mientras custodiaban un local del Partido Aprista Peruano en la ciudad de Huancayo. Igual persisten las incursiones de militantes del PCP-SL en la Universidad Nacional del Centro del Perú, como la ocurrida el 3 de noviembre, cuando ante estudiantes, docentes y trabajadores hablaron de la guerra popular y los invitaron a «incorporarse a la lucha armada para destruir el viejo y caduco

orden». El 3 de diciembre de 1987 un grupo de subversivos asesina a un policía, y el último día del año muere asesinado otro guardia civil, también en la ciudad de Huancayo.

Las acciones ejecutadas hasta entonces mostraron que los subversivos del PCP-SL habían logrado consolidar un eficiente aparato militar y mantenían la iniciativa frente a las fuerzas policiales. La dinámica de la violencia política fue la misma durante el año siguiente con lo cual se fueron creando las condiciones para que el gobierno decretase el estado de emergencia en todas las provincias del departamento de Junín a fines de 1988.

Confiados en su aparato militar e implantados en algunas zonas rurales, los senderistas siguen activos en el valle del Mantaro:. El 7 de enero de 1988, un sargento del Ejército fue asesinado en la ciudad de Huancayo, mientras que el 26 de enero una carga de dinamita explota en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Días después, los militantes del PCP-SL lanzaron otra oleada de ataques dinamiteros en la ciudad: el 10 de febrero fue el turno de la Dirección Departamental de Junín, la Caja de Ahorros, el Concejo Distrital de El Tambo, la Corte Superior de Justicia, la Corporación de Desarrollo de Junín, el Banco de Los Andes, el cine Pacífico y la Empresa de Transportes Hidalgo, y el 30 de marzo, habiendo derribado varias torres de alta tensión lo cual provocó un corte de energía eléctrica que dejó sin luz a numerosos poblados a lo largo del río Mantaro, se suceden los ataques contra el local del Juzgado de Pilcomayo, Electro Centro, la Cooperativa de la policía, el Juzgado de Paz, Nissan y una tienda municipal.

Dos meses después, el 30 de mayo de 1988, los subversivos del PCP-SL atacaron el puesto policial del distrito de Chongos Bajo (provincia de Chupaca), matando a un policía. El 13 de junio, en Aramachay distrito de Sincos, provincia de Jauja, un cooperante norteamericano y un técnico agropecuario fueron asesinados por militantes senderistas. Otro «aniquilamiento» selectivo se produjo el 4 de julio cuando un policía fue ultimado en la ciudad de Huancayo.

El 1 de octubre de 1988 ocurre el asesinato de Herminio Parra, docente universitario, en la ciudad de Huancayo. Su asesinato fue reivindicado el «Comando Rodrigo Franco», grupo que hace así su primera aparición en la violencia del valle y al cual se le responsabilizará de una serie de asesinatos posteriores de personas supuestamente vinculadas a la subversión. En 1988, en medio de importantes movilizaciones y huelgas de trabajadores demandando solución a sus reivindicaciones entre ellas el reconocimiento del pliego nacional único minero planteado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), el PCP-SL asesinó a dos ex dirigentes mineros que se habían opuesto públicamente al inicio de una segunda huelga nacional. El 17 de octubre de 1988 fue muerto Alejandro Patiño, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros de Morococha (STMM) y militante aprista, y el 18 de octubre de 1988 asesinan a Fidencio Coronel, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya y militante del PCP Unidad, al día siguiente del inicio de la huelga nacional. El 13 de febrero de 1989, Saúl Cantoral, Secretario General de la FNTMMSP y Consuelo García, trabajadora de una ONG, fueron secuestrados y asesinados por presuntos paramilitares en la ciudad de Lima. Se

presume que con el asesinato de Cantoral se pretendía detener el inicio de una huelga nacional, anunciada para los primeros días de marzo, ante el incumplimiento de los empresarios mineros de los acuerdos entre el gobierno y los sindicatos mineros.

El 16 de abril de 1989, Seferino Requis, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Cerro de Pasco, fue asesinado en medio de una asamblea por seis hombres armados y con los rostros cubiertos. El 7 de mayo, en Morococha Yauli, Antonio Cajachagua, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Mineros de Morococha, fue asesinado por un grupo de encapuchados.

Sabotajes al sistema de transmisión de electricidad, ataques a locales públicos y de empresas privadas, robo de dinamita y, por supuesto, asesinatos selectivos como el de dirigentes mineros que hemos citado líneas arriba así como ataques a la policía, configuran una extensa relación de eventos en este año y el siguiente, los de mayor cantidad de muertos en la zona en todo el ciclo de violencia.

Ante el incremento continuo de los sabotajes, de las incursiones a los poblados, de la expansión territorial, de los «aniquilamientos selectivos» y además la aparición de columnas subversivas del MRTA en el campo, el gobierno de Alan García declaró al departamento de Junín en estado de emergencia el 30 de diciembre de 1988, el mismo mes en el cual seis años antes el gobierno de Belaunde había hecho lo mismo con Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Con esta medida, la represión de la subversión quedó en manos del Ejército, y el escenario de la violencia política se modificó de manera sustantiva en el departamento de Junín. La estrategia puesta en práctica tuvo tres componentes centrales: la instalación de bases contrasubversivas en las zonas rurales consideradas con presencia y asentamiento del PCP-SL y del MRTA; la organización de la población campesina para su autodefensa y por último la ubicación y «eliminación» de personas presuntamente vinculadas a la subversión, previa labor de inteligencia, tanto en el campo como en las ciudades. Esto último se aprecia en toda su magnitud en la Universidad Nacional del Centro entre 1990 y 1992, lapso en el cual aumentan las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes, docentes y trabajadores presuntamente vinculados con los grupos subversivos.

Pero el evento más impactante en la zona que ahora presentamos, ocurrió el 28 de abril de 1989 en Molinos, Jauja., con el enfrentamiento entre una patrulla del ejército y un destacamento de militantes del MRTA que se dirigía a tomar la ciudad de Tarma (*Ver: Estudio de Molinos de la CVR*). Este fue el revés más importante que tuvo el MRTA en la región central, muriendo en la llamada «batalla de los Molinos» 63 presuntos subversivos, según fuentes oficiales, de los cuales el MRTA reivindica sólo a 42. El patrullaje militar implantado con la instalación del ejército en el valle lograba con esta acción un golpe capital al MRTA.

De otra parte, la declaración del estado de emergencia coincidió con la implementación del V Plan senderista de «Desarrollar Bases en función de la conquista del Poder» entre agosto de 1989 y agosto de 1992, que proponía la ampliación de las zonas guerrilleras y de operaciones, la

expansión y consolidación de los Comités Populares y el tránsito a una segunda etapa de la «guerra popular», la del equilibrio estratégico. En consecuencia, las acciones de hostigamiento y los asesinatos de integrantes de las fuerzas del orden y autoridades locales, el asalto a puestos policiales, emboscadas y enfrentamientos con el Ejército así como las acciones de sabotaje y propaganda armada, aumentan a partir del segundo semestre de 1989.

El 16 de junio de 1989, un grupo de subversivos del PCP-SL atacó el puesto policial del distrito de Huaripampa, en Jauja, muriendo en la refriega dos policías y Teodoro Santos Mejía, párroco del lugar. El 7 de noviembre de 1989, otro grupo de militantes del PCP-SL asaltó el puesto policial de la ciudad de La Oroya resultando tres policías heridos.

Durante este periodo de tiempo, los asentamientos humanos, ubicados en los alrededores de la ciudad de Huancayo, fueron objeto de operativos de fuerzas combinadas de la policía y el Ejército. El objetivo era detener a presuntos militantes de los grupos subversivos que operaban en estos asentamientos pues desde tiempo atrás, tanto el MRTA como el PCP-SL procuraban captar simpatizantes en esos espacios marginales, y tal como explicamos en el caso de la selva central y del Tulumayo, también se generaron pugnas entre ambos grupos subversivos por ganar hegemonía en estos asentamientos humanos de la ciudad de Huancayo. Pero a raíz de los sucesos ocurridos en Molinos en abril de 1989, el trabajo urbano del MRTA se debilitó, cediendo terreno al PCP-SL. En esas circunstancias se produjo el asesinato de Luis Aguilar Romaní, presidente del asentamiento humano «Justicia, Paz y Vida», uno de los asentamientos humanos más importantes de Huancayo por su densidad demográfica, catedrático de la Universidad Nacional del Centro del Perú, cometido por militantes del PCP-SL. el 18 de julio de 1989.

El otro escenario donde se apreció el declive del MRTA fue la Universidad Nacional del Centro del Perú, pues algunos de sus militantes universitarios fueron enviados al campo para retomar el trabajo político y militar que habían estado desarrollando otros hasta la derrota sufrida en Molinos, circunstancia aprovechada por los militantes del PCP-SL para incrementar con mayor libertad su intensa labor de agitación y propaganda armada, y cometer los primeros asesinatos contra estudiantes dentro del campus universitario, como el de tres universitarios ocurrido el 28 de abril de 1989. Comenzó entonces la represión selectiva de integrantes de la comunidad universitaria de parte de las fuerzas del orden. En 1990, integrantes de la comunidad universitaria presuntamente vinculados al PCP-SL, empezaron a ser desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Un hecho que impactó en la opinión pública fue la detención de Jaime Cerrón Palomino, Vicerrector de la Universidad Nacional del Centro del Perú, junto con su chofer Armando Tapia, el 8 de junio de 1990. El 19 de junio, sus cuerpos sin vida y con visibles huellas de haber sido torturados fueron encontrados en un lugar conocido como Tierra Blanca en la ciudad de Huancayo. Este tipo de crímenes continuaron durante los meses y años siguientes, sumando decenas los estudiantes universitarios, docentes y trabajadores que fueron asesinados por grupos «paramilitares» (Ver: Estudio de la CVR sobre universidades públicas).

Al igual que en las elecciones municipales anteriores, los militantes del PCP-SL intentaron boicotear las elecciones municipales de noviembre de 1989 y las presidenciales de abril de 1990. Sin embargo, salvo en algunos alejados distritos de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, no lograron su cometido.

Los sabotajes de mayor envergadura a la producción minera se ejecutaron en 1989 cuando militantes del PCP-SL destruyeron varias locomotoras e instalaciones importantes de CENTROMIN Perú. En un documento fechado en mayo de 1990, el Comité Central del PCP evaluaba el impacto de estos sabotajes:

Siguen cumpliendo papel muy importante, golpeando duramente la economía peruana que se desenvuelve en las peores condiciones, en la más profunda crisis de nuestra historia. Sabotear la acción minera tiene mucha trascendencia porque el mayor porcentaje de ingreso de divisas proviene de esta actividad; golpea directamente al Estado peruano porque a más de crearle problemas son golpes que recibe en su propia actividad económica estatal, ejemplo, Centromin (Elecciones No! Guerra Popular Sí! 1990).

Pero además de esta apología de sabotajes, el PCP-SL no cesa en sus «aniquilamientos» de autoridades: el 22 de mayo de 1991, en Huasahuasi, Tarma, caen victimados por una columna senderista la monja Irene Mc Cormack, al presidente de la comunidad Pedro Pando, al ex teniente alcalde Alfredo Morales y al dirigente Agustín Vento. Más sangrienta aún, si cabe la expresión, es el asesinato del personal del Colegio «Sgto.1° Ramiro Villaverde», en la ciudad de Huancayo: ocho profesores y dos empleados son las víctimas de un grupo de encapuchados senderistas.

El número de personas muertas y desaparecidas (tanto por grupos terroristas como por agentes del Estado) alcanzó sus puntos más altos entre 1989 y 1992, años que suman 821 muertos y desaparecidos, el 81.52% del total de 1007 registrados en ciclo de violencia en el Mantaro. En ese período de dura violencia, destaca el año 1989, que reúne 235 muertos y desaparecidos, 23.3% del total registrado². Mientras que la violencia se concentra en Ayacucho en 1983 y 1984, el valle del Mantaro, al igual que la selva central, representa un ciclo posterior coincidente con la zona del Huallaga.

1.2.7.2.4. Final del ciclo de violencia: 1993-1998

Las estrategias de los grupos subversivos y de las fuerzas del orden puestas en juego entre 1989 y 1992, con gran cantidad de muertos y desaparecidos, fueron prefigurando el desenlace final de la guerra en la región central. Hacia fines de 1992, las fuerzas subversivas habían sido golpeadas fuertemente por el Ejército y la policía en el valle del Mantaro. Contribuyó a ello, como hemos visto en las zonas altas de Junín, la generalización de las rondas campesinas en el campo, que

² Según datos obtenidos por la CVR

obligaron a los militantes senderistas a replegarse, posiblemente a las ciudades del valle. En ese nuevo contexto, de pérdida de iniciativa y repliegue, las detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron mellando la capacidad de reponer y reorganizar sus filas para continuar con la lucha armada.

Cabe señalar que algunos meses después de declarado el estado de emergencia en la región, la relación entre policías y militares se estrecharía, intensificándose los operativos conjuntos, que consiguen, en buena medida desde los primeros meses de 1990, expulsar las columnas armadas del PCP-SL y desbaratar sus Bases y Comités del «nuevo estado», primero en las zonas de altura que presentamos anteriormente y algún tiempo después en las principales ciudades del valle del Mantaro. Las fuerzas del orden habían recuperado sin lugar a dudas la iniciativa durante el periodo anterior y habían golpeado seriamente a la estructura partidaria del PCP-SL no sólo en las ciudades y poblados del valle, sino también en los poblados que se ubican en las partes altas del mismo. Las capturas de militantes subversivos se intensificaron a partir de 1993 y el temor desatado por las fuerzas del orden en las ciudades fueron disminuyendo el ritmo de incorporación de militantes a las filas del PCP-SL. La «lucha armada» continuó en el valle, pero ya sin muchas perspectivas, con serios problemas organizativos, la oposición campesina y la opinión pública en contra. Esta situación difícil para el PCP-SL se agravó con la detención de Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992. Para ese entonces, el Comité Subzonal del valle del Mantaro ya había sido diezmado por la acción de las fuerzas del orden. Un año después, la solicitud de Abimael Guzmán de firmar un Acuerdo de Paz con el gobierno de Alberto Fujimori causó una verdadera conmoción entre sus filas, produciendo un reacomodo entre los militantes, divididos entre los que estaban de acuerdo con proseguir la «guerra popular», encabezados por Oscar Ramírez Durán, y los que estaban a favor del Acuerdo de Paz formulado por Guzmán. Al parecer, la mayoría de militantes en libertad se alinearon con Ramírez Durán. Estos fueron los que continuaron con las acciones subversivas en el valle del Mantaro durante los años siguientes, cada vez en menor cantidad, pero sobre todo en la selva del departamento de Junín, sin tener mayor impacto ni alcanzar trascendencia política nacional.

El 26 de marzo de 1995 es capturada en la ciudad de Huancayo Margie Clavo Peralta, importante dirigente nacional del PCP-SL, junto con Rodolfo Gutiérrez Muñoz, mando militar senderista. Es casi el fin de la organización senderista, cuya historia se cierra en la región central con la captura, el 14 de julio de 1999, de Oscar Ramírez Durán, «camarada Feliciano», en el distrito de Cochas, a pocos kilómetros de la ciudad de Huancayo, cuando pretendía retirarse de su zona de operaciones en la selva central por la imposibilidad de continuar actuando en ella.

1.2.7.3. Cronología

Zona III: valle del Mantaro y Tarma

08/07/80	Yauli: Presuntos miembros de PCP-SL intentan volar con cargas de dinamita el reservorio de agua de CENTROMIN Perú.
20/07/80	Carhuamayo: Militantes del PCP-SL vuelan un tramo de la vía férrea Oroya - Cerro de Pasco
17/08/80	Santa Rosa de Sacco, Yauli: Militantes del PCP-SL incendian el local del Concejo Distrital de Santa Rosa de Sacco
26/08/80	Tarma: Senderistas arrojan petardos de dinamita al Concejo Provincial de Tarma
01/09/80	Huancayo: El PCP-SL ataca el puesto de la Guardia Civil y el Municipio Distrital de Chilca
13/12/80	Chambará, Huancayo: Presuntos subversivos dinamitan una torre de alta tensión
31/07/81	Tarma: Presuntos subversivos incendian los pastizales de la SAIS «Ramón Castilla».
17/08/81	Huancayo: Subversivos dinamitan poste de alta tensión de la línea de la sub-estación Huayucachi a la sub-estación Salesiano. La ciudad de Huancayo queda sumida en la oscuridad.
06/01/82	Jauja: Subversivos dinamitan una torre de alta tensión. La ciudad de Jauja y algunos pueblos vecinos quedan sin energía eléctrica.
24/08/82	Ingenio, Concepción: Militantes del PCP-SL asaltan un polvorín del Banco Minero del Perú. Se llevan dinamita y fulminantes.
12/10/82	La Oroya: 7 presuntos subversivos asaltan el Banco Los Andes de La Oroya y se llevan 15 millones de soles.
23/10/82	Huancayo: Presuntos subversivos dinamitan una torre de alta tensión. La ciudad de Huancayo queda a oscuras.
16/7/84	Senderistas asesinan al alcalde IU de Huancayo, Saúl Muñoz Menacho
22/12/85	Pachacayo - Jauja: Senderistas asaltan la Cooperativa Pachacayo (dejan herido un trabajador) y la SAIS Tupac Amaru.
25/10/86	Pachacayo, Jauja: Columna armada toma la Unidad de Producción CONSACC de la SAIS Tupac Amaru, asesinan al administrador y hieren al sub administrador.
10/07/87	Pachacayo, Jauja: Grupo senderista ataca instalaciones de la SAIS Pachacutec, asesinan al administrador y saquean el almacén.
09/06/87	Pachacayo – Canchanllo, Jauja: 6 senderistas ingresan a la casa de un trabajador de la SAIS Tupac Amaru y lo asesinan de dos balazos en la cabeza.
3/2/1989	Víctor Polay Campos, jefe militar del MRTA, es capturado en el Hotel de Turistas de Huancayo.
12/04/89	Huancayo: Una columna armada del PCP-SL asesinó a 12 campesinos, entre dirigentes comunales y autoridades locales, en el distrito de Chongos Alto.
28/04/89	Jauja: 63 presuntos miembros del MRTA mueren en un enfrentamiento con el Ejército en el distrito de Molinos.
11/5/1989	El Ejército y la Policía Nacional intervienen en dos oportunidades la Universidad Nacional del Centro en busca de elementos terroristas, debido al reparto de volantes que anuncian un paro armado los días 10, 11 y 12 en el departamento de Junín. En medio del paro convocado, el presidente García viaja a Huancayo para hacer una enérgica invocación a la población huancaína a vencer el miedo.
22/5/91	El PCP-SL asesina en Huasahuasi, Tarma, a la monja Irene Mc Cormack, al presidente de la comunidad Pedro Pando, al ex teniente alcalde

	Alfredo Morales y al dirigente Agustín Vento.
18/6/91	Treinta y cinco estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo), desaparecen. Presunta responsabilidad de paramilitares.
12/01/92	Mito, Concepción: Encapuchados asesinan a 5 jóvenes en plena plaza de Mito.
31/01/92	El Tambo, Huancayo: En el AAHH Juan Parra del Riego acribillan a dirigente Florentina Rivera Távara, quien además, era dirigente en FONDEAGRO.
8/2/92	Hualaoyo, Concepción: en Huancayo-Auquimarca, 50 terroristas incursionan y dan muerte a 13 comuneros.
08/02/92	Ulcumayo, Junín: 15 campesinos muertos es el saldo de una incursión subversiva en la comunidad de Ulcumayo.
04/03/92	Huancayo: El PCP-SL asesina 8 profesores y 2 empleados del Colegio Secundario Ramiro Villaverde.
17/03/92	Paccha, Jauja: 13 comuneros de Suytucancha fueron secuestrados por aproximadamente 30 hombres no identificados.
24/03/92	Pilcomayo, Huancayo: PCP-SL asesina a tres dirigentes de las rondas campesinas de la comunidad campesina de Chaquicocha, cuando se dirigían a Huancayo.
16/05/92	Huancayo: Paro armado decretado por PCP-SL paraliza a toda la región. El EP, la PNP y ronderos de diversos lugares, patrullan la ciudad.
12/06/92	Jauja: Se estrella un helicóptero, mueren 11 personas y 35 quedan heridas.
3/7/92	Huancayo: Dos policías fueron acribillados por 5 subversivos cerca del Colegio Santa Isabel.
27/7/92	Chupaca, Junín: Marcelino Arrieta La Torre, ex-alcalde de Chupaca, es asesinado por presuntos subversivos.
2/8/92	Huancayo: Fueron identificados los cuerpos de dos jóvenes asesinados a balazos en Quebrada Honda y en las inmediaciones del cementerio de Umuto. Se trata de una estudiante de Servicio Social de la UNCP y de Judith Betzabé Huamán Quispe, ex-alumna del Colegio María Inmaculada.
29/8/92	Huancayo: Presuntos integrantes del MRTA asesinan a presunto senderista. Sobre su cadáver dejan un letrero con la siguiente leyenda: «Muerto por senderista asesino. El MRTA no es senderista, sino revolucionario. ¡Viva el MRTA!».
3/10/92	Yauli, Junín: Subversivos plagian a dirigente comunal. Se trata de Máximo Quillatupa Huamán, Secretario de Educación y Cultura de la Federación Unitaria de Junín y Tayacaja.
12/10/92	Huasahuasi, Tarma: 5 autoridades han desaparecido misteriosamente y sus familiares indagan por sus paraderos.
15/10/92	Moyobamba, Jauja: Ronderos matan a tres abigeos luego de torturarlos.
21/10/92	Sincos, Jauja: Masacre en Sincos: 8 asesinados, podrían estudiantes de la UNCP. Mientras en Sicaya aparece universitaria victimada.
25/10/92	Sincos, Jauja y Huancayo: aparecen otros 5 cadáveres: 2 en Sincos, 3 en Huancayo.
6/12/92	San Pedro de Cajas, Tarma: PCP-SL ataca pueblo y degüellan a 7 comuneros en la plaza de armas del lugar.
6/2/93	Huasahuasi, Tarma: Aproximadamente 50 subversivos asesinan a 10 ronderos en Huasahuasi.
11/3/93	Sapallanga, Huancayo: Asesinan al alcalde distrital.
7/6/93	Jauja: En ceremonia castrense de entrega de armas a los ronderos, algunos presuntos subversivos se entregaron a la justicia.
07/1993	La Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán viaja a Huancayo para

	investigar las desapariciones de 89 estudiantes, entre ellos 20 universitarios, secuestrados por presuntos paramilitares.
26/8/93	Ingenio, Huancayo: Cosme Ríos, jefe de los ronderos del anexo de Siusa y otro integrante de la fuerza defensiva de ese lugar fueron muertos por presuntos subversivos. Igualmente se registraron ataques de presuntos subversivos en Paccha, Tiso, Suytucancho y Nahuinpuquio.
19/2/94	Ulcumayo, Junín: Ronderos secuestran y asesinan al profesor Hugo Zapata Gutiérrez.
26/03/95	Huancayo: Margie Clavo Peralta fue capturada en El Tambo, junto a ella, detienen a Rodolfo Gutiérrez Muñoz, mando militar.
7/7/98	Huancayo: Soldados desocuparon la ciudad universitaria de la UNCP
9/1998	El fiscal provincial, Gilberto Félix, confirma que las osamentas halladas en dos fosas clandestinas, descubiertas a 100 metros de la comisaría de la ciudad de La Oroya corresponden a 8 varones que fueron torturados y victimados a balazos.
14/7/99	Huancayo: La policía captura a Oscar Ramírez Duran, «camarada Feliciano».

1.2.8. Zona IV: el Departamento de Pasco: provincias de Pasco y D. A. Carrión

1.2.8.1. Datos Generales

El Departamento de Pasco está formado por tres provincias, Pasco, Carrión y Oxapampa, esta última en territorio selvático. Tradicional región minera, las comunidades ganaderas de Pasco han enfrentado desde hace muchos años serios conflictos con haciendas y empresas, sobre todo la Cerro de Pasco, y su heredera CENTROMIN. Ondores es el mejor ejemplo histórico de este enfrentamiento.

Población 1983 – 1993 según provincia

Población	1981	1993
Pasco	125 829	129 899
D.A. Carrión	34 654	36 098
TOTAL	160 483	165 997

Fuente: INEI

Al igual que en todo el país, el mayor aumento poblacional en el período intercensal 1981-1993 se constata en la zona selvática de Oxapampa. Por haber sido, centralmente, zona de acción del MRTA en su frente de la selva central, hemos incluido la provincia de Oxapampa en la Zona V, correspondiente a la historia de la violencia en la selva central que veremos en el capítulo siguiente.

Las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión son, fundamentalmente, territorio de ganadería de altura con agricultura complementaria. Los centros mineros ocupan también un lugar importante en la economía departamental, especialmente lo que fue la empresa CENTROMIN, en la ciudad de Cerro de Pasco, cuyo tajo abierto ha obligado al desplazamiento de la ciudad conforme se amplía la extracción del mineral.

La provincia de Pasco esta integrada por 13 distritos: Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Huayllay, Ninacaca, Pallanchacra, Paucartambo, San Francisco de Asís de Yarusyacán, Simón Bolívar de Rancas, Ticlacayán, Tinyahuarco, Vicco y Yanacancha. Entre ellos, el distrito de Ticlacayán fue de vital importancia para facilitar la penetración de los militantes del PCP-SL al valle del Chaupihuaranga y desenvolver así su trabajo político en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Asimismo, los distritos de Huariaca y Pallanchacra permitieron sus desplazamientos al departamento de Huánuco, en tanto el de Paucartambo lo fue para el tránsito hacia el norte del departamento de Junín.

Por su parte, la provincia de Daniel Alcides Carrión se ubica el noroeste del Cerro de Pasco y está formada por ocho distritos: Chacayán, Goyllarisquiza, Páucar, San Pedro de Pillao, Santa Ana de Tusi, Tápuç, Vilcabamba y Yanahuanca. En menor o mayor medida, cada uno de estos distritos fue afectado por la presencia y la acción del PCP-SL y la respuesta contrainsurgente del Estado a través de sus agentes, la policía y el ejército.

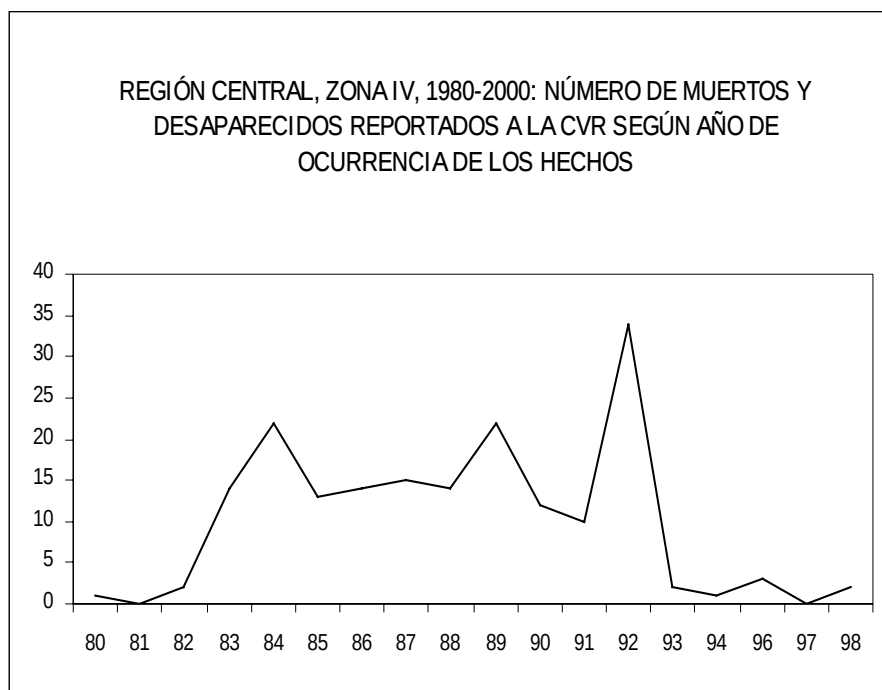
1.2.8.2. Historia de la violencia

Hacia fines de la década de 1970, algunos de los militantes del PCP-SL se instalan en Pasco para realizar tareas de proselitismo entre los mineros y sus sindicatos, los campesinos y sus organizaciones gremiales. En los primeros meses de 1980, el Comité Central del PCP-SL designa a Oscar Alberto Ramírez Durán, conocido con el seudónimo de «Feliciano», como secretario y mando político del Comité Regional Centro, formado inicialmente por los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín. La importancia asignada a Pasco por el PCP-SL queda demostrada en el hecho que el 17 de mayo de 1980, el mismo día en que la llamada «guerra popular» del PCP-SL se inicia en el distrito de Chuschi en Cangallo, Ayacucho, con la quema de ánforas electorales, un destacamento comandado por «Feliciano» lanza una carga de dinamita contra el local del Concejo Municipal de Pasco y otra en las oficinas de la empresa CENTROMIN PERU.

Si nos remitimos a la cantidad de muertos en el departamento de Pasco, apreciamos que la provincia de Oxapampa sufre, entre 1988 y 1990, el mayor impacto de la violencia política, mientras que en la provincia de Pasco los momentos más álgidos se viven en 1988, 1989 y 1992. D. A. Carrión, por su parte, sufre el embate de la violencia en espacios más reducidos, como «los Chinchés», tal como veremos luego.

REGIÓN CENTRAL, ZONA IV, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																		
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
TOTAL	177	1	-	2	13	22	13	14	13	14	21	12	10	34	2	1	-	3	-	2
PASCO	109	-	-	-	-	4	8	7	4	13	21	9	4	32	2	1	-	3	-	1
DANIEL ALCIDES CARRIÓN	68	1	-	2	13	18	5	7	9	1	-	3	6	2	-	-	-	-	-	1



1.2.8.2.1. El vacío de poder y la construcción del «nuevo estado»: 1980-1985

Las primeras acciones de sabotaje en la ciudad de Cerro de Pasco, capital del departamento, fueron paralelas al trabajo de inserción de los militantes del PCP-SL en el campo, en concordancia a la concepción maoísta de «conquistar bases de apoyo» para «batir el campo». El ingreso de los militantes del PCP-SL en las áreas rurales de Pasco se registra desde fines de 1980, y muchos pobladores dicen que estos primeros militantes del PCP-SL eran de «procedencia ayacuchana», por su forma de hablar y de vestir, con disposición para escuchar y con un tono cordial cuando se dirigían a sus interlocutores. Es difícil comprobar esta afirmación, teniendo en cuenta que en casi todos los testimonios y entrevistas reunidos por la CVR en el país, la reconstrucción de la memoria incorpora la imagen de los «ayacuchanos foráneos» como un mecanismo para deslindar a la población local de las propuestas senderistas que en algún momento aceptaron.

La relación que se establece inicialmente entre los militantes del PCP-SL y la población fue, entonces, de cierto respeto y consideración hacia las opiniones de las autoridades locales y los pobladores. De manera frecuente, los mandos subversivos convocaban a reuniones a los pobladores para transmitir su mensaje, sus objetivos y el carácter de la «guerra popular» que pretendían desarrollar en todo el país. Su discurso giraba en torno a las desigualdades sociales, la naturaleza del Estado y la necesidad de transformar el «viejo orden» mediante la «lucha armada», lucha que era conducida por el camarada Gonzalo y el PCP-SL. Por último, instaba a los pobladores a que enfrentaran sus problemas de manera colectiva.

Así decían «Ahora vamos a trabajar juntos, mano a mano, con ustedes compartiendo [...] uno para todos y todos para uno [...] ¡Llegaremos a triunfar!, al presidente lo botaremos, a esos chupa sangre. Ellos viven de nuestro trabajo, el vivo, vive del sonso [...] Yo no les obligo depende de ustedes.» (343009)

La promesa de acabar con el abandono, el olvido del Estado, las desigualdades existentes y la pobreza capturaron la voluntad y sedujeron la imaginación de muchos pobladores, generando posiblemente expectativas en cuanto a los beneficios que podrían obtenerse. Sin embargo, desde un primer momento, los militantes del PCP-SL no siempre tuvieron la misma acogida en todas las comunidades que visitaron, siendo rechazados por los pobladores. Las represalias contra estas poblaciones no fueron inmediatas y el «aniquilamiento» de sus iniciales opositores tendría lugar sólo algunos meses después, cuando contaban con cierto algunas Bases de apoyo en algunas comunidades de las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco.

Al igual que en Ayacucho, punto de partida de la guerra, y coincidiendo en el tiempo con las acciones de esa región, al inicio de su trabajo político los militantes del PCP-SL prestaron en Pasco particular atención a las autoridades locales, tratando de ganárselas a su causa. Poco tiempo después, hacia fines de 1983, los mandos senderistas lanzan la consigna de renuncia de todas las autoridades políticas y locales, sin excepción, impartiendo amenazas de muerte o procediendo al «aniquilamiento» para crear vacío de poder en aquellos lugares donde las fuerzas del PCP-SL iniciaban su asentamiento territorial. Lo dice con nitidez A. Guzmán en la «Entrevista del siglo»:

Generamos vacío en el campo y tuvimos que crear Nuevo Poder sin haber derrotado grandes fuerzas armadas porque éstas no habían ingresado y si lo hicieron, si ingresaron, fue porque creamos Poder Popular. Esa fue la situación política concreta que se dio en el país...
Entonces, habiendo generado vacío de Poder en el campo, se nos planteó el problema, de qué hacer? y resolvimos crear comités populares, o sea dictaduras conjuntas, un Nuevo Poder; nos planteamos hacerlos clandestinos, porque luego tendría necesariamente que ingresar la fuerza armada, eso lo sabíamos. Esos Comités Populares se han centuplicado, los que están en un área forman una base de apoyo y el conjunto de éstas la República Popular de Nueva Democracia en formación. De esta manera es como surgieron los comités, las bases y está en formación la RPND.

Muchos pobladores aceptaron los nuevos cargos, sea por el temor a ser asesinados, sea de muy buena gana ante tal designación que posibilitaba administrar justicia y garantizar un mínimo de control social. Pero también, como se constata a lo largo de la historia de la violencia en las diferentes regiones, era la oportunidad de poder «resolver» viejos problemas y conflictos personales abusando de su poder.

La fuerza militar de la subversión

La construcción del «nuevo poder» en el campo se producía de manera simultánea a la acción del ejército subversivo, el autodenominado Ejército Guerrillero Popular (EGP). En sus inicios los subversivos eran una fuerza relativamente pequeña, compuesta por no más de 8 a 10 militantes. La fuerza que empieza a recorrer el campo tanto de la provincia de Daniel Alcides Carrión como de la de Pasco estaba formada por aquel contingente inicial que poco a poco fue incorporando jóvenes a sus filas. Esta Fuerza Principal apenas contaba con unas cuantas armas de guerra, además de escopetas, revólveres, pistolas y dinamita, siendo su mejor cualidad la movilidad de un lugar a otro cubriendo grandes distancias para realizar alguna tarea de sabotaje, de «aniquilamiento» de personas o de incursión a poblados acompañados con la «masa» compuesta por pobladores de los pueblos vecinos.

No todas las zonas donde se ejecutaron acciones subversivas tuvieron la misma importancia en los planes subversivos, dependiendo ello de su ubicación geográfica, el trabajo político desarrollado por los militantes del PCP-SL y la presencia de las fuerzas del orden. En DA Carrión debemos referirnos sobre todo al distrito de Yanahuanca, hacia el noroeste de la ciudad de Cerro de Pasco, colindante con la provincia de Oyón, del departamento de Lima (Ver Capítulo sobre Eje Lima-Ancash), y el distrito de San Miguel de Cauri, en el departamento de Huánuco. Es de particular importancia la historia de la violencia en el espacio conocido como «los Chinchos» por la toponimia de sus principales poblados: Chinche Yanahuanca, Chinche Tingo y Chinche Rabí.

La población de los Chinchos recuerda que la primera vez que los subversivos los visitaron fue en 1982, aunque hay versiones de otros pobladores que afirman que desde mediados de 1980 personas que no eran del lugar transitaban por los Chinchos de manera frecuente. El trabajo político de persuasión y convencimiento de los pobladores logró que muchos pobladores de los Chinchos aceptaran la prédica de los subversivos y se incorporaran voluntariamente a sus filas, siendo los jóvenes del lugar los más entusiastas. Una vez que los subversivos lograron asentar sus fuerzas y ganar simpatías y apoyo entre los pobladores de los Chinchos, fueron desplazándose a distritos vecinos como San Pedro de Pillao, Tapuc, Paucar Chacayán, Goyllarisquiza y Santa Ana de Tusi. Debido a esta presencia de militantes del PCP-SL, los Chinchos fue considerada «zona roja» por las fuerzas del orden, «zona liberada» dirían los senderistas. Además de los Chinchos, debemos remarcar el trabajo del PCP-SL en Tangor, ubicado en el extremo norte de la provincia de Daniel Alcides Carrión, colindante con el departamento de Huanuco, que facilitó los primeros desplazamientos de los subversivos hacia Huanuco, y luego hacia la cuenca del Huallaga.

En Chinche Tingo, los asesinatos de las autoridades locales se iniciaron tempranamente, en 1982. En octubre de aquel año los pobladores, alentados por las autoridades, se reunieron en varias ocasiones para definir una posición frente a las incursiones subversivas. Algunos plantearon

rechazarlos ellos mismos. Otros, en cambio, señalaron que debían informar a la policía de lo que venía ocurriendo en la zona de los Chinchos. Aunque no asumieron una posición unánime, acordaron vigilar el pueblo para evitar en la medida de lo posible el ingreso de los subversivos. El 18 de octubre de 1982, militantes del PCP-SL encapuchados y portando algunas armas de fuego irrumpieron en la vivienda de Teofilo Rojas, teniente gobernador de Chinche Tingo. Mientras su esposa y sus pequeños hijos fueron encerrados en una habitación, Rojas fue conducido hacia una casa abandonada en Chinche Tingo, en donde fue asesinado. El asesinato de Teofilo Rojas provocó la renuncia inmediata de las demás autoridades locales.

Cuatro días después, el 22 de octubre de 1982, un grupo de 15 subversivos ingresó a la vivienda de Sósimo Santiago, ganadero y agricultor quien animaba a los pobladores para defenderse de las incursiones subversivas, apresándolo en medio de insultos: «perro, estás contra el partido, ahora vas morir [...] ¡ni tú, ni nadie nos va a detener!». (343007). Las súplicas de su esposa, al igual que sus hijos menores, para que no lo maten no fueron escuchadas. Los subversivos empezaron a golpearlo, derribándolo de un puntapié. Caído, continuaron propinándole más golpes y puntapiés. En un momento, cuando estaba desmayado, un subversivo le cortó ambas manos. Pocos instantes después, otro subversivo tomó su arma y le disparó en la cabeza. De esta manera, el inicial intento de resistencia de los pobladores de Chinche Tingo fue sofocado por los subversivos.

Barriando la semi feudalidad en el campo: el asesinato de «gamonalistas» y autoridades

El discurso «antifeudal y antiterrateniente» del PCP-SL convirtió en sus enemigos principales a «gamonales» propietarios de tierras. El 24 de junio de 1983, en el anexo de Huarautambo, en el distrito de Yanahuanca, un grupo de 30 hombres provistos de armas de fuego y bombas caseras asesinó a Alcira Benavides Albeo de Madrid, luego de un «juicio popular». Los subversivos la acusaban de «gamonalista», afirmando que estaba en contra de ellos y la sentenciaron a muerte diciendo: «Así mueren los soplones gamonalistas y éste es el ejemplo» (341032). Su hacienda fue saqueada y los bienes, enseres y animales se repartieron entre los pobladores. Simultáneamente, otro grupo de subversivos había ingresado a las instalaciones de la Cooperativa de Huarautambo, y de igual manera repartieron algunos animales. El asesinato de Alcira Benavides fue un hecho que se difundió rápidamente por todos los poblados y anexos de Yanahuanca.

En 1983 igualmente, dos hechos similares ocurrieron en el distrito de Paucar, en la provincia de Daniel Alcides Carrión, y en el distrito vecino de Jesús, en la provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco. En el primero dos pobladores fueron asesinados por poseer extensas tierras y ganado vacuno y en el segundo, acaecido el 29 de agosto de 1983, Francisco Marengo Vicente fue asesinado en la hacienda Lauricocha. Eliminados los «gamonalistas», buena parte de su ganado fue repartido entre los pobladores. Además de los «gamonalistas», el blanco de las acciones de las columnas senderistas fueron las autoridades que no habían renunciado a sus cargos. En 1983, el número de asesinatos selectivos de autoridades y pobladores de los pueblos de los Chinchos y

distritos vecinos se incrementó y las incursiones subversivas fueron aumentando al igual que las demandas de los subversivos a los pobladores por provisiones.

El 21 de mayo de 1983 un contingente de aproximadamente 200 militantes del PCP-SL ingresó al distrito de Páucar. El único policía que se encontraba en ese momento en el puesto policial de Páucar logró escapar ayudado por Elías Fuster Ponce quien cuatro meses después sería asesinado acusado de colaborar con la policía. Un mes después de ese asalto los subversivos ingresaron nuevamente a Páucar y en la plaza principal asesinaron a las autoridades locales y al director del colegio Leoncio Prado por no haber renunciado a sus cargos. Luego los subversivos se dirigieron al centro poblado de San Juan de Yacán, donde asesinaron a otras 4 autoridades porque se habían negado a renunciar.

En Páucar, los centros poblados de 8 de Diciembre, Chaupimarca y en particular Tangor y San Juan de Yacán, quedaron en consecuencia a merced de los grupos del PCP-SL. Los pobladores de Páucar recuerdan la presencia entre ellos de Oscar Ramírez Durán, conocido mucho tiempo después como el camarada «Feliciano», quien acostumbraba untarse con algún ungüento una de sus piernas, herida en el asalto exitoso a la cárcel de Cerro de Pasco el 30 de junio de 1982, que liberó a 11 inculpados por terrorismo y dejó un Guardia Republicano muerto y otro herido.

El trabajo proselitista de los subversivos, como sabemos, se sustentaba en buena medida en los profesores de escuelas y colegios de las zonas donde operaban. Con algunos profesores en sus filas, el adoctrinamiento de los niños y adolescentes se facilitaba enormemente.

En mayo de 1983 en San Juan de Yacán un grupo de subversivos, entre ellos niños y adolescentes, que lucían cintas rojas sobre la frente, marcharon con dirección al plantel educativo dando vivas a la «lucha armada» y al «camarada Gonzalo». Sin mayor resistencia y en medio de la sorpresa general ingresaron al colegio. Mientras tanto, todos los pobladores fueron obligados a reunirse en el plantel:

Ya todos en el aula, los atacantes se identificaron como miembros de Sendero Luminoso y nos hablaron de su ideología, [nos tuvieron] hasta las cinco de la tarde enseñándonos canciones» (341029).

Después, los pobladores fueron separados por sexo y edad. En cada uno de los grupos que se formaron, los subversivos nombraron delegados y en horas de la tarde, después de exigir la renuncia de las autoridades, salieron con dirección al distrito de Chacayán.

La madrugada del 21 de junio de 1983 militantes del PCP-SL, provenientes de Páucar, ingresaron nuevamente a San Juan de Yacán. Juan Escandón Sereno (Presidente del Consejo de Administración), Roberto Gomes (Secretario del Consejo de Administración), Isidoro Cárdenas Tordocilla (Teniente Gobernador), Hilario Lavado Calero (Director del Centro Educativo) y Pablo Cárdenas y Vicente Berrospi (pobladores de Yacán), fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en

la plaza de armas del pueblo con un cartel que decía: «*Así mueren las autoridades por desobedientes*» (342019).

A los pocos días, efectivos militares provenientes de la Base Militar de Carmen Chico de Yanahuanca se instalaron en San Juan de Yacán, e incursionaron desde allí en los distritos de Paucar (provincia de Daniel Alcides Carrión) y Chaupimarca (provincia de Pasco), deteniendo a unos cuantos pobladores pero después de unos días se retiraron del lugar.

Ante la amenaza de más asesinatos, los pobladores de Chinche Tingo se reunieron para acordar algunas medidas con el objetivo de contrarrestar a los subversivos. El 8 de septiembre de 1984, a las 11 de la mañana, un grupo de subversivos tomó el poblado de Chinche Tingo y asesinó a Flavio Guzmán, al profesor Pablo Bustillos Loyola y a los pobladores Florencio Loyola Esteban y Víctor Rojas, que habían sido activos promotores de las medidas de vigilancia y denuncias contra el destacamento senderista.

Los asesinatos de las autoridades y pobladores de Chinche Tingo produjeron estupor y miedo entre los pobladores. Sin embargo algunos de ellos, sin ser nombrados como autoridades, asumieron algunas funciones de las mismas. Fue el caso de Basilio Osorio Bonilla, quien tenía en su poder el sello de teniente gobernador del poblado y realizaba algunas actividades como tal. El 13 de octubre, un mes después del asesinato colectivo, militantes del PCP-SL ingresan a Chinche Tingo y se lleva consigo a Basilio Osorio Bonilla, asesinándolo aunque se desconoce hasta hoy el destino de sus restos.

En 1984 el tránsito de los militantes del PCP-SL también era constante en Chinche Rabí, siguiendo el mismo esquema de reunir a los pobladores en la plaza para exponer las razones de su lucha, exigir la renuncia de las autoridades y pedir a la población que se incorpore a la «lucha armada», además de designar a pobladores como representantes de la comunidad.

En este reguero del terror, el 8 de agosto de 1984 un contingente del PCP-SL ingresó al poblado de Santa Rosa de Astobamba, en el distrito de Yanahuanca, y asesinó a Antonio Artica Sosa, agente municipal. A los pocos días, en el pueblo de Huarautambo, los senderistas asesinaron a Máximo Giordano Velásquez, Teniente Gobernador, y a su hermano Guillermo junto con su esposa Natalia Herrera Velásquez. Los cuerpos sin vida de los tres pobladores y de Antonio Artica Sosa fueron dejados en la plaza del pueblo. Alertados por los pobladores, una patrulla del Ejército de la Base Militar de Yanahuanca incursionó en Huarautambo y Astobamba, pero semanas después la columna senderista retornó al poblado de Huarautambo, increpando a los pobladores el haber colaborado con el Ejército, deteniendo a diez presuntos colaboradores, que fueron atados a postes en medio de la plaza para fusilarlos, pero las súplicas de los familiares les salvó la vida.

Podríamos describir muchos otros hechos similares, que ratifican la estrategia del PCP-SL de destruir el sistema de autoridades existente, en un radio de acción que se amplía poco a poco en las partes altas del departamento de Pasco, hostigando los puestos policiales cuyos efectivos se repliegan a los centros mayores.

Las empresas mineras fueron también, por supuesto, objeto de atentados. En el Centro poblado de Vinchos, distrito de Pallanchacra, donde estaba ubicada una Concentradora de Minerales de la Empresa Minera Vinchos, los militantes del PCP-SL asesinaron el 19 de junio de 1985 al Ing. Superintendente Celestino Vilca y al administrador Gerónimo Vargas Castro, incendiando los locales y saqueando el almacén de víveres. Vinchos sufrió incursiones periódicas de los subversivos. Por tal razón, y para continuar con el desarrollo normal de sus actividades, paulatinamente se vio forzada a reducir su personal.

La presencia senderista también llegó a ser importante en el centro poblado de Pucurhuay, distrito de Ticsacayán, en la provincia de Pasco, que limita con la provincia de Ambo del departamento de Huánuco, y con el centro poblado de Chinchán del distrito de Huariaca, con acceso directo a la Carretera Central. Allí, los pobladores recuerdan en 1983 el asesinato de la esposa del presidente de la comunidad.

En el distrito de Huariaca, las primeras incursiones senderistas datan de 1985. En él, los centros poblados de Rahui, Chinchán, Ganish, Guanac y Huapa, en el distrito de Ticsacayán, fueron convertidas en bases de apoyo para las columnas del PCP-SL. Precisamente en Rahui, en 1986, un grupo de 5 senderistas convocó a todos los pobladores a una reunión en la escuela del lugar. Durante la reunión se presentó como responsable el compañero Hernán quien dijo: ‘Todos deben renunciar a los cargos que sirven al gobierno...En caso de no aceptar, los vamos a matar como a perros y el que se atreve a denunciar morirá por ser cabezas negras...El partido tiene mil ojos y mil oídos’ « (342010). En el poblado vecino de Ganish, en una reunión con los pobladores el mismo «camarada Hernán», manifestó que desde ese momento: [...] tienen un representante en Ganish [...] a quien tienen que obedecer y [tienen que] participar en las reuniones, sin excusas. (342011)

En el distrito de Pallanchacra, que limita por el Norte con el distrito de Ambo (departamento de Huánuco) y que al igual que el distrito de Huariaca era un lugar de tránsito obligado de los militantes del PCP-SL para incursionar a los vecinos distritos de la provincia de Ambo (Huánuco), un contingente aproximado de 150 hombres del PCP-SL ingresó el 10 de diciembre de 1988, asesinando al Alcalde.

El 9 de agosto de 1988 un grupo de 25 militantes del PCP-SL, al mando del «camarada Johan», hizo su ingreso al poblado de Chunquipata, en Huariaca. En la plaza, todos los pobladores fueron obligados a tenderse boca abajo en el suelo, mientras que las autoridades identificadas fueron maniatadas y asesinadas delante de la población de un tiro de escopeta en la cabeza. Los que no morían en el acto fueron repasadas por «Johan». En esta incursión fueron incendiadas veintidós casas, y el grueso de los pobladores de Chunquipata, temerosos de las represalias de «Johan», abandonó el poblado.

El 27 de diciembre de 1988, un contingente de cuarenta militantes del PCP-SL tomó la localidad de Huariaca y dinamitó el Concejo municipal, el puesto policial —con el saldo de un

policía herido—, las instalaciones de ENTEL PERÚ, el centro de salud y la ambulancia del mismo, saqueando las principales tiendas de Huariaca, en plena carretera Central. Como fue habitual en este tipo de incursiones, el contingente estuvo formado por un reducido número de integrantes armados de la Fuerza Principal y por un número considerable de integrantes de la «masa», constituida por pobladores de lugares aledaños. Es probable que aquel contingente que atacó Huariaca fue el que también incursionó unos días antes en el distrito de Pallanchacra, el 13 de diciembre del mismo año.

Cerro de Pasco

En la ciudad de Cerro de Pasco, la Universidad Daniel Alcides Carrión (UNDAC) permitía un espacio político excepcional para la difusión y discusión de los lineamientos del PCP-SL, así como el reclutamiento de futuros militantes y simpatizantes de manera permanente. De igual manera, en esta ciudad se encontraba la dirigencia de uno de los sindicatos más importante de la Región Central, el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Pasco- CENTROMIN Perú. La desmovilización del movimiento sindical minero era probablemente uno de los objetivos del PCP-SL.

Los distritos de Chaupimarca, Simón Bolívar de Rancas y Yanacancha, por su cercanía geográfica, permitían que las acciones y el desplazamiento de los militantes del PCP-SL fuera eficaz. Al mismo tiempo que en Ayacucho, la ciudad de Cerro de Pasco, capital del departamento, sufrió atentados contra las instituciones públicas y privadas desde 1980, al igual que fueron en aumento las amenazas de muerte a autoridades políticas y a líderes políticos y sindicales. En esa ciudad fueron asesinados Tomas Miranda Trinidad (1986), Leonidas Gómez Yalico (1988) y Seferino Requis (1989), dirigentes sindicales de CENTROMIN – Perú.

Asimismo, en la ciudad de Cerro de Pasco, se produjo el «aniquilamiento» de líderes locales de otros distritos que se encontraban de paso por la ciudad, como es el caso de Laurentino Mendoza Janampa, Presidente de la Ronda Campesina y Fiscal Comunal de la comunidad de Pucurhuay, distrito de Ticlacayán, provincia de Pasco, en 1990, y de Godofredo Pablo Huamali Meza, docente en el Colegio Nacional «General Córdova» del distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, también en 1990.

La ejecución de atentados contra instituciones públicas y privadas, así como el aniquilamiento de las autoridades locales o sindicalistas en la ciudad de Cerro, era responsabilidad de militantes del PCP-SL. En cambio, en las acciones subversivas ejecutadas en los centros poblados rurales, se podía encontrar el apoyo de la «masa» de otras comunidades, tal como vimos en varios casos reseñados a lo largo de esta presentación.

Así sucedió en la madrugada del 20 de diciembre de 1990, cuando un contingente numeroso de subversivos ingresa a Vinchos y. realiza varios atentados contra la Planta Concentradora, el molino, las torres de alta tensión, el tablero, volquetes y carros de la empresa,

saqueando la «Mercantil» y asesinando al Superintendente y al Administrador de turno de la mina, los ingenieros Carpio y Edgard Quispe respectivamente. La Empresa optó por la liquidación inmediata de los 120 trabajadores.

1.2.8.2.2.. Resistencia de la población y respuesta contrasubversiva del Estado: 1985-1989

Desde 1984 muchas familias rurales —sobre todo las que contaban con mayores recursos— migraron a las capitales de distrito o de provincia. En cambio, las familias con menores ingresos alentaron a sus hijos a que abandonaran sus poblados para evitar ser reclutados por el PCP-SL. En efecto, desde 1984 el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes se volvió frecuente. La permanencia de aquellos variaba entre 15, 30, 60 o más días. Durante su permanencia en las filas subversivas eran sometidos a una rápida formación política e ideológica y también recibían entrenamiento militar e instrucción en el manejo de armas. Aquella instrucción política, ideológica y militar se efectuaba en lugares alejados de los poblados, generalmente en las alturas, tanto para evitar las fugas de los adolescentes y jóvenes reclutados como para no ser ubicados por las fuerzas del orden.

Pero al igual que la aceptación, voluntaria o impuesta por el miedo, la resistencia de algunos pobladores a las incursiones subversivas tuvo diferentes manifestaciones y consecuencias. No sólo mediante la negativa de las autoridades a renunciar, sino también a través de la acción directa, tal y como sucedió en la comunidad de San Juan Baños de Rabí, el domingo 14 de abril de 1985, día de las elecciones presidenciales, cuando cien pobladores de San Juan Baños de Rabi viajaron hacia Yanahuanca para ejercer su voto, luego de poner en fuga a un grupo de senderistas.

En los primeros años, la acción subversiva fue contrarrestada de inmediato por la actuación policial. En Cerro de Pasco, la investigación policial permitió identificar desde 1982 a algunos de los presuntos responsables de los atentados dinamiteros ocurridos en la ciudad, que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes quienes los juzgaron por actos contra la tranquilidad pública. Pero tiempo después, la respuesta policial fue insuficiente para detener el incremento vertiginoso del número de atentados y de víctimas, así como la expansión territorial de las fuerzas del PCP-SL. Al parecer, esta incapacidad policial fue uno de los motivos para que se declarara, en diciembre de 1984, el estado de emergencia en la provincia de Daniel Alcides Carrión. Tras ser decretado el estado de emergencia en Daniel Alcides Carrión, el Ejército estableció una base militar en el distrito de Yanahuanca a mediados de diciembre. Los últimos días de diciembre de 1984, otra base contrasubversiva se instala en Chinche Tingo. La presencia militar y el patrullaje continuo de sus efectivos reducen de manera significativa las incursiones y los atentados subversivos, y se crean las condiciones para que se nombren autoridades locales.

Con la intervención del Ejército y el notorio descenso del número de atentados en la provincia de Daniel A. Carrión, la actividad terrorista se incrementó en la provincia de Pasco. Los atentados dinamiteros y los asesinatos se sucedieron de manera reiterada desde los últimos días de 1984, y continuaron a ritmo sostenido hasta el mes de mayo de 1985, cuando el catedrático Luis Alberto Aguilar Cajahuamán, militante del APRA y profesor de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, quien había sido elegido Diputado en las elecciones del 14 de abril, fue asesinado por un destacamento del PCP-SL. El asesinato del catedrático precipitó la decisión del gobierno de Belaunde de declarar en estado de emergencia a la provincia de Pasco el 10 de mayo de 1985. Días después, el Ejército instaló una base contra subversiva en Quiulacocha, en el distrito de Ticlacayán.

El establecimiento de bases militares en algunas zonas consideradas como «rojas», fue un componente central en la respuesta contrainsurgente del Ejército, obligando a los subversivos armados a replegarse hacia otras zonas.. En ningún caso los subversivos intentaron atacar alguna de las BCS instaladas, en el caso de la provincia de D. A. Carrión, en Goyllarisquizga, Páucar, Santa Ana de Tusi, Simón Bolívar y Yanahuanca; en Michivilca (distrito de Tápuç) y Chinche Tingo (distrito de Yanahuanca), siendo la base de Goyllarisquizga la de mayor importancia. Otra base que jugó un importante papel en la lucha contrasubversiva fue la base de Carmen Chico, ubicada en La Quinua, distrito de Yanacancha, en la provincia de Pasco.

Pero la declaración del estado de emergencia creó las condiciones para que los derechos humanos de cientos de ciudadanos fueran violados de manera sistemática. Innumerables denuncias contra las fuerzas del orden fueron recogidas por el Comité de Derechos Humanos (CODEH) – Pasco. Paradójicamente, en ese mismo período de tiempo, ninguna denuncia contra el PCP-SL fue consignada.

En las semanas siguientes a la declaración del estado de emergencia aparecieron en la ciudad de Cerro de Pasco, personas muertas, con la característica de haber sido asesinadas con disparos de armas de fuego en la cabeza. Se presume que muchas de ellas fueron ejecutadas por miembros de las fuerzas del orden. En esos meses, las detenciones arbitrarias de presuntos miembros del PCP-SL por las fuerzas del orden se volvieron frecuentes. Cuando los familiares de los detenidos iban a buscar a sus familiares a las dependencias policiales y militares, los policías y militares decían desconocer el paradero de los detenidos. En el campo pasqueño también se produjeron numerosas detenciones de pobladores presuntamente vinculados a la subversión, muchos de ellos torturados con la finalidad de que reconocieran su presunta militancia en el PCP-SL y/o delataran a sus «camaradas». La tortura, la detención - desaparición y la ejecución extrajudicial fueron recursos que emplearon las fuerzas del orden en su lucha contra la subversión en la represión selectiva.

«Aniquilando» al camarada Hernán

La resistencia de algunos sectores de la población campesina, como hemos visto, tuvo también un peso importante en la derrota del PCP-SL. El mejor ejemplo de ello se registra en el distrito de Huariaca, en cual varios poblados se convirtieron en importantes bases de apoyo de las columnas senderistas, siendo particularmente activa la columna comandada por el «camarada Hernán» que hemos citado anteriormente. El 29 de julio de 1989 esta columna acompañada, según los relatos recogidos, por una «masa» de aproximadamente 200 pobladores de centros poblados vecinos, ingresó a Huariaca y dio muerte al presidente de la comunidad y al agente municipal. Quizás ese fue el punto de inflexión de las actividades subversivas en buena parte de las zonas rurales de la provincia de Pasco, en especial los poblados del distrito de Huariaca. En efecto, las irreparables pérdidas humanas, los daños económicos y el rechazo al abuso y al autoritarismo cruel fueron gestando la muerte del mentado «camarada Hernán». El 9 de agosto de 1989, el «camarada Hernán», armado con una metralleta, y dos combatientes de la Fuerza Principal del Ejército Guerrillero Popular, arribaron al poblado de Rahui. Con la argucia de una invitación a almorzar, el «camarada Hernán» fue asesinado por los comuneros de un hachazo en la cabeza mientras que sus dos acompañantes, ambos del centro poblado de Ganish, fueron perdonados. Sin lugar a dudas, la muerte de «Hernán» provocó el retroceso de las fuerzas del PCP-SL en la zona. Muchos de sus combatientes, jóvenes de los poblados aledaños, abandonaron las filas de PCP-SL y se reintegraron a sus lugares de origen.

1.2.8.2.3. Pero la guerra continúa con cambio de escenario: Cerro de Pasco y los distritos aledaños (1990-1992)

Ante la presión militar y el rechazo de muchos poblados, la estrategia subversiva redujo sus acciones en algunas zonas y poblados de las zonas más alejadas, privilegiando desde fines de la década de 1980 la provincia de Pasco para realizar sus operativos de sabotaje y asesinatos selectivos. De hecho, en los distritos rurales de Pasco, las acciones de militantes senderistas son más tardías que en la provincia de DA Carrión. Así, en Ninacaca y Vicco, distritos de Pasco, la presencia de militantes del PCP-SL se registra sólo desde 1986, y dos años después, en 1988, son asesinados los dirigentes de la Cooperativa Comunal de Ninacaca, mientras que algunos animales fueron sacrificados para abastecer a los militantes del PCP-SL y otros repartidos entre los pobladores. La situación fue similar en el distrito de Vicco, en donde hacia 1990 las cooperativas comunales eran los puntos preferidos por los subversivos para el acopio de alimentos y la apropiación de dinero.

Presumiblemente los distritos de Paucartambo y Huachón, al igual que Ninacaca y Vicco —ubicados en el departamento de Pasco— y Carhuamayo y Ulcumayo —ubicados en el departamento de Junín— formaban parte de una misma zona de operaciones del PCP-SL. En esta

área, el accionar subversivo se inicia recién hacia 1988, es decir aproximadamente seis años después de los otros distritos del norte de la provincia de Junín.

El distrito de Tambillo era parte de un corredor que los militantes del PCP-SL tenían para movilizarse desde Carhuamayo y Ulcumayo, hacia Pasco y viceversa. Desde 1990, grupos armados ingresaban permanentemente a Tambillo contando con el apoyo de militantes locales quienes les brindaban alojamiento y alimentación. La acción de estos grupos se fue volviendo cada vez más violenta, hasta culminar en 1992 con una serie de incursiones, cual caravana del terror contra el sistema de autoridades, de un poblado tras otro, «aniquilando» a personas supuestamente contrarias a su causa. La primera acción de este tipo se produjo el 2 de febrero de 1992 en los centros poblados de Tambillo, Auquimarca y Huallamayo, en la cual 21 pobladores, en su mayoría autoridades locales, fueron asesinados. Unos meses después, en mayo, esta acción se repitió en los distritos de Paucartambo, Huachón y Ulcumayo. El 13 de mayo de 1992 fue el turno del centro poblado de Chupaca, en el distrito de Paucartambo, el 14 de mayo fueron tres anexos de Ulcumayo (provincia y departamento de Junín) y el 17 del mismo mes en Quiparacra, en el distrito de Huachón).

El 2 de febrero de 1992 fue especialmente sangriento. Aquel día, un contingente del PCP-SL de aproximadamente 50 hombres, ingresó a las estancias de Chinchico y Marcapata, del centro poblado de Tama, distrito de Ulcumayo, en Junín. Obligó a los pobladores de Tama. A caminar hasta Tambillo, donde asesinaron al alcalde de Tama, a tres de sus familiares y a tres miembros de la familia Castro. Ese mismo domingo 2 de febrero, en Huallamayo, fueron asesinados Juan Córdova y tres de sus hijos por promover la organización de una ronda campesina. En la noche, los militantes del PCP-SL ingresan a Auquimarca y convocan a los pobladores a la plaza principal, donde asesinan a seis autoridades de la comunidad y a dos comuneros encargados de obras comunales.

Los pobladores de Chupaca se enteraron de los hechos y Magnolio Casimir Huaricapcha viajó inmediatamente a la ciudad de Cerro de Pasco para comunicar, a través de la emisora «Alturas», su renuncia al cargo de alcalde accidental del centro poblador menor de Chupaca. A pesar de ello, el 13 de mayo de 1992, un contingente del PCP-SL ingresa a Chupaca y lo degolla asesinando también a Alberto Miranda Córdova y Porfirio Fuero Anco.

Convertidos en blanco principal de la estrategia senderista, las autoridades continúan renunciando en las zonas rurales. Sin embargo, existen excepciones como en Quiparacra, en el distrito de Huachón, donde a pesar de las amenazas todas las autoridades acordaron mantenerse en el cargo aunque les costara la vida. Por ello, en la madrugada del 17 de mayo de 1992, un contingente de militantes del PCP-SL, vistiendo uniformes militares para aparentar ser soldados del Ejército, tomó Quiparacra y asesinó, en presencia de los pobladores, a Isabel Alcántara (regidora), Julián Alarcón Gonzáles, Abrahán Córdor Alarcón, Eloy Flores Anaya, Julio Jara Escobar, Cesario Rivera Gamarra y Alejandro Rivera Zarate.

1.2.8.2.4.. El final de las muertes (1993-2000)

Habiéndose iniciado la violencia casi al mismo tiempo que en Ayacucho en 1980, las fuerzas del orden respondieron casi de inmediato a las incursiones del PCP-SL, pero igual tuvieron que replegarse hacia centros poblados mayores. El repliegue inicial de la policía fue contrarrestado, desde 1985, con el despliegue de bases militares. De manera general, las acciones militares tuvieron dos características principales: la primera, patrullajes intensos en Cerro de Pasco y en los distritos de la provincia de Pasco y de Daniel A. Carrión; y la segunda, el asentamiento de destacamentos en las zonas con fuerte presencia subversiva. A fines de 1989 e inicios de 1990, el Ejército promueve la organización de los pobladores en rondas campesinas contrasubversivas, mientras que en la ciudad de Cerro de Pasco, los «rastrillajes» se hicieron frecuentes.

Algunas técnicas utilizadas en la lucha contrainsurgente son las mismas en todo el país aquellos años, como se ejemplifica en Chinche Rabí. En ese poblado, en 1987, ingresó un grupo aproximado de 40 militantes del PCP-SL que se dirigió a la casa de Hipólito Canchari para ordenar que les prepare comida para todos ellos. Hipólito Canchari Obli y su familia sacrificaron unos cuantos animales para alimentar a los recién llegados. El grupo de subversivos se retiró a las seis de la tarde. Tiempo después, un helicóptero del Ejército Peruano aterrizó en un descampado de Chinche Tingo, muy cerca de la casa de Hipólito Canchari. Los efectivos militares se desplazaron hacia su casa. Hipólito Canchari fue acusado de ser colaborador de los subversivos y en medio de la tortura a la que estaba siendo sometido les dijo que había sido obligado a darles de comer. Ninguna explicación fue suficiente. En medio de los golpes, los militares le decían que debía colaborar con el gobierno y no con los «terroristas». Las torturas continuaron hasta que Hipólito murió. La patrulla militar se retiró del lugar advirtiéndole a los pobladores que correrían con la misma suerte si continuaban brindando apoyo a los subversivos.

Hacia 1987, con el descenso de las acciones subversivas en las zonas altas, los pobladores volvieron a elegir a sus autoridades, a pesar de algunas incursiones de los contingentes del PCP-SL, como la sucedida el 16 de octubre de 1987, en Chinche Tingo, en donde tres autoridades locales recién elegidas fueron asesinadas,

A la resistencia creciente de las comunidades y pueblos, se sumó la ampliación de la presencia del ejército. Así, en 1988, se instaló la Base Contrasubversiva en Tusi, reduciendo las incursiones del PCP-SL y permitiendo a las autoridades locales ejercer sus cargos y funciones. En mayo de 1988, una patrulla militar se enfrentó en el poblado de Pucurhuay a un grupo de senderistas, muriendo en el fuego cruzado un niño de 2 años y otro de 14 años, al igual que un colaborador local de los subversivos. En muchos poblados, y quizá en Pucurhuay de manera ejemplar, el apoyo ganado inicialmente por los subversivos se mantuvo gracias al ejercicio

sistemático del terror. Tiempo después, los militares instalaron la Base contrasubversiva de La Aurora, encargada de las incursiones en los centros poblados colindantes con Pucurhuay.

Los militares, instalados en Pucurhuay instaron a la población a organizarse para su protección. En unos pocos días, los pobladores conformaron el Comité de Defensa Civil (CDC) de Pucurhuay y nombraron una junta directiva siendo elegido como presidente Laurentino Mendoza Janampa. Unos meses después Laurentino Mendoza murió asesinado de un tiro en la nuca en la ciudad de Cerro de Pasco, el 29 de octubre de 1990.

Pero la instalación de las rondas era definitiva y significó el viraje final en el ciclo de violencia en Pasco, junto con la instalación sostenida de bases contrasubversivas. Así, como ejemplo de estas idas y vueltas de la lucha contrasubversiva, se instaló en febrero de 1990 en el local de la Municipalidad de Chacayán un contingente de efectivos militares provenientes de la Base Contrasubversiva del distrito de Goyllarisquizga, que funcionó hasta 1992.

El 16 de octubre de 1993, en una ceremonia similar a la realizada tanto en Ayacucho como en el Huallaga, el ejército entregó armas a los ronderos para que luchan por la pacificación en comunidades pasqueñas de la quebrada de Chaupihuaranga como Paúcar, Tangor, Vilcabamba, Chango, Mito, Huarautambo, Choquicancha, Chipiputa, Hualacircas, Rocco, San Juan de Baños de Rabí, Chincitingo, Huachos, y otras.

La consecuencia inmediata del despliegue militar y la organización de la población en rondas campesinas fue el repliegue del PCP-SL, que por entonces concentraba su mayor despliegue en la zona del Huallaga.

1.2.8.3. Cronología

Zona IV: Pasco

17/05/80	Pasco, Pasco: Presuntos subversivos arrojan petardos de dinamita contra el Consejo Provincial y el CE No. 34004.
12/07/80	Pasco, Pasco: Senderistas dinamitan tuberías de agua y rieles del ferrocarril
23/08/80	Pasco, Pasco: Un grupo de presuntos subversivos roba 8 fusiles y munición.
01/10/80	Pasco, Pasco: Presuntos subversivos dinamita la mini central de la Cooperativa Agropecuaria de Pacoyán
02/03/81	Pasco, Pasco: Subversivos dinamitan la caseta ventiladora y las maquinarias de las instalaciones de Centromin.
18/05/81	Pasco, Pasco: El puesto policial de Atacocha, en Cerro de Pasco, es atacado con cargas de dinamita.
16/07/82	Pasco, Daniel A. Carrión, Yanahuanca: Presuntos subversivos atacan con cargas de dinamita la oficina de reclutamiento militar.
17/07/82	Pasco, Daniel A. Carrión, Tapuc: Militantes del PCP-SL incursionan en Tapuc. Un GC es asesinado.
30/07/82	Pasco, Pasco: Subversivos dinamitan el local del Banco de la Nación de la ciudad de Cerro de Pasco.
22/09/81	Pasco, Pasco: Presuntos subversivos dinamitan una torre de alta tensión. La ciudad de Cerro de Pasco se queda en tinieblas.

16/10/81	Pasco: En Cerro de Pasco dinamitan la casa del Prefecto.
18/12/81	Pasco, Pasco: Subversivos dinamitan camión volquete de Centromin.
25/03/82	Pasco, Daniel A. Carrión, Yanahuanca: Presuntos subversivos asesinan a un campesino y hieren a dos más en el paraje de Pillayoc-Yanahuanca.
28/06/82	Pasco: Militantes del PCP-SL asaltan la cárcel de Pasco, liberan 11 inculcados por terrorismo. Mueren un GR y otro queda herido.
15/07/82	Pasco, Pasco: Militantes del PCP-SL lanzan cargas de dinamita a 100 mts. del polvorín de CENTROMIN Perú. Al mismo tiempo, otros senderistas lanzan petardos de dinamita contra el local de Sanidad de las FFPP.
20/07/82	Pasco, Daniel A. Carrión, Yanahuanca: Presuntos subversivos secuestran al gobernador del pueblo de Michivilca y lo asesinan en un descampado.
05/08/82	Pasco, Pasco: Dos presuntos subversivos atacan a un GC y le roban su revolver.
19/09/82	Pasco, Daniel A. Carrión, Paucar: Presuntos militantes de PCP-SL «enjuician» al gobernador de Tangor. Luego del juicio le disparan dejándolo herido.
09/12/82	Pasco, Pasco: Militantes del PCP-SL, al mando de una mujer, incursionan en la cooperativa «Racracancha». Luego de saquearla le prenden fuego.
22/06/83	Pasco, Daniel A. Carrión: Presuntos subversivos asesinan a 8 personas en las localidades de San Juan de Yacán y Paúcar (provincia de Daniel A. Carrión, Pasco). En la primera asesinaron al presidente de la comunidad campesina, al Teniente Alcalde, el Juez y un campesino; en la segunda al Director de la escuela y a la suegra de un Guardia Civil.
06/02/85	Pasco, Daniel A. Carrión: Presuntos senderistas asesinan al teniente alcalde de Ticlacayán.
9/02/85	Pasco, Pasco: Senderistas asesinan al ex presidente de la junta comunal de Huamanmarca acusándolo de soplón.
13/03/85	Pasco, Daniel A. Carrión: El PCP-SL «ajusticia» a un campesino en la plaza de armas de Pillao.
28/06/85	Pasco, La Oroya: 3 militares mueren al desactivar una carga de dinamita.
07/02/88	Pasco, Ticlacayán: Tres campesinos fueron asesinados por presuntos senderistas. Las víctimas se negaron a colaborar con la «lucha armada».
6/05/88	Pasco, Daniel A. Carrión: Enfrentamiento entre el PCP-SL y el ejército deja como resultado 1 soldado muerto.
17/11/88	Pasco, Daniel A. Carrión: Presuntos subversivos del PCP-SL asesinan al Alcalde, agente municipal y 2 dirigentes comunales en Pillao y Astobamba.
12/05/92	Pasco, La Oroya: Atentan al domicilio del comandante de la PNP y fallece la señora Bertha Rojas Clemente.
19/11/92	Pasco, Cerro de Pasco, Laguna de Alcacocha: Hallan 5 cadáveres flotando la laguna de Alcacocha, tres de ellos son de adultos y los otros dos son menores de edad.
14/8/93	Pasco, Huachón: Entregan armas a los ronderos de Huachón. Participan delegaciones de las rondas de Quipacra, Chipó, Pugmaray, Ranyac, Liriopampa, Socorro y Florida.
16/10/93	Pasco: En ceremonia castrense se entregan armas a los ronderos para que luchen por la pacificación. En la quebrada de Chaupihuaranqa entregaron a otras 15 comunidades pasqueñas: Paúcar, Tangor, Vilcabamba, Chango, Mito, Huarutambo, Choquicancha, Chipiputa, Hualacircas, Rocco, San Juan de Baños de Rabí, Chincitingo, Huachos, etc.
10/05/95	Pasco, Yanacancha: Presuntos subversivos atacan contra Bravo

	Quispe, alcalde de Yanacancha, resultando muerto su chofer y otras personas.
--	--

1.2.9. Zona V: departamento de Huancavelica

1.2.9.1. Provincia de Huancavelica

1.2.9.1.1. Datos Generales

En esta Zona V hemos incluido las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampá, vinculadas plenamente, en su dinámica económica y social, al departamento de Junín.

Huancavelica es, según todos los indicadores, el departamento más pobre del país, y en él se reconocen tres espacios principales que se vinculan con la costa de Ica, el valle del Mantaro y Huanta/Ayacucho, respectivamente. El estancamiento demográfico indica que, precisamente por su pobreza, se trata de una región de emigración sostenida pues la población apenas creció 11% en el último período intercensal.

Población 1981 – 1993 según provincia

Población	1981	1993
Huancavelica	90388	107055
Tayacaja	124522	108764
Churcampá		41130
TOTAL	214910	256949

La provincia de Huancavelica, cuya mayor extensión ocupa el piso altitudinal de puna, explica su crecimiento de 18% por el aumento poblacional de la capital departamental, donde se concentran los organismos del estado e instituciones públicas y privadas. A pesar de su potencial ganadero y de las explotaciones mineras, enclaves actualmente en crisis, la provincia no ha podido superar sus bajos índices de ingresos, hoy casi los mismos que en el año 1980. Fragmentación de la propiedad de la tierra, pobreza de recursos, cédula de cultivo tradicional, baja producción y productividad en la crianza ganadera, son variables que explican este bajo nivel económico.

Además de la capital departamental, un componente central del espacio huancavelicano son las Comunidades Campesinas, que suman 500 en todo el departamento y son propietarias de cerca del 70% de las tierras, sobre todo pastizales donde la crianza de ovinos, vacunos y camélidos es importante. Los datos del siguiente cuadro resumen la importancia del control comunal de los recursos de la provincia, además del componente comunero en el total demográfico.

Comunidades campesinas

	Nº de CC	Nº de comuneros	Población en CC	Pob. total	% Pob. en CC
Prov. Huancavelica	124	15768	78839	107055	74%
Total Departamento	500	63580	317900	385162	83%
	Superficie Agrop	Nº de CC	Superficie Agrop. en manos de CC		
Prov. Huancavelica	321,679	124	265,518	83%	
Total Departamento	1,306,655	500	901,161	69%	

1.2.9.1.2. Historia de la violencia

En la ciudad de Huancavelica los militantes del PCP-SL realizaron su primera labor de captación entre los estudiantes secundarios y los alumnos del Instituto Superior Pedagógico de Huancavelica y en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Huancavelica. Su presencia sin embargo tuvo poca incidencia en la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y el Frente de Defensa del Pueblo de Huancavelica, pues en muchas de esas agremiaciones los militantes del PCP-SL se encontraron con otras fuerzas políticas de izquierda como los PC Bandera Roja y Patria Roja, el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP). Por lo tanto, el grueso del contingente inicial de militantes del PCP-SL estuvo formado por profesores y estudiantes a quienes se sumaron luego algunos campesinos, sobre todo jóvenes.

Las primeras acciones de PCP-SL: 1980 – 1982

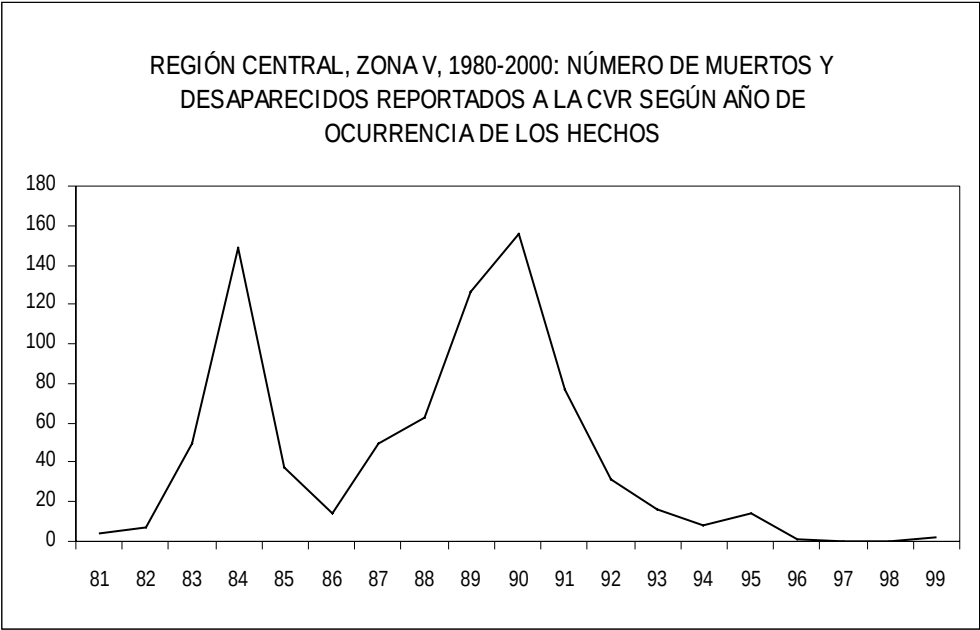
La violencia en la provincia de Huancavelica tiene casi los mismos hitos y períodos que en el departamento de Ayacucho. El derribamiento de una torre de alta tensión el 28 de julio de 1980 en el distrito de Huancavelica representa la primera acción ejecutada por militantes del PCP-SL en el departamento de Huancavelica. En pocos meses, los subversivos pasaron del sabotaje con dinamita contra el sistema de transmisión de energía eléctrica de la central hidroeléctrica del Mantaro, a asaltos a puestos policiales y a dependencias públicas, como la Oficina Departamental de Contribuciones y el local de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) de Huancavelica, atacados en octubre de 1980. El 19 de enero de 1981 una carga explosiva estalló en el local de la policía ubicado en el barrio de Santa Ana.

Desde 1981, los distritos de Manta, Moya, Vilca, Acobambilla y Huayllahuara, ubicados a lo largo del río Vilcas, empezaron a ser visitados por los subversivos y en 1982 se producen las

primeras incursiones y «tomas de pueblos», agrediendo especialmente a los representantes del «viejo poder», es decir alcaldes, tenientes gobernadores y jueces de paz.

La cuenca del Vilca, dividida en los distritos de Moya, Manta y Vilca, concentra desde entonces, el mayor índice de violencia en la provincia, desde que el 11 de julio de 1982, un grupo de subversivos tomó la localidad de Ñuñungayo, en Vilca, asaltando la tienda comunal. Días después, el 22 de julio, es incendiando el depósito de la Sociedad Agraria de Interés Social (SAIS) de Huancavelica. El 23 de diciembre, un contingente de militantes del PCP-SL asalta la mina Colqui, ubicada en el distrito de Huancavelica, y se apodera de 1500 cartuchos de dinamita. Por último, el 27 del mismo mes, incursionan en el pueblo de Palca, distrito y provincia de Huancavelica).

En estas acciones quedan perfilados los objetivos senderistas de los siguientes años: sabotaje a la importante red de transmisión eléctrica del Mantaro, destrucción de las empresas asociativas agrarias, robo de dinamita para usarse en atentados futuros, eliminación de autoridades, retiro de los puestos policiales. El objetivo era obtener bases de apoyo para la movilidad de sus columnas armadas y luego constituir, en zonas de mayor arraigo, Comités Populares. Al parecer, la cuenca del Vilca fue privilegiada por los responsables senderistas para organizar en ella su «nuevo orden».



REGIÓN CENTRAL, ZONA V, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
HUANCAMELICA	491	-	1	3	31	70	14	11	46	32	88	96	58	15	3	8	13	-	-	-	2	-

Instalación de las bases contrasubversivas, represalias subversivas y rondas: 1983- 1985

Al igual que en la región de Ayacucho, la provincia de Huancavelica sufrió el mayor embate de la violencia en 1983 y 1984, y en un segundo momento en 1989 y 1990 con la ofensiva senderista sustentada en el cercano «equilibrio estratégico». Al final del ciclo de violencia en el departamento, la provincia de Huancavelica reúne poco más de un tercio de las personas muertas.

El ingreso de las Fuerzas Armadas a partir de la instalación del Comando Político Militar estableció, desde 1983, un férreo control de las actividades públicas en la ciudad de Huancavelica, pero en el amplio espacio rural continuaba el derribamiento de torres de alta tensión y el hostigamiento nocturno de puestos policiales.

El principal sustento de la estrategia militar fue la instalación de Bases Contrasubversivas en zonas de mayor accionar subversivo, en las cuales los militares desconfiaban de los pobladores, considerándolos como simpatizantes de la propuesta senderista. El Ejército ubicó Bases Contrasubversivas en el distrito de Manta, en San Genaro, del distrito de Huachocolpa, en Santa Teresita y la comunidad de Lachocc, del distrito de Acobambilla. Además, desde su instalación en la región, las bases contrasubversivas intentaron la organización de la población en rondas para frenar el accionar de las columnas senderistas.

La acción subversiva y la respuesta contrasubversiva durante 1983 y 1984 provocaron que el número de personas muertas y desaparecidas aumentara, incrementándose las violaciones de Derechos Humanos, por lo cual diversas organizaciones como el Frente de Defensa del Pueblo de Huancavelica y el Comité de Derechos Humanos de Huancavelica se pronunciaron en contra de las mismas y solicitaron en algunos casos investigación de los hechos.

A poco de instalarse el Comando militar, una patrulla del ejército emboscó, el 22 de marzo de 1983, a un contingente de 25 subversivos en Jala, distrito de Vilca, matando a 24 senderistas. Esta acción, al parecer, contuvo temporalmente la expansión del accionar subversivo en la cuenca del río Vilca, aunque el 19 de junio de 1983 un contingente de aproximadamente 30 subversivos tomó el pueblo de Moya, hostigando el puesto de la policía y convocando a la población a plegarse a su lucha armada, antes de marcharse con rumbo al cercano distrito de Vilca, su principal base de operaciones. A fines de aquel año, el 11 de diciembre, pobladores de diversas comunidades de los distritos de Vilca, Manta y Acobambilla fueron congregados por los subversivos en Vilca para asaltar, como «masa», a Tucle, Laive y Antapongo, Unidades de Producción de la SAIS Cahuide, ubicadas en el distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, tal como describimos en el capítulo anterior sobre las zonas altas de Junín.

En la ciudad de Huancavelica, hasta mediados de 1983, continuaron las acciones de agitación y propaganda mientras que las fuerzas militares y policiales replicaron con la detención de presuntos subversivos o colaboradores de éstos en la ciudad. Un operativo de magnitud por la cantidad de efectivos policiales que participaron y la cantidad de personas detenidas, poco más de cuarenta, se llevó a cabo el 24 de julio de 1983.

En los días previos a las elecciones municipales de noviembre de 1983, los subversivos aumentaron sus acciones en todas las provincias del departamento, con la intención de impedir la concurrencia de los votantes. De alguna manera lograron su objetivo con las renunciaciones, previa amenaza de muerte, de algunos candidatos a las alcaldías distritales y la no realización de las elecciones en algunos distritos. El 12 de noviembre, un día antes de las elecciones, militantes del PCP-SL detonaron diez cargas explosivas en la ciudad de Huancavelica, en los barrios de San Cristóbal, Yananaco, Santa Ana, Santa Inés Pata y Pucachaca, aumentando el clima de terror entre la población de la capital departamental. La acción subversiva impidió que las elecciones municipales se llevaran a cabo en los distritos de Manta, Vilca, Acobambilla, Pilchaca y Occoro, precisamente la zona de mayor accionar subversivo.

El número de personas muertas y desaparecidas se mantuvo en 1984 debido no sólo al accionar subversivo a través de emboscadas y enfrentamientos, sino también a la intensificación de las acciones contrasubversivas en el área rural en la búsqueda de «cuarteles» de los subversivos, basadas en la estrategia de que buena parte de la población era colaboradora de las fuerzas subversivas. A consecuencia de ello, el Ejército detuvo a numerosos pobladores y ejecutó extrajudicialmente a algunos, como sucedió el 22 de marzo de 1984 con Remigio Paucar Surichaqui, ejecutado por un soldado de la Base Militar de Manta (310556), o el 25 de agosto de 1984, en Putica, una estancia de la comunidad de Sacsamarca del distrito de Huancavelica, en donde una patrulla de militares vestidos de civil apresó al anciano Félix Aparco Pineda, acusado de alojar a los subversivos, cuyos restos fueron encontrados meses después en una cueva cercana a la comunidad. Igual ocurrió con Hilario Ayuque Zúñiga, Secretario General de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Huancavelica, detenido el 20 de setiembre de 1984 en su domicilio por un grupo de personas armadas y vestidas de civil, quienes lo subieron a un camión militar en las inmediaciones del Hotel de Turistas y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Por su parte, las represalias de los grupos del PCP-SL contra los pobladores acusados de colaborar con las fuerzas del orden o de integrar las rondas campesinas contrasubversivas, «mesnadas» y «mercenarios» según el PCP-SL, impulsadas por el Ejército, fueron comunes. El 5 de enero de 1984, una columna de subversivos tomó la capital del distrito de Yauli y luego de arengar a la población, asesinó a dos pobladores que se habían negado a colaborar con ellos. Un mes después, el 7 de febrero, en la comunidad de Sacsamarca, el ex presidente del Concejo de Administración de la comunidad fue asesinado acusado de colaborar con la policía. También en el distrito de Yauli, el 8 de agosto, un numeroso grupo de subversivos ingresó a la comunidad de Pachaclla, comunidad que tenía sus incipientes rondas, y asesinó a la esposa de un dirigente rondero. A fines de ese año, el 9 de noviembre, en el distrito de Acobambilla, un profesor, el agente municipal y el gobernador distrital fueron asesinados por los militantes del PCP-SL acusados de ser «soplones», lo mismo que hicieron dos días después con el rondero Marcos de La Cruz Quispe.

Hasta ese entonces, la estrategia implementada por el Ejército tuvo como componentes, como dijimos, la instalación de bases contrasubversivas en zonas consideradas «rojas» y el patrullaje intensivo tratando de ubicar y destruir a columnas del PCP-SL aunque para eliminar al «foco subversivo» de manera frecuente «tomaban» los poblados, detenían a los pobladores y los sometían a interrogatorios, no carentes de torturas, con el fin de identificar a los subversivos locales. Algunos pobladores fueron ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos aparecieron por distintos lugares o fueron desaparecidos. El 21 de marzo de 1984, dieciocho camiones militares arribaron a los distritos de Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica. Una vez que los pobladores se percataron de la llegada de los militares empezaron a huir pues los subversivos les habían advertido que si los militares los encontraban los iban a ejecutar a todos. Así ocurrió ese día pues muchos pobladores huyeron, mientras los militares efectuaron disparos que causaron la muerte de tres pobladores en Ccollpa y seis en Manta. Seguidamente quedaron instaladas bases contrasubversivas en Vilca, Coricocha y Manta.

Pero el siguiente paso de la acción contrainsurgente contempló la organización de la población rural en rondas contrasubversivas. En algunos distritos este objetivo fue cumplido pero en otros casos no fue posible por el enraizamiento del trabajo político del PCP-SL. También se presentaron casos en los que la población se organizó por propia voluntad para hacer frente a los subversivos. Esa fue la historia de los anexos de la comunidad de Chopcca, una de más grandes de Huancavelica, ubicada en el vértice de tres provincias, Huancavelica, Angaraes y Acobamba, blanco de las incursiones militares y de los destacamentos del PCP-SL, especialmente las comunidades de Ccasapata, Chucclaccasa, Pucaccasa y Tinkirccasa. Por tal razón, los pobladores de Chopccas acordaron en 1984 defenderse de los militantes del PCP-SL constituyendo rondas de autodefensa que rechazaron con éxito las columnas senderistas y limitaron la presencia de las patrullas militares.

La presión militar y la presencia de las nacientes rondas obligaron, desde fines de 1984 e inicios de 1985, al repliegue de las fuerzas subversivas hacia otras zonas del departamento de Huancavelica y de los departamentos vecinos como Junín, tal como vimos en la Zona I de las partes altas de Junín.

Un hecho importante es la muerte, en 1985, de alrededor de 45 integrantes del PCP-SL en un enfrentamiento con una patrulla militar en un paraje conocido como Llanaslla, muy cerca de la comunidad de Santa Bárbara, en el distrito de Huachocolpa, entre los cuales habrían algunos mandos locales del PCP-SL. En la comunidad de Santa Bárbara, en la puna alpaquera de la provincia de Huancavelica, hubo un pequeño grupo de jóvenes que se adhirieron a las filas del PCP-SL, por ello las incursiones militares y también las del PCP-SL que provocaron el desplazamiento masivo de la población hacia Huancavelica y la costa de Ica.

La acción del Ejército, instalado en la importante base de Manta, golpeó a los nacientes Comités Populares de la cuenca del río Vilca, reduciendo por ende el acceso a zonas de reposo, así como las posibilidades de abastecimiento y alimentación de la Fuerza Principal del PCP-SL.

Las estadísticas muestran un claro descenso, en 1985, del número de víctimas ocasionadas por la acción subversiva y la respuesta contrainsurgente. Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 14 de abril de 1985 en gran parte de las provincias de Tayacaja, Churcampa y Huancavelica, aunque fueron boicoteadas o impedidas de llevarse a cabo en los lugares donde las fuerzas subversivas aún contaban con capacidad de hacerlo. Sin embargo, estas acciones no tuvieron la misma envergadura que las ejecutadas en noviembre de 1983 con motivo de las elecciones municipales.

Repliegue, nueva ofensiva subversiva y el desenlace de la guerra: 1986-1995

El descenso de acciones terroristas desde 1985 se prolongará hasta 1988, con escasos atentados y asesinatos, como el ejecutado el 6 de julio de 1986, cuando un grupo de senderistas asesina a la esposa del teniente gobernador de la comunidad de Sacsamarca, distrito de Huancavelica. Las acciones subversivas de mayor envergadura durante 1987 ocurrieron el 19 de abril de 1987, en la emboscada a un convoy militar cuando se dirigía al distrito de Huachocolpa (provincia de Huancavelica), en la cual murieron diez militares y cuatro pobladores, y el 9 de agosto de 1987, cuando una columna senderista atacó la Granja Lachocc, cerca de la ciudad de Huancavelica, de propiedad del INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), y asesinó a 9 campesinos que trabajaban en ella, degollando 400 alpacas.

Mediante estas acciones, el PCP-SL pretendía a través del terror generado deshacer la oposición de la población. Como siempre, los «soplones» también fueron blanco predilecto: el 7 de agosto de 1987, en la comunidad de Santa Bárbara, distrito y provincia de Huancavelica, diez pobladores son asesinados acusados de ser «soplones» (1005705), el 11 de noviembre de en la comunidad de Lachocc en Acobambilla una pobladora fue asesinada por el mismo motivo, al igual que el 5 de diciembre el presidente del Comité Pro Electrificación de la comunidad de Sacsamarca, distrito y provincia de Huancavelica) (314060).

Pero en 1988, el PCP-SL había logrado recomponer y reorganizar sus fuerzas recuperando la iniciativa militar en la última fase, según ellos, del «Gran Plan de Desarrollar Bases de Apoyo». Prueba de ello es la emboscada del 18 de febrero de 1988 en la localidad de Lachocc, Acobambilla, donde pierden la vida nueve militares y dos civiles; el ataque, el 24 de febrero, a la Décima Comandancia de la policía, ubicada en la ciudad de Huancavelica, donde murieron dos policías, o la emboscada de setiembre del mismo año a una patrulla del Ejército en la localidad de Chonta, en Laria, que causó la muerte de un oficial y seis soldados mientras otros catorce efectivos resultaron heridos.

Afirmando estar cerca del «equilibrio estratégico» de fuerzas con el Estado, estas acciones son el prelude de la ofensiva senderista de 1989 y 1990, ensayo final para retomar presencia en los espacios de donde habían sido desalojadas sus columnas, y que explica el aumento en 1989 y 1990 de sabotajes, asesinatos selectivos, acciones de agitación y propaganda e incursiones en los poblados. En la provincia de Huancavelica, en 1989, ocurren 96 y en 1990 ocurren 97 de las 512 muertes violentas de toda la zona. Tanto el PCP-SL como las fuerzas contrasubversivas tenían sus propias «listas» de sentenciados a muerte. Así, el 30 de junio de 1989, en la ciudad de Huancavelica, Ronald Rojas Muñoz fue detenido y desaparecido en la base militar del barrio Santa Ana en Huancavelica. El 3 de julio son seis pobladores los que fueron detenidos por militares y conducidos indistintamente a las Bases Contrasubversivas de la ciudad de Huancavelica (1001480). El 12 de julio, Alejandro Tutaya, profesor del Instituto Pedagógico de Huancavelica fue asesinado por presuntos paramilitares (1001191), y el 10 de noviembre Manuel Cuba y Luis Manrique fueron detenidos y después desaparecidos por efectivos militares (1004693). Se presume que estas personas detenidas- desaparecidas eran sindicados como colaboradores o militantes del PCP-SL ya sea por militantes que habían desertado de sus filas o por la labor de inteligencia policial y militar.

La «lista de ajusticiados» del PCP-SL también se incrementa: a los asesinatos de la periodista de «El Comercio» y ecologista Barbara D'Achille, y el funcionario de CORDE-Huancavelica, Esteban Bohorquez, el 31 de mayo de 1989 en Tinyaclla, Huancavelica, se agregan el 11 de diciembre de 1989 el del alcalde electo de IU del distrito de Huachocolpa y el 15 de diciembre, en el distrito de Moya (provincia de Huancavelica), los de una profesora y un juez de paz. Poco tiempo después, en el distrito de Chopcca, un destacamento senderista asesinó a José Soto, Guillermo Quispe, Domingo Taipe, Pablo Ataipoma y tres comuneros no identificados. Ese mismo año fueron desaparecidos en esa comunidad Manuel Meneses de Chucllaccasa e Hilario Crispín de Pucaccasa, siendo también asesinadas, en una incursión de patrullas del ejército, doce personas en la Comunidad de Pachaclla.

En la ciudad de Huancavelica, la población queda conmovida con el secuestro, en pleno centro urbano, y posterior desaparición de Angel Escobar, dirigente de la Federación de comunidades campesinas y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del departamento.

El 25 de junio de 1990, en un tramo de la vía Huachocolpa-Caudalosa, un destacamento subversivo atacó a un convoy policial y asesinó a un oficial y cinco subalternos. Los policías ocasionaron tres bajas a los subversivos. Esta es la última acción militar de envergadura realizada por destacamentos del PCP-SL en la provincia de Huancavelica, aunque se registran posteriormente asesinatos selectivos, como los descritos anteriormente, contra autoridades y ronderos. Es difícil, en muchos casos, establecer la autoría de los asesinatos, como el de Valentín López Molina, director encargado del Instituto Superior Pedagógico de Huancavelica, asesinado el 14 de setiembre de 1990.

En 1991, la castigada comunidad de Santa Bárbara sufre nuevamente una incursión, esta vez de una patrulla militar que secuestra el 4 de julio a un grupo de comuneros y los dinamita luego, según los testimonios recogidos por la CVR, en la mina Misteriosa. Es casi el principio del fin de la guerra en la zona debido a las patrullas militares continuas y a las acciones de las rondas de autodefensa, que erradicarán los destacamentos senderistas casi completamente. La captura de Abimael Guzmán en 1992 es el colofón de esta derrota senderista, y entre 1993 y 1996 se consolida la pacificación definitiva de la provincia de Huancavelica, que en este último año no se registró ni un muerto por violencia política.

1.2.9.2. Provincias de Tayacaja y Churcampá

1.2.9.2.1. Datos Generales

La provincia de Tayacaja, conocida en tiempos coloniales como la «isla de Tayacaja» debido al curso del río Mantaro que casi rodea su territorio, es la provincia más poblada del departamento de Huancavelica y reúne, junto con Churcampá, al 39% de la población departamental. Su vinculación con Huancayo y el valle del Mantaro es fundamental. Por su parte, la provincia de Churcampá, articulada tanto al valle del Mantaro como a la provincia de Huanta, fue creada en 1985 en la zona sur de la provincia de Tayacaja, con los distritos de Churcampá, Anco, Chinchihuasi, El Carmen, La Merced, Locroja, Paucarbamba, San Miguel de Mayocc, San Pedro de Coris y Pachamarca, entre los cuales aquellos ubicados en la zona norcentral de la provincia, Paucarbamba, Chinchihuasi y Pachamarca, los más cercanos a Tayacaja, fueron los que sufrieron los embates de las fuerzas subversivas del PCP-SL y la respuesta de las fuerzas del orden.

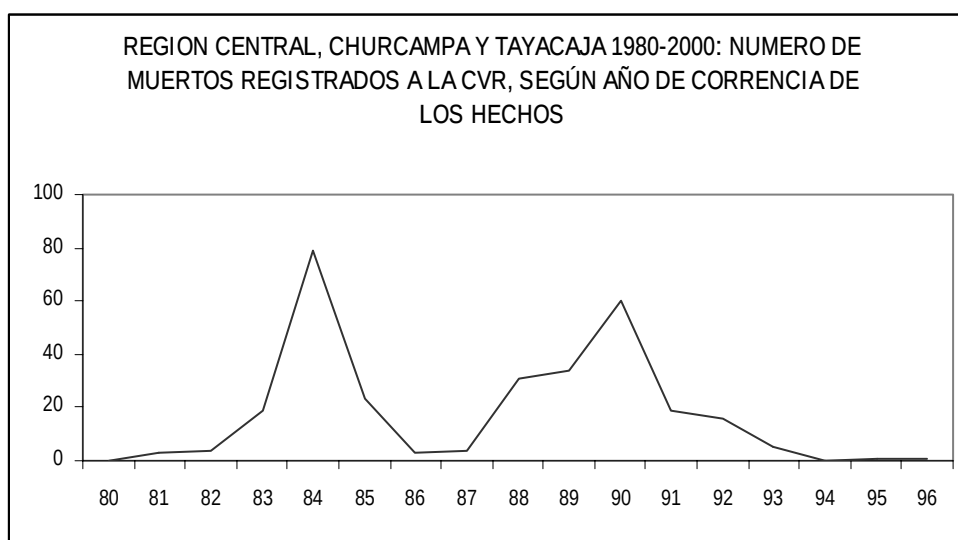
Población 1981 – 1993 según provincia

Población	1981	1993
Tayacaja	124522	108764
Churcampá		41130

En ambas provincias se registra 20% de crecimiento en el período intercensal, el mayor porcentaje del departamento.

1.2.9.2.2. Historia de la violencia

La incidencia de la violencia en Tayacaja y Churcampá se inicia, como en todo el departamento de Huancavelica, en 1980, pero es especialmente aguda en 1983-1984 y 1990, los años de mayor concentración de muertes por violencia, que reúnen 161 de los 310 muertos registrados entre 1980 y el 2000 en las dos provincias. Esta cronología es similar a la de la provincia de Huancavelica que vimos anteriormente, y a la del departamento de Ayacucho y la provincia de Andahuaylas. Definitivamente, la Creación del Comando político-militar en esas provincias y el consiguiente ingreso de las fuerzas armadas en enero de 1983 tiene relación directa con el aumento de la violencia y de la cantidad de muertos, sobre todo campesinos, de la misma manera que en 1990-91



la ofensiva nacional del PCP-SL explica el recrudecimiento de la violencia en estas mismas provincias.

REGIÓN CENTRAL, ZONA V, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																							
PROVINCIAS	TOTAL	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	
TOTAL	291	-	3	3	19	69	23	3	4	31	34	60	19	16	5	-	1	1	-	-	-	-	
CHURCAMPÁ	209	-	-	2	19	69	23	3	4	21	27	15	13	10	1	-	1	1	-	-	-	-	
TAYACAJA	82	-	3	1	-	-	-	-	-	10	7	45	6	6	4	-	-	-	-	-	-	-	

Las primeras visitas e inicio del trabajo político del PCP-SL: 1980 – 1982

Contando con el apoyo de militantes docentes en Tayacaja y Churcampá, el trabajo proselitista de los subversivos en la vecina provincia de Huanta se expande hacia los distritos de San Miguel de Mayocc y La Merced de Ccasir, en Churcampá, en grupos de dos o tres que visitan los distritos de esta provincia que colindan con la provincia de Huanta, hablando a los pobladores de la necesidad de cambiar el país, acabando con «la explotación» para instaurar un «nuevo orden comunista». Como en todas partes, una de las primeras acciones ocurre el 8 de diciembre de 1981 con ataque al

puesto policial del distrito de Colcabamba, en Tayacaja, pero para acabar con el «viejo orden» era imprescindible que las «masas campesinas» se incorporen a la guerra y también «vaciar el campo» con amenazas a las autoridades locales. Hacia fines de 1982, no había autoridad alguna en numerosos distritos de Tayacaja y Churcampa, mientras que el trabajo proselitista de los subversivos entre los profesores senderistas de los colegios y escuelas de los distritos se desarrollaba sin obstáculos, organizando bases de apoyo y Comités con delegados o comisarios que castigaban drásticamente cualquier atisbo de oposición.

Blanco central de las acciones senderistas fue la Central Hidroeléctrica del Mantaro y la red de transmisión eléctrica, sabotada casi desde el inicio de la guerra interna. En noviembre de 1981 militantes del PCP-SL pretendieron atacar contra la Central Hidroeléctrica de Campo Armiño, distrito de Colcabamba, Tayacaja pero fueron rechazados por la Guardia Republicana que custodiaba las instalaciones. El robo por el PCP-SL de dinamita en varios centros mineros fue también una constante durante esos primeros años de violencia. A fines de 1982 se incrementaron los ataques y hostigamientos a los puestos policiales, como sucedió en los distritos de San Miguel de Mayocc el 4 de octubre, de Anco el 6 de diciembre, de Colcabamba el 8 de diciembre.

Instalación de las bases contrasubversivas, represalias subversivas y rondas: 1983- 1985

A consecuencia de la instalación del Comando político militar en Ayacucho y provincias de Huancavelica y Apurímac en 1983, el cuartel del ejército en Pampas, la capital provincial de Tayacaja, se convirtió en el centro de operaciones contrasubversivas en la provincia, mientras que los destacamentos policiales se encargaban de resguardar las instalaciones de la central hidroeléctrica del Mantaro, tanto en Quichuas como en Cobriza, amenazadas y hostigadas permanentemente por los destacamentos del PCP-SL.

Algunos documentos señalan que uno de los primeros enfrentamientos entre las fuerzas subversivas y una patrulla del Ejército se produjo el 15 de enero de 1983 en un paraje del distrito de Pampas en el cual, según la prensa de la época, se reportó la muerte de 15 presuntos subversivos.

En previsión de alguna incursión de las fuerzas del PCP-SL, el Ejército decretó el 21 de enero de 1983 el toque de queda en las localidades de Campo Armiño, Colcabamba y Quichuas, donde se encuentra la represa del Mantaro. En Churcampa, el Ejército instaló también en 1983 una Base Contrasubversiva en la localidad de Millpo, en la zona alta del distrito de Paucarbamba. De ella salían las patrullas a recorrer las comunidades y poblados de Paucarbamba, deteniendo a algunos pobladores que luego eran interrogados en la base y liberados, pero algunos, como los hermanos Hilario y Alejandro Soto Espinoza, detenidos el 10 de febrero de 1983, nunca volvieron a aparecer (312056).

Los primeros días de marzo de 1983, un contingente de militantes del PCP-SL ingresó a la mina de Santa Rosa, ubicada en el poblado de Carhuanchu, distrito de San Pedro de Coris en

Churcampá. El 7 de marzo efectivos militares arribaron a la mina, detuvieron y se llevaron en un vehículo a Segundino Fernández Huamán, Julio Huamán Fernández, Urbano Huamán Noa, Alejandro Huamán Ramos, Ángel Huamán Fernández, Jesús Fernández Huamán, Leoncio Ayala Velarde y Francisco Quispe, acusados por los militares de integrar las filas subversivas. Nunca más aparecieron. Acciones de este tipo fueron restando posibilidades al Ejército de ganarse a la población.

De parte del PCP-SL, la sola presunción de colaboración con los militares era casi una sentencia de muerte, como ocurrió con el dirigente comunal Francisco Alanya Huayra, asesinado el 16 de octubre de 1983 acusado de colaborar con los militares de la base de Milpo (311725).

La instalación de pequeñas bases militares y el apoyo de efectivos de la base principal de Pampas, facilitó los operativos para ubicar y detener a militantes senderistas. El 26 de septiembre, efectivos del Ejército y de la policía, en una acción combinada, ingresaron a la capital de Paucarbamba y a poblados vecinos, allanaron las casas, tomaron prisioneros a algunos pobladores, robaron algunos bienes de la población y violaron sexualmente a algunas pobladoras. Después de tres días de permanencia, las fuerzas del orden abandonaron la zona amenazando a la población de que si seguían apoyando a la subversión «tanto Paucarbamba como Chinchihuasi y Pachamarca iban a ser bombardeados y borrados del mapa» (311726).

En los meses siguientes, acciones de hostigamiento y ataques a los puestos policiales que no habían sido desactivados continuaron, como ocurrió el 15 de octubre de 1983 en el puesto de Churcampá.

A fines de 1983, el Ejército instaló otra Base Contrasubversiva en la capital provincial de Churcampá. Las denuncias ante la CVR denunciaron la existencia de cinco fosas clandestinas vinculadas a esta BCS.

En los días previos a las elecciones municipales de noviembre de 1983, los subversivos aumentaron sus acciones en las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampá con la intención de boicotearlas donde les fuera posible. De alguna manera, con las renuncias de unos cuantos candidatos a las alcaldías distritales y la no realización de las elecciones en algunos distritos, los militantes del PCP-SL lograron su objetivo. Las amenazas de muerte contra los candidatos a alcaldes obligaron a su renuncia en los distritos de Paucarbamba, Churcampá, San Miguel de Mayocc, Chinchihuasi, El Carmen, San Pedro de Coris (provincia de Churcampá) y Acraquia, Huaribamba, Quishuar, Colcabamba (provincia de Tayacaja).

En el primer semestre de 1984 las fuerzas combinadas del Ejército y la policía realizaron una serie de operativos en las provincias de Tayacaja y Huancavelica para ubicar y destruir «bases subversivas», aunque su empeño fracasó. Por el contrario, el 7 de enero de 1984, una patrulla del Ejército fue emboscada en el distrito de Pampas, en Tayacaja, y un efectivo militar resultó muerto. El 4 de marzo de 1984, un grupo del PCP-SL atacó un puesto policial también en el distrito de Pampas matando a cuatro policías mientras otros tres quedaron heridos.

Los abusos frecuentes de los subversivos y militares desconcertaban y paralizaban a los pobladores.

No sabíamos que hacer, por un lado venían los senderistas matando a los comuneros por haber conversado con los soldados. Luego al otro día llegaba el Ejército y también maltrataba, matando o se llevaba a pobladores con el pretexto de que ayudaban a los terroristas; total no entendíamos lo que estaba pasando. (311724).

Pero el despliegue y asentamiento militar, fue obligando a los militantes del PCP-SL a replegarse a zonas más alejadas y seguras, incursionando de vez en cuando en comunidades y poblados donde no había presencia militar o sabían que las patrullas del Ejército tardarían en llegar.

Las torres del sistema eléctrico continuaban siendo derribadas, como sucedió el 1 de agosto de 1984, en el distrito de Pazos, Tayacaja, pero paralelamente se acentuó la presión militar exigiendo a los pobladores a que se organizaran en rondas para evitar las incursiones subversivas. En algunos casos, la acción militar calzó con la voluntad de los comuneros de defenderse de los subversivos, otros poblados en cambio eran reacios esa propuesta por el temor a posibles represalias del PCP-SL. Sin embargo, la orden militar fue terminante: o se organizaban o se atenían a las consecuencias de ser considerados como «terroristas».

Hacia el segundo semestre de 1984, los efectivos militares de la Base de Millpo habían logrado que los pobladores de Paucarbamba y Chinchihuasi se organicen en rondas campesinas contrasubversivas. Es así como, delatados por subversivos arrepentidos, fueron detenidos por los pobladores de Paucarbamba y efectivos militares de la Base Contrasubversiva de Millpo el 22 de octubre de 1984 y luego ejecutados extrajudicialmente Lucio Anselmo Gaspar Cabezas, Teodomiro Gaspar Cabezas, Alfredo Montes Palomino y un poblador más, acusados de ser los responsables de las acciones cometidas por el PCP-SL en Paucarbamba y distritos aledaños. Los presuntos subversivos detenidos por los ronderos y entregados a los militares de dicha base, fueron desaparecidos allí en muchos casos, como Teodoro Vilchez Ñahuero y su esposa Luisa Castilla.

El 20 de noviembre de 1984, los militares detuvieron a cinco personas sindicadas como presuntos subversivos, que fueron ejecutadas y enterradas en Mamapancha, distrito de Pachamarca (313487). Del mismo modo, pobladores de Paltamarca capturaron a un presunto subversivo y lo asesinaron en el paraje de Tuccuccasa (distrito de Pachamarca) (313812).

Los subversivos mantuvieron su capacidad para cometer atentados e incursiones. Así, durante enero y febrero de 1984, los subversivos hostigaron a los policías del campamento minero de Cobriza, ubicado en el distrito de San Pedro de Coris. En ese contexto, las rondas, aunque aún pocas y mal armadas, se enfrentaron en varios poblados a las columnas del PCP-SL. En el anexo de Maraypata en Churcampá, los pobladores se enfrentaron el 27 de diciembre con un grupo del PCP-SL que pretendía castigarlos por haber formado rondas campesinas, muriendo varios subversivos que fueron enterrados en un lugar cercano. Ese mismo año, en algunos poblados y comunidades de

Locroja los militares de la base de Churcampa organizaron a los pobladores en rondas contrasubversivas.

En abril, un destacamento subversivo de aproximadamente 20 personas portando diversas armas ingresó una vez más a la comunidad de Maraypata, pero sus vecinos de Paccay acudieron de inmediato y una lluvia de piedras mató a cuatro subversivos, mientras los demás fueron detenidos y entregados a los efectivos militares de la base de Churcampa.

En cierta medida, la organización de los pobladores en rondas fue haciendo difícil el desplazamiento de las fuerzas subversivas y a lo largo de 1985 las acciones subversivas fueron descendiendo de manera significativa. Sin embargo, los militantes del PCP-SL realizaron algunas acciones de sabotaje importantes como el dinamitado de 15 torres de alta tensión en la localidad de Chonta, Tayacaja.

Repliegue, nueva ofensiva subversiva y el desenlace de la guerra: 1986-1991

En los años siguientes, sobre todo en 1986 y 1987, las acciones subversivas descendieron casi desaparecieron en la provincia de Tayacaja. El PCP-SL al parecer había dado un paso atrás ante la resistencia de las rondas y la actividad de las Bases Contrasubversivas, facilitando que en muchas comunidades se restituyeran las autoridades comunales y políticas. La presencia subversiva parecía confinada a mover sus columnas por lugares alejados.

En 1986, para recomponer sus filas, el PCP-SL realizó reclutamientos compulsivos de jóvenes de algunos distritos de la provincia de Churcampa como San Miguel de Mayocc o Locroja. A partir de 1988, recrudecen las incursiones de los subversivos obligando a la respuesta contrasubversiva a través de patrullajes que, al no encontrar senderistas, detienen pobladores, como el 23 de mayo de 1988, en la comunidad de San Mateo (distrito de Churcampa) donde dos pobladores detenidos fueron luego desaparecidos, o el 5 de junio, día en que Saturnino de la Cruz Soto, Marino de la Cruz Soto y Francisco Taipe Ccoñas fueron detenidos en la feria de Churcampa por unos soldados de la Base de Churcampa. Días después, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en un barranco.

Como sucede en el resto de Huancavelica y en otras regiones, el PCP-SL implementa una nueva ofensiva desde 1988. El 19 de noviembre de aquel año intenta atentar contra la III Etapa de la Central Hidroeléctrica del Mantaro, en Colcabamba, Tayacaja, pero su ataque es repelido por los policías con el costo de dos policías muertos.

En este contexto, otro actor apareció en escena: el Comando Rodrigo Franco (CRF). En la ciudad de Churcampa algunas explosiones ocurridas el 17 de setiembre de 1988 fueron reivindicadas por el CRF, mientras que el 30 de noviembre en varios lugares de esa ciudad aparecieron pegadas en las paredes «listas negras» del CRF de presuntos colaboradores de la subversión a quienes se les amenazaba de muerte.

La ofensiva del PCP-SL, por otra parte, no modificaba su estrategia de asesinatos selectivos que habían generado oposición en la población en años anteriores. El 9 de octubre de 1989, dos militantes del PCP-SL asesinaron a Armida Gutiérrez de Rivas, alcaldesa de la provincia de Churcampa, y a su esposo Ernesto Rivas Berrocal, militantes del Partido Aprista Peruano, semanas antes de las elecciones municipales. Como ejemplo de la irracionalidad de la guerra, un mes después, el 15 de noviembre, Víctor Salvador Rivas Gutiérrez, hijo de la alcaldesa asesinada, y Jesús Manuel Pérez Guillén fueron ejecutados por efectivos militares de la Base Contrasubversiva de Churcampa con disparos de fusil en plena plaza de armas de Churcampa. El 13 de diciembre de 1989, militantes del PCP-SL ingresaron a la comunidad de San Mateo (distrito de Churcampa).asesinando a Paulina Gamboa Arrieta, Teodoro Gamboa Ore y Moisés Arroyo Barrientos delante de la población reunida.

En 1990, con la ofensiva nacional del PCP-SL, la cifra de muertos aumenta en Tayacaja y Churcampa a raíz de las incursiones subversivas contra poblados organizados en rondas, de los asesinatos contra presuntos colaboradores de los militares y de los operativos del ejército. Así, el 17 de febrero fueron asesinados dos pobladores acusados de «colaborar» con los militares en el distrito de La Merced y el 13 de abril en el mismo distrito muere asesinada una pareja de esposos y dos meses después, el 15 de junio de 1990, los subversivos asesinaron al gobernador del distrito de La Merced, todos bajo la misma acusación. Unos días después, el 3 de julio de 1990, tres subversivos «aniquilaron» al Fiscal Provincial en Pampas, Tayacaja.

La ofensiva senderista genera la respuesta de algunas rondas que pasaron de labores defensivas a otras de carácter ofensivo. En la capital del distrito de Locroja, cansados de los abusos y requerimientos de los subversivos, los pobladores asesinaron, a mediados de 1990, al «camarada Samuel», mando local senderista, mientras que el 19 de abril de 1991, ronderos de Musoqpampa, en La Merced, ingresaron a Ccásir y detuvieron a un joven que había sido reclutado contra su voluntad por el PCP-SL, Pedro Cajamarca Navarro, quien fue entregado por los ronderos a los militares de la base de Churcampa, donde desapareció.

Los grupos senderistas buscaban vengar los golpes recibidos. El 7 de junio de 1991 un contingente de subversivos ingresó a La Merced y asesinó a Prospero Valencia Porras, alcalde distrital, a su esposa Rufina Guevara; a Oswaldo Porras Valencia y a su esposa Juana Santos Mancco; a Germán Porras Cóndor, Fortunata Valencia Porras y a su hijo José Rodríguez Valencia, a Serapio Cajamarca Roque y a Constantino Moreno Ortiz, en una de las últimas acciones de magnitud cometida por los subversivos en la provincia de Churcampa.

La organización de los poblados y comunidades en rondas, y la acción contrasubversiva del Ejército habían erosionado definitivamente las simpatías iniciales de los pobladores, obligaron al repliegue definitivo de las columnas senderistas, que mantendrán, sin embargo, una base activa aún hoy en la zona de Viscatán, en la selva de Ayacucho, limítrofe con las provincias de Churcampa y Tayacaja.

1.2.9.3. Cronología

Zona V: Huancavelica, Tayacaja y Churcampá

28/07/80	Huancavelica: El PCP-SL dinamita una torre de alta tensión del sistema de conducción energética de la Central Hidroeléctrica del Mantaro
16/10/80	Tayacaja, Pampas: Presuntos subversivos atacan con dinamita el local de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP).
19/01/81	Huancavelica: El local de la PIP de la ciudad de Huancavelica es dinamitado.
23/06/81	Huancavelica: El puente que une a los distritos de Vilca y Moya es destruido con dinamita.
15/12/81	Tayacaja: Presuntos militantes del PCP-SL atacan la Central Hidroeléctrica de Campo Armiño. Son repelidos por personal de la Guardia Republicana.
11/07/82	Huancavelica, Palca: Militantes del PCP-SL toman la localidad de Ñuñungayoc y saquean la tienda comunal. Otro grupo, armado de metralletas y fusiles, asalta el almacén general de Cochaccasa, de propiedad de Minas «Buenaventura», que provee de víveres a los trabajadores de las minas Julcani, Mimosa y Buenaventura.
20/07/82	Huancavelica: Subversivos dinamitan el reservorio de agua potable. La ciudad de Huancavelica se queda sin agua.
22/07/82	Huancavelica: Subversivos lanzan bombas molotov al depósito de materiales de la SAIS «Huancavelica».
28/07/82	Huancavelica: Subversivos dinamitan una torre de alta tensión. Esta acción deja sin energía eléctrica a un amplio sector del área sur de Lima, así como al departamento de Ica.
08/12/82	Tayacaja: El puesto de la GC y la Central Hidroeléctrica de Anco fueron dinamitados después de ser saqueados. En la acción toma parte un numeroso grupo de subversivos armados.
08/12/82	Tayacaja, Colcabamba: Subversivos atacan con cargas de dinamita el puesto de la GC y la vivienda del Juez de Paz. Además izan una bandera roja y cuelgan un perro en la Plaza de Armas.
12/12/82	Huancavelica y Tayacaja: Se informa que el PCP-SL viene intensificando sus acciones (atentados dinamiteros y amenazas de muerte contra las autoridades) en los distritos de Paucarbamba (Huancavelica) y Colcabamba (Tayacaja).
19/07/83	Huancavelica. Un grupo de senderistas asaltan la mina Cachicuya y roban gran cantidad de dinamita.
11/1/84	Churcampá: 10 campesinos de las comunidades de Soccos, Palermo y Manzanayoc fueron asesinados por efectivos militares.
14/1/84:	Tayacaja: Enfrentamiento entre las fuerzas del orden y presuntos senderistas provocaron la muerte de 18 sediciosos en Cobriza.
30/01/84	Asaltan la mina de Cobriza, dinamitan el puesto de la GC, saquean los puestos comerciales, matan a un obrero y hieren a otro.
18/02/84	Tayacaja y Churcampá: 11 campesinos son asesinados en los distritos de Pampas (Tayacaja) y Chinchihuasi (Churcampá). No se llega a determinar quiénes son los autores.
9/04/84	Huancavelica: Se informa que un número no determinado de campesinos habría sido asesinado por subversivos en las alturas de las comunidades de Santa Bárbara y Sacsamarca.
14/04/84	Huancavelica, San José de Acobambilla: El PCP-SL asesina 20 comuneros en la comunidad de Ancapa.
5/10/84	Tayacaja: Se reporta 12 personas muertas, 11 desaparecidos y 8 heridos

	como consecuencia de la intervención de los Sinchis en Tayacaja.
18/02/88	Huancavelica: 9 militares y 2 civiles que integraban un grupo de apoyo del ejército fueron muertos por senderistas en la localidad de Lachocc. Las víctimas viajaban por carretera hacia Villa Armas.
4/4/89	Huancavelica: Asesinato de 10 campesinos, presuntamente senderistas, en la comunidad de Santa Rosa de Pachaclla.
7.12.89	Huancavelica: 20 campesinos, integrantes de las rondas campesinas contrasubversivas fueron asesinados por senderistas, en San José de Acobambilla.
7/3/90	Tayacaja: Un grupo de paramilitares asesinó a 18 desplazados refugiados en el distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Entre las víctimas se encuentran mujeres, ancianos y niños. También desaparecieron 7 personas.
13/3/90	Tayacaja: Se produjo la muerte de 18 personas de origen ayacuchano en el Barrio de Picca Junco, Pampas. por parte de 8 encapuchados, presuntamente miembros del ejército peruano.
26.07.95	Huancavelica: Explosión mata a 7 policías, entre ellos un mayor de la PNP.
11.7.99	Tayacaja, Huachocolpa: Subversivos acribillan a dos campesinos de 15 y 25 años.

1.2.10. Zona VI: selva central

1.2.10.1. Datos generales

La selva de Junín y Pasco constituye unos importantes espacios de colonización y crecimiento demográfico, a la vez que en ella habita una de las etnias amazónicas más importantes, la de los asháninkas, desde el gran Pajonal en el norte hasta la provincia de la Convención, Cuzco, por el sur. Además de asháninkas, existen comunidades de las etnias yanesha y notmasiguenga, en proporción bastante menor.

Las provincias de Junín (Satipo y Chanchamayo) acogían en 1981 al 18% de la población departamental, mientras que Oxapampa absorbía al 25% de la población total del departamento de Pasco. En 1993 estos porcentajes aumentaron, llegando a 20% en el caso de Satipo-Chanchamayo y 27% en Oxapampa.

Población 1981 – 1993 según provincia

Población	1981	1993	Crecimiento
Chanchamayo	89059	114045	28%
Satipo	66901	94250	41%
Oxapampa	52642	60398	15%
TOTAL	208602	268693	29%

El crecimiento demográfico de la provincia de Satipo es uno de los más altos del país. La ocupación colonizadora de esta región, favorecida por la red vial en expansión, ha modificado sensiblemente el acceso a los recursos de parte de las comunidades nativas, generando innumerables conflictos por acceso y titularidad de los mismos.

Para explicar el ciclo de violencia en este espacio es necesario señalar la existencia de cuatro subzonas que presentan dinámicas distintas entre 1980-2000:

1) En primer lugar, el valle del Perené en la provincia de Chanchamayo, donde cohabitan colonos de origen serrano y nativos Asháninka y Yánesha. La actividad subversiva más importante en esta subzona corresponde al MRTA, mientras que El PCP-SL Luminoso, limitó su presencia a acciones esporádicas.

2) La segunda zona corresponde a la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, habitada por colonos, nativos Asháninkas (principalmente en el valle del Pichis), y la mayor concentración de población Yánesha. En esta zona también tuvo una fuerte presencia el MRTA,

3) La tercera zona corresponde a la provincia de Satipo, formada por los distritos de Río Negro, Satipo, Pampa Hermosa, Llaylla, Pangoa, Mazamari y Río Tambo. Aquí también podemos distinguir dos grandes subzonas: de una parte las principales ciudades de la provincia conectadas por la carretera marginal (Satipo, Mazamari, San Martín de Pangoa), y las zonas rurales aledañas a ellas. Ello significa, en otras palabras, el territorio de los distritos de Río Negro, Satipo, Mazamari y Pangoa, donde cohabitan colonos mestizos con indígenas Asháninkas y la mayor parte de la población Nomatsiguenga regional; la otra subzona corresponde al distrito del Río Tambo, donde la mayoría de la población es Asháninka. Las comunidades en esta zona se conectan principalmente por vía fluvial, a diferencia de la anterior donde el eje vertebrador lo conforma la carretera. En esta zona cabe recordar la fuerte presencia del PCP-SL.

4) La cuarta y última zona la constituye la meseta del Gran Pajonal habitada por el pueblo Asháninka, que pertenece administrativamente al departamento de Ucayali.

Aunque en Chanchamayo y Oxapampa se registra, desde mediados del s. XIX, la instalación de grupos colonizadores de origen europeo, la migración mayor de campesinos serranos hacia la selva central se constata desde mediados del s. XX. En Satipo la lenta expansión de colonos que había empezado al inicio de la década de 1960 se incrementó significativamente en los años siguientes. Colonos provenientes de Andamarca, Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, se asentaron en territorio originalmente asháninka. Estos asentamientos colonos son, hasta la fecha, origen de numerosos conflictos con las comunidades nativas, como sucede con la colonización del valle del Ene en el cual los colonos llegados de diferentes partes, entre ellas Ayacucho, invaden desde la década de 1960 las tierras de las comunidades nativas, y se asientan en ellas sembrando cacao.

Los pobladores de Chanchamayo y Satipo recuerdan aún la presencia de las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que utilizó, en 1965, parte de la Selva Central

como zona estratégica para hostilizar y enfrentar a las fuerzas policiales. Para reprimir las acciones del MIR se creó entonces la Unidad de Contrainsurgencia de la 48 Comandancia de Mazamari, en Satipo, bajo la denominación de Sinchis.

Desde el año 1980, con el plan de colonización «Paraíso Terrenal» organizado por la cooperativa Satipo, ingresan diferentes grupos de migrantes de la sierra para ocupar territorios del bosque nacional del Apurímac, detrás de las comunidades nativas de la margen derecha del Tambo.

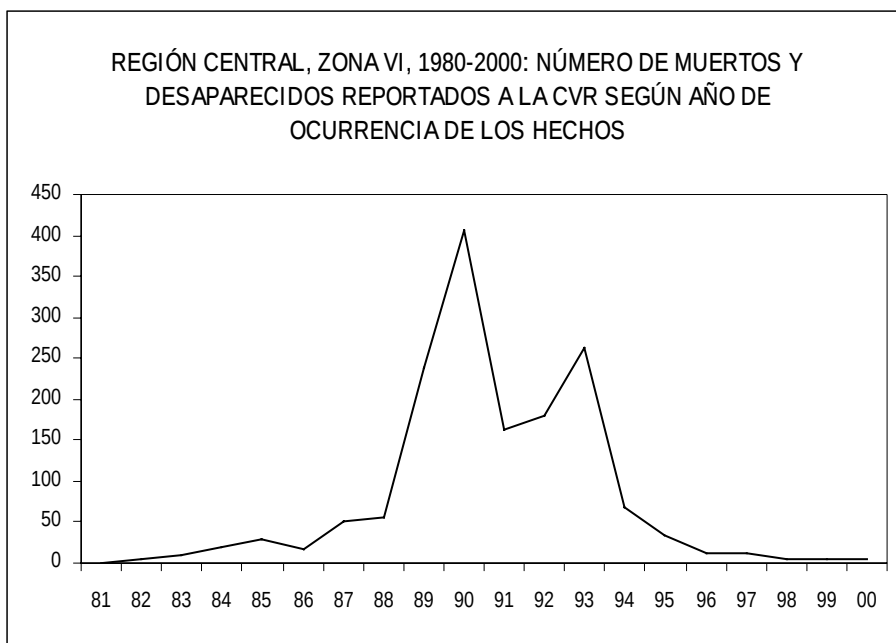
Las comunidades nativas de la selva central están vinculadas, en mayor o menor medida, a centros poblados regionales, a colonos vecinos, al sistema educativo, en suma a la sociedad nacional. Misioneros católicos y evangélicos, ONG's, incluso el estado, están presentes a través de escuelas, de acciones de educación bilingüe, de promotores de salud, etc. Muchas comunidades recibieron apoyo, por ejemplo, del ILV para construir escuelas o casas comunales. Incluso existen comunidades nativas en el Ene en las cuales, antes de la llegada del PCP-SL, la comunidad poseía diversos bienes como ganado, radios de comunicación, piladoras, podadoras, motobombas de agua, herramientas, maquinaria de carpintería, motosierra, postas de salud equipadas, equipo dental e incluso, en algún caso, un aeropuerto. El combustible para las maquinarias era adquirido con la ayuda del ILV. La comunidad también contaba con varios miembros capacitados como técnicos agropecuarios y promotores de salud. Puerto Ocopa fue, igualmente, un importante centro de adoctrinamiento católico a la vez que de entrenamiento en técnicas de diversa índole.

1.2.10.2. Historia de la violencia

Al igual que en el Huallaga, en la selva central se constata la presencia de un mayor número de actores involucrados directamente en la guerra interna, pues a la presencia importante, como dijimos, del MRTA en Chanchamayo y Oxapampa y del PCP-SL en Satipo, se enfrentan las fuerzas de orden, sobre todo ejército y policía y los «ejércitos asháninkas». Colonos y nativos asháninkas y yaneshas viven y sufren de diversa manera el enfrentamiento entre los grupos armados.

REGIÓN CENTRAL, ZONA VI, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	1,556	-	1	3	10	20	28	14	48	57	237	397	160	180	261	69	33	12	12	5	4	5
CHANCHAMAYO	304	-	-	-	-	2	2	2	-	3	49	52	24	58	77	12	13	6	1	2	1	-
SATIPO	1,178	-	1	3	10	17	25	12	48	50	177	329	133	104	174	56	13	6	10	3	2	5
OXAPAMPA	74	-	-	-	-	1	1	-	-	4	11	16	3	18	10	1	7	-	1	-	1	-



Entre 1988 y 1993 se vive en la selva central la mayor intensidad del ciclo de violencia política, sobre todo en la provincia de Satipo, como vemos en el cuadro anterior. Podríamos decir, simplificando, que el MRTA desarrolló sus actividades principalmente en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo, mientras que El PCP-SL se asentó centralmente en la provincia de Satipo. La zona fronteriza, en las inmediaciones de la ciudad de Pichanaki, sobre el valle del Perené, constituyó una zona disputada entre ambos grupos subversivos.

El ingreso del PCP-SL: 1982-1989

Alrededor de 1982 se escucharon los primeros rumores de la presencia del «partido» en las comunidades de colonos cercanas a asentamientos asháninkas de la zona del Ene. El PCP-SL había comenzado su proceso de inserción en las comunidades colonas de la cuenca del Ene, apoyado por colonos ayacuchanos que llegaron por la ruta del río Apurímac. Además, hacia 1984, algunos otros militantes, originarios la mayoría del departamento de Ayacucho, se habían replegado hacia esta zona como consecuencia de la ofensiva contrasubversiva de las Fuerzas Armadas en Ayacucho.

El 17 de mayo de 1984 ocurre un hecho que desconcertó a la población de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo. Ese día un grupo de subversivos del PCP-SL incendió la Misión franciscana instalada en el lugar, una granja y algunas viviendas más.

La presencia del PCP-SL en el río Ene fue al inicio, como siempre, a través de profesores, utilizando además en esta zona a colonos simpatizantes, y también profesores bilingües con amplio nivel de legitimidad en sus comunidades: «Ya se escuchaba de la política de Sendero Luminoso en el Ene... los que viajaban cuando regresaban nos contaban que había Sendero en el Ene...» (Matías.CN Otika).

Un buen ejemplo es «Valecho», un profesor Asháninka, educado en la misión franciscana de Puerto Ocopa, que había abandonado su formación religiosa para trabajar como docente en Quempiri. Entre los Asháninkas del río Tambo y del Ene es aún recordado como un mando senderista sanguinario.

Las noticias de la guerra iniciada por el PCP-SL años atrás llegaban con retraso a las comunidades nativas, pero nuestros entrevistados narran que se escuchaba hablar, hacia 1985, de los «ajusticiamientos» realizados por el PCP-SL de proxenetas y otros delincuentes, lo cual levantaba simpatía en algunas comunidades nativas. Si bien la estructura central del PCP-SL en la región estaba constituida por personas de origen colono, el PCP-SL logra apoyo real nativo a través de líderes indígenas ganados a su causa, actuando estos dirigentes como bisagra entre los mandos colonos y los comuneros Asháninka. Como dice un testimonio, los militantes del PCP-SL «poco a poco le han concientizado a las autoridades».

Además de los maestros y algunas autoridades nativas, otros nativos incorporados inicialmente a PCP-SL fueron promotores comunales de salud, de desarrollo, etc. La «política» del PCP-SL ingresa así poco a poco a la comunidad a través de la difusión que realizan estos primeros militantes de un discurso de igualdad, atrayendo a su propuesta, como dijimos, a presidentes y dirigentes de comunidades nativas. Fundamental para su expansión era no sólo captar a dirigentes nativos sino «politizar» a los clanes familiares encabezados por el adulto mayor: «Al comienzo era así, iban de casa en casa» (Martín. Otika).

Una pobladora de la comunidad colona de Selva de Oro, en Río Tambo, recuerda que les hablaban de «su política» y les decían que: «el viejo poder vamos a desaparecer, nuevo poder vamos a aparecer» (331079). Otro poblador colono de la misma comunidad recuerda que en otra reunión los subversivos le dijeron: «somos hijos del pueblo, estamos luchando para tomar el poder. Nos tienen que apoyar» (331089).

Siguiendo el curso del Ene, durante los años siguientes, los subversivos abarcaron zonas ubicadas en los distritos de Pangoa, Mazamari y Río Tambo. Hacia 1988, habían logrado organizar numerosos Comités Populares y disponían de Bases de Apoyo en el valle del Ene, lo que les permitió incursionar también en el valle del río Tambo, Pangoa y Mazamari. En Mazamari, los

subversivos asesinaron a algunas autoridades y en Río Tambo a personas consideradas como delincuentes. Un año después, en 1989, el PCP-SL controlaba todo el valle del Ene, parte del valle del Tambo e importantes zonas de Mazamari y Pangoa.

En otras palabras, los mandos senderistas en el Ene deciden implementar su versión de un «nuevo estado» en la cuenca del Ene pero al inicio no impusieron un control estricto sobre la vida cotidiana de la comunidad. Esta flexibilidad permitió que algunas familias en desacuerdo con el PCP-SL, salieran de su localidad para vivir en comunidades vecinas donde no había presencia del PCP-SL.

La leva de niños y jóvenes comenzó también, pero hay varias versiones respecto a la actitud de los niños que fueron llevados por el PCP-SL. Los hombres dicen que algunos de ellos fueron por propia voluntad, sabiendo que irían a un enfrentamiento. «Ellos sabían que iban a pelear, y fueron porque querían...» (Entrevista grupal, Otika). Las mujeres dicen que no sabían que irían a luchar, sino que el PCP-SL les dijo que traerían ropas. Ellas creen que el PCP-SL los obligó a robar en los caminos y luego los mataron. «Los senderos nos dijeron que se los llevaban para que trajeran la ropa... pero no regresaron» (ibid.)

En un inicio, la Fuerza Principal estuvo integrada por pobladores colonos, pero luego, conforme se expandía la presencia del PCP-SL a lo largo del río Ene, se fueron incorporando nativos asháninkas. El mando político de esta fuerza era usualmente un colono o «civil» al igual que el mando militar. Ambos portaban armas de fuego (una pistola, un fúsil o un revolver), a diferencia de los combatientes, que no siempre estaban armados con ellas, mientras que de manera frecuente, los nativos sólo estaban armados con flechas y machetes.

En 1988, ante el incremento sostenido de las acciones subversivas y la expansión territorial del PCP-SL y el MRTA, el gobierno de Alan García declara a las provincias de Chanchamayo, Oxapampa y Satipo en estado de emergencia, pocos meses antes de hacer lo mismo en todo el departamento de Junín.

Mientras el gobierno implementa estos estados de excepción, el PCP-SL instala sus «Comités» en algunas comunidades nativas, imponiendo normas de conducta para las familias o «masa», que debían ser respetadas: «No estropear los terrenos de cultivo. No maltratar las plantaciones, no pisarlas». « Cumplir con las tareas. Hacer todo lo que le dicen y piden. De lo contrario habrá castigos». « Mantenerse aseados. Amarrarse el cabello. Tener la ropa limpia». « Cultivar arroz, fríjol, maní, yuca, plátano, maíz».

El mensaje central fue percibido casi como una utopía por los nativos:

[...] le ha preguntado: bien, qué es el partido, le dijo (PCP-SL): el partido hay más desarrollo, vamos a tomar el poder, vamos a tener nuestra tienda, vas a tener todo, vamos a comer gratis», «por eso le ha seguido, porque le han engañado, le han dicho vamos a tener carro, vamos ser millonarios, vamos a tener carro, y vas a ir en cada comunidad con tu

carro. Por eso le ha seguido», «la gente no sabía, inocentemente. (Ver Estudio sobre Asháninkas CVR).

Las bases de apoyo tenían una clara organización en «pelotón», cada uno de los cuales compuesto por los mandos y la «masa». Entre los mandos existía la Dirección —jefe máximo del pelotón—, el Mando político —un hombre o mujer Asháninka, escogido por tener mayor grado de instrucción, generalmente comuneros capacitados, profesores o promotores con primaria completa o algún grado de secundaria—, el Mando militar, el Mando logístico.

La «masa» estaba conformada por el conjunto de los miembros de la comunidad, ancianos, adultos y niños, entre varones y mujeres, que tenían como tarea barrer las casas, hacer letrinas, abrir y trabajar las chacras para el sustento de los mandos y pelotón sembrando maíz, plátano y yuca.

El aparato militar incluía la Fuerza Principal, conformada por 25 a 40 personas entre colonos y nativos, mitad varones y mitad mujeres, que viajaban en parejas. Era el grupo encargado de ir a «guerrear» y de impartir justicia. A ellos les rendían cuentas los pelotones y ellos imponían los castigos. A esta fuerza se sumaba la Fuerza Local, que cumplía la función de enlace entre la Fuerza Principal y los pelotones.

Luego de los primeros asesinatos y el intenso trabajo desplegado, hacia los primeros meses de 1988 el PCP-SL había consolidado su presencia en Santo Domingo, Anapati (distrito de Pangoa), Selva de Oro (distrito de Río Tambo), Centro Sanibeni (distrito de Mazamari) y Samaniato (distrito de Río Tambo), y para los últimos meses de 1988 e inicios de 1989 los subversivos controlaban el ingreso al río Ene, estableciendo una serie de puestos de registro en ambas riberas.

La zona del Alto Ene abarca desde la localidad de Boca Mantaro (distrito de Pangoa) hasta Quempiri (distrito de Río Tambo). En esta zona, los subversivos establecieron controles en Puerto Roca (distrito de Río Tambo) y Paquichari (distrito de Pangoa). En el Bajo Ene, que va desde Boca Anapate (distrito de Pangoa) hasta Samaniato (distrito de Río Tambo), los senderistas ubicaron sus controles en Santaro (distrito de Río Tambo) y Puerto Asháninka (distrito de Río Tambo).

En esos mismos años, los militantes del PCP-SL se van asentando en los alrededores de Puerto Ocopa, capital del distrito de Río Tambo, que es la localidad de entrada para los valles del río Ene y el río Tambo desde el río Perené:

Alrededor del valle del río Ene, éramos algo de 100 profesores de los diferentes anexos y sólo podíamos salir del lugar dos veces al año en julio y diciembre. En julio de 1990, los profesores de todo el valle del río Ene se disponían a viajar a sus lugares de origen, pero allí hace su aparición Sendero Luminoso

Sendero Luminoso nos secuestra, pedíamos explicaciones y los subversivos aseguraban que en diciembre nos iban a dejar viajar (332004).

El ingreso del MRTA

El asentamiento de las columnas armadas del MRTA se basó en el trabajo político que militantes como Santiago Villaverde Segura, quien morirá años después en el combate de Molinos, fueron desarrollando a través de la organización gremial y concientización entre los pobladores de la zona, en particular en las ciudades de La Merced y Pichanaki. Fruto de este trabajo, hacia mediados de 1988, el MRTA contaba con algunos cuantos milicianos que empezaron a operar en La Merced.

La siguiente etapa del trabajo subversivo del MRTA fue organizar una columna armada y asentarla en una zona determinada de Chanchamayo. El trabajo empezó con la exploración de algunas zonas ubicadas en la margen izquierda del río Perené en setiembre de 1988. A la par del trabajo político y gremial, los subversivos del MRTA fueron ejecutando algunas acciones de propaganda armada. Los últimos meses de 1988 los emerretistas llevaron a cabo esas acciones en algunos tramos de la carretera Marginal de la selva, entre las ciudades de La Merced y Satipo. En esos meses también, su dirigencia dispuso el traslado de armas y recursos para formar el frente del MRTA en la selva central.

Más hacia el norte, unos pocos militantes del MRTA se instalaron en la provincia de Oxapampa, en particular en el Palcazu y Puerto Bermúdez, sobre el Pichis. La población del distrito de Puerto Bermúdez se estima en 30 mil habitantes, 75% de los cuales pertenecen a la etnia asháninka y viven en 107 comunidades nativas, ubicadas a lo largo del río Pichis. El 25% restante es población colona. El grupo inicial del MRTA, integrado por 10 militantes, se instaló en una zona cercana a Ciudad Constitución, ubicada en la margen izquierda del río Palcazu, del distrito de Puerto Bermúdez en Oxapampa, a mediados de 1988. Este fue uno de los primeros núcleos subversivos que daría origen al Frente Oriental. Desde esa ubicación, los emerretistas empezaron a desplazarse a los poblados y anexos de los distritos de Puerto Bermúdez y Palcazu, realizando labores de agitación, propaganda armada y concientización entre los pobladores del lugar, sobre todo entre la población colona.

Los emerretistas se agenciaban de fondos mediante los «cupos» que cobraban a los ganaderos de los distritos de Puerto Bermúdez y Palcazu. Esta situación se generalizó tanto que muchos delincuentes comunes se hicieron pasar como subversivos del MRTA y cobraban también «cupos» a los ganaderos, incluso secuestraron a algunos de ellos y pidieron un rescate a cambio de su libertad.

En julio del mismo año, las acciones subversivas se incrementaron. El contingente subversivo atacó y destruyó el puesto policial del distrito de Pozuzo, muriendo cuatro policías durante el enfrentamiento. El 24 de julio de 1988, el grupo armado del MRTA incursionó en Puerto Bermúdez, capital del distrito, convocando a los pobladores a la plaza. De manera usual, los subversivos vestían uniforme verde olivo y portaban armas de largo alcance.

La policía abandonó la zona, ocupada desde entonces con mayor libertad por los subversivos del MRTA, que ofrecían seguridad y protección a los lugareños, intensificando sus

tareas de agitación, propaganda y organización de la población. Vestidos con pantalones militares y polos negros, la población comenzó a llamarlos «los negros». Durante sus incursiones, los emerretistas hablaban de su proyecto político y ofrecían poner fin a los abusos que cometían en sus patrullajes los militares de la base de Villa Rica, en Oxapampa.

Durante el tiempo de permanencia del MRTA en la zona, durante un año y medio aproximadamente, el contingente subversivo se incrementó hasta contar con unos cuarenta hombres, entre combatientes y milicianos.

Los años terribles: 1989 – 1992

El enfrentamiento de Molinos y el asesinato de Alejandro Calderón

En los últimos meses de 1989, el tránsito de los emerretistas en los distritos de Puerto Bermúdez y Palcazu era continuo, pero más al sur el trabajo del MRTA sufrió un duro golpe. En efecto, en marzo de 1989, alrededor de 30 hombres armados del MRTA atacaron el puesto policial de Pichanaki. Unos días después de este ataque, los subversivos marcharon hacia la sierra de Junín para unirse al destacamento de la sierra del MRTA, integrado por 37 militantes, con la intención de tomar Tarma en abril. Como se sabe, durante su desplazamiento los 80 integrantes del destacamento del MRTA se encontraron con fuerzas del Ejército en el distrito de Molinos, provincia de Jauja, y trabaron combate. El resultado fue la muerte de casi todos los emerretistas, y de 8 efectivos militares (*Ver: Estudio en Prof. De la CVR*). Al parecer, el ejército detuvo y desapareció a algunos pobladores del lugar y ejecutó extrajudicialmente a otros, por ello de los 62 muertos supuestos miembros del MRTA, esta organización sólo ha reivindicado a 42.

Los sucesos ocurridos en Molinos fueron un fuerte golpe al MRTA, a quien le tomó mucho tiempo y esfuerzo reiniciar el trabajo político y militar y reaparecer nuevamente en la zona de selva central en los años siguientes.

Hacia fines de 1989, en el proceso de reagrupar y reorganizar sus reducidas fuerzas, cuando un grupo de emerretistas se encontraba transportando armas para el destacamento de la selva, la camioneta en la cual viajaban se cayó al río Pichanaki y todos sus ocupantes murieron ahogados.

A pesar de ello, hacia fines de 1989, el MRTA logra reactivar su presencia no sólo en la margen izquierda del río Perené sino también en algunas zonas de la margen derecha de ese río. Pero el MRTA comete un asesinato que será decisivo en el curso de la violencia en el norte de nuestra región. En efecto, el 8 de diciembre de 1989 un grupo del Frente Oriental emerretista asesinó a Alejandro Calderón, presidente de la ANAP (Apatywaka – Nampitsi – Asháninka del Pichis, organización que representa a 52 comunidades nativas del río Pichis y sus afluentes), dirigente nativo de prestigio y ascendencia entre los asháninkas y los pobladores colonos de Oxapampa. Ante su muerte, su hijo, Alcides Calderón, quien será elegido años después alcalde del distrito de Puerto Bermúdez, impulsa la organización el autodenominado «Ejército Asháninka», cuya ofensiva hizo que las fuerzas del MRTA, que operaban en la margen izquierda del río Perené, se replegaran hacia la margen derecha del mismo y las que operaban en Oxapampa se retiraran

hacia el departamento de Ucayali. Dos emerretistas asháninkas, enviados para que dialogaran con sus pares, fueron asesinados por el Ejército Asháninka.

En alianza con los sinchis acantonados en Mazamari (Chanchamayo), el Ejército Asháninka copa la carretera Marginal y buena parte de la margen izquierda del río Perené, controlando casi enteramente la provincia de Oxapampa.

En esos meses de octubre y noviembre de 1989, los pobladores se percataron de la presencia de los subversivos del PCP-SL por los alrededores de los distritos de Puerto Bermúdez y Palcazu. El 19 de noviembre, un grupo armado del PCP-SL atacó en Puerto Bermúdez las instalaciones del Proyecto Especial Pichis Palcazu (PEPP), saqueó algunas tiendas del lugar y robó el dinero depositado en el Banco Agrario. El PCP-SL pretendía disputar así esta zona al MRTA, por ello los testimonios mencionan los enfrentamientos entre ambos grupos, aunque son difíciles de verificar.

El campamento emerretista de Puerto Victoria

Al revés de Molinos y a las secuelas del asesinato de Calderón, se agrega un tercer golpe para el MRTA. En efecto, pocos días después del asesinato de Calderón, el 17 de diciembre de 1989, cerca de Puerto Victoria, distrito de Puerto Bermúdez en Oxapampa, en territorio de la etnia Yanesha, una patrulla del Ejército ubicó y atacó un campamento subversivo produciéndole numerosas bajas mientras otros huyeron del lugar. Un comunicado del Ejército informó que el enfrentamiento sostenido con los subversivos del MRTA en Puerto Victoria se había producido exactamente en la zona conocida como «El Chaparral», ubicada en Iscozacín, distrito de Palcazu, resultando muertos 43 subversivos y un efectivo militar, información que fue recogida en los medios de comunicación masiva de la época.

La destrucción del campamento subversivo de Puerto Victoria y el levantamiento de los asháninkas prácticamente desbarataron al Frente Oriental del MRTA, tornando difícil la situación del Frente Central. A los subversivos les tomó muchos meses volver a operar en la provincia de Oxapampa y reorganizar su autodenominado Frente Oriental. En cambio, los emerretistas del Frente Central que operaban en la margen izquierda del Perené se replegaron y continuaron con su trabajo en la margen derecha.

El Ejército Ashaninka en Puerto Bermúdez

En los primeros días de enero de 1990, un número indeterminado de asháninkas, que algunos de nuestros entrevistados estiman entre 2000 y 2500 nativos, se instaló en Puerto Bermúdez, capital del distrito del mismo nombre. Los nativos estaban armados en su mayoría con arcos, flechas, y algunas escopetas de caza. El día que ingresaron por primera vez a Puerto Bermúdez sacaron a los pobladores de sus viviendas. Buscaron a quienes presumían tenían contacto o relación con los subversivos del MRTA y a los que encontraron se los llevaron sin rumbo conocido.

Desde aquel momento, Puerto Bermúdez se convirtió en el centro de operaciones del Ejército Asháninka, y los asháninkas establecieron un control estricto de la población. El tránsito de los pobladores era posible gracias a un salvoconducto expedido por los dirigentes nativos. En cualquier momento, cualquier persona podía ser intervenida en los controles establecidos por los asháninkas a la vera del camino o en las orillas de los ríos Pichis y Palcazu. Esta situación causó mucho temor entre la población colona, vista como apoyo a la subversión, por ello en ese momento ser colono casi se convirtió en sinónimo de «terrorista». Por esa razón, muchos pobladores abandonaron la zona para preservar su vida.

Marcos Muñoz, yerno de Alejandro Calderón y trabajador del Programa Especial Pichis Palcazu (PEPP), fue asesinado por los asháninkas. Se presume que Muñoz había colaborado con los emerretistas en la captura de Alejandro Calderón los primeros días de diciembre de 1989. Sus restos fueron arrojados al río Pichis (307028).

Semanas después, efectivos militares, a bordo de un helicóptero, aterrizaron en Puerto Bermúdez. El oficial al mando del contingente militar felicitó personalmente a Alcides Calderón por las acciones que venía desarrollando junto a sus fuerzas para acabar con los terroristas. Antes de marcharse, los militares les entregaron algunas armas para su defensa. Meses después, los militares regresaron a Puerto Bermúdez e instalaron una Base Contrasubversiva.

El 29 de enero de 1990, un numeroso contingente de asháninkas ingresó a Ciudad Constitución, armado con arcos, flechas y escopetas. «Para eso en el pueblo ya no había ya <pobladores>, casi todos se habían ido. Habremos quedado cincuenta valientes como dicen» (307029). Los asháninkas insultaban a los colonos acusándolos de «terroristas». A los nativos no les fue difícil reunir a los pocos pobladores que se encontraban en la localidad, que fueron puestos boca abajo frente a la casa de Rogato Córdova, acusado de pertenecer a las filas subversivas y asesinado delante de los pobladores con:

[...] puro flechas, el hombre cómo gritaba. Nosotros llorábamos no mas, de ahí al ver que no moría con piedra le han tirado en la cabeza y le han reventado todito (307029).

Valentín Guisado Ramos, otro poblador, intentó evitar que asesinaran a Córdova afirmando que era inocente. «¡Ah! tú también!”... yo escuché y ahí “el nativo” le mandó un balazo y el hombre cayó al suelo» (307029), muriendo en el acto. En los días siguientes, otros pobladores colonos fueron asesinados por los asháninkas. Otra de las zonas que sufrió la arremetida del Ejército Asháninka fue Iscozacín, en el distrito de Palcazu.

El «levantamiento Asháninka» produjo el secuestro, tortura, violación, detención – desaparición y asesinato de muchos pobladores colonos por lo que muchas familias huyeron para preservar su vida, quedando muy pocas en la zona de operaciones del Ejército Asháninka. Las víctimas no denunciaron estos hechos por temor a las represalias.

Sin embargo, no hubo enfrentamientos entre los subversivos del MRTA y el Ejército Asháninka debido a que los emerretistas se habían replegado de la zona y tenían la orden expresa de no entablar combate con los nativos. Para los subversivos del MRTA, la ofensiva del Ejército Asháninka, antes de causarles bajas a ellos, se ensañó con los pobladores colonos. De esa manera los nativos pretendieron saldar viejas cuentas del pasado, aunque el avance del Ejército Asháninka fue detenido, en parte, por la protesta y movilización de los gremios cafetaleros del distrito de Pichanaki, ubicado en la margen derecha del río Perené.

Con el PCP-SL en el Ene: vida en el monte, asesinatos y escape

Mientras el MRTA debía retirarse de la zona del Pichis-Palcazu, los grupos armados pertenecientes al PCP-SL lograron ampliar su presencia en la provincia de Satipo logrando, a mediados de 1989, como dijimos, el control casi absoluto de la cuenca del río Ene y parte de la cuenca del río Tambo, con lo cual amplió su movilidad en toda la provincia, que no tarda en sentir su presencia. Se vuelven así comunes en Satipo el arrasamiento de decenas de comunidades, el asesinato de miles de nativos y colonos y el enrolamiento compulsivo de varios miles de nativos (Ver Estudio de la CVR sobre «Población Asháninka y violencia»)

El 13 de febrero de 1989, militantes del PCP-SL secuestran y matan al dirigente nativo Isaías Charete Quinchoquer, presidente de la Organización Campa Asháninka Río Ene (OCARE), en la comunidad nativa de Centro Tzomaveni (distrito de Pangoa, provincia de Satipo).

A fines de aquel año, el Ejército instala la primera Base Contrasubversiva en el distrito de Satipo, en el Km. 4 de la Carretera Marginal. Desde esta base, los militares organizan sus primeras incursiones hacia el Ene, en el momento en que el PCP-SL empieza a cometer asesinatos selectivos en las comunidades colonas de Unión, Santa Isabel, Dos de Mayo, San Francisco de Cubaro, Monterrico. En esta última, además de los asesinatos de 1990, ocurrirán otras dos matanzas en 1993 y 1994. En el desplazamiento masivo de las comunidades del valle de Tsiriri hacia Mazamari buscando protección, fue crucial la matanza de quince ronderos en Dos de Mayo. Al igual que lo sucedido con A. Calderón y el MRTA en la zona del Pichis, la muerte de tres líderes nativos fue determinante para la formación de otro «Ejército Asháninka» o ronda de Poyeni, a la cual se incorporaron las comunidades nativas del bajo Tambo.

En la C.N. Mayapo del 18 al 20 de julio de 1990 se realizó el congreso ordinario de la Central Asháninka del Río Tambo. Al finalizar el congreso, una columna armada de Sendero Luminoso, integrada por más de sesenta personas, entre colonos y nativos, secuestró a los hermanos Pablo Santoma Santos, presidente de la CART, Oscar Chimanca Chamqueti, presidente del Consejo Nomatsiguenga del Pangoa, y Dante Martínez, secretario de defensa de la CONAP. Dos días después los senderistas asesinaron a los tres dirigentes, después de haber matado a otro comunero llamado Romualdo Pérez. A Pablo, Oscar y Dante los victimaron en la C.N. Anapati. Antes de morir decapitados fueron cruelmente torturados por rechazar los métodos verticalistas y autoritarios con los cuales sendero intenta captar el apoyo de las comunidades. (CONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Boletín n° 4. Octubre del 90. Año 3)

Los nativos miraban sorprendidos desde la ribera del río:

Veíamos pasar las balsas llenas de senderistas. Después los vimos pasar de regreso. Nos enteramos (días después) que el PCP-SL había matado a varios líderes, a Pablo Santoma (Carlos. CN Otika).

Desde 1990, la ronda de Poyeni se enfrentará a la Fuerza Principal del PCP-SL, la cual sufre también la presión de la Marina, cuyos continuos «rocketeos», a pesar de que no ocasionaron muertes, hicieron difícil que los Comités de Base continúen viviendo entre el poblado y el monte. «Nos tuvimos que ir porque era peligroso. La Marina disparaba al monte, nunca se acercó, sólo disparaba. Felizmente no nos alcanzó... Pero tuvimos que irnos» (Martha. Otika).

El aumento, en 1990, del hostigamiento de la Marina de Guerra y del ejército a través de patrullajes y rastrellajes esporádicos, obligó a algunos Comités de Base senderistas a desplazarse hacia el monte.

El 25 de setiembre de 1990, se produjo el enfrentamiento entre Sinchis y el PCP-SL en la «Roca», en el Km. 14 de la carretera Mazamari - Puerto Ocopa, enfrentamiento interpretado por los nativos desplazados como una derrota del PCP-SL, lo cual anima a muchos pobladores del valle de Tsiriari a retornar a sus respectivas comunidades desde junio de 1991.

Mientras tanto, para los nativos integrados a las Bases de Apoyo organizadas por el PCP-SL, la vida se hace cada vez más difícil en el monte. Los Asháninka han perdido las convicciones y motivaciones que los llevaron a seguir al PCP-SL y, sobre todo, han perdido la «libertad» que existía en la comunidad. La Fuerza Principal ingresa continuamente, la vigilancia es constante y hay más control para el cumplimiento de las normas impuestas y para impedir escapes.

Los Sinchis y después el Ejército trataron de contener el avance de los subversivos en la provincia de Satipo, sin lograr mayores resultados. Esta situación cambió en 1991 cuando el Ejército insta a la población a organizarse en rondas contrasubversivas, establece algunas bases en zonas estratégicas como en la ciudad de Satipo como dijimos, o en Puerto Ocopa, capital del distrito de Río Tambo, e intensifica sus patrullajes e incursiones en zonas consideradas «rojas»; además, las rondas nativas, que venían haciendo frente al PCP-SL por iniciativa propia, reciben el apoyo del ejército. Desde 1991, por lo tanto, los asháninkas de los ríos Ene y Tambo se organizan en Comités de Autodefensa para enfrentar al PCP-SL. Por su parte, durante los años 1991 y 1992 la Marina realizó patrullajes y rastrellajes conjuntamente con la ronda de Poyeni.

En 1991, se instala otra Base Contrasubversiva en Cutivireni, distrito de Río Tambo. Después el Ejército hace lo mismo en Valle Esmeralda y Natalio Sanchez, también en el distrito de Río Tambo, todas ubicadas en la margen derecha del río Ene. Así, en 1991, la ofensiva militar calzaba plenamente con la voluntad de algunos pobladores de comunidades nativas y de comunidades colonas de defenderse de las fuerzas del PCP-SL.

Ante el despliegue de las fuerzas militares, los subversivos empiezan a replegarse a las zonas altas del río Ene. Los pobladores de algunas comunidades nativas y colonas asentadas en las

orillas del Ene se desplazan junto a los subversivos. Subversivos y pobladores se dirigen hacia la parte alta del valle, a Mabeni y Boca Anapati, en el distrito de Pangoa, convirtiéndose estas zonas en uno de los refugios de los subversivos del PCP-SL y la «masa».

No hay datos precisos acerca del número de personas cautivas en manos de los subversivos, pero sin lugar a dudas sobrepasaban con creces las centenas. Manejar tal cantidad de población bajo las condiciones de una amenaza constante de las fuerzas del orden y de las rondas y la imposibilidad de confiscar o producir alimentos de manera regular les trajo muchos problemas a los subversivos, al igual que lo sucedido en «Oreja de perro», en Chungui, Ayacucho, con las «retiradas» ordenadas por los mandos senderistas (Ver: Estudio de la CVR, «Oreja de perro»).

El reasentamiento emerretista en la margen izquierda del Perené

A pesar de los golpes militares se constata, en los primeros meses de 1991, el reinicio del trabajo político del MRTA en ambas márgenes del Perené, a lo cual se suma la decisión de la Dirección Nacional del MRTA, hacia fines de ese mismo año, de reforzar el trabajo del Frente Central, para lo cual algunos emerretistas, integrantes de otros frentes como el del Nororiente, fueron destacados al Centro. Con este nuevo y experimentado contingente de militantes, la Dirección Regional del MRTA decidió ejecutar una acción de envergadura en la selva central: la toma de Pichanaki, en Chanchamayo, prevista para el 1 de diciembre de 1991. Los subversivos desplegaron para el ataque a Pichanaki «todas las fuerzas, las unidades, las fuerzas materiales y las fuerzas humanas», según narra Lucas, ex mando emerretista actualmente recluido en un penal de máxima seguridad, pero no tuvieron éxito en esa operación. Un mes después, en enero de 1992, un campamento del MRTA, ubicado en un lugar cercano al poblado Dos de Mayo, distrito de Mazamari, en Satipo, es destruido por el ejército, muriendo en el ataque nueve subversivos.

Hasta ese momento, para algunos emerretistas, provenientes de otras experiencias guerrilleras, el desenvolvimiento del MRTA en la selva central se asemejaba mucho al de las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de 1965.

Vemos una fuerza militar totalmente de guerrilla a la antigua, tipo del MIR del 65. Una guerrilla andante, que de acá para allá, todo un grupo, más o menos que eran 30 hombres. Se dirigían a distintos sitios... ese grupo rara vez se dividía y podía hacer acciones; y el mando -o los mandos- porque no era solo un mando, eran varios mandos que componían la Dirección Regional estaban en la ciudad... (Lucas).

Si el destacamento armado era ubicado por las fuerzas del orden era relativamente fácil aniquilarlo o causarle un número importante de bajas entre sus filas, tal y como sucedió en el campamento de Dos de Mayo. Además, debido a que era «una guerrilla andante», estaba imposibilitada de crear una sólida base social en el campo. Es decir, el tránsito continuo de un lugar a otro les impedía organizar y concientizar a la población según sus postulados. Más aún, algunas formas de organización alcanzadas en ciertas poblaciones por los subversivos, se diluyen una vez

que los emerretistas se marchan o cuando los militantes del PCP-SL ingresaban a esas mismas poblaciones para ejecutar alguna acción.

Ante esta situación, a mediados de enero de 1992, los mandos emerretistas sostuvieron una serie de reuniones tendientes a la reestructuración del trabajo político y militar del MRTA en la Selva Central. Uno de los primeros acuerdos de la Dirección Regional fue la formación de dos subfrentes guerrilleros, uno que operaría en la margen izquierda y el otro en la margen derecha del Perené. Ambos subfrentes estarían bajo una misma orientación política, pero cada uno tendría objetivos militares distintos. Otro acuerdo fue pasar de una «guerrilla errante» a otra que se asentara en una determinada zona y trabajara políticamente con la población de ese territorio. Es decir, ganarse a la población a su causa y marcar distancia con el tipo de relación que el PCP-SL establecía con esa misma población.. En consecuencia, el trabajo político del MRTA se intensifica entre los pobladores de las comunidades, sobre todo colonas. La labor de persuasión y convencimiento de los pobladores fue permanente y facilitó a los subversivos instalar sus campamentos en lugares muy cercanos a las poblaciones.

La estructura militar del MRTA incluía destacamentos, pelotones, escuadras y tríadas o COTA (Comando Táctico). El destacamento guerrillero podía estar formado por dos o tres pelotones. Cada pelotón estaba integrado por 20 o 30 combatientes. Un pelotón, a su vez, estaba integrado por tres escuadras y cada escuadra estaba formada por dos o tres tríadas o COTA, compuesta por dos a cinco combatientes. Cada uno de esos niveles de organización militar contaba con su respectivo mando o responsable.

Por último, algunos mandos medios emerretistas solicitaron que tanto la Dirección Regional como la Dirección Nacional del MRTA se trasladaran al campo. Este pedido fue aceptado por los máximos dirigentes subversivos.

Yo personalmente era de la idea de que los comandantes, tanto del Centro, de la Región Central, como de la Comandancia General del MRTA estuvieran en el campo. Yo he luchado por eso, porque creo que la guerra se hace en el campo y no en una casa de seguridad, no en un automóvil de lujo y no en la Capital; podrás tener ahí todas las comodidades del trabajo de computación, podrás tener todas las condiciones para que desde ahí puedas dirigir una guerra, pero ¿dónde se legitima más un mando? es en el campo (Lucas).

En ese contexto los responsables regionales del MRTA planificaron un nuevo ataque a Pichanaki, en abril de 1992, conmemorando un aniversario más de la «Batalla de Molinos», para con ello demostrar, entre sus militantes:

[...] su habilidad, su movimiento cuando el enemigo estuviese disparando [...] los instructores que fuimos a ese ataque pudimos evaluar, enseñar a desplazarse, a moverse, a posicionarse, etc. a todos los compañeros, uno por uno y una enseñanza más, un aprendizaje más para los compañeros, pero ya en la práctica (Lucas).

La evaluación final de este ataque fue que estaban en condiciones de ejecutar acciones de mayor envergadura como la de asaltar y destruir la base contrasubversiva de Villa Rica en Oxapampa, el viernes 1 de Mayo de 1992, por un destacamento del MRTA integrado por poco más de 100 hombres, superior a los 80 efectivos de la Base. La destrucción de la base militar de Villa Rica fue quizás la acción más espectacular del destacamento emerretista de la selva central, y marcó definitivamente el inicio de una nueva etapa en el desenvolvimiento del MRTA en esa región, etapa en la cual los subversivos pusieron en práctica los cambios que a nivel táctico, operativo y organizativo realizaron los meses previos.

En las semanas posteriores al ataque, el Ejército respondió con una ofensiva sin precedentes, produciéndose una serie de enfrentamientos con los subversivos que, a pesar de la frecuencia que adquirieron, produjeron pocas bajas entre los emerretistas.

En julio de 1992, dos meses después del ataque a Villa Rica, la Dirección Regional del MRTA abandonó la margen izquierda y se trasladó a la margen derecha del río Perené. Los criterios para tomar esa decisión fueron: mejores niveles de seguridad, facilidad para las comunicaciones, mayor densidad poblacional y cercanía entre los poblados. Esto último facilitaba el trabajo subversivo entre la población de la margen derecha. Su campamento quedó instalado en una zona ubicada entre Alto Pichanaki y Miricharo, en el distrito de Perené, en Chanchamayo.

El destacamento que operó en la margen izquierda recorrió las zonas de Pampa Azángaro, José Olaya, José Gálvez, Ubirique, Los Ángeles de Ubirique, 28 de Julio, La Florida, Yurinaqui, Alto Yurinaqui, Sanchirio, Metrado, Zona Patria, incluso abarcaba Santa Ana, Puerto Paucartambo, Puente Capelo y San Luis de Shuaro, poblados ubicados en la provincia de Chanchamayo.

Por entonces, en la provincia de Satipo, sobre todo en los primeros meses de 1992, se registra el mayor número de detenidos-desaparecidos de todo el país, y la ofensiva de las fuerzas del orden se mantiene durante 1992 y 1993. Los patrullajes se intensifican, aumentando la presión sobre las comunidades colonas y nativas para que se organicen en rondas contrasubversivas. De esta manera, en unos cuantos meses, el número de rondas colonas y nativas crece notoriamente. El Ejército las provee con escopetas y municiones. Por último, en esos mismos años, se realizan patrullajes mixtos, entre rondas contrasubversivas y efectivos militares, durante los cuales se ubica a presuntos subversivos y en algunos casos, sin mayor trámite, se les desaparece o ejecuta extrajudicialmente.

Al final de la violencia: 1993-2000

En 1993, mientras que las fuerzas del PCP-SL y la «masa» que lo acompaña está confinada en las partes altas de la cuenca del río Ene, la creciente presencia del Ejército se evidencia en la instalación de nuevas bases en ambos márgenes del río Perené para combatir a los destacamentos del MRTA. En la margen izquierda se instalan en el cerro Morla (provincia de Chanchamayo), en Cacazu (distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa), en La Florida (distrito de Villa Rica,

provincia de Oxapampa), Sanchirio Palomar (distrito San Luis de Shuaro, provincia de Chanchamayo) y en Huantinín (distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo), mientras que en la otra margen, los militares construyen sus bases en Pampa Tigre (distrito Perené, provincia de Chanchamayo) y Alto San Juan (provincia de Chanchamayo). La ofensiva del Ejército abarcó, en el caso de la zona con presencia del MRTA, ambas márgenes del río Perené. Los hostigamientos, emboscadas y enfrentamientos fueron incrementándose durante los meses, y en el último trimestre de aquel año se produjo la mayor cantidad de choques entre los subversivos del MRTA y el Ejército en la zona de Oxapampa y Chanchamayo. El recuento de las noticias referidas a los enfrentamientos entre el Ejército y la policía y el MRTA, reporta la muerte de 94 subversivos del MRTA y 7 efectivos militares, en un total de 17 enfrentamientos en este teatro de operaciones circunscrito a ambas márgenes del río Perené.

Mientras tanto, en el Ene y el Tambo los recursos de los Asháninkas se hicieron insuficientes ante la presión y amenazas, tanto de la Marina y la ronda de Poyeni como de los grupos armados del PCP-SL. Los nativos ya no podían visitar a sus hijos y familiares, ocultos en el monte; se comunicaban cada vez menos entre ellos, haciendo difícil la supervivencia de sus familiares y la propia. Los alimentos escaseaban y los desplazamientos de la población cautiva se intensifican para evitar ser ubicados por las fuerzas del orden. En esas circunstancias, los mandos del PCP-SL se dan cuenta que no tienen capacidad para alimentar a tantas personas de la «masa» e inician el proceso de «desparasitación», asesinando a las personas que enfermas o débiles ya no podían caminar para seguir al resto de la «masa» y a la columna de la Fuerza Principal. Muchos nativos deciden por lo tanto huir y lo logran, como sucede en Quempiri en 1992.

En otros casos, la agresión senderista es brutal, como sucedió la tarde del 18 de agosto de 1993, cuando tres grupos de supuestos senderistas, entre cien y trescientos hombres, mujeres y niños, colonos y nativos, ingresan a 7 comunidades del valle de Tsiriari. De ellas, Monterrico, San Isidro, Sol de Oro, Unión Cubaro, San Francisco de Cubaro y Santa Isabel eran colonas y ya habían sido agredidas en 1990, como mencionamos anteriormente. Pueblo Libre era una comunidad nativa. Presentándose como ronderos, los senderistas asesinan alrededor de 36 colonos con arma blanca y saquean las casas, llevándose enseres domésticos, medicinas y animales menores, conforme consta en el atestado policial ampliatorio No. 003-JECOTE-JPS-PNP del 23 de marzo del 2000.

Una sobreviviente recuerda ese día de la siguiente manera:

[...] cuando estábamos [...] nosotros trabajando en la chacra, mi esposo estaba cortando plátano el día miércoles, estaba cortando, [...], y le digo a mi esposo, yo me voy para la casa, no tengo ganas de trabajar, [...] váyate, cocínate, me dijo, [...] y ahí ya estaba cocinándole y primero ha llegado el mayor de mis hijos y dice, mamá ha venido rondero. ¡que rondero va a venir acá, si rondero nunca ha venido hijito!, de frente me apuntó (supuesto subversivo) cuando estaba ahí en cocina, me apuntó y le dije ¡que cosa, si tu eres rondero debes venir bonito! [...] yo no te hecho nada para que me apunte (s), ¡tu marido!, me dice, ¡tu marido!, no está mi marido se ha ido a trabajar a la chacra , ¡avísale rápido! me

ha dicho, ¡sino te mato!, y me dice y ya me dejó, y ya mi esposo había venido de la chacra y ahí nomás le han agarrado, [...] agarrando su mano y le ha llevado y yo [...]por seguir a mis hijos también he seguido en su atrás y para llegar a la plaza había bastantes, [...] conocido había ido enmascarado, debe ser de vecino).(Sobreviviente de la matanza, mujer de 38 años aproximadamente).

Varios medios de comunicación difundieron la noticia como la «masacre Asháninka» ocurrida en la comunidad de Tsiriari, en Mazamari, con un total de 65 Asháninkas muertos (Véase: *La Nación*, *La República*, *EL Comercio*, *Expreso*). La información fue equivocada tanto en lugar, como en fecha y víctimas. La matanza ocurrió en el valle de Tsiriari el miércoles 18 de agosto y del total de víctimas sólo 21 eran nativos Nomatsiguengas, el resto eran colonos.

1993 es el último año de este ciclo de violencia intensa en la selva central. A la ofensiva militar se suman colonos y nativos, agrupados en Comités de Defensa, que reducen definitivamente la actividad subversiva en la región y posibilitan el retorno de muchos nativos a sus territorios, tal como sucede con la comunidad de Quempiri, que debido al «aburrimiento» y los constantes problemas que había con los colonos durante la convivencia forzada por su refugio en Natalio Sánchez, acordaron el retorno a la comunidad, el que se hace efectivo en 1994.

Entre 1993 y 1995, el número de pobladores, nativos y colonos «recuperados» de los campamentos senderistas se incrementó de manera significativa debido a una serie de circunstancias. El miedo vencido, el hambre, la Ley de Arrepentimiento, el hostigamiento militar y de las rondas nativas y colonas se conjugan en esta «recuperación de nativos cautivos y colonos».

Un caso representativo sucede en 1994, cuando los pobladores de la comunidad colona de Selva de Oro, distrito de Río Tambo, que habían cruzado el Ene huyendo de la ofensiva militar, abandonaron la zona donde se encontraban con la anuencia de los mandos subversivos. En esa ocasión, ante el estado deplorable de la población cautiva, los mandos subversivos los dejaron en libertad. Aproximadamente 280 personas caminaron más de una semana hasta llegar a la comunidad de Quiteni, en Río Tambo. Otra pobladora de la comunidad colona de Anapati (distrito de Pangoa) relata un hecho similar; aunque no recuerda exactamente el año, cuenta que los subversivos los reunieron y les dieron dos opciones, o quedarse con ellos o seguir el camino de su libertad. Muchos optaron por la segunda opción. Los mandos subversivos se molestaron, pero les dieron algo de comida y los dejaron ir. Tiempo después arribaron a la comunidad de Natalio Sánchez.

Quando la situación era critica los senderistas nos tenían dando vueltas en las alturas de San Martín de Pangoa. Como producto de la falta de alimentos y el cambio de lugar, muchos sufrían de anemia y tuberculosis...

Los subversivos nos tenían separados de los sanos, nos tenían en una chocita, donde pocas veces llegaba la luz del día y la gente que estaba sana nos alcanzaban nuestros alimentos. Había días que no comíamos y los sanos eran los encargados de buscar alimentos para los enfermos,

En mayo de 1996, al mediodía, los militares nos rodearon, llegaron caminando y en un helicóptero. La gente se asustó por esto. Pero luego de unas horas, los militares se acercaron y nos dieron a entender que no nos iba a pasar nada, unos 30 enfermos fuimos llevados por los soldados al Hospital de la ciudad de Satipo. (332004)

En año 1994 los pobladores de Tahuantinsuyo también deciden volver a su comunidad obligados por la presión del Ejército de Mazamari que les amenazaba con poner a otra gente en sus tierras

En suma, entre 1993 y 1995 se consolida la derrota y desarticulación del PCP-SL en la selva central. Gradualmente, el PCP-SL sufre golpes consecutivos en diferentes zonas y deserciones que anulan totalmente su capacidad de reagruparse en las ciudades, por lo tanto su presencia se reduce a algunas zonas rurales, lo cual también es temporal porque finalmente sólo mantiene presencia en la selva de Satipo, en la margen izquierda de la cuenca del río Ene, desde donde esporádicamente incursiona en comunidades de los distritos de Pangoa y Río Tambo, se desplaza a la sierra por Andamarca y Santo Domingo de Acobamba y a la selva de Ayacucho, capacidad que finalmente perderá tras la captura de líder senderista Oscar Ramírez Duran «Feliciano», en julio de 1999.

Grupos pequeños del PCP-SL todavía mantienen presencia en comunidades alejadas en la cuenca del Ene, provincia de Satipo desde donde incursionan ocasionalmente, sin causar muertos, en algunos poblados.

Por su parte, al igual que en 1995, la Dirección Nacional del MRTA tomó la decisión de ejecutar una acción militar, tipo comando, en la ciudad de Lima con el objetivo de excarcelar a sus militantes. Para cumplir tal misión, poco más de una docena de integrantes de las fuerzas especiales del MRTA, que operaban en la selva central, fueron entrenados de manera intensa durante varios meses preparándose para asaltar y tomar, esta vez, la residencia del Embajador japonés el 17 de diciembre de 1996, muriendo los 14 emerretistas en la retoma de parte de las fuerzas del Estado. Ese es prácticamente el fin del MRTA.

1.2.10.3. Cronología

Zona VI: selva central

21/08/87	Junín, Satipo: MRTA ataca con explosivos el Banco Agrario.
02/01/88	Junín, Satipo: Más de una decena de senderistas en forma sorpresiva llegaron a la localidad de Puerto Ocopa en 2 lanchas, después de saquear el pueblo dieron muerte a un colono de varios balazos en la cabeza.
13/03/88	Junín, Chanchamayo, Pichanaki: MRTA ataca el puesto policial. Mueren 3 policías y 50 presuntos subversivos.
19/04/88	Junín, Satipo: Presuntos senderistas asesinan a un agente municipal y 4 agricultores.
20/04/88	Junín, Satipo, Pichanaki: MRTA toma la localidad de Pichanaki y arengan a la población a integrarse a la «lucha armada».
05/89	Junín, Satipo: El PCP-SL asesina a 3 profesores y 10 dirigentes nativos en la comunidad de Cutivireni por negarse a incorporarse a la

	lucha armada. Los profesores son crucificados. La comunidad huye hacia el monte desde donde resiste. Posteriormente una parte de sus integrantes son trasladados al Urubamba, al otro lado de la cordillera donde permanecen hasta hoy.
17/5/89	Junín, Satipo: 14 campesinos fueron asesinados, según versiones de diversos pobladores, por miembros del Ejército, en el poblado de Calabazas.
02/08/89	Oxapampa, Villa Rica: MRTA ataca el puesto policial y varios locales comerciales.
17/12/89	Oxapampa: En Iscozacín, 43 presuntos miembros del MRTA mueren en un enfrentamiento con el Ejército. La mayoría de las víctimas podrían ser agricultores del lugar.
8/1/90	Pasco, Oxapampa: Ejército ejecuta a 6 presuntos miembros del MRTA y a 20 campesinos acusados de colaborar con el MRTA.
14/03/90	Junín, Satipo, San Martín de Pangoa: Presuntos senderistas asesinan a 50 asháninkas.
12/4/90	Junín, Satipo: 50 pobladores del anexo de Sonomoro, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, fueron asesinados por una numerosa columna de senderistas. Al retirarse incendiaron las viviendas. Posterior al hecho se produjo el desplazamiento de familias hacia Satipo y otras ciudades de la región.
05/90	Junín, Satipo. El PCP-SL asesina en Puerto Ocopa a 10 colonos a quienes acusa de ser cabezas negras.
19/6/90	Junín, Satipo: El PCP-SL arrasa la comunidad nativa de Marankiari (zona alta de Satipo), las versiones sobre el número de víctimas son contradictorias, unos hablan de 30 a 40, otros de 70 a 80.
17/11/90	Junín, Satipo: El PCP-SL asesina en Puerto Ocopa a 5 dirigentes de la Central Asháninka de Río Tambo que organizaban la resistencia.
1990	Junín, Satipo: 76 profesores desaparecen en la selva durante 1990. Los docentes que prestaban servicios en la selva de Satipo fueron capturados por el PCP-SL. Según el Director de la USE-Satipo, muchos murieron y otros fueron ganados por PCP-SL.
12/1/92	Junín, Satipo: En violentos enfrentamientos entre EP y el PCP-SL mueren 8 y quedan varios heridos.
01/03/92	Entre Oxapampa y San Ramón, en los anexos de Lourdes y Nueva Italia, el PCP-SL asesina a 22 personas entre colonos y nativos.
22/4/92	Junín, Chanchamayo. Tarmatambo (La Merced) Enfrentamiento entre ronderos y subversivos, mueren 8 ronderos y 5 subversivos.
27/4/92	Junín, Satipo, Puerto Ocopa: El EP rescata de manos del PCP-SL 127 Asháninkas.
3/5/92	Pasco, Oxapampa, Villa Rica: Unos 400 subversivos del PCP-SL atacan el puesto policial. Mueren 3 policías, 1 soldado y 1 subversivo.
18/05/92	Junín, Satipo, Pichanaki: Unos 150 subversivos atacan al puesto policial de Pichanaki: 1 muerto y 3 heridos de los sinchis.
23/05/92	Pasco, Oxapampa, Chontabamba. Sediciosos acribillan al alcalde distrital, al teniente gobernador y al juez de paz de Chontabamba.
10/06/92	Pasco, Oxapampa-Villa Rica-Sanchiria: El EP da muerte a 20 subversivos del MRTA.
19/06/92	Junín, Satipo, Mazamari-Dos de Mayo: Subversivos toman el pueblo y dan muerte a 7 pobladores.
25/06/92	Satipo, Jauja, Muqui: Presuntos subversivos acribillan a Flavio Rojas, teniente gobernador, y a su hija.
18/6/93	Junín, Satipo: Rescatan a 50 asháninkas.
11/8/93	Junín, Satipo: 54 nativos asháninkas son asesinados a machetazos

	por presuntos senderistas.
18-19/8/93	Junín, Satipo: 69 pobladores entre colonos y nativos de Tsiriari son asesinados a machetazos. Los hechos son atribuidos por las fuerzas del orden al PCP-SL. Sin embargo, en los últimos años han sido frecuentes las versiones en el sentido de que los autores fueron efectivos del ejército, incluso algunos testigos han hecho declaraciones ante la Defensoría del Pueblo reforzando esta versión.
19/8/93	Junín, Chanchamayo, La Merced, Kivinaki: El PCP-SL mata a machetazos a 8 personas.
20/8/93	Satipo: Comunidades de Santa Isabel, Santa Rosa, Monte Rico, Jerusalén, San Isidro, Tahantinsuyo e Irriari. Unos 200 subversivos, distribuidos en tres grupos, llegaron a las comunidades referidas y atacaron a los pobladores. Los atacantes utilizaron a otros grupos de nativos para confundir el hecho. Mataron a un teniente gobernador, al coordinador de Panfar (Salud), a varios profesores, mutilaron las orejas a 14 niños de 5, 6, 7 y 10 años, los mismos que fueron internados en el Hospital de Satipo.
30/9/93	Junín, Chanchamayo. 3 miembros del EP fueron acribillados en la localidad de Quimiri Sur. Se indicó que en las filas de subversivos también hubo víctimas, pero no se precisó el número exacto.
3/11/93	Pasco, Oxapampa, Villa Rica: Presuntos subversivos atacan camión, matan soldado y un civil. Los soldados repelieron el ataque y provocaron 2 muertos y 4 heridos en las filas subversivas.
7/11/93	Junín, La Merced: En un enfrentamiento mueren dos presuntos subversivos del MRTA y un oficial PNP queda herido.
29/5/94	Junín, Chanchamayo: Enfrentamiento con el MRTA en San Juan Boca Tigre. El EP dio muerte a dos sediciosos no identificados.
06/07/94	Satipo: El PCP-SL mata alrededor de 70 nativos cautivos en Quenteroni (zona alta de la comunidad nativa de Samaniato, río Ene). Según refieren testigos, los asesinatos se cometieron porque no servían para la guerra: ancianos, enfermos, niños. Algunos dicen que fueron por lo menos 200.
14/7/94	Junín, Chanchamayo, La Merced: En una emboscada del MRTA dos policías son asesinados.
16/11/94	Pasco, Oxapampa, Puerto Bermúdez: Policía muere destrozado por una granada en un ataque terrorista
17/01/95	Junín, Satipo-Pichanaki, Sector Boca Tigre: En enfrentamiento con el EP mueren dos presuntos subversivos del MRTA.
16/03/95	Pasco, Oxapampa-La Florida: Ataque subversivo a la Base Contrasubversiva de La Florida: 3 soldados muertos, 1 Teniente muerto y 7 soldados heridos.
07/06/95	Junín, Satipo, Puerto Tambo: El EP dio muerte a dos varones y una mujer presuntos integrantes del PCP-SL.
27/07/95	Junín, Satipo, Pichanaki: 12 presuntos subversivos mueren en enfrentamiento con el EP.
24/1/96	Junín, Satipo, San Martín Pangoa: En enfrentamiento con los ronderos, el PCP-SL asesina a tres ronderos. En la refriega Mueren 5 presuntos senderistas.
28/11/99	Junín, Satipo, Alto Sanoven: Enfrentamiento entre EP y el PCP-SL deja como resultado 2 militares y 4 subversivos muertos.
8/12/99	Junín, Satipo, Pichanaki, Villa Asháninka: Emboscada subversiva deja un saldo de 2 muertos y 10 heridos del EP.
12/12/99	Junín, Satipo, Alto Sonaveni: Dos ronderos fueron heridos de bala en enfrentamiento con militantes de Sendero Rojo.

14/12/99	Junín, Satipo, Pichanaki, Ricardo Palma: Presuntos militantes del MRTA toman el pueblo de Ricardo Palma y despojaron de sus armas a los ronderos del pueblo.
----------	--

1.3. LA REGIÓN SUR ANDINO

1.31. Antecedentes y contexto regional

1.3.1.1. La realidad geográfica y socioeconómica

El amplio territorio de la sede del sur andino de la CVR, que reúne los departamentos de Apurímac, Cuzco y Puno, es un espacio de geografía variada. En primer lugar, podemos identificar los valles profundos emplazados por debajo de los 2 msnm, de clima caluroso y con abundancia de agua, como el valle de Pachachaca en Abancay, valles propicios para el cultivo de la caña de azúcar. Similares son los valles emplazados en las estribaciones orientales de la cordillera en la llamada «ceja de selva», como por ejemplo los valles de La Convención, Lares y Paucartambo, tierras de colonización, que desde tiempos remotos fueron destinados a la agricultura de la coca y luego también a caña de azúcar, té o café.

A una altitud mayor, entre los 3 mil y los 3 500 metros, se encuentra la llamada zona quechua, de clima templado y surcada por ríos que descienden rumbo a la selva. Estas fueron las cotas preferidas para el emplazamiento de los principales centros poblados. Aquí predominaron las medianas haciendas, rodeadas de comunidades y parcelas campesinas. Es el paisaje que se encuentra, por ejemplo, en el Cuzco, desde La Raya hasta Urubamba sobre las dos márgenes del río Vilcanota.

Aquel espacio del maíz contrasta con el altiplano alto andino, de clima frío y abundantes pastos naturales, en los que se realiza una ganadería extensiva, paisaje característico de gran parte del departamento de Puno. Junto al altiplano, pueden clasificarse las punas de las provincias de Quispicanchi, Canchis y Canas en el Cuzco o de Caylloma en Arequipa.

Con los contrastes geográficos y económicos, también existen fuertes contrastes culturales pues el sur andino se caracteriza por ser un territorio predominantemente indígena con una mayoría de quechua hablantes o aymara hablantes.

En resumen, podemos señalar como elementos definitorios del Sur Andino que se trata de una región de larga formación histórica con:

- predominancia de la población indígena quechua–aymara hablante.
- predominancia del sector agropecuario.
- diversidad geográfica, climática, socioeconómica, cultural y lingüística.

**PUNO 1981-1993 POBLACIÓN DE APURÍMAC, CUZCO Y
PUNO SEGÚN EL CENSO DE 1981 Y 1993**

	1981	1993	Crecimiento
Apurímac	323,346	381,997	18%
Cuzco	716,369	998,763	39%
Puno	701,026	1'079,849	54%

Fuente: INEI

El departamento de Apurímac muestra una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% al año. Junto con los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, registra la tasa de fertilidad más alta del Perú, superior al promedio nacional de 2.7%. El 62% de su población es rural y el 36.9% analfabeta, la tasa más alta del Perú. Asimismo, Apurímac es considerado el departamento más pobre del país según todos los indicadores registrados, con una mayoría poblacional bilingüe quechua–castellano. La capital del departamento, Abancay, que se encuentra sobre una explanada en la vertiente derecha del río Pachachaca, a 2 378 metros de altitud, tenía en 1993 una población de 58,221 habitantes, con una tasa de crecimiento del 7.4% al año, superada sólo por Puerto Maldonado. Entre 1981 y 1993, la ciudad creció en 27,134 habitantes, es decir 87%, debido a la migración desde el campo.

El río Apurímac y sus afluentes forman los diversos valles interandinos en donde se ubican las principales ciudades del departamento, sedes de las capitales de provincias: Tambobamba (Cotabambas), Chuquibamba (Grau), Antabamba (Antabamba) y Chalhuanca (Aymaraes). Las provincias de Abancay y Chincheros corresponden también a las zonas de valles interandinos.

También existen punas, como en el sur de las provincias de Antabamba y Aymaraes, y la que divide las provincias de Andahuaylas y Aymaraes.

La agricultura es de secano y la principal forma de propiedad es el minifundio, en el marco de comunidades campesinas. Los ingresos de la población campesina son los más bajos del Perú, lo cual produce una pobreza extrema cuya mayor expresión es la subalimentación generalizada. Cabe anotar, sin embargo, que las provincias de Chincheros, Andahuaylas y Abancay registran cifras de ingreso superiores a las de las provincias altas, básicamente ganaderas.

Por su parte, el departamento del Cuzco tenía 998,763 habitantes en 1993, de los cuales el 54.1% era población rural y 25.4% analfabeta. La capital del departamento, Cuzco, se encuentra en la parte alta de un valle interandino formado por el río Huatanay, a 3,399 metros de altitud y tenía, en 1993, 277,642 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2.8% anual. El departamento del Cuzco está enmarcado por tres grandes ríos amazónicos: Apurímac, Urubamba y Madre de Dios, dividiéndose en tres espacios diferenciados: las mesetas alto andinas, los valles interandinos y la selva alta. Si bien la agricultura y la ganadería son

predominantes, también existen las actividades minera, turística e industrial. La principal explotación minera es la del cobre en los Yacimientos de Tintaya, en la provincia de Espinar, que representaban en las décadas de 1980–90 el 12.89% de la producción nacional. Las actividades industriales estaban conformadas por fábricas de tejidos de lana, la fábrica de fertilizantes de Cachimayo, la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu y la artesanía. En cuanto al turismo, Cuzco es el primer centro turístico del Perú, con una infraestructura hotelera y de transporte en vías de desarrollo.

Por último, el departamento de Puno tenía 1'079,849 habitantes en 1993, con una tasa de crecimiento anual de 4.8%. 60.8% de esa población era rural (la proporción más alta del país) y 22.2% analfabeta. La capital del departamento, Puno, situada a orillas del Lago Titicaca, a 3,827 metros de altitud, tenía en 1993 una población de 99,231 habitantes. Sin embargo, la ciudad de Juliaca, con 166,468 habitantes según el censo de 1993 y situada a 3,824 metros de altitud al noroeste del Lago Titicaca, en pleno altiplano, es el centro comercial, eje económico del departamento y nudo de comunicaciones con Cuzco, Arequipa y Lima.

La configuración del territorio de Puno está determinada de una parte por la Hoya del Titicaca, cuyos ríos luego de recorrer las provincias de Moho, Huancané, San Antonio de Putina, Melgar, Azángaro, Chucuito y El Collao, desembocan en el lago Titicaca; y de otra parte por la Cuenca Hidrográfica del Amazonas, siendo los ríos de las provincias de Carabaya y Sandia las que desembocan en el río Madre de Dios. El territorio departamental se divide en dos regiones principales: la andina y la selva alta. La primera, está formada por la Meseta del Collao, territorio semiplano compartido entre Bolivia y Perú que bordea el Lago Titicaca, y la segunda, se encuentra al norte del departamento de Puno, en las provincias de Carabaya y Sandia.

La Meseta del Collao se ha constituido en el primer centro demográfico de los Andes, con cerca de un millón de habitantes. Agricultura, ganadería y minería son allí las principales actividades económicas, aunque debemos recordar que Puno es afectado cíclicamente por fuertes períodos de sequías, inundaciones o heladas.

En el Sur Andino, desde mediados de los años 40 y la primera mitad de la década del 50, se han producido importantes movimientos migratorios hacia Lima —el principal destino migratorio— la costa y las zonas de ceja de selva de los departamentos del Cuzco y Puno, y la selva baja del departamento de Madre de Dios. Para citar un caso, la población en los valles de La Convención y Lares creció de 27,243 habitantes en 1940 a 66,394 habitantes en 1961, es decir, 144% en veinte años. Según el censo de 1993, los nacidos en el departamento de Apurímac empadronados en un lugar diferente al de su nacimiento, suman 136,469 (69.2%) en Lima y Callao, 23,712 (12%) en Cuzco, 8,573 (4.4%) en Arequipa, 7,377 (3.7%) en Junín, 6,618 (3.4%) en Ica. Descontando el crecimiento demográfico de la ciudad de Abancay, el departamento de Apurímac es en términos generales un departamento «expulsor» de

población. Por su parte, la mayor proporción de emigrantes del Cuzco se encontraba, en 1993, en Lima y Callao (51.1%), Arequipa (24.5%), Madre de Dios (7.7%), Puno (3.8%), Apurímac (3.1%). En el departamento de Puno, los emigrantes empadronados en 1993 estaban concentrados en Arequipa (37.6%), Lima y Callao (26.3%), Tacna (19.1%) y Moquegua (6.4%).

1.3.1.2. Algunos referentes históricos

Desde el siglo XIX, el Sur Andino pasó por tres grandes momentos: el primero, entre 1885 y 1930, caracterizado por la expansión de las casas comerciales de la ciudad de Arequipa y de las haciendas de Cuzco y Puno, cuya base fue la explotación extensiva de los pastos, el ganado y los pastores del interior; el segundo, entre 1930 y 1945, se caracterizó por los intentos de modernización capitalista basados en la introducción de mejoras técnicas y en la proletarianización de los campesinos. Un tercer período, entre 1945 y 1980, es el de la urbanización creciente y la decadencia de la gran propiedad terrateniente y de la sociedad gamonal, que tiene su punto más álgido en la aplicación de la reforma agraria de 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.

1.3.1.2.1. El problema de la tierra

La historia del sur andino a lo largo del siglo XX puede ser resumida en buena medida en una gran contradicción que opone el latifundio a las comunidades campesinas. El negocio de lanas permitió que las haciendas comiencen a expandirse dando origen al latifundio de las sociedades ganaderas que se consolidan, especialmente la Sociedad Ganadera del Sur, modernizándose mediante la importación de ganado, la mejora de los métodos de esquila y la introducción de cercos. Pero el comercio de lanas no fue la única actividad económica en el sur andino. Junto con la expansión de las haciendas, centralmente en las provincias de Chumbivilcas, Canas, Canchis y Quispicanchi en el Cuzco y Azángaro, Chucuito y Carabaya en Puno, se iniciaron otras actividades económicas. En Puno se establecieron diversas empresas mineras de propiedad extranjera, como la Inca Petroleum, la Inca Rubber Mining Company, la Inambari Gold (Carabaya), la Inca Mining (Azángaro), y la Lampa Mining Company (Lampa). Asimismo, la explotación del caucho atrajo a diversas empresas que se establecieron en la selva de los departamentos de Puno y Madre de Dios, en la zona del Istmo de Fitzcarrald, que divide las vertientes hidrográficas del río Paucartambo y del río Madre de Dios.

Los movimientos campesinos se desarrollaron casi paralelamente con el incremento de las exportaciones laneras, en respuesta y resistencia a la expansión de las haciendas y la

explotación de los pastores. A principios del siglo XX se suceden una serie de revueltas en Cuzco y Puno, como las Azángaro (1911, 1912, 1913, 1915, 1917, 1920, 1922), Canas y Espinar (1921, 1923, 1930), Ccapna y Lauramarca (1925-1927), Anta (1930), entre otras. La movilización campesina más famosa fue la sublevación del Mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas, quién con el nombre de Rumi Maqui se levantó en armas en la provincia de Azángaro, en 1915.

La estructura social del agro antes de la reforma agraria de 1969, estuvo basada en una compleja combinación de sistemas y relaciones de trabajo, de tipo asalariado, servil, parcelario, además de múltiples formas mixtas. En 1961, los trabajadores del campo se clasificaban en un 60% como parcelarios (comuneros y pequeños propietarios independientes), 15% eran arrendatarios (aparceros, yanaconas y colonos), y 25% asalariados permanentes. La movilización campesina más importante se concentró en la provincia de La Convención, Cuzco, donde los campesinos organizados en sindicatos y dirigidos por Hugo Blanco bajo la consigna de «Tierra o Muerte», ocupan la mayor parte de los latifundios. Esta movilización campesina obligó a la Junta Militar a promulgar una Ley de Reforma Agraria que tenía como universo único de aplicación los Valles de La Convención y Lares.

Los conflictos que surgieron entre el campesinado y los terratenientes caracterizan por lo tanto este período, que muestra la incapacidad de los últimos para lograr los cambios a su favor ante las luchas campesinas por la tierra, que abarcaron los años 1948–1964. Cuando el gobierno militar dictó la ley de Reforma Agraria de 1969, sólo asestó el golpe final a este sistema de propiedad de la tierra.

1.3.1.2.2. La modernización urbana

El deterioro de las condiciones de vida en el campo, significó también la expulsión de importantes contingentes rurales, que comenzaron a migrar a las ciudades o a espacios de agricultura mercantil como el valle de La Convención, que amplía sus cultivos de café, té, cacao y coca. Las ciudades se convirtieron así en un importante polo de atracción con la ilusión de obtener mejores niveles de vida.

El inicio de la modernización urbana de la ciudad del Cuzco tiene un hito central, el 21 de mayo de 1950, cuando un terremoto de grado 7 en la escala de Mercalli destruyó la ciudad. La reconstrucción, que tomó casi una década, significó la demolición de innumerables casonas de origen colonial, dando posibilidades de ampliar las calles y abrir nuevas vías. Como consecuencia del terremoto y de la acción reconstructora, el Estado volcó sobre la ciudad y la región importantes recursos, creando en 1952 la Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cuzco, que administraría los fondos de reconstrucción. Es en ese proceso que se conforma

la actual ciudad del Cuzco como atractivo turístico, y que se construyen la Hidroeléctrica de Machu Picchu y la Fábrica de Fertilizantes de Cachimayo en 1965.

Es en estos años también que la Universidad San Antonio de Abad empieza a cobrar mayor importancia a raíz del interés por modernizarla. En 1950, la UNSAAC tenía 5 facultades, mientras que en 1977 reunía 22 Programas Académicos. Este renovado interés por la educación superior llevó a la paulatina masificación de la universidad: 988 estudiantes en 1950, 2 351 estudiantes en 1960, 4 312 estudiantes en 1965, 5 097 estudiantes en 1970, 8 492 estudiantes en 1976, 14 000 estudiantes en 1980. Según Tamayo Herrera, entre 1946 y 1958, en un largo período de 12 años, predominó el denominado Frente de Reforma Universitaria (FRU), dirigida por la juventud del Partido Aprista Peruano que tenía su baluarte principal en los alumnos procedentes de Apurímac. A partir de 1957, los independientes, social-cristianos y belaundistas constituyen el Frente Universitario Reformista Independiente (FURI), terciando entre apristas y comunistas, estos últimos agrupados en la FUR-CUC. El FURI logra ganar la Federación de Estudiantes entre 1959 y 1961. A partir de 1960, bajo el influjo de la revolución cubana, se fundó el FER (Frente Estudiantil Revolucionario), que agrupó en buena parte estudiantes puneños y obtuvo su primera victoria en 1962, predominando hasta fines de los años 70. Mientras el FRU representaba algún sector de la mesocracia anticomunista, el FURI era una extraña y efímera combinación de fuerzas políticas y sociales disímiles, que sólo se mantenía unida y vigorosa por el prestigio personal de sus líderes; por su parte, el FER se apoyaba en la pequeña burguesía radicalizada y en los hijos de los sectores populares emergentes, representantes de la masificación que avanzaba en la universidad.

Finalmente, hablar de la modernización de la ciudad del Cuzco es hablar del crecimiento del interés turístico, percibido a través de las estadísticas: en 1954, 6 903 turistas; 1964, 38 939 turistas; 1971, 55 482 turistas; 1975, 176 625 turistas; si bien a pesar del crecimiento paulatino de la industria turística y hotelera, en la ciudad del Cuzco persiste la pobreza de la mayoría de la población. Es común escuchar a los cuzqueños señalar que los beneficios del turismo se van a empresas de Lima o inversionistas extranjeros.

En Puno, el proceso de urbanización fue particularmente incidente en las ciudades de Puno y, sobre todo, Juliaca, que tenía 30,890 habitantes en 1960, 87,651 en 1981 y en el 2000 contaba con 214,058 habitantes. En Puno, la modernización urbana se aceleró, paradójicamente, debido a los desastres naturales en combinación perversa con períodos de fuertes sequías, otros de exceso de lluvias e inundaciones. Entre las décadas de 1950 y 1960 se produjo esta combinación de períodos de manera particularmente fuerte, con las sequías de 1955-56, 1957 y 1964, y las inundaciones de 1960, 1962 y 1963. En diciembre de 1961 se creó la Corporación de Fomento y Promoción Social y Económica de Puno (CORPUNO), organismo con autonomía administrativa que hasta 1972 organizó y planificó las inversiones

de fomento en el departamento, pero que sólo se reflejaron en la modernización urbana de la ciudad de Puno.

A este afán de autonomía y modernización, se sumó el anhelo de poder contar con una universidad propia, que pudiera competir con las universidades de Cuzco y Arequipa, a donde la mayoría de los jóvenes migraban para realizar sus estudios superiores. En 1961, se creó la Universidad Técnica del Altiplano (UTA), que a partir de 1972 pasó a denominarse Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Como todas las universidades, en los años 70 sufrió una masificación por el crecimiento de la demanda educativa, vista como vehículo de ascenso social, especialmente para los sectores mestizos o los hijos de campesinos.

A esta modernización de la capital del departamento, residencia de la vieja clase dominante, se contraponen el crecimiento de Juliaca, expresado en una particular forma de modernidad de los sectores provincianos vinculados al mundo campesino. Fue tal el crecimiento explosivo de Juliaca, que desde la década del 60 se convirtió en uno de los centros más importantes para el estudio de las transformaciones de la sociedad peruana de entonces, llamando la atención de investigadores como Bourricaud. Asimismo, desde la fundación de la fábrica de cemento de Caracoto en 1963, Juliaca se convirtió en el único centro productor de una materia prima esencial para el desarrollo del departamento. De esta manera, se constituyó una burguesía comercial compuesta por cholos e indios aculturados que desplazó a la antigua clase terrateniente del poder económico regional.

Por último, en Apurímac, la ciudad de Abancay también dio un salto espectacular, pues de 12,895 habitantes en 1961, llegó en 1999 a más de 70,000, convirtiéndose en la ciudad de mayor crecimiento relativo en el período intercensal 1981-1993.

1.3.1.2.3. Las guerrillas

En la historia del sur andino otro componente importante son las guerrillas desarrolladas entre 1961 y 1967, proyectos guerrilleros que buscaban dar continuidad al movimiento campesino que había alcanzado su auge. Un primer período de las guerrillas, entre 1961 y 1963, reúne las experiencias del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tuvieron como objetivo apoyar la movilización campesina de Chaupimayo, en los valles de La Convención y Lares de Cuzco, encabezada por el dirigente campesino Hugo Blanco Galdós, quien había llegado al Cuzco en 1960 instalándose como «arrendire» en la zona de Chaupimayo, en el Valle de La Convención. Desde allí desarrolló una importante actividad política de organización campesina que lo lleva a integrar la dirigencia de la Federación Departamental Campesina del Cuzco (FDCC). A fines de 1962, un grupo de 40 hombres, militantes del ELN dirigido por Héctor Béjar, intenta entrar clandestinamente al país a través de la frontera con Bolivia, para dar el apoyo que Hugo Blanco necesitaba. Un grupo de

avanzada compuesto por seis guerrilleros intenta ingresar a Puerto Maldonado para obtener información, enfrentándose a la policía, siendo la mayoría de sus integrantes capturados y el poeta Javier Heraud muerto.

El otro momento guerrillero, a principios de 1965, tiene su mayor acción en la emboscada contra un destacamento policial en la quebrada de Yahuarina, acción reivindicada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dirigido por Luis de la Puente Uceda. Pero, en octubre de ese mismo año, el Frente Pachacútec del Cuzco había sido prácticamente desarticulado y muerto Luis de la Puente Uceda. En diciembre, el Frente Túpac Amaru en la región central del país, es también aniquilado y sus principales dirigentes igualmente muertos. El Frente de Ayabaca, en Piura, rompe el cerco policial y se repliega hacia las ciudades. Así, en tan sólo 7 meses, la guerrilla es desarticulada. Igual suerte corrió un nuevo intento insurreccional del ELN, que en setiembre de 1965 había iniciado acciones en la provincia de La Mar, en Ayacucho.

Los movimientos guerrilleros en el Perú en la década de 1960 surgieron a raíz del problema agrario y campesino expresado en las movilizaciones campesinas antilatifundistas, especialmente las del sur andino. Las guerrillas de los años 60 no lograron convertirse en el brazo armado del movimiento campesino pues políticamente, eran bastante débiles, ni habían logrado comprender la complejidad de las áreas rurales y urbanas, ni contaban con un modelo de gobierno viable. En el plano militar, no pudieron enfrentar con éxito la ofensiva policial y de las fuerzas armadas y demostraron escasa capacidad de influencia en las poblaciones locales.

Con la irrupción del régimen militar el 3 de octubre de 1968, muchos consideraron que la lucha armada ya no era necesaria, puesto que el régimen oligárquico, el cual consideraban como la principal traba para el desarrollo del país, estaba siendo demolido por el proceso modernizador impulsado por las medidas y transformaciones del régimen militar. Con ello se cerró la etapa de las luchas guerrilleras en la década del sesenta.

1.3.1.2.4. La Reforma Agraria y las movilizaciones campesinas en el sur andino

Cuando Belaunde asumió la presidencia de la república en 1963, se comprometió a ejecutar una amplia y resuelta reforma agraria, pero la oposición APRA-UNO frenó sistemáticamente esta reforma logrando, mediante un estatuto de excepción, que la Ley No 15037 de 19 de mayo de 1964 no afecte los complejos agro-industriales azucareros. La ley parecía entonces apuntar hacia el terrateniente tradicional de la sierra. Al finalizar el gobierno de Belaunde el ritmo de afectación era muy lento, pues al 30 de setiembre de 1968 apenas 214 286.45 has. tenían trámites de expropiación terminados, pero sin financiamiento para terminar el proceso. En total, se beneficiaron 11 760 familias.

El 24 de junio de 1969, el gobierno de la Fuerza Armada promulgó la Ley de Reforma Agraria, que sí expropió los complejos agroindustriales, iniciando con ello un proceso de cambios radicales. La extensión máxima de las propiedades se estableció en 150 has. en la costa, 1 500 en las haciendas ganaderas, y de 15 a 55 has. en la sierra y ceja de selva. Se establecieron asimismo diferentes formas de propiedad cooperativa y asociativa, donde destacaban las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), formadas sobre la base de los complejos agroindustriales de la costa; las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), integradas por los trabajadores de los antiguos latifundios y comunidades dedicadas a la agricultura y la ganadería; los Grupos Campesinos, para beneficiar a asalariados; y las Comunidades Campesinas, reestructuradas para participar de los beneficios de la Ley de Reforma Agraria.

Durante 1972 y 1973 se produjeron tomas de haciendas que tuvieron como resultado la expropiación de algunos fundos. A diferencia de la costa norte, estas movilizaciones buscaban obtener del gobierno la afectación de tierras, rebasando los cauces legales de la reforma agraria, radicalizándola.

En 1974 se fundó la Confederación Nacional Agraria (CNA), que se dedicaría a la organización de ligas agrarias, compitiendo con las organizaciones de izquierda que reactivan la Confederación Campesina del Perú bajo la hegemonía de Vanguardia Revolucionaria (VR). Las bases de la CCP estaban compuestas mayoritariamente por campesinos no beneficiados por la reforma agraria, que utilizaron las tomas de tierras como mecanismo para obtener la afectación de las mismas, expandiendo la economía campesina. Es así que, a partir de 1973, la movilización campesina se desplaza hacia la sierra, donde el gobierno no había ejercido mayor presencia ni se había implementado significativamente la reforma agraria.

La CCP dirigió dos importantes movilizaciones entre 1973 y 1975, orientadas a la adjudicación de tierras a las comunidades campesinas mediante la toma de tierras previa a la negociación con el gobierno. La primera se produjo en el departamento de Piura, encabezada por Andrés Luna Vargas, entre 1973 y 1975. La segunda, encabezada por Lino Quintanilla y Julio César Mezzich, tuvo lugar en Andahuaylas, en donde la reforma agraria no había avanzado. Entre julio y setiembre de 1974 se producen tomas masivas de tierras, sumando miles de hectáreas afectadas. Como consecuencia de ello, el gobierno firma actas de compromiso que incluían el establecimiento de comités campesinos de adjudicación provisional.

Según las estadísticas, desde septiembre de 1969 hasta diciembre de 1976 fueron afectadas en Cuzco 1 442 052 hectáreas y expropiados 1 357 predios, en beneficio de 46 664 familias campesinas. Además 240 090 hectáreas fueron recuperadas por las comunidades mediante acciones ante el Fuero Agrario. En Cuzco, 2 SAIS, 59 CAPs, 47 empresas comunales

y 144 grupos campesinos se unieron a las 13 cooperativas de servicios existentes en los valles de La Convención y Lares desde antes de 1968.

En resumen, entre 1962 y 1977 la reforma agraria benefició al 23% de los campesinos de la región del Cuzco, de los cuales 11% fueron calificados como feudatarios puros y 12% como comuneros y feudatarios simultáneos, el restante 77%, las comunidades campesinas fundamentalmente, quedaron simplemente al margen de la entrega de tierras. Los campesinos comuneros iniciaron entonces la toma de tierras pertenecientes a las empresas asociativas de las cuales, en teoría, eran socios, como es el caso de la Cooperativa Antapampa, invadida en enero de 1977 y liquidada en 1980.

Los datos de la Reforma Agraria en Puno muestran con la misma claridad que el proyecto del gobierno militar apuntaba a desarrollar las grandes empresas expropiadas como unidades sin fragmentar, marginando a los comuneros y las comunidades:

Puno. Porcentaje de tierras poseídas según tipo de organización

Puno				
Individual		777	71 346	4%
CAP	14	6 417	486 639	25%
CC	77	11 314	47 413	2%
SAIS	23	12 877	1 004 937	52%
Empresas propiedad social social	5	736	221 877	11%
GC	39	1 011	105 691	5%
	158	33 132	1 937 903	100%

Como vemos, más del 60% de la tierra quedó en manos de grandes empresas, sobre todo SAIS, por ello, a pesar de que la estructura tradicional desapareció violentamente en el campo puneño y la clase terrateniente como clase social casi se diluyó social y políticamente, no se resolvió la contradicción principal entre gran propiedad y comunidades campesinas. La gran propiedad terrateniente fue reemplazada por las grandes empresas asociativas. Se produjo una nueva concentración de la propiedad de la tierra: en 1969 había 950 grandes propietarios y 1,000 propietarios medianos, que poseían en total casi 3'000,000 has.; para 1980, 100 empresas reformadas poseían más de 1'800,000 has.

Entre 1968 y 1978 se transfirió el 48% de la superficie total de uso agropecuario a alrededor del 20% de la población rural. El 80% restante, los campesinos comuneros, habitantes de las 705 parcialidades y comunidades de Puno, con una población aproximada de 511,490 habitantes, quedó al margen de la reforma agraria.

1.3.1.2.5. La transición democrática (1977-1980)

Las elecciones para la Asamblea Constituyente del 4 de junio de 1978 fueron ganadas por el APRA y en ellas Hugo Blanco, con un poco más de medio millón de votos, fue uno de los candidatos más votados, gracias al campesinado cuzqueño, mientras que en Puno Róger Cáceres, representante del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, fue el séptimo candidato con mayor votación. Importante representante de la burguesía comercial de la ciudad de Juliaca en el departamento de Puno, Cáceres era líder del FRENATRACA, un partido de origen regional que había sido fundado en la década de los años sesenta, cuando un sector de la Democracia Cristiana decidió formar un partido propio. El nuevo partido estaba liderado por los hermanos Néstor, Róger y Luis Cáceres Velásquez, que habían insurgido en la coyuntura de las sequías de los años 50, cuando a través del Frente Sindical Campesino de Puno, que llegó a contar con 1,184 sindicatos campesinos que demandaban la reforma agraria, canalizaron las demandas rurales surgidas de los desastres naturales, vinculándolas con los programas de emergencia del gobierno. En general, en el Sur Andino, salvo el caso del FRENATRACA, no han existido partidos políticos de carácter regional.

Entre los partidos políticos que tuvieron una presencia constante estuvieron el PAP, el PC, AP y la DC. El Partido Aprista Peruano nunca había logrado penetrar profundamente la sierra sur como lo había hecho en el «sólido norte», más bien representaba a los sectores medios emergentes que buscaban espacios políticos propios, debido al cerrado mundo de los notables de provincias. El Partido Comunista había logrado cierta presencia en el sur, sobre todo en el Cuzco, luego de su legalización bajo el segundo gobierno de Manuel Prado. Llegó a tener influencia en el movimiento sindical y campesino, creándose el mito del «Cuzco Rojo» que tan sólo duraría una década. En los años 60 se vería desplazado por otras fuerzas de izquierda, sobre todo maoístas.

A inicios de 1980 comenzaron las negociaciones para la conformación de un frente político electoral de izquierda en perspectiva a las elecciones de mayo. Las fuerzas políticas más comprometidas fueron el FOCEP por su alta votación, el PC por su fuerza sindical, y la UDP por su presencia en el movimiento campesino. A ellos habría que sumar a los maoístas, quienes no habiendo participado en las elecciones a la Asamblea Constituyente «descubrieron» su importancia como «espacio de lucha política revolucionaria». Dicha alianza, denominada Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI), fracasó y estalló en pedazos. En total, la izquierda presentó 5 listas, dos más que en 1978.

Las elecciones de 1980 dieron una clara victoria de AP, que superó ampliamente el 36% requerido y fueron el marco, en un remoto pueblo ayacuchano, Chuschi, para la primera acción violenta de PCP-SL. En el sur andino, los tres diputados elegidos por Apurímac pertenecían a Acción Popular, mientras que en Cuzco siete de los ocho diputados eran de ese

partido y uno del Partido Aprista. En Puno, cuatro de los ocho diputados electos pertenecían al Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA), uno de los cuales era Pedro Cáceres Velásquez, mientras su hermano Róger Cáceres fue elegido senador por el FRENATRACA. Era clara la victoria de AP en el Sur Andino donde, salvo el caso de Puno por la existencia de un partido regional, había logrado la mayoría en los departamentos de Apurímac, Cuzco y Madre de Dios.

1.3.2. Zonificación de la violencia

1.3.2.1. Zona I: Puno

El proceso del conflicto armado interno en el norte del departamento de Puno, región predominantemente quechua, está vinculado a la crisis del sistema asociativo creado por la reforma agraria y a la lucha por la reestructuración democrática de la propiedad de la tierra, en cuyo conflicto se vieron involucrados diversos actores políticos y sociales (PCP–PCP-SL, las Fuerzas Armadas y Policiales, la Iglesia Sur Andina, las organizaciones campesinas, el gobierno, las empresas asociativas y los partidos políticos).

La característica más importante, entonces, que la hace diferenciable de otras zonas es el entrecruzamiento del proceso del conflicto armado interno con el viejo conflicto por la tierra, la presencia de los rezagos del poder terrateniente, y la desigualdad social y étnica. Otra característica es, a diferencia del caso del Cuzco, que en esta región los centros de poder se encuentran fragmentados: el centro político en la ciudad de Puno, el centro comercial en la ciudad de Juliaca y el centro económico en las provincias productoras de lana (Melgar, Azángaro y Huancané), cada una con características sociales y culturales propias, y en constante competencia entre sí.

La presencia del PCP–PCP-SL en algunos gremios sindicales y populares también fue importante. Asimismo, estas ciudades también se constituyeron en fuentes de aprovisionamiento y apoyo a las actividades subversivas en otras regiones del departamento. En el sur del departamento de Puno (provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo), se iniciaron las actividades subversivas. La región tiene una fuerte presencia de comunidades campesinas, con una población campesina predominantemente aymara. A diferencia de las provincias del norte, la presencia de empresas asociativas producto de la reforma agraria del general Velasco no fue significativa.

El PCP–PCP-SL no consiguió establecerse sólidamente en la región, al parecer, por su incapacidad de lograr la simpatía y apoyo de una población campesina aymara, diferente culturalmente con las poblaciones quechuas del norte. El MRTA tuvo, en todo caso, mayor

presencia en la región por los contactos establecidos con partidos políticos de la izquierda boliviana.

La selva alta de Puno (Carabaya y Sandia) es una Región poco conocida, el proceso del conflicto armado interno fue reducido, como en el departamento de Madre de Dios. La presencia de los grupos subversivos se dio de forma discontinuada en el territorio y en el tiempo. La última se habría producido cuando el MRTA habría intentado organizar un nuevo frente guerrillero a inicios de los años 90, pero fue rápidamente desarticulado. La presencia de las fuerzas contrasubversivas fue corta, pero contundente.

1.3.2.2. Zona II: Cuzco

Se distingue primero lo que los cuzqueños nombran como provincias altas (Canas, Canchis, parte de Quispicanchi, Chumbivilcas y Espinar). La dinámica del conflicto armado interno en las provincias altas estuvo entrecruzada con los conflictos producto de la lucha por la tierra y el enfrentamiento de las fuerzas subversivas con las organizaciones campesinas y de la Iglesia del Sur Andino. Las fuerzas contrasubversivas (Fuerzas Policiales, Fuerzas Armadas y Comités de Autodefensa) tuvieron una presencia importante, aunque no intensa. Con características particulares y de menor intensidad, esta zona se acerca a la dinámica del proceso que se vivió en las provincias colindantes del departamento de Puno, con las cuales las provincias altas del Cuzco tienen una estrecha relación económica, política y social. La militarización de estas provincias se produjo antes que en otras zonas del Cuzco, teniendo su concreción a principios de la década de los 90, justamente cuando las fuerzas contrasubversivas del departamento de Apurímac comenzaron a incursionar en estas provincias.

El proceso del conflicto armado interno en la ciudad del Cuzco y las provincias aledañas nos remite a una dinámica del conflicto armado interno urbana (sabotaje, atentados, asesinatos selectivos), de aprovisionamiento y apoyo al accionar de las fuerzas subversivas en las otras regiones del departamento, y de lucha política al interior de las instituciones que componen la sociedad civil (obreros, campesinos, estudiantes, pobladores), cuya expresión más clara fue la lucha por el control de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, donde las diversas fuerzas subversivas (PCP-PCP-SL, MRTA, Puka Llacta) intentaron controlar sus gremios. Las fuerzas contrasubversivas cumplieron un papel represivo más bien selectivo, mediatizada por encontrarse en zonas mayoritariamente urbanas, muy diferentes a las zonas predominantemente rurales.

En la selva de La Convención (La Convención, zonas de Calca, de Paucartambo y de Quispicanchi), el proceso del conflicto armado interno se caracteriza por desarrollarse en las zonas más alejadas de la ciudad del Cuzco, centro político, social y económico del departamento, en donde hubo poco eco y hasta desinterés por los hechos sangrientos. Es una

zona que se vio envuelta en el proceso del conflicto armado interno al extender PCP-SL su accionar en el río Apurímac desde el departamento de Ayacucho, estableciendo bases de apoyo que los aprovisionaron de recursos y lugares de refugio ante el avance de las fuerzas contrasubversivas, las cuales también incursionaron en la provincia pese a no hallarse declarado en estado de emergencia. Posteriormente y de manera efímera, a inicios de la década de los 90, el MRTA tuvo presencia en las zonas del Alto Urubamba, Calca y Paucartambo, pero fue rápidamente derrotado.

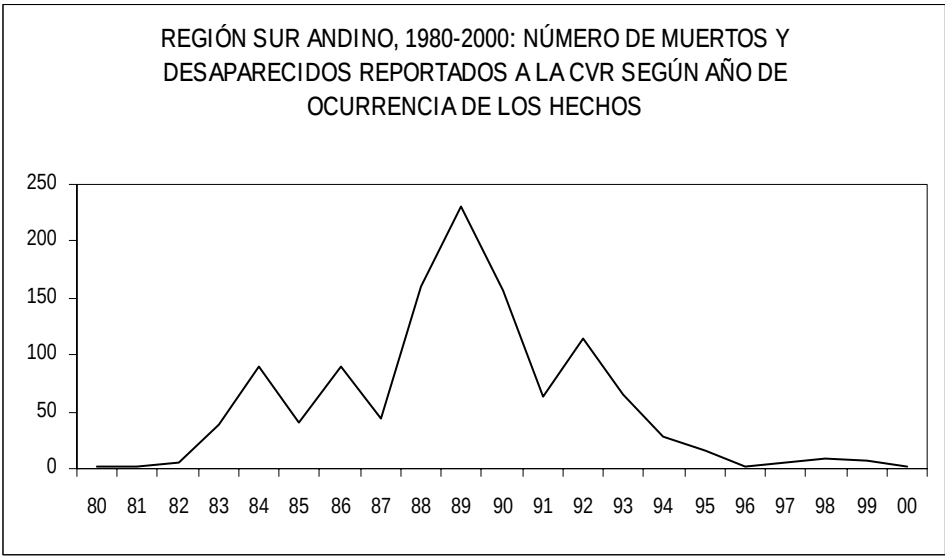
1.3.2.3. Zona III: Apurímac

Esta zona se caracteriza por una temprana extensión del conflicto armado interno desde las provincias del departamento del Ayacucho y la provincia de Andahuaylas, al noroeste del departamento de Apurímac. En cierta forma, la dinámica del conflicto armado interno en esta provincia fue una extensión de la que se daba en la sierra sur central (departamentos de Huancavelica y Ayacucho), y luego se expandió al resto del departamento de Apurímac, especialmente sus provincias altas colindantes con las provincias altas cuzqueñas.

1.3.3. Periodización del conflicto armado interno

REGIÓN SUR ANDINO 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN ZONAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

ZONAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	1,388	6	1	9	7	13	33	131	120	260	254	163	115	139	71	31	10	3	4	9	7	2
ZONA I	441	-	-	1	1	6	10	42	10	4	88	77	34	91	48	14	6	1	2	4	1	1
ZONA II	134	-	1	-	-	1	1	17	3	30	17	30	9	7	9	3	-	-	-	1	5	-
ZONA III	813	6	-	8	6	6	22	72	107	226	149	56	72	41	14	14	4	2	2	4	1	1



1.3.5.1. El inicio de la violencia: 1980-1983

Durante este período, son escasos los atentados y actos de sabotaje, y se registran los primeros 2 muertos en Cuzco en 1981. Debemos resaltar que en Apurímac, durante este período, el proceso del conflicto armado interno se concentra en la provincia de Andahuaylas, que limita con el departamento de Ayacucho, en el ámbito del Comité Regional principal del PCP-PCP-SL, compuesto además, por los departamentos de Huancavelica y Ayacucho (*Ver Zona IV, Historia Regional de la Región Ayacucho*). La provincia de Andahuaylas, debido al acrecentamiento del accionar del PCP-PCP-SL, es declarada el 6 de agosto de 1982 como zona de emergencia. Asimismo, el 30 de diciembre del mismo año, se crea la provincia de Chincheros, dividiendo la antigua provincia de Andahuaylas.

En Cuzco, caja de resonancia de las acciones subversivas, se trata de un período de acciones de propaganda y de atentados con explosivos contra diversas instituciones públicas y privadas, y sabotaje a las líneas del tren del sur, además de actos de hostigamiento, como es el ataque al cuartel 27 de Noviembre de la ciudad del Cuzco, ocurrido el 24 de enero de 1981. También la presencia del PCP-PCP-SL comienza a hacerse patente en la Universidad Nacional San Antonio Abad, que registra un atentado en el local de la Federación de Estudiantes en julio de 1983.

Otra provincia que se vio inicialmente afectada fue Canchis, principalmente su capital Sicuani, donde PCP-SL atacó el cuartel de la Guardia Civil, y dañó la vía férrea y la Municipalidad, entre enero y mayo de 1981. El 26 de mayo de ese mismo año es detenido Edmundo Cox Beuzeville junto con otras personas, acusadas de ser militantes del PCP-PCP-SL. Cox realizaba actividades de organización y propaganda en las provincias altas del Cuzco y el norte del departamento de Puno.

Al parecer, de estos años data la presencia del PCP-SL en los distritos de La Convención colindantes con el departamento de Ayacucho. Allí habrían iniciado la tarea de organizar bases de apoyo a la Guerra Popular, estableciéndose en diversas comunidades y poblados.

En enero de 1983 se producen las primeras incursiones y asesinatos en las comunidades campesinas del departamento del Cuzco, como sucede en la provincia de Acomayo, y en el distrito de Sucuytambo, en la provincia de Espinar, en mayo del mismo año. Las provincias altas comienzan a convertirse en una zona importante del conflicto interno con el ataque al Instituto de Investigación Técnica de Camélidos en La Raya, en el límite con Puno, el 27 de julio de 1983; y el ataque al puesto policial de la Guardia Civil en Tinta, el 12 de noviembre de 1983, ambas en la provincia de Canchis.

En el departamento de Puno, pese a la presencia del PCP-SL desde fines de la década de 1970, los dos primeros años se caracterizaron por acciones iniciales en el sur,

específicamente en Juli, en la provincia de Chucuito, zona aymara del departamento. Se trata, sobre todo, de atentados con dinamita contra instituciones y representantes del Estado, pero muy especialmente contra dependencias del Obispado de Juli, como el IER Palermo y la sede misma del Obispado, en 1981. Sin embargo, para el año 82, el centro de las acciones se traPCP-SLada al norte del departamento, a las provincias de Melgar, Azángaro y, en mucho menor medida, Huancané, es decir, a la zona quechua del departamento. En esas zonas comienza a actuar una columna del PCP-PCP-SL desde la segunda mitad del año. Las ciudades de Puno y Juliaca también se convierten en centros de actividad subversiva.

1.3.5.2. La expansión de la violencia: 1984-1988

En 1984 comienza la línea ascendente de muertos por el conflicto armado interno en el Sur andino, resaltando que en Apurímac el proceso del conflicto armado interno, que continúa siendo más intenso en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, llega a las provincias altas con las primeras masacres de campesinos en Toraya, Lucre y Colcabamba, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, entre febrero y abril de 1986.

La situación en la provincia de La Convención se agudiza en este período. Las fuerzas contrasubversivas comienzan a organizar los primeros Comités de Autodefensa, para incursionar en las comunidades y caseríos más alejados de la provincia, agudizando el conflicto interno. En mayo de 1984, los poblados de Villa Virgen y de Pomabamba son tomados por el PCP-PCP-SL. El 24 de noviembre de ese mismo año se realiza un enfrentamiento con la policía de Vilcabamba. Paralelamente, ese mismo día, se realiza un operativo combinado de policías, militares y comités de autodefensa, al parecer provenientes de la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho, que desaparece la comunidad de Lucmahuayco, asesinando a sus pobladores y traPCP-SLadando a los sobrevivientes a la ciudad de Quillabamba, para ser procesados como terroristas, acusados de ser una «base de apoyo» del PCP-PCP-SL.

Durante este período, se reducen las acciones subversivas en las provincias del norte del departamento de Puno, que se traPCP-SLada sobre todo a las ciudades de Puno y Juliaca. En todo caso, en Azángaro se concentran actividades de PCP-SL en el campo. En la primera zona, se trata sobre todo de atentados contra instituciones públicas y los representantes del gobierno de Acción Popular. En alguna medida continúan los ataques contra la Iglesia, como es el atentado contra la radio Onda Azul, perteneciente al Obispado de Puno.

El accionar del PCP-SL en Puno, Lampa, San Román y Azángaro apunta a preparar las condiciones para que una columna armada comience sus operaciones hacia septiembre de 1984, robando dinamita, dinamitando puentes, derribando torres de alta tensión, y asaltando algunas SAIS como Quenamari, en Azángaro. Para el año 85, la concentración de acciones de

violencia cambia de sentido principalmente en las provincias de Azángaro y Melgar, y después en las provincias de Puno y San Román. La zona norte comenzaba así, a cobrar la importancia que tendría a lo largo de la década de los 80.

Este período se cierra con la declaratoria por parte del PCP-PCP-SL, en agosto de 1985, de las provincias de Melgar, Azángaro y Huancané como «zonas rojas», aunque la realidad era bastante diferente. De hecho, si bien a inicios de 1986 el PCP-PCP-SL logró el retiro de los puestos policiales en la provincia de Azángaro, la situación del conflicto armado interno comenzó a entrecruzarse con la movilización campesina, sobre todo cuando comenzaron las tomas de tierras pertenecientes a las SAIS, lideradas por la Federación Departamental del Campesinos de Puno, mientras que el PCP-PCP-SL las destruyó. Ello provoca que las fuerzas contrasubversivas decidan iniciar una ofensiva en las provincias de Azángaro y Melgar, reforzando la presencia de las fuerzas policiales con grupos especializados de Sinchis y de Unidades Tácticas Contrasubversivas (UTAs), las cuales se instalan al interior de las SAIS de Melgar, Azángaro y Carabaya. Estos grupos contra subversivos reprimen a la movilización campesina acusándola de ser instigada por el PCP-SL. Ello agudizaría el espiral de violencia con el incremento de las detenciones arbitrarias, tortura y muerte de campesinos. Es también el momento en que aparecen diversos grupos paramilitares al interior de las SAIS y el Comando Democrático Rodrigo Franco, que tuvo en el departamento de Puno uno de sus lugares de acción más importantes. El objetivo de estos grupos no sólo fue el PCP-PCP-SL, sino también las organizaciones campesinas, la Iglesia Sur Andina, las ONG's y la izquierda legal.

En Apurímac, los enfrentamientos, ataques a comunidades y el asesinato de campesinos se incrementan y expanden a las demás provincias del departamento. Con la victoria del Partido Aprista Peruano en las elecciones generales y municipales, las autoridades de este partido se convierten en el centro de los ataques del PCP-PCP-SL, como fue el caso del asesinato del prefecto de Abancay, Víctor Urbiola Valer, el 9 de agosto de 1987. El número de campesinos muertos aumenta sustantivamente, así como las tomas e intervenciones en las comunidades, los ataques a los puestos policiales (como el de Chuquibambilla, capital de la provincia de Grau, el 12 de setiembre de 1987), y el sabotaje de puentes y carreteras de las provincias de Aymaraes, Cotabambas, Grau y, en menor grado, Antabamba y Abancay. Resalta el ataque al Penal de San Ildefonso, en la ciudad de Abancay, el 7 de noviembre de 1988, en un intento de repetir el ataque a la cárcel de Ayacucho de 1982.

En la ciudad del Cuzco continúan los atentados contra locales públicos y privados, la toma de emisoras de radio y los daños a las líneas férreas del tren del sur. Se reiteran también los ataques contra los puestos policiales y militares, como el de Paucartambo (8 de junio 1987) y contra el cuartel del Cuzco (29 de agosto de 1987). En las provincias colindantes, salvo Acomayo, que sufrió la muerte de campesinos en Usnuyoc (28 de abril de 1986) y el ataque al

puesto policial de Pomacanchis (7 de febrero de 1987), y Urubamba, que sufrió el ataque al puesto policial de la Guardia Civil (7 de mayo de 1987), la zona está relativamente tranquila. En las provincias altas, la situación era diferente, produciéndose en Chumbivilcas una primera masacre de campesinos, por la Guardia Civil, el 27 de enero de 1987, además del asesinato, por la misma policía, de profesores y alumnos en Quiñota y Santo Tomás. Hacia principios de 1987, también hace su aparición el MRTA en el departamento de Puno, con acciones de propaganda y sabotaje en Puno y Juliaca.

El PCP-SL sufre un duro golpe con la caída de su columna principal en abril de 1987, en la provincia de Azángaro, mientras que la movilización campesina tiende a decaer y los grupos contra subversivos empiezan a controlar la situación pero en base a fuertes acciones y medidas represivas, sobre todo, contra el campesinado.

1.3.5.3 Las estrategias *contrasubversivas*: 1989-1992

La CVR reporta que entre los años 1988 y 1989 se alcanzó el pico más alto de los 20 años del conflicto armado interno en el sur andino, con 160 y 230 muertos, respectivamente. Este período está marcado por el inicio de una nueva estrategia por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales, quienes establecen Bases Contrasubversivas y conforman Comités de Autodefensa en las comunidades campesinas de casi todas las provincias del departamento de Apurímac. Ello produce constantes enfrentamientos entre los Comités y el PCP-PCP-SL, siendo uno de los más cruentos el de la comunidad de San Francisco (Abancay) el 28 de febrero de 1989, donde 30 ronderos fueron muertos; y entre el Ejército y el PCP-PCP-SL, en Tambobamba (Cotabambas), el 6 de mayo de 1989.

También el PCP-PCP-SL dirige sus ataques a las ONG's de cooperación internacional, asesinando a tres cooperantes (dos franceses y un peruano) del CICDA, en el distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 6 de diciembre de 1988.

En la ciudad del Cuzco, la lucha por el control de la Universidad San Antonio Abad se acrecienta, y en abril de 1989, el PCP-PCP-SL toma las instalaciones de la Ciudad Universitaria y las embandera, mientras siguen los atentados en la ciudad.

En las provincias altas continúan los enfrentamientos, pero el hecho que marca el hito de este período es la masacre en la provincia de Chumbivilcas, entre el 20 y el 30 de abril de 1990, donde se hace manifiesta una nueva estrategia contrasubversiva por parte del Ejército Peruano, actuando como un ejército de ocupación, con el resultado de 14 campesinos muertos, varias mujeres violadas, viviendas robadas y dos desaparecidos.

El accionar del PCP-PCP-SL continúa, teniendo un momento clave en el asesinato del alcalde provincial de Puno y dirigente del PAP, Luis Dueñas en junio de 1988. Para 1989, el PCP-SL logró rearticular una nueva columna que realizó en Melgar y Azángaro una serie de

operaciones, destacando la destrucción del IER Waqrani, que pertenecía a la Iglesia Católica y que contaba con el apoyo del Partido Unificado Mariateguista.

Aunque los muertos disminuyen, los actos de violencia vuelven a incrementarse, de 45 en 1990 a 90 en 1992, mientras que, inversamente, el número de muertos, a pesar de un descenso el año 1991 para luego alcanzar un pico el año 1992, con 115 muertos y desaparecidos reportados a la CVR, es descendente hacia mediados de la década del noventa. En Apurímac, la situación política cambia durante este período en dos momentos. En el primero, iniciado en realidad en 1990, se establece una alianza entre las Fuerzas Armadas y el campesinado, que lleva a la expansión de los denominados Comités de Autodefensa y al desplazamiento del PCP-PCP-SL de diversas zonas del departamento. Es el caso, por ejemplo, del enfrentamiento entre los «ronderos» de Santa Rosa y el PCP-PCP-SL, en la provincia de Grau, el 30 de julio de 1991. El segundo, entre abril (autogolpe) y setiembre (captura de Abimael Guzmán) de 1992, donde las fuerzas del PCP-PCP-SL tienen que enfrentar el nuevo marco de la lucha contrasubversiva derivado de la nueva legislación antiterrorista y resolver los conflictos internos de su partido, sobre la línea a seguir luego de la captura del Presidente Gonzalo.

El año comienza en Cuzco con la constitución del gobierno en la región Inka. El centro de las acciones de los grupos subversivos serán la Universidad del Cuzco y los barrios urbano marginales donde se realizan acciones de propaganda, con las primeras víctimas por parte del PCP-SL: el catedrático de la Facultad de Economía, Iván Pérez, militante del Partido Comunista Peruano (12 de julio de 1991), así como atentados contra los representantes del gobierno regional (14 de junio). Igualmente, las operaciones del PCP-PCP-SL en las provincias altas se agudiza, decretándose en julio de 1991, por primera vez, el estado de emergencia en estas provincias.

En este período el MRTA hace su aparición en el departamento del Cuzco atacando el 3 de abril de 1991 el puesto policial de Ollantaytambo en la provincia de Urubamba. El centro de operaciones del MRTA será la zona del Alto Urubamba, principalmente la provincia de La Convención, atacando los puestos policiales de esa zona.

Frente a ello, las fuerzas policiales y militares inician una contraofensiva entre diciembre de 1991 y enero de 1992, que desarticula a la columna del MRTA.

En Puno, este período comienza con el establecimiento del estado de emergencia para casi todas las provincias del norte del departamento: Melgar, Azángaro, Huancané, Carabaya y Sandia. Es también el período de inicio de las acciones del MRTA en la ceja de selva de la provincia de Sandia. Para entonces, todas las provincias del norte del departamento se encuentran marcadas por el accionar de los diversos actores de la guerra. En Azángaro y Melgar se consolidan los Comités de Autodefensa, que comienzan a enfrentarse al PCP-PCP-SL. Pero también la violencia vuelve a aparecer en el sur del departamento, en las tres

provincias que antes conformaban la provincia de Chucuito (Chucuito, El Collao y Yunguyo). Para 1991, el MRTA ha logrado establecer su presencia en las provincias de Sandia y Moho, con las tomas de San Juan del Oro y de Moho. También en este período se han conformado los gobiernos de las regiones Inka y José Carlos Mariátegui, contra quienes el PCP-PCP-SL dirige su accionar, siendo el asesinato de Porfirio Suni un ejemplo de ello.

1.35.4. La pacificación: 1993-2000

Los actos de violencia inician un proceso descendente, hasta llegar a 49 en 1994. En cuanto al número de muertos, también continúa el proceso descendente siendo 29 los muertos reportados en 1994.

Los conflictos internos del PCP-PCP-SL se agudizan. A pesar de ello, sus operaciones no se detienen hasta que el denominado «Acuerdo de Paz» de diciembre de 1993, divide al PCP entre los seguidores de Abimael Guzmán y los integrantes de Sendero Rojo, encabezados por el camarada «Feliciano».

Al parecer, en Apurímac gana el «acuerdismo», y entre diciembre de 1993 y julio de 1994, se producen diversas capturas de mandos senderistas, mientras que integrantes de los comités de apoyo del PCP-PCP-SL se acogen a la Ley de Arrepentimiento.

En el departamento de Cuzco, después de la captura de Abimael Guzmán, el MRTA toma la posta en las acciones subversivas, en los primeros meses del año 93, con acciones de propaganda, atentados con explosivos y asaltos. Sin embargo, el PCP-PCP-SL realiza una de sus acciones más espectaculares, tratando de emular otras similares realizadas en Ayacucho y Apurímac: el ataque al penal de Q'eqoro, de donde logran escapar 31 subversivos entre militantes del PCP-PCP-SL y el MRTA, el 28 de marzo de 1993.

Pese a algunas otras acciones violentas, en agosto de 1994 los militantes del PCP-PCP-SL comienzan a acogerse a la Ley de Arrepentimiento, aunque en un intento desesperado, el 27 de octubre del mismo año, intentan atacar nuevamente el penal de Q'eqoro para liberar a sus militantes detenidos, pero son rechazados por la policía.

Mientras tanto, en las provincias altas, el accionar conjunto de las fuerzas contrasubversivas y los comités de autodefensa comienzan a tener éxitos. Fuerzas combinadas de la policía y el ejército toman el pueblo de Salko y capturan 10 senderistas (6 de agosto de 1993); asimismo en otras localidades capturan 12 senderistas que son presentados a la prensa en Cuzco el día 6 de octubre, entre las que se encontraba Martha Cayetano Torres, mando político del PCP-PCP-SL en la provincia de San Román, en el departamento de Puno. En septiembre, son capturados varios militantes senderistas en la provincia de Chumbivilcas. En la zona de la Convención, las acciones subversivas parecen desaparecer. En abril de 1993, caen los rezagos de la última columna del MRTA de la zona del Alto Urubamba, en el sector de

Selva Colorado, en el departamento de Madre de Dios. Los 10 subversivos sobrevivientes son trasladados a la ciudad del Cuzco, donde son presentados ante la prensa el día 18. En esa zona se establece definitivamente el control de los comités de autodefensa.

En el departamento de Puno, luego del autogolpe del 5 de abril, se agudiza la represión pero esta vez de manera selectiva. Son continuas las denuncias de detenciones arbitrarias, tortura y hasta desapariciones por parte de las fuerzas contrasubversivas. Sin embargo, pese a la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992, el accionar del PCP-PCP-SL continúa, pero comienza a sufrir fuertes reveses políticos y militares. Sus cuadros y militantes comienzan a ser capturados y presentados ante la prensa, junto con militantes del MRTA cuyo destacamento cae en Sandia.

Con el denominado Acuerdo de Paz el accionar militar del PCP-PCP-SL se reduce drásticamente y da paso a su concepción de «la lucha por una solución política a los problemas derivados de la guerra», concentrándose en mejorar las condiciones de los presos en los penales del país, así como lograr una amnistía política tanto para los presos como los requisitoriados por delitos de terrorismo. El penal de Yanamayo se convierte, por lo tanto, en un nuevo centro de conflicto, aunque no de confrontación abierta y directa. En cuanto al MRTA, sólo se conocen acciones de propaganda en la ciudad de Abancay entre 1997 y 1998, pero su presencia no fue significativa.

1.3.4. Cronología Sur Andino

9/11/1980	El 9 de noviembre el PCP-PCP-SL realiza su primer ataque en Cuzco, en el pueblo de Tinta, provincia de Canchis, contra el Núcleo Educativo Comunal.
15/1/1981	El 15 de enero, atacan la casa del alcalde de IU Jaime Ardiles en Puno.
26/1/1981	El 26 de enero, atacan la Corte Superior de Justicia de Puno.
26/4/1981	Es denunciado en la ciudad de Sicuani Edmundo Cox Beuzeville como responsable de 27 atentados.
Agosto 1982	Atentado contra la Corte Superior de Justicia de Puno y la antena de la radio Onda Azul, pertenecientes a la Iglesia Católica en Puno.
18/8/ 1982	El PCP-PCP-SL ataca los puestos de la Guardia Civil de Orurillo y Umachiri, en la provincia de Melgar, Puno.
24/8/1982	El PCP-PCP-SL ataca la ERPS Oxani perteneciente a la SAIS Sollocota, en la provincia de Azángaro. En un operativo policial después de estas acciones, son detenidos 5 personas y la camarada «Juana».
Mar-abr 1983	En Puno, los objetivos del PCP-PCP-SL son los locales del partido de gobierno y de instituciones públicas: el 13 de marzo ataca el local de Cooperación Popular; el 23 de abril el local de Acción Popular, ambos en Puno; y el 28 de abril el local del Banco Agrario en Juliaca.
29/1/1985	40 personas atacan el puesto de la GC en Orurillo, en la provincia de Melgar.
11-15/4/1985	El PCP-PCP-SL realiza diversas acciones en la provincia de Azángaro, entre Azángaro, Arapa y San Juan de Salinas. En este último lugar, el día 12 asesinan al alcalde de Acción Popular.
10/1/1986	Nuevo ataque del PCP-PCP-SL contra las SAIS San José e Illari, matando a 5 personas.

13/1/1986	Muere Adán Castillo Vega, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Altiplano, cuando estalló la dinamita que llevaba para realizar un atentado en la ciudad de Puno.
Mayo 1986	El PCP-PCP-SL inicia una ofensiva en Puno que comienza el día 5 con un atentado contra el Secretario General del PAP en Ayaviri; la quema del fundo Cayacayani, perteneciente a la SAIS San José; la quema de los fundos Charquismo y San Luis de la SAIS Illari en Azángaro.
17/6/1986	El PCP-PCP-SL asesina 7 personas llevadas al fundo Wakauta de la ERPS Kunurama
28/6/1986	Un regidor y un dirigente son asesinados en Layo, provincia de Canas, Cuzco.
7/7/1986	El PCP-SL tiene su primer enfrentamiento con el ejército en Apurímac, en Soccos, y el 11 de julio realiza su primer ataque a un puesto policial, en Chucapunte, ambos en la provincia de Aymaraes, Apurímac.
27/7/1986	Es asesinado el teniente gobernador de Cuzco, Hermógenes Huelca.
15/12/1986	El PCP-PCP-SL ataca la mina San Rafael en el distrito de Antauta, asesina a 3 ingenieros y roba cajas de dinamita.
20/12/1986	En Chaccocunca, en Azángaro, mueren 10 senderistas en un enfrentamiento.
30/1/1987	PCP-SL ataca diversos puestos policiales y comunidades en la provincia de Canas.
5/2/1987	En Cuzco, 60 elementos del PCP-PCP-SL atacaron el puesto policial de Checca y Quehue, robando municiones, dos armas e incendiando el local. Los guardias civiles los persiguen y cerca de Checca hay un enfrentamiento en el que mueren Sonia Lino Ojeda y Janeth Vizcarra, integrantes del PCP-PCP-SL, y el guardia Adolfo Flores queda gravemente herido.
8/4/1987	En Puno, el PCP-PCP-SL asesina al alcalde de San Juan de Salinas, Zenobio Huarzaya de IU.
13/4/1987	Hace su aparición el MRTA-MIR en un atentado contra el local del Banco de Crédito de Puno.
19/4/1987	Durante las tomas de tierras detienen a 300 campesinos en Ayaviri y Azángaro (12 mil familias ocupan unas cien mil hectáreas en seis provincias: Azángaro, Melgar, Carabaya, Huancané, Lampa y Puno).
25/5/87	Ataque a puesto policial de Pisac, Cuzco, resultando muerto el GC Jaime Quispe.
Junio 1987	En las provincias altas de Cuzco, el PCP-PCP-SL inicia una serie de ataques contra diversos puestos policiales. Subversivos y abigeos actúan en los distritos de Chamac y Livitaca, Chumbivilcas, Cuzco.
2/7/1988	Es asesinada la estudiante de enfermería Magnolia Zuñiga en Cuzco.
7/7/1988	Es asesinado el estudiante y dirigente del Partido Comunista de la UNSAAC, Walter Huayllani.
9/8/1987	El PCP-PCP-SL asesina al prefecto aprista Víctor Urbiola en Abancay, Apurímac.
5/5/1988	El PCP-PCP-SL incursiona en la SAIS Picotani, en Crucero, provincia de Sandia, Puno, y asesina a 6 GC y al juez de paz. El profesor y dirigente campesino, Porfirio Suni Quispe, es detenido y torturado acusado de participar en el atentado.
26/6/1988	El 26 de junio es asesinado el alcalde de San Juan de Salinas, Puno, Jaime Centeno Jove.
30/6/1988	Es asesinado el Alcalde Provincial de Puno, Luis Dueñas Peralta, del PAP.
13/6/1988	La provincia de Cotabambas, Apurímac, es declarada en zona de emergencia por 30 días. Se trata de la primera provincia del sur andino, además de Andahuaylas, en ser declarada en emergencia.
5/12/1988	El PCP-PCP-SL asesina en el distrito de Haquira (Cotabambas), a dos cooperantes franceses y un peruano del Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA) y dos personas más. Durante el mes siguiente, PCP-SL asesinó en las zonas altas de Apurímac a cerca de 50 personas entre tenientes gobernadores, dirigentes campesinos y abigeos.
12/4/1989	Se comienzan a organizar Comités de Autodefensa en las diversas provincias del departamento de Apurímac

13-25/5/1989	La columna principal del PCP-PCP-SL inicia una campaña en las provincias de Azángaro y Melgar. En suma, en 16 días el PCP-PCP-SL recorrió 700 kilómetros y asesinó a 7 personas.
25/4/1990	En Ccachahui, Ranrapata, Chumbivilcas, 21 militares vestidos como campesinos asesinan a 10 comuneros.
10/7/1990	El PCP-PCP-SL ataca la SAIS Sollocota, en Azángaro, y asesina a 7 campesinos. Ese mismo día, durante un ataque al mercado de Azángaro, mueren 5 personas.
14/08/90	Un muerto y 18 heridos por explosión de coche bomba. en la calle Maruri, Cuzco. Al día siguiente hallan muerto al dueño del vehículo, el ex sargento de la policía Melitón Candia Guzmán.
29/09/90	Detenidos el día 24 por la policía del lugar, los cadáveres del bachiller en Derecho Marcelino Valencia Álvaro, asesor jurídico de la Liga Agraria, y el estudiante Zacarías Pasca son hallados el día 29 en Santo Tomás, Chumbivilcas.
3/5/1991	El MRTA toma el pueblo de San Juan del Oro, en la provincia de Sandia, y realiza un mitin. Cuatro días después el MRTA se enfrenta a una patrulla policial.
14/5/1991	El PCP-PCP-SL asesina en Juliaca a Porfirio Suni, dirigente campesino y representante de IU en el gobierno de la Región José Carlos Mariátegui.
6/9/1991	El PCP-PCP-SL ataca el pueblo de Pucará, provincia de Lampa, matando a 5 policías y quemando la municipalidad, el local de Entel Perú y 20 casas.
4/5/1991	El PCP-PCP-SL asesina tres policías en ataque al puesto policial de Ollantaytambo, Cuzco.
12/7/1991	El PCP-PCP-SL asesina al catedrático de la Facultad de Economía, Iván Pérez, dirigente del PCP Unidad y asesor del alcalde provincial del Cuzco, Daniel Estrada.
30/1/1993	Enfrentamiento entre el ejército y el PCP-PCP-SL en el distrito de Phara, muriendo 8 senderistas, un oficial y dos soldados. Son capturados 9 senderistas más en la denominada Base de Apoyo de la comunidad de Túpac Amaru.
Abr/Jun 1993	En Puno, el 28 de abril, son presentados 17 militantes del PCP-PCP-SL y 2 del MRTA capturados; el 12 de mayo 9 militantes del PCP-SL y 7 del MRTA y el 2 de junio 8 militantes del PCP-SL y 4 del MRTA
20/10/1993	Entrega de escopetas y municiones a nueve Comités de Autodefensa de la provincia de Paucartambo.
17/10/1996	Agentes de inteligencia, presuntamente del Grupo Colina, atentan contra filial de Red Global en Puno y Radio Samoa.

1.3.5. Zona I: Puno

El conflicto armado interno en Puno, concentrado notoriamente en las provincias de Azángaro y Melgar, al norte del departamento, tiene como elemento central la pugna por la tierra. La mayoría de las 1,103 haciendas expropiadas por la reforma agraria fueron convertidas en 44 empresas asociativas, beneficiando a ex-trabajadores de las haciendas y sólo a 67 comunidades, mientras que más del 80% de campesinos comuneros quedaron al margen. Así, la conflictiva relación entre comunidades campesinas quechuas y aimaras y las ex haciendas, convertidas en empresas asociativas, por el control de tierras en las áreas ganaderas del norte del departamento de Puno, se reeditó, pero ésta vez en el contexto de la guerra interna.

A diferencia de lo sucedido en otras regiones del país, en Puno el PCP-SL se enfrentó a diversos actores activos, como las organizaciones campesinas, los partidos políticos, la Iglesia

Católica y sus organismos de apoyo directo a la sociedad rural, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que impidieron que el proyecto político senderista prosperara tal como se lo imaginaron sus dirigentes. La historia de la violencia en Puno nos recuerda igualmente que tampoco se implantó en esta región la estrategia anti-subversiva de tierra arrasada utilizada en otras regiones del país, precisamente por el grado de movilización de los comuneros y del frente pro campesino comunero. Esta situación hace de Puno un espacio diferente en el marco de la guerra interna pues a pesar de su intención explícita de implantarse en la región, PCP-SL es derrotado por la movilización de la sociedad rural puneña y las organizaciones regionales.

1.3.5.1. Datos generales

Como vimos en el capítulo introductorio del sur andino, el mercado de lanas definió el escenario puneño desde el S. XIX, especialmente en las provincias norteñas. Los grandes propietarios dominaron la vida pública, y los conflictos en torno a la tierra se sucedieron uno tras otro. El ejercicio del poder terrateniente fue casi total hasta mediados del siglo XX, aunque es necesario recordar la diferencia entre la zona norte —las provincias de Azángaro y Melgar, fundamentalmente— y las áreas que estaban bajo control de las parcialidades vinculadas a la producción de fibra de alpaca.

La «gran sequía» de 1956-1961 en el altiplano puneño generó una emigración significativa hacia espacios urbanos como Arequipa, ciudad en la cual, entre mediados de la década del 50 y mediados de los 60, el porcentaje de puneños en las barriadas se incrementa del 12.9% al 39.08%, hasta llegar al 41.41% en 1971. Por su parte, la población de la ciudad de Puno creció entre 1940 y 1961, de 15 999 a 24 459, mientras que Juliaca «explotó» de 7,002 a 20,351 habitantes en el mismo período.

En la década de 1960 las tensiones por la propiedad de la tierra involucraban a hacendados, colonos y comuneros, alimentando discursos de redistribución de la tierra y democratización inéditos a través de líderes y partidos regionales —caceristas, comunistas, belaundistas— por el control de las federaciones campesinas, en claro enfrentamiento con los partidos tradicionales. Estos actores se entrecruzan por un lado con las rivalidades interprovinciales para acceder a los escasos fondos gubernamentales, y por otro lado con los conflictos entre la elite mestiza y los grupos de cholos y forasteros emergentes.

Puno 1981-1993 Población según provincia

Provincia	1981	1993	% Crec.
Puno	177,358	201,205	13%
Azángaro	130,576	138,998	6%
Melgar	61,562	72,005	17%

San Roman	102,988	168,534	64%
Carabaya	33,090	46,777	41%
Huancane	109,113	80,317	
Lampa	38,979	43,461	
Sandia	47,360	50,042	
El Collao		75,456	
Chucuito		93,001	
Moho		33,320	
SA de Putina		28,475	
Yunguyo		48,258	
TOTAL	701,026	1'079,849	

Fuente: INEI

La creación de nuevas provincias distorsiona el balance demográfico de las provincias originarias, como sucede con Huancané, que cede parte de su territorio a S.A. de Putina. Pero no queda ninguna duda que el mayor crecimiento de San Román gira en torno a la pujante ciudad de Juliaca, que en contraste con el Puno terrateniente, se consolidó como espacio mercantil, manteniendo influencia en la región que circunda al lago Titicaca y la zona fronteriza. Los hermanos Cáceres y el llamado «cacerismo» son la expresión política de esta transformación de Juliaca, evidencia según algunos estudiosos de un nuevo poder cholo, recambio de los agotados poderes regionales. La persistencia legislativa de los representantes «caceristas» rediseñó la distribución del poder local y atrajo al Estado a la región. CORPUNO, el aeropuerto, la Universidad son los símbolos de aquella época. Entre el activismo sindical y el caciquismo, el «cacerismo» fue la punta de lanza de un ciclo de cambios proseguido bajo el régimen reformista militar instalado en 1968.

Con la Reforma Agraria, se crearon empresas asociativas Cooperativa Agraria de Producción, Empresa Rural de Propiedad Social (ERPS) y Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS), fusionando las tierras más productivas de varias haciendas bajo una administración centralizada, encargada a un gerente contratado fiscalizado por el Ministerio de Agricultura; mientras en las tierras menos productivas, el ganado *huaccho* podía pastar sin ninguna restricción. En el caso de las SAIS, las comunidades colindantes se incorporarían como socias, beneficiándose de sus servicios y de su mayor capacidad técnica.

En el caso de Puno, el 89% de las tierras y pastos naturales del departamento quedaba en manos del sector asociativo en tanto que, las sobre pobladas comunidades campesinas, recibían tan solo el 2.5%.

Número de familias propietarias de tierras por tipo de propietario

Puno	N°	Familias	Has.	%
Total Sup.			7'238,244	

Individual		777	71,346	4%
CAP	14	6,417	486,639	25%
CC	77	11,314	47,413	2%
SAIS	23	12,877	1'004,937	52%
Empresas propiedad social	5	736	221,877	11%
GC	39	1,011	105,691	5%
Total	158	33,132	1'937,903	100%

Se explica así la ira campesina contra las empresas asociativas, vistas cada vez más como cotos privados de sus gerentes, nombrados en un inicio como administradores temporales de entidades cuyo destino final, de un modo u otro, era convertirse en «empresas campesinas».

A inicios de los 80, las empresas asociativas surgidas de la Reforma Agraria, se habían convertido, al igual que lo sucedido en los departamentos de Junín o La Libertad, en el blanco de la frustración de amplios sectores excluidos de la reforma agraria. Su reestructuración sería la gran «bandera de lucha» de las federaciones que, durante la década de 1980, cobran fuerza en el altiplano.

1.3.5.1.1. Las tomas de tierras y la reestructuración de las SAIS

Fundada el 17 de diciembre del 1978 en San Juan de Salinas, Azángaro, la Federación Departamental de Campesinos de Puno, asumió la responsabilidad de conducir el proceso de «reestructuración democrática» de la tierra en el ámbito del departamento de Puno. Si bien en el segundo congreso de la FDCP, realizado en setiembre de 1983, la sequía y la escasez de tierras dominaron el temario y en los documentos se mantiene la idea de una «reestructuración concertada», ya las tomas de tierras «estuvieron a la orden del día».

En agosto de 1985, la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar, FUCAM, decide impulsar la «desafiliación de fundos» con el fin de propiciar la quiebra de la unidad de las empresas. Se esperaba que, una vez individualizados, sus feudatarios se integrarían a las comunidades vecinas para constituirse, como una unidad, en beneficiarios de la reestructuración.

El frente pro-campesino comunero se fue articulando con el respaldo de la iglesia católica del sur andino, los organismos y grupos vinculados a ella, y organizaciones políticas nacionales como el Partido Unificado Mariateguista e Izquierda Unida, de tal manera que a mediados de los 80 el movimiento puneño por la tierra comenzó a radicalizarse. El PUM, fundado en 1984 a partir del proceso de unidad de la llamada nueva izquierda, se proponía adaptar el marxismo-leninismo a la realidad peruana y su propuesta para Puno pasaba por la reestructuración democrática de la tierra, la construcción de la hidroeléctrica de San Gabán y la regionalización del país.

En vísperas de las elecciones generales de 1985, Puno parecía ejemplificar el tipo de democratización «desde abajo,» bajo la conducción de la izquierda y con el concurso de las «organizaciones populares» y los sectores populares de la región, en circunstancias en que el

Partido Aprista gobernante aparecía como sólida opción de gobierno del país y que la «guerra popular» de PCP-SL entraba ya a su quinto año de existencia.

En diciembre de 1985 comenzaron las tomas de tierras desencadenando una de las más importantes movilizaciones campesinas en la historia de Puno hasta provocar una nueva reforma agraria. En efecto, el 13 de diciembre de 1985, cerca de 4,000 campesinos de los distritos de Santa Rosa y Macarí, dirigidos por la Federación Unitaria de Campesinos de Melgar inician, pacíficamente, la recuperación de 10,000 hectáreas de la Empresa Rural de Propiedad Social «Kunurana».

Poco más de un mes después, el 7 de febrero de 1986, el Presidente de la República, Alan García, en un mensaje a la nación, anuncia la «reestructuración y redimensionamiento de las empresas asociativas»: Días después se publican los Decretos supremos 005 y 006 que señalan las acciones a tomar en Puno. A raíz de estos decretos supremos se nombró, en Lima, una comisión de reestructuración cuyos integrantes se tomaron todo el año 1986 para negociar con los directivos de las empresas asociativas.

Por otra parte, desde el gobierno, el promocionado plan del Trapecio Andino recién fue explicado en febrero de 1986 pero apenas incluía propuestas para coordinar y armonizar los heterogéneos proyectos, programas y acciones que una serie de entidades estatales desarrollaban en ese ámbito territorial.

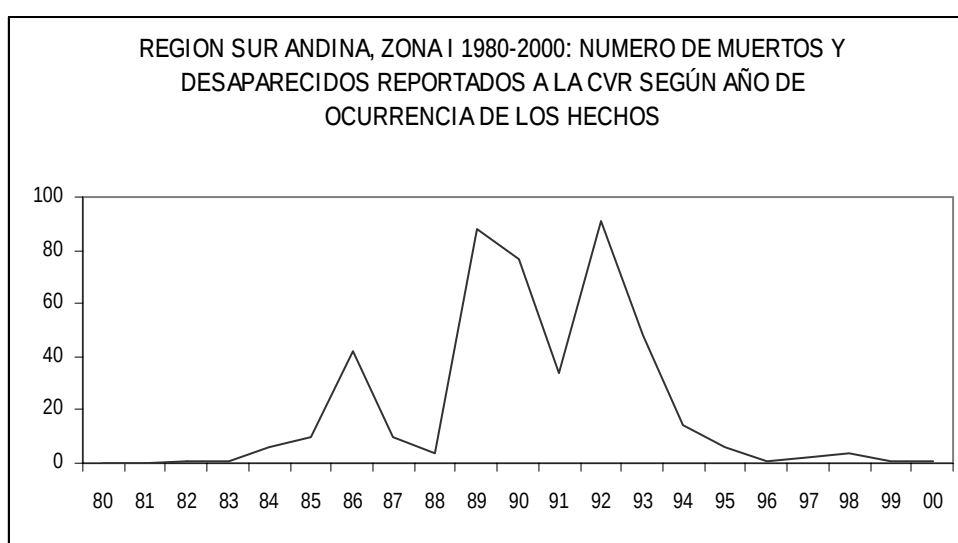
Frente a la lentitud de los funcionarios apristas, la Federación Departamental de Campesinos de Puno, entre enero y junio de 1987, decidió «recuperar tierras» en todas las provincias del departamento. El 19 de mayo de aquel año, 172 comunidades campesinas recuperan más de 360,000 hectáreas, siendo ésta una de las jornadas campesinas más importantes en ese período. El presidente Alan García Pérez, por su parte, decide concluir con el proceso de reestructuración de la propiedad de la tierra e inicia la titulación de las tierras que quedaron en las empresas asociativas.

1.3.5.2. Historia de la violencia

Como dijimos, la historia de la violencia en el departamento de Puno tiene su epicentro en Azángaro y Melgar, las dos provincias con mayor concentración de ex-haciendas convertidas en SAIS, como señalamos anteriormente.

REGIÓN SUR ANDINO, ZONA I, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	441	-	-	1	1	6	10	42	10	4	88	77	34	91	48	14	6	1	2	4	1	1
PUNO	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	1	-	-	1
AZÁNGARO	256	-	-	1	1	6	8	25	6	4	62	31	22	54	24	5	2	-	1	4	-	-
CARABAYA	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-
CHUCUITO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUANCANÉ	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMPA	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	7	1	1	-	-	-	-	-
MELGAR	97	-	-	-	-	-	1	15	3	-	16	32	4	7	11	7	-	1	-	-	-	-
SAN ANTONIO DE PUTINA	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN ROMÁN	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-
SANDIA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-



1.3.5.2.1. Formación del frente pro comunero y llegada del PCP-SL: 1980-1988

En el contexto descrito anteriormente, irrumpe el PCP-SL con el objetivo de liderar la movilización campesina en Puno. Para ellos, los distintos modelos de empresas asociativas creadas por la reforma agraria, eran expresión de una sociedad semi feudal que debía ser derruida. Según narró Osmán Morote Barrionuevo, dirigente del PCP-SL recluido en el penal de Yanamayo en una entrevista reciente, el Comité Sub zonal de Puno era la segunda prioridad en los planes senderistas después del Comité Regional Principal de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica; por ello el PCP-SL destaca al altiplano puneño cuadros importantes desde fines de los 70, centrando su trabajo en los centros educativos, la organización magisterial y algunas comunidades campesinas.

El Comité Regional del sur del PCP-SL comprendía los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, Cuzco y Puno y para ejecutar sus planes fueron destacados a la región dirigentes como Antonio Díaz Martínez, Maria Pantoja, Margie Clavo Peralta, Edmundo

Cox Beuzeville, Moisés Límaco Huayascachi, Eduardo Taype. Al interior del Comité Regional del sur del PCP-SL, se priorizó inicialmente el departamento de Cuzco como el comité zonal más importante. Sin embargo, las evaluaciones posteriores identificaron al departamento de Puno como el Comité Zonal prioritario dentro del Comité Regional del sur.

La lucha senderista fue concebida como guerra campesina que actuaría bajo los principios de «la tierra para quien la trabaja» y «la tierra se conquista con las armas». Los senderistas se precian de haber «repartido» 300 000 mil hectáreas entre los campesinos más pobres de la sierra de la Libertad, Cajamarca y Huancavelica. Según ellos, lograron «movilizar» a 150 000 campesinos. Por otro lado critican, aún hoy, «las tomas de tierras en Andahuaylas, dirigidas por Vanguardia Revolucionaria convirtieron una zona revolucionaria en una zona con mayor presencia del Estado» (Entrevista O. Morote).

En el recuento hecho por el líder máximo del PCP-SL, su partido aparece como el principal impulsador del movimiento por la reestructuración:

Una de las cuestiones importantes que hemos hecho ha sido el impulsar un movimiento de invasión de tierras, muy importante, en el departamento de La Libertad, ahí han sido repartidas más de 300 000 has. y se han movilizado 160 000 campesinos; viendo el conjunto de movilizaciones que hemos tenido ésa es la que más masa ha logrado mover; este movimiento se impulsó para socavar los planes del Apra y también lo aplicamos en Puno, y somos nosotros los que hemos empezado las invasiones de tierras también en Puno mientras el PUM discutía con el Apra sobre qué y cómo hacer, ésa es la pura y simple realidad. (A. Guzmán, entrevista del siglo)

Los senderistas que actuaban en la llamada Fuerza Principal del comité subzonal de Puno, eran de origen arequipeño, limeño, ayacuchano, apurimeño y cusqueño, que intentaron formar cuadros o mandos quechuas y aymaras. Según la información disponible, los primeros militantes del PCP-SL en Puno fueron reclutados entre los maestros, el Frente de Organizaciones Populares, los Institutos Superiores Pedagógicos y el Frente Estudiantil Revolucionario en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En ese período destaca el trabajo político de Edmundo Cox Beuzeville en el lejano distrito quechua de San Anton, en Azángaro, donde ejercía como maestro de escuela.

El asentamiento territorial inicial del PCP-SL en Puno fue en la zona aymara de Juli, donde constituyeron las tres primeras células senderistas en las comunidades campesinas de Tisnachuro, Tutacani y Tacaya. En términos organizativos, el PCP-SL saltó de solitarios militantes a pequeñas células captando, además de profesores y estudiantes, a algunos campesinos aimaras. Sin embargo, con el correr de los años, Juli perdió importancia para los planes senderistas, imposibilitado de ampliar su presencia entre la población aymara. Ana Pino cree que «si PCP-SL hubiese convencido a los aymaras Puno hubiese sido el segundo Ayacucho».

El 23 de octubre de 1980 el PCP-SL realiza un atentado, utilizando dinamita, en la ciudad fronteriza de Desaguadero, una de sus primeras acciones militares. El 15 de agosto de 1981, cerca

de 40 senderistas enmascarados saquean la granja de Palermo, donde funcionaba el Instituto de Educación Rural (IER), a cinco kilómetros de la ciudad de Juli. Un mes después, el sábado 19 de septiembre, estallan petardos de dinamita en la puerta principal del Obispado de la Prelatura de Juli. Sólo un año después, el 18 de agosto de 1982, una columna del PCP-SL irrumpe en la zona quechua del departamento de Puno, atacando la comisaría de la Guardia Civil del Distrito de Umachiri, provincia de Melgar. Así, Juli en Aymara y Umachiri en la zona quechua, es la zona de inicio de la guerra senderista en Puno.

La lucha por la tierra desencadenó, desde diciembre de 1985, una aguda competencia por la conducción del movimiento campesino entre el PCP-SL y el frente pro campesino comunero. Frente a la negativa de los dirigentes de la FUCAM para enrolarse, el PCP-SL arrojó tres bombas al local de la FUCAM. Según Ricardo Vega, fue solamente después del decreto de reestructuración en marzo de 1986 que comenzó a escucharse en Azángaro de incursiones impulsadas por el PCP-SL contra las empresas agrarias, comenzando con el ataque a la central Huacauta en junio de 1986. Según Vega, «habían entrado a competir con nosotros en el afán de aparecer ellos como quienes repartían la tierra». Así, las columnas senderistas empezaron a desplazarse activamente desde 1986 y pretendieron dirigir las movilizaciones campesinas por la tierra.

Las experiencias de Apurímac del 74, las «tomas de tierra» de Vanguardia ¿a qué sirvieron?, a que se montara un sistema corporativo, desarrollando las formas asociativas, ¿eso era o no lo que quería Velasco? En consecuencia acoplarse al sistema, evolucionar la feudalidad cuando el problema es arrasarla, destruirla, eso es lo que el PUM hasta hoy no entiende, ni va a entender. (A. Guzmán, «Entrevista del. Siglo»)

En consecuencia, en medio de las movilizaciones campesinas por la tierra se fueron constituyendo alianzas explícitas o implícitas. De un lado se ubicaba el frente pro campesino comunero, del otro lado el PCP-SL y ciertos funcionarios de las empresas asociativas de origen ideológico maoísta. Estos últimos, consideraban al IER Waqrani, como principal asesor de la FUCAM, y de la FDCP, por lo tanto según ellos había que destruir este cerebro «revisionista». Para alcanzar sus objetivos los senderistas tenían, según Morote, que «arrancar a las masas de la influencia política del revisionismo», que en Puno estaba identificado, principalmente, con el frente pro campesino comunero conformado por una diversidad de organismos y equipos de la Iglesia Católica, la organización campesina, el Partido Unificado Mariateguista e Izquierda Unida. Con esa lógica, el PCP-SL se acercó a distintos dirigentes campesinos, previamente seleccionados por ser «los más avanzados entre las masas» (Entrevista a interno senderista de Yanamayo), para invitarlos a enrolarse a la «guerra popular». Sin embargo, la mayoría de los dirigentes, señalaron que no compartían métodos violentos y de terror para alcanzar la reestructuración de la tierra.

El PCP-SL buscó convencer al campesinado de que las tierras se recuperan con las armas y no con decretos supremos, utilizando para ello métodos sistemáticos de terror, tal como lo grafica Benito Gutiérrez: «PCP-SL destruyó empresas asociativas como por ejemplo, Huacauta, Illari, etc.

Estas empresas fueron quemadas y saqueadas. Su ganado fue repartido pero, como para no creerlo, varios medianos propietarios se beneficiaron.» (Entrevista Benito Gutiérrez Ccama, Puno)

1986, como ya se ha explicado, fue un punto de quiebre en la intensidad de la «guerra popular» en el norte del altiplano. Sistemáticamente, las principales empresas del área son objeto de «arrasamientos». Al incendio de las instalaciones prosigue el saqueo y el robo de ganado. Son grupos pequeños los que habitualmente actúan. En otras ocasiones, como en los asaltos a la SAIS Macaya en marzo o a la ERPS Kunurana en junio, decenas de pobladores se animan a participar. En 1986 se registra la mayor cantidad de atentados y actos terroristas en todo el ciclo de violencia en Puno, aunque los asesinatos sean aún reducidos. La toma de pueblos y el ajusticiamiento de autoridades complementa el «arrasamiento» empresarial, como por ejemplo la toma de Chupa, que Guzmán exhibirá en su documento de agosto de 1986 como prueba de la primacía de su partido en el altiplano. Veinte senderistas ingresaron a esa localidad el 16 de febrero de 1986, capturando a las principales autoridades del pueblo, mientras las tiendas principales son saqueadas y los víveres que almacenan repartidos. Comienza luego el «juicio popular». El gobernador es asesinado, y la población ruega a los senderistas que se detengan, a lo cual acceden, pero todas las autoridades de Chupa renunciarán poco después.

Hacia fines de octubre de 1986, San Juan de Salinas también es un pueblo sin autoridades ni representantes. En cabildo abierto, los vecinos piden a Zenobio Huarsaya, líder local y uno de los fundadores de la FDCP, lanzar su postulación a la alcaldía, a la cual accede en elecciones. El 8 de abril de 1987 siete hombres y dos mujeres lo arrastran de su domicilio hasta la plaza mientras su mujer y sus hijos miran desesperados: «Lo arrodillaron ante 200 personas, preguntaron si lo mataban y la gente clamó que no lo hicieran pidiendo que le den tiempo para que renunciara a lo que los terroristas indicaron que estaban en guerra y que de todas maneras Huarsaya trabajaba para el gobierno. La gente estaba enardecida.» (Guardia Civil del Perú, Jefatura Provincial de San Román, (Atestado 21-SSE-J))

Los campesinos apoyan a la policía que busca a los asesinos, y días después la columna armada senderista es diezmada cerca de San Juan de Salinas, mientras algunos de sus sobrevivientes huyen hacia el Cuzco.

1.3.5.2.2. La ofensiva senderista bate el campo: 1988-1990

Al cabo de casi un año de silencio tras el aniquilamiento de una columna en Cututuni, Azángaro, el PCP-SL reapareció en el norte del departamento con un devastador ataque al puesto policial de Crucero, el 5 de mayo de 1988, asesinando a seis efectivos y al juez de paz de la localidad. Casi un mes después, la misma columna senderista asesinó a Jaime Centeno Jove, sucesor de Zenobio Huarsaya en la alcaldía de San Juan de Salinas, en la plaza principal de la ciudad de Azángaro.

Pero la acción de mayor impacto regional ocurre el 30 de junio, cuando dos senderistas asesinan al alcalde provincial de Puno, Luis Dueñas Peralta. El PCP-SL había reconstruido su fuerza principal en el norte de Puno, bajo el mando de Juan Carlos Olivares del Carpio, «Gringo», desplegando una capacidad militar inesperada teniendo en cuenta los limitados recursos de que disponía y los sucesivos golpes que su organización había experimentado. Por su parte, el Segundo Congreso Nacional del PUM en junio de 1988, acordó disputar con el PCP-SL el control del sur andino vía la constitución de organismos de autodefensa y medidas de preparación militar.

Radio Onda Azul, creada en 1958, de propiedad de la Diócesis de Puno, contribuye activamente a generar una conciencia ciudadana que se enfrenta a la violencia. Sin embargo, para muchos el discurso de la radio era de tendencia izquierdista, tal como lo expresa la Revista Caretas en 1986: «La Iglesia Sur Andina no oculta su simpatía hacia la izquierda marxista local, cuenta con una de las emisoras de radio más potentes de la zona, Onda Azul y ha argumentado a favor de la reestructuración de tierras en castellano, quechua y aymara. También tienen por cierto, programas educativos»

Por esta posición procomunera, las instalaciones de Onda Azul sufrieron atentados que fueron atribuidos a grupos paramilitares, el 3 de agosto de 1986 y los días 3 y 5 de julio de 1988.

El viernes 19 de mayo 1989 un grupo del PCP-SL asesina a Marcelino Pachari Roselló, alcalde provincial de Azángaro y militante del Partido Comunista del Perú «Patria Roja», quien se encontraba inspeccionando la reconstrucción del puente que días atrás había sido volado por un destacamento del PCP-SL. Dos días después del asesinato de Pachari, la columna del PCP-SL destruye en la noche del 21 de mayo las instalaciones del IER «Waqrani», en las afueras de Ayaviri.

La violenta campaña senderista continuó el 26 en el distrito de Ñuñoa. Allí arrasan la Empresa Rural de Propiedad Social «Alianza» y asesinan a 2 técnicos. Dos días después, el Ejército ingresó a Azángaro con la finalidad de asumir el control político militar para hacer frente a la subversión. Al día siguiente, el 29 de mayo, el PCP-SL tomó el distrito de Ayrapuni y asesinó al alcalde Daniel Curro Chambi, incendiando el local del colegio.

En resumen, mayo de 1989 es un mes muy violento, con asesinato de alcaldes y otras autoridades, arrasamiento del IER Waqrani, ataque a Chuquibambilla.

Si hasta 1986 el PCP-SL tuvo problemas para hacer funcionar su Comité Regional, en 1989 ya contaba con un comité regional capaz de dirigir la «guerra popular» bajo la conducción de María Pantoja, una de las más importantes dirigentes senderistas.

Sea por miedo o persuasión, los senderistas tratan de imponer su presencia, entretejiendo una estructura de apoyo que les permite actuar a través de buena parte del departamento. En el campo, una «red territorial» de simpatizantes activos o pasivos, delimita un ámbito geográfico en el que la Fuerza Principal puede desplazarse con relativa seguridad, mientras las «fuerzas locales» sirven al partido en acciones específicas para retornar después a su vida habitual.

La «fuerza principal» está centrada en el corazón de la provincia de Azángaro, entre los distritos de San Juan de Salinas y Chupa, para ser más exactos. Irradia desde allí sus acciones hacia el resto de la provincia, a la vecina Melgar, el sur de Carabaya y el norte de Lampa.

Pero paralelamente a este conjunto de acciones violentas, se profundizó el aislamiento social, y la derrota política del PCP-SL se vislumbra pues la condena a sus acciones violentas se generaliza; nada volvería a ser como antes después de la campaña senderista de mayo del 89. Cuando se inició la guerra interna, algunos dirigentes campesinos de las federaciones se referían a los senderistas como «compañeros». Un tiempo después, los campesinos más politizados los llamaban «tíos», pero más adelante, después del asesinato de varios dirigentes campesinos, comenzaron a llamarlos «sacos largos», en alusión a las siglas del PCP-SL. Estos cambios corresponden a las distintas fases vividas por el campesinado puneño, desde la paciente aceptación inicial a la resistencia y posterior rechazo.

Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL ha causado 23 bajas en las fuerzas policiales y «ajusticiado» a 14 autoridades. Al menos un par de docenas más suman las víctimas no reconocidas que mueren por «robar a nombre del partido,» incurrir en abigeato, «soplonaje» o desertión.

Con 88 víctimas, que superaban largamente a las del año anterior, culminaba 1989, uno de los años de mayor el conflicto armado interno en Puno. El PCP-SL era activo en un «triángulo guerrillero» nuclear, base de lanzamiento para desplazamientos que cubrían un extenso abanico territorial: de San Juan del Oro (Sandia) y Cojata (Huancané) —sobre la línea fronteriza con Bolivia— hasta Calapuja (Lampa), Ñuñoa (Melgar) —cerca del límite con el Cuzco— y Crucero (Carabaya) al norte.

Las dos columnas senderistas, sumamente móviles, disponían de aproximadamente 40 integrantes una de ellas, entre Azángaro, Melgar y Carabaya, y otra de 20 militantes en la provincia de Huancané.

Pero el escenario político puneño se hacía cada vez más complejo. Al igual que lo sucedido en otras regiones del país, distintas fuentes señalan que en Puno el APRA organizó un grupo de paramilitares, el Comando Rodrigo Franco, al cual se le asigna los atentados contra la Federación Departamental de Campesinos de Puno, el Taller de Educación, Capacitación e Investigación Rural Andina (TECIRA), Radio Onda Azul, los domicilios de los ex diputados de Izquierda Unida por Puno Jaime Ardiles Franco y Alberto Quintanilla Chacón. A pesar de no existir pruebas para confirmar estas afirmaciones era público que para algunos sectores del APRA, los «comunistas» (casi sinónimo de «subversivos») eran tanto los integrantes de equipos de la Iglesia Católica como los militantes de Izquierda Unida. Este error de evaluación sobre la identidad política de las instituciones impidió una pronta conformación de un frente amplio contra el terrorismo.

En su estrategia de barrer con toda forma de autoridad y organización, PCP-SL asesinó a líderes de federaciones campesinas como Zenobio Huarsaya, Tomás Quispe Sayhua, Dionisio Cantani, alcaldes de origen campesino como Marcelino Pachari Rosello, jueces de paz, tenientes

gobernadores y docentes universitarios como Norman Bedoya Aza de Patria Roja y Elías Coasaca, del Partido Aprista.

En la madrugada del 20 de enero de 1990, la Fuerza Principal del PCP-SL encabezada por Juan Carlos Olivares ataca la SAIS Sollocota con 30 de sus activistas. El destacamento de la Policía Nacional ahí instalado logra repeler el asalto, y los atacantes se repliegan, pero las fuerzas del orden junto con los campesinos emprenden la persecución y hacia el mediodía alcanzan al grupo encabezado por el «Gringo», quien cae abaleado con otros cuatro senderistas. El mando político Olivares y el mito del «Gringo» mueren a la vez, y ello significa el principio del fin para el PCP-SL en Puno pues la caída de Olivares desbarata la fuerza principal y la fuerza local de la guerrilla, así como la red de contactos que tenía en un extenso territorio. De hecho, a partir de este enfrentamiento las acciones del PCP-SL empiezan a decrecer.

Las provincias de Azángaro y Melgar concentraron la mayoría de muertos, pues de 441 muertos del total departamental, 353 se registran en ambas provincias. Los índices de violencia y la cantidad de muertos en 1990 son casi similares a los del año anterior, aunque la cifra mayor recae primero en Azángaro en 1989 con 62 muertos, en 1992 con 54, y en 1990 con 31, luego Melgar en 1990 con 32 muertos.

1.3.5.2.3. La derrota del PCP-SL, los amagos del MRTA: 1991-1993

La redistribución de la tierra no moviliza más a la población, preocupada ahora por la titulación de los predios asignados a las comunidades. El triunfo del movimiento campesino es rotundo pues con su reconocimiento masivo las 1274 comunidades campesinas de Puno (22% del total nacional) ratifican la propiedad de más de 2 millones de Has.

Número de comunidades campesinas de Puno según hectáreas poseídas

CC Puno	1,274	22%	
CC Total nacional	5,680	100%	
Sup.CC Puno	Agrícola	Pastos	No Agrícola
2'686,628.58 Has.	8%	84%	7%

El frente pro comunero pierde por lo tanto el impulso de años anteriores pero, a la vez, el PCP-SL no dispone de argumentos para mantener sus actividades, más aún si sus objetivos centrales son ahora meras acciones de sabotaje o la incursión en poblados para asesinar autoridades y destruir la infraestructura pública y comunal.

Para Mercedes Calsina de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, PCP-SL, desde sus inicios, tuvo dificultades para asentarse en el campo puneño: «como un acto de venganza, en vista que no podían entrar a Puno, entonces se juntaron con las empresas y sus

gerentes para deshacer la organización campesina y a sus asesores.» (Entrevista con Mercedes Calsina, Puno, mayo, 2002).

Los responsables, según los senderistas, eran los integrantes del frente pro campesino comunero por ello habían destruido el IER Waqrani. Benito Gutiérrez Ccama, ex secretario general de la Federación Departamental de Campesinos, lo dice: «Sendero quería desunir la alianza que existía entre el IER Waqrani, como órgano de la Iglesia, y la organización campesina. Como no concordaron con sus posiciones y su estrategia política nos convertimos prácticamente en un obstáculo para ellos». (Benito Gutiérrez Ccama, Puno)

De otra parte, aunque sus primeros actos públicos datan de 1987 con atentados al local del Banco de Crédito de Puno y a la empresa lanera Michell en la ciudad de Puno, y la Universidad del Altiplano así como la toma de radio Juliaca y radio San Román, en Juliaca, el interés mayor del MRTA se concentró en Sandia y San Juan del Oro, donde se estableció un grupo reducido de militantes que no pudo avanzar en su trabajo proselitista limitándose a realizar algunas acciones militares como el asalto a un asiento minero en Sandia el 23 de julio de 1990. El MRTA se propone también, en 1991, ampliar su presencia en la vertiente oriental del departamento, ejecutando acciones como la del 3 de mayo de 1991, cuando un grupo armado del MRTA toma el pueblo de San Juan del Oro, en la provincia de Sandia, y realiza un mitin. Cuatro días después, otro grupo del MRTA se enfrenta a una patrulla policial en la frontera con Bolivia, siendo dispersado.

Casi al mismo tiempo, el 14 de mayo de 1991 es asesinado por el PCP-SL en Juliaca, Porfirio Suni, dirigente reconocido de la Federación Campesina de Aricoma (FUCA) y representante de IU en el gobierno de la Región José Carlos Mariátegui. Los asesinatos de autoridades, líderes y funcionarios públicos de parte del PCP-SL prosiguen con la muerte, el 17 de julio, del alcalde provincial de San Antonio de Putina, Prudencio Sulca y dos regidores en el fundo Calacala. Al mes siguiente, el 18 de agosto, cae asesinado el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en Juliaca, y el día 30 muere abaleado por el PCP-SL el periodista y dirigente de Cambio 90, Gustavo Zuñiga.

En un escenario casi inédito, una columna senderista ataca el 6 de setiembre el pueblo de Pucará, en la provincia de Lampa, matando a 5 policías y quemando la municipalidad, el local de Entel Perú y varias casas. Otro grupo armado embosca una patrulla del ejército en la provincia de Melgar, muriendo un oficial y 5 soldados, 4 subversivos y el administrador de la mina San Rafael. En el distrito de Inchupalla, en Huancané, el domingo 29 de Julio de 1992 un destacamento del PCP-SL asesina a Pedro Pascual Vilca Canaza secretario del consejo distrital de Inchupalla, Santiago Chuquija Ingalla, Teniente Gobernador, Artemio Sancho Sancho, Juez de paz del distrito, María Flora Montesinos Lipe y su menor hijo René Morales Montesinos.

Pero la respuesta organizada campesina a la violencia senderista no deja de incrementarse. El 12 de setiembre, los ronderos de Asillo se enfrentan al PCP-SL matando a 7 de ellos. Cinco días

después, el PCP-SL responde atacando el puesto policial de Asillo, donde mueren dos civiles, pero el rechazo a los grupos senderistas ya es definitivo.

1.3.5.2.3.1. La estrategia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales

Hacia 1987 la violencia policial se había convertido en un serio problema, conforme denunció la Vicaría de la Solidaridad de Puno ese año: «Llegan a los pueblos y levantan su cuartel en locales comunales o en centros de servicio como centros de salud o escuelas. Nadie protesta, ni denuncia, ni condena. Se van aceptando las cosas así, por miedo a los unos y a los otros. Imponiéndose, poco a poco, la ley del terror, de la resignación y de la muerte.»

Son numerosos los testimonios de denuncias de abusos policiales como, por ejemplo, los ocurridos en Fiestas Patrias de 1987 en la comunidad de Kenamari Bajo y Llali en la provincia de Melgar; el asesinato de la niña Juana Choque Miranda, el 5 de octubre del mismo año, por un policía en estado de ebriedad del puesto de Arapa y la muerte del joven Juan Gutiérrez Mamani, en un baile social realizado en Pucará, a manos de un miembro de la Guardia Civil también en estado de ebriedad. En Puno, como en todo el país, la imagen de las fuerzas policiales y fuerzas armadas era bastante negativa. El sacerdote Markus Degen, con mas de 38 años de trabajo pastoral en el altiplano y actual Capellán del Penal de Máxima Seguridad de Yanamayo, recuerda cómo eran percibidos los agentes del orden: «Antes de la aparición de el PCP-SL, la policía era mal vista. Cometía abusos, habían signos de corrupción e infundían temor. Por ejemplo se sabía que asaltaron en Asillo y San Antón. La gente no los quería».

Otras opiniones son aún más duras:

[...] el abuso mayor ha sido cometido por los militares y los sinchis de la policía. Mucha gente les tiene temor. Llegaban y entraban a cualquier casa, sacaban lo que encontraban, vacas, ovejas, gallinas, se llevaban artefactos; nadie tenía derecho a reclamar, nadie podía acercarse. A veces los militares estaban disfrazados de civiles trapositos pero al final mucha gente ha desaparecido. Pero nadie quiere dar cuenta, prefieren ocultarse..Por ejemplo, el Ejército una noche agarró campesinos, los desnudó, los expuso en un parque y les echaron abundante agua a pesar del enorme frío. Fueron acusados de convivir y apoyar con los terroristas (Julían Paucar, Puno)

En siete años de guerra habían surgido los Comités de Defensa Civil en diferentes partes del país, pero también la violencia se había «desparramado», hacia 1990, en casi todo el territorio nacional.

Sin embargo, desde su ingreso a Ayacucho en 1983 hasta fines de 1990, se habían producido cambios significativos en la visión contrainsurgente de los militares peruanos, descartándose la «solución argentina» por otras estrategias en las cuales el trabajo de inteligencia y el énfasis en ganar el respaldo de la población se convierten en elementos importantes. En Puno, como señalamos al comienzo, la sociedad civil también condicionó el actuar contrasubversivo, impidiendo que surgiera un «segundo Ayacucho», limitando los excesos como los descritos líneas arriba.

Al establecimiento de las bases militares en el departamento de Puno se sumó, entonces, un efectivo trabajo de inteligencia que ayudó a desarticular las redes y las bases de apoyo del PCP-SL, conforme lo demuestra la detención de cuadros dirigenciales y militantes hoy presos.

A ello se agregan dos hechos claves en el curso de la guerra interna: la captura de Abimael Guzmán, en 1992, y la promulgación de los decretos que norman el arrepentimiento de subversivos. En consecuencia, los golpes contra las columnas senderistas se multiplican en 1993. El 30 de enero, se produce un enfrentamiento entre el ejército y el PCP-SL en el distrito de Phara, luego que pobladores del lugar advirtieron a los soldados de su presencia, muriendo 8 senderistas, un oficial y dos soldados. En su persecución capturaron a 9 senderistas más en la denominada Base de Apoyo de la comunidad de Túpac Amaru. Ese mismo día, una patrulla del ejército que salió en persecución de los senderistas de Phara, se enfrentó a otro grupo del PCP-SL en San Antonio de Putina, capturando a 10 subversivos.

El 16 de marzo, es capturado un comando de aniquilamiento del PCP-SL que operaba en Lampa, Azángaro, Carabaya y Melgar; entre los detenidos había dos soldados del ejército en actividad.

Como prueba clara de su estancamiento, y al igual que el PCP-SL, el MRTA sufre múltiples detenciones y en 1993 son continuas las presentaciones públicas que la policía realiza de militantes emerretistas: el 28 de abril son presentados 17 militantes del PCP-SL y 2 del MRTA capturados; el 12 de mayo es el turno de 9 militantes del PCP-SL y 7 del MRTA; el 2 de junio el turno le corresponde a 8 integrantes del PCP-SL y 4 del MRTA detenidos. La lista de presos continúa en 1994, desmantelando definitivamente los reducidos grupos del MRTA.

Para finalizar este recuento es importante recordar que, a diferencia de otras regiones del país, los activistas de derechos humanos y algunos comunicadores sociales lograron generar una opinión pública respetuosa de la dignidad humana que contribuyó a reducir al mínimo el costo social de la guerra en la región. En Puno, el movimiento de derechos humanos creó el 2 de diciembre de 1981 el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puno, teniendo en su Junta Superior a los tres Obispos de Puno, Ayaviri y Juli. En Cuzco también se había constituido el Coddeh Cuzco.

Martha Giraldo Alayza, ex presidenta del Comité de Derechos Humanos de Puno, recuerda que: «La organización de derechos humanos establece una coordinación, un trabajo educativo de difusión, nosotros obviamente, nuestra primera prioridad es la población y aunque parezca, aquí el común desde el comienzo tenemos mucho cuidado por decir las cosas en su verdadera dimensión, además siempre poner la cara».

Cuando el PCP-SL empezó a atacar a algunos pequeños y medianos propietarios en las provincias de Melgar y Azángaro, produciendo incendios y saqueos, ocurrieron detenciones masivas de campesinos, y las primeras denuncias de desaparición de dos mujeres, Rina Zoila Checahuari y su

tía, fueron atendidas por el CODDEH, quien denunció desde entonces todos los hechos violatorios de derechos fundamentales ante las autoridades políticas y militares de Puno, así como a nivel nacional.

Cuando en 1986, PCP-SL recrudece sus acciones, arrasando empresas asociativas y realizando múltiples acciones de sabotaje, la Diócesis de Puno decide crear su Vicaría de Solidaridad, el 17 de octubre de 1986, siguiendo el ejemplo de la Prelatura de Ayaviri. En 1992, las Vicarías de Solidaridad y el Coddeh Puno impulsan la conformación del Consejo Regional por la Paz.

En marzo de 1994, en el penal de Yanamayo, Fujimori es recibido por Osmán Morote quien, con un apretón de manos, le reitera el pedido de un «acuerdo de paz». A algunas decenas de kilómetros de ahí, las últimas huestes del PCP-SL en el altiplano son desarticuladas.

1.3.5.4. Cronología Puno 1980-2000

23/10/1980	En el distrito de Desaguadero, en la provincia de Chucuito, se produce un atentado con dinamita y robo en los rieles del Ferrocarril Central.
6/12/1980	Asalto al depósito del Ministerio de Transportes en la ciudad de Puno.
15/1/1981	Atacan la casa del alcalde de IU Jaime Ardiles en Puno. El 26 de enero, atacan la Corte Superior de Justicia de Puno.
15/8/1981	El PCP-SL ataca el Instituto de Estudios Rurales Palermo en Juli, provincia de Chucuito.
31/8/1981	El PCP-SL ataca un patrullero de la Guardia Civil en Ayaviri.
agosto 1982	Atentado contra la Corte Superior de Justicia de Puno y la antena de la radio Onda Azul, perteneciente a la Iglesia Católica.
24 agosto	Atacan la ERPS Oxani perteneciente a la SAIS Sollocota, en la provincia de Azángaro.
9 septiembre	Asesinan al teniente gobernador de Tiramaza, Juan Vilca Cutipa; y atacan el puesto de la Guardia Civil y la Sub prefectura de Azángaro.
5/10/1984	El PCP-SL inicia una ofensiva destruyendo la SAIS Quenamari en San Antón, y tomando los pueblos de Chupa y Azángaro, en la provincia de Azángaro.
17-21 febrero	El PCP-SL inicia una nueva ofensiva que incluyó el ataque del Banco del Sur en Juliaca (día 17), la toma y asalto de la mina Pomasi en Ayaviri (día 18), en Muñani son capturados 3 presuntos senderistas (día 19), y atacan el pueblo de San Antón (días 21 y 22), en Azángaro.
11-15 abril	El PCP-SL realiza diversas acciones en la provincia de Azángaro.
29 de agosto	Queman el fundo Pasincha y en septiembre queman el fundo San José, en la provincia de Azángaro.
10/1/1986	Nuevo ataque contra las SAIS San José y la SAIS Illari, matando a 5 personas y volando el puente que los conectaba con la ciudad de Azángaro.
13/1/1986	Muere Adán Castillo Vega, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Altiplano, cuando estalló la dinamita que llevaba para realizar un atentado en la ciudad de Puno.
3/6/1986	Queman la central de la SAIS Unión en Azángaro y reparten el ganado; el día 6 dinamitan el puesto de la GC en San Antón, donde mueren dos senderistas y es herido un oficial.
19 jun- 12 jul 1986	Fuerzas combinadas detienen a alrededor de 150 personas en Nuñoa, 88 de los cuales son trasladados a Ayaviri, algunos de ellos mueren.
3/8/1986	Vuelan con dos cargas de dinamita, la antena de la radio Onda Azul.
18 -21 set 1986	Secuestran a 20 delegados campesinos en Azángaro, atacan la SAIS Huayna Capac en Muñani (día 19; día 16, según Desco), asesinan al teniente gobernador de Jallihuaya y un GC en Puno (día 19, 20 según Desco), y atacan el puesto policial de Azángaro (día 21).

8/4/1987	El PCP-SL asesina al alcalde de San Juan de Salinas, Zenobio Huarzaya de IU
13/4/1987	Hace su aparición el MRTA-MIR al atacar contra el local del Banco de Crédito de Puno.
19/4/1987	Durante las tomas de tierras, detienen a 300 campesinos en Ayaviri y Azángaro, y llegan 400 soldados más a Azángaro. Al día siguiente detienen a 65 campesinos que iban a tomar tierras en Asillo; dos días después soldados asesinan al presidente de la Comunidad de Muñani, Pedro Laura Ochochoque.
24/7/1987	Se producen mítines en Ayaviri y Azángaro, con participación de más de 2000 campesinos, donde se reparten tierras.
5/5/1988	El PCP-SL incursiona en la SAIS Picotani en Crucero, provincia de Sandia, y realiza destrozos en sus instalaciones. En el pueblo queman y asesinan a 6 GC y al juez de paz. El profesor y dirigente campesino, Porfirio Suni Quispe, es detenido y torturado por miembros de la UTA, acusado del atentado en Crucero.
26/6/1988	Es asesinado el alcalde de San Juan de Salinas, Jaime Centeno Jove
30/6/1988	Es asesinado el Alcalde Provincial de Puno, Luis Dueñas Peralta, del PAP.
13-25/5/1989	La columna principal del PCP-SL inicia una campaña en las provincias de Azángaro y Melgar entre los días 13 y 25 de mayo. En 16 días. El PCP-SL recorrió 700 kilómetros y asesinó a 7 personas.
29/1/1989	Asesinan a 7 autoridades (teniente alcalde, regidor, gobernador y otros) en el distrito de San José en la provincia de Azángaro.
6/5/1989	El PCP-SL se enfrenta a una patrulla policial en Azángaro, donde mueren 6 policías, 7 senderistas y un civil. Al día siguiente, en el distrito de Pucará, provincia de Lampa son asesinados el alcalde PAP Ceferino Villanueva, el teniente alcalde y el juez de paz.
10/10/1989	En el distrito de Ananea, en la nueva provincia de San Antonio de Putina, el PCP-SL ataca las instalaciones de Minero Perú en la mina Gavilán de Oro, donde mueren 9 policías y un vigilante particular, así como al teniente alcalde y al gobernador del distrito. Ese mismo día se produce un enfrentamiento en el distrito de Antauta, provincia de Melgar, donde mueren 14 senderistas.
20/1/1990	J.C. Olivares, «Gringo», cae baleado con cuatro de sus camaradas.
10/7/1990	Atacan la SAIS Sollocota, en Azángaro, y asesinan a 7 campesinos. Ese mismo día, durante un ataque al mercado de Azángaro mueren 5 personas
3/5/1991	El MRTA Toma el pueblo de San Juan del Oro, en la provincia de Sandia, y realizan un mitin. Cuatro días después el MRTA se enfrenta a una patrulla policial en la frontera con Bolivia.
14/5/1991	Es asesinado en Juliaca Porfirio Suni, dirigente campesino y representante de IU en el gobierno de la Región José Carlos Mariátegui.
17/7/1991	Es asesinado el alcalde provincial de San Antonio de Putina, Prudencio Sulca y dos regidores en el fundo Calacala.
18/8/1991	Asesinan al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil en Juliaca, Emulio Gonzáles,
30/8/1991	Asesinan al periodista y dirigente de Cambio 90 Gustavo Zuñiga.
6/9/1991	El PCP-SL ataca el pueblo de Pucará, en la provincia de Lampa, matando a 5 policías y quemando la municipalidad, el local de Entel Perú y 20 casas.
9/9/1991	El PCP-SL ataca una patrulla del ejército que viaja en convoy por la hacienda San Isidro, en la provincia de Melgar, muriendo un oficial y 5 soldados, 4 subversivos y el administrador de la mina San Rafael.
11/1/1992	El PCP-SL ataca el puesto policial de Pucará en la provincia de Lampa.
30/1/1993	Se produce un enfrentamiento entre el ejército y el PCP-SL en el distrito de Phara, luego que pobladores del lugar advirtieron a los soldados de su presencia, muriendo 8 senderistas, un oficial y dos soldados.
16/3/1993	Es capturada un comando de aniquilamiento del PCP-SL que operaba en Lampa, Azángaro, Carabaya y Melgar;

15/4/1994	El Presidente Alberto Fujimori visita el penal de Yanamayo, donde sostiene una entrevista con Osman Morote y Martha Huatay sobre el denominado Acuerdo de Paz.
-----------	--

1.3.6. Zona II: Cuzco

En el Cuzco se configuraron tres escenarios del conflicto interno: en primer lugar destacan las provincias altas de Chumbivilcas, Espinar, Canchis y Canas. En segundo lugar, se encuentra la provincia de La Convención; en ambas zonas se declaró el estado de emergencia y se instalaron bases militares. Finalmente, un tercer escenario principal es la ciudad del Cuzco y las provincias circundantes de Anta, Paruro, Paucartambo y Calca. La presencia del PCP-SL se constata en todas estas zonas, mientras que las columnas del MRTA concentran su presencia, mucho menor, en la provincia de La Convención.

1.3.6.1. Datos generales

El departamento del Cuzco, tenía según el censo de 1993, casi un millón de habitantes, de los cuales 54.1% era población rural, mayoritariamente quechua hablante y 25.4% analfabeta, incluyendo pequeños núcleos de población Asháninka y Machiguenga con sus propias lenguas. La capital del departamento, Cuzco, a 3 399 metros de altitud, tenía en 1993, 277 642 habitantes con una tasa de crecimiento anual de 2.8%.

Cuzco 1981-1993 Número de pobladores según provincia

Provincia	1981	1993
Cuzco	208,040	270,324
Acomayo	27,556	28,906
Anta	48,452	56,424
Calca	50,283	56,007
Urubamba	38,962	48,254
Paruro	32,385	34,361
Paucartambo	33,383	10,696
Quispicanchi	62,938	75,853
Canas		39,476
Canchis		94,962
Chumbivilcas	63,603	69,669
Espinar	44,539	56,591
La Convención	106,228	157,240
TOTAL	716,369	998,763

Fuente: INEI

El departamento del Cuzco presenta, como dijimos en el capítulo introductorio, tres espacios diferenciados: las mesetas altoandinas, los valles interandinos y la selva alta. En los valles interandinos, que concentran el 58% de la población departamental, se encuentran Cuzco y la mayor parte de las ciudades, mientras que las comunidades campesinas, numerosas en las mesetas altoandinas de las provincias sureñas de Espinar, Chumbivilcas, Canas, Canchis y en parte Paruro, reúnen el 26% de la población del departamento. Estos espacios de ganadería extensiva orientada a la crianza de vacunos (9.21% del total nacional), de ovinos (12.40% nacional) y de alpacas (19.21% nacional), ocupa en todos los casos el segundo lugar en el Perú. La producción y la productividad son variables, según se trate de comunidades campesinas o de empresas ganaderas.

La región de la selva alta corresponde, básicamente, a la provincia de La Convención (16% de la población departamental), cuyo dinamismo se basa en el cultivo del café (tercer departamento productor con el 15.08% del total nacional), té, coca, cacao y frutas tropicales. En cuanto a la minería, la principal explotación es la del cobre en los yacimientos de Tintaya, en la provincia de Espinar, con 12.89% de la producción nacional.

Las actividades industriales estaban, en la década de 1970, conformadas por las fábricas de tejidos de lana, la fábrica de fertilizantes de Cachimayo, la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu, la fábrica de cerveza y la artesanía. Por último, Cuzco es el primer destino turístico del Perú, con una amplia infraestructura hotelera.

Como ya se señaló en el capítulo introductorio, el movimiento campesino y la Reforma Agraria transformaron radicalmente la estructura de tenencia de la tierra. Cuzco es el segundo departamento del Perú, luego de Puno, con presencia de Comunidades Campesinas, y sus mil comunidades reconocidas poseen más de la mitad del territorio altoandino de pastos naturales, mientras que el minifundio es mayoritario en los espacios agrícolas, manejados por 144,694 Unidades agropecuarias.

Características agrícolas de las comunidades campesinas

Com.Camp Cuzco	Superficie de comunid.	Superficie Agrícola	Pastos Naturales	Superficie No Agrícola
927	1'848,497.09	7%	53%	9%

Fuente: Cenagro 1994

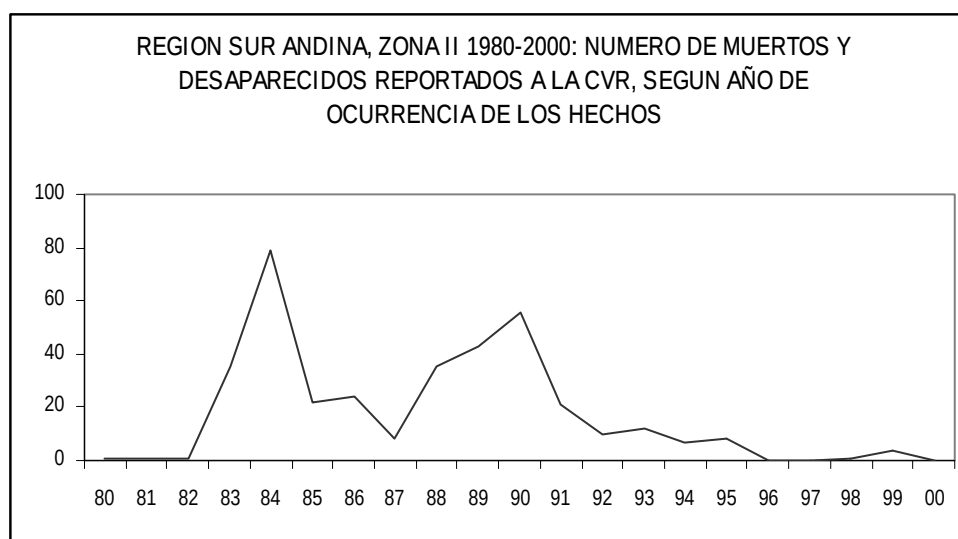
El mapa político del Cuzco incluía en 1980, una gama de organizaciones de izquierda, con activistas del PCP-Unidad, PCP-Patria Roja, PCP-Bandera Roja, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Vanguardia Revolucionaria, Partido Comunista Revolucionario. El PCP-SL representaba una organización minúscula en ese mundo político copado por fuerzas políticas de la izquierda no senderista, que dominaba el escenario social, tanto campesino como urbano, a través de organizaciones diversas como la Federación de Barrios, las Federaciones de Campesinos, la

Federación de Trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y la Federación Universitaria de la Universidad San Antonio Abad del Cuzco. Las pintas que decían «Viva Marx, Lenin, Mao. ¡Viva la guerra popular!» fueron por lo tanto consideradas en 1980, sin importancia alguna, hasta que comenzaron los atentados dinamiteros a oficinas públicas y la ciudad del Cuzco se convirtió en caja de resonancia de atentados múltiples.

Durante el V Congreso de la Confederación Campesina del Perú realizado en Cuzco en mayo de 1980, Lino Quintanilla y Julio Cesar Mezich, militantes de Vanguardia Revolucionaria-PC y líderes de las tomas de tierras en Andahuaylas, encabezaron la corriente más radical, afirmando que las condiciones «objetivas y subjetivas» estaban dadas y por tanto, había que lanzarse a la lucha armada. Pero la mayoría de asistentes al congreso así como sus representaciones políticas ratificaron su camino hacia la participación electoral, rechazando aquella propuesta de «guerra popular del campo a la ciudad».

REGIÓN SUR ANDINO, ZONA II, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																					
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	
TOTAL	134	-	1	-	-	1	1	17	3	30	17	30	9	7	9	3	-	-	-	1	5	-	
CUSCO	17	-	1	-	-	-	1	2	1	1	1	3	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
ACOMAYO	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
ANTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
CALCA	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CANAS	13	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
CANCHIS	9	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHUMBIVILCAS	66	-	-	-	-	-	-	-	-	26	16	19	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
ESPINAR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA CONVENCION	11	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	
PARURO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
QUISPICANCHI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
URUBAMBA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	



1.3.6.2. Historia de la violencia

Las provincias de Cuzco y La Convención concentran el 21.12% de los 142 muertos registrados en el Departamento del Cuzco. Aclaremos que la mayor cantidad de acciones violentas de la provincia de La Convención se encuentra en los distritos de Vilcabamba y Quimbiri, sobre la margen derecha del Río Apurímac, como continuidad de la dinámica de la margen izquierda perteneciente a las provincias ayacuchanas de La Mar y Huanta, uno de los espacios más golpeados por las acciones del PCP-SL, las fuerzas contrasubversivas y los Comités de Autodefensa campesinos. Por lo tanto, hemos incluido los distritos de Vilcabamba y Quimbiri en la historia del Río Apurímac, en Ayacucho (*Ver Zona III, Río Apurímac, Ayacucho*).

1.3.6.2.1. El inicio de la violencia: 1980-1983

El departamento de Cuzco formaba parte del Comité Regional del Sur del PCP-SL, conjuntamente con los departamentos de Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna conformaban un solo comité zonal, Cuzco, Puno y Madre de Dios eran los tres comités zonales restantes. Antes de mayo de 1980, los comités zonales senderistas de Cuzco, Puno y Arequipa empiezan a funcionar plenamente, determinando que el comité zonal del Cuzco era el zonal principal. Allí serán enviados a organizar el partido, el frente y el ejército -las tres «herramientas centrales» de la revolución maoísta- dirigentes nacionales como Antonio Díaz Martínez, Margie Clavo, María Pantoja, y cuadros intermedios como Edmundo Cox Beuzeville.

El comité zonal del Cuzco determinó que la prioridad de sus acciones estaba en las provincias altas mientras que la ciudad de Cuzco fue considerada desde el primer momento como objetivo central de actos de propaganda y sabotaje, contando con la militancia de jóvenes estudiantes, algunos dirigentes barriales, algunos maestros secundarios y docentes universitarios. María Pantoja Sánchez, la dirigente más importante en la historia del Comité Regional del Sur afirmó, en una entrevista con la CVR en el penal de Aucallama, que: «el partido culminó su reconstitución, luego de unos quince años de lucha por construir un partido de nuevo tipo, con formación ideológica, política y estructuras organizativas, principalmente dentro del campesinado. Esta tarea fue acompañada de un plan nacional de investigación que incluía investigar en el sur del país».

Según Cox, este «trabajo de investigación» concluyó señalando que el problema de la tierra «era central en el eje histórico...Cuzco, Puno y el valle del Colca». Más aún, según Pantoja, el Comité Regional del Sur fue sindicado como el segundo en importancia, después de Ayacucho, por su ubicación geográfica estratégica, mientras que el Comité Zonal del Cuzco era el zonal principal. Ya en operación, el Comité Zonal del Cuzco determinó que su prioridad serían las provincias altas.

Dice Cox, entrevistado en Yanamayo por la CVR, que la guerra senderista se habría iniciado:

[...] dirigiendo al campesinado pobre, en una guerra campesina contra el Estado, sostén de las tres montañas que pesan sobre nuestro pueblo: la semifeudalidad, el capitalismo burocrático y el imperialismo. En Cuzco, Puno y Arequipa hemos arrasado con la semifeudalidad expresada en la gran propiedad asociativa porque había que quebrar la base fallida, la base fracturada, endeble, débil de un estado podrido, el viejo estado terrateniente burocrático peruano y el problema medular era la tierra.

En 1981 la policía capturó a Edmundo Cox Beuzeville, aquel profesor de matemáticas que había llegado desde el distrito de San Antón, en Azángaro, Puno, hasta las provincias altas del Cuzco para realizar labores de agitación, propaganda y formación política. Estaba acusado de 27 atentados ocurridos en la ciudad de Sicuani y la provincia de Canchis, incluyendo un ataque al Núcleo Educativo Comunal de Tinta, el 9 de noviembre de 1980, quizás la primera acción pública del PCP-SL en la zona. Un año después sería capturado Julio Tineo, un estudiante universitario de San Marcos llegado al Cuzco para ocupar el puesto de Edmundo Cox.

En respuesta a los actos violentos, a inicios de la década de 1980 se fundan los primeros dos Comités de Defensa de los Derechos Humanos del Perú, en Cuzco y Puno respectivamente. El CODEH Cuzco tuvo como primer presidente a Daniel Estrada y, de alguna manera, además de gestionar justicia por el asesinato de ciudadanos inocentes, cumplió en Cuzco, al igual que en Puno, un importante rol de freno a las acciones senderistas y a los «excesos» contrasubversivos, generando una corriente de opinión pública contraria a la violencia.

Mientras los militantes senderistas realizaban su labor proselitista en las provincias altas y en La Convención, en el Cuzco la UNSAAC se convirtió en escenario importante para acciones de propaganda. Una cicatriz en la frente y el oído derecho seriamente dañado son las secuelas de los dos atentados senderistas cometidos en 1983 contra Valois Tapia García, presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, casi asesinado por:

[...] enfrentarse política e ideológicamente, principalmente en el comedor universitario, donde el PCP-SL organizó uno de sus primeros núcleos que luego se dedicarían a hacer pintas y aparecieron listas negras de los dirigentes que deberían desaparecer. Comenzaron, aquí en el Cuzco, a matar selectivamente a dirigentes de izquierda. En 1983 asesinaron alcaldes, regidores como Iván Pérez Ruibal, estudiantes como Walter Huayllani, William Hilares militantes del Partido Comunista-Unidad y del Partido Comunista del Perú- Patria Roja en 1983. Ellos son los héroes cuzqueños que resistieron a Sendero (Entrevista V. Tapia García).

1.3.6.2.2. La expansión de la violencia: 1984-1988

Entre 1984 y 1986 la violencia se concentra mayormente en la provincia de La Convención, principalmente en los poblados de la margen derecha del río Apurímac, como Lucmahuaycco. La guerra en ese espacio selvático llegaba desde el departamento de Ayacucho, aunque el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru también tenía el objetivo de construir un frente guerrillero en la selva

del Cuzco. Luis Varese, Víctor Ruiz Caro, Víctor Polay se encargaron de los contactos iniciales pero la policía capturó a Víctor Ruiz Caro, y el intento del MRTA no logró plasmarse entonces.

En Cuzco, el 26 de mayo de 1984 siete presos, entre ellos cuatro subversivos, fugan del penal de máxima seguridad de Quenqoro, en las cercanías de la ciudad de Cuzco, hecho que tiene repercusión regional y muestra la precariedad del sistema carcelario. Al igual que en otras regiones del país, también la primera fase de verdadera violencia en la región se inicia con el ataque y hostigamiento a los puestos policiales rurales y urbanos. El 25 de enero de 1985 ocurre en San Sebastián, Cuzco, el primer asalto a un puesto policial donde mueren dos policías, replicado el 19 de abril en Urcos, Quispicanchi, contra el destacamento de la Guardia Civil. En febrero, un sargento de la Guardia Republicana muere asesinado en Chiaraje y en la misma ciudad de Cuzco, en el barrio de Zarzuela, tres encapuchados atacan el pequeño puesto policial y matan al GC Isauro Loayza Vargas.

A estos ataques contra puestos policiales se suma pronto la agresión directa contra autoridades locales, tal como ocurre el 28 de junio de 1986, día en que son asesinados un regidor municipal y un dirigente local en Layo, Canas; o el 27 de julio, cuando el teniente gobernador de Cuzco, Hermógenes Huelca, es igualmente asesinado.

Los activistas del PCP-SL incrementan sus atentados en agosto de 1986, en posible respuesta a las masacres de presos senderistas ocurridas en los penales de Lima. Entre febrero y junio de 1987, los ataques a los puestos policiales parecen ser prioridad para el PCP-SL: el 5 de febrero, un destacamento del PCP-SL ataca los puestos de Checca y Quehua y pierde dos de sus integrantes, Sonia Lino Ojeda y Janeth Vizcarra, en el enfrentamiento con la policía; el 30 de enero son varios los puestos y comunidades atacados en Canas, y en los días posteriores sucede lo mismo en Acomayo y Chumbivilcas; el 25 de mayo muere el GC Jaime Quispe en el ataque al puesto policial de Pisac, y por último el 29 de agosto la confianza en sus fuerzas lleva a un destacamento de senderistas a atacar la comandancia de la GC y un cuartel del ejército en el centro mismo de la ciudad del Cuzco.

El ataque a puestos policiales y los asesinatos y amenazas contra las autoridades locales tiene en las provincias altas, al igual que en las provincias altas apurimeñas que veremos en el siguiente capítulo, el componente importante de lucha contra el abigeato, emprendida por el PCP-SL para ganar el apoyo de los poblados ganaderos de las punas asolados por bandas que diezman sus hatos. Ello explica en buena medida que desde 1986 se acentúa la violencia en las provincias altas del Cuzco, especialmente en Chumbivilcas donde, según los testimoniantes, la reducción drástica del abigeato ya es visible en 1987, lo cual implicaba la aceptación por muchas comunidades de la presencia senderista: «los campesinos han colaborado por que ellos(PCP-SL) habían atacado un mal que les descapitalizaba y era fuerte, inclusive ya los asaltos devienen en crímenes porque iban en camiones y tranquilamente llegaban cerca de las carreteras y embargaban

ganado y nadie les paraba y eso operaban en convenio con la Policía Nacional» (Ent. dirig.Fed.Agraria).

Por su parte, en 1987, el MRTA organiza el Frente Pachacutec al mando de «Andrés Corrales», en Quillabamba, buscando establecerse en el valle de San Miguel. Este frente existió apenas seis meses pues su campamento fue ubicado y sus militantes sorprendidos y muertos por las fuerzas armadas, incluyendo el «camarada Andrés». La composición social del MRTA en Cuzco comprendía a profesores, estudiantes y campesinos: «El MRTA tenía mucha simpatía en Cuzco, teníamos acceso a la Universidad, al SUTEP. Ahí percibimos que nos respetaban, el pueblo nos tenía cariño pero no fuimos capaces de transformar ese sentimiento en organización». (Entrevista a LC, ex-emerretista).

En 1988 el Comité Regional del Sur de PCP-SL se consolida bajo el liderazgo de María Pantoja Sánchez, y dos de sus mas destacados dirigentes hoy en prisión confirman esta versión cuando señalan que bajo su dirección se constituyen diversos Comités Populares en las zonas altoandinas del Cuzco, incorporando así a las «masas», es decir contando con el apoyo de campesinos. En versión de estos dirigentes, en este período ya se habría completado el uso de todas las formas de lucha en el sur del Perú: acciones de agitación y propaganda, sabotajes, aniquilamientos selectivos y combates guerrilleros.

A fines de 1988 se registran una serie de incursiones de destacamentos armados en la zona limítrofe entre Apurímac, Arequipa y Cuzco, en particular una ocurrida en noviembre en Condesuyos, donde una columna del PCP-SL se enfrentó con la Policía Nacional. El crecimiento senderista era notorio en las provincias altas, como queda evidente en la incursión de un destacamento senderista en el pueblo de Haquira, Cotabambas, Apurímac, el 3 de diciembre de 1988, donde asesinaron a cinco personas, acción que formó parte de una campaña del PCP-SL que se prolongó durante casi tres meses en toda la zona fronteriza entre Cotabambas y Chumbivilcas. Como consecuencia del asesinato de tres de sus cooperantes franceses y dos peruanos en Haquira, el CICDA retira sus programas de promoción en las provincias de Chumbivilcas y Espinar.

En la ciudad de Cuzco, la Universidad continuó siendo un espacio de disputa entre las fuerzas de Izquierda Unida y PCP-SL. Militantes senderistas armados tomaron varias veces, por pocos minutos, el comedor universitario, repartiendo volantes y lanzando arengas a los estudiantes para convertirlos en combatientes del ejército senderista. El riesgo mayor para el PCP-SL era la respuesta de los servicios de Inteligencia, con numerosos agentes en la UNSAAC. Pero la mayoría de universitarios activistas estaba vinculada a otras organizaciones políticas, sobre todo las que integraban Izquierda Unida, lo cual restó a PCP-SL y el MRTA mayores posibilidades de captación de simpatizantes. Recordemos además el importante liderazgo ejercido en la ciudad por el Alcalde Daniel Estrada, que generó un consenso regional importante.

En ese contexto aparece en 1988, a través de volantes, el Comando Rodrigo Franco, grupo de difícil identificación y al cual se le asignan varios asesinatos y atentados.

Tampoco en las punas el PCP-SL tenía, a pesar de su crecimiento, el terreno absolutamente libre, pues no sólo se enfrentaba a patrullas militares y policiales, sino también a las federaciones campesinas de las provincias altas del Cuzco, convertidas en obstáculo para la expansión subversiva.

En Espinar la Federación Provincial de Campesinos estaba fuerte. Se organizó las rondas campesinas y se hizo retroceder a Sendero. Incluso, en 1989 hemos chocado con los senderistas por que se llevaron a la fuerza a un joven al cuartel de Sendero, en el cerro Togullo, frontera Canas, Chumbivilcas y Espinar. El joven se les escapó y les quitó sus armas. Avisó a los comuneros y los comuneros inmediatamente salieron en rondas. Chaparon a los senderistas y lo entregaron a la policía» (ex secretario general de la Federación Departamental del Cuzco)

En la provincia de La Convención el PCP-SL mantenía su presencia en la zona de Incahuasi, sobre el río Apurímac, mientras que el pequeño grupo de militantes del MRTA actuaba en el valle de San Miguel, una zona más selvática. Blasco Núñez, un antiguo periodista de Radio Quillabamba, cree que «PCP-SL y el MRTA pensaron que La Convención era un terreno fértil para la lucha armada por los antecedentes subversivos de Hugo Blanco y Luis de la Puente Uceda».

El MRTA organizó algunas células en 1990 en la localidad de Palma Real y en la ciudad de Quillabamba, cuyos responsables procedían, según los testimonios, del departamento de San Martín, «por ello fueron rápidamente identificados por el servicio de inteligencia y capturados».

El discurso de las organizaciones subversivas no tenía en cuenta el buen precio del café, uno de los principales productos de la zona, que alejaba a los campesinos productores, propietarios de sus parcelas, de cualquier propuesta violentista, a la cual se opusieron firmemente los sindicatos agrarios.

Pero si las organizaciones locales y provinciales, como mencionamos en Quillabamba y Espinar, mantenían su dinámica de organización, la Federación de Campesinos del Cuzco casi pasó al anonimato pues una equivocada visión de contrainsurgencia sindicaba a sus principales dirigentes como simpatizantes de los grupos subversivos, tal como ocurrió con la persecución de Miguel Ángel Baca Madera, dirigente de la Federación, acusado y perseguido por haber estado en la columna del MIR en Mesa Pelada, junto a Luis de la Puente Uceda veinte años antes.

En este panorama complejo de la violencia, debemos agregar otros ensayos de respuesta de la sociedad civil, entre los cuales destacan los esfuerzos de las Prelaturas de Sicuani, Ayaviri, Juli y la Diócesis de Puno, donde se crearon cuatro Vicarias de Solidaridad encargadas de proteger los derechos humanos, al igual que el Movimiento Cristiano de Derechos Humanos, activo en Quillabamba.

1.3.6.2.3. Las mismas estrategias *contrasubversivas*: 1989-1992

La caja de resonancia deseada por el PCP-SL bate su pleno con el ingreso de un grupo de senderistas armados el 25 abril de 1989, a la ciudad universitaria, embanderando algunos locales, pero logran mayor repercusión con los asesinatos que ejecutan: el 2 de julio, la estudiante de enfermería Magnolia Zuñiga y pocos días después, el 7 de julio, el estudiante y dirigente del Partido Comunista-Unidad de la UNSAAC, Walter Huayllani.

En las provincias altas, el PCP-SL continúa con sus «aniquilamientos selectivos», asesinando el 26 de enero de 1989 a dos mujeres en la localidad de Quiñota, Chumbivilcas, previo «juicio popular», mientras que las rondas de las comunidades son efectivas contra los abigeos: el 9 de febrero la ronda campesina comunal capturó una banda pseudo terrorista de abigeos en Colquemarca, Chumbivilcas, y el 23 de marzo la comunidad de Collana, en Livitaca, Chumbivilcas, acordó en asamblea general formar cuadrillas para identificar a los abigeos y entregarlos a la policía, acto de traición desde la visión senderista que pretendía el monopolio de la justicia contra el abigeato. Para los responsables del PCP-SL las rondas comuneras, «mesnadas» según su definición, eran un enemigo central desde su expansión en Ayacucho desde 1985. Golpeando cualquier atisbo de autonomía, el 16 de abril de 1990 el PCP-SL atacó el distrito de Layo, provincia de Canas, asesinando al alcalde Claudio Huilca, al Juez Jorge Padín y al gobernador Benigno Paca.

Pero los hechos más graves en las partes altas de las provincias de Chumbivilcas, Antabamba y Condesuyos, no resultan de acciones senderistas sino que derivan de operativos militares entre abril y mayo de 1990, organizados desde la Base Militar de Antabamba, en Apurímac, como veremos también en el capítulo siguiente sobre la Zona III. La Base Militar de Antabamba dependía del Comando Militar de Abancay y la de Haquira del Comando Militar del Cuzco. De Antabamba salió una patrulla del Ejército compuesta por aproximadamente 21 hombres, en un «operativo de inteligencia» que desde el 19 de abril al 1 de mayo recorre, durante 12 días, cinco distritos: Antabamba, Totorá-Oropesa, Quiñota, Llusco y Santo Tomás, que pertenecen a las provincias de Antabamba en Apurímac y Chumbivilcas en Cuzco, incursionando en diferentes comunidades campesinas «sospechosas» de conformar bases de apoyo a PCP-SL: Yurenca-Collana, Tirani, Nanrapata, Ccasahui, Ccolpa, Huanso. El 25 de abril, en Ccashahui-Ranrapata, Chumbivilcas, los integrantes de esta patrulla, vestidos como campesinos, asesinan a Balvino Huamaní Medina, Juan Huisa Pacco, Rosa Huisa Pacco, Rubén Alférez Triveño, Marcos Zacarías Huisa Llamoca, Quintín Alférez Cjuro, Telésforo Alférez Achinquipa, Marcos Torres Saihua, Julio Huamaní, José Huamaní Charccahuana. Las cifras finales del patrullaje arrojan trece campesinos muertos y ocho desaparecidos, además de varios detenidos torturados y mujeres campesinas violadas. La estrategia, para algunos jefes militares, seguía siendo la misma luego de ocho años: «todos son sospechosos». Este caso, conocido nacionalmente como «el caso de Chumbivilcas», fue

sin embargo archivado por las autoridades del Ministerio Público al no haberse identificado plenamente a los responsables del Ejército Peruano que dirigieron la patrulla, que cometió diversas violaciones a los derechos humanos, actuando en el departamento del Cuzco, sin que éste haya sido declarado en estado de emergencia.

A estos operativos militares se suma, en otros casos, el abuso de los destacamentos policiales. El 29 de setiembre de 1990, en Santo Tomás, Chumbivilcas, el abogado Marcelino Valencia Álvaro es asesinado. Defensor de comunidades campesinas, de clubes de madres y profesor en el Colegio nocturno Santo Tomas, Valencia es una de las tantas víctimas de abusos policiales por razones ajenas a la lucha contrasubversiva. Detenidos el día 24 por policías ebrios, los cadáveres de Marcelino Valencia Alvaro, quien también era asesor jurídico de la Liga Agraria, y del estudiante Zacarías Pasca, son hallados el día 29 en las afueras del pueblo.

Por su parte, además de los asesinatos en campo y ciudad, los atentados y asaltos a puestos seguían siendo las acciones más comunes del PCP-SL: el 14 de agosto la explosión de un coche bomba en una calle céntrica de Cuzco deja un muerto y 18 heridos, mientras que al día siguiente es hallado el cadáver del dueño del vehículo, el ex sargento de la policía Melitón Candia Guzmán, asesinado por los senderistas. Menos de un mes después, el 7 de setiembre, un policía cae acribillado en la Av. de la Cultura mientras que tres policías morirán el 4 de mayo de 1991 durante el asalto de un destacamento senderista al puesto policial de Ollantaytambo y el 15 de junio, nuevamente en la ciudad de Cuzco, son asesinados dos policías que custodiaban la casa del Prefecto.

En las provincias altas el PCP-SL debe ahora enfrentar a las nacientes rondas campesinas promovidas por las bases militares: el 11 de junio cinco campesinos ronderos son ejecutados por una columna senderista en Chumbivilcas, mientras los medios de prensa informan que en Quiñota, Livitaca, Llusco y Ccapacmarca una columna del PCP-SL actúa activamente, como lo demuestra el 26 de julio cuando asesina a otros cuatro ronderos de la zona de Tocto, en la provincia de Chumbivilcas.

La persistencia de las acciones violentas del PCP-SL obliga la implantación del estado de emergencia en 1991 en las provincias de Chumbivilcas, Espinar, Canas, Canchis así como Paruro y Quispicanchi. El PCP-SL sigue también activo en la ciudad de Cuzco, donde el 12 de julio de 1991 asesina al catedrático de la Facultad de Economía, Iván Pérez, dirigente del PCP Unidad y asesor del alcalde provincial del Cuzco, Daniel Estrada. Por la misma época, en La Convención, el frente abierto por el MRTA, que nunca llegó a desarrollar acciones importantes, sufre el 21 de diciembre de 1991 un golpe definitivo con la muerte en un enfrentamiento con fuerzas del orden, de cuatro de sus militantes en Cedroccasa, Vilcabamba. Por el contrario, los destacamentos armados del PCP-SL aún mantienen su capacidad de acción durante 1991 y 1992, y su fuerza principal en Canchis lo muestra con asesinatos en serie, como los que ejecuta el 13 de mayo de 1992 en San Pedro, donde

asesina al alcalde, al gobernador, al presidente del agua potable y a un dirigente, quemando el municipio y dinamitando dos buses de las empresas Ormeño y Cruz del Sur.

1.3.6.2.4. La pacificación: 1993-2000

Según dirigentes del PCP-SL reclusos en el Penal de Yanamayo, los secretarios políticos del comité regional del sur fueron: Antonio Díaz Martínez, primer responsable hasta su detención; Margie Clavo Peralta hasta 1988; María Pantoja Sánchez «Miriam», desde 1988 hasta 1992, aunque fue detenida en 1991 en Juliaca y, según los dirigentes senderistas, la dirección nacional del PCP-SL movilizó a su aparato legal que logro negociar la libertad de Maria Pantoja a cambio de más de 25 mil dólares. Un año después sería capturada junto a Abimael Guzmán.

La crisis del PCP-SL, se habría producido en lo fundamental, según estos dirigentes, por la detención de Abimael Guzmán y de la «camarada Miriam», miembro del comité permanente histórico. Dice Maria Pantoja, reclusa en Aucallama, que la captura de Guzmán: «Fue el golpe más duro para el partido, para la guerra popular, para la revolución, lo que implicó un giro estratégico para la revolución. Esto implicaba que ya no podíamos conquistar el poder y que la guerra popular ya no podría desarrollarse con ese objetivo. La detención nos llevo a la crisis partidaria».

Esta visión olvida varios otros elementos que explican complementariamente la derrota del PCP-SL en Cuzco y en otras zonas también: de una parte, desde 1991, los operativos de las patrullas militares, incrementados con la declaratoria del estado de emergencia y la instalación de Bases Contrasubversivas; de otra lado, la pérdida del apoyo campesino logrado en el combate contra el abigeato pero perdido con asesinatos e incursiones a comunidades atemorizadas que prefirieron organizar sus rondas contrasubversivas en respuesta. Es decir, el esquema es similar al de casi todas las regiones del país. Los mismos dirigentes del Comité Regional, como Margie Clavo Peralta, afirman que «la fuerza principal del ejército popular fue golpeada una y otra vez, porque se comenzó a hacer acciones aisladas fuera de un plan estratégico de desarrollo». María Pantoja lo ratifica: «hemos cometido errores, limitaciones y excesos con los cuales el pueblo ha sentido el dolor, lamentamos eso. Todos los errores froman parte parte del desarrollo de lo nuevo. Muchas veces las masas han rebasado al partido. Así es la guerra» (Pantoja)

Tras la captura de Abimael Guzmán Reynoso, en opinión de Margie Clavo Peralta, si bien «el ejército guerrillero popular quedó intacto...el partido fue descabezado».

Para algunos dirigentes campesinos entrevistados, la violencia trajo «mayor atraso» a las zonas altas y a sus organizaciones campesinas. Varios proyectos de carreteras, en este espacio débilmente comunicado con las ciudades principales, quedaron trancos, pero peor aún fue el aumento de la desconfianza en las comunidades que habían visto, con simpatía, como el proyecto

senderista cumplía con ejercer una justicia que siempre estuvo ausente para ellos en el aparato del Estado.

Por su parte, el gobierno cambia de estrategia para mejorar su imagen en la lucha contrasubversiva, publicitando públicamente las capturas de subversivos. El 15 de mayo de 1993 son presentados en el Cuzco 10 integrantes del MRTA y el 17 de agosto el acto público de presentación corresponde a 17 senderistas capturados en Huayllabamba, en la provincia de Urubamba.

Ambas organizaciones subversivas, diezmadas y sin capacidad suficiente para incorporar nuevos cuadros, necesitaban de sus cuadros presos, sobre todo el MRTA que tendrá siempre como objetivo en sus áreas de operación, el rescate de sus militantes detenidos. El 28 de marzo de 1993 estalla contra un muro de la cárcel de Qenqoro un volquete lleno de explosivos, dejando un boquete por donde fugan varios presos del PCP-SL y el MRTA.

Si bien en la ciudad capital departamental los atentados a las instituciones públicas, tiendas comerciales y a la empresa de ferrocarriles originó una brusca caída del turismo en 1994, el Estado redobló la vigilancia y logró importantes capturas. Es decir, el trabajo de inteligencia contrasubversiva en el Cuzco estuvo en relación directa con la protección de la actividad turística amenazada por los atentados del PCP-SL y el MRTA, que podrían tener una repercusión internacional nefasta.

En octubre de 1993 dos eventos resumen simbólicamente el final del ciclo de violencia en Cuzco. El primero ocurrió el 8 de octubre y corresponde a la declaración del General Petronio Fernández Dávila, quien afirmó rotundamente que «en la región Inca prácticamente ya no hay elementos subversivos», a la vez que hizo un llamado a militantes de organizaciones subversivas para que se acojan a la llamada «ley de arrepentimiento». El otro evento es un ejemplo del avance de la organización de los comités de autodefensa: el 20 de octubre el mando militar entregó escopetas y municiones a nueve Comités de autodefensa de la provincia de Paucartambo. Desde 1994 casi no se registran víctimas del conflicto armado interno en la ciudad del Cuzco, las provincias altas y La Convención.

1.3.6.3. Cronología Zona II-Cuzco

9/11/1980	El PCP-SL realiza su primer ataque en el pueblo de Tinta contra el Núcleo Educativo Comunal, en la provincia de Canchis.
26/4/1981	Es denunciado Edmundo Cox Beuzeville como responsable de 27 atentados en la ciudad de Sicuani.
27/9/81	Asalto al puesto de la Guardia Civil en Huayrapata.
23/10/1981	Es asesinado el estudiante universitario Antonio Ayerbe Flores.
10/11/83	Aproximadamente 20 miembros de PCP-SL asaltaron las minas de Tintaya, provincia de Espinar, habiéndose llevado cantidad de cartuchos de dinamita.
26/5/84	Siete presos entre ellos cuatro senderistas fugan del penal de máxima seguridad de Qenqoro.

25/1/1985	El PCP-SL realiza su primer asalto contra un puesto de la GC, en San Sebastián, Cuzco.
19/4/1985	Ataque al puesto de la GC de Urcos, provincia de Quispicanchi.
27/2/1985	En Chiaraje, 18 miembros del PCP-SL asesinaron a un sargento de la Guardia Republicana.
27/7/85	Tres encapuchados atacaron el puesto policial de Zarzuela, ciudad del Cuzco, matando al GC Isauro Loayza Vargas.
28/6/86	Un regidor y un dirigente son asesinados en Layo, provincia de Canas.
27/7/1986	El teniente gobernador de Cuzco, Hermogenes Huellica, es asesinado.
Agosto 86	En los primeros días de agosto, Cuzco sufre una serie de atentados, al parecer como respuesta a la masacre de los penales.
5/2/1987	60 elementos del PCP-SL atacaron el puesto policial de Checca y Quehue, robando municiones, dos armas e incendiando el local. Los guardias civiles los persiguen y cerca de Checca hay un enfrentamiento en el que mueren Sonia Lino Ojeda y Janeth Vizcarra del PCP-SL, y el guardia Adolfo Flores queda gravemente herido.
30/1/1987	El PCP-SL ataca diversos puestos policiales y comunidades en la provincia de Canas. El 7 de febrero hace lo mismo en las provincias de Acomayo y Chumbivilcas.
25/5/87	Ataque a puesto policial de Pisac, resultando muerto el GC Jaime Quispe.
Junio 1987	En las provincias altas el PCP-SL inicia una serie de ataques contra diversos puestos policiales. Además, subversivos y abigeos actúan en los distritos de Chamac y Livitaca, Chumbivilcas.
29/8/87	La comandancia de la GC y el cuartel del ejército en Cuzco son atacados.
Diciembre 1988	Como consecuencia del asesinato de tres cooperantes en Haqira (Cotabambas, Apurímac), el CICDA retira sus programas de promoción en las provincias de Chumbivilcas y en Espinar.
26/1/1989	El PCP-SL asesina a dos mujeres en la localidad de Quiñota, Chumbivilcas, previo «juicio popular».
9/2/1989	Ronda campesina capturó banda pseudo terrorista de abigeos en Colquemarca-Chumbivilcas
25/4/1989	El PCP-SL toma la ciudad universitaria y embandera sus instalaciones.
2/7/1989	Es asesinada la estudiante de enfermería Magnolia Zuñiga.
7/7/1989	Es asesinado el estudiante y dirigente del Partido Comunista de la UNSAAC, Walter Huayllani.
23/3/1990	La comunidad de Collana en Livitaca (Chumbivilcas), acordó en asamblea general, formar cuadrillas e identificar a los abigeos para entregarlos a policía.
16/4/1990	El PCP-SL ataca el distrito de Layo, provincia de Canas, asesinando al alcalde Claudio Huilca, al Juez Jorge Padín y al gobernador Benigno Paca.
25/4/1990	En Ccachahui, Ranrapata, Chumbivilcas, 21 militares vestidos como campesinos asesinan a Balvino Huamaní Medina, Juan Huisa Pacco, Rosa Huisa Pacco, Rubén Alférez Triveño, Marcos Zacarías Huisa Llamoca, Quintín Alférez Cjuro, Telésforo Alférez Achinquipa, Marcos Torres Saihua, Julio Huamaní y José Huamaní Charccahuana.
14/8/1990	Un muerto y 18 heridos por explosión de coche bomba en la calle Maruri, Cuzco. Al día siguiente hallan muerto al dueño del vehículo, el ex sargento de la policía Melitón Candia Guzmán.
7/9/1990	En ataque subversivo matan a policía en Av. de la Cultura, Cuzco
29/9/1990	Los cadáveres del bachiller en Derecho Marcelino Valencia Alvaro, asesor jurídico de la Liga Agraria, y el estudiante Zacarías Pasca son hallados el día 29 en Santo Tomás, Chumbivilcas. Días antes habían sido detenidos por la policía.
4/5/1990	Terroristas mataron a tres policías, en el puesto policial de Ollantaytambo
11/6/1990	5 campesinos son ejecutados por subversivos en Chumbivilcas. Al día siguiente Luis Valer, hermano de Tany Valer, diputado de IU, es torturado por paramilitares y muere en el hospital, en la provincia de Espinar
Junio 1991	Una versión extra oficial informa que en Quiñota, Livitaca, Llusco y Ccapacmarca

	estaría actuando una columna del PCP-SL, a la fecha habrían 5 campesinos muertos.
15/6/1991	Asesinato de dos policías que custodiaban la casa del Prefecto en Cuzco.
12/7/ 1991	El PCP-SL asesina al catedrático de la Facultad de Economía, Iván Pérez, dirigente del PCP Unidad y asesor del alcalde provincial del Cuzco, Daniel Estrada.
26/7/1991	4 ronderos de la zona de Tocto en la provincia de Chumbivilcas son asesinados.
21/12/1991	Mueren 4 subversivos del MRTA en Cedroccasa (Vilcabamba)
13/5/1992	El PCP-SL incursiona en San Pedro (Canchis) y asesina al alcalde, al gobernador, al presidente del agua potable y a un dirigente, quemando el municipio y dinamitando dos buses de las empresas Ormeño y Cruz del Sur.
28/3/1993	Ataque contra la cárcel de Qeqoro con un volquete lleno de explosivos, logrando escapar varios subversivos del PCP-SL y el MRTA.
15/5/1993	El gobierno cambia de estrategia presentando públicamente sus logros en capturar presuntos subversivos. El 15 de mayo son presentados en el Cuzco 10 subversivos del MRTA que fueron capturados en el sector Selva Colorada, en Madre de Dios.
17/8/1993	Son presentados 17 presuntos senderistas capturados en Huayllabamba, en la provincia de Urubamba.
20/9/1993	El PCP-SL asesina al alcalde de Pomacanchi Julio Choque Mamani, del FRENATRACA.
8/10/1993	General Petronio Fernández Dávila declara que en la región Inca prácticamente ya no hay elementos subversivos. Llamó a acogerse a la ley de arrepentimiento.
20/10/1993	Entrega de escopetas y municiones a nueve Comités de Autodefensa de la provincia de Paucartambo.

1.3.7. Zona III: Apurímac

En el departamento de Apurímac es posible distinguir dos grandes espacios de enfrentamiento entre los agentes del Estado y el PCP-SL. Por un lado, las provincias de Andahuaylas y Chincheros y por otro, las provincias de Abancay, Aymaraes, Grau, Antabamba y Cotabambas. La primera zona ha sido incluida en la Zona sur central de la CVR (*Ver: Zona IV de Ayacucho*), por lo tanto este capítulo sólo reconstruye la historia de la violencia en las provincias restantes del departamento de Apurímac.

1.3.7.1. Datos generales

El departamento de Apurímac, descrito por Antonio Raymondi como «un papel arrugado» por su topografía cordillerana y los profundos abismos por donde discurre el río Apurímac, es junto con Huancavelica y Ayacucho, uno de los más pobres del país, con la tasa de fertilidad más alta del Perú, el 62% de población rural y el 36.9% analfabeta, la tasa más alta del Perú, siendo el quechua el idioma predominante. La capital del departamento, Abancay, a 2 378 metros de altitud, tiene una población de 58 221 habitantes, con una tasa de crecimiento del 7.4% al año, tasa sólo superada por Puerto Maldonado. Entre 1981 y 1993, el crecimiento equivale a 136.60% debido a la migración del campo a la ciudad.

Apurímac 1981-1993 Población según provincias

	1981	1993	% crec.
Abancay	62,024	95,092	53%
Antabamba	14,613	12,462	-15%
Aimaraes	35,084	28,886	-18%
Grau	26,408	26,678	1%
Cotabambas	40,151	42,008	5%
TOTAL	178,280	205,126	15%

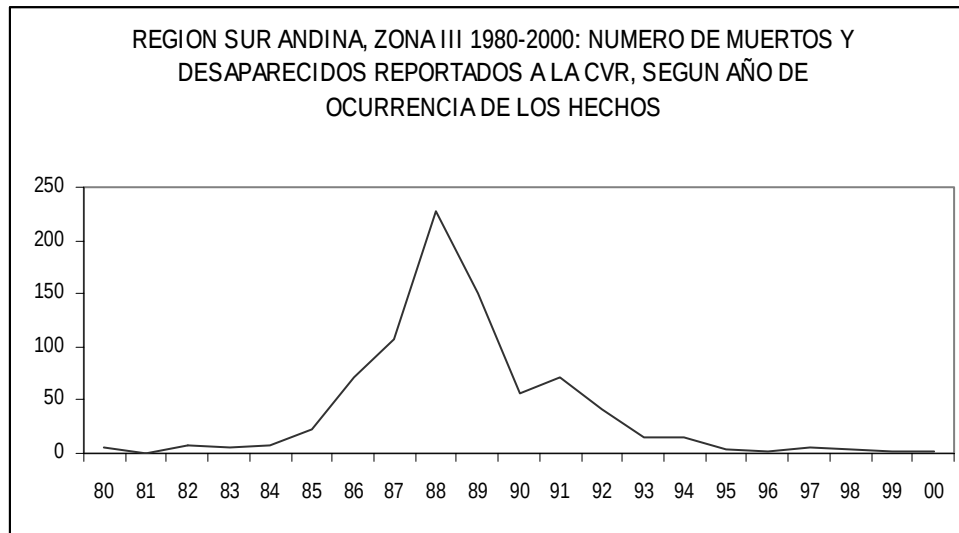
Fuente: INEI

El río Apurímac y sus afluentes forman los diversos valles interandinos en donde se ubican las sedes de las capitales de provincias: Tambobamba (Cotabambas), Chuquibamba (Grau), Antabamba (Antabamba) y Chalhuanca (Aymaraes). La agricultura de secano, principal actividad de los minifundios mayoritarios incluidos en las comunidades campesinas, está orientada a productos de panllevar, con métodos y técnicas tradicionales que explican la reducida productividad y los escasos ingresos de la población campesina, los más bajos del Perú en estas provincias apurimeñas (donde no incluimos Andahuaylas y Chincheros), principal causa de la migración a las ciudades. La ganadería extensiva, con ganado de baja calidad genética y baja productividad de leche y carne, aprovecha los extensos pastos naturales sin utilizar métodos y técnicas modernas como la inseminación artificial. Sin embargo, Apurímac es el cuarto departamento productor de vacunos del Perú, con el 7.84% del total nacional y el quinto departamento productor de alpacas, con el 6.22% del total nacional. Esta importante crianza está en relación directa con complejas redes de abigeos, que caracterizan las provincias altas de Apurímac, Cuzco y Arequipa, colindantes entre ellas, y que tienen, como veremos, incidencia en el ciclo de violencia regional.

Los gobiernos de Acción Popular y del Partido Aprista Peruano son recordados en Apurímac por sus gruesos errores, que al final, se convirtieron en razones adicionales para que los jóvenes se incorporen al PCP-SL. El sacerdote Tomas García recuerda que los gobiernos de Belaunde y García: «arrasaron el aparato publico con gente de sus partidos. Ellos vivían bien y otra gente lleva una vida de miseria. A estos gobiernos les faltó ética. En vez de fortalecer las políticas sociales, apristas y acciopopulistas se han dedicado a las políticas de desarrollo personal o de partido. La gente se cargaba de ira y se motivó con esas actitudes el terrorismo»

1.3.7.2. Historia de la violencia

Como dijimos, las provincias de Andahuaylas y Chincheros concentran la mayor violencia en Apurímac y representan una continuidad del espacio ayacuchano. El resto del departamento de



Apurímac reúne dos espacios de la violencia: uno es la ciudad capital de Abancay y el otro las zonas alto andinas. En ambas zonas se registra, en comparación con otras regiones, un índice menor de violencia, resaltando 1986-1992 como los 1os años de mayor cantidad de muertos.

REGIÓN SUR ANDINO, ZONA III, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	813	6	-	8	6	6	22	72	107	226	149	56	72	41	14	14	4	2	2	4	1	1
ABANCAY	191	1	-	-	1	3	5	23	18	71	45	9	2	7	2	2	1	-	-	1	-	-
ANTABAMBA	84	5	-	-	-	-	-	6	6	23	14	14	3	9	1	3	-	-	-	-	-	-
AYMARAES	381	-	-	5	3	3	14	43	75	83	37	18	60	20	8	4	2	2	2	1	-	1
COTABAMBAS	79	-	-	2	2	-	-	-	-	35	33	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
GRAU	78	-	-	1	-	-	3	-	8	14	20	14	4	4	3	3	1	-	-	2	1	-

1.3.7.2.1. Inicio de la violencia: 1980-1987

Para el PCP-SL, el noroeste del departamento de Apurímac era parte del Comité Regional Principal, junto a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, concentrando sus acciones en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, colindantes con la zona del río Pampas, mientras que Abancay y su zona de influencia en las provincias altas apurimeñas se convirtieron en escenario secundario vinculado en la práctica al Comité Regional del sur.

El circuito educativo utilizado por el PCP-SL y el discurso radical eran en 1980, reconocibles en Abancay, pequeña ciudad cuyo crecimiento vendrá precisamente durante el ciclo de violencia. En su proceso de asentamiento partidario PCP-SL buscó ganar audiencia y hegemonía en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTEP de Apurímac. En ese intento se desencadenó una fuerte confrontación con el PCP-Patria Roja. La fuerza de Patria Roja impidió, de alguna manera, el avance de PCP-SL en el magisterio de Apurímac pero éste logró captar un pequeño grupo de profesores activistas, con fuerte influencia en la dirigencia departamental del

SUTEP. Para tal propósito, elaboraron un discurso centrado en la descentralización de la Derrama Magisterial, sustentando la idea que los fondos aportados por los docentes del departamento de Apurímac fueran manejados con autonomía en Abancay. Esta predica captó audiencia y permitió a algunos militantes del PCP-SL ocupar cargos en la dirigencia departamental del gremio magisterial.

Después de Andahuaylas y Chincheros, la guerra senderista se trasladó hacia las provincias de Abancay, Aymaraes, Antabamba, Cotabambas. En esta zona, particularmente en Aymaraes y Antabamba, existían minifundios y una agricultura de supervivencia. Allí no se produjeron movilizaciones campesinas para tomar la tierra, y los comuneros utilizaron otros mecanismos de acceso a la propiedad antes de la reforma agraria, como la compra de la hacienda Amoray por la comunidad campesina de Colquebamba.

Posteriormente, la violencia se expandió hacia Abancay, por la zona de Cachora, Huanipaca, Curahuasi. Entre 1980 y 1985 PCP-SL se dedicó en Abancay a un proceso de formación ideológica pero en las zonas altas se trató de solucionar un problema endémico: el abigeato.

1.3.7.2.1.1. El abigeato como argumento

Al iniciar sus acciones armadas en cada región, el PCP-SL buscó siempre vincular su propuesta subversiva con reivindicaciones compartidas por la población, como fue el caso, si queremos resumirlo en pocas palabras, de la reestructuración de la tierra en Puno o en Cajamarca, la marginalidad del estado en Ayacucho, los precios de los derivados ilícitos de coca en el Huallaga. En el caso de las provincias altas de Apurímac, el «enganche» inicial senderista fue combatir el abigeato para ganar una base social de apoyo a su «guerra popular».

El escaso ganado familiar, principal capital de las familias campesinas, era objeto de robo por abigeos que contaban con la complicidad de las autoridades locales. La justicia senderista no tardó en mostrar su crudeza:

Por ejemplo, en el distrito de Antilla los senderistas decapitaron a una persona, que viene a ser mi padrino, por que la población lo miraba como abigeo. En plena plaza pública hicieron el ajusticiamiento que ellos acostumbraban hacer y lo mataron degollándolo. Los senderistas se informaban de los problemas comunales y locales, luego identificaban a los responsables para asesinarlos.

Son palabras del Secretario de organización de la Federación Departamental de Campesinos del Cuzco, Valentín Roque, oriundo del distrito de Haquira. En su versión:

Los abigeos asaltaban a los campesinos, se apropiaban de sus vacas, alpacas. Inclusive entraron a robar papa, chuño, maíz. Los campesinos se estaban volviendo más pobres. Ya no había tranquilidad. Las autoridades eran abusivas, tal es el caso del Juez de Paz. El actuaba a favor de los abigeos, la justicia era para los abigeos. Las personas que habían

sufrido robos nunca encontraban justicia. Se les remitía a la capital de la provincia luego a la capital del departamento. Los abigeos violaban a las esposas e hijas de los denunciantes. Los policías abusaban permanentemente favorecían a los abigeos. Los gamonales también eran abusivos. No permitían la educación de los hijos de los campesinos. En esa realidad, PCP-SL, llegó a Haquira. Mataron al Juez Ernesto Valdivia por corrupto. Persiguieron a los policías que hacían injusticias, persiguieron a los gamonales y especialmente a los abigeos. Después había una calma total. Los campesinos dejaban su ganado en el campo sin cuidado alguno.

Según María Pantoja, dirigente senderista del Comité Regional del Sur, integrante del Comité Central del PCP-SL, presa actualmente en Aucallama, el PCP-SL impuso orden y logró organizar, en lucha exitosa contra las bandas de abigeos, un «nuevo orden», sustentado en bases de apoyo y Comités Populares instalados en las provincias altas.

Eliminando el sistema de autoridades públicas, el PCP-SL fue juez aceptado en muchas comunidades de altura, pretendiendo incluso combatir la infidelidad. Pero su propuesta permitió, como en otras regiones, el ejercicio de mecanismos de venganza. En efecto, la guerra interna siempre fue aprovechada, en cualquier región, para encarar conflictos familiares, comunales y locales, acusando ante los mandos senderistas a los rivales con el fin de lograr su eliminación bajo la acusación de «soplón», «agente de los militares», «gamonal abusivo» o incluso «infiel».

Entre 1980 y 1985, el abigeato alcanzó en las zonas altas de Apurímac -al igual que en las punas vecinas de Cuzco y Arequipa- índices nunca vistos. En ese contexto se explica el apoyo de diversas comunidades a los grupos armados senderistas, apoyo que se mantendrá por algún tiempo, hasta que los asesinatos e incursiones generen un terror mayor al de los abigeos.

Las primeras acciones violentas continuas del PCP-SL suceden entre febrero y abril de 1986, con una serie de asesinatos en diversas comunidades de la provincia de Aymaraes como Toraya, Lucre, Tuturillo y Colcabamba. En los meses siguientes hasta julio los ataques y enfrentamientos se extienden a la provincia de Antabamba. El 7 de julio de aquel año, el PCP-SL tiene su primer enfrentamiento con el ejército en Soccos, y el 11 lanza su primer ataque a un puesto policial en Chucapunte, ambos en la provincia de Aymaraes. Entre julio y agosto de 1987 la provincia de Abancay atraviesa una coyuntura violenta. El PCP-SL lucha por el control de carreteras y puentes y se producen varios ataques a poblados y comunidades campesinas. Los tres puentes principales de la carretera a Aymaraes son dinamitados, y durante más de un año los pobladores quedan obligados a transitar por oroyas. La estrategia senderista restringe, con el control de caminos, el tránsito de la población, tratando establecer «zonas liberadas» en las partes altas, donde no existía ningún gremio campesino en funcionamiento.

1.3.7.2.2. La mayor presencia del PCP-SL: 1988-1989

En 1988 el PCP-SL alcanza su mayor desarrollo en Aymaraes, con el respaldo de «miles de simpatizantes» si aceptamos la afirmación del sacerdote Tomas García, quien estima que: «habrá

unas dos mil personas en Apurímac que apoyaron a PCP-SL. La mayoría, fueron obligados a colaborar pero también hubo ciertas concientizaciones».

Pero, tal como sucede en todas las regiones, en la memoria histórica reconstruida de los pobladores de Apurímac se afirma, rotundamente, que el ejército senderista que operaba en el departamento estaba compuesto por «foráneos», sobre todo «ayacuchanos y limeños». Es decir, en esa memoria que exime de responsabilidad, quienes portan armas son ajenos a las sociedades locales mientras que los oriundos «simpatizan» o son obligados a participar en las iniciativas senderistas, pero en ningún caso disponen de armamento, son meramente «masa» que debe ser educada.

El 13 de junio de 1988, la provincia de Cotabambas es declarada como zona de emergencia por 30 días, siendo la primera provincia del sur andino, además de Andahuaylas, donde se implanta este régimen de excepción que pretende contrarrestar el avance senderista. Pero este avance no se detiene por ello, y lo prueba la decisión de constituir Comités Populares desde fines de 1988. En efecto, la dirección regional del PCP-SL al parecer evaluó que contaba con suficiente poder como para liberar zonas aunque en este periodo, uno de los líderes senderistas más importantes de la zona, David Orozco, habría muerto en un enfrentamiento en el distrito de Circa.

La agresividad de las columnas senderistas tiene un hito particular en la incursión de su Fuerza Principal zonal al pueblo de Haqira, Cotabambas, el 5 de diciembre de 1988, donde asesina a dos pobladores y a dos cooperantes franceses y uno peruano trabajadores del CICDA, institución que ejecutaba proyectos de desarrollo local. Esta incursión formó parte de una campaña senderista que durante casi tres meses asoló Cotabambas y Chumbivilcas, asesinando tenientes gobernadores, dirigentes campesinos y abigeos.

En las punas, el terror obliga a los pobladores de Tambobamba a emigrar masivamente hacia Cuzco y Abancay. Como señaló una nota periodística de la época: «Todos los pobladores tienen miedo de permanecer en Tambobamba porque consideran que de un momento a otro pueden caer en manos de los terroristas». La situación es similar en Antabamba, donde los asesinatos generan igualmente un flujo migratorio hacia Abancay que no tiene precedentes.

1.3.7.2.3. Las estrategias contrasubversivas y la pacificación: 1989-1996

En Haqira los militares instalaron su base militar y se dedican a averiguar quienes colaboraron con PCP-SL, con quienes hablaban. Entonces mataron a todas aquellas personas sospechosas de senderistas. En diciembre de 1989 incendiaron toda una comunidad campesina. Los militares nos trataban peor que al perro. Asustados, desconfiamos de todo (Valentín Roque, Dirigente Fed.Camp.)

A partir de 1988 se instalaron alrededor 13 bases contrasubversivas en las localidades de Abancay, Santa Rosa, Capaya, Sañayca, Chalhuanca, Cotaruse, Quillcaccasa, Chuquibambilla, Antabamba, Totorá, Oropesa, Coyllurqui y Haqira, que iniciaron una represión indiscriminada contra las

comunidades campesinas de la zona, reproduciendo el mismo patrón de violación de derechos fundamentales que en el departamento de Ayacucho y Huancavelica algunos años antes.

Pero debemos reconocer los éxitos militares propiamente dichos, como el desbande de un grupo armado senderista el 12 de abril 1989 luego de un enfrentamiento con una patrulla del ejército en Cotabambas. Repitiendo la misma secuencia de otras regiones, en Apurímac también se comienzan a organizar Comités de Autodefensa conforme las Bases Contrasubversivas se asientan en diferentes distritos.

Según las entrevistas realizadas, el éxito de las patrullas militares y de los ronderos es posible debido, entre otros factores, a la crisis del PCP-SL que se inicia, paradójicamente, cuando decide implantar sus Comités Populares abiertos, convirtiéndolos en un blanco mas efectivo para las fuerzas armadas, que identifican las zonas de presencia senderista y proceden a su represión. Así, los principales mandos de las células, de la fuerza principal, de los grupos de base son identificados y capturados. La crisis senderista se completó cuando el campesinado se desencanta de su justicia pues el terror senderista resulta ser más terrible que el derivado de los actos de abigeato. Además, las fuerzas armadas habían entrado también a combatir el abigeato demostrando fuerza y contundencia. La población dejó de creer en la predica senderista. Tampoco debemos olvidar que otro elemento central que condujo a la derrota senderista fue, como vimos, la muerte de algunos de sus mandos locales.

La ofensiva estaba en 1990 del lado de las Bases Contrasubversivas, a veces con estrategias ilegales. Describimos en la Zona II de Cuzco como en 1990 ocurren hechos graves en las partes altas de la provincia de Chumbivilcas, Antabamba y Condesuyos. Precisamente, desde la Base Militar de Antabamba, en Apurímac, salió la patrulla del Ejército que durante 12 días, en cinco distritos (Antabamba, Totorá-Oropesa, Quiñota, Llusco y Santo Tomás) de Antabamba y Chumbivilcas, irrumpe en comunidades campesinas «sospechosas» de conformar bases de apoyo al PCP-SL, con el saldo de más de una decena de campesinos muertos: «...la matanza de los campesinos en Qachaui no hace el PCP-SL, sino los militares que tienen su base en Haquira y venían supuestamente a vigilancia y rondas, y se supone que PCP-SL tenía su presencia pero no un sitio fijo donde estén acuartelados, sino su presencia era en forma esporádica...»

Mientras la Fuerza principal del PCP-SL se retira ante el avance de la patrulla, los campesinos quedan a merced de las decisiones, igualmente violentas, de los jefes de esa patrulla. Otro operativo sumamente violento contra la población ocurrió en la comunidad de Lagualagua, donde los militares quemaron todas las viviendas campesinas argumentando que la comunidad era un refugio de los delincuentes terroristas. Los sobrevivientes se vieron obligados a huir del lugar. Esta dura estrategia trataba de ser compensada con programas de acción social que el ejército implementaba después de las operaciones contrasubversivas. Los campesinos recuerdan hoy la entrega de alimentos, la atención médica y odontológica, los servicios de peluquería, como una forma de ganar la colaboración campesina para derrotar a los subversivos. Pero, de la misma

manera, queda el recuerdo vivo de varios desaparecidos en las bases militares, entre las cuales se señala como la más brutal la de Capaya, en Aymaraes, sobre la cual ha recibido diversas denuncias la CVR respecto a la existencia de fosas comunes clandestinas.

En 1992, entonces, las acciones de violencia se concentran en las provincias de Antabamba y Aymaraes, pero el repliegue senderista se acelera con la captura de Abimael Guzmán. Los golpes violentos de los grupos senderistas se convierten en hechos cada vez más aiPCP-SLados, como el del 22 de julio de 1994, cuando un grupo de senderistas hostiga la base militar en la carretera Abancay- Chuquibambilla., en Grau. La última acción de envergadura registrada ocurre el 26 de marzo de 1996, cuando un grupo del PCP-SL hostiga la BASE Santa Rosa, ubicada en carretera Abancay-Chalhuanca, en Aymaraes. Con ella se cierra el ciclo de violencia iniciado en 1986.

1.3.7.3. Cronología Zona III- Apurímac

7/7/1986	El PCP-SL tiene su primer enfrentamiento con el ejército en Soccos, y el 11 de julio su primer ataque a un puesto policial en Chucapunte, ambos en la provincia de Aymaraes.
1987	Entre julio y agosto, la provincia de Abancay atraviesa una coyuntura violenta. El PCP-SL lucha por el control de carreteras y puentes. Se producen varios ataques a poblados y comunidades campesinas. Durante el resto del año, la violencia se extiende a las provincias de Grau y Cotabambas.
9/8/1987	El PCP-SL asesina al prefecto aprista Víctor Urviola en Abancay, Apurímac
13/6/1987	La provincia de Cotabambas es declarada en zona de emergencia por 30 días. Se trata de la primera provincia del sur andino, además de Andahuaylas, en ser declarada en emergencia
Enero 1988	Abancay atraviesa otra coyuntura violenta. Se producen varios asesinatos de autoridades locales (alcaldes, teniente alcaldes, gobernadores, etc).
5/12/1988	El PCP-SL asesina en el distrito de Haqira (Cotabambas), a dos cooperantes franceses y un peruano del Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA), un centro de promoción francés. Dos personas más murieron en el incidente. Durante el mes siguiente, el PCP-SL asesinó en las zonas altas a cerca de 50 personas entre tenientes gobernadores, dirigentes campesinos y abigeos.
28/12/88	Pobladores de Tambobamba emigran masivamente al Cuzco y Abancay desde el 10 de diciembre, día en que el PCP-SL mató a tres personas en Mara y en Haqira hubo otros ajusticiamientos.
12/4/1989	Se produce un enfrentamiento entre el PCP-SL y una patrulla del ejército en Cotabambas. Se comienzan a organizar Comités de Autodefensa en las diversas provincias del departamento.
24/8/1989	El sacerdote italiano José Viscardi es secuestrado y amenazado de muerte en Tambobamba, provincia de Cotabambas.
1992	Las acciones de violencia se concentran en las provincias de Antabamba y Aymaraes.
22/3/1993	Se produce el ataque al caserío de Canchara, en la provincia de Abancay. Matan al ganado, se quema las viviendas y se viola a varias mujeres.
11/6/1994	Se prolonga el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Chincheros, Andahuaylas, Abancay y Aymaraes.
22/7/1994	El PCP-SL hostiga la base militar en la carretera Abancay- Chuquibambilla, en Grau.
26/2/1996	PCP-SL atenta contra el local de la Corte Superior de Apurímac, en la ciudad de Abancay.
26/3/1996	PCP-SL hostiga la BAS Santa Rosa, ubicada en carretera Abancay-Chalhuanca

	(provincia de Aymaraes). Al parecer sería la última acción de importancia de PCP-SL.
1997	A partir de 1997, los hechos de violencia son casi inexistentes, salvo acciones de propaganda.

1.4. LA REGIÓN NORORIENTAL Y EL NARCOTRÁFICO

Los miles de testimonios recibidos en el ámbito de la sede Nororiental de la CVR de familiares de víctimas del conflicto armado interno, representan un registro rotundo de la intensidad de la violencia en esta zona del país. Muchos hechos de la violencia, sin embargo, se desconocen, en parte debido a la vastedad de la zona y a las complicadas características de la violencia, que en la región Nororiental no sólo nos remiten a la subversión y la contra subversión, sino también a la presencia del narcotráfico y políticas de interdicción, que convergen en el marco de las múltiples demandas de los cultivadores de coca hacia el gobierno peruano y a la comunidad internacional.

Dos características destacan en la región nororiental y expresan tal dificultad: de una parte, la complejidad de la violencia, debido a la gran diversidad de actores políticos armados durante el conflicto armado interno, y de otra parte la persistencia, aún hoy, de grupos móviles remanentes del PCP-SL en algunas zonas del Huallaga.

En efecto, la región sigue siendo escenario de la actividad residual del PCP-SL. Al mismo tiempo, se mantiene limitada la acción de los organismos de derechos humanos y la cobertura periodística, a diferencia de otros lugares, a pesar de la magnitud de violencia existente en la zona.

1.4.1. Datos generales y antecedentes

La sede Nororiental de la CVR está conformada por los departamentos de Huánuco, San Martín, Ucayali y parte del departamento de Loreto. En conjunto, abarca 26 provincias y 173 distritos donde habitan alrededor de dos millones de habitantes. La tasa de crecimiento demográfico anual de la región es la más alta del país, que entre 1940 y 1981 fue superior al promedio nacional (4.3 frente a 2.6 de promedio nacional), superando el millón de habitantes.

Región Nororiental 1981-1993: Población. Fuente: Censo Nacional 1993

Departamento	1981	1993	Crecimiento
Huánuco	484,780	654,489	35%
San Martín	317,751	552,377	74%
Ucayali	200,669	314,810	57%

**Sin la provincia de Ucayali, ahora en Loreto*

Fuente: Censos Nacionales

La actividad económica principal es la agricultura, seguida de la extracción forestal, la pesca y, en menor escala, la minería. El turismo y los servicios ocupan promedios bajos, aunque sus posibilidades de mayor desarrollo han aumentando crecientemente en los últimos años.

El departamento de Huánuco cuenta con tres cuencas hidrográficas importantes, formadas por tres grandes ríos, Huallaga, Pachitea y Marañón. Las provincias de Ambo, Huánuco, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Pachitea, Yarowilca, Lauricocha y Marañón forman parte del eje serrano

con algunos distritos ubicados en la Ceja de Selva. La mayoría de los pueblos de la sierra de Huánuco carece de servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable, la atención a la salud es limitada y los centros educativos escasos. Las trochas carrozables son prácticamente caminos de herradura donde los vehículos sufren desperfectos o se accidentan. En los últimos años, en esta zona, la presencia subversiva ha sido reemplazada por la delincuencia común.

El flanco oriental de la cordillera central es selva alta o ceja de selva, característica de las provincias de Leoncio Prado en Huánuco, y de la mayor extensión del departamento de San Martín, y luego selva baja, en la cual se ubican los departamentos de Ucayali (que en 1982 queda conformado con sus actuales cuatro provincias) y Loreto. Aquí las mayores referencias son los grandes ríos y sus afluentes, en cuyas riveras se constata la mayor concentración poblacional y las principales ciudades. La carretera Tingo Maria-Pucallpa, bautizada como Federico Basadre, terminada en 1943, ha sido el eje de ocupación y crecimiento de la región del Ucayali.

Los proyectos colonizadores y la carretera Marginal

En la segunda mitad del XX, la población de la región creció sostenidamente hasta multiplicarse por diez, presentando en los últimos períodos intercensales la tasa de mayor crecimiento demográfico del país, conformándose sociedades locales en las cuales los inmigrantes recientes son amplia mayoría.

A partir de la década del 40 la acción colonizadora se convierte en un proceso permanente, reforzado por la intervención del Estado, con programas de infraestructura vial y apoyo a asentamientos humanos de colonizadores, orientados fundamentalmente a la ampliación de la frontera agrícola.

Así fue concebida la colonización Tingo Maria-Tocache, impulsada en la década de 1960 en base a la construcción de la carretera Marginal de la Selva a lo largo del Río Huallaga, que con los años transformó las márgenes del Huallaga, con su cultivo tradicional de coca destinada al consumo de la población andina, en espacios de cultivo meramente mercantil de la hoja para el mercado ilícito, con población colona cada vez más numerosa.

Casi desde su construcción, la carretera Marginal fue crucial para el asentamiento de nuevas comunidades, con población llegada de la sierra de Huánuco y Ancash y de la selva de San Martín o Loreto, atraída desde la década de 1970 por la posibilidad de hacer dinero mediante el cultivo de la coca o el narcotráfico.

La ocupación de la selva alta ha generado sociedades rurales complejas en la que se fusionan formas de cultura nativa con las de colonos, ribereños, y sobre todo migrantes andinos de escasos recursos cuya presencia en la región fue creciente en el periodo de estudio.

La colonización de la selva fue promovida por el Estado como sustituto de la reforma agraria, proceso que alcanzó su mayor auge en la década de 1960 cuando se intensificaron los programas de colonización dirigida durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, a la vez que se dio prioridad al programa vial destinado a incorporar a la economía nacional los recursos de la Amazonía, pensando con esta política reducir la presión sobre la tierra en la sierra y la migración hacia Lima Metropolitana.

Tales políticas no surtieron el efecto deseado. Solo uno de cada 5 emigrantes de la sierra eligió la selva alta como destino; el resto se dirigió a la costa u otras ciudades de la sierra con mayor desarrollo. Las políticas que en su conjunto fomentaron la migración desde la sierra y la costa hacia la selva alta, se reflejan en la ampliación de la frontera agrícola, como observamos en los tres años anteriores al inicio de la violencia:

AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA ENTRE 1977 Y 1979.

Hectáreas cultivadas			
	1977	1978	1979
Huánuco			
Sierra	56,942	55,078	54,400
Selva	47,192	49,074	50,965
San Martín	128,967	147,772	168,978
Loreto	97,887	100,376	107,687
TOTAL	330,988	352,300	382,030

FUENTE: Estadística Agrícola Perú 1979- Ministerio de Agricultura.

Según el Censo Agropecuario de 1993, la diferencia entre sierra y selva del departamento de Huánuco es notoria en cuanto a la dimensión de las unidades agrarias. Mientras que en la Sierra la gran mayoría de familias dispone entre 1 y 5 hectáreas, en la selva las unidades agrarias mayores de 5 hectáreas, representan la mayoría. En la selva huanuqueña la mayor parte de superficie agrícola está cubierta por unidades agrarias mayores a 50 hectáreas.

En el departamento de San Martín la fragmentación de la propiedad es similar a la sierra de Huánuco, pues la gran mayoría de unidades agrarias de la sierra disponen de 1 a 5 has., mientras que en la selva las unidades agrarias disponen más de 20 hectáreas en promedio.

Las parcelas existentes en cada unidad agraria también marcan las diferencias entre la sierra y la selva. Las provincias serranas de Ambo, Dos de Mayo, Huánuco, y parcialmente Huamalíes, muestran mayor cantidad de parcelas por cada unidad agraria, mientras que en la selva existe una correspondencia entre una unidad agraria y una parcela.

Influencia de la coca y el narcotráfico en la economía y la sociedad regionales

La región se configuró en la primera mitad del S. XX -teniendo a los principales ríos y a las carreteras de penetración como ejes de comunicación y articulación- a partir de actividades primigenias como la explotación del caucho, el barbasco y la extracción de la madera, esta última importante fuente de ingresos hasta la actualidad. Pero es sobre todo la coca en San Martín y Huánuco, la que configura las características regionales al inicio del ciclo de violencia en la década de 1980, quedando Ucayali y Loreto en otra dinámica más tradicional de funcionamiento.

En la década de 1940, familias de emigrantes japoneses fueron los primeros en procesar legalmente pasta básica de cocaína, en la ceja de selva del distrito de Chinchao y en el valle del Pampayacu. La droga procesada a partir de la coca se trasladaba a la ciudad de Lima y desde aquí al Japón para ser utilizada en la farmacología, según versiones oficiales. Luego, ante la ausencia de controles por parte del gobierno, los empleados y obreros de los japoneses, migraron a la zona de Tingo Maria, en la década de 1950, para cultivar coca y, con el transcurrir de los años, empezar a procesar pasta básica de cocaína, pero de manera ilegal esta vez.

El cultivo de coca aumentó en la selva de Huánuco en forma progresiva desde 1945, en San Martín desde 1960 y en Ucayali desde 1970, incrementándose de 600 has totales en 1950 a 100 mil has calculadas (algunos mencionan 200,000) para 1995, año de apogeo del cultivo. Así, en el departamento de Huánuco, el cultivo se multiplicó más de diez veces entre 1972 (2,460 has) y 1985 (28,800 has) (*Ver: Estudios sobre Narcotráfico en este mismo tomo*).

La actividad cocalera, en crecimiento sostenido durante casi dos décadas, se explica fundamentalmente por el narcotráfico internacional y la llegada al Alto Huallaga de los carteles de colombianos y mexicanos. Posteriormente, este tráfico ilícito será controlado por los narcotraficantes peruanos que aprendieron el oficio inicialmente como financistas o compradores de cocaína.

El incremento de la frontera agrícola entre los años 1977-79 fue de 52,103 has, dentro de las cuales ocupan un lugar central los cultivos de coca, que son los que más crecieron en producción y productividad. Existe una discusión inacabable sobre la extensión total del área cocalera, y las cifras varían significativamente según la fuente o el autor que las propone, pero el crecimiento espectacular de la coca se constata entre 1980 y 1995 cuando, como ya mencionamos, este cultivo alcanzó entre 120 y 200 mil hectáreas, involucrando a 150 mil familias. De ese total, el 55% se encontraba en el Alto Huallaga, y el 95% de la producción de hoja estaba destinada al narcotráfico.

La ampliación del cultivo de la coca desde 1960 en otras zonas como el Marañón, Pachitea, Tocache y Aguaytia es paralela, como vimos, a la construcción de la carretera Marginal y la formación de asentamientos de colonos. En 1990, según algunos expertos de la ONU, los cicales, que ya ocupaban cerca de 60 mil hectáreas sólo en el Alto Huallaga y 200 mil en todo el país, mantenían directa o indirectamente la economía de más de un millón de peruanos.

Con la llegada de los carteles de la droga de Colombia y México, el negocio ilícito experimenta un auge espectacular, ciclo que comienza en la década de 1970 y durará hasta 1995, alcanzando niveles impresionantes en la producción y comercialización de la droga, conformando una economía que implica el ingreso de millones de dólares americanos en un boom que desarticuló toda estrategia de desarrollo sostenido, provocando la caída en la producción agrícola lícita y el incremento de variadas formas de violencia, en algunos casos impulsadas por estrategias que dieron prioridad a la interdicción al narcotráfico mediante diverso tipo de operativos (*ver capítulo sobre Narcotráfico en este mismo tomo*). Esta política de interdicción sirvió como caldo de cultivo para que el PCP-SL

capitalizara la situación de malestar e inestabilidad social, a fines de la década de 1970, iniciando entonces la formación de sus cuadros y desarrollando luego acciones armadas.

De la sierra de Huánuco, Pasco y Ancash, provenían la mayor cantidad de migrantes que poblaron en principio las provincias de Leoncio Prado y Huamalíes, y posteriormente las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres en San Martín, para concluir este proceso en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo en Ucayali y por extensión a la provincia de Puerto Inca, del departamento de Huánuco, siempre tras el objetivo del dinero generado por la coca y el narcotráfico. Los habitantes de San Martín y Ucayali, se sumaron a la actividad inducidos por los pobladores de la sierra, que experimentaron súbitamente diversos grados de bonanza económica, que generó conductas, comportamientos y valores particulares.

En 1974, el 54% del área dedicada a este cultivo se encontraba en el Cuzco y el 24% en el de Huánuco, mientras que el departamento de San Martín participaba con el 1%. En 1982, la participación del Cuzco cayó a 13%, mientras que el 36% se concentró en Huánuco y el 45% en San Martín, concretamente en la cuenca del Huallaga.

Este incremento tiene relación, entre otras razones, con la cercanía a la frontera colombiana y, sobre todo, con las variaciones de los precios de la coca. En efecto, en 1995 se registra una fuerte caída en los precios de la coca debido al desmantelamiento de los carteles de Medellín y de Cali, al aumento de la producción de coca en Colombia, a la aparición del hongo *Fusarium* y a la presión de la Fuerza Aérea.

El ciclo de violencia se corresponde, en gran medida, con el ciclo de expansión del cultivo de hoja de coca y del narcotráfico en la región que acabamos de describir. En las provincias de la cuenca del Huallaga, sobre todo la provincia de Leoncio Prado, los años 1990-91 marcan los años de mayor cantidad de muertos.

La región Nororiental en 1980

Las siguientes son algunas de las características centrales de la región al iniciarse en 1980 la década de la violencia.

1- La presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga se puede constatar, según testimonios diversos, desde 1976 cuando, al igual que en otras regiones del país, capta maestros y líderes magisteriales que se encargaron a su vez de convencer y formar estudiantes de secundaria y universitarios. Militantes surgidos del adoctrinamiento en estos primeros grupos se encargaron del posterior proselitismo en el área rural, aprovechando adecuadamente el conflicto que existía entre el gobierno y los cocaleros, debido a las acciones de control del cultivo de la coca y la interdicción al narcotráfico. Recordemos que, entre 1979 y 1982, se ejecutaron operativos policiales contra los cocaleros y narcotraficantes, denominados Verde Mar I, Verde Mar II, Bronco I y II, en los cuales, según denuncias ante la fiscalía de las provincias de Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad por parte de dirigentes campesinos y de los propios afectados, se vulneraron derechos elementales de la persona o se afectaron sus intereses, con la

destrucción de cultivos, secadoras de coca, detenciones y encarcelamientos injustificados, bajo la premisa que eran cocaleros ilegales o estaban supuestamente involucrados con el narcotráfico.

2- En 1980, por primera vez, se pudo observar en la ciudad de Tingo María más de 1,500 Sinchis de la Guardia Civil provenientes de Mazamari, que se sumaron a los efectivos de la Marina de Guerra y los agentes de la DEA de EEUU, para eliminar cicales con picos y lanzallamas, utilizando dinamita para destruir las secadoras de coca. Por ello, cuando en años posteriores, el PCP-SL, en alianza con el narcotráfico, destruye puentes, derriba torres de alta tensión y tiende emboscadas a las patrullas militares. Estas acciones contarán con la aprobación de un sector de la población, ante lo que consideraban vejaciones e injusticias cometidas en su contra por los agentes del Estado.

3- Como hemos visto en cifras anteriormente citadas, a mediados de la década de 1970 los departamentos de Huánuco, San Martín y Loreto basaban su desarrollo en actividades como la agricultura lícita, la ganadería, la extracción forestal, minería, pesca y agroindustria, mientras que en segundo plano estaban los servicios y el turismo, que inyectaban recursos económicos a su población. El cultivo de la coca, que luego daría origen a una serie de problemas derivados de su condición de ilegal y de materia prima para la cocaína, se incrementó desde entonces considerablemente, por lo cual el gobierno del presidente Francisco Morales, por presión de la comunidad internacional, inició una serie de acciones de interdicción y control de las drogas ilícitas, dando prioridad a la erradicación de los cultivos ilegales de coca, lo cual llevó a los cocaleros a formar los primeros «Frentes de Defensa» y a asumir medidas de lucha radicales en enfrentamiento abierto a las políticas de gobierno y a los organismos encargados de su cumplimiento. Igualmente, a fines de la década de 1970, algunas mafias internacionales del crimen organizado daban inicio a un período de larga presencia.

4. La población de la Ceja de Selva percibió rápidamente los beneficios económicos provenientes de la venta de hoja de coca al narcotráfico que, con el transcurrir de los años, devino en el principal rubro económico regional, mientras que otros espacios al interior de la región tardarían algunos años más en involucrarse en estas actividades y, por tanto, los efectos en su población y en hábitos de producción o consumo fueron menores. De igual forma, los efectos de la violencia también fueron menores en cuanto a actos terroristas y de violencia generalizada.

5. La defensa del cultivo de la coca ante los intentos de limitar la producción y frenar la actividad de producción de drogas a partir de esta materia prima, se inicia en 1964, a consecuencia de la promulgación, en diciembre de aquel año, del DS 254 que delimitaba las zonas autorizadas para la producción de coca a algunos distritos de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huánuco, La Libertad y San Martín, y otorgaba dos años de plazo desde su promulgación para que los cultivadores sustituyesen sus cultivos de coca por otros productos agrícolas. Se constituyó entonces el «Comité de Productores de Coca de Tingo María», presidido por José Rubiños, secundado por Gabino de la Cruz, quienes desarrollaron campañas de reclamos y presentaron petitorios ante el presidente Fernando Belaunde Terry. En uno de sus viajes para tramitar sus exigencias en Lima, ellos perdieron la

vida junto a otros dos dirigentes al caerse en la zona conocida como Carpish, en 1968, el avión de Faucett, cuando retornaban de Lima a Tingo María con «buenas noticias».

6. Los años fueron pasando y la presión de la comunidad internacional iba en aumento, por lo cual el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez promulga el Decreto Ley 22095 o Ley de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, del 21 de febrero de 1978, según la cual quedaba establecida una especie de guerra anunciada contra los cocaleros considerados ilegales, es decir, para el 98% de los cultivadores de las zonas cocaleras, especialmente en Huánuco, San Martín y Ucayali. Surgió entonces el «Comité Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos», presidido por el Ing. Tito Jaime Fernández, que incorporó otros dirigentes como Francisco Wong, Víctor Piñan, Guillermo Gonzales, Luis Pratto, Guillermo Quispe, entre otros, que desarrollaron una serie de actividades y gestiones, incluidos paros y huelgas, entre 1979 y 1982. Tito Jaime, entonces alcalde de la provincia de Leoncio Prado y Presidente del Comité Regional de Cocaleros, es asesinado el 17 de abril de 1984, al parecer por un sicario del narcotráfico. De la misma forma, Víctor Piñan, tesorero del Comité de cocaleros, es asesinado por elementos senderistas el 23 de septiembre de 1984, mientras que Guillermo Gonzales Pajares es asesinado en 1987, también por elementos del PCP-SL. Los otros dirigentes, luego de estos asesinatos, huyen de Tingo María y la defensa organizada de los cultivadores de coca se trunca.

7. Entre 1977 y 1979, los gremios toman fuerza en la región, especialmente el Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), el cual tiene participación activa en las huelgas producidas casi al final del largo gobierno militar. En una de estas asonadas los huelguistas llegan a enfrentarse con la policía y queman un patrullero frente a lo que hoy es el Complejo Policial de Tingo María. Esta fue quizás la primera manifestación de violencia que precedió a otras que se producirían luego. Entonces la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) procedió a detener a algunos manifestantes acusados de realizar acciones con características subversivas, ya que aseguraban contar con información incipiente sobre la presencia de militantes del PCP-SL en algunos centros educativos secundarios.

8. En cuanto a la economía de la región nororiental, debemos apuntar que entre 1970 y 1980 no sólo la coca era un cultivo importante sino que lo eran también el arroz y el maíz, sobre todo en el departamento de San Martín, y café y cacao, con buenos precios en el mercado nacional e internacional éstos dos últimos cultivos, describiendo algunos analistas la actividad económica regional como la realidad de las «tres C», coca, café y cacao. En efecto, los tres cultivos juntos concentraban alrededor de 10 mil agricultores en 1980.

Luego, a inicios de la misma década, el arroz aumentará en importancia en San Martín, jugando en ello el Banco Agrario un rol importante. En las sucursales de Tingo María y Tarapoto, los préstamos ejecutados alcanzaron los siguientes montos en miles de millones de soles:

PRÉSTAMOS EJECUTADOS POR EL BANCO AGRARIO: TINGO MARÍA Y TARAPOTO: 1980-1983

SUCURSALES	1980	1981	1982	1983
Tingo María	1,698	1,961	2,964	5,659
Tarapoto	4,577	8,599	16,102	37,959

Fuente: Banco Agrario del Perú, memoria 1983.

Es notoria la expansión económica de la zona arrocera de Tarapoto que, en tres años, casi multiplica por diez los préstamos otorgados. De la misma manera, se entiende que el Banco Agrario encontró viables sus actividades en San Martín mientras que en la cuenca del Huallaga la ampliación de los cultivos de coca limitó su función de prestatario.

Tomando como punto de referencia la situación económica de la mayoría de los agricultores, se descartaría que la justificación y el discurso del PCP-SL haya estado sustentado exclusivamente en la pobreza y marginación de los habitantes del área rural; quedan entonces como elementos centrales para el «anclaje social» del PCP-SL los aspectos relacionados a la coca y al narcotráfico, y la incompetencia de los gobiernos sucesivos por enfrentar esa problemática, incapacidad que habría sido capitalizada por el PCP-SL en la fase inicial de convencimiento en apoyo a su lucha armada. De la misma manera, el MRTA utilizó para su propio provecho, el descontento de arroceros y maiceros, además de los cocaleros en la parte sur del Departamento de San Martín.

11. En cuanto a los partidos políticos, a inicios de la década de 1980 tenían presencia importante Acción Popular, el Partido Aprista e Izquierda Unida, todos ellos activos para lograr derrotar al gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, desarrollando incluso acciones conjuntas que incluyeron manifestaciones violentas, movilizaciones, paros y huelgas, como parte de un amplio movimiento nacional que obligó a Morales Bermúdez a convocar elecciones para Asamblea Constituyente y, posteriormente, permitir elecciones generales donde resultó ganador Fernando Belaunde de Acción Popular, gracias entre otras razones, al amplio apoyo que su partido tenía, y en cierta medida aún tiene, en la región colonizada de Huánuco y San Martín.

12. La primera huelga de gran impacto en la región Nor oriental fue protagonizada por los productores de coca de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, agrupados en el «Comité Regional de Productores de coca de la provincia de Leoncio Prado y Anexos», dirigido por Tito Jaime, en noviembre de 1979, como respuesta al DL 22095. Según sus promotores, se trataba de una demanda de diálogo para encontrar soluciones a la problemática cocalera. La concentración de 3,000 cocaleros en Tingo María y los bloqueos de carreteras en toda la región, centraron la atención por primera vez de la prensa nacional y extranjera que, en parte, vinculó la protesta con los intereses del narcotráfico, dejando en segundo plano el aspecto social. Este paro de 24 horas, sin embargo, abrió las puertas para la negociación de los dirigentes cocaleros con los ministros de Agricultura y de Defensa, pero sin resultados. Peor aún, el gobierno decidió llevar adelante los operativos de «guerra» Verde Mar I y Verde Mar II, a fines de 1979 e inicios de 1980, donde se denunciaron excesos en contra de los cultivadores de la coca y se polarizaron las posiciones de los agricultores.

13. Más allá de los aspectos cuantitativos de la producción y procesamiento de la hoja de coca y sus derivados, su impacto en las variables macroeconómicas del país e incidencia en la violencia vivida, no queda suficientemente claro, en los escasos trabajos realizados hasta la fecha, así como la naturaleza de las relaciones sociales involucradas en la economía cocalera. En realidad, no se conoce mucho la lógica subyacente y la dinámica de la economía de la coca, así como su articulación con la dinámica de las economías regionales y las estructuras sociales, políticas e ideológicas donde se insertó y desarrolló. Son importantes entonces los estudios realizados sobre este tema por la CVR, que responden a preguntas centrales respecto a los factores, tanto internos como externos, que han permitido el explosivo crecimiento de la hoja de coca y derivados a partir de 1970, y las repercusiones de ese crecimiento tanto en la configuración socio-económica de la selva alta y el desarrollo de las economías regionales, como en los conflictos derivados.

15- Por último, a inicios de la década de 1980, la debilidad del Estado se reflejaba, entre otros variables, por la casi nula presencia del Ministerio Público y el Poder Judicial, encargados de administrar y hacer justicia, que se vieron imposibilitados por una serie de factores para cumplir con eficiencia sus funciones.

Actores en conflicto

En esta región, que para efectos del estudio ha sido dividida en cuatro zonas como veremos luego, el efecto de la violencia fue de mayor complejidad, porque los intereses y objetivos de cada uno de los grupos en conflicto eran diferentes, cuando no antagónicos. Actores de la «guerra» interna fueron no sólo los grupos alzados en armas y las fuerzas militares y policiales, sino también lo fueron las bandas del narcotráfico internacional, los organismos nacionales y extranjeros encargados de la interdicción al narcotráfico, los organismos e instituciones relacionadas con el desarrollo alternativo, los grupos de «paramilitares» o agentes de seguridad encubiertos, la delincuencia común y la corrupción en todos los niveles de la administración pública y de justicia además, por supuesto, de los productores de coca y los productores de otros cultivos agrícolas.

Si hiciéramos un listado más estricto de los actores directos que en conjunto o por separado actuaron contra la mayoría de la población, muchas veces inocente, y que se encontraban armados, debemos incluir en él al PCP-SL, al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, al Ejército Peruano, las fuerzas policiales del Perú, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea Peruana, los Comités de Auto Defensa, los agentes de Carteles de la droga internacionales y mafias nacionales. Pero la lista se amplía si incluimos otros actores no armados. Como se verá a lo largo de las siguientes páginas, todos estos actores se parcelaron zonas de control directo, establecieron alianzas cambiantes y complejas e hicieron negocios en el contexto de violencia.

Grupos Subversivos

PCP-SL

En la región nororiental, el PCP-SL terminó involucrado profundamente con la estructura económica del narcotráfico, diluyéndose su discurso político primigenio. De otra parte, en la región Nororiental, el nivel de autonomía de los mandos locales del PCP-SL en relación con su Dirección Nacional era bastante grande, explicándose así no sólo el manejo regional de los recursos percibidos en relación con la economía cocalera, sino también el hecho que sea una de las dos regiones donde aún operan hoy en día destacamentos a nombre del PCP-SL.

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

El MRTA inició sus actividades armadas en 1984, en Lima, y en 1986 en el Frente regional Nor Oriental, en el departamento de San Martín, en donde apareció asociado a acciones de propaganda, crímenes selectivos de indeseables y toma de pueblos y ciudades como Juanjui. El departamento de San Martín fue el espacio de mayor desarrollo del MRTA, gracias al significativo apoyo recibido de la población (véase Estudio en Profundidad El Frente Nor-Oriental del MRTA en el departamento de San Martín).

Fuerzas contrasubversivas

En 1980 las actividades contra-subversivas estaban a cargo exclusivamente de las fuerzas policiales. La derrota progresiva de esta fuerza obligó al Estado a trasladar, a fines de esa década, la responsabilidad de la lucha al Ejército Peruano, complementado con la Marina de Guerra, con apoyo del Servicio de Inteligencia Nacional y los Comités de Autodefensa campesinos, que se fueron formando conforme los golpes asestados al PCP-SL y al MRTA fueron debilitando estas organizaciones. La creación del Frente Huallaga por el comando político militar a inicios de la década de 1990 marca un hito en la historia de la violencia

Comités de Autodefensa Civil

El primer Comité de Autodefensa fue creado en 1991, en la localidad de Naranjillo, capital del distrito de Padre Felipe Luyando, en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco. Estas organizaciones sociales de lucha contra la subversión armada, estaban constituidas por pobladores que prestaban servicios voluntarios y no recibían apoyo del gobierno, salvo la entrega de algunas armas y pertrechos. Sin embargo, fueron objeto de manipulación política por parte del gobierno de Alberto Fujimori y del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos. Algunos integrantes de los Comités de Auto defensa fueron asesinados en diversos «ajustes de cuentas». El caso más notorio fue precisamente el de Julio del Castillo, quien iniciara las rondas en Naranjillo, asesinado por presuntos sicarios del narcotráfico.

El campesinado

La sociedad rural de la región está constituida prioritariamente por productores de coca que afrontaron, antes del inicio de la violencia, a intentos de erradicación o destrucción de sus plantaciones por acciones ordenadas por el gobierno bajo la presión internacional y el incumplimiento de convenios multinacionales suscritos con la intención de acabar con la producción, comercialización y consumo de las drogas ilícitas. Pero no sólo los cocaleros estuvieron involucrados. Finalmente todos los pobladores del área rural, así como los asentamientos humanos de las ciudades, quedaron envueltos en el conflicto armado interno, participando inicialmente en forma voluntaria o no, y luego obligados por la amenaza y el terror. En este grupo se concentra la mayor cantidad de víctimas de la guerra como lo demuestran las cifras de la CVR para todo el país.

Programas o proyectos para la interdicción del narcotráfico.

La erradicación de los cocales en el marco de la Ley 22095 es realizada por el Proyecto para la Reducción y Erradicación de la Coca en el Alto Huallaga – CORAH, con el respaldo en seguridad de la policía antidrogas. Uno de los objetivos de este programa fue impedir el incremento de la superficie cocatera y apoyar políticas orientadas a la protección de áreas naturales.

Según información proporcionada por el CORAH, en 19 años de creación institucional hasta agosto de 2001, se han erradicado 54,646 Has de cultivo de coca y un millón 259,618 metros cuadrados de almácigos

Grupos narcotraficantes

Veremos, a lo largo de la historia de la violencia, el papel de las redes o bandas de narcotraficantes en la región que llegaron en algunos casos a sostener destacamentos armados (*Ver: Estudio sobre Narcotráfico de la CVR*)

1.4.2. ZONIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA REGION NOR ORIENTAL

La determinación de las cuatro zonas de violencia en la sede Nor Oriental de la CVR, cuya historia presentaremos en los capítulos siguientes, se hizo tomando en consideración factores como el espacio geográfico, los actores y la intensidad de la violencia generada.

1. Zona I: sierra de Huánuco

Incluye las provincias de Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Pachitea (excluye Chaglla), Lauricocha, Yarowilca, Huamalíes (excluye Monzón) y Marañón (excluye Cholon).

2. Zona II: ceja de Selva de Huánuco y sur de San Martín

Reúne las provincias de Leoncio Prado en Huánuco, y Tocache en San Martín, además de los distritos de Monzón en la provincia de Huamalíes, Cholon en la provincia de Marañón y Chaglla en la provincia de Pachitea.

3. Zona III: selva alta y baja en San Martín

En ella reunimos las provincias de Mariscal Cáceres, Bellavista, San Martín, Picota, Huallaga, Lamas, El Dorado, Moyobamba, Rioja, todas ellas en San Martín, y la provincia de Alto Amazonas en Loreto.

4. Zona IV: selva alta y baja de Ucayali y Loreto

Provincias de Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y Purus en Ucayali, y la provincia de Puerto Inca en Huánuco.

1.4.3 Periodización y cronología de la violencia

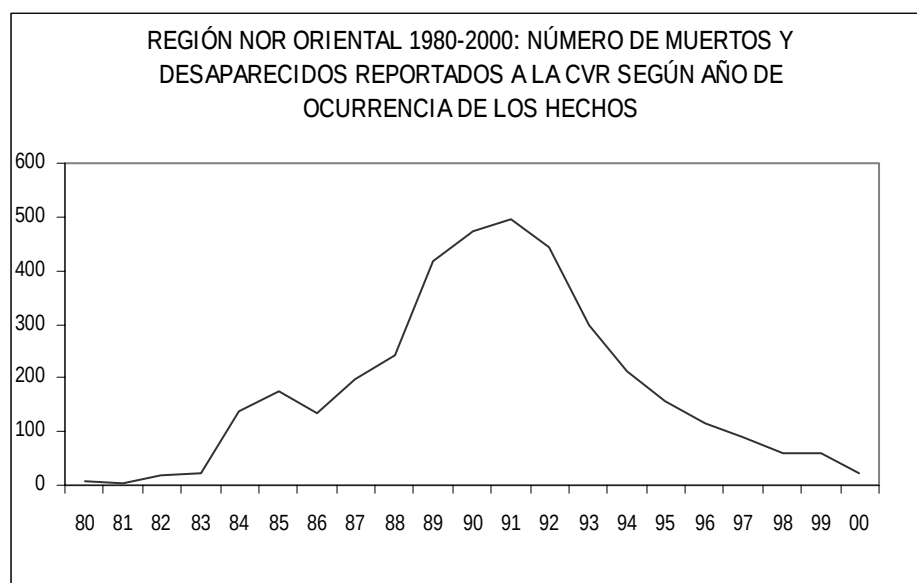
El Decreto Ley 22095, de represión al narcotráfico y de control de los cultivos de coca, promulgado en 1978 por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, dio lugar a los operativos Verde Mar I y Verde Mar II, que tenían el objetivo de erradicar compulsivamente los cultivos de coca y reprimir el tráfico ilícito de la droga, mediante la destrucción de secadoras de hojas de coca, utilizando por primera vez en la zona la dinamita, en un mega operativo inédito que duró varios meses y fue realizado por la policía, con el apoyo de la Marina de Guerra y la asesoría de la DEA norteamericana. Según diversos testimonios, en él se cometieron excesos y abusos, que podrían haber servido de justificación al grupo subversivo PCP-SL para que, en 1981, iniciara su lucha armada en el departamento de Huánuco, asumiendo entonces la defensa de la coca y apoyando el supuesto derecho que tenían los campesinos a cultivarla.

Desde entonces hasta hoy, los subversivos conformaron una especie de alianza táctica con el narcotráfico que se vio facilitada por la corrupción en las instancias del Estado presentes en la zona. El narcotráfico y la subversión fueron, hasta el 2000, los flagelos más importantes de las 11 zonas cocaleras que existen en el país. Las consecuencias económicas, sociales y políticas de tal presencia, aún no han sido evaluadas y cuantificadas adecuadamente, existiendo posiciones, conclusiones y conjeturas distintas sobre sus implicancias.

Teniendo en cuenta los hechos que modificaron el comportamiento de los principales actores de la violencia en el nororiente, hemos determinado tres etapas de la violencia regional, delimitadas por dos quiebres notorios: uno primero en 1987, con el incremento del accionar subversivo y contra subversivo, y el segundo desde 1999, año en que se constata el vertiginoso decrecimiento de todas las acciones de violencia.

REGIÓN NOR ORIENTAL 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN ZONAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

ZONA	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	3,725	6	5	19	23	139	174	134	198	242	410	460	484	431	294	208	154	116	88	59	59	22
ZONA I	609	3	1	10	9	50	55	20	31	62	94	97	32	29	27	23	16	16	8	11	12	3
ZONA II	2,244	3	3	9	13	84	107	96	146	142	208	211	274	276	188	140	103	77	71	35	42	16
ZONA III	435	-	-	-	1	1	5	5	15	23	52	66	109	68	28	18	17	8	5	7	5	2
ZONA IV	437	-	1	-	-	4	7	13	6	15	56	86	69	58	51	27	18	15	4	6	-	1



1.4.3.1. Inicio y expansión de la violencia: 1980-1986

La presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga

El PCP-SL inicia su actividad proselitista hacia 1976-77, con la captación de líderes en el magisterio y estudiantes de secundaria o universitarios, tal como sucedió con profesores del Colegio Gómez Arias Dávila y el Instituto Nacional Agropecuario No.57 de Tingo María, los Colegios Leoncio Prado en Huánuco e Inca Wiracocha en Aucayacu, o la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco:

...los chicos controlaban el colegio, amenazaban a los profesores, ‘si no me tratas bien profe tú sabes’, y el profe sabía lo que esto quería decir. Eso fue en el colegio secundario...» (Leoncio Prado, Huánuco).

pero si en todo este tiempo de la violencia del narcotráfico se perdió mucho interés en el estudio y nuestros jóvenes terminaban la secundaria con la única intención de hacer cocal ¿no? y tener dinero o meterse al narcotráfico y se acababa, me acuerdo que el Instituto en esa época recién creado acá eran pocos alumnos, mas eran personas adultos que estaban estudiando, juventud que salían no querían estudiar porque su mira era eso, salía, hacía cocal, al año estaba con su carro, su moto, era el mundo de la coca en todo caso se metía al partido y allí pues trataban de obtener cargo y ya a costa de estos cargos hacían muchos abusos también ¿no?, pedían cupos, colaboraciones y a veces no rendían cuentas a los demás se enriquecían no? era bastante lamentable (IB, Aucayacu)

Las primeras acciones armadas datan de 1981 y tienen como escenario la sierra del Departamento de Huánuco, colindante con los de Pasco y Ancash. Se registra entonces el asesinato de un comerciante en la provincia de Ambo, sierra de Huánuco o el asalto al puesto de la Guardia Civil en Huanzalá, en agosto de 1981 además de otros ataques y asesinatos (*ver Cronología anexa*).

De este escenario serrano inicial, el centro de las acciones de violencia se trasladará a la región selvática. Aún cuando existe controversia en fechas y acciones que marcaron el incremento del

accionar senderista en la región, existen indicios suficientes para afirmar que tuvo relación directa con la represión indiscriminada a los productores de coca, que respondieron con paros y huelgas contra el accionar de las fuerzas antinarcóticos. Esta coyuntura fue capitalizada hábilmente por el PCP-SL, especialmente cuando se produjeron bloqueos de las carreteras Federico Basadre y Marginal de la Selva, sumándose la concentración en la ciudad de Tingo María de diez mil campesinos cocaleros en 1982, durante una huelga que duró 11 días.

Ese mismo año, el PCP-SL instaló bases de apoyo en los sectores de Venenillo y Cuchara. Asimismo, ese año se produjo el asesinato de presuntos senderistas por una patrulla policial-militar. En la historia posterior, estos lugares se convertirían en núcleos del senderismo, junto con Primavera, Montero, Paraíso, Uchiza y Tocache, entre los más notorios, en la provincia de Leoncio Prado y en el departamento de San Martín respectivamente.

Los grupos senderistas iniciaron sus acciones contra agentes del estado, como el asesinato en 1983 de Andrés Rojas, trabajador del Ministerio de Agricultura, y de un estudiante secundario, acusados ambos de brindar apoyo a efectivos de la policía que por entonces realizaban frecuentes operativos en la zona.

En esos tiempos, Sendero Luminoso tenía unas propuestas directamente para los agricultores por eso es que muchos campesinos, muchos agricultores se han pegado a ese Sendero porque defendían los intereses del campesino ¿ya? ,claro dentro de su programa ,dentro de Sendero Luminoso hay personas de todo ¿no? lo bueno, lo malo y yo discrepo totalmente con lo que muchas veces aducen que Sendero Luminoso viene y mata entonces yo veo la evidencia ante mi persona , en mi persona yo vi a muchas personas interesados a veces incluso querían quedarse con mi cocal en ese tiempo mi cocal a veces producía 40 arrobas , para ellos yo parecía un soplón ,que yo era este un vividor porque tenía mi cargo como presidente del para eso Vice-Presidente de la Asociación de cocaleros, como Presidente del Comité de desplazados y porque sendero entonces ellos yo digo, si Sendero no vino y me mato o me asesino , entonces desde ahí yo..yo... lo veo en otro punto de vista (Ent. JAN, Aucayacu)

El apoyo creciente al PCP-SL y su desarrollo organizativo quedó demostrado en 1984, cuando el PCP-SL tomó en dos oportunidades por algunas horas la ciudad de Aucayacu, atacando el puesto policial y asesinando policías; el primer ataque sucedió el 31 de enero y el segundo el 4 de julio, desencadenando una brutal represión con asesinatos y detención de personas. Antes de la segunda toma de Aucayacu, se produjo el asesinato del alcalde de Tingo Maria, Tito Jaime Fernández, el cual junto con otros atentados, llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia en el departamento de Huánuco, levantado luego de un tiempo para volver a ser implantado ante el recrudecimiento de la violencia terrorista.

Durante 1984, gran parte del Alto Huallaga se vio convulsionada por los atentados subversivos y acciones *contrasubversivas*, principalmente la provincia de Tocache, lo que determinó la ampliación del Estado de Emergencia al departamento de San Martín. En la sierra de Huánuco también se produjeron atentados, enfrentamientos, rastrillajes, que dieron lugar a secuestros, muertes y un número creciente de desaparecidos en los pueblos de Huanzala, Cayna, Huacar, Ambo, San Rafael,

Chacapampa, Huasca, Colpas, en los cuales se ha denunciado ante la CVR la existencia de varias fosas comunes.

La toma y destrucción de las cooperativas Arequipa, Piura y Aucayacu, entre febrero y abril de 1984, en el distrito José Crespo Castillo de la provincia de Leoncio Prado, así como el asesinato de dirigentes comunales y autoridades ediles, genera el establecimiento del Estado de Emergencia en el departamento de Huánuco. De otra parte, ante el avance de la coca, el narcotráfico y la subversión en la provincia de Padre Abad, del departamento de Ucayali, ingresa el Ejército Peruano por las protestas antes los excesos y abusos cometidos en contra de la población afectada y también por motivos estratégicos, aunque permanece poco tiempo, siendo reemplazado por la Marina de Guerra, que asume la lucha contra la subversión en esta zona.

Sin embargo, la presión ejercida en el área rural por el PCP-SL complicó la situación de los campesinos y de los narcotraficantes quienes para subsistir se vieron en la «necesidad de brindar apoyo» al PCP-SL, con el único objetivo de continuar en la conducción de sus parcelas o continuar sus actividades ilícitas.

1.4.3.2. Surgimiento del MRTA y generalización de la violencia: 1987 a 1992

Este es el período considerado como el más difícil y sangriento, pues a partir de 1987 la violencia en la región nororiental incluye nuevos actores y se expande a lo largo y ancho de los departamentos de San Martín y Ucayali. Los asesinados selectivos, las emboscadas a las patrullas policiales y militares, con numerosas muertes en ambos bandos, y el arrasamiento de algunos poblados en represalia por estos ataques determinan que el número de muertes y violaciones de Derechos Humanos se den con mayor magnitud en este periodo, acumulándose la mayor cantidad de muertes y violaciones de los derechos humanos.

Al PCP-SL se sumaron el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) como otros grupos de hombres armados que actuaban clandestinamente. Diversos testimonios señalan al comando paramilitar «Rodrigo Franco, también como autor de asesinatos.

El MRTA inició su lucha armada en 1987 en la parte sur del departamento de San Martín, desarrollando actividades insurrectas en contra de las fuerzas de seguridad del Estado y sosteniendo a la vez enfrentamientos con el PCP-SL por el dominio de zonas donde el narcotráfico tenía importante presencia. EL PCP-SL había incrementado su accionar en los departamentos de San Martín y Ucayali, con la pretensión de generalizar la guerra interna, expulsando al Estado y asumiendo el gobierno de los pueblos «tomados por asalto».

En esta etapa se registran, además de los asesinatos de dirigentes comunales, dirigentes políticos y alcaldes, actos de destrucción de locales municipales, destrucción de puentes, ataques a instituciones del estado, tomas de pueblos y ciudades, en el contexto de enfrentamientos entre subversivos y militares, y entre los propios subversivos del PCP-SL y el MRTA.

Entre los hechos saltantes debemos recordar que el 31 de enero de 1987 es asesinado el dirigente del partido aprista Vicente Valdivieso, en Santa Rosa de Shapajilla, y el 3 de febrero del mismo año es asesinado el alcalde de Naranjillo, Víctor Salinas, mientras que el 22 del mismo mes muere abaleado el alcalde de San Rafael, Luis Llanos. El 10 de abril de ese mismo año se destruye parte del local de la municipalidad de Tocache y en forma consecutiva, caen dinamitados 7 puentes de la carretera marginal en la provincia de Leoncio Prado. En los siguientes años, hasta 1992, la lista de actos de violencia es muy extensa en los tres departamentos y en dos provincias de Loreto.

1.4.3.3. Ofensiva militar y declive de la violencia: 1993- 2000

La nueva estrategia implementada por el Ejército, la Captura de Abimael Guzmán con la consiguiente ruptura de bases, el posterior «acuerdo de paz», y las normas legales que permiten el arrepentimiento, son los hitos centrales de esta última fase.

Tal como han coincidido analistas y estudiosos del fenómeno subversivo, la captura de Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992, significó el inicio del repliegue del PCP-SL, debido a la desarticulación de su estructura dirigencial.

En la región Nor Oriental se diluyó el mito en torno al líder máximo sobre su aparente inmunidad, y al mismo tiempo los militantes encontraron una puerta de escape a la difícil situación que se les planteaba al interior del grupo insurrecto, por el vencimiento de plazos para la ofensiva final sin estar preparados militarmente para ello. Por otra parte, la dación de la Ley de Arrepentimiento, en mayo de 1992, les otorgaba la posibilidad de dimitir sin peligro de ser eliminados. Esta ley puso en jaque a las huestes subversivas, propiciando la desconfianza incluso entre mandos senderistas, que hoy llevan una vida normal y aseguran que Abimael Guzmán fue capturado precisamente gracias a la información proporcionada por un arrepentido.

El triunfalismo del Estado se acentuó cuando el Presidente Fujimori hizo pública una carta de Abimael Guzmán pidiendo «conversaciones de paz» que condujeron al «Acuerdo de Paz». Debemos destacar el grado de autonomía de estas dirigencias regionales del PCP-SL respecto a su dirección central pues la estrategia de los dirigentes regionales del PCP-SL era otra, tratando de recuperarse, reorganizarse y volver a la ofensiva.

Entre el 5 y el 18 de abril de 1994, patrullas militares del Frente Huallaga ejecutaron el «operativo Aries» (*Ver Estudio en Profundidad La Estrategia de Pacificación en la Margen Izquierda del Rio Huallaga De La CVR*), una gran operación *contrasubversiva* en los distritos de Rupa Rupa y José Crespo Castillo de la provincia de Leoncio prado, departamento de Huánuco, en los denominados «bolsones» Cuchara y Primavera. Oficialmente se reconocieron cinco enfrentamientos de magnitud, con el saldo de 14 subversivos muertos y 12 capturados. Según el Ejército, en Mohena se intervino una escuela popular, incautándose armamento, explosivos, equipos de comunicación y material bibliográfico. El operativo fue uno de muchos que se produjeron en la zona, pero esta vez estuvo acompañado de la prensa nacional y extranjera invitada por los mandos militares. La espectacularidad

que caracterizó al hecho, y la propaganda con visos de cobertura periodística, tenía al parecer el objetivo de mostrar al país que se trataba del último golpe contra el senderismo, que daría paso a la pacificación total, es decir un triunfo inobjetable de las Fuerzas Armadas y en especial del Presidente Fujimori, empeñado por entonces en su primera reelección.

Al analizar el proceso de la violencia, en esta etapa, debemos recordar que el PCP-SL realizó entre junio y diciembre de 1994 otras 140 acciones o actos subversivos (ver Cronología), entre los cuales destaca el asesinato de un número importante de dirigentes comunales en el distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, hecho que llevó a prorrogar el Estado de Emergencia en Huánuco y San Martín. De otra parte, continuaron las emboscadas a patrullas o convoys militares, como el producido en el poblado de Previsto donde murieron 14 soldados, así como el asesinato de numerosos arrepentidos.

Bueno el rompimiento de esto viene cuando Sendero hace demasiado presión a nivel del narcotráfico y del campesino ellos llegaron a controlar toda la zona todo, todo, todo y cada vez pedían más cupos de 5,000 mil, 10.000mil, 20.000mil, y llegaron a pedir hasta 50.000 mil dólares por cada vuelo .o cada resguardo que ellos daban (AMD, Paraíso)

La presión sobre los cocaleros, las acciones del ejército y los dispositivos para el arrepentimiento al parecer mellaron la base social del PCP-SL pues entre 1999 y el 2000 sólo se registran, según nuestro recuento, 92 acciones, en su mayoría de escasa trascendencia en los medios de comunicación, salvo aquellas que estuvieron vinculadas política y financieramente al gobierno anterior, el cual manejó la información relacionada a la subversión con evidente interés. Así, por ejemplo, se ocultaba información sobre ataques, enfrentamientos, bloqueos y asesinatos producidos por el senderismo y se levantaba las capturas de algunos militantes o dirigentes insurrectos.

En el 2000, en plena campaña electoral, el Presidente Alberto Fujimori ordenó levantar el Estado de Emergencia en varias zonas, lo cual condujo al retiro de algunas bases *contrasubversivas*. Durante esta campaña electoral, presuntos senderistas hicieron circular panfletos con pronunciamientos sobre «negociación política» y apoyo a los planteamientos de su dirigencia nacional encarcelada, aceptando los acuerdos de paz, pero continuó apareciendo gente asesinada, y pequeños grupos armados recorrían los pueblos en busca de adeptos, haciendo proselitismo con un mensaje según el cual reconocían haber asimilado la lección dejada por el repudio popular, ante los graves excesos cometidos contra la población indefensa que en determinado momento les dio su apoyo, creyendo en el discurso de «justicia y nuevo orden».

1.4.4. Cronología de la región nororiental 1980-2000

02-60	Inicio de la actividad de producción de cocaína ilegal en Huánuco
09-64	Primeras expresiones de lucha en defensa de la coca.
10-64	Indicios de la presencia de mafias de narcotraficantes extranjeros en Huánuco y San Martín, que abrieron el mercado de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos.
16-07-68	Muerte de dirigentes cocaleros en accidente aéreo.

04-76	El PCP-SL inicia actividad proselitista.
21-02-78	Ley 22095, de represión a la coca y narcotráfico.
1979-80	Operativos Verde Mar I y II.
06-11-80	Paros y huelgas regionales de los cocaleros.
17-08-80	Inicio del accionar senderista en la sierra de Huánuco (Huanzalá- Ambo).
03-12-81	Creación de Proyectos especiales para la erradicación de la coca y el desarrollo alternativo.
17-05-82	El PCP-SL Incursiona en la ciudad de Aucayacu.
06-12-82	Huelga cocalera de 11 días en el departamento de Huánuco.
20-09-83	Asesinato gobernador de Caina en Ambo.
27-10-83	Ataque Puesto Guardia Civil en Atalaya Ucayali, en Aucayacu y Pucayacu.
08-83	Inicio del desplazamiento de la coca a Ucayali, por actividades represivas.
17-04-84	Destrucción local y vehículos de INIPA.
22-06-84	Ataque Puesto GC Aguaytia - ataque GC en Santa Lucía (JCC) y Puesto Guardia Civil, municipio, banco y planta eléctrica en Tocache.
17-04-84	Asesinato del líder cocalero y alcalde de Tingo María, Tito Jaime
20-09-84	asesinato del alcalde de Pumahuasi Víctor Piñan.
07-02-85	Toma de radio Ribereña en Aucayacu.
07-03-85	Toma de radio Tingo María.
07-03-85	Destrucción del puente Angashyacu.
12-02-86	Ataque y destrucción de Cooperativa Jardines de Te en Hermilio Valdizán.
04-03-86	Toma del Pueblo de Progreso.
11-10-86	Toma de radio Marginal en Tocache.
1987	Aparición del Comando Rodrigo Franco, en Huánuco y Tingo María.
03-02-87	Asesinato del Alcalde de Naranjillo Víctor Salinas.
22-02-87	Asesinato del Alcalde de San Rafael Luis Llanos.
10-04-87	Ataque municipalidad de Tocache.
17-11-87	Inicio del accionar del MRTA en la parte centro-norte de San Martín.
13-07-87	Declaratoria en Estado de Emergencia a Huánuco - San Martín.
15-07-87	Fuerzas combinadas del ejército, la policía y la fuerza aérea toman por aire y tierra la ciudad de Tocache para expulsar al PCP-SL.
10-08-87	Ataque puesto policial en Tabalosos.
06-11-87	Ataque varias entidades en Juanjui.
09-11-87	Toma de San José de Sisa.
03-07-88	Emboscada a convoy militar en puente Rondos.
31-07-88	Ataque a varias entidades en Acomayo, paro armado con asesinato a campesinos y destrucción de locales públicos.
02-08-88	Asesinato del periodista Sixto Silva Sánchez.
27-11-88	Ataque a empresa Endepalma, destrucción de 10 camiones cisterna.
11-07-89	Asesinato a senderistas en Rumichaca – Ambo.
15-06-89	Asesinato del alcalde Manuel Espinoza Monroe.
12-10-89	Asesinato del alcalde Carlos Ojeda de Tingo María.
14 y 24-11-89	Asesinatos de alcaldes de Chavinillo y SINGA.
1989-90	El General Arciniega, apoya a los cocaleros y mueren 1100 presuntos senderistas en controvertida estrategia que fortaleció al narcotráfico.
1990	Acuerdo de Cartagena contra las drogas.
24-08-91	Estado de emergencia en todo San Martín
16-07-91	Intento de toma de la ciudad de Tingo Maria, desde el pueblo de Naranjillo.
06-1991	Convenio antidrogas Perú-EEUU.
14-11-91	El PCP-SL ataca BCS de Madre Mia.
23-12-91	Toma de la ciudad de Juanjui por el MRTA
19-01-92	18 campesinos son asesinados por resistirse al PCP-SL en Alfonso Ugarte, JCC.

12-09-92	Captura de Abimael Guzmán líder de L. PCP-SL.
06-1992	Presencia del Comando Sur en el Alto Huallaga.
29-11-92	Asesinato de 8 ronderos en Shamiro, cerca de Tingo Maria.
29-08-94	Cae avioneta y mueren 5 agentes de la DEA-NA.
05-04-94	Organización y ejecución del operativo Aries, presentación de decenas de senderistas y arrepentidos, capitulan decenas de senderistas.
11-04-94	Hallan 8 cadáveres en Cayumba Chico.
28-06-94	Informan oficialmente que más de cuatro mil subversivos se acogieron a la ley de arrepentimiento.
1995-98	Abandonan cultivos de coca por caída de precios.
10-12-98	Senderistas quemaron cuatro camiones cisternas en las Vegas.
26-04-99	Senderistas emboscan patrulla de la policía antidrogas, fallece un efectivo.
28-05-99	Senderistas atacan banco de la Nación en Uchiza, fallecen cinco personas.
13-06-99	El PCP-SL ataca camioneta donde viajaban integrantes del Grupo Alfa, mueren seis personas.
13-02-00	El PCP-SL intercepta vehículos en Aucayacu, fallece un chofer.
20-03-00	Senderistas asesinan a presidente del comité de Desarrollo de Ramal de Aspuzana.
28-04-00	Senderistas queman camioneta Polcar y asesinan a un policía en Pozo Azul.
05-07-00	Senderistas asesinan a Licenciado del Ejército en Pacae.
11-08-00	Senderistas asesinan a dirigente campesino en Mohena.
16-08-00	Senderistas asesinan en Ute-Bambu a dos pobladores.

1.4.5. Zona I: la sierra de Huánuco

1.4.5.1. Datos generales

Hemos incluido en la Zona I de la Región Nororiental el territorio correspondiente a la sierra del departamento de Huánuco, lo cual se circunscribe a las provincias de Huánuco, Ambo y Dos de Mayo, que tienen como centro de articulación la ciudad de Huánuco, aunque es necesario también reconocer su importante relación con la selva huanuqueña y ucayalina, ocupada en buena medida por campesinos migrantes provenientes precisamente de estas provincias de la sierra de Huánuco.

Región Nororiental, Zona 1. 1980-1993: Población. Fuente: Censo Nacional 1993.

Población	1981	1993	Crec.
Huanuco	137859	223339	62%
Ambo	41423	55942	35%
Dos de Mayo	95770	104766	9%

El crecimiento de la ciudad de Huánuco, a orillas de Huallaga y puerta de entrada a la selva alta de Leoncio Prado y a la selva baja de Ucayali, es uno de los más importantes en el período intercensal. Evidentemente, este crecimiento tiene como contrapartida el lento crecimiento demográfico de provincias de mayor altura, como Dos de Mayo, ocupada por campesinos minifundistas cuyas limitaciones en la producción limitan su acceso como tales al mercado,

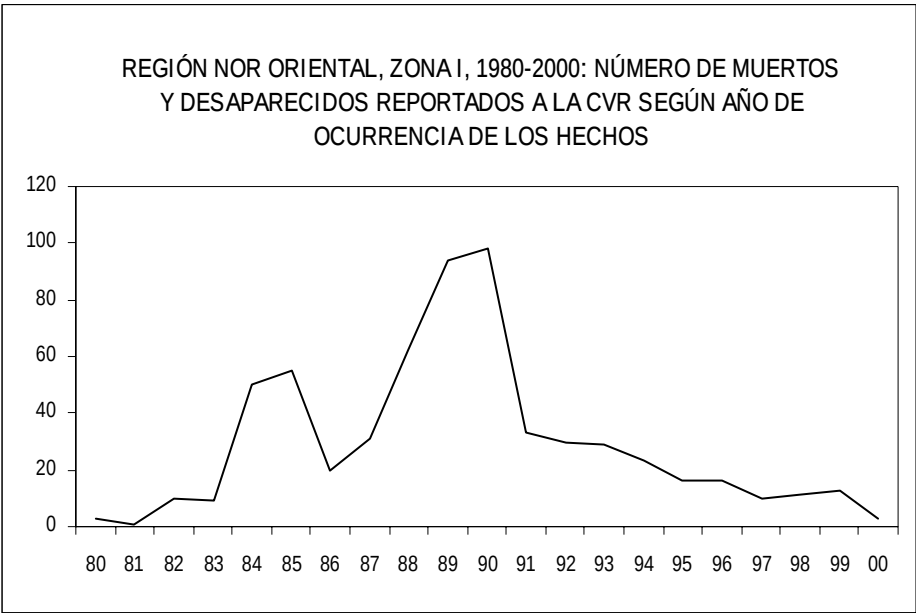
convirtiéndose por lo tanto en mano de obra migrante, fundamental para los cultivos de la selva alta, sobre todo la coca.

1.4.5.2. Historia de la violencia

La historia de la violencia en la Zona I de la Región oriental, la sierra de Huánuco, tiene vínculos directos con el proceso de violencia del departamento de Pasco, donde el PCP-SL desarrolló sus acciones desde 1980 y estableció una especie de corredor operativo hacia las localidades ubicadas en las provincias de Ambo y Dos de Mayo, donde también se realizaron algunos actos subversivos en 1980. Recordemos que casi al mismo tiempo que un grupo de senderistas quemaba las ánforas electorales del distrito de Chuschi, hecho reconocido como el primer acto del ciclo de violencia, otro grupo de subversivos colocaba petardos de dinamita en el Concejo Provincial de Pasco.

REGIÓN NOR ORIENTAL, ZONA I, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	609	3	1	10	9	50	55	20	31	62	94	97	32	29	27	23	16	16	8	11	12	3
HUÁNUCO	198	1	-	2	-	-	14	9	9	12	19	35	14	17	18	13	10	4	6	6	8	1
AMBO	179	-	-	4	8	24	24	6	14	39	35	8	2	3	1	6	-	4	-	-	-	1
DOS DE MAYO	25	1	-	-	-	-	1	-	5	3	6	2	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-
HUACAYBAMBA	51	-	-	1	-	2	3	-	-	-	9	34	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
HUAMALIES	44	-	1	1	-	5	5	4	1	1	4	3	5	2	4	-	4	1	-	1	1	1
MARAÑÓN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PACHITEA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
LAURICOCHA	57	1	-	1	1	18	7	1	2	1	8	2	8	-	1	-	1	2	2	1	-	-
YAROWILCA	46	-	-	1	-	1	1	-	-	2	13	10	1	6	-	2	1	4	-	3	1	-



1.4.5.2.1. De Pasco a Huánuco: 1980-1989

Las primeras acciones del PCP-SL en la sierra de Huánuco fueron de impacto reducido y se concentraron en actos provocadores hacia algunas autoridades y el robo de armas y municiones. Los golpes que la policía asestó a esta organización fueron contundentes pues la mayor parte de los cuadros locales fueron detenidos y encarcelados. Todo indica que durante varios meses sólo se dedicaron a reorganizarse y captar adeptos en las provincias serranas de Huánuco, hasta que el 28 de julio de 1982 alrededor de 30 senderistas asaltaron el CRAS de Cerro de Pasco y liberaron a 14 presos, entre ellos una mujer, Nelly Salazar Ayllón, «camarada Nelly», de quien se reconoce su importante presencia en los pueblos de la sierra de Huánuco al mando de un pequeño grupo de 30 senderistas, que sería aniquilado en 1989, en el caserío de Rumichaca, por las rondas campesinas y el Ejército conjuntamente.

El 17 de agosto de 1980, el PCP-SL ataca el puesto policial de Huanzalá, en Dos de Mayo, pero los primeros asesinatos selectivos recién ocurren tres años después, en junio de 1983, cuando integrantes del PCP-SL asesinan, en acciones diferentes, a un telegrafista y al Secretario general del Acción Popular del distrito de Colpas, en Ambo.

EL PCP-SL logró en todos estos años formar un «cordón» entre Yanahuanca, Tíclacayan, Huachon y Quiparacra, en Pasco, teatro de operaciones que fue ampliado y reforzado en las provincias vecinas de Ambo y Dos de Mayo. En julio de 1984 el gobierno declaró el estado de emergencia en las provincias de Leoncio Prado y Ambo en Huánuco, y Daniel Alcides Carrión en Pasco, a donde fueron enviados 100 Guardias Republicanos. Pese a ello, el PCP-SL crecía en esta última provincia por el trabajo proselitista que realizaba; sin embargo, los mineros de la provincia de Cerro de Pasco, debido a su nivel de organización y politización, se habían convertido en una especie de talón de Aquiles senderista porque los rechazaban y les hacían frente, por ello, el PCP-SL decidió fortalecer sus acciones en la sierra y luego en la selva alta de Huánuco, no logrando en ningún momento infiltrarse orgánicamente en los sindicatos mineros, varios de cuyos dirigentes fueron asesinados por el PCP-SL en los años siguientes.

En efecto, el avance del PCP-SL en Pasco fue frenado por la influencia de los partidos de izquierda, que supieron mantener su preponderancia en los sindicatos mineros, y la valiente actitud de los dirigentes sindicales, que cobraron notoriedad a nivel nacional por la denuncia de los intentos de manipulación del PCP-SL y el decidido rechazo a la infiltración senderista. El PCP-SL se enfrentará además, en los años posteriores, a las bases contra subversivas establecidas por las Fuerzas Armadas.

De hecho, la presencia en Pasco del PCP-SL no tuvo importancia de tipo militar, excepto en la modalidad de sabotaje. Por ello, decidió centrar sus trabajos en la sierra de Huánuco, pero aquí las fuerzas militares y policiales durante varios meses les propinaron fuertes golpes causándoles bajas importantes. Paralelamente, el PCP-SL iba aumentando su presencia en las zonas

cocaleras del Huallaga y el valle del Monzón, en la provincia de Huamalíes, sin descuidar otras provincias de la sierra a las que utilizó como centro de adoctrinamiento y preparación de cuadros militares que trasladaba a la selva, o como refugio para escapar de los operativos de las Fuerzas Armadas y policiales. El abogado Jorge Espinoza Egoavil, preso durante meses por ser integrante de la Asociación de Abogados democráticos, afirma que la ciudad de Huánuco y otros pueblos no fueron atacados por el PCP-SL precisamente por que servían de «guarida» ante la persecución de las fuerzas del orden.

Bases de apoyo y formación de Comités Populares

La constitución por el PCP-SL de Comités Populares fue un objetivo central de la estrategia política del PCP-SL en su intención de construcción de «un nuevo estado». No se puede dejar de mencionar, la adhesión voluntaria —por razones que tienen explicación local— de pueblos y comunidades al accionar senderista, aunque parece ser que el énfasis militar de la organización senderista generaría luego un terror que la aisló de estas mismas bases sociales rurales.

Como explica un rondero de Huamalíes:

... hasta organizaban en el año ochenta y cuatro , ochenta y cinco a la población en un Comité, un Comité Popular organizaron, por autorización del Sendero.....cuando organizaron el Comité como se llama, el comité de la subversión, después cuando llego la base contra subversiva se retiraron. Entonces ya nos reuníamos a formar el comité de Autodefensa en forma espontánea... para defender nuestra comunidad , entonces por el momento la zona está tranquila, siempre en paz, pero como le digo, anteriormente aproximadamente cuarenta personas han matado, pero los niños han quedado huérfanos , viudas y viudos no como dicen otros que se han integrado, que han sido ayudados, y que todo esta bien...

Asesinato de autoridades

El examen del circuito educativo es fundamental para entender su asentamiento inicial y la ampliación de la base social del PCP-SL. El siguiente paso de la estrategia subversiva consistió en la eliminación sistemática de autoridades locales. El asesinato de las autoridades comunales que no se sometían a las órdenes impartidas por los mandos senderistas o que los enfrentaban, fue una característica central para imponer el terror y a través de él «controlar», ocupando el vacío de poder generado obligando a las poblaciones a actuar a favor de sus objetivos.

En los testimonios recogidos por la CVR encontramos miles de relatos similares a las de Juan, quien narra como fueron muertas cinco autoridades comunales, entre ellos dos familiares suyos, en la sierra de Huánuco. La comunidad de Angasmarca, que por entonces tenía alrededor de 300 comuneros electores recibió, en el mes de junio de 1988 una amenaza de los subversivos para que la Junta Directiva renuncie, pero los comuneros decidieron desacatar esta orden. Al amanecer

del 16 de julio de 1988, una columna de 10 subversivos se dirigió a cada una de las viviendas de las autoridades, llevándolos a la plaza del pueblo, algunos apenas con la ropa interior puesta. Aquí se encontraban 20 subversivos más, quienes vigilaban que ningún poblador saliera de su domicilio. Sin testigos lugareños, el grupo de senderistas procedió a asesinar a Mauro Capcha Espinoza, con dos «picotazos» de zapapicos. El Teniente gobernador, Hilarión Capcha Callupe, fue golpeado, luego le sacaron la lengua porque aparentemente la víctima los insultó y por último le dieron un «picotazo» mortal. El Agente Municipal Pablo Malpartida fue apuñalado hasta morir. El Juez de Paz, Víctor Peña Almerco, cayó ultimado con 2 disparos en la cabeza y un «picazo» en el cuerpo. Los 4 cuerpos quedaron regados en la Plaza de Armas. Cuando el día despuntó plenamente y los senderistas se retiraron, los familiares recogieron el cuerpo de cada una de las víctimas y los enterraron.

La comunidad decidió informar a los militares sobre estos hechos. Un año después hace su ingreso el Ejército, llamando a la comunidad a una reunión en un lugar llamado Marabamba, en la cual quedaron nombradas las nuevas autoridades del pueblo. Después de este encuentro y por sugerencia del ejército, se formaron las «Rondas Campesinas», quienes vigilaban por las noches el pueblo. El PCP-SL continuó frecuentando la comunidad pero cada vez se debilitaba más, tanto por la intervención de los ronderos como por el hostigamiento de patrullas del Ejército, que decomisaron su armamento. Así, los integrantes de las filas subversivas fueron cada vez menos, aunque el movimiento subversivo continuó hasta 1995.

Los miembros del PCP actuaban con ferocidad y vesania, eso está fuera de duda, pero en algunas oportunidades dejaban vivir a quienes ya habían elegido para morir por diversas razones, tal como sucedió con Rosa, quien salvó su vida gracias a súplicas y llanto de su menor hija minusválida, aunque no sucedió lo mismo con su cuñado Luis, quien sólo por increpar el comportamiento de los subversivos fue asesinado. Los hechos narrados por Rosa nos remiten al 1 de agosto de 1988, a la «Hacienda Éxito», en el distrito de Chinchao, provincia de Huánuco. Ella tenía 35 años de edad y la víctima, 32 años. Rosa residía desde hacía 11 años en la «Hacienda Éxito» y cuando Luis les increpó su actitud diciéndoles «como sin criar ustedes comen mientras que la señora Blanquita y sus hijos no comen nada» los subversivos lo asesinaron aplicándole un torniquete en el cuello.

Ataques, sabotajes y emboscadas

No cabe duda que el PCP-SL logró eficiencia en las tácticas de emboscadas y atentados contra las fuerzas del orden, acciones que servían para agenciarse de armas. Está también claro que su Fuerza Principal nunca dispuso de capacidad de fuego para la guerra de movimientos, donde tendría que enfrentar a las fuerzas del orden. Por ello, personal de las fuerzas de seguridad que caía en sus manos era victimado o desaparecido. Edith Bocanegra y Miriam Cortina son testigos de actos criminales de esta naturaleza que también sucedieron a cientos de integrantes de las Fuerzas

Armadas o policiales. Edith Belinda Bocanegra Vda. de Ríos da cuenta de los hechos ocurridos a su esposo José Antonio Ríos Cieza, asesinado en el año 1988, en el caserío de Pachamachay, en el distrito de San Rafael-Ambo-Huánuco, por el PCP-SL. Ríos Cieza formaba parte de una patrulla de 12 efectivos de la policía que se dirigía hacia el cerro Pachamachay, lugar donde se ubica una torre de alta tensión, en reemplazo de otros efectivos policiales. En el trayecto hacia la torre sufrieron una emboscada preparada por subversivos del PCP-SL, que hizo volar el vehículo policial con todos sus ocupantes, salvándose sólo un efectivo, que a la fecha se encuentra sordo y mudo, además de haber perdido una pierna. Miriam Cotrina Ubaldo entregó su testimonio sobre lo ocurrido a su esposo Cecilio Ismael Pardo Vega, a quien cariñosamente llamaba «Cholo», efectivo de la policía desaparecido el 24 de marzo de 1990, a la altura de Chullqui-Santa María del Valle-Huánuco, por el PCP-SL.

La Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco

A lo largo de la historia de la violencia se constata una y otra vez la importancia asignada por el PCP-SL a algunas Universidades públicas como centro de reclutamiento de militantes (*Ver: Estudio de la CVR sobre Universidades*). Una de las universidades que sufrió los efectos de la infiltración senderista y la respuesta del Estado fue la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, en cuyos espacios el proselitismo, la formación de cuadros, el asesinato de docentes y estudiantes por parte de los subversivos y las Fuerzas Armadas y policiales, como también de grupos paramilitares, marcaron a todos los estamentos por igual.

La mayor actividad senderista en la UNHEVAL data, según indicios, desde 1985, pero recién en la década del 90 empiezan los asesinatos y la desaparición de docentes o dirigentes estudiantiles, como respuesta de la contrasubversión, mientras otros fueron detenidos con cargos de terrorismo. Los siguientes actos han sido registrados en la Cronología publicada por DESCO, aunque posiblemente la lista de agresiones sea mayor. El clima de terror se agudizó en 1993, un año después de la captura de Abimael Guzmán.

DOCENTES Y ESTUDIANTES ASESINADOS O PROCESADOS

- 1.- 04-01-93, Asesinado el docente universitario Carlos Gallardo Malpartida.
- 2.- 22-01-93, Asesinato del docente y periodista Armando Ruiz Vásquez.
- 3.- 22-03-93, Asesinato del dirigente estudiantil Juan Tello Céspedes.
- 4.- 04-10-93, Asesinato del docente Manuel Milla Pinzas.
- 5.- 07-01-94, Presuntos paramilitares secuestran a varios estudiantes de UNHEVAL.
- 6.- 05-07-94, Detienen al docente universitario Sebastián Campos Meza.
- 7.- 18-08-94, Rastrillaje policial en UNHEVAL, tres estudiantes detenidos.
- 8.- 22-08-94, Detienen al abogado y docente universitario Jorge Espinoza Egoavil.
- 9.- 24-09-94, Detienen al Decano de la Facultad de Medicina, Erwin Ormachea.
- 10.- 17-10-94, Detienen al Rector de la UNHEVAL Abner Chavez Leandro.
- 11.- 15-11-94, Liberan al Rector Abner Chávez Leandro.
- 12.- 26-11-97, Presuntos senderistas efectúan pintas en los baños de la UNHEVAL.
- 13.- 17-05-98, Colocan propaganda senderista en el monumento al soldado desconocido.
- 14.- 12-07-98, Presuntos senderistas efectúan pintas en paredes del recinto universitario.

Un abogado y activista de derechos humanos y ex integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, quien estuvo preso varios meses bajo los cargos de terrorismo, dio a la CVR su versión sobre lo que sucedió en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en esos años:

Hermilio Valdizán era una Universidad que en ese entonces tenía 8 mil estudiantes y la Agraria de la Selva no llegaba a dos mil, en primer lugar la calidad, la categoría de facultades de estudios que tenía la Hermilio Valdizán se prestaba para que pudiera ingresar incursiones ideológicas del senderismo por ejemplo había la facultad de Sociología es lo que se presta para que puedan producirse los debates en torno a la problemática social lo que no tenía la Agraria de la Selva, tenía la facultad de Derecho que comenzaba a nacer y la facultad de Derecho se prestaba para las discusiones de orden jurídico y de orden socioeconómico para discutir el planteamiento que formulaba sendero y que formulaba el estado. También tenía la facultad de Educación y así por el estilo daba margen y tenía las posibilidades de discusiones, de debates y esto traía como consecuencia que los estudiantes se pudieran poner del lado de los planteamientos que formulaba Sendero.

Bueno, lo de las tomas y el descontento de los estudiantes fueron bastante bien aprovechados, por eso no es permanente en estos momentos se dan y se dieron en los momentos del equipo de gente enviada del gobierno Fujimontesinista para intervenir la universidad pero ya era el momento de lucha armada...de tal manera que ya hubieron incursiones de muertes de alumnos y profesores, mataron por ejemplo al Dr. Milla, fue evidentemente sendero, mataron al profesor Gallardo a dos o tres profesores más, entonces declaran en reorganización a la universidad porque hubieron dos o tres profesores que murieron sin embargo en Huancayo hubieron más numero de profesores que eran víctimas de violencia y también de estudiantes sin embargo no lo declararon en reorganización

1.4.5.2.2. La respuesta militar y de la población: 1990-2000

Por reacción al comportamiento de los senderistas y ante el temor de verse comprometidos por las fuerzas militares y policiales, algunas comunidades de la sierra de Huánuco se organizaron en Comités de Autodefensa.

Ser utilizados como «masa» y verse por lo tanto involucrados a la fuerza en los proyectos de la subversión, era la mayor tragedia para los campesinos que no contaban con protección y apoyo estatal. Amplios sectores de la población rural no apoyaban a los subversivos, pero en muchos casos veían también como enemiga a las fuerzas del orden por la absurda estrategia que aplicaban a partir del criterio equívoco de que todos eran o tenían algo que ver con la subversión:

Soy el presidente el Comité de Autodefensa del caserío de Chotecocha, en la provincia de Ambo, vengo desarrollando ya varios años el Comité del autodefensa de Chotecocha y ahora viéndolo bien este encuentro es muy importante, por que antes hemos sido muy agraviados por los señores delincuentes del terrorismo, luego hemos sido organizados por el Ejercito Peruano, ¿quién mas podría organizarnos?, hemos tenido varios fracasos con nuestros hermanos sufridos, sabemos que han sido muchos eliminados y además en este terrorismo ha muerto gente inocente, especialmente nuestros hermanos, los muertos han sido campesinos inocentes porque a ellos les mandaban a las chacras de frente a ellos, les metían para ir y los ejércitos los comprometían, pero ellos eran gente inocente que han muerto,....han vendido casa, animales, chacras, agarraban su dinero y se escapaban por amenaza de muerte.....

La respuesta policial y militar

Las acciones del PCP-SL en la sierra de Huánuco obligaron al repliegue de las fuerzas policiales. El ingreso del ejército parece haber sido definitivo para el repliegue de los senderistas en esta zona. El testimonio de Antonio resume las duras vivencias de los pobladores, testigos de muertes causadas tanto por el grupo subversivo como por las fuerzas del orden:

Antonio de 42 años, en 1985, salió del caserío Cerro Azul, distrito de José Crespo Y Castillo, en la provincia de Leoncio Prado, su desplazamiento fue a la ciudad de Huánuco, por los hechos de violencia. Él refiere que fue testigo de varias acciones de Sendero: Cuenta de la muerte de 06 efectivos de la Policía Nacional especializada UMOPAR, durante una emboscada ocurrida en el puente Pacae-Aucayacu. La muerte del subversivo Narciso Sánchez, la muerte de 14 mandos subversivos de Sendero, quienes fueron quemados por miembros del Ejército Peruano. También la muerte de un poblador y una pobladora, estos hechos ocurrieron en Cerro Azul el año de 1984. Refiere además que presencié la muerte de una señora y otro poblador en el caserío Ramal de Aspuzana-Tocache-San Martín, el año de 1985, a manos de senderistas.

Cuando viajó al distrito de Choras – Yarowilca - Huánuco, le contaron de la muerte de 12 personas: Fermín Narciso, Hernán Bacilio, Oswaldo Felipe, Ascencio Papas, Pantaleón y Esposa, Florentino Isidro, Octavio Valdivia, Nieto..., Abdón Vilca y de dos policías, estos hechos de sangre fueron cometidos el año de 1985, por miembros de Sendero Luminoso»

En resumen, la sierra huanuqueña fue también escenario de actividades subversivas iniciadas en el departamento de Pasco en 1980. La ciudad de Huánuco fue utilizada como un corredor hacia otras zonas y lugar de refugio del PCP-SL. Entre 1988 y 1989 la sierra de Huánuco vivió la mayor intensidad de la violencia, aunque el número de víctimas fue menor que aquella alcanzada en las zonas cocaleras del Huallaga, sobre todo en la provincia de Leoncio Prado y el sur del departamento de San Martín, como veremos en el capítulo siguiente.

1.4.5.3. Cronología

Zona I: la sierra de Huánuco 1980-2000

17-08-80	Atentado al puesto de la GC en Huanzalá Dos de Mayo.
03-06-83	Asesinato del secretario de AP en Colpas – Ambo.
06-06-83	Asesinato de un telegrafista en Colpas –Ambo.
22-09-83	Asesinato del Teniente gobernador de Caina – Ambo.
06-11-84	Asesinato de autoridades comunales y pobladores en Quivilla, Jesús y Sauni en Dos de Mayo.
04-01-86	Asesinato de Teniente gobernador en Querojuanan – Dos de Mayo.
01-04-86	Asesinato de alcalde y poblador en Churubamba.
22-02-87	Asesinato del alcalde de San Rafael-Ambo, Luis Llanos.
25-06-87	Asesinato de Teniente gobernador de Acomayo, José Herrera Mendez.
12-02-88	Emboscada a batallón de Ingeniería en Ambo, matan a 9 militares y 15 heridos.
01-03-88	Incursión en caserío Huancapalla, dinamitan locales públicos.
30-03-88	Emboscan a patrulla policial, mueren 7 policías y 6 civiles.
31-03-88	Ataque puesto policial de Huacrachuco- Marañón, mueren 2 policías.
11-11-88	Asesinato alcalde de Chinchao, César Valentin.
10-07-89	Ejército destruye campamento senderista en Rumichaca – Ambo, mueren 30 subversivos.

12-07-89	Asesinato de autoridades municipales en Caina – Ambo.
14-11-89	Asesinato del alcalde de Chavinillo-dos de Mayo.
23-11-89	Emboscada de patrulla militar en Dos de Mayo, mueren 30 militares y 12 subversivos.
24-11-89	Asesinato del alcalde de Singa-Dos de Mayo, Anibal Bazan.
05-12-89	Asesinato del alcalde de Chavinillo, Víctor Huaman.
15-01-90	Asesinato de Teniente alcalde y regidora en Conchamarca-Ambo.
18-03-90	Asesinato a 6 personas entre ellos dos candidatos y periodista Marino Meza.
17-05-90	Atentado en campus de la universidad Hermilio Valdizán.
04-06-90	Asesinato de dos profesores en Dos de Mayo.
23-07-90	Ataque campamento militar en Buenos Aires-Huamalíes, mueren 5 militares y 10 subversivos.
19-06-91	Convocatoria de paro armado en todo Huánuco.
30-07-91	Emboscan a ronderos y asesinan a 14, en Rondos y Jibia-Dos de Mayo.
01-08-91	Asesinan al alcalde de Quivilca – Dos de Mayo, Magno Vera y a su hijo.
02-08-91	Enfrentamiento de Chavin de Pariarca y Jacas grande-Dos de Mayo, mueren 2 soldados y 6 subversivos.
08-11-91	Pobladores enfrentan a senderistas en Antacolpa.
04-01-93	Asesinato al catedrático de la Universidad Hermilio Valdizán, Carlos Gallardo Malpartida.
22-01-93	Asesinato del catedrático y periodista de la universidad Nacional Hermilio Valdizán, Armando Ruíz Vasquez, quien era candidato a alcalde en la municipalidad de Amarilis.
28-01-93	Convocatoria a paro armado en la provincia de Huánuco.
22-03-93	Asesinato del dirigente estudiantil de la universidad Hermilio Valdizán. Juan Tello Céspedes.
12-08-93	Asesinato de la presidenta de los clubes de madres de Amarilis Rosa del Aguila.
04-09-93	Asesinan a dos suboficiales de la policía en Huánuco.
04-10-93	Asesinan al catedrático de la Universidad Hermilio Valdizán, Manuel Milla Pinzas.
30-04-94	Capturan a 5 presuntos senderistas del Movimiento de Artistas Populares.
24-09-94	Detienen al decano de la Facultad de Medicina de la universidad Hermilio Valdizán, Erwin Ormachea por vínculos con el senderismo.
31-10-94	Presentan a 21 arrepentidos en el cuartel de Yanac.
14-11-94	Levantán estado de emergencia en Dos de Mayo.
12-03-96	Sentencian a cadena perpetua al senderista Redino Cerna Zorrilla.
24-12-96	Asesinan a madre de familia y sus tres hijos por negarse a pagar cupos en Yacsa – Huánuco.
11-04-98	Mueren 4 personas en atentado con granadas en San Juan Pampa-Huamalíes.
24-04-98	Asesinan a pobladora y amenazan a autoridades en Santa María del Valle.

1.4.6. Zona II: la cuenca del Huallaga

1.4.6.1. Datos Generales

1.4.6.1.1. La coca en el Huallaga

El contexto socio-económico cocalero, tal como vimos en el capítulo sobre Antecedentes de la región, facilitó la inserción de los grupos subversivos en la región nororiental. En efecto, a lo largo de la década de 1970 y 1980, el Estado impulsó una política de combate al narcotráfico que se

ejecutaba a través de programas de erradicación, sustitución e interdicción policial, convirtiendo a los productores campesinos de hoja de coca en el principal blanco de esta política.

Debemos recordar que desde la promulgación en 1978 del Decreto Ley 22095 dirigido a combatir el narcotráfico, el Perú no sólo puso en vigencia un marco legal, sino también un aparato policial especializado denominado Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). El ordenamiento estatal incluyó un programa de sustitución de cultivos, la creación de un ente de Control y Reducción del cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) a cargo del resguardo de los bienes incautados y el COMUCOD, entidad multisectorial, además de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) y otros organismos. El financiamiento de este denso aparato burocrático, derivado de una concepción policial del problema, implicó para el Estado un alto costo económico y también humano, por las vidas de funcionarios civiles y policías que murieron en la guerra de la coca.

Hasta la fecha, el proyecto Especial Alto Huallaga no ha podido implementar en la práctica una línea de sustitución de cultivos que sean más rentables que la coca. Por otro lado el CORAH, desde mayo de 1983 en que opera en el Alto Huallaga, sólo ha erradicado, según cifras oficiales, 54,646 has con su ejército de funcionarios, empleados y obreros. La mayor parte de la coca destruida lo ha sido por efecto de la diseminación del hongo *Fusarium* y la aplicación de defoliantes como el Spike, producto químico que el gobierno experimentó, en 1987, en parcelas con coca en Uchiza.

Ante la inminente erradicación de amplias áreas de cultivo de coca que fueron consideradas ilícitas, se constituyó el «Comité Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos», presidido por el Ing. Tito Jaime Fernández, que realizó gestiones con ministros del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, y luego con el de Fernando Belaunde, sin lograr sus propósitos, por lo que se desarrollaron dos paros regionales con el copamiento de ciudades y bloqueo de carreteras, de 24 horas en 1979 y de 48 horas el año 1980, además de una huelga indefinida en 1982, que tuvo una duración final de 11 días.

Las paralizaciones y acciones de fuerza tenían por objetivo evitar la erradicación compulsiva de las plantaciones de coca consideradas ilegales, objetivo que no fue logrado puesto que en el segundo semestre de 1979 se realiza el «Operativo Verde Mar I», con pocos resultados en cuanto a destrucción de cicales y secadoras, pero lamentables en cuanto a la aplicación de métodos violentos que llevaron a la vulneración de derechos elementales de las personas por parte de las fuerzas policiales, la Marina de Guerra y agentes de la DEA norteamericana.

Durante el paro de 48 horas, en marzo de 1980, miles de campesinos se encontraban en la ciudad de Tingo María, cuando aterrizaron en el aeropuerto aviones y helicópteros de la policía y la Fuerza Aérea y de ellos descendieron aproximadamente 500 hombres armados «hasta los dientes», según relata una pobladora que se encontraba conformando un piquete en el puente Córpac: «al verlos totalmente armados, como en las películas y nunca antes lo habíamos visto, nos dio miedo».

«Pasaron junto a nosotros y tomaron la avenida Raymondi (vía principal) que estaba llena por cientos de cocaleros huelguistas y pobladores de la ciudad como curiosos, llevaban armas de todo tipo y algunos decían son los *sinchis* y otros aseguraban que eran los marinos .Cargaban mochillas y aparatos que después supimos eran lanzallamas» «nadie hacía nada, todos estábamos como paralizados ante tal demostración de fuerza y poder...Después comprobamos que esos hombres armados nos declararon la guerra a los campesinos cocaleros; cortaron nuestras plantas de coca, dinamitaron las secadoras, robaron nuestros bienes y violaron algunas mujeres, los fiscales no hicieron nada ante nuestras denuncias», agrega con el rostro compungido, como si los hechos vividos la habrían marcado por siempre.

Durante el Operativo Verde Mar II, los abusos se hicieron mayores y se llegó a detener a cientos de agricultores acusados por narcotráfico, exigiendo a los que tenían grandes extensiones a erradicar sus cicales y plantar otros cultivos, como una señal de arrepentimiento; sólo así fueron puestos en libertad, no sin antes iniciarles procesos judiciales. La dirigencia en pleno a excepción del secretario general, fue recluida en los ambientes de la PIP, donde hoy funciona el complejo policial.

En 1982, miles de campesinos cocaleros de Chinchao, Monzón, Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad, se trasladaron a la ciudad de Tingo María para iniciar una huelga indefinida el 25 de noviembre, acordada en un pleno ampliado de dirigentes realizado en octubre en el coliseo «El gallo Giro», de propiedad de Hernan Malpartida Palacios, un comerciante y productor de coca. La consigna era «más vale morir de pie que vivir de rodillas» y la lucha sería, según la organización, «hasta las últimas consecuencias».

El pedido principal era la reanudación del comercio legal de la coca a través de la Empresa Nacional de la Coca-ENACO porque, inexplicablemente, el gobierno de Belaunde Terry, al termino del plazo que establecía los artículos 1º y 9º del Decreto Ley 22927 del 4 de marzo de 1980, prohibió la compra de la coca por la ENACO desde 1981, con lo cual la situación de los productores de coca se agravó. Luego de 11 días de huelga, el gobierno derogó esos artículos, con lo cual se restituyó el comercio legal de la coca.

Esta prohibición tuvo un efecto contrario, pues durante casi dos años la coca fue a parar al mercado negro a precios bajos, con lo cual la producción y comercio de derivados de la coca tuvo un crecimiento sostenido y espectacular, que incluso llevó a algunos analistas a relacionar al gobierno con el narcotráfico, beneficiario directo de los dispositivos legales. En algunos casos incluso se rebajaron penas a narcotraficantes presuntamente relacionados con políticos del régimen. En mayo de 1982, una comisión investigadora del narcotráfico del Senado integrada, entre otros, por el ex ministro de la presidencia Nicanor Mújica Álvarez Calderón, el senador Alfonso Ramos Alva, los políticos Ricardo Monteagudo y Fernando Calmell del Solar, emitió un informe sobre el problema de la coca y el narcotráfico, concluyendo que el problema era no tanto policial y delictivo

cuanto estructural, y tocaba en su devastador impacto toda la estructura de la sociedad y sus valores.

A la luz de los resultados obtenidos en la lucha contra las drogas, puede concluirse que el negocio del narcotráfico, aunque con altibajos, siempre se mantuvo, no obstante el descubrimiento de aeropuertos clandestinos, el decomiso de miles de kilos de pasta básica, de pasta básica de cocaína lavada y de clorhidrato de cocaína, o la captura y destrucción de avionetas, armas, laboratorios e insumos de procesamiento de las drogas, desde 1979. Lo logrado no es más que un pequeño referente para una actividad multinacional que, según todas las evidencias, moviliza un promedio de 100 mil millones de dólares anuales, es decir una industria tan grande y poderosa como el petróleo, que tuvo por décadas sus áreas de producción de materia prima en Perú y Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombia y su gran mercado de consumo en Estados Unidos de Norteamérica.

En los años 80 de acuerdo al informe de la Comisión Investigadora del Senado, la superficie cultivada de coca en forma legal en el país era de 17 mil 862 hectáreas, mientras que la ilegal alcanzaba 50 mil hectáreas, de las cuales 10 mil hectáreas estaban en el Alto Huallaga. Seis años después, en 1986, si nos atenemos a las declaraciones de los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Tocache (FEDIPT), los cultivos ilegales de coca, sólo en el Alto Huallaga, alcanzaban 195 mil hectáreas.

En 1980, el ingreso de esta actividad en el país se calculaba provenía en 97% del comercio de la PBC bruta, el 0.6% por PBC lavada y el 2.4% a clorhidrato de cocaína. Siete años más tarde se calculaba la PBC bruta en un 13.5%, la PBC lavada un 80% y el clorhidrato de cocaína en 6.5. Este crecimiento se explica por la transformación progresiva de campesinos cultivadores de coca en campesinos dedicados a la maceración de pasta básica.

En determinado momento, investigadores y periodistas denominaron al fenómeno de las drogas y la violencia en el Alto Huallaga, como la «tocachización» (término tomado de lo sucedido en el pueblo de Tocache) de la selva alta, porque afectaba la estructura agraria, alterando todo el proceso económico regional con gran parte de los suelos cubiertos por la coca. Es decir, se producía un proceso de sustitución al revés de lo programado por el Estado: la coca reemplazaba a los productos alimenticios y comerciales de tipo legal. Pero no sólo la estructura económica regional era distorsionada, sino también, el edificio social y cultural sufría las consecuencias.

En términos generales el resultado de las medidas orientadas a la interdicción del narcotráfico no fue óptimo por varios factores descritos extensamente en los estudios de la CVR (véase Estudios sobre narcotráfico de la CVR). Los fracasos llevaban a adoptar medidas coercitivas, que sirvieron de propulsores de la muerte, por un lado, y de la desestabilización del Estado por otro lado, permitiendo a los subversivos obtener al inicio apoyo social y relativo éxito en zonas donde la coca y el narcotráfico, junto con la corrupción de la burocracia estatal y la

ineficacia de los programas de desarrollo alternativo, creaban las condiciones para que los subversivos vendan su teoría de violencia a cambio de «un nuevo orden y justicia social» .

En 1983, el diputado por Tingo María, de los registros de Acción Popular, Reynaldo Rivera Romero, fue desaforado del congreso de la República luego que se le comprobaran sus vínculos con el narcotráfico. Cuando fue asesinado el dirigente cocalero Tito Jaime Fernández en abril de 1984, la defensa de la coca perdía un dirigente importante.

Tito Jaime, ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, fue presidente del Rotary Club e integrante de la Logia Masónica. En su condición de gran cocalero asumió la lucha por la defensa de la coca desde 1978. Luego de su muerte, algunos dirigentes afirmarían que tuvo una especie de «pacto secreto con el PCP-SL», al que servía por temor, como nexos con algunos narcotraficantes para la captación de cupos. Dirían también que una parte de los aportes que miles de cocaleros entregaban a la Asociación eran entregados a los subversivos desde 1980. Esta versión fue afirmada, entre otros, por el dirigente cocalero y alcalde de Pumahuasi, Víctor Piñan Verde, de los registros del APRA, meses antes de ser, a su vez, asesinado por senderistas el 20 de setiembre de 1984, por negarse a seguir entregando «aportes para la lucha armada», aportes que, luego del asesinato de Jaime Fernández, se habrían reducido a cero.

En 1984 tuvo que suspenderse la erradicación de plantíos de coca por, los peligros contra el personal del CORAH y los problemas que ocasionaba entre la población: abusos, robos, corrupción y, sobre todo, la incapacidad para generar actividades económicas alternativas. Cocaleros erradicados, niveles crecientes de inseguridad ciudadana, ausencia de un poder efectivo del Estado, en resumen, facilitaron el ingreso de los cuadros senderistas a la región.

1.4.6.1.2. Violencia cocalera y violencia

De acuerdo a testimonios, el PCP-SL inicia su actividad sediciosa en la zona del Huallaga a mediados de los 70, haciendo proselitismo en centros educativos con el objetivo de captar adeptos. Los primeros docentes que fueron ganados por la prédica insurgente de Abimael Guzmán pertenecían al colegio Gómez Arias Dávila, al Instituto Nacional Agropecuario, como vimos en párrafo anterior, al Colegio Nacional Inca Wiracocha y algunos otros centros educativos primarios de Tingo María y otras ciudades menores. El colegio Gómez Arias Dávila fue utilizado, combinando el convencimiento, la presión y las amenazas, como centro de adoctrinamiento, reglajes y planificación de acciones subversivas. La influencia del PCP-SL era tal que en una ocasión, en pleno día y desafiando a las fuerzas de seguridad, algunos de sus militantes realizaron una reunión proselitista con la asistencia de alumnos y profesores. La osadía adquiere mayores visos si recordamos que el colegio se encontraba a sólo 200 metros de la base policial antidrogas y a igual distancia de la PIP, mientras que la base militar se ubicaba a dos kilómetros.

En respuesta, años después, en 1991, un supuesto grupo «paramilitar» no identificado asesinó a dos profesores, secuestró a otro que nunca apareció y dejó gravemente herido al director del colegio más importante en la ciudad de Tingo María.

En 1977, durante el paro desarrollado en la ciudad de Tingo María en el cual el SUTEP tuvo participación hegemónica, se quemó un vehículo de la Guardia Civil y se propiciaron otros actos que culminaron con la detención de varios docentes. A partir de esta formación inicial, los cuadros senderistas se trasladaron al área rural, con el fin de capitalizar el descontento de los productores de coca y desarrollar su estrategia de lucha armada.

Aprovecha este resentimiento de un problema social que teníamos sobre al cosecha de la coca, allí aprovecha Sendero pone sus bases, ellos haciendo ver al pueblo de que creo, que llega el momento también de que el pueblo debe defenderse de esta prisión que hace el Estado, discriminadamente erradicando, quemando sus chacras de coca, todo eso pe, entonces Sendero aprovecha ese momento para que forma sus bases, en distintos caseríos... ... pero los años 80, 81, el Estado prohíbe la cosecha de coca y como la gente vivía de la hoja de coca, vendiendo bueno unas a la ENACO, y otras bueno de repente clandestinamente, para que te puedo negar de ahí viene pues el resentimiento social, en eso aprovecha Sendero para poner bases «(Entrevista en pueblo 7 de Octubre).

Entre 1979 y 1982, con la agudización del problema cocalero, se conforma una «Asociación de campesinos cocaleros del Valle del Monzón» con la presidencia del profesor Rudecindo Julca León, quien emite pronunciamientos que marcaban distancia con el comité que presidía Tito Jaime e intenta tomar el mando de esta organización, que contaba con cerca de 6 mil cocaleros empadronados. Los manifiestos y comunicados de la asociación de cocaleros de Monzón contenían tal virulencia contra los gobiernos peruano y norteamericano, que le daban un contenido netamente político al tema de la coca, lo que obligó entonces a Tito Jaime Fernández a expresar, en la asamblea realizada en el coliseo «El gallo giro» el mes de julio de 1982, que él como presidente deslindaba posiciones frente a la asociación de Monzón porque propiciaba la violencia y la política antes que las reivindicaciones de carácter social y económico.

1.4.6.3. Organización y estrategias subversivas

La estrategia senderista original se puso de manifiesto durante la realización de la huelga general indefinida de cocaleros del mes de diciembre de 1982, que tuvo una duración de 11 días, al cabo de los cuales consiguió la atención del gobierno de Fernando Belaunde. En efecto, esta medida de fuerza tuvo que ser truncada luego que se detectara la intención de un grupo de presuntos elementos del PCP-SL infiltrados entre los huelguistas, de propiciar un «baño de sangre» con acciones que llevarían al enfrentamiento abierto con las fuerzas del orden, aprovechando el cansancio y la frustración de aproximadamente 20 mil campesinos de toda la región que habían tomado como «base» la ciudad de Tingo María.

Según entrevistas y testimonios recogidos por la CVR, los primeros subversivos del PCP-SL en llegar a la zona fueron foráneos provenientes de Ayacucho, Huancavelica y Pasco, pero esta afirmación debe ser tomada con cautela pues en todo el país se señala, en la reconstrucción de la memoria colectiva, que los senderistas que iniciaron la violencia siempre fueron foráneos.

Lo que si es definitivamente cierto es el apoyo y la militancia, primero de profesores, luego de estudiantes de educación secundaria y superior, y finalmente de algunos dirigentes de los comités de campesinos que conformaban las provincias de Leoncio Prado y Tocache, además de los distritos de Monzón, Chinchao y Cholon de las provincias de Huamalíes, Huánuco y Marañón, respectivamente.

En Aucayacu algunos entrevistados afirman que, poco después de los operativos anti-narcóticos Verde Mar I y II, una comitiva de cocaleros fue a Ayacucho para conseguir la ayuda al PCP-SL, buscando quien defendiera a los cocaleros de la represión estatal. Según estos entrevistados la comitiva regresó trayendo a varios dirigentes del PCP-SL. Estos cuadros senderistas habrían iniciado el trabajo político de su partido en el campo tomando como causa la defensa de la coca; incorporándose clandestinamente en las organizaciones cocaleras e incentivando cada vez más que los campesinos recurrieran a medios violentos en sus manifestaciones y marchas.

En su fase inicial, al igual que en el resto del país, los grupos armados senderistas aparecieron como defensores del orden y la paz locales. Diversas fuentes informativas revisadas indican que las primeras acciones de envergadura que el PCP-SL realizó en Tingo María fueron, en diciembre de 1983, el ataque al local del Proyecto Especial de Control y Erradicación del Cultivo de la Coca del Alto Huallaga (CORAH) y el atentado contra un candidato de AP en Aucayacu.

Entre 1981 y 1988, el PCP-SL dirigió sus ataques contra el Estado, contra los organismos de cooperación internacional y también contra las organizaciones de la población local. En este primer objetivo de hacer desaparecer cualquier representación del Estado, eran blancos principales; alcaldes, prefectos, policías, dirigentes de partidos políticos y gremios, pero también la ENACO, principal acopiador lícito de la hoja de coca, así como los Proyectos financiados por AID para sustitución de cultivos y los organismos de erradicación. Una de las primeras acciones armadas del PCP-SL fue el asesinato de 19 trabajadores del CORAH ocurrido el 17 de noviembre de 1984 en Cornivilla, en Monzón.

La propuesta política del PCP-SL era que los productores debían organizarse para enfrentar con éxito no sólo a la policía, sino también a los dos proyectos que buscaban erradicar la coca, el PEAH y el CORAH, además de negociar colectivamente con los intermediarios del narcotráfico, que decidían cuándo y cuánto tenía que pagarse a los productores.

Como parte central de su estrategia, el PCP-SL constituyó en su Bases de apoyo iniciales, Comités Populares, primero cerrados y luego abiertos. La expansión de estos Comités se muestra,

por ejemplo, en el comunicado No 011-92, del 09-03-92 del Comando Político Militar del Frente Huallaga, en el cual se daba cuenta de la «*desarticulación de los Comités populares de Venenillo, Chontayacu, Buenos Aires, Huayruro, los Cedros, J.C. Tello, Yurimaguas y Hunganapampa*», y se afirmaba haber encontrado 111 «cartas de sujeción» de igual número de senderistas que, con sus firmas, confirmaban su plena adhesión al grupo subversivo.

En el caso de Raúl, el PCP-SL logró tener dominio y capacidad de acción en diversas áreas que consideraba «zonas liberadas». Destacan entre ellas dos, situadas sobre la margen izquierda del Río Huallaga, a las cuales el léxico popular llama bolsones: Bolsón Cuchara y Bolsón Primavera (*Ver Estudio en profundidad La estrategia de pacificación en la margen izquierda del Río Huallaga*). En estos bolsones, el PCP-SL instauró su estructura de Bases, Comités y Ejército Guerrillero, organizando el territorio según la concepción del partido. Los bolsones, conformados por 8 o 9 caseríos, tenían tres mandos principales que controlaban las actividades en el área, pero a la vez los caseríos que formaban el bolsón eran divididos en pequeñas zonas, cada una con tres mandos sujetos a la autoridad y vigilancia de los primeros.

De cada base salían 3 o 5, de cada pelotón de fuerza de base... de 15 o 20...así pedía el Comité Central... nos obligaban a ir a pistas, puentes, mejor dicho a pintar puente, pistas, a la gente de aquí les hacía salir hasta la Marginal... En tiempo de paro armado nos llevaban ahí como carnadas, mejor dicho obligaban a ir de aquí para hacer trabajar toda la noche, y al día siguiente nos llevaba a la caleta, a un sitio que se esconde... se picaba la pista, se metía combas, panflitos pintados, todo porque nos obligaban, poníamos palos a las carreteras para tapar todo. (Primavera, 2002).

... iban dos, tres días porque a veces había paro de 24 horas o por 72 horas, nos hacían cargar ollas porque en ese tiempo habían en Aucayacu mando político, mando logístico, militares... (Primavera, 2002).

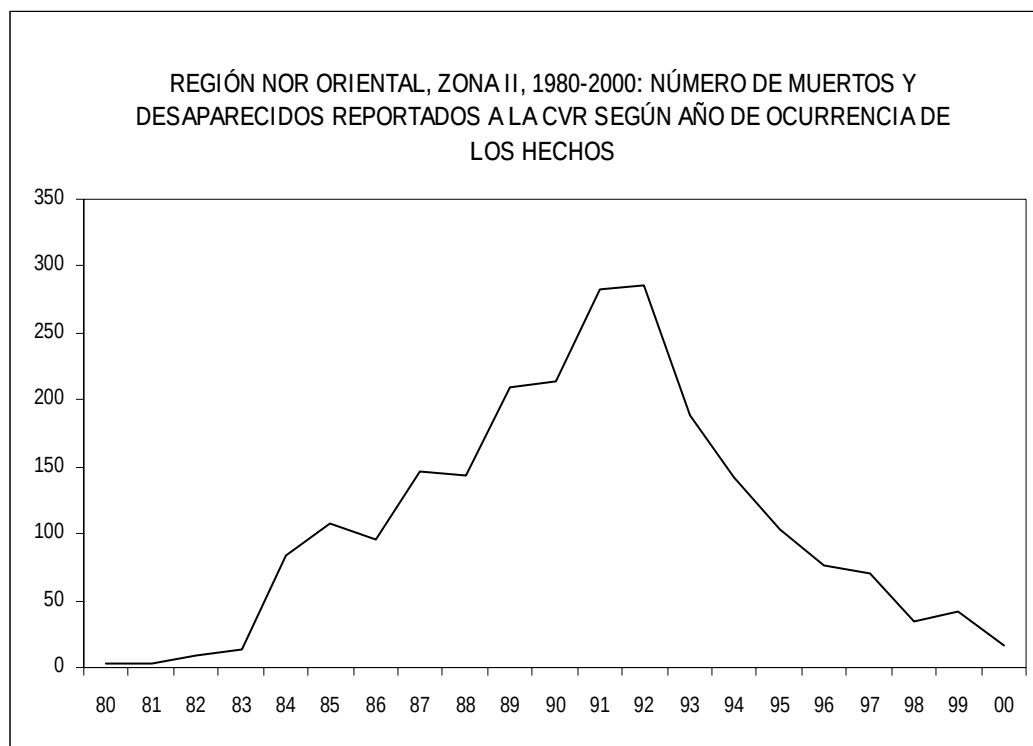
La importancia del Alto Huallaga para entender el proceso de violencia reside en que fue uno de los pocos lugares del país donde el PCP-SL consiguió dominar un territorio amplio y por un tiempo relativamente largo, entre diez y quince años, estableciendo una red territorial, que era el aparato administrativo, de comités populares y fuerzas de base de las zonas organizadas, mientras tanto la red móvil eran la fuerzas principal y la fuerza local, que conformaban el Ejército Guerrillero Popular.

1.4.6.2. Historia de la violencia

La provincia de Leoncio Prado, sobre todo el curso del alto Huallaga entre Tingo Maria y Aspuzana, concentra el 61.50% de los muertos registrados en esta Zona II, signada por la complejidad de la producción de coca y sus derivados ilícitos. En intensidad de violencia, le sigue la provincia de Tocache. Ambas provincias concentran el 83.23% de los muertos de la Zona II del Huallaga.

REGIÓN NOR ORIENTAL, ZONA II, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	2,244	3	3	9	13	84	107	96	146	142	208	211	274	276	188	140	103	77	71	35	42	16
HUAMALIES (Monzón)	252	-	-	2	-	23	9	15	8	15	14	33	40	29	25	6	10	7	5	6	5	-
LEONCIO PRADO	1,420	1	3	4	9	53	84	66	84	84	114	118	173	197	112	98	65	46	50	23	22	14
MARAÑÓN (Cholón)	77	1	-	-	-	2	1	4	10	3	3	4	1	10	5	17	12	-	2	-	2	-
PACHITEA (Chaglla)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
TOCACHE	491	1	-	3	4	6	13	11	44	40	77	55	59	40	46	19	16	24	13	6	12	2



1.4.6.2.1. Inicio y expansión de la violencia: 1980-1986

Por información que manejaba el departamento de inteligencia del Frente Huallaga, se conoce que el primer grupo de 60 senderistas armados hizo su ingreso en 1982 por el valle del Monzón, luego de transitar por la zona de Tantomayo, una especie de corredor que conduce por Maravilla y Caunarapa hasta la ciudad de Monzón y de aquí al caserío Matapalo por donde se dirigieron a Venenillo, distrito de José Crespo Castillo en la provincia de Leoncio Prado, donde asentaron su primera base en el segundo semestre de aquel año. Desde entonces y en el mismo sector de la margen izquierda del río Huallaga, lograron establecer una poderosa organización insurgente con posibilidad de apoyar logística y económicamente a los grupos de la sierra y costa. Desde Venenillo y cruzando el Huallaga, por el sector de Alto Maronilla, en cuestión de horas podían llegar hasta Aguaytia y en tres días hasta el Biavo, en San Martín.

Aunque no se sabe a ciencia cierta a qué sitio entró primero, según testimonios de Aucayacu serían tres las zonas donde el PCP-SL se asentó y empezó a organizar el campo. Dos estaban en la margen izquierda del río Huallaga (el puerto Venenillo y caseríos de La Merced de Locro, Corvina, los Cedros, entre otros que luego conformarían el llamado «Bolsón Cuchara»); y los caseríos de San José de Pucate, San Martín de Pucate y Primavera, frente a Aucayacu. La tercera zona fue el sector Gocen-Nueva Esperanza, situado en la margen derecha del río Huallaga al norte de Pucayacu, cerca al caserío de Consuelo. Con el creciente control senderista sobre el campo se vio el surgimiento de Ramal de Aspuzana como centro abierto de la droga.

A principios de 1982 «grupos de avanzada» ya estaban visitando comunidades a lo largo de la margen izquierda del Huallaga desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco, donde reunían a los pobladores, pregonaba su política y anunciaban las nuevas reglas que los pobladores tendrían que acatar si querían quedarse. Vistiendo polos negros, pasamontañas y portando escopetas, tramperos y revólveres estos primeros grupos predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado para reivindicar la coca, en vista de que las huelgas pacíficas –aseguraron– no lograrían concesiones significativas.

A finales de 1983, infiltradas esas columnas en el Alto Huallaga, se registró la primera acción violenta de PCP-SL en la región, contra el local del proyecto CORAH. Al año siguiente, como vimos, un grupo de senderistas asesinó en Monzón a 19 trabajadores de este proyecto, destruyendo en otra acción el puesto policial de Aucayacu.

Si observamos las estadísticas de muertos, desaparecidos, atentados, acciones militares, etc. (véase gráfico y cuadro de muertos) podemos constatar que desde 1984 la violencia ya no se detiene. Así, aquel año, el presidente de la cooperativa Pucate, del distrito de José Crespo y Castillo, fue asesinado junto con otros 6 dirigentes y trabajadores, mientras que la ciudad de Aucayacu fue tomada en dos oportunidades con el saldo de una veintena de fallecidos; además de ser asesinados, como hemos visto, los alcaldes Tito Jaime y Víctor Piñan Verde, mientras que 19 trabajadores del proyecto CORAH corrieron igual suerte. A estos asesinatos se suma el ataque a la Estación Experimental de Tulumayo así como al puesto de la Guardia Civil en Santa Lucía, la incursión en la ciudad de Tocache y a las instalaciones de la empresa Palma del Espino, en Uchiza. El Estado se vio obligado aquel año a declarar el Estado de Emergencia.

En 1985, se produce la toma y difusión de propaganda en las emisoras Radio Tingo María y Riverena de Aucayacu, así como el asesinato del teniente gobernador y su familia en Pendencia Alta. El accionar del PCP-SL, en relación directa con la ampliación de su base social especialmente rural, fue en aumento, y de los contados asesinatos de años anteriores la cifra de muertos en la provincia de Leoncio Prado pasa a más de 100 sólo en 1985. En diciembre de ese año, el presidente García levanta el estado de emergencia permitiendo con ello el retorno policial y los abusos contra la población, que agudizaron aún más los conflictos.

A principios de los años 80, tener vinculación con el narcotráfico otorgaba prestigio y cierto estatus social. «Todos» querían ser identificados como parte de alguna red existente pues nadie se atrevería a meterse con ellos. Pero cuando el PCP-SL toma el control de muchas zonas, la realidad cambia y entonces «todos» quieren aparentar tener un vínculo con el senderismo y por ello hablan de revolución aunque ninguno de los jóvenes que menciona esa palabra sepa a ciencia cierta lo que quiere decir.

Lucas Cachay dirigente gremial de San Martín vinculado al MRTA, sostuvo en una entrevista con la prensa que los productores de coca afirmaban que a los senderistas no les interesaba la formación que tuviesen quienes se enrolaban con ellos. Es más, refería Cachay, los senderistas decían que lo importante no era «que supieran porque luchaban sino que se encontraban dispuestos a luchar, nada más». Los senderistas buscaban «batir el campo, levantar las masas» con el objetivo que «una vez revuelto el campo, el campesino se ciega y pueda hacer lo que el partido disponga» (Perú en el Fin del Milenio, 282-300).

Desde 1986 se empieza a generalizar la afirmación de que existía una alianza de la subversión con el narcotráfico. La noche del 21 de agosto de 1986, la población de Uchiza había enfrentado a un destacamento del PCP-SL recién llegado de Paraíso al que obligó a abandonar la ciudad. Este fue el primer enfrentamiento que una población del Alto Huallaga tuvo con los senderistas, pero al cabo de un año la figura se invirtió, pues los senderistas lograron asumir el control de Uchiza y Tocache con el apoyo de los narcotraficantes. Así, Uchiza y Tocache pasaron a constituirse en los principales bastiones del PCP-SL sin encontrar resistencia significativa en la población. Literalmente, los senderistas comenzaron a gobernar la zona.

En esta zona la presencia de la prensa nacional y extranjera fue esporádica y escasa, de igual forma que los organismos de Derechos Humanos que recién actúan activamente desde 1992, como respuesta a la supuesta violación masiva del derecho a la seguridad y la integridad física de los pobladores. El costo del conflicto armado interno para el periodismo fue bastante alto pues cayeron asesinados por el PCP-SL Tod Smith, Guillermo López Salazar, Marino Meza, Orlando Carrera y Adolfo Isuiza.

1986 marca el límite de la fase de inicio y expansión de la lucha armada, registrándose el ataque y destrucción de la cooperativa El Porvenir y de la estación de ENTEL en Hermilio Valdizán, el asesinato de un agente municipal en Tocache junto con la toma de Radio Marginal, además del asalto y destrucción de documentos en el municipio de Monzón, la ocupación por algunas horas del pueblo de Nuevo Progreso y el incendio de su local municipal, el ataque al puesto policial de Uchiza, donde fallecen cinco policías, además del asesinato de 10 homosexuales y prostitutas en Aucayacu y la más sangrienta, la emboscada a una patrulla de la UMOPAR donde

fallecieron 7 efectivos policiales y el Fiscal Provincial de Leoncio Prado que formaba parte de la comitiva

De otra parte, desde 1986, el PCP-SL comenzó a organizar los «Comités de poder popular paralelo» (CPPP) en pueblos mayores con presencia de fuerzas del orden, conocidos en el habla popular del Huallaga como «las urbanas». La función de «las urbanas» fue mantener una red de espionaje, dedicarse al cobro de impuestos o colaboraciones de comerciantes y al asesinato selectivo de «malos elementos».

En 1986, los vuelos con droga alcanzaron frecuencias inéditas pues del aeropuerto municipal de Tocache, para mencionar un solo ejemplo, salían a veces hasta cuatro o cinco vuelos diarios. El narcotráfico estaba en pleno apogeo y la droga circulaba abiertamente.

1.4.6.3. Generalización de la violencia: 1987-1992

En la fase de generalización de la violencia, el PCP-SL establece posición y dominio de amplias zonas, con la conformación de cuadros, bases de apoyo, comités populares abiertos, compañías y columnas, lo que le permite desarrollar sus planes en la estrategia de «batir el campo» y propiciar con ello el levantamiento popular contra el poder instituido, lo que logra en cierta medida entre 1989 y 1990. De mediados a fines de la década del ochenta fue casi imposible transitar entre Tingo María y Tocache sin ver al menos un muerto, botado al borde del camino, con o sin un letrero. Desde abril de 1987, el PCP-SL comienza a ampliar el control de cada pueblo y se decide a «liberar zonas», expulsando a la policía de los lugares donde ésta se encontraba acuartelada. Es fundamental para el PCP-SL imponer a los narcos la condición: de disolver sus bandas de sicarios, conocidas como «pandillas». Inicialmente los narcos se resisten y una de ellas es liquidada por los senderistas, que matan a 13 de los 18 miembros de la banda de «Cejitas». Los 5 sobrevivientes se incorporan al movimiento del PCP-SL. No les quedaba alternativa. Se reafirma así el control compartido del PCP-SL sobre el comercio ilegal de la coca, en alianza con grupos de narcotraficantes.

La primera incursión en Uchiza

A las 11 de la noche del 31 de mayo de 1987, cerca de doscientos hombres del PCP-SL atacaron el puesto policial de Uchiza. El resultado fue de seis policías muertos y el local policial destruido por las llamas y la dinamita. Desde entonces, el país conoció algo que se sospechaba pero que nadie se atrevía a sostener en público: el PCP-SL controlaba la zona, mientras que la población, simpatizante o aterrorizada, cumplía sus disposiciones.

A raíz de este ataque, el gobierno declara en emergencia la zona el 15 de julio, encargando a las fuerzas policiales los operativos antisubversivos. En un primer momento, la actuación de la policía era respetuosa de los derechos ciudadanos pues los interrogatorios se realizaban en

presencia de un fiscal, no había ejecuciones masivas como había sucedido en Ayacucho y la prensa podía hacer su trabajo con cierta tolerancia.

Desde el día en que la policía intervino primero en Tocache y luego en Uchiza, no se reconoció el crecimiento de la subversión; por el contrario, se responsabilizó de estos hechos al narcotráfico. Los narcotraficantes sorprendidos huyen, mientras que los senderistas se mimetizaron en la población y en algunos casos se repliegan a zonas inaccesibles donde su control era difícil y su seguridad mayor.

La conversación obligada por esos años era sobre la presencia subversiva y el «gobierno» que ejercía:

En las incursiones senderistas se enseñaban los ocho mandamientos de la revolución...el primero era fidelidad al camarada presidente, el segundo, luchar por la revolución....no se podía convivir con las camaradas, una vez fueron ajusticiados dos camaradas-cumpas por no respetar este principio, relata... " había dos tipos de senderistas, unos pertenecían a una especie de comando político – militar, era el que sentenciaba, el que castigaba, en realidad dirigía todo lo que había que hacer...los otros eran los delegados a los que se encargaban tareas, esos también eran como comisarios...todos cantaban «La Internacional», hasta los niños, era obligación aprenderla, el himno de sendero también el que no aprendía era castigado...

Una vez, le he preguntado a uno de los jefes de Tocache {de Sendero se entiende} por que había tantas mujeres. Me respondió que no se trata de cualquier mujer la que participa en al revolución, sino la mujer joven, porque mientras ella no se case y no tenga hijos, son mucho mas insensibles y mucho mas frías que los hombres y por eso están dispuestas a todo (Perú en el Fin del Milenio, 282-299).

Tocache: a sangre y fuego

La ciudad de Tocache, en marzo de 1987, estaba prácticamente tomada por los narcotraficantes y senderistas, quienes controlaban a la población y ordenaban actividades y faenas a las que todos debían acudir. Los líderes de Sendero residían en la casa del narcotraficante «Vampiro» y junto con él decidían la suerte de la población.

Actuando en el marco del estado de emergencia decretado en la provincia de Leoncio Prado, en el distrito de Cholón de la provincia de Marañón; y en las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres en el departamento de San Martín, se desarrolló el 17 de julio un gigantesco y espectacular operativo, denominado «Relámpago» con la participación de la policía especializada, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército Peruano. Eran las 11 de la mañana cuando aparecieron helicópteros en los cielos de Tocache, de los cuales descendieron efectivos fuertemente armados; «era de película» recuerda el periodista Edwin Usuriaga, testigo de los hechos, pues en distintos lugares de la ciudad y alrededores la gente huía, incluyendo los terroristas y narcotraficantes, «lo dejaron todo, corrían por los montes» agrega el periodista, quien se encontraba en un local cercano a la plaza de pueblo.

No hubo represión al pueblo, y los efectivos ingresaron a viviendas previamente ubicadas por los servicios de inteligencia, registrando cientos de capturas e incautando carros y motos, artefactos eléctricos y otros bienes de las casas que fueron abandonadas.

Unidades especiales de la policía se instalaron tanto en Tocache como en Nuevo Progreso y la presencia del PCP-SL en estos centros urbanos se hizo clandestina. Lo importante es que nunca volvería ninguna columna senderista a intentar una ocupación abierta de un centro urbano dentro del Huallaga, siendo la toma y ocupación de Tocache, la primera y última vez que el PCP-SL ejerció un control abierto sobre la «ciudad». El PCP-SL se concentró en la acumulación de fuerzas de todos sus «bolsones» rurales para lanzar ataques a centros urbanos por un máximo de unas horas, de donde salían con prisa antes que llegaran las fuerzas *contrasubversivas*.

A raíz del Operativo «Relámpago» y la fuga al campo de las firmas principales, Tocache decayó como centro abierto de la droga, surgiendo Sión como nuevo foco del mercado de la droga. Tocache, sin embargo, seguirá siendo importante dentro del circuito del narcotráfico, abasteciendo sobre todo de insumos, y manteniendo vuelos del aeropuerto municipal pero con menos frecuencia. Tocache dejaría así su lugar de importancia a Uchiza donde el narcotráfico se mantendría en pleno apogeo y con una fuerza creciente hasta fines de la década de los ochenta.

Un infierno llamado Paraíso

Fue recién a la mitad de la década de 1980 que el PCP-SL comenzó a desplazarse río abajo en el Huallaga, hacia lo que para entonces había emergido como la zona más importante del mercado de la droga: Uchiza, Paraíso y Tocache. A diferencia de la parte sur, entre Anda y Aspuzana, donde en los primeros años del apogeo el narcotráfico no ejercía una violencia extrema, en esta zona más al norte del Huallaga fue mucho más común ver a patrones o narcos andar con pequeños ejércitos de sicarios que les servían de «seguridad» pero también como un instrumento de poder tanto en las zonas urbanas como rurales.

Colonos piuranos primero, y desde 1970 ancashinos perjudicados por el terrible terremoto de Huaraz, son los fundadores de Paraíso. Entre 1976 y 1978, se introdujo el cultivo de la coca, que luego crecería como la espuma alentado por los altos precios que pagaba el narcotráfico. Sólo dos años después, hacia 1980, Paraíso ya era un centro de narcotráfico. Según el alcalde Artemio Miranda Dávila, a Paraíso llegaron narcos de Colombia -los más numerosos entre los extranjeros- Méjico, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países. En determinado momento, cuentan los lugareños, la vida apenas tenía el valor de una bala y un costal de yute color negro para los cuerpos asesinados.

Entre 1980 y 1992, Paraíso en su mejor momento llegó a contar con cerca de 10 mil habitantes, antecediendo a Uchiza como un centro totalmente abierto al comercio de la droga, hasta que Uchiza emergió como el mercado más activo del Huallaga a partir de 1984-85, posición que ocuparía hasta 1990. Paraíso abarcaba entre 18 y 20 caseríos, cada uno con sus respectivas zonas de cultivo, contando además con ocho pistas de aterrizaje que en realidad eran simples caminos vecinales que comunicaban a los distintos sectores y funcionaban como

pistas para despachar cargamentos de pasta básica al extranjero. Concretado el acuerdo entre «narcos» y «terrucos» para la explotación, comercialización de la droga y su «protección», de las pistas de Paraíso salían en promedio 10 a 15 vuelos diarios de avionetas, con 500 a 1000 kilos de droga cada una, al principio sólo a Colombia, pero luego también a otros países.

A partir de su llegada a Paraíso entre 1984 y 1986, el PCP-SL no sólo fue organizando todos los sectores poblacionales de Paraíso sino también las zonas de cultivos alrededor de Nuevo Progreso, Tocache y Uchiza, controlando paulatinamente el campo. Los patrones que antes tenían carta abierta para presionar a los campesinos con sus bandas de sicarios se vieron obligados a acercarse más hacia las zonas urbanas por miedo a que los agricultores informaran a los delegados de los comités populares.

El dinero a raudales, la prostitución, la vida «a cuerpo de rey» de los mafiosos, eran las características de Paraíso, mientras los esporádicos operativos policiales no les causaban mayores pérdidas, porque estaban en una zona estratégica y por la venalidad de los jefes de la patrullas que llegaban de Tingo María, donde según indicios los jefes del narcotráfico y de la subversión tenían su centro de coordinación y control de operaciones.

El miércoles 4 de octubre de 1989 la prensa nacional daba cuenta en Paraíso de un gigantesco operativo de la policía antidrogas con la ayuda de la DEA norteamericana, con el resultado de 36 narcotraficantes muertos y seis policías heridos. Según las notas periodísticas, se destruyeron varios laboratorios de procesamiento de drogas y pistas clandestinas. Oficialmente, se consideraba a Paraíso como el principal centro acopiador de droga que salía para Estados Unidos, concentrándose en ese lugar importantes jefes regionales del narcotráfico, entre ellos Máximo Pérez Salas, alias «Machi», el más importante de todos luego que Catalino Escalante emigrara a Colombia, donde sería asesinado. El caso de Machi es paradigmático en la explicación de la alianza entre el PCP-SL y los jefes locales del narcotráfico. Durante varios años «Machi aceptó» las condiciones impuestas por el PCP-SL para seguir operando sus negocios, pero rompió sus acuerdos en 1987 por los excesivos cupos que los subversivos le impusieron y le «declaró la guerra» al PCP-SL. Con la ayuda de la policía armó un «ejército» de cien hombres y vistiendo uniforme policial «con rango de mayor o comandante» fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba senderista.

El momento decisivo del conflicto vendría en el mes de octubre de 1987 cuando el PCP-SL tendió una emboscada a «Machi», de la que sale librado para refugiarse en el «bunker» que había construido en Paraíso donde resiste el ataque con centenares de miembros del PCP-SL. «Machi» solicitó ayuda por radio al ejército, que acudió con tres helicópteros artillados, disparando fuego graneado y lanzando «Roketts», convirtiendo en segundos el cuasi triunfo senderista en derrota, con la muerte de muchos de sus militantes el 15 de octubre de 1987. Existen varias versiones sobre lo que sucedió con Machi posteriormente. Algunos sostienen, sin embargo, que se fue a Colombia,

otros que Machi se fue a Panamá, mientras que para otros lo mató la misma policía porque sabía demasiado.

El Ejército instaló una base en lo que fuera el «Bunker» de «Machi», permaneciendo allí hasta 1992. Con la llegada del ejército el narcotráfico vuelve a florecer y se asegura que el nuevo jefe de las firmas del narcotráfico era precisamente «Machi», a quien la policía antidrogas le propinó un fuerte golpe en octubre de 1989 con la destrucción de cinco pistas clandestinas y la muerte en enfrentamientos de 36 presuntos sicarios. Luego se produjeron una serie de abusos del ejército y de la policía, por lo que los pobladores progresivamente fueron retirándose hacia las ciudades de Aucayacu, Tingo María, Huánuco, principalmente. En enero de 1995, el diario la República, daba a conocer que «60 soldados habían sido denunciados por violar a varias mujeres en Paraíso». Al final del ciclo de violencia, la otrora «meca» de las drogas no era más que un pueblo fantasma y así permaneció hasta 1999, cuando algunas familias empezaron a retornar ante el avance de la pacificación.

El segundo ataque de Sendero a Uchiza.

Los grupos del PCP-SL habían logrado expulsar a los emerretistas de Uchiza y Tocache con el apoyo de los pobladores y los narcotraficantes, y acometieron en 1989 acciones de gran impacto en la prensa y la opinión pública, entre las cuales resalta nítidamente el ataque al puesto policial de Uchiza, en marzo de 1989, que conducirá al gobierno de Alan García a crear el Comando Político Militar que haría frente a la subversión.

1989 es un año especialmente violento en las zonas cocaleras del Huallaga. Allí, el 27 de marzo, se produce el incidente en la estación policial de Uchiza, provincia de Mariscal Cáceres, que marca un hito en la situación de las zonas cocaleras respecto a la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas. Contradiendo aquello de que la historia no se repite, el 27 de marzo de 1989 varios centenares de senderistas atacaron por segunda vez el puesto policial de Uchiza, dando muerte a 10 policías de los 57 que había en la guarnición, además de tres civiles, quedando otros seis civiles gravemente heridos. Los oficiales asesinados transitaban primero por el macabro ritual del «juicio popular», en presencia de toda la población.

Los policías debieron rendirse después de varias horas de enfrentamiento, sin que el Ejército Peruano que se encontraba en Tingo María acudiera en apoyo. Entonces se adujo que por el mal tiempo no fue posible auxiliarlos, pero tampoco la policía antidrogas y la DEA, que se encontraban en la base de Santa Lucía a pocos kilómetros, apareció. El ataque fue tan violento y contundente que llevó a la conclusión que los subversivos recibieron apoyo de los narcotraficantes. La gravedad del hecho, mereció el pronunciamiento de varios organismos de derechos humanos y permitió a los analistas criticar las estrategias de la lucha *contrasubversiva* (Ver *Estudio sobre Narcotráfico de la CVR*). Según algunos de estos analistas, después de casi diez años de lucha contrasubversiva, la iniciativa estaba del lado de los senderistas.

Ataque a Madre Mía y bombardeo de La Morada.

La Morada, capital del distrito de Cholon, en la provincia de Marañón, fue creada el 14 de junio de 1960 por un grupo de colonos que llegaron de Lima y el Callao, pero a decir de ellos quienes «llevaron la coca» fueron los inmigrantes de Ancash, Pasco y la sierra de Huánuco. Está ubicada en la margen derecha del río Huallaga, frente a la localidad de Madre Mía, donde existía desde 1987 una base militar. Aquí también el narcotráfico y la subversión establecieron sus reglas y lograron avances notables debido a su ubicación como centro de un valle con numerosos centro poblados y su cercana conexión con el pueblo de Paraíso y Ramal de Aspuzana, en la provincia de Tocache.

El 6 de julio de 1989, según relata el dirigente agrario Wilmer Tello, se produjo un ataque de una columna del PCP-SL a una patrulla del ejército de la base de Madre Mía, a escasos doscientos metros del pueblo, resultando herido un capitán. Los pobladores huyeron al interior de la selva para salvarse de las represalias de patrullas militares, que demoraron dos horas en llegar por tierra y con helicópteros artillados que atacaron al pueblo, lanzaron «rockets» y prendieron fuego a las casas, previamente saqueadas, que momentos antes había sido abandonadas por sus moradores. Por años La Morada quedó convertida en un pueblo «fantasma», en el corredor que unía Aucayacu con Madre Mía, Ramal de Aspuzana, Nuevo Progreso y Paraíso.

Los ataques a la base de Santa Lucía.

Como prueba del poder de iniciativa alcanzado por los grupos subversivos, se registraron en 1989 varios ataques a la base de Santa Lucía, centro de operaciones de la lucha antinarcóticos, en donde se había construido desde 1986 una pista de 1500 metros de largo, que permitía la llegada de aviones de transporte militar. El 26 de julio de 1989, antes del reinicio de las actividades antidrogas, centenares de senderistas según reveló el General PNP César Zarate Gambini a los medios de prensa, atacaron la base de Santa Lucía en un intento por destruirla pero sin lograr su objetivo pues fueron repelidos con disparos desde tierra y desde helicópteros; extraoficialmente se dijo que habrían muerto decenas de subversivos y narcotraficantes, hecho que no ha podido ser confirmado.

En el mes de septiembre de 1989 la policía antidrogas con el apoyo de agentes de la DEA, reinició las acciones antidrogas en el Alto Huallaga, luego de haber estado suspendidas durante siete meses, y el 23 de ese mismo mes, se produjo un segundo ataque narcoterrorista a la base, igualmente repelido por helicópteros artillados, sin reportarse muertes o capturas. Cinco días antes habían sido encontrados flotando en las aguas del río Huallaga 30 cadáveres de presuntos informantes de la DEA, aunque otros manifestaron que eran de campesinos supuestos senderistas o narcotraficantes. El 25 de setiembre, otros 12 cadáveres volvieron a aparecer flotando en el río Huallaga; la versión oficial fue que se trataba de ajustes de cuentas entre narcos y senderistas, pero otra vez, hubo voces que responsabilizaban a las fuerzas de control del narcotráfico y la subversión

como autores de las muertes. Funcionarios norteamericanos, entre ellos Tom Larry, portavoz de la embajada de los Estados Unidos en Lima, adelantaron que el hallazgo de estos cadáveres podría ser una advertencia, por tanto todos los agentes de Estados Unidos que se encontraban en Uchiza fueron retirados a la ciudad de Lima. La verdad y los detalles sobre estos hechos de sangre nunca se conocieron, tal como sucedió con casi todos los asesinatos en el escenario de la guerra no declarada.

Naranjillo: subversión a un paso de Tingo María.

Naranjillo, capital del distrito Padre Felipe Luyando, es un pueblo ubicado a escasos 5 kilómetros al norte de Tingo María. Desde 1974, algunos de sus moradores ya se dedicaban al negocio de la coca y se sabe de los primeros narcotraficantes conocidos. Progresivamente, el PCP-SL fue ganando espacio para convertirla por el año de 1985, en uno de sus bases de apoyo, expulsando a las autoridades de gobierno a pesar que las principales bases de las fuerzas policiales y armadas, desde 1984, se encontraban a poca distancia.

Mientras los senderistas y narcotraficantes convivían merced a la alianza establecida entre ellos, muchos pobladores debían huir en las noches hacia la ciudad de Tingo María o al monte, donde pernoctaban por temor a ser víctimas de los insurrectos o de las fuerzas de seguridad.

Desde 1989 los asesinatos se incrementaron, por lo que la vida se hizo imposible en el pueblo. Los alcaldes de Padre Felipe Luyando, Pedro Camasca y Daniel Sayan, fueron asesinados. Algunos mandos locales del PCP-SL desertaron, entre los cuales se encontraba Julio del Castillo, quien empezó la constitución de un Comité de Autodefensa, el primero en la provincia de Leoncio Prado, al principio sin la ayuda del EP, que luego los apoyó con armas y municiones, según relató años después Del Castillo, quien se convirtió en un líder civil en la lucha *contrasubversiva*.

En 1991, el PCP-SL consideró que había adquirido la suficiente fuerza para intentar un ataque a la ciudad de Tingo María teniendo como base Naranjillo, fijando el 16 de julio como día del ataque, día de la fiesta patronal de la Virgen del Carmen. Los moradores de los alrededores del pueblo dan cuenta que desde las 11 de la noche del día 15 hicieron su ingreso por diversos puntos «aproximadamente 500 subversivos bien armados», que debían avanzar por tres flancos hacia Tingo María: unos por la carretera Federico Basadre a orillas de Huallaga, otros por Jacintillo para ubicarse en el puente Córpac e impedir el pase del ejército a la ciudad, porque los destacamentos policiales eran fáciles de dominar. La hora de ataque fijada era, según nuestros entrevistados, las cinco de la mañana del día 16. El PCP-SL no contó con que uno de los «ronderos» había logrado dar aviso al ejército Peruano de la base de Los Laureles y sus efectivos, vestidos como los senderistas para confundirse, lograron llegar a Naranjillo a las tres de la mañana.

En la versión de los moradores, los militares «confundieron y convencieron» a los senderistas para que esperaran hasta el amanecer para avanzar a Tingo María. La estrategia, según nuestros entrevistados, funcionó, y con las primeras luces del alba se produjo el feroz

enfrentamiento que duró hasta las nueve de la mañana, dejando regados más de 40 cuerpos entre senderistas y civiles, mientras murieron cinco soldados. Al sexto día los pobladores de Naranjillo tuvieron que incinerar 14 cuerpos abandonados. Desde entonces los ronderos recibieron mayor apoyo y el ejército realizaba rondas frecuentes, por lo que el PCP-SL fue expulsado de Naranjillo.

Pero la historia de José del Castillo, el arrepentido ex - mando senderista convertido en líder de las rondas de Naranjillo, termina mal. Como tantos otros, el poder corruptor de la droga alcanzó también a Del Castillo, quien utilizaba las armas para extorsionar a los narcotraficantes, por lo que fue asesinado el 6 de abril de 1996, en la carretera Tingo Maria-Naranjillo, cuando se encontraba supuestamente de ronda con otro integrante del «Comité de Luchadores por la Paz». El vehículo que conducía fue arrojado al río Huallaga, según relata Fernando Amasifuen, un rondero que aún permanece con un arma y patrullando, aunque ahora combate a la delincuencia común.

Las Palmas y Hermilio Valdizán, pueblos ronderos

Pero no es en Naranjillo sino en Las Palmas y Hermilio Valdizán que encontramos el mejor ejemplo de Comités de Autodefensa de la zona del Huallaga, reconocidos ambos como «pueblos ronderos». Las Palmas es capital del distrito de Mariano Dámaso Beraún, y Hermilio Valdizán la del distrito con el mismo nombre. En el primero se concentraron más de 40 Comités de Autodefensa, que enfrentaron la arremetida del senderismo, incluidos un ataque a la casa del alcalde Alfonso Mendieta Garay, quien fuera senderista antes de ser autoridad edil. Pero al no encontrarlo, asesinaron a su hija política. El dominio del PCP-SL en Las Palmas se dio entre 1985 y 1992, perdiendo progresivamente su poder ante la presencia de los grupos ronderos, constituidos por campesinos con armas que les dio el ejército, que pagaron una alta cuota de muertos en la región para poder derrotar a los grupos armados senderistas. Según información recopilada por la CVR, se registran ronderos muertos en enfrentamientos en Huaraz, Chaglla Nueva, Tahuantinsuyo, Cayumba, Tambillo Grande, Quesada, San Antonio y en muchos otros pueblos.

El éxito de Las Palmas y Venenillo fue aprovechado por el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, quien llegó con periodistas nacionales y extranjeros a estas localidades para mostrar los avances de la pacificación. En Las Palmas fueron presentados un sinnúmero de arrepentidos, que formaban y quemaban los trapos rojos o besaban la bandera nacional. En una de esas presentaciones, pero en la base militar Los Laureles, se incluyó al alcalde Alfonso Mendieta Garay, quien reconoció públicamente haber sido un senderista y estar arrepentido.

En el distrito de Hermilio Valdizán, antes de la conformación de las rondas, se registraron asesinatos de pobladores, emboscadas a patrullas del ejército que tenían su base en el pueblo de San Isidro, atentados al batallón de ingeniería del ejército, que provocaron respuestas brutales como el ataque desde helicópteros artillados a la cooperativa Jardines de Té, destruyendo, casas e instalaciones y provocando el éxodo de campesinos. Igualmente, la cooperativa Té Café fue blanco

de los senderistas, que acudieron a pedir cupos hasta hacerla quebrar. Llegó un momento en que los Tenientes Gobernadores y Agentes Municipales empezaron a ser asesinados por lo que éstos renunciaron en masa, la última vez que lo hicieron fue en agosto de 1996.

En 1986 se creó el Comité de Productores de Café de Hermilio Valdizán, que tuvo éxito hasta 1991, pese a las presiones del PCP-SL y de los intermediarios.

En el distrito existe el caserío Micaela Bastidas, donde todos los pobladores son evangélicos y nunca ni en los peores momentos de la subversión y con toda la presión de los senderistas o de los militares cerraron las puertas de la capilla donde domingo a domingo se reúnen para orar. Cuenta el poblador Florentino Huaranga que una vez llegó «la fuerza principal de Sendero» para amenazarlos de muerte si no cerraban la capilla que se encontraba llena de creyentes. «Todos nos pusimos a orar en voz alta e inclinamos nuestras cabezas», refiere Huaranga, así permanecieron por una hora; cuando dejaron de orar y se levantaron los senderistas se habían retirado. Algunas semanas después, uno de los líderes cristianos, Juan Zamorano, fue asesinado por el PCP-SL, «entonces tomamos las armas para defendernos y hasta hoy somos respetados», señala Moisés Bravo, otro de los líderes.

Pumahuasi: de la casa de los pumas a la casa de del PCP-SL

Ubicado a 18 kilómetros al noreste de Tingo Maria, Pumahuasi tiene una historia similar a la de Naranjillo y a otros pueblos de la región donde el factor común por más de dos décadas fue el tráfico de droga, aún cuando las formas de violencia fueron distintas. Pueblo pequeño, con pocas casas, caracterizado por el olvido desde que la carretera dejó de pasar por él, la vida comercial se trasladó a la nueva ruta que une a muchos pueblos hasta llegar a Pucallpa. Allí fue asesinado en setiembre de 1984, en la víspera de la fiesta patronal de la virgen de la Merced, el alcalde Víctor Piñan Verde de las filas del APRA; un comando de aniquilamiento lo sorprendió cuando dirigía la instalación de kioscos para una pequeña feria por la fiesta del pueblo. Cuatro hombres se le acercaron, intentó huir pero cuatro balazos lo quebraron y una vez en el suelo, recibió el tiro de gracia en la cabeza. Luego se produciría la muerte del candidato a alcalde Aarón Ruiz de la Vega, quien fue mutilado por elementos «desconocidos»; poco tiempo después se produciría el asesinato de 11 moradores de Pumahuasi, entre ellos Oswaldo Ruiz de la Vega y su esposa, con cinco meses de gestación. Testigos de la feroz muerte de Ruiz de la Vega dicen que fue picado a machetazos, su esposa tuvo que presenciar este horrible acto antes de ser violada y también descuartizada. Se decía que Oswaldo fue militante senderista, por tanto los asesinos habrían sido militares. Los sepultaron en las orillas del río Tulumayo, nadie podía dar con los restos mortales hasta que las aguas los desenterraron. Todo estos hechos ocurridos entre 1984 y 1997, período en que hubieron muchos asesinatos, pero lo que horrorizó a muchos sucedió el 19 de junio de 1995, cuando en la carretera Federico Basadre, en la calle de ingreso a Pumahuasi, en medio de la torrencial lluvia que producía un espectáculo sobrenatural, amanecieron alineados en fila 12 cadáveres de campesinos, presuntos

colaboradores de las fuerzas del orden. Todos con las manos amarradas a la espalda y con un torniquete en el cuello, cada uno tenía una «bandera senderista» y un cartel donde se daba a conocer las razones del porque fueron asesinados.

Monzón: corredor violento

El distrito de Monzón, en la provincia de Huamaliés, departamento de Huánuco, es un valle con dos realidades físicas y sociales bien marcadas. La parte baja (ceja de selva) colinda con la provincia de Leoncio Prado, y la parte alta es zona de sierra. En la parte baja, además de la coca se puede cultivar café, cacao y arroz; mientras que en la parte alta los terrenos son escarpados y sólo sirven, a decir de los dirigentes cocaleros, para este cultivo. Monzón tenía en 1981 10,725 has. de coca y 11,425 en 1993.

El narcotráfico y sus redes tienen, como en todo el valle del Alto Huallaga del que forma parte Monzón, su propia historia, relacionada con el movimiento del dinero del narcotráfico por décadas, muertes por ajustes de cuentas y extensión de dominios, panorama que continúa hasta hoy, enfrentando a los campesinos sujetos al accionar de las fuerzas policiales que llevan adelante el programa de interdicción.

Las primeras acciones de proselitismo y formación de cuadros por el PCP-SL en el valle del Monzón datan de 1984, aunque como vimos este valle fue una de las rutas de ingreso de los subversivos senderistas al Huallaga en 1982. Mientras que de los primeros años apenas se registran actos violentos, el rechazo de algunos poblados a las propuestas senderistas originan represalias sangrientas. Así, la acción violenta más importante se registró el 1 de enero de 1986, cuando un grupo de 60 senderistas incursionó en el caserío Agua Blanca, donde se había organizado un Comité de Autodefensa bajo el liderazgo del campesino Andrés Cornelio Castañeda, a quien sorprenden y asesinan, luego de un «juicio popular» en la cancha de fútbol, junto con otras 15 personas.

Testigos de la matanza cuentan que se ensañaron con el presidente Cornelio Castañeda, a quien le cortaron la lengua, le sacaron los ojos y le cortaron la cabeza de un machetazo, para «jugar fulbito» con ella, demostrando un salvajismo que debería servir de escarmiento y advertencia al resto de la población.

En esta zona, de difícil acceso para las fuerzas del orden, se produjeron centenares de acciones tanto de grupos subversivos como de narcotraficantes, que sumarían más de mil muertes según estimación de Hugo Herrera San Martín, alcalde de Cachicoto, el pueblo de mayor importancia en el valle. Lamentablemente, como ocurrió en todos los escenarios de la guerra, la mayoría de estos hechos y decesos no han sido registrados.

El 23 de febrero de 1986, Sendero tomó la ciudad de Monzón, ubicada a 62 kilómetros de Tingo María, y luego de reunir a la población y arengarla, destruyó enseres y documentos de la municipalidad; desde entonces y por varios años solo los trabajadores fueron los que administraron

el municipio. El 3 de julio de 1988, en una emboscada a una patrulla militar en el puente Rondos, fueron asesinados 13 soldados, generando una brutal respuesta donde perdieron la vida 20 presuntos senderistas, aunque a decir de los familiares, la mayoría fueron campesinos ajenos a la subversión.

En el mismo valle del Monzón, el 5 de setiembre de 1993, mas de 200 senderistas tomaron los poblados de Bella, Inti, Rondos, Agua Blanca y Palo Acero; durante horas reunieron a los pobladores en sus respectivos lugares, ubicaron a los presuntos soplones, asaltantes y traqueteros que engañaban a los pequeños productores de droga, juntando así a 24 personas en el caserío Lota, en donde les dieron muerte con machetes, hachas y cuchillos, según relatan los moradores testigos del hecho de sangre mas cruel que se tenga conocimiento en el valle.

Según Inocencio Rodríguez, el PCP-SL obligó incluso a uno de sus militantes, un joven de 18 años, a asesinar a su propio padre como prueba de sometimiento y lealtad al Partido; el estupor fue mayor cuando los presentes vieron que el padre imploraba por su vida, mientras que el hijo sin inmutarse levantó el hacha y descargó un golpe en la nuca de su progenitor cortándole la cabeza. Fue una demostración de la vesania con que el PCP-SL acompañaba algunas de sus acciones, que a la larga generaron odio y repudio entre los campesinos.

Uno de los líderes mas importantes de Sendero que tenía el control en Monzón era José Hilario Picón, llamado «camarada Manco», de acuerdo a informes de inteligencia de la policía que fueron revelados al momento de ascender por acciones distinguidas y de valor del grupo de policías que le dieron muerte. Los moradores de Puente Durand, en plena carretera Huánuco-Tingo María, declaran que el 31 de octubre de 1996, los senderistas llegaron a esa localidad a las 3 de la tarde, reunieron a la población en la pequeña iglesia evangélica y amarraron a 6 personas, a quienes sindicaron como soplones y traidores a la lucha armada, los encerraron con candado y se pusieron a detener a los carros. Cuando estaban en esta tarea, un camión cargado no se detuvo, dispararon hiriendo al chofer en la pierna derecha, pero éste llegó al puesto policial de Cayumba y reportó el hecho a la policía de carreteras que se encontraba en Chinchao, que les salió al encuentro a las seis de la tarde, produciéndose un enfrentamiento. En el murió Hilario Picón, el temible «Manco», junto a otros 2 senderistas. Luego de la muerte del «Camarada Manco», el mando senderista que lo seguía en orden de liderazgo, Elmer Tarazona Escalante, «Stalin» o «Luis», se entregó al ejército Peruano, buscando la reducción de la pena a través de la colaboración eficaz, debilitando definitivamente el actuar senderista en la zona.

Aucayacu: ¿tierra de nadie?

Con cerca de cuatro décadas de fundación, la ciudad de Aucayacu es capital del distrito de José Crespo Castillo, en la provincia de Leoncio Prado, distante 55 kilómetros de Tingo María, y a 180 Km. de Huánuco. En la década del 70 varios inversionistas y entidades estatales realizaron esfuerzos para industrializar los plátanos y la soya, llevando la delantera en producción de arroz la

central de Cooperativas del Alto Huallaga – CECOAH, pero ni la ayuda de organismos extranjeros ni la del gobierno a través del apoyo a los programas de colonización, pudieron revertir la quiebra de estas instituciones e impedir el avance de la economía cocalera. Así, ante el fracaso de la producción agrícola lícita y de los esfuerzos por la industrialización, aparece desde 1975 como alternativa el cultivo de la coca, que desplaza al café, cacao, arroz, maíz, frutales y la ganadería. Versiones de pobladores dan cuenta que activistas del PCP-SL en número pequeño, llegaron a Aucayacu el año 1978, con el objetivo de hacer los primeros contactos con docentes y agricultores líderes, desde aquí se desplazaron luego a Tingo María, Uchiza, Tocache y Aguaytia.

En términos globales la expansión senderista dentro del Alto Huallaga siguió una tendencia de sur a norte por toda la zona rural del valle, donde buscó organizar el campo y acercarse poco a poco a la «ciudad» o centros urbanos más importantes de cada sector.

En esta zona, los comités populares del PCP-SL llegaron a controlar el cultivo de la hoja de coca, regulando la compraventa de PBC y, en los sitios en que había aeropuertos clandestinos, resguardando la salida de vuelos con droga.

En 1982, inicia su accionar abierto en Aucayacu con una incursión a dos centros poblados y la destrucción del aserradero del alcalde Enrique Bruckman Castillo, quien además era cocalero y dirigente del Comité de Productores de Coca de la provincia de Leoncio Prado. El mismo año se produce el hostigamiento a las instalaciones del Proyecto Especial Alto Huallaga. En 1983, el PCP-SL atacaría los puestos policiales de Aucayacu y Pucayacu y atentaría contra un dirigente de AP. En 1984, incursionó en la ciudad en dos oportunidades, atacó el puesto policial matando a 10 de sus miembros y las instalaciones del Proyecto Especial Alto Huallaga, hiriendo gravemente a un funcionario. El primer ataque se dio el 31 de enero de 1984 contra el Banco de la Nación y puesto de la Guardia Civil, donde murieron entre seis y siete policías. El segundo ataque vino cinco meses después, el 4 de julio, al nuevo puesto de la Guardia Civil en el mercado principal del pueblo, con el resultado de varios policías muertos.

En uno de estos ataques, cuando una patrulla del UMOPAR se dirigía desde Tingo María para dar apoyo, fue emboscada en el puente Pacae, fallecieron dos policías. Al llegar a Aucayacu, arremetieron contra la población y procedieron a detener a 8 personas que fueron acusadas de subversivos, los juntaron en el suelo y les destrozaron con granadas, según relatan los periodistas Segundo Ramírez Macedo e Isidro Bravo.

En junio de 1987, el PCP-SL declararía uno de los primeros paros armados a nivel del Alto Huallaga, obligando a la población rural a participar en el bloqueo de la carretera Marginal. Estos primeros paros constituyeron no solamente una medida de fuerza del PCP-SL, que impedía el transporte de vehículos entre Tingo María y el resto del Alto Huallaga, sino también demostraba su control sobre el campo, incluso sobre las garitas de control de toda la Marginal. Con la destrucción de pistas y puentes el viaje de 40 kilómetros entre Tingo María y Aucayacu que se hacía antes en 45 minutos, se extendía a dos horas y media.

Los actos de violencia producidos en Aucayacu fueron innumerables, convirtiéndose en tierra de nadie. Los capos de las mafias del narcotráfico tenían allí su centro de operaciones, mientras que los subversivos ingresaban cuando querían, atacaron a la municipalidad en varias oportunidades y asesinaron a un alcalde. La mayoría de la población huyó, quedando semi desolada, con numerosos comercios cerrados, de esta manera en pocos años, lo que fuera uno de los emporios de la coca y el narcotráfico se convirtió en una suerte de ciudad fantasma aterrorizada (véase Estudio sobre narcotráfico, CVR).

Un hecho de sangre que causó la indignación del pueblo fue el ataque de los sicarios del narcotraficante Luis Lagos Naranjo o Cristian Macedo Santillan (a) «Cristal» a un grupo de personas que se encontraban en un quiosco y que fueron confundidos con los sicarios de Willer Alvarado Linares (a) «Champa». Como consecuencia de este tiroteo, murieron 8 personas y otros 6 resultaron heridos; cinco de los fallecidos eran alumnos y profesores del colegio Inca Wiracocha.

En 1997, cuando se creía que los peores años habían pasado, el PCP-SL tomó por asalto la ciudad una vez más, mientras el ejército realizaba su acostumbrado trote por la ciudad a las cinco de la tarde salvándose de ser masacrado gracias a que se produjo una confusión entre el grupo que ingresó por el río Huallaga y el otro por la parte Este, que al estar vestidos como militares se enfrentaron entre sí muriendo o siendo heridos más de veinte subversivos, los cuales al darse cuenta del error solo atinaron a huir, aunque un grupo causó destrozos en la municipalidad. Dos días después el Presidente Fujimori llegó a Tingo María en avión y luego de poner en funcionamiento un cuestionado sistema de electrificación, pasó a Aucayacu en helicóptero, al llegar lo esperaba la población en la plaza de armas, donde les prometió apoyo para la agricultura, la construcción de una moderna base policial, créditos para el agro, tractores y muchas cosas más que hasta hoy esperan su cumplimiento.

En el distrito de José Crespo Castillo, no solo el narcotráfico y la subversión provocaron un baño de sangre, sino las propias fuerzas *contrasubversivas* al aplicar políticas represivas con detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos extrajudiciales, como han sido denunciados ante la CVR.

La última acción subversiva de importancia en José Crespo Castillo se produjo el 03 de junio de 1999, cuando el PCP-SL emboscó una camioneta particular en el sector de Río Frío matando a 3 integrantes de un supuesto grupo paramilitar conocido como Alfa (que habría estado integrado por efectivos de la policía, ejército peruano y arrepentidos) y otros 3 civiles, además de un soldado; la camioneta quedó destrozada por los disparos y explosiones de instalazas. Como consecuencia de este ataque, fueron detenidas 7 personas que después de unos días fueron sentenciados por un tribunal militar en la base militar de Tingo María a 30 años de reclusión. El único que salió en libertad fue Ángel Tello Moreno, quien contó su drama a la Comisión de la Verdad, en la forma siguiente:

Cuando estaba preso me dijo que eran de Alfa me dijo que eran del servicio de inteligencia, arrepentidos también, había un tal «Maycol», total nos formaron, ahí ningún arrepentido nos conocía a nosotros, lo conocen al negro, no nunca y como entre ellos decían, nunca he visto un negro que es tuco primera vez que estamos viendo, ¿conoces Tocache?, ¿conoces tal sitio?, me nombraron varios sitios yo les dije no conozco nada más de Aucayacu a Huánuco, me nombraron distintos sitios pero siempre metiéndome golpe, inclusive me acercaron a una mesa donde había cantidad de fotos que testificara si conozco, yo les dije como voy a testificar si no conozco, ¿no conoces? me comenzaron a colgar, habla pero indica una foto, pero no conozco señor, como no vas a conocer si vives en río Frió, en Aucayacu, señor no conozco como usted me va obligar, me torturaban, me dejaban sin aire a veces en el suelo todo eso me pasaba, yo prácticamente psicológicamente estoy traumatado, me olvido de las cosas, me duele mi cabeza tanto golpe me han metido en el ahogamiento, mi pecho también me han golpeado.

El enfrentamiento entre el PCP-SL y el MRTA

Al igual que en la sierra y selva centrales, en Junín, en la cuenca del Huallaga se genera, desde la insurgencia del MRTA en 1987, un enfrentamiento sostenido con el PCP-SL, hasta llegar a la división pragmática del territorio de la cuenca del Huallaga. Esta distribución de los territorios que comprenden las cuencas cocaleras se resume en que el Alto Huallaga fue centro de las columnas senderistas, mientras que el Huallaga Central y el Bajo Huallaga era territorio del MRTA. En la zona sur del departamento de San Martín, sobre el río Huallaga, el MRTA estableció también una alianza con la población en base a la defensa de los cultivos de coca y la formación de rondas, que defendían a los campesinos del abuso de policías y narcotraficantes, por igual. Al igual que el PCP-SL, el MRTA estableció con los narcotraficantes una convivencia que le permitió —a través de cupos— captar recursos financieros. El volumen de estos llegaba, según fuentes vinculadas al ejército, a varios millones de dólares. (Ver: Estudio en profundidad sobre El Frente Nor-Oriental del MRTA en el departamento de San Martín de la CVR).

A fines de 1986 e inicios de 1987, el PCP-SL avanzó organizando a los pueblos y caseríos al norte de Tocache: Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo, entre otros. Sería zona de expansión rápida e intensiva para el PCP-SL, alimentada por el fuerte movimiento de la droga en Puente Pizana, mercado importante de la droga a fines de los ochenta. En esta expansión de sus tareas organizativas llegaría hasta Punta Arenas/Campanilla, pero a partir de Juanjui se enfrentó a la fuerte presencia del MRTA. A mediados de los ochenta grupos pequeños del MRTA operaban e incluso llevaban a cabo atentados en la zona urbana de Tocache, pero su peso fue mínimo en comparación con el del PCP-SL.

La ampliación cocalera obedece, también, a los efectos del hongo *fusarium oxysporum* —aparecido con fuerza en 1991 en Nuevo Paraíso—, además de la represión policial para la erradicación de los sembríos de coca, la aplicación del Spike y la contraofensiva militar, que obligaron a las firmas de narcotraficantes locales, a muchos campesinos cocaleros y al mismo PCP-SL a desplazarse aguas abajo del Huallaga. Tocache, Uchiza, Victoria y Bombonaje dejaron de ser escenarios de la actividad subversiva iniciada a mediados de la década de los ochenta, acentuándose el proceso de cocalización de todas las provincias de San Martín, con nuevas áreas

cocaleras más al norte de la región: Campanilla, Juanjui, Bellavista, Saposo y de allí, el Bajo Huallaga, incorporando el sur del departamento de San Martín a la economía y dinámica cocaleras. (*Ver el estudio en profundidad El Frente Nor-Oriental del MRTA en el departamento de San Martín de la CVR*)

En 1991 ocurrieron los asesinatos del alcalde de Tocache, Fredy Aliaga, y del dirigente cocalero Walter Toca, constatándose el establecimiento de Comités Populares en diferentes poblados de la provincia de Bellavista y Mariscal Cáceres, que en estas nuevas áreas productivas daban seguridad a los agricultores y a las firmas de narcotraficantes locales para cultivar y procesar la hoja de coca sin temor a la represión de las fuerzas policiales y militares.

Tras dominar la parte sur de las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres y ante la necesidad de reafirmar su hegemonía territorial, el PCP-SL prosiguió con su avance teniendo como objetivos los valles del Ponaza y Miskiyacu, ubicados en el Huallaga Central, pero cuando el PCP-SL empieza a incursionar en las zonas controladas por el MRTA hay enfrentamientos por controlar el territorio, por tener apoyo popular y por manejar las pistas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico.

El PCP-SL había comenzado, desde 1985, un lento pero seguro trabajo en distintos poblados, cuestionando las rondas alentadas por el MRTA, y creando sus comités de productores. Hasta ese momento la vanguardia de estas organizaciones eran el CODEDU (Comité de Desarrollo y Defensa de Uchiza) y el CODETO (Comité de Desarrollo y Defensa de Tocache). En resumidas cuentas, lo que aparece en 1986 como una constante en la zona, es la lucha entre ambos grupos por la hegemonía en el alto Huallaga. Debemos reconocer como otro actor importante en las disputas entre el PCP-SL y el MRTA por el negocio de la droga y el control del territorio, al narcotraficante Demetrio Chávez (a) Vaticano. Su poder era tan fuerte que no permitió entrar a Campanilla, su centro de operaciones, ni al PCP-SL ni al MRTA. Cabe resaltar que la relación entre Vaticano y el PCP-SL se inició en 1989 en Uchiza. Luego de su ruptura con el PCP-SL, se trasladó a Campanilla que se convirtió en la frontera entre los territorios del PCP-SL y los del MRTA.

1.4.6.4. Ofensiva militar y declive de la violencia: 1993- 2000

Desde 1989 se registra una espectacular caída del precio de la droga, atribuible a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo cual causó una acumulación de pasta básica de cocaína y la saturación del mercado local. Como consecuencia, el precio por kilo en el Huallaga comenzó a hundirse, y de los \$1,000 a \$1,200 que tenía a lo largo de la década de 1980, perdió más de la mitad de su valor y siguió bajando hasta llegar a niveles que ya no compensaban el procesamiento de la droga.

Las estrategias *contrasubversivas*

El declive del accionar subversivo tiene relación también directa con la estrategia implementada desde la creación del Comando Político Militar del Huallaga, en el año 1989, durante el gobierno de Alan García. Según datos estadísticos, 1991 y 1992 son los años de mayor cantidad de muertos, sobre todo en la provincia de Leoncio Prado. Estas altas cifras se vinculan con la ofensiva militar derivada de una nueva concepción estratégica que originó tres cambios en el Huallaga que a la larga afectaron el avance del PCP-SL. Estos fueron la colocación de nuevas bases militares en Uchiza, Santa Lucía, Tocache, Madre Mía, Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana, Punta Arenas y otros lugares; la reanudación de los trabajos de inteligencia con apoyo de arrepentidos, y la reapertura total de la Carretera Marginal.

Debemos reconocer que para el Estado peruano, siguiendo acuerdos y directivas del gobierno norteamericano y sus organizaciones vinculadas a la lucha antinarcóticos, el problema político del Huallaga se subordinaba a una visión policial que priorizaba el desmantelamiento de las redes del narcotráfico golpeando al productor cocalero a través de las instituciones de erradicación que hemos mencionado anteriormente.

Por ello, el primer cambio en la estrategia a implementar fue la instalación y puesta en operatividad de una inmensa base policial encargada de reprimir al narcotráfico, con el apoyo de la DEA norteamericana, la Base de Santa Lucía cumplió, hasta 1992, la función de desarticular a las firmas nacionales y extranjeras de narcotraficantes.

Pero el Jefe del Comando Político Militar iniciará una nueva estrategia sustentada en una alianza con el campesino para derrotar al PCP-SL. El 3 de mayo de 1989, el Presidente Alan García Pérez llegó a la ciudad de Tocache. Se dirigió al comando del ejército cuya sede había sido la casa «El Vampiro», uno de los capos del narcotráfico con quien varios líderes del PCP-SL mantuvieron vínculos entre 1986 y 1987. Al día siguiente, en Uchiza, presentó ante unos 5 mil campesinos congregados a la plaza de armas al primer jefe del comando político militar del Huallaga-Huánuco y San Martín-, general Alberto Arciniega Huby. Para Arciniega la lucha contrasubversiva debería apuntar a desvincular a la población de la subversión dejando de perseguir al campesino cocalero y priorizando la lucha contra las columnas senderistas. Arciniega tendrá éxito militar con esta estrategia pero enfrentará a sectores de la prensa y sobre todo a funcionarios norteamericano con acusaciones de corrupción al interior de las FFAA. Debemos recordar que varios de los generales responsables del Comando político militar de la región Nor oriental que sucedieron a Arciniega en el cargo, se han visto envueltos en denuncias e incluso en juicios por aparentes vínculos con el narcotráfico.

Sea como fuere, la implantación de bases militares y la propuesta a los cocaleros para que retiren su apoyo al PCP-SL, significó el principio del fin para las organizaciones subversivas. De otra parte, desde 1991 se intentó mejorar el trato de las Fuerzas Armadas hacia la población en lo que respecta al respeto de los derechos humanos con la imposición del «Decálogo de las Fuerzas

del Orden» que tenía su sustento en las directivas 023 SGMD del 28-10-91, y 009 CCFFAA del 11-09-91, como una forma de captar la confianza de la población para la conformación de los Comités de Autodefensa.

De acuerdo a los comunicados que emitía el Comando Político Militar del Frente Huallaga quedaba entendido que la finalidad de la pacificación era sentar las bases de un nuevo tipo de desarrollo con orden político, jurídico, social, económico, cultural y psicológico, que contribuyera a desterrar las condiciones que servían de caldo de cultivo a los movimientos subversivos.

Otro aspecto igualmente importante fue la progresiva atención de las necesidades y reclamos de los pueblos en pobreza y afectados por la violencia, a través de programas sociales como el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo – PNDA, conducido por CONTRADROGAS desde 1994, medidas que en conjunto contribuyeron a que la subversión fuera reducida a su mínima expresión. No obstante, no debe pasar desapercibido que en esta etapa también se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y sonados actos de corrupción, que no obstante haber sido denunciados, no merecieron investigación ni sanción alguna.

Otra medida de la nueva estrategia consistió en ofrecer recompensas por la entrega vivos o muertos de los principales líderes del PCP-SL que operaban en la zona, ante la imposibilidad de poder ubicarlos y capturarlos.

El arrepentimiento masivo en el Alto Huallaga

La nueva ofensiva militar incluyó grandes operativos, como el del «Bolsón Cuchara» en 1992, al parecer más demoledor para el PCP-SL por las pérdidas de combatientes que sufrió, que el posterior operativo «Aries» de abril de 1994. A la par que esta ofensiva militar, el golpe más duro contra los grupos subversivos fue la llamada Ley de Arrepentimiento, que concedía a los «alzados en armas» y sus colaboradores voluntarios e involuntarios, la opción de poder arrepentirse y reintegrarse a la vida legal.

El comunicado oficial No. 22 del Frente Huallaga de fecha 20 de junio de 1992, daba cuenta que el gobierno había promulgado el decreto ley No. 25499, en el que se establecían los términos dentro de los cuales se consideraba una serie de «beneficios» a los incursos en el delito de terrorismo, debido a su arrepentimiento, que incluían reducción, como también en otros casos, la extinción de la pena. Culminaba haciendo una invocación a las personas que se encontraban comprometidas con los movimientos subversivos, para que depusieran su actitud y se entregaran a las autoridades o a las bases militares, porque de ello dependía su seguridad y la de sus familiares, que estaba plenamente garantizada; y de esta manera «lograr su reincorporación a la sociedad, como personas dispuestas a contribuir al logro de la pacificación nacional y vivir dentro del marco de la ley» (*Ver Estudio en profundidad La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga*).

En el proceso de aplicación de la ley de arrepentimiento, se cometieron excesos y sesgos de tipo político; por ejemplo, en la provincia de Leoncio Prado se creó un gran problema en torno a los arrepentidos, debido a que alrededor de 4000 campesinos acudieron a empadronarse en forma masiva en las municipalidades de Daniel Alomía Robles, Mariano Dámaso Beraun y Hermilio Valdizán. Se registraron largas colas para recibir una contraseña del propio alcalde quien hacía las veces de empadronador, justificando esta acción porque a su entender todos los agricultores, en forma directa e indirecta, participaron de las acciones subversivas. Los campesinos se empadronaron como arrepentidos en forma masiva para evitar ser objetos de la represión y acogerse a los programas de ayuda social, de acuerdo a las declaraciones de los alcaldes Watson Chagua de Daniel Alomía Robles, Francisco Esteban Peña de Hermilio Valdizán, y Alfonso Mendieta de Mariano Dámaso Beraun.

Según los alcaldes de los distritos de Daniel Alomía Robles y Hermilio Valdizán ellos habían registrado unos 4 mil arrepentidos, mientras que en los concejos distritales de Dámaso Beraun y José Crespo y Castillo se manejaban cifras de 2,500 y 2,000 arrepentidos, respectivamente, dando un sub total de 8,500 personas que se acogieron a la ley de arrepentimiento, a las que debemos sumar 1500 arrepentidos por cuenta del Comité de Autodefensa del distrito de Padre Felipe Luyando. A grosso modo, sólo en la provincia de Leoncio Prado se habrían registrado 10 mil personas del área rural como arrepentidos.

El fiscal Carlos Gonzáles Ortiz, designado fiscal ad hoc para casos de arrepentidos, dijo que tenía conocimiento de 3 mil personas que se acogieron a la ley de arrepentimiento, cifras que coinciden con las que manejaba la jefatura contra el terrorismo, cuyo jefe adelantó que solo un 10 % serían militantes del PCP-SL, y 90% campesinos que se vieron obligados a colaborar o a asistir a las asambleas subversivas.

Fue evidente para muchos el manejo político del caso de los arrepentidos por las presentaciones continuas ante la prensa nacional y extranjera del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Nicolás Hermosa Ríos.

La operación Aries

Los arrepentimientos masivos, y la actuación ampliada de los Comités de Autodefensa no detienen los asesinatos de dirigentes comunales, de alcaldes, o de modestos pobladores que se resistían a la dominación del PCP-SL, además del sabotaje por medio de destrucción de puentes y carreteras, el derribo de torres eléctricas, la toma de ciudades y pueblos y la persistente sensación de inseguridad y amenaza. Así, en pleno proceso de arrepentimientos masivos, el comando militar decidió en abril de 1994 ejecutar un operativo militar de gran envergadura en áreas que consideraba seguían controladas por los mandos del PCP-SL.

El objetivo de la Operación Aries fue la expulsión y exterminio total de las columnas del PCP-SL y su base social de Comités Populares. El mando militar seleccionó los «bolsones»

Cuchara y Primavera, en la intención de cercarlos para atenuar a las fuerzas senderistas y cumplir con los objetivos del operativo.

Las Fuerzas Armadas utilizaron en la Operación Aries, según versión oficial del Frente Huallaga, 200 efectivos para realizar el cerco que no dejara brechas para la escapatoria senderista, mientras que en la persecución de sus objetivos destinó un aproximado de 150 comandos¹. El día 20 de abril de 1994 el Coronel Jano, Jefe del Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, mencionaba que el éxito del operativo Aries se medía por su efectividad al controlar todas las salidas existentes de la margen izquierda del río Huallaga, sin dejar escapar a ningún subversivo que operaba en la zona.

Pero con los avances de la Operación Aries también aparecen denuncias sobre abusos de parte de las FFAA sobre población civil. Ante estas denuncias interviene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que visitó la zona y entrevistó a sobrevivientes, constatando violaciones de los derechos humanos de las poblaciones civiles asentadas en la zona del operativo. Debido a ello, la Coordinadora hizo público a nivel nacional los atropellos en el Alto Huallaga, generando la respuesta del Jefe Militar del Frente Huallaga quien arguyó en diferentes conferencias de prensa que las zonas donde los comandos estaban combatiendo no eran poblados sino conjuntos de casa aisladas y desperdigadas en las áreas conocidas como Bolsón Cuchara y Bolsón Primavera, sin bombardeos a la población civil. La Operación Aries fue interrumpida definitivamente el 26 de mayo de 1994 debido a denuncias de violación de los derechos humanos acogidas por organismos no gubernamentales y por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente.

Por último, desde 1996 se reduce la violencia aunque los mandos regionales del PCP-SL no se pliegan a los acuerdos de paz suscritos por Abimael Guzmán. Por ello, aún existen grupos armados que a nombre del PCP-SL ejecutan esporádicas acciones de violencia en la región. Los valles del Huallaga y Monzón, continúan siendo zonas cocaleras y las demandas de los campesinos productores son prácticamente las mismas que hace 20 años.

1.4.6.2. Cronología

Zona II: la cuenca del Huallaga

12-11-83	Atentado a candidato de AP a alcaldía en Aucayacu.
15-02-84	Asesinato de dirigente de cooperativa Pucate en JCC.
17-04-84	Asesinato de Tito Jaime Fernández alcalde de Tingo María.
17-04-84	Destrucción de local y vehículos de INIPA - Tulumayo.
22-06-84	Ataque a puestos de GC en Santa Lucía – Aucayacu, y Tocache
04-07-84	Ataque a puesto GC, municipio y Banco de la Nación - Aucayacu.
06-07-84	Ataque a puesto de GC - Tingo María.
10-07-84	Asesinato de 3 pobladores en asentamiento humano de Aucayacu.

¹ La cantidad proporcionada de comandos disponibles, según el Jefe del Frente Huallaga, no pudo ser cierta si tomamos en cuenta que tuvieron que ingresar a los bolsones Cuchara y Primavera por cuatro frentes para atacar a las fuerzas senderistas.

05-08-84	Asesinato de teniente gobernador de Venenillo – Aucayacu
05-08-84	Asesinato de cuatro personas de La Morada – PCP-SL.
20-09-84	Asesinato Víctor Piñan Verde alcalde de Pumahuasi – DAR.
17-11-84	Asesinato por el PCP-SL de 19 trabajadores del CORAH
17-02-85	Asesinato de teniente gobernador y familia en alto pendencia.
21-02-86	Asesinato de agente municipal en Tocache.
06-08-86	Asesinato a homosexuales, drogadictos y prostitutas en Aucayacu.
31-01-87	Asesinato de Vicente Valdivieso dirigente PAP en Shapajilla.
03-02-87	Asesinato del alcalde PAP de Naranjillo Eugenio Camasca Escalante.
25-03-87	Atentado contra alcalde PAP de Hermilio Valdizán Francisco Peña.
16-06-87	Asesinato a teniente gobernador de Cayumba.
15-07-87	Fuerzas aerotransportadas toman por aire y tierra la ciudad de Tocache.
24-12-87	En Las Palmas-MDB, dinamitan local municipio y de aduanas, atacan camioneta dela PIP y muere un sub oficial.
27-03-88	Atacan puesto policial de Uchiza, mueren 10 policías y 14 quedan heridos.
02-05-88	En Shapajilla-LP, el PCP-SL mata a 10 personas.
27-11-88	Destrucción de 10 camiones cisterna de Emdepalma.
14-04-89	Asesinato de regidor de IU y periodista radial, Guillermo López Salazar.
08-06-89	Asesinato alcalde de Tingo María, César Zapata Castillo.
15-06-89	Asesinato de alcalde de Tingo María Manuel Espinoza Monroe.
28-07-89	Ataques simultáneos en Tulumayo, Nuevo Progreso y Tocache, mueren 10 subversivos y 07 soldados.
12-04-90	En Tocache y Uchiza asesinan a 23 personas que se dedicaban a vender coca, acusados de ser infiltrados de la policía.
18-07-90	Enfrentamiento en Paraíso, mueren 10 subversivos y un soldado.
30-05-91	Ataque a puesto policial de Afilador-Tingo María, mueren 2 policías, 2 civiles y dos subversivos.
19-06-91	Asesinato del profesor de secundaria y dirigente departamental del SUTEP, Esteban Flores Llanos, presuntos integrantes del comando paramilitar Rodrigo Franco.
23-08-91	Destrucción del puente Tulumayo en JCC.
29-08-91	Enfrentamiento en puerto Primavera mueren 14 soldados.
02-09-91	Ejercito mata a 12 personas en UTC-Aucayacu en represalia por emboscada de Primavera.
04-09-91	Asesinan al dirigente cocalero Walter Tocas – Uchiza.
08-11-91	Asesinato de 19 personas en Primavera, 8 eran presuntos comercializadores de droga, los autores presuntos integrantes del comando paramilitar Rodrigo Franco, usaron armas con silenciadores y capuchas.
12-11-91	Ataque a camioneta policial en puente Pendencia mueren 4 policías.
13-11-91	Ataque dinamitero a camión antiminas logran volcarlo, mueren 3 policías.
14-11-91	Ataque a BC de Madre Mía, mueren 60 subversivos.
23-11-91	Ataque a puesto policial de Cayumba mueren 3 policías y 8 senderistas.
19-01-92	Asesinan a 18 pobladores en caserío Alfonso Ugarte por resistencia al PCP-SL.
20-01-92	Asesinato de 30 personas presuntos subversivos en Apisa por el EP.
21-05-93	Asesinato del alcalde de Tocache Fredy Aliaga Cárdenas, presuntos integrantes del comando Rodrigo Franco.
15-07-93	Atentado a convoy militar en Yanajanca, mueren 5 soldados y 15 heridos entre civiles y militares
08-08-93	Asesinan a regidor de Naranjillo, Róger Satalaya, luego destruyeron dos tractores de empresa privada.
05-09-93	PCP-SL ataca a poblados de Bella, Inti, Rondos y Palo de Acero, asesinan a 24 pobladores.
24-10-93	Presentan a 15 subversivos que se acogieron a la ley de arrepentimiento y a 8 presuntos subversivos capturados en operativos en el valle de Monzón.

23-11-93	6 soldados fallecen en enfrentamientos en Pendencia Alta y «Fundo Rico».
24-11-93	Asesinan a 11 integrantes de una familia en Huayhuantillo.
26-01-94	30 militares fueron denunciados por delitos de narcotráfico revela el presidente del comando conjunto Nicolás Hermoza Ríos.
21-02-94	Presentan a 1635 presuntos senderistas que se acogieron a ley de arrepentimiento.
25-02-94	Asesinan a arrepentido Ángel Santillán Cevallos, el asesino Oscar Llerena Briceño era rondero de Las Palmas.
08-04-94	Informan que se registró un enfrentamiento en Herradura, mueren 4 y otros 6 subversivos fueron capturados, 3 soldados fueron heridos (Operativo Aries).
12-04-94	Se informó que 11 guaridas de senderistas fueron allanadas y destruidas en el sector río Cuchara, murieron 7 subversivos.
18-04-94	Enfrentamiento en Primavera, dos subversivos murieron se recupero armas, duda por que las denuncias sobre violaciones masivas de derechos humanos, detuvieron el accionar de la Operación Aries.
13-05-94	Atacan aeropuerto de Tocache, muere un soldado.
17-05-94	Toque de queda en Tingo María, Aucayacu y Pucayacu.
19-06-94	Asesinan a 10 integrantes de una familia en Tazo Grande – Monzón.
28-06-94	Informa el Ministerio Público que en lo que iba del año 3 mil 127 personas se acogieron a la ley de arrepentimiento solo en la provincia de Leoncio Prado.
11-07-94	Asesinan a dos arrepentidos en Montero – Aucayacu.
18-08-94	Enfrentamiento en la Morada mueren 3 soldados y 6 subversivos.
27-10-94	124 presuntos subversivos desertan y se acogen a ley de arrepentimiento en Cayumba Chico y Puente Durand.
11-1-94	Asesinan a dos suboficiales de la policía y a Pablo Saavedra directivo de la APAFA de río Uchiza.
22-02-95	Incursión en Julio C. Tello, asesinan a 7 ronderos.
23-02-95	En JCC asesinan a 12 personas que se acogieron a ley de arrepentimiento.
20-03-95	En Pumahuasi asesinan a tres personas y roban puesto de salud.
10-04-95	Enfrentamiento en Challhuayacu – Tocache mueren 6 soldados y 11 quedan heridos.
07-11-94	En Shamiro asesinan a 8 arrepentidos, algunos integrantes de las rondas de Naranjillo.
16-12-95	Emboscada a patrulla militar en Víctor Andrés Belaunde – Aspuzana, mueren ocho soldados y 14 subversivos.
17-01-96	En Río Seco - Nuevo Progreso, ataque a convoy militar por la columna comandada por «Nipón», cinco soldados mueren y otros seis quedan heridos.
10-02-96	En Copal – Aucayacu, queman cadáveres de los cabos del Ejercito que fallecieron en la emboscada de Cucaracha el 08 de febrero, eran llevados en sus ataúdes a Tingo María y Huánuco.
06-04-96	Asesinan a presidente de CAD Naranjillo Julio del Castillo, presuntos narcoterroristas.
09-05-95	Senderistas asesinan a regidor de Cachicoto y a campesina de Yunki, luego el retiro de base militar.
15-05-95	Senderistas asesinan la presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Naranjillo, José Viene en Aucayacu.
31-05-96	Enfrentamiento en Palo Blanco. Mueren dos soldados y tres subversivos, se dijo que era la columna «Mar Rojo», comandada por «Artemio».
01-06-96	Senderistas atacan ómnibus de la empresa Marginal que llevaba soldados, mueren 6 civiles, un soldado, cuatro senderistas y 13 pasajeros resultan heridos.
18-06-96	Atentan a camión que llevaba soldados, mueren dos militares y otros tres quedan heridos.
21-06-96	40 senderistas toman el pueblo de Marona, saquen casas y asesinan a morador.
02-08-96	90 senderistas toman la ciudad de Aucayacu por cuatro horas, atacan el puesto policial, tres policías heridos y dos civiles muertos.
18-08-96	Senderistas atacan al regidor de Hermilio Valdizán Casimiro Estela y secuestran a su hermano Celso Estela al que asesinan.

20-08-96	100 senderistas incursionan en caserío José María Ugarteche, río Azul, Mesones Muro, Margarita y Delicias, donde secuestran a tres pobladores que luego asesinan.
16-09-96	Senderistas asesinan a presidente de Comité de desarrollo de Cargatambo, Eber Lino.
31-10-96	José Hilario Picón «camarada Manco» fue abatido en enfrentamiento con policía de carreteras en Puente Durand.
25-08-97	Senderistas asesinan a Paulino Narvaja, presidente CAD Tahuantinsuyo.
25-08-97	Senderistas asesinan a Marcial Salazar presidente CAD Chaglla Nueva.
15-09-97	Senderistas matan a rondero de Naranjillo.
30-09-97	Senderistas asesinan a 12 personas en varios caseríos de MDB.
18-10-97	Senderistas asesinan al jefe de la DINANDRO en Tingo María, Walter Esquivel, y otros dos policías.
17-11-97	Senderistas asesinan a ex dirigente de cooperativa Naranjillo Juan Carlos Hidalgo.
26-04-98	Senderistas emboscan a patrulla militar en Palo Huimba, fallecen dos soldados.
13-05-98	Ejército incursiona en dos campamentos subversivos en caserío de José Crespo Castillo, según el ex fiscal Carlos Gonzáles Ortiz, el ejercito sorprendió a dos columnas y las aniquiló murieron mas de 200 senderistas, que fueron enterrados en el lugar.
28-05-99	En Uchiza atacan Banco de la Nación, mueren un policía, tres civiles y un subversivo.
03-06-99	El PCP-SL ataca camioneta donde viajaban integrantes del grupo «Alfa», fallecen dos arrepentidos y un soldado, otros quedan heridos.
20-03-00	Senderistas asesinan a presidente de comité de desarrollo de Ramal de Aspuzana.
28-04-00	Presuntos senderistas atacaron y quemaron 2 camionetas Polcar en Pozo Azul, y Pumahuasi, muere un policía y otro queda herido.
11-08-00	El PCP-SL asesina a dirigente comunal Grover Benites en Mohena.
16-08-00	En Ute Bambu- Aucayacu, asesinan poblador Gilberto Hilario Rivadeneyra.

1.4.7. Zona III: San Martín y Loreto

1.4.7.1. Datos generales

La mayor parte de la población sanmartinense vive en condiciones precarias, dedicada principalmente a la agricultura en unidades productivas familiares, cuyas economías están sujetas a la fluctuación de precios, normalmente bajos, para la comercialización de arroz, maíz y caña de azúcar principalmente. El crecimiento acelerado en la producción de coca y el narcotráfico en la década de 1980, se debe a realidad, así como en la ausencia de un Estado protector. El Consejo Transitorio de Administración Regional, de San Martín, por ejemplo, distribuyó a sus provincias presupuestos por S/. 72 millones de soles durante 9 años. La zona que menos atención recibió fue el Huallaga Central, a pesar de corresponder al 49% del territorio regional y haber sido azotada por los flagelos del narcotráfico y la subversión armada.

La vía central de enlace entre el Alto Huallaga y el Huallaga Central es la carretera Marginal, también llamada Fernando Belaunde, que cuenta con un tramo deteriorado de 150 kilómetros entre Tocache y Juanjui. Otro de los problemas de San Martín, es la eterna disputa por la sede regional, entre Moyobamba y Tarapoto, confrontación que se agudiza cuando se designan autoridades regionales, dispuestas a frustrar programas de desarrollo en beneficio de otras poblaciones; así por ejemplo Moyobamba se opuso siempre a la rehabilitación o asfaltado de la

carretera Fernando Belaunde, ex Marginal, con la justificación o pretexto que ello significaría su aislamiento, ya que los transportistas preferirían esta ruta a la actual, hacia Chiclayo, que demora 30 horas para unir Tarapoto con Lima, frente a 18 horas que implicaría la ruta por Tingo María.

Cuadro 13.
Presupuestos asignados a las sub Regiones del CTAR San Martín, desde 1991 a 1999.

Sub Región Alto Mayo (Moyobamba)	27'409,857
Sub Región Bajo Mayo (Tarapoto)	26'477,858
Sub Región Huallaga Central (Juanjui)	7'946,356
Sub Región Tocache (Tocache)	3'901,505
Regional (sin datos)	6'312,075
T O T A L	72'047,651

Fuente: CTAR – SM.

El peso político de los grupos de poder asentados en Moyobamba y Tarapoto, los dos polos más importantes de la región, explican esta distribución de los recursos públicos.

Hemos incluido en la Zona III de nuestro informe a 9 provincias en San Martín y dos en Loreto, unidas como dijimos por carreteras en deficiente estado de conservación, con actividades económicas similares (agricultura, ganadería, explotación forestal, extracción de recursos hídricos y el turismo), y ganadas a la economía cocalera entre mediados de la década de 1980 y mediados de la década siguiente, años en que la coca ocupó un sitio preponderante en la economía regional por las limitaciones al desarrollo de la actividad agropecuaria lícita, lo cual permitió al cultivo de la coca crecer lenta pero firmemente, alcanzando a todas las provincias en menor o mayor grado:

Proceso regional

Mientras el PCP-SL actuó en la cuenca del Huallaga en un espacio donde la coca era omnipresente, el MRTA contó con el apoyo de organizaciones campesinas y frentes de productores en el departamento de San Martín, donde predominaba el cultivo de arroz y maíz. Posteriormente, la expansión del cultivo de coca a todo lo largo de la cuenca del Huallaga involucrará al MRTA también en la dinámica de cupos sobre la producción y tráfico de droga a productores y grupos de narcotraficantes.

La violencia de esta zona es bastante menor que la de la zona II. Si bien el número de muertes conocidas oficialmente no fue tan elevado, la convulsión social que duró por varios años, marcó la vida de miles de personas y el devenir de numerosos pueblos

Desde 1960 se produjo en esta zona una considerable migración de personas, que supera el promedio nacional, originada, entre otras razones, por la falta de expectativas económicas, sequías en la sierra, la apertura de la carretera Marginal y las expectativas económicas por los cultivos mercantiles de la ceja de selva.

Esta ampliación demográfica regional tuvo diversas consecuencias, entre las que destacaremos el crecimiento acelerado de asentamientos humanos en condiciones de precariedad, la deforestación acelerada y el uso agrícola de laderas con fuerte pendiente.

En suma, los procesos más importantes de la zona han sido, desde 1960, de una parte, su crecimiento demográfico, y de otra parte, a partir de la década de 1970, la cocalización creciente de buena parte de su espacio y de su economía.

Protestas regionales

En la década de 1970 tres acciones de protesta tuvieron amplia repercusión en la región, desarrolladas por los pobladores de San Martín en defensa de sus intereses o reclamando la atención a su problemática por el gobierno. Estas protestas movilizaron amplios sectores de la población rural y urbana que establecieron organizaciones regionales de amplia legitimidad.

Huelga del pueblo de Lamas en 1975

Bajo la dirección del Frente de Defensa del Pueblo de Lamas (FEDIL), esta huelga tuvo como objetivos lograr la ampliación de la electrificación, agua y desagüe, construcción de carreteras, hospitales, creación de una universidad y servicio telefónico. Los huelguistas secuestraron al periodista del diario Expreso, Francisco Landa, quien se encontraba en Tarapoto para reportar los acontecimientos. El Frente organizó una gran marcha a la ciudad de Tarapoto con participación de los maestros del SUTEP y los «filabotones» —simbólicos nativos guerreros lamistas—, seguidos por el pueblo en general. Caminaron 30 kilómetros hasta Tarapoto, donde llegaron en forma sorpresiva y tomaron la única emisora de la ciudad, «Radio Tropical», desde donde difundieron sus mensajes, arengas y pliego de reclamos, convulsionando la ciudad de Tarapoto.

Las autoridades civiles y militares decidieron desalojar por la fuerza a los huelguistas, deteniendo a centenares de profesores, estudiantes y campesinos. En seguimiento a esta acción, la población de Tarapoto se organizó en un frente cívico, el «*Comité de Desarrollo de San Martín*» (CODESAM), para protestar y declarar la huelga general indefinida hasta lograr la solución a su pliego de reclamos al igual que de los lamistas. Ante la fuerte presión popular, el gobierno militar tuvo que ceder y suscribió un acta con los dirigentes de la organización. Con estos hechos, el pueblo de San Martín entendió que con la organización y la protesta se pueden lograr muchas reivindicaciones, tal como luego propugnará el MRTA a través de sus militantes en las organizaciones campesinas, que al ejercicio de la protesta añadirán su propuesta de lucha armada.

Huelga indefinida en Chazuta

Chazuta, a 60 kilómetros de Tarapoto en el Bajo Huallaga, se declaró en huelga indefinida en 1975, en protesta por el abandono de las autoridades. Exigían: carretera, colegio secundario, posta sanitaria, agua potable y luz eléctrica. A los diez días de iniciada la huelga, sin resultado alguno,

los pobladores iniciaron una marcha de sacrificio a la ciudad de Tarapoto, en la cual una vez llegados se colocaron en las puertas de las oficinas públicas, recibiendo el apoyo de la población de la ciudad y del interior del departamento hasta lograr atención parcial a sus demandas.

Huelga campesina regional

Pero el hecho más importante en los antecedentes previos al desencadenamiento de la violencia en esta zona ocurrió en marzo de 1982, cuando la Federación Agraria Selva Maestra – FASMA, bajo la dirección de Segundo Centurión, acordó impulsar una huelga general indefinida para solucionar el problema de la comercialización del arroz y el maíz, ya que, como consecuencia de una Resolución Suprema del Ministerio de Agricultura los precios de esos productos agrícolas para los productores de la costa se incrementaron, marginando a los agricultores de la sierra y selva. Además del aumento de precios agrícolas se había considerado como parte de la plataforma de lucha la baja de los intereses al crédito público, el alto costo de los insumos, el transporte y la declaración en emergencia del agro en el departamento de San Martín.

La medida extrema se dio inicio con el bloqueo de la carretera Marginal por el sur hasta Juanjui y por el norte hasta Yurimaguas, fue acatada por transportistas, sindicatos, empleados de la administración pública y municipalidades. Habían transcurrido tres semanas de huelga y la desesperación cundía en los huelguistas, mientras el Prefecto Daniel Ocampo Rojas, en acatamiento a una decisión del gobierno de Fernando Belaunde, decidió pedir el apoyo a la policía para desalojar los piquetes que dormían en la carretera, con la intención de desbloquear la vía, pero no calcularon que más de dos mil campesinos les opusieron resistencia, mientras que los efectivos policiales eran menos de cien, el responsable de la dotación de policías fue el Comandante de la Guardia Civil Guillermo Reátegui. La desigual batalla duró cinco horas, se registraron dos campesinos muertos y decenas de heridos en Juan Guerra, los policías tuvieron que huir a pie. Los pobladores habían quemado los vehículos porta tropas. En la localidad de Tabalosos, el enfrentamiento produjo cuatro muertos. Luego de los sucesos los campesinos se dirigieron a Tarapoto, en cuya plaza central miles de ellos pidieron sanción para los responsables de las muertes. Días después el gobierno incrementó el precio del arroz y el maíz de San Martín, pero también ordenó perseguir a los dirigentes campesinos que habían convocado la medida de fuerza. Precisamente, utilizando el nombre de los campesinos muertos en Tabalosos, el MRTA hará su primera aparición pública en la zona en 1987.

En Tarapoto se formó el Comando Unitario de Lucha (CUL), presidido por el profesor Lucas Cachay. En 1984 el CUL promovió el primer paro departamental de los trabajadores de la ciudad y el campo. En abril de 1986, a raíz de otro paro regional, una comitiva oficial integrada por varios ministros y funcionarios de alto rango del gobierno aprista, se vieron obligados a negociar durante 16 horas ininterrumpidas ante el CUL y 200 delegados de las bases. En la negociación el gobierno se comprometió en resolver más del 50% de las exigencias. Ese mismo año, el CUL se

convirtió en el *Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín (FEDIP-SM)* que, junto con la Federación Agraria, se convirtieron en organizaciones de amplia legitimidad y, según los testimonios recogidos, fueron consideradas en la estrategia política del MRTA.

Como hemos dicho, establecido inicialmente en las zonas de mayor producción de arroz y maíz, el MRTA incluirá en su estrategia regional el apoyo a los productores en sus demandas por mejores precios y compra de su producción, en un contexto de reclamos regionales sostenidos por atención de servicios de parte del Estado. Posteriormente, las áreas cocaleras del departamento de San Martín y su dinámica socio-económica serán incluidas también en sus planes.

El discurso del MRTA en apoyo a reivindicaciones regionales le permitió obtener amplio respaldo y simpatía de la población de San Martín que no recurrió a la eliminación de autoridades o dirigentes locales como lo hizo el PCP-SL en la zona vecina del Huallaga, tal como vimos en el capítulo anterior.

1.4.7.2. Historia de la violencia

1.4.7.2.1. Del MIR al MRTA: 1970-1986

Las guerrillas del MIR de 1965 incluyeron tres frentes en el norte, centro y sur del país respectivamente, de los cuales el frente norte no llegó a operar. Con la derrota del MIR, a fines del 60, se generan varios grupos que se autoproclaman continuadores de su historia. Así aparecen MIR «Perú», MIR «Voz Rebelde», MIR «10 de Junio», MIR «Yahuarina», MIR «El Militante», MIR «Cuarta Etapa», entre otros. Utilizando, al igual que el PCP-SL, el circuito educativo para captar militantes, en 1973 miembros del MIR – Voz rebelde (VR), organizaron células de militantes de este movimiento en las localidades de Shapaja, Shanao y Pucaca, lugares donde trabajaban como profesores. Luego ampliaron su influencia a Moyobamba y Juanjui. Se puede afirmar que durante la década del 70, el MIR-VR tenía un asentamiento creciente en diversas localidades del departamento de San Martín.

En el Congreso departamental del MIR, que se realiza en 1982 en la localidad de Juan Guerra, se elige la dirigencia regional de la organización, designándose como secretario general a «Jacinto»; secretario de política y masas a Lucas Cachay; secretario de organización a Osler Panduro y responsable de logística y el aparato militar en formación a José Ojeda Zavala, «Darío».

La organización decide establecer su primera escuela militar en 1982, en Alto Shanusi, con 15 personas bajo la dirección del «camarada Darío», que había luchado en el Frente Sandinista. De los 15 que asistieron a esa escuela hoy solo viven Javier Tuanama, Alberto Gálvez y Sístero García, los demás murieron en enfrentamientos, fueron detenidos y desaparecidos o fallecieron por muerte natural.

Se organizó luego el Comité Regional Militar en la zona del Huallaga Central (Cabo Leveau, Sauce, Ponaza y Valle del Sisa) a cargo del profesor Sístero García. En 1983, un grupo de

militantes de la escuela se dirigen a Lima, de donde los más destacados salieron del país para continuar su instrucción.

A los pocos meses, el MIR Regional organiza una convención en Shapaja, donde se define la estrategia a utilizar hacia las organizaciones campesinas, sindicales y populares, impulsando el Frente de Defensa de San Martín, a través de los comités de masas que incluyeran a los habitantes de las ciudades.

De otra parte, esa misma década, sobre la base de ex-integrantes del gobierno de Velasco Alvarado, se formó el Partido Socialista Revolucionario–PSR, que luego se divide, dando lugar a la agrupación llamada la ORGA, grupo de militantes encabezado por Luis Varese, que se une con el MIR «El Militante» de Antonio Meza Bravo, Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas y Hugo Avellaneda, con el fin organizar un grupo revolucionario y reiniciar la lucha armada en el Perú. A este proyecto se unirán luego Alberto Gálvez Olaechea y Néstor Serpa Cartolini, dando así forma al «Proyecto Revolucionario» que en 1982 aparece como Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas primeras acciones fueron de propaganda a través de volantes, toma de emisoras y pintas. Dos años después, en 1984, el MRTA fracasará en el intento de abrir un frente guerrillero en el Cuzco, donde casi todos sus militantes fueron capturados.

Este intento frustrado de abrir un primer frente conduce a la dirigencia del MRTA a focalizar su atención en la región de San Martín, donde el trabajo político previo les permitiera implementar acciones militares.

1.4.7.2.2. Inicio y expansión de la violencia armada: 1987-1992

Según el ex dirigente del MRTA Sístero García, el PCP-SL estableció su primer campamento subversivo en el valle del Shanusi, en 1981, en un avance que fue considerado entonces como un revés para el MIR, pues algunos de sus militantes se enrolaron a las filas senderistas. El 29 de junio de 1985 un destacamento senderista tomó el pueblo de Lagunas, cerca de Yurimaguas en Alto Amazonas, atacando el puesto policial y asesinando a dos policías y a un funcionario del Banco Agrario. De acuerdo a la información recogida, el grupo estaba jefaturado por el médico Luis Castillo Tapia, jefe del hospital del mismo Lagunas. En su retirada, los senderistas se enfrentaron, cerca de la pequeña localidad de Providencia, con un destacamento policial que mató a siete miembros del grupo, el resto fue capturado y llevado a la cárcel de Iquitos. Este hecho aparece como un intento aislado del PCP-SL de ampliar sus operaciones desde el Alto Huallaga hasta el Bajo Huallaga, sin tener éxito.

Por su parte, a mediados de 1986, los estrategas del MRTA creyeron que la zona se encontraba apta y decidieron dar un paso adelante. Convocaron a 5 jóvenes de cada poblado seleccionado para que recibieran instrucción y preparación militar. El MRTA suponía que estos jóvenes se encargarían, a su vez, de formar nuevos cuadros en su lugar de origen.

El 9 de diciembre de 1986, el MIR y el MRTA, se fusionan a nivel nacional y queda conformada la primera dirección nacional, integrada, de parte del MRTA, por Víctor Polay Campos, Néstor Serpa Cartolini y Miguel Rincón Rincón, y por el MIR Alberto Gálvez Olaechea, Cecilia Oviedo Huapaya y Rodolfo Klein Samanez. Esta fusión parece que no pudo nunca superar los diferentes enfoques que ambas vertientes tenían, cada una con su propia historia, telón de fondo de conflictos al interior de la organización.

Luego de salir de la cárcel, José Ojeda Zavala, «Darío», opinó sobre esta fusión en la cual los miristas consideraban a los emerretistas como «petulantes y pitucos»: «no son revolucionarios, son pequeños burgueses y muy bien pueden hacer fracasar este proyecto, tienen muchas desviaciones revisionistas, no tienen dinero, no trabajan; pero se creen cucos, solo sirven para ocupar puestos de mando»

Según narra Sístero García, en 1986 retornó de Colombia el primer contingente mirista y se internó en la montaña para preparar política y militarmente a los combatientes a través de dos destacamentos, uno en el Shanusi y otro en el Sauce, que sumaban 30 «guerrilleros», armados con retrocargas compradas a campesinos, que pagaban puntualmente sus alimentos a los campesinos, informados por entonces de la brutalidad con que el PCP-SL actuaba en el Alto Huallaga. .

El MRTA inicia sus acciones militares públicas en 1987, con la conformación del Frente Nor Oriental, comandado por una Dirección Regional cuya misión era desarrollar la lucha política y militar. La dirección del FNO incluía un Comandante General y jefes de diferentes áreas: político y de masas, prensa y propaganda, comunicaciones, logística, economía. Por otro lado, el ejército Tupacamarista (ET) del FNO tenía un Comandante General y su Estado Mayor, que decidían sobre los Destacamentos Militares. Por último, el ET disponía de comandos que eran combatientes con una fuerte concientización ideológica, con una gran capacidad física y alto nivel de entrenamiento militar, dependientes del Estado Mayor para realizar acciones armadas.

Entre la población se concibió la organización de bases milicianas, urbanas y rurales, que coordinaban con los destacamentos militares, y brindaban apoyo informativo y logístico al ET para tomas o incursiones a ciudades o puestos policiales.

En 1987, la zona de control considerada estratégica por el MRTA fue el Valle del Sisa, lugar de acceso a las zonas del Alto Mayo, Mayo Medio, el valle del Huayabamba y el Huallaga Central. Allí inició el MRTA su primera campaña militar a la cual denominó «Túpac Amaru Vive».

El 6 de noviembre de 1987 el MRTA realizó su primera incursión en Juanjui, y al día siguiente ocupó San José de Sisa, con gran impacto nacional. Aparecía así ante la ciudadanía peruana, en medio de una guerra interna que ya duraba 7 años, un nuevo actor en armas que pretendía distinguirse del PCP-SL en sus estrategias y práctica político-militar.

Toma de Tabalosos

El MRTA daba inicio a tomas e incursiones de pueblos y ciudades en su objetivo de establecer dominio territorial y de agenciarse de armas y dinero. En realidad la primera incursión, muy breve, ocurrió el 13 de julio de 1987 en el pueblo de Campanilla, «famoso» por la actividad del narcotráfico; la segunda incursión, igualmente fugaz, data del 30 de agosto de ese año, al poblado Pajarillo. El propio Jefe del MRTA, Víctor Polay Campos, «Rolando», dirigió la reunión donde se decidió tomar el pueblo de Tabalosos, según se dijo en homenaje de los campesinos caídos en la huelga indefinida del 21 de marzo de 1982 y celebrando la muerte en combate de Ernesto «Che» Guevara el 8 de octubre. Comenzaba la campaña «Túpac Amaru Vive». En el plan aprobado también se consideraba la toma de Soritor, en Rioja, conmemorando el fallecimiento de Luis de la Puente Uceda en Mesa Pelada, en el Cuzco, además de la toma de Juanjui y Tarapoto, para luego dispersar sus fuerzas y organizar otros destacamentos.

El puesto policial de Tabalosos contaba con escasos diez policías sin entrenamiento especial. El grupo de guerrilleros inició viaje el 6 de octubre extremando los cuidados para no ser detectados por el ejército peruano y el día señalado atacó sorpresivamente al puesto policial, capturando a dos policías mientras los otros huyeron para dar parte al puesto de Moyobamba. Los policías capturados fueron llevados a la plaza de armas donde se desarrolló una asamblea pública con los moradores que no salían de su asombro viendo a los subversivos izar la bandera del MRTA en la Plaza de Armas, pero sin realizar ningún «juicio popular» ni saqueos, en clara diferencia con el PCP-SL, lo cual les permitió ganar la confianza y admiración de la población, generando expectativas positivas.

Incursión en Soritor

El domingo 8 de agosto de 1987 los pobladores corrieron a esconderse al ver ingresar una columna armada al poblado. En el puesto policial había 12 policías, entre los cuales un capitán y 6 policías que se dieron a la fuga hacia Moyobamba, mientras los otros 6 resistieron dos horas de enfrentamiento, luego se rindieron después de sufrir la muerte de 2 de ellos. El mitin del MRTA fue corto, porque la policía de Moyobamba alertada acudió en apoyo, pero igual que en Tabalosos no encontró a los subversivos, quienes en esta incursión se hicieron de ametralladoras y armas cortas, antes de retirarse al valle del Sisa.

Incursión en Juanjui

Luego de la toma de Soritor, en una reunión del destacamento del MRTA en el pueblo de Agua Blanca, se revisó el plan de ataque y toma de Juanjui. Según la versión de «Ricardo», esta toma tenía como objetivo frenar el avance del PCP-SL al Huallaga Central, desafiar políticamente al gobierno de Alan García y amedrentar a los jueces y fiscales corruptos que supuestamente

cobraban fuertes sumas de dinero por resolver las causas de los narcotraficantes a su favor y liberarlos de la prisión.

El plan era tomar primero el puesto de la Guardia Republicana y luego el aeropuerto, planteando la retirada por Saposoa, porque por esta zona había simpatizantes emerretistas dispuestos a darles apoyo con alimentos. El 6 de noviembre de 1987, 60 emerretistas armados y equipados secuestraron un camión cargado con cemento, además de dos camionetas, una de las cuales conducía a «Rolando» y su grupo. El ataque se inició por el puesto de la Guardia Civil, los agentes de la policía de investigaciones – PIP abrieron fuego, pero después de un duro intercambio de disparos y explosión de granadas, los policías se rindieron y fueron conducidos a la Plaza de Armas. El MRTA quedó en poder de los locales policiales, logrando requisar un verdadero arsenal de armas, además de saquear las entidades bancarias. En el ataque murió un policía y otros quedaron heridos. Según el alcalde de Juanjui Abel Hernández Cuesta, los refuerzos policiales llegaron recién 36 horas después del ataque simultáneo a los tres puestos de la policía y el aeropuerto de la ciudad. Justificando esta demora, el Ministro del Interior José Barsallo Burga reconoció en sesión secreta de la Comisión de Defensa del congreso, que habían 95 efectivos policiales en Juanjui, de los cuales 14 estaban en sus puestos, mientras que sólo tres intentaron la defensa, muriendo uno de ellos. Antes de retirarse los subversivos izaron la bandera del MRTA mientras que muchos pobladores les expresaban su identificación y simpatía, que reflejaba entre otras cosas el rechazo a la policía considerada corrupta y abusiva.

Cuenta Héctor, entonces joven escolar, que varios pobladores ayudaron a cargar las armas policiales a las camionetas, *«Fueron casi dos camionetas llenas, un verdadero arsenal»* recuerda Héctor, *«yo me quedé con un revolver»*, dice como si todo lo sucedido hubiese sido un acto sin mayor importancia. Hoy Héctor es ingeniero y ha retornado a Juanjui para dedicarse a la agroindustria, luego de haber sido dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María.

El mismo grupo del MRTA llegó a San José de Sisa el 7 de noviembre, tomando el control del puesto policial rápidamente, sin realizar un solo disparo, conforme recuerda el alcalde de la provincia El Dorado, cuya capital es precisamente San José de Sisa. Pernoctaron en el lugar debido al cansancio y en la noche ofrecieron una actividad cultural con asistencia de los pobladores. Hasta aquí llegaron los periodistas Alejandro Guerrero y Francisco Rivero, de Panamericana Televisión, y Alberto Chávez de la Revista Caretas, para entrevistar a Víctor Polay Campos, con lo que se inicia la publicidad y propaganda a nivel nacional e internacional, una de las tácticas usadas por el MRTA a diferencia del secretismo del PCP-SL.

El gobierno decretó el estado de emergencia y el toque de queda en San Martín, iniciando la persecución de dirigentes sindicales y populares, en particular campesinos. La experiencia de la guerra en otras zonas del país se reprodujo una vez más con el rastillaje en caseríos y pueblos jóvenes, la represión a las movilizaciones y las desapariciones, buscando la desarticulación del

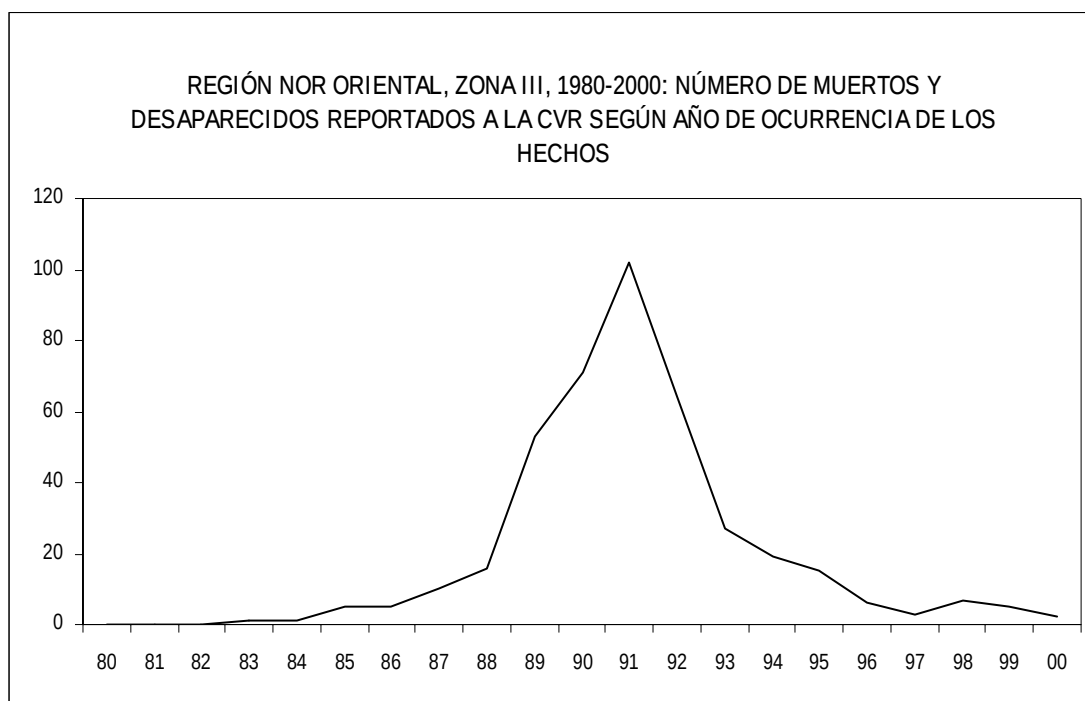
naciente grupo armado pero debilitando las diversas organizaciones regionales legales, sobre todo el FEDIP-SM.

Ante el incremento de la violencia, el Presidente Alan García determinó en 1989 la intervención de las Fuerzas Armadas a través del Comando Político Militar. El temor era entonces que se aplicara la táctica ayacuchana que podría llevar a generar miles de muertos inocentes.

De hecho, de manera muy similar a la Zona II, la mayor intensidad de la violencia en esta zona se produce entre 1989 y 1993, período en el cual se registra el 77.32% (307) de 397 muertos entre 1980 y 2000 en las once provincias de esta zona.

REGIÓN NOR ORIENTAL, ZONA III, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	435	-	-	-	1	1	5	5	15	23	52	66	109	68	28	18	17	8	5	7	5	2
ALTO AMAZONAS	39	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	10	12	3	2	-	-	-	-	-	-
MOYOBAMBA	23	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	15	1	-	-	-	-	1	-	1	-
BELLAVISTA	31	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	7	9	2	2	1	1	3	-	1	-	-
EL DORADO	36	-	-	-	-	-	-	-	5	7	1	4	7	4	1	-	3	2	2	-	-	-
HUALLAGA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	5	1	1	-	5	1	-
LAMAS	64	-	-	-	-	-	1	1	3	3	21	5	11	14	3	-	-	1	1	-	-	-
MARISCAL CÁCERES	106	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	24	26	13	11	6	10	1	1	-	-	-
PICOTA	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	5	4	1	3	1	1	-	-	-	-	1
RIOJA	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	1	-	-	-	-	-	-	1
SAN MARTIN	69	-	-	-	1	-	1	1	3	2	8	16	15	10	4	3	1	-	-	1	3	-



Instalado plenamente el Comando político militar, se establecieron numerosas BCS en el territorio de San Martín y Alto Amazonas. La estrategia político-militar que pretendía aislar a los grupos armados de su base social incluyó diversas tácticas, producto de la experiencia

contrasubversiva acumulada en una década de lucha *contrasubversiva*, como la constitución de rondas de autodefensa, el ofrecimiento de recompensa por la captura de cuadros dirigenciales, campañas psicosociales, rastrillajes, detención de dirigentes públicos y, por supuesto, operativos militares a blancos específicos. El aumento de muertos entre 1990-1992 tiene relación directa, en buena medida, con esta ofensiva que trataba de responder a la nueva ofensiva del MRTA y al aumento del accionar senderista en la Zona del Alto Huallaga.

En efecto, si bien la primera campaña militar del MRTA fue rápidamente desarticulada por las fuerzas del orden entre fines de 1987 e inicios de 1988, la organización debió replantear sus estrategias y reconstruir su organización para pasar nuevamente a la ofensiva en 1989 con la toma de las localidades de Pilluana, Shapaja, San José de Sisa, Peleje, Papalaya y Pacaypasa. El 25 de mayo un grupo de emerretistas captura al presidente de CORDE-San Martín, Demetrio Tafúr Ruiz, quien fue luego liberado. Manteniendo su estrategia de vinculación al movimiento regional, el MRTA apoyó los paros regionales organizados por la FEDIP-SM, que reivindicaban la autonomía regional de San Martín y mejores condiciones para los productores agrarios

En 1991, el FNO del MRTA inicia la «Campaña Militar Fernando Valladares», cuyo objetivo publicitado era criticar las condiciones económicas y políticas impuestas por el gobierno de Alberto Fujimori. Realizan algunas acciones militares importantes, entre las cuales destaca la segunda Toma de Juanjui, el 24 de diciembre de 1991, además de incursiones simultáneas en Tarapoto, Saposo, Moyobamba y Rioja.

El MRTA logró constituir algunas bases o comandos, integradas por decenas de combatientes, que tenían la misión de apoyo a la columna encargada de ejecutar las grandes acciones, como las incursiones, tomas de pueblos y ciudades, ataques a puestos policiales o emboscadas a las patrullas militares. De acuerdo a la versión de Sístero García, en su mejor momento el MRTA llegó a contar con mil combatientes, integrados a destacamentos y a la columna principal que realizó numerosas acciones de relativa envergadura.

Toma de Yurimaguas

La ciudad de Yurimaguas capital de la provincia de Alto Amazonas, en Loreto también sufrió los embates de la subversión desde 1989, inicialmente en los centros poblados y luego en la misma ciudad, donde por tres años, hasta 1992, se produjeron asesinatos, generalmente de campesinos. La campaña del MRTA explica en Yurimaguas el ataque del 18 de abril de 1990 a una camioneta militar donde fallecen un capitán y dos soldados, y en respuesta el asesinato de dos dirigentes de la Federación Agraria. Antes de ingresar a Yurimaguas la columna del MRTA realizó un mitin en Shucshuyacu y el 5 de julio de 1990, incursiona en la ciudad de Yurimaguas con 95 hombres armados que atacaron en dos grupos a la base de la Marina de Guerra, así como al puesto policial, obligando a rendirse a los escasos efectivos y dando libertad a los presos en la cárcel local. Mientras un grupo realizaba un mitin, otro se dedicaba a abrir las puertas de los centros

comerciales para que los pobladores se apoderaran de los bienes. En el mitin preguntaron a los pobladores si querían que dieran muerte a los tres policías que tenían amarrados, los asistentes dijeron que no y así salvaron la vida. La base de la Marina de Guerra, finalmente los obligó a huir al recibir refuerzos de Tarapoto.

El grupo del MRTA retornó a Shucshuyacu donde les dieron alcance médicos de la Cruz Roja, que atendieron a 7 heridos graves. Lo de Yurimaguas no fue en sí una toma sino una incursión con posicionamiento breve, con ataques al puesto policial, a la cárcel y al destacamento de la Marina de Guerra. Si bien realizaron un mitin y ayudaron a saquear a la ciudad, lo hicieron sin tener el control absoluto de la situación.

Aparte de este hecho, los subversivos del MRTA y del PCP-SL tuvieron escasa presencia en Yurimaguas por la acción de la Marina de Guerra y la policía, que capturaron a los líderes y desbarataron sus organizaciones.

1.4.7.2.3. Declive de la violencia: 1993-2000

¿Por qué el MRTA, y el PCP-SL, perdieron el apoyo ganado en las poblaciones, que aprobaron inicialmente sus acciones? ¿Fue sólo éxito de las estrategias político-militares del Comando militar del Huallaga? ¿O fueron también los errores cometidos en sus relaciones con las organizaciones y la población de base, que se cansó de los excesos y arbitrariedades cometidas bajo el terror de las armas?

Resulta evidente que la ofensiva militar emprendida por el Comando político militar del Huallaga desde 1990 conduce a la derrota del MRTA en San Martín, pero debemos sumar a ello otros factores que propiciaron la disminución significativa de la violencia en la zona desde 1993, entre los cuales se incluyen las disputas internas del MRTA (generadas, en parte, por conflictos derivados del reparto de fondos provenientes de las redes de narcotráfico), sus enfrentamientos con el PCP-SL y, sobre todo, la desertión masiva de integrantes de la organización, desencantados de ella y alentados por el decreto ley que legitimó el arrepentimiento de subversivos, emitido en 1992.

Las pugnas internas

Para fines de 1991, las disputas internas del FNO lo resquebrajaron, lo que es aprovechado por el PCP-SL para ir consolidando los territorios que había ganado en la parte sur del departamento de San Martín.

Todo empezó el 9 de enero del 92...llegamos a un acuerdo con Juan Vega (Pepe), Javier Orbe (Tarzan), Juan Pasquel (Gato) y Alfonso Ushiñaua (Chavez) para reunir 100 combatientes en la zona Alberto Leveau, Huallaga Central. El día 10 de febrero, tenía que integrarse a mi columna, José Torres (Abel) con 30 compañeros mas, sin embargo Serpa y Rincón se enteraron de la maniobra que estuve haciendo, por ello envió tropas para liquidarme. En el camino se encontraron con la columna de «Abel» desarrollándose el

primer enfrentamiento entre los bandos, hubo muchos heridos y muertos; empezó el desconcierto. Conocedores de este acontecimiento, un grupo de compañeros me preguntó qué es lo que estaba pasando...Convencidos de que los había golpeado en lo más profundo de su orgullo, Serpa y Rincón reunieron a toda la tropa del Frente Nor Oriental que sumaron trescientos y al mando de Hugo Avellaneda y Andrés Mendoza «Grillo», empezaron a perseguirme en la montaña, la consigna era capturarme vivo o muerto al igual que a mis compañeros y mandos, yo contaba con 35 combatientes y me dedicaba a evadirme...El día 23 de enero de 1993, di una conferencia de prensa confirmando el por qué de nuestro alejamiento del MRTA, por tal actitud se acentuó la persecución y tuvimos dos escaramuzas en la localidad de Sauce, donde la columna que me perseguía se dividió («Ricardo»)

Esta opinión de «Ricardo» muestra el desmoronamiento de la organización que, de la misma manera que había incrementado sus militantes muy rápidamente desde 1987, pierde con la misma rapidez el apoyo de la población y, sobre todo, sufre la desertión o el retiro masivo de la mayoría de sus combatientes acogidos en buena medida a las normas de arrepentimiento propuestas por el Estado. A partir de 1993 el MRTA mantuvo sólo dos grupos, uno en la zona del Valle del Mayo y otro en el Bajo Huallaga. Si en 1990 el Frente Nor Oriental llegó a mil combatientes según algunos ex integrantes, en 1993 quedaban apenas un centenar de ellos. Aquel año, el MRTA de Serpa y Lucero Cumpa deambulaba con tres columnas, de 25 hombres cada una, hasta que Cumpa fue capturada en el distrito de Morales, junto con Dany Cumapa Fasabi, «Flaca», jefe de logística y comunicaciones, quedando solo «Grillo» en la montaña, sin apoyo, perseguido tenazmente por el Ejército, hasta su entrega en junio de 1994. Otro pequeño grupo al mando de «Miguel» se retiró a la zona de Jaén -Cajamarca donde fue capturado.

La cocalización de la organización y los abusos de los milicianos

Algunas versiones de ex emerretistas afirman que desde 1989 los mandos locales del MRTA también acuerdan cobrar cupos de 5 a 10 mil dólares por cada vuelo de avioneta con droga.

De acuerdo a estas versiones, en 1990 un emisario del Jefe Político Militar del Frente San Martín – Huánuco busca contacto con los dirigentes regionales del MRTA para coordinar acciones contra el PCP-SL, sugiriéndoles que dejaran de actuar en los pueblos y ciudades y se concentraran en las montañas, desde donde debían enfrentar al PCP-SL en los valles del Ponaza, Biavo y Huayabamba. Además les pedía que los cupos al narcotráfico se cobraran en forma coordinada con el Ejército para controlar a sus oficiales.

La versión de estos ex - emerretistas sobre el cobro de cupos al narcotráfico y la participación en el negocio de las drogas es coincidente con los testimonios brindados a miembros de la CVR en el penal de Potracancha de Huánuco, en especial de EAF, capturado en La Morada, aún cuando él dice que fueron los infiltrados en el partido los que cobraban «cupos» al narcotráfico. Estas afirmaciones confirman, una vez más, que todos los actores de la guerra en la región del Huallaga, sin excepción, estuvieron involucrados en mayor o menor medida, con las

redes del narcotráfico. Existen testimonios múltiples que afirman que algunos responsables locales del partido huyeron luego de apropiarse de dinero conseguido a través de cupos.

A la vinculación con las actividades de narcotráfico, se sumaron abusos que alejaron a la población regional del MRTA. Así, por ejemplo, impactan negativamente en la población los asesinatos de «indeseables» como ladrones, drogadictos, prostitutas y homosexuales, además de los asesinatos de campesinos acusados de pertenecer a otro grupo y en algunos casos de sus propios miembros o de las fuerzas de base, acusados de traidores o soplones.

Los enfrentamientos entre grupos subversivos.

En este contexto, los enfrentamientos entre el MRTA y el PCP-SL se agudizaron en el Huallaga por la posesión del territorio y las rentas económicas que producía la relación con el narcotráfico, tal como explicamos para la Zona II del Huallaga en el Capítulo anterior

En enero de 1988, una columna senderista incursionó en el valle del Biavo, entre Tocache y Tarapoto, llegando hasta Barranca, un pueblo donde el cultivo de la coca se incrementaba rápidamente. Mientras la excepción era el fundo del ex ministro de Agricultura del gobierno de AP, Nils Ericson Correa, que sólo producía arroz, el otro fundo en importancia, propiedad de Tito López Paredes, era principal productor de coca y drogas en el valle. Ambos fundos recibieron la visita de los senderistas.

Los subversivos no encontraron resistencia al inicio de su lucha armada, como sucedió en otras zonas, porque al defender el «derecho» de los campesinos a cultivar coca, pronto ganaron el apoyo de la población que se sentía protegida. Al Ejército, no le resultó fácil enfrentar a los subversivos del PCP-SL por su estrategia clandestina, lo que no sucedía con el MRTA que sí daba la cara y aún con el apoyo de las poblaciones se les ubicaba y enfrentaba. El Ejército se empeñaba en ganar la confianza de los campesinos pero la gente desconfiaba y lo veía como «enemigo».

Los dirigentes del PCP-SL y el MRTA expresaron, separadamente, que no intentaban el enfrentamiento entre ellos, pero lo cierto es que las escaramuzas y choques directos se registraron en varias oportunidades con el saldo de muertos y heridos en ambos bandos. Cada uno al momento de hacer el balance manifestaba su superioridad y su condición de mejor preparados para la guerra. En el departamento de San Martín, los choques armados se registraron en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, Lamas y Moyobamba. Según refiere el ex presidente del Comité de Auto defensa de Huicungo, el PCP-SL y el MRTA se enfrentaron también en Campanilla, Juanjui, Dos de Mayo, Huayabamba, Soritor, Tingo de Ponaza, Saposoa. El recuerda que: «los senderistas no demostraban ser un grupo guerrillero como si lo hacían notar los emerretistas, con la indumentaria, las armas y el comportamiento».

El PCP-SL se caracterizaba por la informalidad en la vestimenta y el reducido y variado armamento, aunque su característica principal era la mimetización entre la población, disponiendo al mismo tiempo de mayor experiencia en choques armados y de resistencia en zonas agrestes. En

cuanto a su agresividad eran temidos porque estaban dispuestos a todo y en una incursión a un poblado cualquier cosa podía ocurrir, «*eran como unos desquiciados*» recuerda el dirigente antes mencionado, quien en varias oportunidades enfrentó al PCP-SL y el MRTA y fue testigo de cómo se mataban entre ellos por la disputa, según parece, de los escenarios de la droga.

Las iglesias, la OPASM y la comisión de pacificación

Los representantes de las iglesias católica y evangélicas han cumplido una función importante para frenar el proceso de violencia regional, asumiendo posiciones abiertas por la paz y el respeto a los derechos de la persona. Llegaron a emitir pronunciamientos, cartas abiertas o sermones desde los púlpitos para oponerse a la muerte y al odio. Por esta actitud varios de sus miembros perdieron la vida. Recordemos el papel destacado en la defensa de los derechos humanos cumplido por la Oficina de la Prelatura de Acción Social de Moyobamba (OPASM) que en una carta abierta difundida en abril de 1990, dirigida por los agentes pastorales de la provincia de San Martín y Lamas, da fe de la posición que adoptaron con relación a los problemas que afectaban a la región. La carta era el resultado de la asamblea realizada en Tarapoto, con participación de agentes pastorales de las provincias de San Martín y Lamas, donde se discutieron puntos de vista y reflexiones sobre la situación de violencia:

Todos conocemos y padecemos las dos plagas que constantemente vienen castigando nuestro pueblo desde hace años... como iglesia que camina con su pueblo, nos duele como propio el sufrimiento de este, y frente a tanto atropello, especialmente ante los últimos sucesos ocurridos en Pilluana y Uchiza no podemos permanecer silenciosos... nuestros campesinos inconscientemente se han convertido en esclavos del narcotráfico y de la mafia internacional. Asimismo nuestras autoridades están involucradas por permisividad o por coimas en este « tráfico de la muerte». Diariamente vuelan avionetas colombianas sobre nuestros pueblos y ciudades y la única respuesta es el silencio. Hay corrupción y pérdida del sentido de valores a nivel de las autoridades y de las instituciones del estado y en algunos casos hay complicidad y hasta participación directa en el comercio de la droga... La presencia de grupos subversivos levantados en armas se ha acrecentado en los últimos años en nuestro departamento...La brutalidad y la irracionalidad de la violencia subversiva no justifica en ningún momento la violencia represiva que atenta contra la dignidad humana. La respuesta al terrorismo debe comenzar por asumir medidas políticas y económicas que permitan la creación de unas estructuras justas...

La carta culminaba efectuando una serie de propuestas y reflexiones a las autoridades, Fuerzas Armadas y policiales, a los partidos políticos y sindicatos, a los trabajadores y campesinos, a los cristianos, al pueblo en general y a los medios de comunicación, a los centros educativos y a los maestros y finalmente a los subversivos.

1.4.7.4. Cronología

Zona III: San Martín y Loreto

13-07-87	Toma y ocupación de Campanilla, incendian locales públicos.
30-08-87	Toma y ocupación de Pajarillo en Mariscal Cáceres.
08-10-87	Toma de Tabalosos y ataque a puesto policial.
18-10-87	Toma de Soritor y ataque puesto policial y municipalidad.
06-11-87	Incursión a Juanjui, ataque a puestos de GC, GR Y PIP, Subprefectura, ENTEL, correos, Registro Electoral, Fiscalía, bancos, iglesia etc. muere un policía.
07-11-87	Toma y ocupación de San José de Sisa – C5 presentó vídeo.
09-11-87	Incursión en localidad de Sacanche.
19-11-87	Toma y ocupación de Chazuta.
11-12-87	Toma de Shanao en Tarapoto.
16-12-87	Dinamitan puesto policial de Yorongos.
24-12-87	Ataque puesto GR en Juanjui, mueren 3 efectivos.
03-03-88	Asesinato de Alcalde, Gobernador y Juez de Paz en Pillhuana.
30-04-88	Toma localidad de Sión – Mariscal Cáceres.
04-05-88	En asamblea popular en Nuevo San Martín, deciden apoyar al MRTA.
25-10-88	Ataque puesto GC y CORDE en Tarapoto.
10-01-90	Ataque a patrulla militar en Huallaga, mueren 6 militares y 20 subversivos.
18-04-90	Ataque patrulla policial en Tarapoto, mueren un capitán y dos soldados.
27-06-90	Enfrentamiento entre el PCP-SL y MRTA mueren 50 subversivos.
02-07-90	Enfrentamiento MRTA – Ejército, 26 soldados heridos.
09-07-90	Enfrentamiento mueren un policía y 8 subversivos.
26-07-90	Atentado mueren 12 subversivos y 6 soldados.
12-08-90	Enfrentamiento en Juanjui, mueren 4 soldados y 9 subversivos.
29-10-90	Ataque puesto policial Nueva Cajamarca - Rioja, mueren 2 policías.
08-11-90	Asesinan a dos dirigentes de Federación Agraria en Tarapoto.
09-05-91	Enfrentamiento en Dos de Mayo, mueren 18 senderista y dos soldados.
07-08-91	En Lamas enfrentamiento, mueren 2 policías interviene el Ejército y en choque mueren 8 soldados, dos civiles y 20 del MRTA, destruyen base subversiva.
10-08-91	En Pampa Hermosa – Lamas MRTA derriba Helicóptero.
28-08-91	Ataque en Puerto Cangrejo, mueren 5 soldados.
02-11-91	En Alto Mayo- Moyobamba, enfrentamiento entre PCP-SL y MRTA.
16-11-91	En Lamas ataque masivo, a Bancos: Agrario, La Nación y popular, muere un policía y secuestran a otros que luego liberan.
17-11-91	Varios ataques en Rioja mueren 8 policías.
23-12-91	Ataque a campamento militar en Soritor mueren 9 militares.
23-12-91	Ataque puesto GC en Juanjui, mueren 5 policías y 5 civiles.
23-01-93	Se divide el MRTA en conferencia de prensa el camarada «Ricardo» Sístero García acusa a Víctor Polay y Néstor Serpa de traicionar los principios del movimiento.
05-01-93	En nuevo Lima enfrentamiento, mueren 5 policías.
08-01-93	Incursión del MRTA en Moyobamba, atacan puesto policial, el penal san Cristóbal, mueren 2 policías, dos soldados, 3 pobladores y 8 emerretistas.
05-05-93	Capturan a Lucero Cumpa Miranda, jefe del MRTA, con otros combatientes.
23-06-93	Jefe regional del MRTA Andrés Mendoza del Águila y otros 31 militantes se acogen a ley de arrepentimiento.
23-05-94	En Morales – Tarapoto el Frente Huallaga, entrega 47 certificados con acreditación de pena a emerretistas arrepentidos.
06-06-94	PCP-SL incursiona en Sacanche y ataca dos locales públicos.

06-06-94	Senderistas incursionan en Capirona y Pajarillo, habían 15 mujeres armadas.
23-10-94	Ataque a base militar en Campanilla, mueren 9 militares y 26 subversivos.
09-01-95	Capturas a 40 emerretistas luego que el profesor Wilson Montenegro los delatara.
24-04-96	Enfrentamiento en Agua Blanca, Lanzan «Roketes» y destruyen varias casas, intervienen helicópteros. Se desconoce número de víctimas.
18-07-97	Columna senderista incursiona en Huicungo, dos de mayo y santa Rosa, asesinan a tres pobladores y a un teniente del Ejército.
06-10-00	Senderistas destruyen sistema eléctrico y dejan sin luz a 8 pueblos, de Moyobamba.

1.4.8. Zona IV: selva baja de Ucayali, Loreto y Huánuco

1.4.8.1 Datos generales

En esta Zona IV hemos incluido las provincias de Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y Purus en Ucayali, la provincia de Puerto Inca en Huánuco, y la provincia de Ucayali en Loreto.

En todas ellas, la violencia del PCP-SL y del MRTA desarrollada entre 1983 y 1999, tuvo menor intensidad que en el Huallaga y San Martín, aunque también se relaciona con las actividades del narcotráfico, expandido desde el valle del Huallaga hacia Ucayali como resultado tanto de la presión ejercida para la erradicación de los cultivos ilegales de coca de parte de organismos del estado como de la misma dinámica de la guerra en la cuenca del Huallaga.

Miles de migrantes andinos abandonaron sus comunidades de origen para asentarse desde la década de 1950 a lo largo de la carretera Federico Basadre, entre el Boquerón del Padre Abad y Pucallpa, con apoyo del Estado, que otorgó créditos, proyectos dirigidos de colonización, precios de refugio y participación en la comercialización, construyó carreteras y dispuso servicios básicos. Además de la mayoría de colonos, se encuentran en la región las poblaciones originarias de comunidades de las etnias Cashibo-Cacataibo y Shipibo-Conibo, algunas de las cuales igualmente se vieron inmersas en el ciclo de violencia

Crecimiento demográfico

Creado como departamento en 1980, Ucayali se convierte en región en 1988. Su capital, Pucallpa, registró el mayor crecimiento demográfico de todo el país en el periodo censal 1972- 1981, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.8% frente al 3.4% de promedio nacional, tendencia que se mantuvo hasta 1995. De acuerdo al censo poblacional de 1993, la población regional sumaba más de 300 mil habitantes, incluyendo la población Shipibo – Conibo, limitadamente censada y cuyo total oficial de 4,033 personas no refleja al realidad demográfica de este pueblo que se estima en mas de 20 mil. La población urbana regional fue calculada en 216,017, cifra que muestra básicamente el peso de la ciudad de Pucallpa en la composición demográfica regional.

Región Nororiental, Zona IV. 1981-1993: Población. Fuente: Censo Nacional 1993

	1983	1993
Total Ucayali	163,208	314,810
Coronel Portillo	163,208	248,449
Atalaya		28,290
Padre Abad		35,539
Purus		2,532
Ucayali (Loreto)	37,461	45,562
Puerto Inca (Huánuco)		32,405

El departamento de Ucayali, como parte de la amazonía peruana, es beneficiario del régimen de excepción tributaria orientada al desarrollo de la selva, pero sin mayores resultados por diversas circunstancias, que hacen del contrabando y la evasión tributaria prácticas extendidas. La ciudad de Pucallpa, punto final de la carretera central que lleva hasta Lima, juega un papel fundamental en la articulación de la selva peruana con el resto del país.

Según el censo de 1993, la provincia de Puerto Inca contaba con poco más de 32000 habitantes, de los cuales el 90% residía en zonas rurales, mientras que la capital, su principal centro urbano, tenía apenas 1500 personas. Al igual que Ucayali, desde principios de los años setenta Puerto Inca mantuvo una alta tasa de crecimiento poblacional, mayor que otras provincias del departamento de Huánuco y del país. Así, en el periodo inter-censal 1972-1981 creció 6.5% anualmente, mientras que en las otras 10 provincias se constata un promedio de 1.3%; entre 1981-1993 su población se incrementó en 7.1% en tanto las otras provincias lo hicieron en 1.9%. El 34% de la composición de los flujos migratorios es originaria de otros lugares del país.

La fundamental comunicación fluvial y la vinculación establecida por la carretera Marginal hoy Fernando Belaunde, explican que la ciudad de Pucallpa capital de la región Ucayali ejerza, en la provincia de Puerto Inca, una fuerte influencia económica. La construcción de un desvío que llega al río Pachitea, de donde se cruza en lancha para llegar a Puerto Inca, hace que los 120 kilómetros que separan Puerto Inca y Pucallpa se recorran en sólo en seis horas, distancia que anteriormente demandaba hasta tres días, por vía terrestre o fluvial.

Los movimientos sociales regionales

Las demandas regionales exigiendo soluciones a los problemas básicos y la movilización de sectores organizados, primero por la creación del departamento y luego por la de la región se sustentan en Ucayali en el sentimiento de marginación originado por el centralismo de Lima e Iquitos, que ha alimentado la identidad regional, junto con las demandas vinculadas al establecimiento de cánones para disponer de recursos financieros provenientes de la explotación de materias primas. Los hitos históricos de esta larga demanda regional se resumen de la siguiente manera:

Cronología de los movimientos regionales en la Zona IV

1956, se habla por primera vez de separar la provincia de Coronel Portillo del departamento de Loreto.

1974, se crea la Asociación de Propietarios Pro-pavimentación, agua y desagüe y la primera Comisión de Estudio Pro-creación del Departamento de Ucayali.

1975, se crea el FUDIP, Frente Único de Defensa de los Intereses de Pucallpa y se realizan las primeras manifestaciones demandando mejoras.

1976, El pueblo dirige telegramas al gobierno solicitando el Canon Petrolero, logran la visita del general Francisco Morales Bermúdez y sus Ministros.

1977, la municipalidad de Coronel Portillo convoca a cabildo abierto el 23 de octubre y logra la atención del gobierno con un millón de dólares. Nace el CODEL, Comité de Coordinación y Lucha.

1978, el 25 de enero se constituye la Comisión pro-universidad; el 31 de agosto el Frente de Defensa da a conocer el primer pliego petitorio el mismo que es aprobado en asamblea general el 8 de octubre. El 22 de octubre se realiza una gigantesca movilización en la Plaza de armas para celebrar la designación del Comité de Desarrollo de Coronel Portillo, el 23 de octubre levantan la huelga que duró 17 días en lo que se constituyó el primer Pucallpazo.

1979, el 22 de junio el Arquitecto Belaunde Terry, virtual presidente Constitucional se pronuncia a favor de la creación del departamento de Ucayali. Se crea el Comité de Desarrollo de Ucayali, CODEU, que duró muy poco tiempo.

1980, el 18 de junio de 1980 es promulgado el Decreto Ley 23099 mediante el cual se crea el departamento de Ucayali, permitiendo el incremento de la inversión pública y la atención de múltiples demandas.

1983, se crea la Comisión para la elaboración del estudio de creación de la región Ucayali.

1986, la Corporación Departamental de Desarrollo crea la comisión de gestión para la creación de la región Ucayali.

1988, se aprueba la creación de la región Ucayali por Ley 24945 del 24 de noviembre. Otro logro importante en la década del 80 es la creación de la Universidad nacional de Ucayali.

La presencia del MRTA en Ucayali se sustenta en el trabajo político realizado desde 1971 por el MIR El Militante, grupo de amplia influencia en el gremio docente de Coronel Portillo y, desde la segunda mitad de la década de 1970, con influencia política en el Frente Unido de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pucallpa (FUDIPP).

En 1977, en medio de una intensa movilización social en el país, se creó el Comité de Defensa y Lucha de Coronel Portillo (CODEL-COP) que reunía a gremios urbanos y campesinos, así como también a comunidades nativas. Un año después, este Comité origina la formación del Frente de Defensa de la provincia de Coronel Portillo, con fuerte presencia en su dirigencia de militantes del MIR-EM. Poco tiempo después, ocurre el primer «pucallpazo», como se denomina las movilizaciones masivas por reivindicaciones regionales. En 1980, tuvo lugar el segundo «pucallpazo», a través del cual el Frente logra la creación definitiva del departamento de Ucayali.

1.4.8.2. Historia de la violencia

1. 4.8.2.1. Narcotráfico y demandas regionales: 1980-1986

El auge de comercialización de derivados ilícitos de la coca convirtió a las provincias de Ucayali y a Puerto Inca, desde la primera mitad de la década de 1980, en territorio ideal para ampliar sus operaciones, alejados de la vorágine del Huallaga.

En la provincia de Coronel Portillo se registra así, a partir de 1985, la instalación de varias «firmas» venidas del Alto Huallaga asentadas casi abiertamente alrededor del río Tamaya, el lago Imiría y el río Abujao, destacando las de Cachique Rivera, «Cristal», «Gustavo», el colombiano «Lucio» y «Vaticano». El caserío 23 de diciembre se convirtió en el centro de producción de droga más importante del río Ucayali, es nombrado hasta hoy Rivera, porque el narcotraficante que tenía la mayor influencia en toda la zona era Cachique Rivera.

¿Por qué los movimientos subversivos no tuvieron una representación tan importante en Ucayali como sucedió en Huánuco y San Martín, a pesar de existir —como en el caso del Departamento de San Martín— serios conflictos derivados de las demandas regionales y también por la presencia del narcotráfico?

Siendo una región de selva baja, la Zona IV no presenta la misma densidad agropecuaria que las zonas de selva alta. De otra parte, la ciudad de Pucallpa, como vimos, concentra más de la mitad de la población regional, resultando una concentración urbana de muy reciente conformación, sin tradición de organizaciones sociales de importancia. Si remarcamos que la mayor cantidad de víctimas se encuentran en la provincia de Padre Abad, hecho vinculado a la dinámica de la violencia en la región contigua del Alto Huallaga, desde donde los grupos subversivos intentan expandirse por la carretera Basadre, entendemos que Ucayali fue, antes que un espacio de trabajo político, un territorio de negociación entre el PCP-SL y los carteles narcotraficantes de tal manera que la expansión del accionar del PCP-SL se corresponde casi directamente con la ampliación de los cocaleros.

El principal espacio de acción del PCP-SL en esta Zona IV tuvo lugar en la provincia de Padre Abad. Mientras que el MRTA apuntaba a tener influencia política a través de organizaciones regionales como los Frentes de Defensa distritales y provinciales y diversas organizaciones de base, y su presencia militar en Ucayali fue mínima, los grupos del PCP-SL pretendieron sustentar sus bases y Comités en zonas de reciente producción cocalera.

1.4.8.2.2. La violencia se expande: 1987-1991

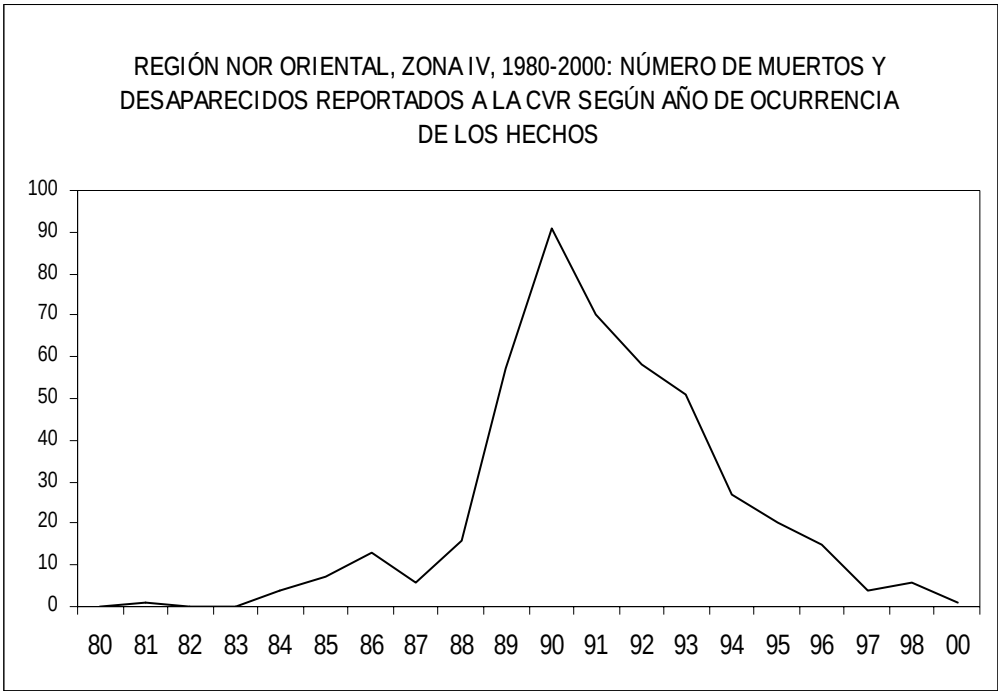
Caracterizada por una menor intensidad de violencia en comparación con la zona del Huallaga, la mayor cantidad de muertos de esta Zona IV se registra entre 1989 y 1991, como vemos en el gráfico siguiente, resaltando como hemos dicho el mayor porcentaje de

la provincia de Padre Abad, contigua a la zona cocalera del Huallaga. Se trata también de un ciclo más corto de violencia, que cubre en lo fundamental la década entre 1987 y 1997. Uno de los primeros actos de violencia en la Zona IV es el ataque de un destacamento senderistas a locales públicos en la ciudad de Aguaytia, capital de Padre Abad, en junio de 1987. El local municipal fue quemado con todos sus enseres, al igual que los archivos del Banco Agrario y un volquete, quedando afectados los locales de la Subprefectura y Juzgado de Paz, mientras que los locales de la Guardia Civil, de Cooperación Popular y de la Micro Región recibieron ráfagas de metrallera.

En mayo de ese mismo año, se registra el primer acto violento del MRTA con un ataque con cóctel molotov a la casa del Director Departamental de Educación en Pucallpa.

REGIÓN NOR ORIENTAL, ZONA IV, 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	437	-	1	-	-	4	7	13	6	15	56	86	69	58	51	27	18	15	4	6	-	1
PUERTO INCA	19	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
CORONEL PORTILLO	81	-	-	-	-	2	-	1	-	1	22	25	11	10	2	1	1	3	1	1	-	-
ATALAYA	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-
PADRE ABAD	329	-	1	-	-	2	6	12	6	13	28	55	56	43	46	24	17	11	3	5	-	1



Los asesinatos de «indeseables»

Diversos testimonios coinciden en señalar acciones de «limpieza social» ejecutadas por senderistas entre 1985 y 1990 en Ucayali. Al igual que el MRTA en algunas zonas de San Martín, los

destacamentos senderistas trataron de ampliar el apoyo de la población «eliminando» a personas consideradas socialmente como «indeseables». Informaciones recogidas por parte de moradores del sector «La Hoyada» en la ciudad de Pucallpa dan cuenta del asesinato de drogadictos, homosexuales y prostitutas. La mayoría de los cadáveres fueron arrojados a los ríos y botaderos, donde algunos de los occisos fueron identificados por sus familiares. En 1988, en la ciudad de Pucallpa, según cuenta el periodista Jorge Torrejón, los hombres de prensa fueron advertidos que en la mañana del 12 de septiembre se produciría una acción armada de gran impacto por lo que solicitaban a los periodistas estar presentes. Sólo tres periodistas llegaron a La Hoyada, en la parte nor-oeste de la ciudad. Eran las 05.30 am cuando un grupo de senderistas apareció llevando consigo a ocho personas entre hombres y mujeres, a quienes colocó en fila; enseguida, tres hombres armados con metralletas dispararon ráfagas sobre ellos quitándoles la vida instantáneamente. «*Luego se conoció que todos eran «fumones», «cabros» y «prostis»*», afirma otro periodista. Horas después fueron recogidos los cadáveres, llevados a la morgue y sepultados en una fosa común, sin que nadie reclamara los cuerpos.

Estos ajusticiamientos extrajudiciales no fueron de conocimiento público e incluso, como pretendía el PCP-SL, un sector de los pobladores los aceptó como oportunos pues les otorgaba mayor seguridad y tranquilidad. Más aún, la demanda social condujo a algunos núcleos poblacionales a desear la presencia de los senderistas para realizar campañas de «limpieza».

El «pucallpazo» de 1989

El hecho violento de mayor repercusión nacional sin embargo no deriva de la actuación de los actores armados sino que se origina en la represión a campesinos que participaban en un mitin de protesta contra el gobierno en la ciudad de Pucallpa, que tuvo amplia repercusión nacional.

Más de cinco mil personas, en su mayoría campesinos, se habían movilizado para exigir atención a sus demandas producto, según los dirigentes locales, del abandono del gobierno central. El saldo final de la represión policial fue de nueve muertos y 18 desaparecidos. Se dijo oficialmente que los senderistas se habían infiltrado en la manifestación con el único propósito de provocar un baño de sangre, lo cual será muy difícil de comprobar, aunque los dirigentes campesinos han negado rotundamente esas imputaciones.

Los hechos se originan en las protestas campesinas que conducen a una huelga de varios días, durante la cual, luego de negociaciones, el gobierno afirma el compromiso de atender varias de las demandas. El 08 de Febrero el Prefecto Alfredo Noriega Ojeda prometió autorizar una movilización por las calles de Pucallpa, al día siguiente, organizada la manifestación para celebrar los logros obtenidos por los agricultores con el apoyo de sectores de asentamientos humanos y gremios sindicales, cuando los dirigentes acudieron a su despacho no pudieron lograr la autorización oficial, en tanto que los manifestantes se habían concentrado en la avenida Saenz Peña y alrededores. Los dirigentes accedieron a realizar la movilización con el intento de ingresar al

perímetro de la plaza de armas para izar el pabellón nacional, momentos en que un contingente de la policía les impidió avanzar.

Ante la persistencia y el desborde de los manifestantes, los policías recurren al uso de bombas lacrimógenas y varas de goma, lo cual enardece a los agredidos, y genera su respuesta con piedras y palos, causando heridas y contusiones en los uniformados.

La violencia fue en aumento hasta que la policía empezó a disparar sus armas de fuego contra los indefensos campesinos, cayendo mortalmente heridos varios de ellos. Aún así, los manifestantes logran llegar hasta la plaza de armas, en donde el agricultor Emigdio Córdova intentó izar la bandera peruana pero murió impactado por una ráfaga de metralleta.

A partir de este momento los hechos se tornan confusos, porque la policía, con el apoyo de la Marina de Guerra, logra cercar la plaza de armas, bloqueando el ingreso de personas, así como de periodistas. Existen versiones no confirmadas, que afirman que habrían sido asesinados más de 9 manifestantes, mientras que otros 18 fueron llevados en camiones porta tropas y luego asesinados al «comprobarse efectivamente» su vinculación con el PCP-SL.

La versión común más extendida menciona por lo menos 30 personas muertas y otras 40 desaparecidas, cuyos restos se encontrarían en una fosa clandestina en el kilómetro once de la carretera Federico Basadre, donde se ubica la base de la Marina de Guerra.

Víctimas de asesinato o desaparición durante la protesta

Los fallecidos reconocidos fueron: Emigdio Córdova, Edwin Soria, Armando y Clayton Romaina, Juan Huasnato y Luis Palomino, también, Juan Guzmán y Gildardo Jacsapalla y otro que no fue identificado.

Mientras que los desaparecidos son: Juan Sajamí, Anatolio Vidal, Agustín Ríos, Vicente Navarro, Róger Dahua, Róger Rodríguez, María Tihuay, William Juárez, Gaspar Jipa, Guillermo Ipushima, Genoveva Dávila, José Sangama, Jorge Pacaya, Heriberto Fernández, Elvira Ojanama, Santos Panduro, Agustín García y Manuel Pacaya.

A Humberto Ahuanari le amputaron una pierna.

Posiblemente, el clima de terror generado por las actividades subversivas condujeron a la sospecha que los subversivos estaban infiltrados en la gigantesca movilización, generando con ello la reacción desproporcionada de las fuerzas policiales.

Luego de este acto sangriento, el PCP-SL y el MRTA incrementan sus acciones armadas en la región, obligando al Estado, el 1 de junio de 1989, a declarar Ucayali como zona de emergencia e instalando un Comando Político-Militar. Para el MRTA, vinculado a las organizaciones y gremios regionales urbanos y campesinos, la persecución por el EP de todos los dirigentes políticos y sindicales de la región lo obligó a retirarse plenamente a la clandestinidad. La presión sobre estos dirigentes y organizaciones regionales continuaría con la Marina de Guerra como responsable, desde 1991, del Comando político-militar de la región. Además de las acciones de las fuerzas militares, el MRTA sufre un duro golpe con la muerte, en septiembre de 1989 por una peritonitis, del «Comandante Mario», Osler Panduro, acelerando su crisis orgánica.

Golpe al PCP-SL en Pucallpa

Apenas declarado el estado de emergencia por el aumento de la actividad subversiva, unos 30 militantes del PCP-SL llegaron a mediados de junio de 1989, desde Tocache, a la urbanización Primavera, a 5km de Pucallpa sobre la carretera Federico Basadre, donde realizaron asambleas incluso en pleno día, poniendo en riesgo a los pobladores. La última semana de junio los pobladores fueron advertidos para participar en una acción de masas, junto con otros asentamientos humanos, gremios sindicales y asociaciones de agricultores, que tuvieron al parecer como objetivo la base de la Marina de Guerra, lo que significaría otro baño de sangre de mayor magnitud que la matanza del nueve de febrero. Los dirigentes pensaron en capturar a estos militantes senderistas, que no habían sido vistos con armas y aparentaban ser meros activistas, pero una mañana llegó al lugar un grupo de subversivos armados, entre 15 ó 20 según refiere ARA, ex teniente gobernador, quienes dijeron que venían de sostener dos enfrentamientos, uno con el MRTA en Honoria, y otro con el Ejército Peruano en Aguaytia, donde tuvieron algunas bajas, por eso la acción de masas se convertiría en acción armada contra un objetivo que momentos antes de realizarse se les daría a conocer. Varios de los «tocachinos» del grupo llegado días antes respondieron con entusiasmo, pero luego de este encuentro los pobladores decidieron dar aviso a la Marina de Guerra. En la primera semana de julio, los infantes de la Marina cercaron el lugar y más de 300 pobladores redujeron al grupo de senderistas, de los cuales nunca mas se conoció su paradero; *«es seguro que fueron asesinados y sepultados en una fosa común clandestina»*, refieren hoy los pobladores. El rechazo al PCP-SL en los espacios urbanos se ampliaría desde 1991 a las zonas rurales al modificarse la estrategia de lucha *contrasubversiva* al formarse los Comités de Autodefensa, CAD. En 1990, sin embargo, el accionar del MRTA, aunque de poca intensidad, fue visible en Nueva Requena y Shambo, comunidad nativa Shipibo-Conibo, acceso directo entre el río Ucayali y el eje central de esta provincia, se hallaba también en el río Aguaytía, y en Puerto Inca y Tournavista, departamento de Huánuco. Las patrullas del Ejército y la Marina y la presencia de grupos armados del PCP-SL truncan el desarrollo del Frente Oriental del MRTA, a pesar de sus intentos en las áreas rurales de Tahuantinsuyo (San Alejandro), Contamana, Callería, Nueva Requena, Iparia y Masisea. Este contingente militar emerretista fue finalmente aniquilado en la Boca del Pachitea por la Marina de Guerra en 1990, meses después del ataque y destrucción, por una columna del PCP-SL, del destacamento militar del MRTA en Tahuantinsuyo, San Alejandro, que liquidó la presencia del MRTA en la provincia de Padre Abad. Aguaytía, siendo plena la influencia de los grupos senderistas asociados a los narcotraficantes locales.

El narcotráfico y la subversión en Puerto Inca.

Durante los años cincuenta y sesenta la instalación de la empresa maderera y ganadera propiedad del «socio de Dios», Le Tourneau -de donde proviene el nombre del distrito de Tournavista-, así como de la empresa petrolera Ganso Azul y de lavaderos de oro, impulsaron la ocupación de la zona de Puerto Inca, a lo largo río Pachitea. La reforma agraria y la nacionalización del petróleo a fines de los años sesenta frenaron la consolidación de estas empresas, aunque la construcción de la Carretera Marginal durante el primer gobierno del presidente Belaunde (1963-1968), siguió alimentando una corriente migratoria que permitió la colonización de la actual provincia de Puerto Inca.

Como hemos visto, el éxito del narcotráfico y la presión ejercida sobre el tráfico ilícito de drogas en la década de 1980 en la región del Huallaga, permite a Puerto Inca, flamante provincia del departamento de Huánuco, ampliar su área cocalera y por ende ingresar a la misma dinámica socio económica del Huallaga. Al igual que en otros lugares donde floreció el narcotráfico, los traficantes adelantaban dinero a los agricultores para financiar la producción y comercialización de la coca y luego de la droga, con precios que superaban ampliamente a los productos agrícolas tradicionales. Es decir, el narcotráfico propició el desarrollo del mercado local y regional de bienes y servicios, y la relación entre narcotraficantes, agricultores, comerciantes y transportistas originó la articulación de redes sociales y lealtades basadas en relaciones de parentesco, de origen regional y de vecindad, que involucraron no sólo a productores y compradores sino también a policías, militares y jueces; vínculos que se reforzaban en reuniones sociales.

Entre 1987 y 1994, la producción y el tráfico ilícito de drogas en Puerto Inca alcanzaron dimensiones extraordinarias, alterando la organización y el comportamiento social. Los agricultores se encontraron a merced de las extorsiones y abusos de narcotraficantes, subversivos, fuerzas del orden y jueces, así como de los arreglos de cuentas entre ellos. Dijimos que el MRTA ejecutó sus acciones insurgentes principalmente en la provincia de Puerto Inca. En efecto, en 1988 una columna de MRTA inicia sus actividades subversivas en la provincia de Puerto Inca, hasta llegar a tomar la capital provincial en 1989, ocupándola libremente durante casi un año. El control que ejerció sobre las actividades y el movimiento de la población, así como sus continuas exigencias, motivaron las ejecuciones extrajudiciales de algunos de sus habitantes y propiciaron diferentes tipos de arreglos y enfrentamientos entre emerretistas y narcotraficantes. Meses después de esta tomas, el PCP-SL incursionó en la zona y estableció una sangrienta competencia con el MRTA así como con los narcotraficantes, a fin de controlar el territorio, la población y la economía de las drogas.

En 1990, en una ofensiva rápida, la Marina de Guerra hizo huir al MRTA de Puerto Inca, logrando pacificar la zona después de algunos años y de varios incidentes armados. Para ello contó con la colaboración de los Comités de autodefensa que habían formado los pobladores de los

distritos y caseríos, y también de los traficantes de droga deseosos de quitarse de encima a la subversión.

Como vimos en el capítulo anterior sobre el Huallaga, la estrategia militar perseguía combatir y aislar la subversión de los productores de coca y de los traficantes de droga, quienes prosiguieron sus actividades, tal como la han evidenciado las investigaciones realizadas luego de la captura de importantes narcotraficantes, entre ellos la de los hermanos Cachique Rivera.

PCP-SL sigue tras la coca

Desde 1988, con el argumento de defensa de la coca, el PCP-SL empezó sus acciones armadas en la provincia de Padre Abad, realizando incursiones contra el puesto policial en Aguaytia, convocando constantemente a paros generales, obstaculizando y controlando varios tramos del trayecto carretero entre Pucallpa y Tingo María. El esquema del Huallaga comienza a aplicarse en Padre Abad: alianza con los agricultores cocalleros, control de la compra y venta de coca y pasta de cocaína, así como organización de Comités de base, ajusticiando a los «enemigos» y hostigando a las fuerzas del orden. Amplios sectores campesinos aceptaron esta propuesta de «nuevo orden», hartos de los abusos policiales y militares, y de las autoridades legales. El ritual del «juicio popular» se replicó en toda la zona una y otra vez contra soplones, indeseables, tenientes gobernadores, agentes municipales, dirigentes campesinos, conforme los Comités Organizados se implantaron en los caseríos asentados a lo largo de la carretera Basadre. De estos primeros Comités organizados, el PCP-SL pasó luego a instalar Comités Populares, como fue el caso de los caseríos de Boquerón y Huipoca en la Basadre, y Nuevo San Martín y Bellavista, sobre el río Aguaytia. En los principales centros poblados del PCP-SL también estuvo presente a través de «la Urbana».

Durante casi dos años la organización senderista tuvo el control casi absoluto de la zona de Aguaytia, resaltando la importancia de los Comités de Boquerón y Huipoca en la supervisión de vuelos que utilizaban tramos de la carretera Basadre para aterrizar. A los cupos de estos vuelos se sumó la instalación de «balanzas populares» de la pasta.

El cambio en la estrategia *contrasubversiva* de parte de la Marina desde el año 1991, obligó a los militantes del PCP-SL a retirarse hacía algunas zonas del río Ucayali, perdiendo el control de los caseríos situados a lo largo de la Basadre, convirtiéndose en muchos casos en Comités de Autodefensa con apoyo de la Marina.

Pero la propia dinámica expansionista del narcotráfico obligó a las firmas nacionales a buscar nuevas zonas de producción y comercialización de la droga. Una de ellas fue la provincia de Coronel Portillo. A ella ingresaron destacamentos senderistas que transitaban por el río Ucayali, principalmente en los distritos de Callería, Masisea e Iparia, concentrándose en tres zonas: la quebrada del río Abujao, en el distrito de Callería; el lago Imiria, en el río Tamaya, distrito de Masisea; y la quebrada de Pomayacu, sobre el río Amaquiria, distrito de Iparia. No sorprende

señalar que en estas zonas ya existían cultivos de coca y el negocio de la droga se había incrementado notoriamente.

El PCP-SL realizó una de sus primeras incursiones en el centro poblado de Iparia a mediados de 1989, incendiando locales públicos y nombrando delegados a algunos pobladores, proponiendo además que se abriesen chacras para sembrar coca cuya cosecha sería repartida entre el partido y los agricultores. El 3 de noviembre de 1989, una columna senderista con 70 hombres y mujeres armados incursionó en Masisea, incendió el Municipio, el Centro Médico y apresó a algunas autoridades municipales y miembros de la Micro región para someterlos a juicio popular. Por razones fortuitas los detenidos escaparon junto con la mayoría de la población. La columna prosiguió su recorrido con la incursión al caserío de Charasmaná, en la boca del río Tamaya. Así como en Iparia, esta fue la única vez que el PCP-SL incursionó militarmente en Masisea. Pero sus fracasos militares no impidieron la formación de Comités Organizados y Comités Populares Abiertos en los caseríos ubicados en el río Tamaya y en las riberas de los ríos Suaya, Butsaya y Noaya, existentes a inicios de 1990.

En el río Ucayali, el Comité Popular Abierto más importante del PCP-SL estuvo en el caserío de Nuevo Horizonte, alrededor del cual se ubicaban los Comités Organizados de Noaya, Butsaya, Suaya y Vinuncuro. En el Imiria, los Comités Organizados estaban en los caseríos de 23 de Diciembre (conocido como «Rivera», y Panuco. Asimismo, en el Abujao, existían Comités Populares Abiertos en los caseríos de Santa Luz de Abujao, 28 de julio, 24 de setiembre, y Comités Organizados en el río Utiquiría, en todos estos lugares no existía ninguna institución representativa del Estado peruano.

Los Comités Organizados de Panuco y Vinuncuro eran importantes porque se encargaban de controlar el ingreso hacia el Imiria y a las zonas donde se producía la droga, por tal razón existía en ellos una Fuerza Principal del PCP-SL que controlaba la comercialización de la droga y supervisaban el desarrollo de los comités organizados del área. La estrategia de ingreso a las comunidades nativas Cashibo-Cacataibo de Padre Abad fue similar a la que los senderistas usaron con las comunidades Shipibo-Conibo asentadas en el río Ucayali, pero la respuesta nativa siempre fue en casi todos los casos negativa. De hecho, al igual que los Cashibo- Cacataibo, los Shipibo-Conibo tampoco sembraban coca aunque conocían la actividad del narcotráfico a través de la venta de su mano de obra. Un buen ejemplo es la comunidad nativa de Caimito, a cuyos líderes pidió PCP-SL que se unan a la lucha armada y que instalen cultivos de coca, como lo hacían en los caseríos aledaños. La respuesta de la población no sólo fue el rechazo a la propuesta sino asumir la decisión de unirse, en 1991 al CAD del caserío de Puerto Alegre.

1.4.8.2.3. La respuesta militar y el final de la violencia: 1992-2000

Como dijimos anteriormente, poco después del «pucallpazo» de enero, el gobierno declaró a Ucayali en emergencia en junio de 1989 y creó un Comando Político-Militar a cargo de la Marina

de Guerra, pero debido a su gran extensión, el EP asumió el control de la zona comprendida entre el caserío Divisoria y el Km. 86, de la provincia de Padre Abad, mientras la Marina se encargó de la vigilancia de la ciudad de Pucallpa y de todos los caseríos asentados a lo largo del río Ucayali y afluentes. Luego, en 1991, la Marina de Guerra asumió la conducción total del Comando Político-Militar.

Desde 1989 se instaló una base militar en Aguaytia, que en junio del mismo año pierde 15 efectivos en una emboscada senderista a un camión porta tropa, la primera de otras a lo largo de la Basadre, aunque ninguna tan costosa en vidas como ésta. La estrategia del ejército incluía bombardeos indiscriminados con helicópteros artillados contra caseríos ubicados en las riberas del río Aguaytia, a donde llegaban luego patrullas militares terrestres para realizar repastos de cuerpos y destrucción de bienes. Los casos más ilustrativos de esta táctica militar fueron los caseríos de Nuevo San Martín y Bellavista, ambos Comités Populares Abiertos y zonas de producción de droga. La importancia de Bellavista para el PCP-SL explica su bombardeo en varias oportunidades hasta convertirlo casi en un pueblo fantasma

La estrategia de la Marina de Guerra no fue muy diferente, hasta 1990. Al igual que el EP en Padre Abad, sus operativos militares consistían en atacar poblados enteros sin saber exactamente si las huestes senderistas estaban presentes en la zona. Otras veces también utilizaron helicópteros artillados para bombardear distintos caseríos considerados «zonas rojas».

Los «ajusticiados» y los «caídos del cielo».

Además del «pucallpazo» de febrero de 1989, la memoria colectiva en Ucayali nos remite a los ajusticiamientos arbitrarios cometidos por todos los actores armados. Un ejemplo brutal, similar al de miles de casos a lo largo del proceso de violencia realizados por grupos del PCP-SL, se registró en la localidad de Alonso Alvarado, a 12 kilómetros de Campo Verde, el año 1989, según cuenta un ex senderista conocido como camarada «Alex». A las ocho de la noche del 14 de mayo de 1989, una columna senderista llegó al lugar y capturó a Fidel Lastra diciéndole que iba a morir por haber traicionado al partido. Le ordenaron arrodillarse, amarrándole las muñecas a la espalda, y uno de los subversivos que parecía ser el jefe empezó a golpearle la cabeza con la culata de su arma hasta que empezó a brotar sangre por los oídos y la nariz; recién en ese momento los otros «camaradas» fueron autorizados a golpearlo con puños y pies. Para finalizar, ordenaron a los pobladores, unos 60, que cogieran un cuchillo y que cada uno de ellos en fila india debía aplicarle un corte en el cuerpo, si mostraban pena y le inferían una herida pequeña, eran obligados a repetir la agresión. De esa manera Lastra fue prácticamente «cosido» a puñaladas. Los propios familiares fueron obligados bajo amenaza de muerte a participar en el macabro ritual de eliminación «de un traidor»

Por su parte, las Fuerzas Armadas también realizaron ajusticiamientos, y a la práctica extendida de la tortura en sus diversas formas se añadió el asesinato utilizando helicópteros para arrojar detenidos. Versiones de campesinos que presenciaron estos hechos refieren haber visto caer

desde los helicópteros sacos negros a los ríos y, según narra un campesino, uno de estos costales negros cayó en una oportunidad en su chacra, con los restos despedazados de un hombre que tenía el rostro quemado y los miembros seccionados. Otros campesinos, que se dedican a la extracción de madera, manifiestan haber encontrado huesos de personas en lugares inaccesibles de la selva donde presumiblemente habrían sido arrojados desde los helicópteros. Los aguajales de Pucallpa se convirtieron en cementerio para decenas de personas que fueron secuestradas o detenidas por las fuerzas de seguridad en operaciones de rastrillaje. El Padre Gérald Veilleux del Vicariato de Pucallpa refiere que la Marina de Guerra de las bases de Aguaytia y Pucallpa también acostumbraban lanzar desde los helicópteros a presuntos senderistas y como prueba muestra fotografías donde se aprecia restos humanos colgando de los árboles, hallados en el Parque Nacional Von Humbolt, en la provincia de Padre Abad, nombrados por la gente de la zona como «los caídos del cielo».

Cambio de estrategia y CAD's

Posiblemente a partir del éxito logrado en el Huallaga, en 1991 las FFAA tenían como objetivo ganarse a la población civil a través de acciones de apoyo y, principalmente, dejar sin base social ni espacio de maniobra al PCP-SL evitando la represión indiscriminada y apoyando la formación de rondas de autodefensa. A la instalación de bases *contrasubversivas* en caseríos y ciudades estratégicas a lo largo de la carretera Basadre, como en Aguaytia y los caseríos de Libertad, Huipoca y San Alejandro, a lo largo del río Ucayali la Marina realizó constantes operativos y fomentó la formación de los CAD en Puerto Alegre y Caimito, además de algunas rondas de autodefensa en caseríos y comunidades nativas.

Huipoca, en Padre Abad, uno de los lugares donde el PCP-SL había conformado un Comité popular activo, la Marina logró revertir el apoyo de la población para formar exitosamente un CAD en 1992, entregando armas a sus integrantes. Además de Huipoca, se instaló otro CAD en Boquerón, aunque en este poblado, el centro de producción y comercialización de droga más importante de Padre Abad, el CAD fue efímero pues la población no deseaba perder los beneficios derivados del narcotráfico. Sea como fuere, Huipoca y Boquerón, los dos Comités Populares abiertos más importantes de Padre Abad dejaron de ser centros de operación de los grupos del PCP-SL.

En el Ucayali, desde 1991 la población del caserío de Puerto Alegre decidió formar un CAD, el cual tuvo un rol fundamental en la lucha *contrasubversiva*, propiciando la derrota del PCP-SL en el lago Imiria y en algunas zonas del río Tamaya. A este CAD, como vimos, se incorporó como sub-base la comunidad nativa de Caimito. Igual sucedió en la comunidad nativa de Colonia del Caco, cuyo CAD controlaba embarcaciones que transitaban por el Ucayali e inclusive combatió a los narcotraficantes.

En su respuesta a la violencia senderista, muchos de los CAD's fueron acusadas de ser nuevos agentes de violencia al practicar actos de tortura, desapariciones, robos, y otros delitos directamente derivados de la facultad asumida para mantener el orden interno y los operativos de rastillaje:

«Una vez agarramos a 6 senderistas importantes cerca de Panuco. Entonces llamamos por radio a la Marina en Pucallpa y les informamos del hecho. Ellos nos dijeron que para qué los van a traer a Pucallpa, que por las puras íbamos a gastar gasolina y que mejor nos deshiciéramos de ellos. Así pues los llevamos a una explanada del río y les dimos vuelta» (Pablito. Caserío de Puerto Alegre. Distrito de Masisea. Coronel Portillo, Ver Estud. de la CVR).

En los dos ejes principales de su accionar -la carretera Federico Basadre y el curso del río Ucayali y algunos de sus afluentes al sur de la ciudad de Pucallpa-, los Comités del PCP-SL y sus bases de apoyo dejaron de funcionar luego de 1992, de la misma manera que el MRTA perdía su último espacio de acción en la zona de Puerto Inca. Tres años después, en 1995, la crisis de los precios internacionales del narcotráfico provocó el colapso de las cadenas que lo sustentaban y cerró, en Ucayali y Puerto Inca, el ciclo de violencia sustentado en la alianza entre el proyecto subversivo de PCP-SL y redes de narcotraficantes.

1.4.8.3. Cronología

Zona IV: la selva baja de Ucayali, Loreto y Huánuco

06-05-83	Atentado local AP en Pucallpa.
02-06-87	Senderistas atacan y toman pueblo de Aguaytia.
29-05-87	Ataque Banco Agrario y Puesto Policial en Aguaytia.
15-08-88	Ataque antena repetidora ENTEL Perú, muere un policía El PCP-SL toma San Alejandro.
12-10-88	MRTA dinamita fábrica La Fabril.
18-05-89	Paro armado en Padre Abad.
19-06-89	Enfrentamiento entre MRTA y PCP-SL mueren 22 subversivos.
19-06-89	Emboscada a Patrulla militar, mueren 15 soldados.
10-10-89	Asesinan a 8 personas en distintos lugares de la carretera Federico Basadre.
20-06-89	Asesinato del Alcalde de Yarina Cocha Roberto Ruíz Vargas.
21-06-89	20 soldados murieron en emboscada en San Alejandro.
23-06-89	MRTA mató a seis mujeres senderistas.
28-06-89	Toque de queda en Pucallpa, ante avance de la subversión.
04-07-89	Asaltan puesto policial en Abujao.
15-07-89	Destruyen puesto GR en Utuquinía.
07-09-89	Piden se declare muerto al alcalde de Aguaytia Luis Raymundo, secuestrado y desaparecido.
09-09-89	MRTA toma Tournavista y reúne al pueblo.
20-09-89	En enfrentamiento muere «comandante «Mario», Osler Panduro Rengifo, MRTA.
03-10-89	Marina de Guerra desaloja MRTA de Puerto Inca.
20-10-89	Atentado al alcalde de Yarinacocha Guillermo Gastelú.
01-04-90	Ataque a convoy militar en Aguaytia mueren 13 soldados.
01-05-90	Enfrentamiento en Barrio Unido-Aguaytia, mueren 20 subversivos.
11-07-90	Enfrentamiento MRTA con patrulla militar mueren 16 subversivos en Alonso de Alvarado.
29-07-90	En Atalaya – Antonio Raymondi, asesinan a gobernador y dos regidores de Llamellin.
06-05-91	Rondas capturan a ocho senderistas en Puerto Alegre – Río Tamaya.
20-06-91	En enfrentamiento mueren 35 subversivos en Santa Ana.
11-01-92	Ataque y destrucción de helicóptero, mueren 3 agentes de la DEA.
03-10-92	En enfrentamiento mueren 13 soldados en la Divisoria.
08-01-93	Ataque a base senderista cerca de Aguaytia, mueren 15 subversivos
17-09-93	Primer subversivo arrepentido en Ucayali «Camarada Eberth» de 17 años
06-10-93	20 subversivos se acogen a la ley de arrepentimiento, con ellos suman 280 los subversivos del MRTA capturados por la Marina de Guerra.
21-12-93	Entregan armas a 16 comités de autodefensa en Pucallpa.
27-12-93	Capturan a 11 presuntos narcoterroristas en Huipoca.
31-01-94	Condena a cadena perpetua a dos senderistas en Pucallpa.
23-04-94	En Atalaya rescatan a 19 comuneros Ashaninkas que estaban en poder de senderistas.
01-04-95	Propaganda subversiva del MRTA en colegio «El Botecito» de Pucallpa.
10-12-96	Senderistas asesinan a 7 pobladores del caserío la Punta – Aguaytia.
28-08-97	Levantán estado de emergencia en Padre Abad, Coronel Portillo y Puerto

	Inca.
05-03-98	Senderistas incursionan en caseríos Nueva Requena y Pampa Yurac.
07-07-98	50 senderistas incursionan en caserío Previsto.
24-10-98	15 senderistas interceptan a trabajadores del CADA y les quitan equipos.
06-05-97	10 encapuchados asaltan al pueblo de Nueva Honoria.
07-07-97	Presuntos senderistas hostigaron base de la Marina en Puerto Inca.
26-05-98	Senderistas emboscan a patrulla policial, 3 resultan heridos.

1.5. LA REGIÓN LIMA METROPOLITANA

Este capítulo presenta los diferentes procesos, actores y escenarios que caracterizaron a Lima Metropolitana entre 1980 y el 2000, configurando la dramática experiencia del conflicto armado interno desatada en la capital. No resulta difícil imaginar cuál era el significado político y militar del accionar subversivo en la capital pues desde el inicio de la guerra interna, las acciones en las ciudades tuvieron la mayor importancia en los planes de los grupos subversivos, particularmente el PCP-SL. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad de los ochenta que su accionar en las ciudades va a adquirir una nueva dimensión y frecuencia, de tal manera que entre 1982 y 1987 el número de acciones sediciosas en Lima fue superior al que hubo en Ayacucho. Posteriormente, entre fines de 1989 y la primera mitad de 1992, la ciudad de Lima se convertiría en el escenario de lucha priorizado por los grupos subversivos, en especial el PCP-SL, tanto por el incremento de una variedad de acciones y atentados subversivos, como por la consolidación de una significativa presencia en los sectores populares, hechos que parecían ser la cristalización del cerco a la ciudad que Abimael Guzmán anunciara en la «Entrevista del siglo» (1988) como parte del equilibrio estratégico.

Prácticamente desde el inicio de la guerra interna, las acciones subversivas en Lima tuvieron una importancia decisiva, por ser la principal caja de resonancia de estas acciones, constituyendo un espacio vital para la gestación y formación de militantes, cuadros políticos y combatientes del PCP- SL y luego del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, mientras que las fuerzas del orden, amparadas por leyes de emergencia, contribuyen a su vez a agudizar el clima de inseguridad y terror. Lima llega a ser declarada zona de emergencia, suspendiéndose los derechos constitucionales de los pobladores, en una espiral de violencia y muerte que llega a inicios de la década de 1990, a abarcar a todos los sectores de la ciudad, de los asentamientos humanos hasta los distritos residenciales de Lima. El clima de terror e inseguridad se instalan en la ciudad capital hasta que en 1992 es capturado su líder máximo y la situación varía radicalmente.

1.5.1. Antecedentes y contexto regional

Los procesos de urbanización y modernización de Lima Metropolitana se explican en relación a los cambios demográficos que experimentó el país desde mediados del siglo veinte, los cuales generaron nuevos contingentes poblacionales convertidos en actores sociales sobre todo en el lapso del primer gobierno de Belaunde (1963-1968) y del régimen militar (1968-1980), reconfigurando la fisonomía de la capital y desbordando la capacidad estatal, con formas organizativas inéditas.

1.5.1.1. Cambios sociodemográficos en la ciudad

En 1993 más del 50% de la población total del país ya era predominantemente urbana, y Lima Metropolitana concentraba casi la tercera parte de esta población:, 28.4% frente al 9.4% de 1940.

Proporción de la Población de Lima Metropolitana respecto a la población total del país			
AÑOS	POBLACIÓN NACIONAL	POBLACIÓN LM	LM RESPECTO AL PAÍS (%)
1940	7'023,111	661,508	9.4
1961	10'420,357	1'901,927	18.3
1972	14'121,564	3'418,452	24.2
1981	17'762,231	4'835,793	27.2
1993	22'639,443	6'434,323	28.4

Fuente: INEI, *Lima Metropolitana, perfil sociodemográfico*, 1996.

En el lapso de medio siglo, la ciudad de Lima creció sostenidamente hasta albergar alrededor de 6.5 millones en 1993. De acuerdo al Censo de 1993, el 38.8% de la población total metropolitana era de origen migrante.

En 1961, 22 de cada 100 jóvenes vivían en Lima, mientras que en 1981 la cifra se eleva a 31. En cambio, sólo 27 de cada 100 habitantes de todas las edades residían en esta ciudad. Observamos, igualmente en 1993, que el Cono Este albergaba 46.1% de la población de Lima Metropolitana, seguida por el Cono Sur con 27.3% y el Cono Norte con 26.6%.

Las anteriormente denominadas barriadas (rebautizadas como «pueblos jóvenes» por Belaunde y luego como «asentamientos humanos» por Velasco), han pasado por diferentes procesos de reconocimiento y hacia 1990, cerca de la mitad de los siete millones de habitantes limeños vivía en ellas. Su peso demográfico es significativo: Para el caso de Lima Metropolitana, en 1961 unas 316 mil personas vivían en las barriadas, 17% de la población total. Se calcula que en 1970 un tercio de los entonces 3.5 millones de limeños vivía en asentamientos humanos. Para 1981, casi un tercio de la población limeña vivía en ellos (1.5 millones) y estimados realizados una década después calculan entre 3 y 3.5 millones las personas que viven actualmente en ellos, casi la mitad de la población total de la capital.

Lima Metropolitana 1940 -1993: Evolución de la población en los Pueblos Jóvenes			
AÑOS	LIMA METROPOLITANA	POBLACIÓN DE PPJJ	% LIMA
1956	1'397,000	119,886	8.6
1961	1'845,910	316,829	17.2
1970	2'972,787	761,755	25.5
1981	4'608,010	1'171,800	25.5

1993	6'434,323	3'500,000	35
------	-----------	-----------	----

Fuente: INEI, Lima Metropolitana, perfil sociodemográfico, 1996.

Mientras en 1940 existían en la provincia de Lima 23 distritos, 15 de los cuales conformaban el casco urbano de la ciudad y el resto la periferia, el censo de 1961 registró 7 distritos adicionales, cuatro de ellos producto de la creación de balnearios y tres de la subdivisión de distritos existentes por la presión del crecimiento urbano (Breña, Surquillo y San Martín de Porres). Durante los años setenta Lima conoce su mayor crecimiento periférico, creándose nuevos distritos a partir de la formación de barriadas en los Conos Norte (Comas e Independencia), Sur (Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores) y Este (El Agustino) Así, el censo de 1981 registra ya un total de 39 distritos en Lima Metropolitana, aumentando a 43 para el censo de 1993, producto de la expansión física de la ciudad y la subdivisión de antiguos distritos.

Mientras en 1972 el distrito más poblado era el Cercado de Lima, con 354,294 habitantes, para el censo de 1981 el distrito con mayor población fue San Martín de Porres, con 404,856 habitantes, y para el censo de 1993 el distrito que registra en términos absolutos la mayor cantidad de habitantes es San Juan de Lurigancho, con 591,213 habitantes. Se observa, siguiendo las tasas de crecimiento en el período 1981-1993, que los distritos con tasas negativas de crecimiento son los que se encuentran en el área antigua de la ciudad, en tanto que los distritos que han sido reconocidos en las últimas tres décadas luego de haber tenido altas tasas de crecimiento se han estabilizado alrededor del 5%, aún cuando distritos populares como San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Pachacamac superan este promedio.

La ciudad cambió radicalmente y terminó por definirse el carácter mayoritariamente cholo del rostro urbano como resultado de la progresiva migración interna que convirtió al Perú en un país completamente distinto en menos de cincuenta años. Esta población inmigrante, conjuntamente con pobladores de tugurios y callejones, es la que organiza invasiones de tierras en las afueras de la capital, construyendo viviendas precarias y luchando por obtener servicios básicos.

Se gestan así múltiples organizaciones al interior de las barriadas, que variarán en su conformación y sus objetivos a lo largo de los años pero serán objetivo central de la actividad subversiva en Lima, donde la combinación de la crisis económica y el colapso de los mecanismos mediadores tradicionales entre Estado y sociedad colocan el telón de fondo sobre el cual el PCP-SL, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las Fuerzas del Orden realizan sus acciones organizativas y operativas en Lima, especialmente después de 1988.

1.5.1.2. Economía y pobreza urbana

La población migrante residente de las barriadas representaba en 1950 el 10% del total de área urbana de la capital, pero en 1980 era ya el 50%. A mediados de los ochenta, el 80% de la

extensión de Lima se hallaba ocupada por barriadas, tugurios y barrios populares, correspondiendo el restante 20% a los barrios residenciales de la clases media y alta. Así, la población de las barriadas, casi nula en 1940, llegaba a 110,000 en 1956 y bordeaba los dos millones en 1987, con una tasa de crecimiento medio anual de aproximadamente 9.8% entre 1956 y 1987. Este crecimiento no fue homogéneo, ni mucho menos planificado, pero se observa que hay un progresivo incremento de la pobreza urbana pues si en 1970 sólo el 37% de los pobres residían en las ciudades, hacia fines de los ochenta más de la mitad de los pobres serían urbanos. Los pobladores, en el esfuerzo por sobrevivir, generaron diversas formas organizacionales para enfrentar colectivamente problemas básicos de alimentación, salud, etc.

En el período de 1972 a 1981 se registra un incremento de la población urbana del 5.2%, pero dicho crecimiento no está acompañado de un crecimiento económico. Los trabajadores asalariados reducen su ingreso de 48% del ingreso nacional en 1963, a 35% en 1989, mientras los empresarios y rentistas aumentan su ingreso de 24% a 44% en el mismo período. La precariedad de las condiciones de vida se agudizan en el período de 1982 a 1993, el derrumbe de la economía llega a reducir a la mitad a la clase obrera industrial, aumentando drásticamente el sector informal de 31% en 1983 a 42.2% en 1990.

Evolución de la PEA Total e Informal en Lima			
Metropolitana: 1980-1990 (en %)			
SECTORES	1983	1986	1990
Sector Formal	54.0	49.3	45.4
Sector Informal	31.0	39.5	42.2
Trabajador del hogar	6.0	5.8	4.6
Desempleados	9.0	5.3	7.6

Fuente: Joseph (2001:54).

Si bien existe relación entre el cambio demográfico y la expansión de la informalización de la economía, podemos observar que las desigualdades en la distribución del ingreso no sufren mayor variación, al punto que el ingreso per cápita creció poco más de 1% anual entre 1890 y 1975, a nivel nacional. En este lapso de tiempo se produce el afianzamiento del protagonismo del Estado en las políticas de desarrollo e integración social, que alcanza su mayor expresión durante el gobierno militar de Velasco y el gobierno populista de Alan García.

Como dijimos, la migración interna dio inicio a la formación de barriadas precarias alrededor de la ciudad, proceso que se remonta a la invasión del cerro San Cosme en 1946, seguida meses más tarde por la de San Pedro y el año siguiente por la de El Agustino, a pesar de una fuerte represión estatal que finalmente se convertiría en una ambigua tolerancia, como en los casos de Ciudad de Dios y La Libertad en los 50's (posteriores Conos norte y sur, respectivamente), que en

los setentas representarían el 47.2% de la población de las barriadas con 316,204 habitantes. A la vez, a lo largo de la Carretera Central y cubriendo parte de los distritos de Lurigancho y Ate Vitarte, se desarrolla alrededor de antiguas fábricas textiles la tercera zona industrial de Lima, constituyendo de esta manera un nuevo polo de atracción para la población obrera.

1.5.1.3. Organizaciones barriales y políticas en la ciudad

Para entender el papel que representaban los denominados «cinturones de miseria» para los planes subversivos, hay que considerar además que, a partir de 1981, los municipios asumen todo lo relacionado con los asentamientos humanos, y con su integración a la dinámica distrital, otorgando a los gobiernos locales una importancia política sin precedentes.

Así, los nuevos estratos poblacionales adquieren importancia en tanto población electoral, lo cual se evidencia comparando los registros electorales entre 1963 y 1985.

Lima 1963 – 1985: Población electoral de los distritos más pobres en relación a Lima (%)						
AÑO	1963	1978	1980	1983	1983	1985
%	8.5	22.0	27.82	27.82	29.52	43.44

Fuente: Tuesta (1989:22)

En 1983, año en que se realizaron las últimas elecciones con el viejo registro de 1962, los distritos de Cercado, La Victoria, San Martín de Porres, Rímac, Breña y Miraflores representaban la mitad del electorado limeño. En 1984, el desplazamiento del electorado hacia las zonas más pobres se hace evidente, al punto que la población electoral se duplica en los casos de Ate, Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, etc. por lo cual los distritos populares no solo son social y demográficamente importantes, sino que adquieren una importancia política y electoral que sirvió de base de apoyo importante a la izquierda peruana que participó en las elecciones entre 1978 y 1986.

En el ciclo de violencia iniciado en 1980 en los doce distritos limeños con población de menores ingresos, la izquierda y el partido aprista, alternativamente, consiguen el mayor porcentaje electoral. El desarrollo de esta tendencia será el telón de fondo de la estrategia subversiva de los ochenta en la ciudad de Lima, por lo que conviene precisar los escenarios que surgen en la capital, a partir de su evolución como «barriadas» y «nuevos distritos», y el papel que llegan a representar en la estrategia político militar de los diferentes actores presentes en la capital, en el contexto de la agudización de la crisis económica de los ochenta.

Los diferentes gobiernos que se suceden desde 1948 hasta 1968, se mostraron incapaces de resolver los problemas de vivienda, de atención de servicios, de generación de empleo, motivando

las crecientes movilizaciones populares en un nuevo espacio de lucha política. En el contexto del gobierno militar, las movilizaciones tienden a generalizarse. Un buen ejemplo data de marzo de 1976 cuando los pobladores de Ate-Vitarte se movilizan en apoyo a los trabajadores de la Fábrica FAM; o la marcha de los pobladores de Villa El Salvador hacia el centro de Lima, solicitando el nombramiento de profesores. Podemos agregar otros ejemplos como las movilizaciones contra el SINAMOS y las municipalidades en Independencia y Collique, o las protestas contra las empresas que prestaban servicios de agua, luz y saneamiento en Comas y el Cono Sur; o contra los proyectos de remodelación del Ministerio de Vivienda en El Agustino, el Callao y San Martín de Porres, etc.

En estos años las movilizaciones articulaban los intereses de los pobladores de barriadas con las reivindicaciones del movimiento obrero, frente a cuyas movilizaciones el gobierno decreta el Estado de Emergencia en la capital, mientras a lo largo de 1976 se producen nueve ocupaciones de terrenos en el área metropolitana. El Paro Nacional del 19 de julio de 1977 demostró la unidad entre el movimiento obrero y barrial, con participaciones intensas aunque espontáneas de los pobladores (se estima que el 43% de los pobladores de barriadas eran obreros). El paro del 22 y 23 de mayo de 1978 demostró también la fuerza e importancia del movimiento barrial, con una participación mucha más organizada que en 1977, convirtiéndose las zonas norte, sur y este de Lima en campos de batalla, cristalizándose luego esta participación en el apoyo mayoritario que obtienen las listas de izquierda en las elecciones para la Constituyente y posteriormente las elecciones municipales. En 1978 se organizan los Comités de Coordinación y Lucha barrial, que luego constituyen la Confederación Nacional de Pueblos Jóvenes y urbanizaciones populares del Perú, bajo la iniciativa del PC Unidad. En este contexto, el Estado transfería los problemas de las barriadas a las municipalidades, mientras los pobladores de las barriadas apoyaban activamente la huelga de los maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Sin embargo, tras el fracaso del paro convocado en enero de 1979, la crisis económica genera una desmovilización que es aprovechada por el gobierno para establecer una nueva política estatal, a través del DL N° 22612 del 25 de julio de 1979. Los meses siguientes serán escenario de la conformación de la Central General de Pobladores del Perú, así como una progresiva centralización del movimiento de pobladores, siendo objeto de violentas represiones, con una violencia que se agudiza en los ochenta, como durante la invasión de Huaycán el 15 de julio de 1984.

A nivel de organización popular, si bien las organizaciones surgidas en los cincuenta en torno a las necesidades alimentarias tenían un carácter asistencial bajo la modalidad de entrega de víveres por trabajo individual, con el auspicio de diversas iglesias, es a fines de los setenta y comienzos de los ochenta que, en base la experiencia femenina en la lucha por los servicios urbanos y el apoyo a las huelgas del magisterio, surgen los primeros comedores autogestionarios, en Comas, el Agustino, Villa el Salvador. Las organizaciones de mujeres se convertirán en los

ochenta en actores protagónicos en cuanto a cobertura y capacidad organizativa, con una autonomía que les permitiría participar en la política local.

En este escenario de alta politización y evidente reproducción de la pobreza, el PCP-SL define su accionar en la ciudad como complemento necesario de la guerra popular. La estrategia final del PCP-SL en las ciudades se proponía la conformación del Frente Revolucionario Democrático Popular (FRDP), que aglutinaba a los diferentes organismos generados y era el centro de resistencia y eje del Movimiento Revolucionario Democrático Popular (MRDP), que debía crearse en el campo.

Para comprender esta estrategia es preciso reconstruir los antecedentes del período de violencia política en tres aspectos centrales:

- a. Radicalismo en los distritos limeños antes de los ochenta
- b. Disputas al interior y alrededor de los movimientos populares
- c. Importancia de Lima Metropolitana para el PCP-SL y el MRTA.

1.5.1.1.3.1. Radicalismo en los distritos limeños antes de los ochenta

Tras la escisión de Bandera Roja en 1967, la facción roja del «Comité regional José Carlos Mariátegui» (CRJCM), liderada por Abimael Guzmán, realiza una serie de actividades y sesiones plenarias en Lima. En 1973, el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) de Huamanga (integrante del CRJCM), imprime una serie de volantes que circulaban clandestinamente en las universidades de Huamanga y de Lima, en cuya portada aparecía el perfil de Mariátegui, seguido por el lema: «Por el Sendero Luminoso de Mariátegui» (Ver estudio de N. Manrique- CVR sobre el PCP-SL).

En su historiografía oficial partidaria, el PCP-SL reconoce que los años 1970 y 1971 fueron los más difíciles para el Comité Regional de Ayacucho, debido a la persecución policial y al «aislamiento con las masas». En 1973 aparecen el Centro de Trabajadores Intelectuales Mariateguistas (CTIM), el Comité Femenino Popular (CFP), que pasa a llamarse Movimiento Femenino Popular (MFP), y el Centro de Auto educación Obrera (CAO), este último encargado de difundir en Lima los principios del sindicalismo clasista entre los trabajadores de diversas ramas de la industria, extendiendo sus redes al trabajo con los mineros de La Oroya. La lucha por el partido había concluido y se trataba de reforzar el trabajo con los frentes sindicales, campesinos, secundarios, intelectuales y femeninos. Para ello, en 1974 el PCP-SL se plantea «retomar el camino de Mariátegui», dando inicio al IV Pleno del Comité Central, coincidente con los aniversarios del nacimiento de Mariátegui y de la revolución china de Mao Tse Tung. En junio del 75 empieza la reconstitución del partido, incorporándose nueva militancia y replanteándose el desarrollo de la guerra popular en la ciudad.

Mientras algunos proponían trabajar con el movimiento sindicalista, otros pedían centrarse en el trabajo con las barriadas. Cuando aparece esta contradicción dentro del Comité Regional, Guzmán opta por realizar la Convención del Comité regional «14 de junio» en Lima, en el distrito de Comas (Urbanización San Agustín), reunión en la cual cambia su seudónimo de «Álvaro» a «Gonzalo». En dicha reunión, Guzmán enfatiza que el trabajo en la ciudad debía adecuarse a la del campo para iniciar la guerra popular, creándose el Comité Metropolitano (conocido como «Metro») en Lima, con el objetivo de convertir la capital en centro de expansión, caja de resonancia del Partido y base de toda organización a nivel nacional. En 1988 el Metro estaría conformado por un total de cinco Comités Zonales (Este, Oeste, Centro, Norte y Sur).

En mayo de 1976, la primera célula obrera del PCP-SL volantea en diferentes distritos de la capital, mientras que en medio de pugnas internas se desarrolla en Lima la XIII Convención del Comité Regional «14 de junio», donde se acordó que el Movimiento Femenino Popular y el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), así como la primera célula obrera del Centro de Auto educación Obrera, se conviertan en base social para la reconstrucción nacional, con miras hacia la guerra popular. Se empiezan a crear puntos de apoyo para el trabajo zonal y se analiza el papel que iban a cumplir las ciudades en función del campo, tomando como base los barrios, barriadas y como directriz, la clase obrera.

Desde antes de los ochenta hubo una actividad organizativa clandestina del PCP-SL en varias universidades estatales y sindicatos (en especial el SUTEP). Por su parte, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), surgirá de la unión entre el Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista (PSR), con el Movimiento de Izquierda Revolucionario-El Militante (MIR-EM), en 1982. En ambos casos, se subestimó la presencia de los grupos radicales en la capital, por considerarlos parte de un movimiento de estudiantes provincianos marginales, desvinculados de las grandes movilizaciones populares y sindicales, o simplemente como grupos radicalizados sin ninguna capacidad de convocatoria mayor. Cabe resaltar que tanto los grupos de izquierda, que optaron por la vía electoral, como las mismas fuerzas del orden, prestaron poca atención a esta actividad clandestina, siendo clara muestra de ello la liberación de Guzmán durante el paro nacional sindicalista de fines de los setentas.

La proliferación de grupos radicales al interior de las universidades entre los años setenta y ochenta fue de la mano con la reducción del gasto público en la educación y la masificación de la demanda universitaria, y con el interés del PCP-SL en captar cuadros tanto de las universidades públicas, especialmente San Marcos, La Cantuta y la UNI, cuanto al interior de las barriadas limeñas.

1.5.1.1.3.2. Disputas al interior y alrededor de los movimientos populares

Entre el surgimiento y el fracaso de las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1965, y el golpe militar de octubre de 1968, la izquierda peruana sufrió un proceso de fragmentación y confrontación alrededor de las llamadas «dos vías»: la vía pacífica (electoral) o la vía violenta (guerrillera) para «hacer la revolución». La diversidad de marxismos y maoísmos existentes al interior de la izquierda nos remite a la existencia de un «campo popular» en oposición al «campo reaccionario». El maoísmo de la nueva izquierda (Vanguardia Revolucionaria o el MIR) era más heterodoxo que el de las agrupaciones vinculadas al tronco del Partido Comunista (Bandera Roja, Patria Roja, y posteriormente el PCP-SL). Ello tenía una manifestación significativa en la composición de sus militancias, sobre todo al interior de las juventudes universitarias pero, por encima de las diferencias, lo que de alguna forma cohesiona la diversidad dentro del campo maoísta radical de los setenta es el peso que adquieren los fundamentos ideológicos en la percepción de la realidad nacional y mundial, así como el papel que les correspondía a las vanguardias en la transformación revolucionaria de la sociedad.

Sin embargo, las disputas internas y los sectarismos e interpretaciones dogmáticas de la realidad y de los textos marxistas-leninistas terminaron por fraccionar aún más a la izquierda, proceso que culmina en las elecciones de los ochenta, con la polarización entre opciones radicales como el PCP-SL y el MRTA, y posiciones ambiguas al interior de los partidos de izquierda.

Como se ha mencionado recurrentemente, el «Pensamiento Guía» elaborado por Guzmán redefinió la teoría maoísta de la guerra popular, planteando la tesis unitaria de cercar las ciudades desde el campo y de generar bases de apoyo revolucionarias en campo y ciudad, que serían la expresión del Nuevo Poder, y apoyo necesario del Ejército Guerrillero Popular en el cerco de la ciudad.

1.5.1.1.3.3. Importancia de Lima Metropolitana para el PCP-SL y el MRTA

El papel de las ciudades en el desarrollo de la lucha armada constituye uno de los ejes centrales de la estrategia subversiva para el objetivo final de implantar el comunismo en el país. El programa senderista, en ese sentido, contenía una serie de etapas y una serie de pequeñas revoluciones culturales. La cuestión de «las cuatro c» (camino de cercar las ciudades desde el campo) estuvo presente desde el inicio de los debates interinos del PCP-SL sobre el desarrollo de la guerra popular en el Perú.

El análisis de los documentos senderistas incautados en las intervenciones policiales efectuadas entre 1990 y 1993 por la DINCOTE revela, según Benedicto Jiménez, uno de los fundadores del Grupo Especial de Inteligencia que logró esas incautaciones, que la tarea de construir «Bases de Apoyo Revolucionarias» era central para sostener el carácter prolongado de la guerra. Todo el problema de la Guerra Popular para el PCP-SL, desde el inicio de sus acciones armadas, consistía en construir, defender y desarrollar Bases de Apoyo Revolucionarias, punto

inicial de la estrategia de las cuatro «c», y objetivo fundamental de todos los planes militares y políticos del PCP- SL.

En abril de 1980 el Comité Central del PCP-SL lleva a cabo la primera Escuela Militar en Jicamarca, Chacabayo, dirigida personalmente por Abimael Guzmán. Allí se decide iniciar la lucha armada a nivel nacional. En la clausura de esta Escuela Militar Guzmán pronuncia el discurso «Somos los iniciadores», y todos los participantes colocan sus seudónimos en la parte inferior de una bandera roja con la hoz y el martillo, en cuyo extremo anotaron: «Iniciadores ILA 80. Desarrollar la militarización del partido y llevar a cabo el boicot de las próximas elecciones de mayo de 1980».

Como es sabido, en vísperas de las elecciones presidenciales el PCP-SL irrumpe en Chuschi, en Cangallo, Ayacucho, asaltando la oficina del registro electoral, hecho que culminó con la captura de cuatro sospechosos, y fue apenas mencionado por la prensa ayacuchana y nacional. Dos semanas después, empezó una reunión del «Buró Político Ampliado» en Lima, con el objeto de hacer un balance de las acciones realizadas y preparar la guerra de guerrillas. La reunión terminó el 5 de junio, e inmediatamente se ocurrió el intento de incendio de la municipalidad de San Martín de Porras, de parte del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), organismo creado por el PCP-SL en 1976.

Cabe recordar, además, que en la reunión del Comité Central Ampliado realizada del 8 al 24 de agosto de 1980, Guzmán fue acusado de desviarse del maoísmo, y su propuesta de trasladar el escenario de la guerra del campo a la ciudad fue calificada de «hoxhista» (Gorriti 1991, Jiménez 2001, Tapia 1997). La acusación era crucialmente desfavorable al liderazgo de Guzmán, (aún no se hablaba del «Pensamiento Gonzalo» como guía de la revolución), por lo que éste se defendió señalando que la distribución en cantidad y calidad de los atentados no potenciaba a la ciudad a expensas del campo, sino que los medios de comunicación le daban mayor repercusión a los atentados en la ciudad. Sus acusadores, según Guzmán, se basaban en la propaganda burguesa y no en el análisis marxista, por lo que culmina su defensa apelando a la especificidad de la lucha armada en el Perú:

La guerra popular se aplica universalmente, según el carácter de la revolución, y se especifica en cada país, de otra manera no puede hacerse. En nuestro caso, las particularidades son muy claras. Es una lucha que se libra en el campo y en la ciudad, así fue establecido ya el año 68, en el esquema para la guerra popular. Allí ya tenemos una diferencia, una particularidad, es en campo y en ciudad. Creemos que tiene que ver con específicas situaciones nuestras. América Latina por ejemplo, tiene ciudades proporcionalmente más grandes que las que tienen otros continentes. Es una realidad de América Latina que no se puede desconocer, basta ver la capital del Perú que tiene un alto porcentaje poblacional. (Entrevista del Siglo)

Al factor demográfico, Guzmán añade significativamente un factor estratégico:

Pensamos que nuestra acción en las ciudades es indispensable y tiene que impulsarse cada vez más y más porque ahí está concentrado el proletariado y no podemos dejarlo en manos del revisionismo ni del oportunismo. En las ciudades existen las barriadas, las inmensas masas barriales. Nosotros, desde el año 76 tenemos una directriz para el trabajo en las ciudades. Tomar barrios y barriadas como bases y proletariado como dirigente, esa es nuestra directiva y la seguiremos practicando, ahora, en condiciones de fuerza popular... a qué masas apuntamos claramente se ve. De lo antes dicho se deriva nítidamente que las inmensas masas de barrios y barriadas son como cinturones de hierro que van a encerrar al enemigo y que retienen a las fuerzas reaccionarias.

La estrategia está definida y «es una especificación de la guerra popular en el Perú hacer del campo el teatro principal de las acciones y de las ciudades complemento necesario», argumento que se consolidaría en el documento «Bases de discusión», presentado en la Sesión preparatoria del Primer Congreso del PCP-SL (enero de 1988) donde por primera vez se habla del «Pensamiento Gonzalo». Posteriormente, y siendo ya hegemónico el «pensamiento Gonzalo», la línea militar del PCP-SL se especifica como guerra popular unitaria, donde el desarrollo de la guerra popular implicaba seguir el camino de cercar las ciudades desde el campo, contando con bases de apoyo revolucionarias, que eran expresión del nuevo poder y servían de apoyo al Ejército Guerrillero Popular, en un momento en el que, según la prédica del pensamiento guía, se daban las condiciones objetivas para realizar tales planes. El objetivo, en pocas palabras, era pasar de la defensa y el equilibrio estratégico, a la ofensiva estratégica y la captura del poder.

Un año después de haber tomado la decisión de iniciar la guerra, durante la IV Sesión Plenaria del Comité Central, se planifica la creación de los comités populares como «embriones del nuevo poder», potenciando al Comité Metropolitano para que actúe en la capital como «caja de resonancia». A partir de 1987 se concretizaría el Plan Piloto del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), con vías a la construcción de bases de apoyo revolucionarias, así como para la organización de paros armados en la ciudad. El MRPD es un organismo del cual Socorro Popular será el elemento principal. Socorro Popular se convertiría en aparato central del PCP-SL en 1987, militarizándose y desplazando en importancia al «Metro», en cuanto a calidad y cantidad de atentados en Lima.

En resumen, la estrategia del PCP-SL perfilará tres objetivos centrales: cercar a Lima desde los cinturones de hierro, utilizar la ciudad como caja de resonancia y generalizar el terror en todo el ámbito urbano.

1.5.2. Zonificación de la violencia

Presentamos a continuación la zonificación propuesta para entender los diferentes escenarios que se constituyen en Lima Metropolitana, de acuerdo a los Planes Militares de los grupos subversivos y el accionar de las Fuerzas del Orden que operaban en la capital.

1.5.2.1. Zona I: Este

Los distritos de El Agustino, Ate Vitarte, Lurigancho, Santa Anita, Cieneguilla, Chaclacayo y Chosica conforman la zona Este, siendo el principal eje articulador la carretera central, a lo largo de la cual se sitúan numerosas industrias. Los casos emblemáticos de penetración senderista, y de las respuestas del estado son Huaycán y Raucana, que han merecido estudios en profundidad de la CVR (Ver Estudios de la CVR sobre Huaycan y Raucana).

1.5.2.2. Zona II: San Juan de Lurigancho

Esta zona corresponde al distrito de San Juan de Lurigancho, entre el río Rímac y la cuenca del Chillón. Se trata del distrito de mayor concentración y crecimiento demográfico en el ámbito de Lima Metropolitana, al interior del cual podemos distinguir tres sub-zonas donde el conflicto armado interno tuvo mayor incidencia:

Zona Alta: Asentamientos Humanos Enrique Montenegro, Cruz de Motupe, José Carlos Mariátegui y asentamientos humanos como Esmeralda de los Andes N. 2 (Huanta 2), y en la zona intermedia Esmeralda de los Andes N. 1 (Huanta 1) formados por migrantes que viene de la zona de emergencia ayacuchana..

Zona Intermedia: Incluye Bayóvar, Huáscar, Proyectos Especiales, Arriba Perú y otros barrios.

Zona Baja: compuesta por las urbanizaciones de Tres Compuertas, Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Flores, Zarate, San Hilarión, Santa Elizabeth.

1.5.2.3. Zona III: Norte

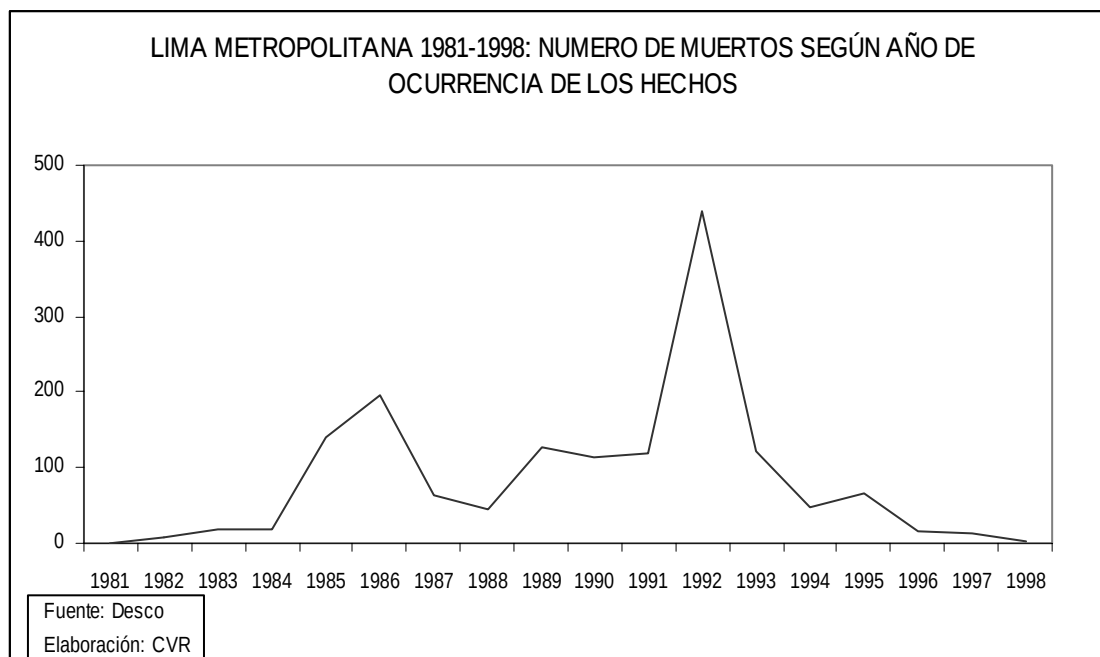
Las barriadas del Cono Norte conforman zonas de fuerte y antigua presencia de los distintos partidos de izquierda. Durante los años de la violencia se encontraban allí casi todos los grupos de izquierda que manifestaban un discurso violentista, sin que sea perceptible la hegemonía de alguno de ellos.

1.5.2.4. Zona IV: Villa El Salvador

Los distritos del cono sur son principalmente Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamac y parte de Chorrillos (Ver Estudio de Jo Marie Burt sobre VES)

1.5.2.5. Zona V: Centro

Esta zona está integrada por los antiguos barrios del Cercado, La Victoria, Rímac, Callao, Miraflores y San Isidro. Aquí concentraron el PCP-SL y el MRTA sus acciones de sabotaje y atentados contra entidades públicas y privadas en su objetivo de sabotear el funcionamiento estatal. En efecto, en 1991 entre el 60 y 70% de los atentados en Lima Metropolitana se sucedieron en estos distritos, convertidos en el blanco central de la estrategia de «caja de resonancia».



1.5.3. Periodización

1.5.3.1. La decisión de iniciar la guerra: 1980 -1984

Esta etapa se inicia el 13 de junio de 1980 cuando un grupo de aproximadamente 60 jóvenes pertenecientes al MOTC (Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas) arrojan bombas molotov en las instalaciones de la Municipalidad de San Martín de Porres. Se presume que el PCP-SL inicia sus acciones armadas en la ciudad bajo el nombre de MOTC para dar la apariencia de un movimiento popular más amplio y masivo. Meses más tarde, el 26 de diciembre, varios perros amanecieron colgados de postes de alumbrado eléctrico en el centro de Lima. Los animales tenían un envoltorio por fuera que decía: «Teng Hsiao-Ping, hijo de perra». Los símbolos que este mensaje esotérico suponía formarían pronto parte del imaginario limeño. Este período se caracteriza por los sabotajes y atentados a las instituciones del estado (ministerios, oficinas estatales) y apagones en toda la ciudad. En esta etapa, el PCP-SL supo aprovechar la estructura centralizada del país, comprendiendo muy bien que Lima serviría como caja de resonancia de sus acciones lo que le permitía una repercusión nacional e internacional que muchas veces no obtenían con su trabajo en el campo. Además, empiezan a consolidarse los núcleos de apoyo en las

universidades (San Marcos y La Cantuta principalmente), constatándose la influencia del PCP-SL (débil aún) en algunos sindicatos de la carretera central y en contadas dirigencias de barrios periféricos de la ciudad.

1.5.3.2. La transición hacia el cerco de la ciudad: 1985 – 1988

Este es un período clave, que llamamos de transición, pues comienza a configurarse el viraje posterior de las acciones del PCP- SL en la ciudad, a través de diversos documentos y volantes que definen a la ciudad de Lima como espacio «complemento» necesario en la estrategia de guerra popular. Precisamente en ese contexto es que puede entenderse los intentos de copamiento en Huaycán y Raucana, o en los sindicatos obreros de la carretera central por ejemplo

Asimismo, cambia el tipo de atentados y sabotajes, empezando los asesinatos selectivos contra dirigentes políticos, autoridades civiles y los paros armados. El PCP-SL durante este período refuerza sus actividades en las otras provincias de Lima pues bajan las acciones en Lima metropolitana y aumentan las acciones en Lima provincias. En esta etapa el PCP-SL desarrolla una batalla por copar las dirigencias barriales, sindicales y universitarias.

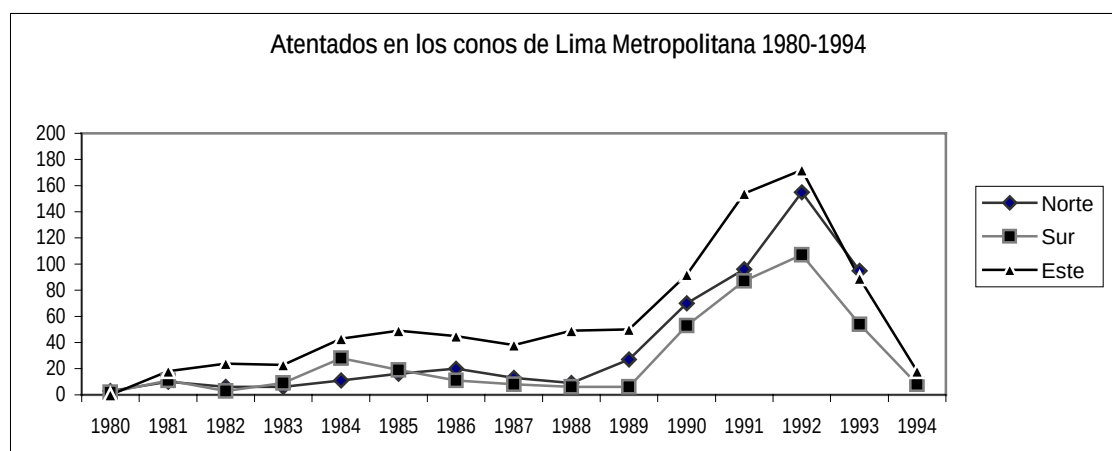
Otros hechos claves de esta etapa son la aparición del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la matanza de los penales en el Frontón en 1986, y la organización de las primeras rondas urbanas, similares en objetivo a los comités de autodefensa campesinos del sur del país.

1.5.3.3. Todos los actores, la mayor resonancia posible: 1989 –1992

Esta nueva etapa supone para el PCP-SL disputar y capturar el país tanto en términos militares como políticos, multiplicando las acciones en los conos periféricos (cinturones de miseria), así como los asesinatos selectivos a dirigentes barriales que se oponían a la infiltración y copamiento senderista. Asimismo, es el período con la mayor proporción de paros armados, y es también la época de consolidación de Huaycán, y en especial Raucana, prueba piloto de base de apoyo senderista en la ciudad.

Lima Metropolitana pasa de ser un complemento del teatro de operaciones y mera caja de resonancia a ser el teatro principal de las acciones armadas de acuerdo a las directrices del equilibrio estratégico. Se incrementan las emboscadas a patrullas policiales y ataques violentos a comisarías y otros, como el coche bomba en la calle Tarata, al cuartel de Barbones, a la embajada de EEUU, etc. El MRTA propicia igualmente atentados selectivos y pone énfasis en el decomiso de camiones con víveres que son repartidos a la población. A diferencia del PCP-SL, el MRTA

mantiene su interés por las organizaciones barriales y gremiales legales, en la cuales realiza también trabajo proselitista.



Fuente: DESCO

Elaboración: CVR

En 1989 el gobierno aprista dispuso que las Fuerzas Armadas se encarguen del orden interno en Lima y Callao, en el marco de estado de emergencia. Asimismo, en este período ocurre, en julio de 1992, la matanza de estudiantes de la universidad La Cantuta, así como el asesinato contra supuestos militantes senderistas en una pollada en Barrios Altos. Estas y otras acciones son perpetradas por el grupo paramilitar Colina. Este período culmina con la captura, en setiembre de 1992, de Abimael Guzmán.

1.5.3.4. El final de la violencia: 1993 - 2000

Con la captura de Guzmán las acciones del PCP-SL no cesaron, pero paulatinamente fueron decreciendo los atentados en la ciudad. Este periodo se enmarca en el contexto de consolidación del régimen de Fujimori que ganó credibilidad en los sectores populares de Lima. Las cartas de Guzmán por un Acuerdo de Paz, la captura de los principales dirigentes nacionales del PCP-SL y el MRTA, el viraje de la estrategia contra subversiva de las FFAA hacia acciones de inteligencia y asesinatos selectivos tipo Colina, además de la legislación antiterrorista, hicieron que se despejara la certidumbre en la opinión pública que el PCP-SL iba ganando la partida. Este período de decrecimiento de acciones armadas se interrumpe abruptamente con la toma de la residencia del embajador japonés de parte de un comando del MRTA, ultimo registro mayor de actividades subversivas.

1.5.4. Cronología Lima Metropolitana

13/06/1980	Incendian municipalidad de San Martín de Porres con bombas molotov, y arrojan volantes con lemas al PCP-SL como una organización política que ha sido reconstituida y ha dado inicio a la lucha armada. Manifestantes del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC) vinculado al PCP- SL.
14/12/1980	Atentados en 7 lugares de Lima, dinamitan embajadas y 4 agencias bancarias.
26/12/1980	Aparecen perros colgados en postes del centro de Lima, llevan carteles con la inscripción Teng Siao Ping.
5/01/1981	Primer asesinato de un policía por el PCP-SL: matan al GC Rigoberto Trigos Daza que custodiaba la casa del Ministro de Guerra / PCP-SL.
04/05/1981	Una decena de actos terroristas se registran en la madrugada en Lima, entre las 2.30 y 4 AM., causando daños materiales a propiedades del Estado y del sector privado. El más importante fue el de la voladura de una torre de alta tensión en La Tablada de Lurín que afectó el suministro de fluido eléctrico a las barriadas y poblaciones del Cono Sur.
01/08/1981	Dinamitan 4 locales AP, 3 de San Martín y Barrios Altos, 3 Juzgados de Paz y Oficina ESAL de Villa el Salvador.
31/08/1981	En la madrugada, seis atentados terroristas se producen en distintos puntos de Lima, que aparecen a todas luces como productos de un mismo plan u operativo rigurosamente planificado.
08/09/1981	En Lima se producen diez nuevos petardazos. Afectan nueve fábricas (Fábrica de Mármoles, «501», Celanese Peruana, National, Hartinger, Textil La Unión, Trébol, Bata) y el monumento en memoria del GC Patiño, que cayó en las luchas guerrilleras de Púcuta.
24/11/1981	En marcha nocturna, una turba de más de 50 personas arroja 20 bombas molotov a los gritos de «la guerrilla es el camino», destruyendo lunas de dos bancos en pleno centro de Miraflores. Una hora más tarde se produce un apagón total en toda la ciudad, debido a voladura de torre de alta tensión que transmite energía eléctrica de la Central del Mantaro a Lima.
29/03 /1982	Apagón total en Lima por espacio de dos horas.
05/07 /1982	Atacan puesto de GC en Ñaña. Mueren dos guardias y dos senderistas.
02/08/1982	Voladura de 5 torres de alta tensión provoca apagón general en Lima y Callao. Saquean Mercado Central y Polvos Azules. Atentan contra local de la Cancillería, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria y Turismo, y Palacio de Justicia.
19/08/1982	Apagón y atentados en diversos puntos de la ciudad. Un atacante muere por quemaduras. Al día siguiente se declara Lima y Callao en Estado de Emergencia.
26/12/1982	Presidente Belaunde lanza ultimátum a senderistas. El PCP-SL responde al día siguiente mediante un comunicado formal hecho llegar al enviado de El Diario. Indican que « a más represión, habrá más acciones guerrilleras».
07/02/1983	Un grupo de 15 personas armadas atacan almacenes de tienda Monterrey. Muere a balazos el vigilante Tomás Moya y el suboficial PIP Pedro Caballero queda herido.
27/05/1983	Dinamitan 10 torres de alta tensión en Lima. Durante el apagón, dinamitan 3 agencias bancarias, Sedapal, Bayer, local PIP, parque Neptuno, puesto de GC en Tahuantinsuyo. Se produce un incendio de grandes proporciones en Bayer. Iluminan el cerro San Cristóbal
22/01 /1984	En Villa El Salvador, Lima, atacan el puesto de la GC. Es la primera aparición públicamente reivindicada del Comando Armado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
24/04/1984	Presuntos terroristas ametrallan el vehículo del presidente del JNE, Domingo García Rada, dejándolo gravemente herido y causando la posterior muerte de su chofer.
16/05/1984	En el marco del quinto aniversario de la «Lucha Armada» (18 de mayo de 1980),

	elementos del PCP-SL multiplican ataques en Lima y en la zona norte del país. 20 atentados.
16/08/1984	Conferencia de prensa clandestina. MRTA señala que «no realizará acciones militares contra el APRA, mientras éste no ataque al pueblo. Continuar combatiendo a las transnacionales y a las fuerzas represivas. Toman 6 emisoras de radio y MRTA transmite pronunciamiento dado a conocer en Conferencia de Prensa.
04/10/1984	Treinta y dos reclusos del CRAS Lurigancho mueren en incendio, tras represión policial.
07/02/1984	El Gobierno declara Estado de Emergencia por 60 días en Lima y Callao.
10/02/1984	Decretan toque de queda en Lima.
18-19/06/1986	Amotinamientos en el CRAS Lurigancho (124 muertos), debelado por miembros de la Marina y la GR, en el CRAS el Frontón, Callao (150 muertos), y en el CRAS «Santa Bárbara» (3 reclusas muertas).
30/01/1987	Asesinan a César López Silva, dirigente nacional PAP, frente a su domicilio.
13/02/1987	Se produce el allanamiento a 3 universidades buscando terroristas, por parte de fuerzas combinadas de la policía. 793 detenidos y un muerto.
09/04/1987	Un grupo senderista dispara sobre un restaurante cercano al cuartel de la División Blindada en el Rímac, en cebichería «El Piano» del Rímac. Como resultado mueren dos oficiales del Ejército y cinco civiles
29/08/1987	Un grupo de senderistas asesina al presidente de ENCI, Rodrigo Franco (PAP) y a su guardaespaldas en su casa de Chosica. Hieren a su esposa y dos hijos.
01/10/1987	Asesinan a Nelson Pozo Calva, subsecretario de organización del PAP. Subversivos arrojan granadas y matan también a Edilberto Argote.
31/12/1987	Vuelan 30 torres de alta tensión del sistema interconectado del Mantaro. El apagón se sintió en varios departamentos.
11/04 /1988	Asesinan empresario Brancko Pejnovil Baigm, de la fábrica textil Hilados S.A.
01/06/1988	Asesinan a la abogada Carmen Rosa Cusquén en el Hospital Loayza. Una fracción del MRTA la acusa de delatora.
11/06/1988	Detienen en allanamiento a Osmán Morote Barrionuevo, líder del PCP-SL.
07/07/1988	Ocho integrantes de un comando selectivo del MRTA secuestran al Gral. FAP (r) Héctor Jeri García.
28/07/1988	Asesinan abogado Manuel Febres, defensor de Osmán Morote. Comando Rodrigo Franco reivindicó atentado.
19/01/1989	Convocan paro armado en Carretera Central.
13/02/1989	Asesinan Secretario General de Federación Minera, Saúl Cantoral en Canto Grande. Dejan cartel: «Así mueren los soplones, perro vendido de la huelga minera». También matan a Asistente Social, Consuelo García.
19/04/1989	Fuerzas combinadas del Ejército y la policía allanan las universidades de San Marcos y La Cantuta, detienen a más de 500 estudiantes
27/04/1989	Asesinan diputado IU Eriberto Arroyo Mío en Chaclacayo, después de dejar a sus hijos en el colegio. El PCP-SL, en comunicado de «El Diario», señala que no son autores de este atentado. Los atacantes portaban pistolas con silenciadores. Se presume de grupos paramilitares.
17/05/1989	El PCP-SL asesina al ingeniero Abelardo Ludeña Luque, militante de IU y docente de la UNI.
03/06/1989	Siete soldados del regimiento «Húsares de Junín» resultan muertos, tras un atentado dinamitero ocurrido en Barrios Altos. Como resultado de las intensas acciones policiales y del Ejército, más de quince mil personas son detenidas durante el gigantesco operativo realizado.
20/07/1989	Convocan paro armado «los trabajadores clasistas» de la Carretera Central y la Av. Argentina. Mueren 6 subversivos y cientos de detenidos. Disparan cohetes contra periodistas, toman asentamiento humano. Transportistas no laboran.
04/10 /1989	Secuestran al presidente de canal 5, Héctor Delgado Parker. Matan a su chofer. MRTA.

31/10/1989	Asesinan al dirigente textil y miembro del Comité Central del PUM, Enrique Castilla.
01/11/1989	El PCP-SL marcha por la plaza Manco Cápac. Detonan explosivos. En enfrentamiento con la policía mueren tres personas. 150 detenidos.
03/11/1989	Convocan paro armado en Lima. Atacan vehículos policiales, derriban torre eléctrica e incendian camión. Se colocan varios explosivos. En los atentados mueren 4 subversivos.
9/1/1990	El general (r) del Ejército y ex ministro de Defensa Enrique López Albújar es asesinado por un comando del MRTA en San Isidro.
Marzo 1990	Se forma un grupo especial de inteligencia GEIN al interior de la DIRCOTE con el objetivo explícito de capturar a la dirigencia del PCP-SL.
8/4/1990	Alberto Fujimori gana las elecciones con 62% de los votos.
9/7/1990	Escape de 47 presos del MRTA del penal Castro Castro a través de un túnel, incluyendo a Víctor Polay Campos y Alberto Gálvez Olaechea, dos de sus principales líderes.
Set. 1990	El diputado Gerardo López (Cambio 90) es secuestrado por el MRTA, quienes calificaron el hecho como una «invitación para conversar» y dar a conocer los lineamientos del III Comité Central del MRTA.
16/12/1990	Asesinan al diputado Cambio 90 Alejandro Victoria Mendoza, en Ate Vitarte (Lima).
11/3/1990	Lucero Cumpa, dirigente del MRTA fue recapturada en marzo de 1991 por miembros de la DINCOTE en el distrito limeño de Magdalena del Mar. El 11 de marzo, en una de las acciones más impresionantes y violentas realizadas por un comando del MRTA en Lima, Lucero Cumpa fue rescatada mientras era trasladada al poder judicial junto a la senderista Nelly Evans en una camioneta de la Policía Técnica del Perú. Hubo tres policías asesinados.
15/3/1990	Augusto Zúñiga Paz, abogado de la COMISEDH y patrocinador del desaparecido estudiante Ernesto Castillo Páez fue víctima de un atentado con una carta bomba que le amputó el antebrazo izquierdo.
29/5/1991	La población limeña sale a trabajar normalmente, pese a la convocatoria de paro armado hecha por el PCP-SL a través de su organismo de fachada el Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo.
1/6/1991	La policía captura en Pueblo Libre a seis emerretistas. El día anterior fue capturado en Jesús María Alberto Gálvez Olaechea, líder del MRTA, junto a Rosa Luz Padilla.
Junio 1991	Con acciones violentas en todo el país culmina el «mes rojo de del PCP-SL» (17 de mayo, aniversario del inicio de su guerra contra el país, al 19 de junio, día de la heroicidad o aniversario de la masacre de los penales).
3/11/1991	En Barrios Altos, Grupo Colina asesina a a 16 personas y otras cuatro son gravemente heridas
25/1/1992	Ex dirigente de Patria Libre, Andrés Sosa. es asesinado por un comando del MRTA
15/2/1992	Es asesinada por el PCP-SL la dirigente de la Federación Popular de Mujeres de Villa el Salvador y teniente alcaldesa del distrito María Elena Moyano.
5/4/1992	El Presidente Constitucional de la República Alberto Fujimori, con el apoyo de las fuerzas del orden, anuncia la disolución del Parlamento Nacional.
Abril 1992	Enfrentamiento en Raucana entre soldados del Ejército y pobladores de filiación senderista. 3 pobladores mueren baleados.
14/4/1992	Peter Cárdenas Schulte, líder del MRTA, es capturado y condenado a cadena perpetua según la ley 25475, aún no promulgada en el momento de su captura. (14 abril).
9/5/1992	Intervención policial denominada «Mudanza Uno» en los pabellones senderistas del penal de Canto Grande con motivo de trasladar a más de 100 mujeres hacia la cárcel de Chorrillos. El 12 mayo, un comunicado oficial del Ministerio del Interior, informa que 35 reclusos acusados por terrorismo resultaron muertos. Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró Político del PCP-SL, Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia

	Nila Sanabria Pacheco, Tito Valle Travesano.
12/5/1992	El gobierno publica la Ley de Arrepentimiento.
5/6/1992	Un «camión bomba» hace explosión frente al Canal 2, destruyendo sus instalaciones y matando a tres trabajadores del canal.
9/6/1992	Es recapturado en San Borja el dirigente del MRTA Víctor Polay Campos, «camarada Rolando», procesado y condenado a cadena perpetua.
16/7/1992	La explosión de un coche bomba del PCP-SL en pleno centro de Miraflores, calle Tarata, conmociona al país. Alrededor de 15 muertos.
22-23/7/1992	«Paro armado» del PCP-SL en Lima deja el trágico saldo de 8 muertos, 38 heridos, 5 coches bomba, 13 vehículos de transporte urbano incendiados y 23 artefactos explosivos.
18/7/1992	Una incursión militar en la residencia estudiantil de la Universidad Enrique Guzmán y Valle termina con el secuestro y la desaparición de nueve alumnos y un profesor de dicha universidad.
12/9/1992	El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la DINCOTE captura a Abimael Guzmán Reinoso y cúpula dirigencial del PCP-SL, en una residencia de Surquillo.
17/10/1992	Capturan a Martha Huatay Ruiz, responsable de Socorro Popular y miembro del Comité de Lima Metropolitana.
22/11/1992	Elecciones para el CCD. Clara victoria de la lista oficialista Nueva Mayoría - Cambio 90.
18/12/1992	Pedro Huilca, secretario general de la CGTP es asesinado, despertando dudas respecto a sus autores.
24/1/1993	Miembros del MRTA raptan al empresario minero David Vera Ballón. Se trata del primer secuestrado del MRTA que posteriormente es victimado.
17/5/1993	El PCP-SL convoca a un «paro armado» en Lima, desde el lunes 17 al miércoles 19. El paro es acatado por los transportistas.
Julio 1993	En Cieneguilla, se encuentran 4 fosas con restos humanos, gracias a una denuncia hecha al semanario SI. Los restos pertenecen a los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta desaparecidos en julio del año pasado.
Nov 1993	División del PCP-SL: Abimael Guzmán plantea el acuerdo de Paz y Feliciano seguir desarrollando la lucha armada (VI Plan Militar).
Dic 1993	Trescientos presos senderistas de Canto Grande adhieren a las cartas de Abimael Guzmán. Esto trajo al debate la división interna del PCP-SL, entre los «acuerdistas» y los seguidores de «Feliciano».
23/3/1995	Es capturada Margie Clavo, importante líder senderista, miembro del Comité Central de Emergencia del PCP-SL.
9/4/1995	Alberto Fujimori gana su reelección presidencial.
Nov 1995	Alberto Andrade es elegido Alcalde de Lima.
30/11/1995	Miguel Rincón Rincón, importante miembro de la cúpula del MRTA, es capturado junto a Lori Berenson, en una residencia en La Molina.
6/3/1996	Pascuala Rosado, dirigente popular y lideresa de Huaycán, es asesinada por tres elementos del PCP-SL, entre ellos una mujer.
17/12/1996	Un comando de 14 miembros del MRTA toma por asalto la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. Al final del año, luego de sucesivas deliberaciones y pronunciamientos todavía quedan 74 rehenes.
22/4/1997	La «crisis de los rehenes» termina con la intervención militar y 17 víctimas: el vocal de la Corte Suprema, Carlos Giusti, dos oficiales del Ejército y los 14 emerretistas que asaltaron la residencia.
13/10/1998	Alberto Andrade es reelegido Alcalde de Lima.
9/4/2000	Elecciones presidenciales dan triunfo turbio a Alberto Fujimori.
26/7/2000	Alejandro Toledo, convoca a una movilización de tres días (26, 27 y 28 de julio), denominada «Marcha de los Cuatro Suyos» en protesta a la fraudulenta re-reelección de Alberto Fujimori.
Oct. 2000	Alberto Fujimori viaja a Asia, desde donde anuncia su renuncia.

1.5.5. Zona I: Este de Lima Metropolitana

Los distritos de Ate Vitarte, Lurigancho (Chosica), El Agustino, Santa Anita, Chaclacayo, se encuentran localizados en las márgenes del río Rímac, siguiendo la dirección de la Carretera Central. En esta zona se ubicaron diversos asentamientos humanos, principalmente por su cercanía con la zona industrial de Ate Vitarte. En efecto, alrededor del eje vial conformado por la Carretera Central, la Autopista Ramiro Prialé y la Avenida Separadora Industrial, se conformó un importante núcleo de población obrera, precisamente el rasgo principal de la Zona Este de Lima metropolitana. Por continuidad espacial, hemos considerado en esta Zona Este también el distrito de Cieneguilla, aunque se encuentra en la cuenca del río Lurín y tiene una PEA principalmente agropecuaria.

1.5.5.1. Datos generales

1.5.5.1.1. Crecimiento demográfico

De los seis distritos que conforman la Zona Este, Ate Vitarte registra la mayor tasa poblacional y en 1993 su población era casi de 300 mil habitantes. Su explosivo crecimiento se explica principalmente por la conformación de un eje industrial a lo largo de la línea del Ferrocarril Central desde los años cuarenta y luego de la carretera Central. En 1956, el 54.3% de la población migrante residía en estos distritos. Ate Vitarte, que en 1940 era predominantemente rural (78%), se convierte en 1961 en principalmente urbano (80%), con una población cuadruplicada (pasó de 10,602 a 41,854 habitantes respectivamente). En los años cincuenta, más de la mitad de su población vivía en barriadas, principalmente El Agustino y San Pedro. A su vez se expandía la manufactura a nivel nacional, mientras grandes y medianas empresas de productos textiles, químicos, de metal mecánica, de tabaco, alimentos, plásticos, ladrilleras y maquinaria eléctrica se asentaron en este distrito.

En 1945, la inauguración del mercado mayorista de La Parada generó una nueva ola de formación de barriadas con la invasión de las laderas del cerro San Cosme en 1946, seguida meses después por las invasiones de San Pedro, y en 1947 con la barriada de El Agustino. En 1965 se creó el distrito de El Agustino, a la vez que aparecían nuevos sectores de barriadas. Destacó en este proceso el distrito de Lurigancho, que en 1967 fue dividido para crear San Juan de Lurigancho.

Las barriadas que se desarrollaron siguiendo la Carretera Central se ubicaron alrededor de antiguas fábricas textiles, constituyendo una importante zona industrial. Un proceso similar, aunque a menor escala, ocurrió en Chaclacayo, creado en 1940 y cuya población aumentó de 1,109 habitantes a 9,363 en 1961.

A diferencia de los otros distritos, Santa Anita, creado en los noventa entre El Agustino y Ate Vitarte, está conformado principalmente por zonas urbanizadas y con una población regular que registraba, de acuerdo al censo de 1993, aproximadamente 120,336 habitantes. Según este censo, Ate Vitarte registró 270,162 habitantes, seguido por El Agustino con 156,204 habitantes y Lurigancho con 101,656 habitantes.

1.5.5.2. Diferenciación distrital

La Zona Este constituyó un lugar privilegiado para los migrantes que buscaban empleos poco calificados, así como un contacto permanente con la Sierra, de donde procedía el 60% de su población. A esto se añadía la importancia de distritos como Ate Vitarte, una de las tres zonas fabriles de Lima donde se concentró gran parte de la población obrera de la capital. Esta situación fue variando con el tiempo. En 1978 se estimaba en 12% la población trabajadora que en Lima dependía del Estado; para 1981 esta cifra se elevó a 27.5%. Sin embargo, el incremento del desempleo a nivel nacional, producto de la crisis económica, generó la aparición de alternativas complementarias de ingresos a nivel informal y de organización comunal alrededor de la subsistencia. A nivel distrital se observa la reducción, entre 1972 y 1981, de la población obrera y asalariada en términos relativos. Distritos como Carabayllo y Cieneguilla, que aparecían con más del 45% de población obrera, disminuyeron su población obrera, mientras aumentó la presencia de pueblos jóvenes. En El Agustino y Ate Vitarte, mientras más del 20% de su PEA en los setenta se ocupaba en el sector industrial, en 1981 pasó a dedicarse mayoritariamente al comercio.

El caso de El Agustino es singular, pues a pesar de que su población se tornó más heterogénea y densa, mantuvo una pobreza sostenida. Es así que la tabla de pobreza utilizada en el gobierno de Alan García se basaba en los datos del censo de 1981, que sindicaban a El Agustino como el segundo distrito más pobre de Lima, sólo superado por Carabayllo. A mediados de los ochenta, El Agustino llegó a tener la mayor concentración de economía informal de Lima (63 %), ubicándose en el séptimo puesto del nivel de pobreza de la ciudad.

Chosica constituía desde el siglo pasado un lugar de residencia de invierno para las clases pudientes de la capital. Con el proceso migratorio y la conformación de barriadas y asentamientos humanos, predominaron en la zona las cooperativas y asociaciones de vivienda. En general, existió una evidente diferenciación económica y cultural al interior de la Zona Este, principalmente con la construcción de un nuevo eje vial con las avenidas Javier Prado y Circunvalación, haciendo que dichos terrenos se valoricen y fuesen adquiridos por sectores medios y altos que se concentraron en la zona oeste de Ate Vitarte, en las urbanizaciones Camacho, Ingenieros, Salamanca y lo que actualmente es el distrito de La Molina, mientras las áreas localizadas en la carretera central se caracterizaron por un mayor crecimiento poblacional y una estrecha relación laboral con el eje

industrial y comercial. Esto repercutió en las orientaciones políticas de este sector de la ciudad durante el proceso de sindicalización de los años 50 a los 70.

1.5.5.3. Contexto local y situación política

En la década de 1970, la industrialización impulsada por el modelo económico de sustitución de importaciones entró en un grave problema de crisis y desorganización, impulsando la protesta sindical. Entre 1968 y 1975 el movimiento obrero estuvo liderado por la izquierda, que en junio de 1976 propició un «Comité de Lucha de la Carretera Central» representativo de los sindicatos de la zona, realizando movilizaciones y un contundente paro de solidaridad con los trabajadores de la fábrica Nylon. Esta acción culminó en un violento enfrentamiento con las fuerzas policiales, el cierre de la carretera central por más de ocho horas y el incremento de las movilizaciones reivindicativas en toda el área Metropolitana. El gobierno decretó el Estado de Emergencia, mientras en Lima se constituyó en mayo de 1977 el «Comité de Coordinación y Lucha Barrial», que articuló el movimiento obrero y barrial en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977. En las elecciones del 18 de junio de 1978, la lista de Izquierda Unida obtuvo una alta votación en las barriadas.

Al igual que en otras zonas de la capital, el problema de la vivienda y la dotación de servicios de agua y desagüe generaron la conformación de redes clientelares, que se vieron favorecidas por la irrupción del gobierno aprista. En este contexto, durante la gestión municipal de Alfonso Barrantes, se implementó el «Programa Especial de Habitación Urbana de la zona de Huaycán», organizándose el 15 de julio la primera invasión. De esta manera, la municipalidad buscaba intervenir frente al problema de la vivienda, con una experiencia de organización urbana sustentada en la participación popular. En los noventa le tocaría el turno a Raucana, el fallido proyecto senderista de «Comité Popular abierto» en la capital.

Comportamiento electoral de los distritos de la zona Este 1978-1998

DISTRITO	1978	1980	1980	1983	1985	1986	1990	1998
Ate	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	AP	Somos Perú
El Agustino	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	IU	Vamos Vecino
Lurigancho	IU	AP	AP	IU	APRA	APRA	AP	AP
Chaclacayo		AP	AP	IU	APRA	APRA	PPC	Independiente
Cieneguilla		AP	AP	APRA	APRA	APRA	PPC	Vamos Vecino
Santa Anita								Vamos Vecino

Fuente: Tuesta (1989).

En 1980 El Agustino, Lurigancho y Ate Vitarte conformaban el grupo de distritos de mayor marginación y pobreza relativa a nivel de Lima Metropolitana, aunque sus porcentajes eran muy diferenciados, entre el 9.38% (El Agustino) y el 3.34% (Ate Vitarte).

El dinamismo del crecimiento poblacional, así como las disparidades en torno a la distribución del ingreso nacional, generaron una tensión dramática en torno a los nuevos asentamientos humanos, que en Huaycán y Raucana, e incluso en mercados y «paraditas» llegó, a manifestarse en una progresiva presencia senderista en medio del declive del sindicalismo. Por otra parte, el caso de la Cantuta, universidad pública ubicada en Chosica, nos remite al abandono estatal de la educación pública, hasta que en los noventa la política contrasubversiva generó un saldo trágico en la población estudiantil, en medio de la mayor ola de violencia que registraba la capital. Así, confluyeron diversos factores y actores en la Zona Este durante los ochenta y noventa, destacando la modificación de la PEA ocupada, el retroceso de la sindicalización y el aumento de la frustración por desempleo en sectores barriales.

1.5.5.2. Historia del conflicto armado interno

A nivel de sindicatos, el PCP-SL desarrolló un trabajo político muy activo, incluso desde antes del estallido de la violencia. Pero será desde 1987, al afirmar su concepción de «cerco a la ciudad», que el PCP-SL realizará un trabajo político más sistemático con el objetivo de copar dirigencias sindicales, para desarrollar estrategias que buscaban, en un primer momento, sabotear y desestabilizar las organizaciones sindicales, y posteriormente controlar y manipular las demandas reivindicativas, exacerbando los conflictos laborales. La ola de violencia y ajusticiamientos fue creciendo en abierto combate con las dirigencias sindicales y en alianza con los grupos más radicalizados, como los trabajadores estatales. Sin embargo, el PCP-SL no obtuvo mayores logros en el movimiento sindical, aunque sí contribuyó a su desgaste, constituyendo desde fines de los ochenta, tras el fracaso en la toma de COPE, diversos «Comités de Lucha» (CLOTCC, CLAA, etc.) que convocaron una serie de «paros armados».

Por otra parte, la crisis de la Universidad pública se acentuó al iniciar el PCP-SL sus acciones pues las universidades públicas, como La Cantuta, fueron percibidas como «nidos de terroristas». Desde fines de los ochenta y principalmente tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, cerca de un centenar de alumnos y docentes de provincias fueron ejecutados y desaparecidos por acción de grupos paramilitares y subversivos. En Lima, el ajusticiamiento de 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta tuvo una gran resonancia política, por constituir una prueba fehaciente sobre la responsabilidad de importantes mandos políticos y militares en los hechos violatorios de derechos humanos durante la guerra interna.

1.5.5.2.1. Mecanismos de captación y de legitimación

El 18 de mayo de 1982, un grupo de senderistas iluminó uno de los cerros de El Agustino con la hoz y el martillo. Este acto simbólico, conjuntamente con la voladura de torres de energía eléctrica,

fueron parte de la estrategia senderista en distritos como el Agustino y Chosica, priorizados por el PCP-SL desde el inicio de sus acciones, aun cuando las acciones principales se realizaban en las zonas rurales, principalmente en la región ayacuchana. Por otra parte, en El Agustino se formó una «escuela militar» a cargo de Laura Zambrano, mientras las acciones en Ate Vitarte se concentraron en capturar e influir en espacios como los sindicatos, donde se distinguen dos fases: una primera fase de deslegitimación de las luchas sindicales, tildando a los dirigentes de «revisionistas conciliadores», mientras buscaban captar militantes para que realicen tareas en los aparatos armados, logísticos o de inteligencia, y una segunda fase con una intensa labor de volanteo y presencia de arengas a la salida de las fábricas, combinada con una estrategia de destrucción de la infraestructura fabril, como parte de los acuerdos del I Congreso. Es el caso de Nylon, Rayón, Bata, Nissan, y otras fábricas localizadas en la Carretera Central. Lejos de desarrollar bases, los ataques e incendios de fábricas generaron el rechazo de los trabajadores, que veían mermados sus puestos de trabajo, quebrando incluso las demandas de reposición de los trabajadores de Nissan, y afectando a los trabajadores de Bata, que cerró secciones enteras como producto de los incendios.

El PCP-SL privilegió, además de los sabotajes, la confrontación, incitando a la reacción violenta de las fuerzas policiales en las marchas de huelguistas, a la vez que reforzó su trabajo político con una diversidad de modalidades, desde volanteos, asesinatos de supuestos dirigentes «traidores», copamiento de dirigencias sindicales, y convocatorias a paros armados. Con estas tácticas, las divergencias entre el PCP-SL y los trabajadores organizados se profundizaron, aunque logró captar a los sectores más radicalizados, que propugnaban la huelga general indefinida.

En el Agustino, Ate Vitarte y Chosica, tras el ajuste económico de 1991, se implementaron programas de emergencia, mientras el PCP-SL introducía la noción de «sanción ejemplar» como método de sometimiento de las dirigencias. A su vez, se presentaba como garante del orden en los mercados, obligando al control de precios y ajusticiando delincuentes. En Raucana, el mayor experimento organizativo senderista, los moradores provenían de El Agustino, donde el proselitismo senderista fue bastante temprano, así como de Andahuaylas (el contingente más numeroso), Los Ángeles, Yerbateros, Granja Azul, San Gregorio, Vitarte, Nueva Esperanza y Vista Alegre, además de un importante contingente de provincianos desplazados por la violencia en las zonas rurales, e incluso procedentes de otras zonas de Lima. La situación laboral de la gran mayoría era precaria, y su capacidad de organización muy limitada. Con ellos el PCP-SL constituyó en Raucana un «Comité popular abierto», en corazón de Ate Vitarte.

1.5.5.2.2. La lógica del paro armado

Los «paros armados» del PCP-SL formaban parte de una lógica de amedrentamiento y orquestación de acciones, con el objetivo de provocar el colapso del Estado mediante la generalización de la violencia. Estos paros armados se ubican en la tercera etapa de la violencia en

Lima Metropolitana, aquella vinculada con el desarrollo del «equilibrio estratégico». Se trataba de una acción militar que comprendía todas las otras formas de lucha senderista (agitación y propaganda, sabotajes, aniquilamiento selectivo, combate guerrillero), con un claro objetivo político: «aislar y socavar al viejo Estado mostrado su impotencia». El primer «paro armado» en Lima, con el objetivo de competir con la Izquierda Unida como proyecto político, fue realizado el 19 de enero de 1989, coincidiendo con el I Congreso de IU en Huampaní, en la carretera central. Posteriormente, las zonas priorizadas por el PCP-SL fueron los sectores ocupacionales de la capital, luego la Carretera Central, Chosica y posteriormente Canto Grande.

El paro armado como modalidad subversiva creció en importancia desde que la directiva senderista proclamó la llegada del equilibrio estratégico. Las convocatorias solían coincidir con fechas emblemáticas del PCP-SL, aunque a menudo formaban parte de campañas planificadas, con plataformas reivindicativas muy parecidas a las de las organizaciones barriales y sindicales, excepto por su apoyo a la «guerra popular». El mayor despliegue de estas acciones se desarrolló entre noviembre de 1991 y febrero de 1992, cuando el PCP-SL asesinó en Villa El Salvador a María Elena Moyano por su abierto rechazo a dicha convocatoria. Dos años después, en el paro armado convocado el 17 y 18 de mayo de 1994, el PCP-SL mezcló las amenazas con una actitud de apertura para el diálogo, acercándose a diversos dirigentes barriales de Ate Vitarte incluso con una semana y media de anticipación. El debilitamiento y repliegue senderistas, lejos del nivel alcanzado entre 1989 y 1992, se corresponde entre 1993 y 2000 con el declive definitivo de las acciones armadas en la ciudad.

1.5.5.2.3. Ensayos de organización en los asentamientos humanos

En la Zona Este, los asentamientos humanos más citados por El Diario, vocero del PCP-SL eran la zona «E» de Huaycán, la zona «F» de Horacio Zevallos, así como San Antonio y el Trébol, todos ellos ubicados en la Carretera Central. También se indicaba a los cerros de El Agustino, sobre todo en las partes altas, para oponerlas al proyecto de IU de formar «micro áreas de desarrollo».

El PCP-SL inició su trabajo de infiltración en el AH San Antonio, ubicado cerca de la Municipalidad de Ate Vitarte. Desde allí se fue extendiendo hacia el asentamiento San Gregorio, la asociación de vivienda Ricardo Palma y la cooperativa de viviendas MANILSA, mientras por otro lado logró infiltrarse en la asociación de vivienda Santa Cruz, Nuevo Vitarte, Barbadillo, la Cooperativa de Viviendas Alfa y Omega, el Asentamiento humano Micaela Bastidas I y II, y la Pro Vivienda Los Ángeles. Privilegiando su trabajo de infiltración en los grupos de origen provinciano, los moradores infiltrados llegaban de El Agustino y tenían anteriores vínculos con los comedores populares.

Los estudios de la CVR indican que, a inicios de la década de 1990, la zona en la que se ubicó el Proyecto Huaycán tenía un valor particular para la estrategia senderista de una eventual insurrección, en el contexto de su denominado «equilibrio estratégico».

Huaycán fue inicialmente concebido como un proyecto planificado del Municipio Provincial de Lima, bajo la gestión de Izquierda Unida. El 15 de julio de 1984 se instalaron cerca de 2000 familias, y en agosto ya eran 4000. Desde un inicio, el PCP-SL intentó infiltrarse en Huaycán, como sucedió por ejemplo en julio de 1985, durante el Primer Congreso Ordinario de Pobladores.

Era evidente la oposición del PCP-SL al proyecto autogestionario, y a la vez que incrementaba sus tácticas de confrontación y provocación, buscaba reforzar su trabajo político sobretudo en las zonas altas que concentraban nuevos pobladores, y a través del Comité de Electrificación, con el que llegó a controlar la zona E. En los noventa, a medida que la estrategia contrasubversiva tuvo un giro decisivo en la capital, se instaló en Huaycán una base militar, mientras se incentivaron los programas de asistencia social. En abril de 1991, durante el Segundo Congreso Estatutario de la CUAH, los senderistas fueron derrotados políticamente por los delegados, que acordaron organizarse en «autodefensa de masas» frente a la drogadicción, la delincuencia y la violencia. Como respuesta, el PCP-SL convocó a un paro armado para los días 29 y 30 de abril de 1991, e intentó sabotear las elecciones de mayo, que igual se realizaron con el apoyo mayoritario de la población, y las garantías solicitadas a la Policía Nacional. El 7 de julio la CUAH decidió crear el «Cuerpo de Autodefensa», restringido a combatir la delincuencia y la drogadicción, pero una semana después, durante una ceremonia pública, Fujimori reconoció el organismo agregándole la tarea de combatir la subversión. Esta «nueva responsabilidad» originó el repliegue de la organización, frente al acecho y ataque del PCP-SL contra las rondas urbanas y contra el comité de Autodefensa, que terminaría más tarde con la muerte de la dirigente Pascuala Rosado.

Tras su fracaso político en Huaycán, el PCP-SL parecía dispuesto a copar desde el principio las dirigencias y tener el control total del asentamiento Raucana. El 29 de agosto de 1991, El Diario escribió que el Asentamiento Raucana era uno de sus «Comités Populares abiertos», modelo de enclave que luego pudiera extenderse a toda la metrópoli. Desde su fundación, el 28 de julio de 1990, coincidiendo con el aniversario patrio y con la fecha de cambio de gobierno, y bajo el nombre de Asentamiento Humano «La Estrella», el PCP-SL intentó dirigir los destinos del asentamiento, bautizado finalmente como «Félix Jorge Raucana» en memoria de uno de los pobladores muertos durante el intento de desalojo policial.

Al parecer, el PCP-SL consideraba a este asentamiento como un comité base del Movimiento Clasista Barrial. Por ello la importancia de elaborar desde el comienzo un constante trabajo político, que mezclaba el convencimiento con la coerción. Podemos señalar entonces que el inicio de la incursión del PCP-SL en Raucana empezó con la convocatoria a pobladores

empobrecidos excedentes de otros asentamientos humanos, que son invitados a tomar el terreno ubicado al costado del fundo Barbadillo, con el único requisito para ser aceptado de censarse y tener familia. El PCP-SL comienza a organizar no sólo la defensa vecinal contra los desalojos sino casi todos los aspectos de la vida de la población, desde el problema del agua, las faenas agrarias y los comedores comunales, hasta los aspectos de salud, centralizando el abastecimiento de medicinas mediante un botiquín que controlaba directamente. Para mantener el orden interno, el PCP-SL impuso un severo código de sanciones y castigos que fueron percibidos positivamente por los pobladores.

Esta organización de la vida cotidiana en Raucana duró hasta el 6 de setiembre de 1991, fecha en que el Ejército instaló una base militar que se mantuvo hasta el 2000, militarizando y controlando socialmente la vida cotidiana entre la población, dejando graves secuelas producto de la represión sufrida por los pobladores.

1.5.5.2.4. Sindicatos

Pueden destacarse dos fases en el accionar senderista en relación con los sindicatos, que tienen su quiebre en 1987, año en que el PCP-SL inició su lucha contra la CGTP. En la primera fase, desde 1983, el PCP-SL impulsó la creación, en las ciudades, del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), como parte de la labor de «reorganización del partido» en la perspectiva del «Plan de conquistar bases», todo ello en el objetivo del inicio de la lucha armada de 1980. En sus documentos, el PCP-SL señala la importancia de los denominados «Organismos autogenerados» como ligazón entre el partido y las masas, realizando el trabajo de frente en sindicatos, federaciones, asociaciones de comedores populares, barrios y universidades. De otra parte, en el campo sindical, el denominado «Movimiento Obrero de Trabajadores Clasistas» (MOTC) fue el organismo encargado de la captación de trabajadores y del diseño de las acciones. Los primeros «sabotajes a fábricas», entre enero y abril de 1987, fueron reivindicados por El Diario, señalándolos como el inicio de ejecución del «Gran Plan para desarrollar las bases». A este diseño se incorporó el desarrollo de acciones de confrontación directa violenta y de eliminación física de empresarios industriales.

El PCP-SL optaría, en esta segunda fase, por gestar organismos propios como el Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC), acordado en abril de 1988 por un centenar de delegados de diversas bases gremiales de la Zona Este que se reunieron en Ñaña. Paralelamente, aparece en la zona una base del MRDP, destacando entre los sindicatos infiltrados por el PCP-SL, en 1989, los de Nylon, FAM, Atlas, COPE, Tabacalera Nacional, Bata, Tejidos La Unión y Pelikán.

Al fracasar la presentación abierta en elecciones sindicales a través del MOTC, el PCP-SL intenta ganar dirigencias en alianza con grupos radicales que propugnaban la huelga general

indefinida, a cuyo objeto se presentaban como independientes «camuflados» en listas sindicales, pero sufren sucesivas derrotas en las elecciones de las fábricas COPE, Motor-Perú e INRESA.

El estilo autoritario y confrontacional del CLOTCC no le permitió ganar bases sindicales significativas; peor aún, fue rechazado por las bases de los sindicatos de Atlas y Tejidos «La Unión». En efecto, el 31 de octubre de 1989, un grupo de senderistas asesinó al dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Tejidos «La Unión» en Ate Vitarte, Enrique Castilla Linares. Castilla, miembro del PUM que contaba con el reconocimiento del sector gremial, y que se preparaba para rechazar el paro armado convocado para el 3 de noviembre de ese año

Al hacerse evidentes las intenciones senderistas en el CLOTCC y el CLOCAA, el PCP-SL reapareció a través del MOTC, que en junio de 1991 inició una ola violentista contra Tejidos «La Unión», asesinando a funcionarios de la empresa. Para entonces, los paros armados en las ciudades y centros industriales no hacían más que demostrar la sobre valoración de las fuerzas senderistas, ciegamente impulsadas por la determinación de haber alcanzado el equilibrio estratégico; por ello, aunque el PCP-SL logró liderar, con tácticas de confrontación total, las luchas sindicales de COPE y Pelikan, el resultado fue la liquidación de los sindicatos, poniendo así en evidencia la divergencia total entre los intereses del movimiento sindical y los intereses del PCP-SL en la Zona Este.

1.5.5.2.5. Circuito universitario

Desde las movilizaciones por la gratuidad de la enseñanza en Huanta (1969), se establecieron vínculos entre la UNE y la Universidad de Huamanga, lo cual repercutió en el temprano interés de

El PCP-SL por La Cantuta, a partir de su reapertura en 1980 (Ver Estudio de la CVR sobre universidades públicas). Años después, dentro de los planes y visión estratégica de los subversivos para el Cono Este, la UNE fue concebida como un espacio de reclutamiento y captación de cuadros para articularlos al trabajo político en sindicatos y barriadas en la Carretera Central y zonas aledañas. El control senderista de la Universidad llegó al grado de influenciar en la administración del internado, el comedor y el servicio de transporte, aprovechando la situación de abandono estatal que padecía el sistema universitario. A esta situación se añadía la masificación que experimentaba La Cantuta, con una población estudiantil mayoritariamente procedente de provincias y de escasos recursos económicos, que veía en la universidad una opción de desarrollo personal, con un discurso marcadamente confrontacional.

El trabajo del PCP-SL tuvo fases definidas: Primero buscó obtener militantes a partir de un discurso pedagógico, absorbiendo algunos grupos estudiantiles de la izquierda más radicalizados. Posteriormente, el PCP-SL fue asumiendo posiciones abiertamente confrontacionales, hasta lograr desarticular la Federación de Estudiantes y controlar los sindicatos de docentes y trabajadores. Con el copamiento de espacios simbólicos y doctrinarios (pintas, debates, actos político-culturales),

generó una oleada represiva por parte del Estado, que tuvo su punto más alto en las intervenciones policiales de 1987, y la intervención militarizada de la Universidad desde 1991.

1.5.5.2.5. Aparato partidario del PCP-SL

La importancia de la Zona Este en los planes estratégicos del PCP-SL obligó a su Comité Metropolitano a conformar dos Comités zonales: el Comité Zonal Este, que actuaba de preferencia en las zonas del Agustino, Ate Vitarte y Canto Grande; y el Comité Zonal Chosica, que comprendía Ñaña, Chaclacayo y Chosica. Este último se desprendió a finales de 1993, conformando su propia zonal y cometiendo atentados con sus propios destacamentos. Socorro Popular, por su parte, operaba a través de la sección de Obreros, Barrios y Trabajadores (OBT) en diversas zonas en la capital, aunque consideraba la Zona Este como el eje de su accionar subversivo.

El Comité zonal Este del «Metro» se considera que era de gran importancia por concentrar el proletariado (Ate Vitarte) y por asentar la «Luminosa Trinchera de Combate» del penal de Canto Grande. En 1984, el zonal Este contaba con dos milicias, una de las cuales llegó a planificar asesinatos selectivos en la zona Centro y Norte. En enero de 1987, los mandos coordinaron el asalto a la Fábrica Nylon. A partir de 1993 surgieron problemas internos, pues uno de los miembros de la célula se dedicó a cometer asaltos en nombre del partido, para beneficio personal, mientras en Chosica ese mismo año se conformó un nuevo comité zonal, realizando diversos actos de sabotaje, explosiones, aniquilamientos selectivos y asaltos en la zona.

Desde 1993, Pedro Ruiz Canales, un trabajador de la Universidad de La Cantuta, era el responsable de un destacamento de la zonal de Chosica. Ruiz era parte del Movimiento de Artistas Populares, que actuaba dentro de la UNE, conformado mayoritariamente por músicos folclóricos. Cabe destacar además que el 22 de junio de 1991 fue detenido por el GEIN el profesor Víctor Zavala Cataño, quien tenía vínculos con la Universidad de La Cantuta desde el inicio de la guerra interna. Zavala se desempeñaba como mando militar y subsecretario de la célula de dirección de todo Socorro Popular, encontrándosele cuantiosa documentación del accionar de los destacamentos especiales y zonales del PCP-SL, entre los que se encontraban los destacamentos de la sección de Familiares.

La intervención policial en el penal de Canto Grande, entre los días 6 y 9 de junio de 1992, culminó con el asesinato de destacados cuadros de Socorro Popular. Al parecer, dicha acción fue uno de los detonantes de la ola de violencia senderista que culminó en el atentado a Tarata, el 16 de julio de 1992. Dos días después, se llevó a cabo una operación paramilitar en La Cantuta, que culminó con la ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de dicha casa de estudios.

1.5.5.2.7. Incursión de las fuerzas del orden y los grupos paramilitares

Los operativos combinados de las fuerzas del orden en los asentamientos humanos de la Zona Este ocurrieron con mayor fuerza a partir de los noventa, aunque en el caso de Huaycán los operativos policiales se iniciaron en 1987, cuando se detuvo a cerca de 300 pobladores en dos rastrillajes sucesivos. En un tercer momento, el número de detenidos llegó a 800. Los rastrillajes se realizarían intermitentemente hasta marzo y abril de 1991. Las fuerzas armadas habían elaborado un diagnóstico de la presencia subversiva en Lima, dividida en 4 sectores: Norte, Sur, Este y Oeste. El general EP César Ramal Pesantes, y luego el general EP Luis Pérez Document, tuvieron sucesivamente a su cargo los sectores Sur y Este, mientras se desempeñaban como comandantes de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), con sede en Chorrillos. En 1991 se instalaron bases militares en Huaycán y Raucana, a la vez que se intervino militarmente un conjunto de universidades nacionales percibidas como centros de adoctrinamiento e incluso de preparación militar de cuadros subversivos. Entre las universidades intervenidas se hallaba la Universidad La Cantuta.

Paralelamente, insurgían los grupos paramilitares en la escena política de la Zona Este. El 27 de abril de 1989, presuntos paramilitares asesinaron a Heriberto Arroyo Mío, diputado de IU en Chaclacayo. El 18 de julio de 1992 ocurre el asesinato de estudiantes universitarios de la Cantuta sindicados como terroristas por los agentes de inteligencia y la tropa instalada en dicha universidad.

Las bases militares instaladas en La Cantuta, Huaycán y Raucana terminaron por diluir las estrategias senderistas combinando acciones cívicas con la represión abierta, como lo ocurrido en el asesinato de estudiantes de la UNE La Cantuta.

1.5.6. Zona II: San Juan de Lurigancho

Para los fines de nuestra investigación, la zonificación de Lima Metropolitana distingue a San Juan de Lurigancho como una zona diferenciada de los distritos del Cono Este, por el hecho que fue el principal receptor de la migración interna durante los años de mayor violencia. Esta situación repercutió profundamente entre los pobladores, registrándose el mayor número de asentamientos humanos creados entre 1981 y 1993 en Lima Metropolitana.

El distrito no sólo tiene la mayor concentración y crecimiento demográfico en el ámbito metropolitano, sino que además registra un alto porcentaje de población juvenil y de familias recientemente constituidas, producto de la migración interna. Diferenciamos hasta tres zonas al interior del distrito, cada una con especificidades dentro del proceso de violencia política:

Zona Baja (60's-70's): Las Flores, San Hilarión, Zárate, Tres Compuertas, Canto Grande, San Rafael, Canto Bello, Canto Sol, Canto Nuevo, Chacarilla de Otero, Caja de Agua, Santa Elizabeth.

Intermedia (70's-80's): Huáscar, Huanta 1, Bayóvar, Proyectos Especiales, Arriba Perú, 10 de Febrero, Villa Hermosa, 9 de Octubre.

Alta (80's- 90's): Huanta 2, Enrique Montenegro, Cruz de Motupe, José Carlos Mariátegui, Santa María, Ciudad de los Constructores.

Presentaremos el panorama demográfico, económico y político de San Juan de Lurigancho, a manera de tendencias que repercutieron en la evolución del proceso de violencia, y cuyas secuelas se extienden hasta el día de hoy, en la marginación, la pobreza, la violencia cotidiana y los niveles de desarticulación social existentes en la zona.

1.5.6.1. Datos generales

1.5.6.1.1. Tendencias sociales, económicas y políticas

San Juan de Lurigancho es el distrito de mayor concentración y crecimiento demográfico de Lima Metropolitana. Su población registró un crecimiento de 12.8% anual durante las dos últimas décadas del siglo XX, pasando de 86,173 habitantes en 1972 a 260 mil en 1981. En 1986 la cifra se incrementó a 480 mil y para 1990 se calculaba en 780 mil habitantes. En 1993, San Juan de Lurigancho registraba en términos absolutos la mayor cantidad de habitantes (591,213) de los distritos limeños, y se encontraba entre los que registraban el mayor número de asentamientos humanos. Es decir, entre 1940 y 1980 su población se incrementó en 461 veces, mientras que entre 1972 y 1981 llegaron cada año 20 mil nuevos pobladores. La tasa de crecimiento promedio anual del distrito subió de 9.9% en 1961 —en que contaba con 9,456 habitantes— hasta 22% en 1972, alcanzando el 13% en 1981, con 259,390 habitantes. Ya en 1961, un 53% de la población distrital provenía de provincias. El 92% de los jefes de familia moradores de Canto Grande eran migrantes.

En sus inicios, San Juan de Lurigancho tuvo pocos asentamientos humanos importantes (Zárate, Tres Compuertas y Canto Grande), pero con el transcurso del tiempo estos llegaron a urbanizarse y constituir los principales centros poblacionales. Además, a medida que se incrementó la tasa de crecimiento poblacional, surgieron nuevos asentamientos de diferente procedencia. A inicios de los años ochenta, el distrito presentaba una gran heterogeneidad, manifiesta en una gran cantidad de invasiones, asociaciones y programas municipales de vivienda.

Durante los ochentas, las invasiones a tierras eriazas se multiplicaron, con familias que convirtieron las antiguas haciendas en sus lugares de residencia. Con la nueva ley de Municipalidades, las autoridades municipales crearon varios Programas Municipales de Vivienda, como Esmeralda de los Andes, Huanta y Cruz de Motupe. De esta manera, se sentaron las bases de una ocupación territorial que terminó rebalsando la capacidad gubernamental y municipal para atender a estos nuevos contingentes migratorios.

1.5.6.1.2. Diferenciación interna y procedencias regionales

En 1981, San Juan de Lurigancho presentaba la más alta tasa de desocupación de Lima Metropolitana (12.6%), con una PEA de 82,231 habitantes (Henríquez y Ponce, 1985), lo que correspondía al 24% del total de la población distrital, que bordeaba los 260 mil habitantes.

Podemos señalar algunos asentamientos específicos como ejemplo de la heterogeneidad de procedencias regionales. Por ejemplo, en «Esmeralda de los Andes», predominaron personas procedentes de Ayacucho, distribuidas entre Huanta I en la zona intermedia y Huanta II en la parte alta. En dichos asentamientos se concentró, principalmente entre 1983 y 1987, un importante volumen de población desplazada por la violencia política en las áreas rurales. Durante los ochenta, a nivel metropolitano, el primer contingente de desplazados procedió de Ayacucho y Huancavelica, que junto con Apurímac y Junín registraron el 86% del total de desplazados.

Lima llegó a concentrar en los noventa un 26% de la población desplazada a nivel nacional.

Similar fue el caso del AH Juan Pablo II, que se formó en 1984, cuando durante el gobierno municipal de Barrantes (IU) se promovieron los Programas Municipales de Vivienda, como los de Huaycán, Laderas de Chillón y el Arenal de Canto Grande. Los pobladores pueblan el asentamiento en 1985, bajo el aval de la municipalidad de Lima, integrándose personas procedentes principalmente de Huancayo, Huancavelica, Ayacucho y Cuzco. En esas circunstancias, se organizaron asambleas para discutir las necesidades básicas, apareciendo desde esa fecha vecinos con un lenguaje político radical.

El caso del asentamiento humano Huáscar es singular. Fue creado frente a la toma de tierras que realizaron en febrero de 1976 alrededor de 4700 familias en la margen izquierda del río Rímac, a la altura del Puente Huáscar. Se llegaron a formar en su etapa inicial hasta 13 grupos residenciales de aproximadamente 80 familias cada uno, existiendo en 1980 un total de 21 grupos.

Por último, el AH José Carlos Mariátegui surgió a raíz de una toma de tierras efectuada el 14 de octubre de 1984, por un grupo de 200 familias procedentes de los callejones tugurizados de Barrios Altos y el Callao, las cuales frente al incremento de los alquileres, se organizaron y decidieron tener sus propios terrenos en esta zona, solicitaron la lotización y el Estado, a través de ENACE, aprobó y empezó a lotizar y ubicar a los pobladores en 1986.

1.5.6.1.3. Situación política

En los años ochenta hubo una fuerte presencia de la izquierda en el distrito, sobre todo del PRT de Hugo Blanco, de Patria Roja y del PUM, principalmente en la parte media y alta del distrito. Pero las disputas entre los grupos de izquierda terminaron quebrando los intentos de unidad, dejando la posibilidad para que, en los ochenta, los grupos subversivos puedan captar a los dirigentes que se habían radicalizado con estas experiencias.

Ello explica que en 1978, con la transición y restauración del orden democrático, los resultados electorales registraran una alta votación en la zona por los candidatos de Izquierda Unida a la Asamblea Constituyente, alcanzando el 46.6% del voto del distrito y el 29.9% a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de predominar los grupos de izquierda en San Juan de Lurigancho, observamos que las orientaciones políticas de la población empezaron a fluctuar desde las elecciones presidenciales, saliendo vencedor Belaunde. También salió ganador el partido de gobierno en las elecciones municipales de noviembre, principalmente por la debilidad de la izquierda, expresada en divisiones y disputas internas.

Como sugiere Tuesta (1989), hay una relación entre pobreza urbana y la votación por partidos de izquierda, pero en San Juan de Lurigancho pareciera que los votos fluctúan de acuerdo al momento político que vive el país. En efecto, a partir de 1990 el municipio, a cargo de Zazzali (IU), estableció una relación clientelar con el gobierno de Fujimori, tendencia que se volvió predominante cuando las listas independientes se supediten al fujimorismo, ganando la opción de Vamos Vecino y su candidato Ricardo Chiroque.

Votación en SJL en elecciones municipales y presidenciales

DISTRITO	1978	1980	1980	1983	1985	1986	1990	1998
San Juan de Lurigancho	IU	AP	AP	IU	APRA	APRA	IU	Vamos Vecino

Fuente: Tuesta (2000).

1.5.6.1.4. Contexto local durante los ochenta

Las movilizaciones de fines de los setentas articularon los intereses de los pobladores de las barriadas con las reivindicaciones del movimiento obrero, frente a cuyas movilizaciones el gobierno decretó el Estado de Emergencia en la capital, al tiempo que se producían nuevas invasiones en las zonas periféricas de la capital. Como vimos en la Zona Este de Lima Metropolitana, en 1978 se lograron organizar los Comités de Coordinación y Lucha barrial, luego se constituyó la Confederación Nacional de Pueblos Jóvenes y urbanizaciones populares del Perú, bajo la iniciativa del PC Unidad. En este contexto, el Estado transfirió los problemas de las barriadas a las municipalidades, mientras los pobladores de las barriadas apoyaban activamente la huelga de los maestros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP).

Frente al abandono estatal, el empeoramiento de la situación económica, y el crecimiento poblacional, surgieron movilizaciones populares por mejores condiciones de vida. En octubre de 1980, diez mil pobladores de 10 pueblos jóvenes de San Juan de Lurigancho hicieron una marcha hasta el Congreso, exigiendo solución al problema del agua y desagüe. Lograron que los senadores pidan un «Plan de Emergencia» para Canto Grande, pero como no se efectuaron las medidas,

recurrieron a nuevas movilizaciones, siendo la mayor aquella que reunió cerca de 20,000 habitantes aproximadamente en febrero de 1981. En aquella ocasión, las fuerzas policiales reprimieron a la población, resultando heridos siete pobladores y detenidos otros diez.

Igualmente a inicios de los ochenta, la situación de marginación económica de las familias de San Juan de Lurigancho era peor que las del resto de Lima, pues alrededor de las 4/5 partes de las familias recibían per cápita menos del salario mínimo vital. Asimismo, la tasa de crecimiento de la actividad general en la PEA no aumentó, a pesar del crecimiento demográfico. La tasa de desocupación en 1981 se hallaba por encima de la tasa de las provincias de Lima y Callao: 12.6% frente al 6.7% de Lima y Callao. Según el censo de 1981, el distrito contaba con 27 pueblos jóvenes, 16 cooperativas de vivienda, 42 asociaciones de vivienda y 23 urbanizaciones, y su población juvenil representaba el 6% de la población total de Lima.

En síntesis, el contexto local era muy inestable a inicios de los ochenta, con alta precariedad económica y predominio político de partidos de izquierda, que sin embargo sufrirán el desgaste de sus propuestas por sus disputas internas, así como por el ataque de los grupos subversivos, principalmente el PCP- SL. La ingente población juvenil del distrito será una fuerte motivación para que el PCP-SL opere en este espacio. Por otra parte, los operativos policiales y los rastrellajes del ejército, efectuados en las zonas intermedias y altas, hicieron que las fuerzas del orden fueran percibidas como los desestructuradores del orden social, mientras el PCP-SL pretendía montarse sobre el vacío de poder existente para imponer un nuevo orden.

1.5.6.2. Historia del conflicto armado interno

1.5.6.2.1. La estrategia subversiva

La comprensión del proceso del conflicto armado interno al interior de las partes altas, intermedias y bajas de San Juan de Lurigancho implica reconocer diversos mecanismos (persuasivos, pedagógicos o coercitivos) de los grupos subversivos en los asentamientos humanos del distrito, particularmente en las zonas altas (como Enrique Montenegro, La Cruz de Motupe, José Carlos Mariátegui y Huanta II) e intermedias (principalmente en Huáscar, Juan Pablo II, Bayóvar y Huanta I). Una de las líneas explicativas tienen que ver con el hecho de que SL, principal actor en esta escena, desplegó una lógica de doble vía y una estrategia de legitimación como garante del orden.

El PCP-SL predominó en San Juan de Lurigancho, ejecutando acciones y atentados contra las autoridades y las escasas patrullas y puestos policiales, apuntando a debilitar la presencia del Estado en la zona, mientras buscaba incrementar su fuerza a través del sometimiento de actores claves vinculados a la educación y la cultura popular, llegando a copar la dirigencia ejecutiva del SUTE local. Sin embargo, la represión policial y militar de los noventa llevó a que muchos

dirigentes barriales, algunos de ellos vinculados al PCP-SL, fueran detenidos en operativos de rastrillaje. Cabe señalar además que en esta zona se produjo uno de los sucesos más violentos de la guerra interna en la capital, como fueron las masacres de cientos de reclusos acusados de terrorismo en los penales de Canto Grande, durante los gobiernos de Alan García (1986) y Alberto Fujimori (1992).

Según diversas investigaciones, las zonas con mayor presencia subversiva de San Juan de Lurigancho se concentraban en los asentamientos humanos de la parte alta de Canto Grande. Ubicados entre 300 a 400 metros sobre el nivel del mar, en una estratégica zona de escape, ya que por los cerros (600 metros de altura) los pobladores se conectaban con el cono norte (Comas) y la Carretera Central (Vitarte, vía Jicamarca), en una «doble vía» utilizada regularmente por los pobladores para desplazarse. La lógica del PCP-SL reproducía este uso del espacio, mientras su estrategia perseguía también dos objetivos: por un lado, el copamiento de las dirigencias vecinales, mediante amenazas y en algunos casos la muerte de quienes opusieron resistencia; por otro lado, como garante del orden social.

1.5.6.2.2. Ataques a autoridades y dirigencias barriales

Los ataques al alcalde de IU Oscar Venegas (1984-1986) vinieron de parte del gobierno aprista. Mediante el llamado Programa de Vivienda Municipal Gratuita, el Municipio intentó planificar las invasiones de las primeras oleadas de desplazados, pero el alcalde Venegas, por su procedencia ayacuchana, fue objeto de represión por el gobierno aprista, llegando a ser acusado de terrorista, fundamentalmente por su defensa de los dirigentes encarcelados durante la matanza de los penales. El alcalde fue víctima de un atentado en su consultorio médico, siendo objeto de persecución durante su segundo período (1993-1995) por el gobierno de Fujimori. Finalmente, terminó detenido, defenestrado, y su Consejo Municipal, en un principio formado por 15 regidores, terminó con tres, debido a rencillas internas entre las diferentes fracciones partidarias.

Pero es en la gestión municipal posterior de Zazzali (IU) que se manifestaron las amenazas explícitas del PCP- SL a la autoridad edil.

Respecto a las organizaciones barriales, hay que destacar que, debido a la intensificación del tráfico de lotes en el distrito, diversos pobladores se movilizaron contra las nuevas invasiones, motivo por el cual diversos dirigentes fueron acusados mediante volantes anónimos de ser senderistas. A inicios de los noventa, el PCP-SL tenía una mayor presencia en las zonas media y alta, y en algunos barrios marginales. En ese escenario, algunos dirigentes fueron asesinados por el PCP-SL, como sucedió en Juan Pablo II el 14 de setiembre de 1991, en vísperas del aniversario del asentamiento, con el subsecretario general Fortunato Collazos Crispín y el secretario de prensa y propaganda, Alfredo Aguirre Berrocal. Algunas versiones afirman que los dirigentes se habían

negado a prestar sus altavoces al PCP-SL. El grupo de atacantes fue como de veinte personas, hombres y mujeres, vestidos con ponchos.

El 27 de octubre de aquel año se produjo una movilización de repudio a los atentados, convocada por la Municipalidad. La noche anterior, los senderistas colocaron explosivos en la vía pública y en la madrugada una columna senderista se desplazó por las calles de la parte alta, intentando bloquear las pistas. A raíz de estos asesinatos se consideró este asentamiento como «zona roja», instalándose una base militar en el local comunal, que se retiró dos años después. En ese período el temor se mantuvo porque el PCP-SL había dictaminado la muerte de los que colaboraran con las fuerzas armadas, pero los pobladores no volvieron a sufrir amenazas directas.

Sin embargo, en otras zonas los asesinatos de dirigentes fueron en aumento. En abril de 1992 fue asesinado el hermano del dirigente vecinal del asentamiento humano «Esmeralda de los Andes» (Huanta); el 29 de abril fue muerto un dirigente de la asociación de vivienda «Proyectos Especiales» en la zona intermedia del distrito, y al día siguiente cayó asesinado Juan Crisóstomo Casasola Zavala, ex dirigente de la asociación de vivienda «Canto Grande» y subdirector del colegio nacional mixto Ricardo Palma. Los subversivos dejaron sobre su cuerpo un cartel que decía: «Así mueren los soplones», «Muerte a los que apoyan a las Fuerzas Armadas», «Muerte a las cabezas de las rondas urbanas». En suma, estos y otros atentados se encuadraban en la lógica subversiva de copar espacios políticos en las zonas periféricas de la ciudad. A estas acciones se le suman, por supuesto, las acciones represivas de las fuerzas del orden, que pusieron entre dos fuegos a las ya débiles organizaciones populares.

1.5.6.2.3. Características del accionar subversivo

El accionar subversivo en San Juan de Lurigancho fue una labor eminentemente política. Cabe añadir que en este distrito destacó el enfrentamiento entre Patria Roja (partido que controlaba el sindicato de maestros) con el PCP-SL, que para entonces enfilaba sus baterías hacia el control del gremio magisterial. Por lo demás, el abandono estatal manifiesto en la ausencia de efectivos y puestos policiales, así como la crisis de representatividad de la izquierda legal, brindaban condiciones para que el accionar del PCP-SL buscara legitimación a través de ajusticiamientos a delincuentes y dirigentes corruptos, amparados en un discurso moralista y justiciero. Por su parte, el MRTA se presentó esporádicamente en acciones de propaganda puntuales y aisladas, pero indiscutiblemente el actor protagónico en la zona era el PCP-SL, que utilizó, al igual que en todo el país, mecanismos de legitimación como garante del orden social. En Huáscar, el PCP-SL asesinó a dos repartidores de drogas e incluso llegó a ejecutar a una familia de delincuentes, lo cual fue percibido con simpatía por la población. Aparentemente, fue a raíz del asalto a una senderista que el partido liquidó a estos delincuentes, hecho que algunos vecinos llegaron a celebrar «con unas cervezas». También se legitimaban con un discurso moralista, apelando a la pureza ideológica de

sus miembros frente a la corrupción de autoridades y dirigentes. En el enfrentamiento entre el PUM y Patria Roja por captar las dirigencias de la Federación de Organizaciones Populares y Pueblos Jóvenes, las disputas y el sectarismo de las cúpulas partidarias de ambos partidos contrastaba con el discurso moralizador que permitió al PCP-SL captar algunos de estos cuadros dirigenciales.

1.5.6.2.4. Diferencias y similitudes entre los grupos subversivos

El PCP-SL llegó a tener mayor presencia que el MRTA en todas las zonas de San Juan de Lurigancho, a diferencia de la Zona Norte de Lima Metropolitana, donde el MRTA llegó a predominar ocasionalmente, como en el caso de Carabayllo en los 90's. Debemos destacar la importancia de Patria Roja, organización legal que mantuvo una dura disputa con el PCP-SL por el control de las organizaciones barriales, hasta que la represión policial terminó por desarticular las dirigencias de izquierda, siendo detenidos muchos de sus líderes acusados de terrorismo desde mediados de los ochenta.

Además de actuar principalmente de manera encubierta y clandestina, el PCP-SL también recurría abiertamente a movilizaciones e izamientos de bandera como formas de propaganda, así como sabotajes y actividades culturales, intentando copar las principales dirigencias que tenían presencia de izquierda. En Juan Pablo II, el MRTA llegó a manifestarse a través de una ONG que ofreció implementar una biblioteca comunal. En cambio, en Canto Chico, durante la invasión de una zona arqueológica, los dirigentes que se opusieron a dicha invasión fueron amenazados con membretes del MRTA y el PCP-SL asesinó al presunto abanderado del MRTA. Salvo estos casos, se puede afirmar que en las zonas altas e intermedias la presencia del MRTA fue nula.

1.5.6.2.5. Incursión de las fuerzas del orden y los grupos paramilitares

Los ochenta y noventa fueron en general un período difícil para los barrios marginales, golpeados no sólo por los grupos subversivos sino también por las Fuerzas del orden. En los 80's, la represión se manifestaba principalmente mediante batidas, acentuándose en los 90's con operativos de rastrillaje. La presencia de las fuerzas policiales en el distrito era prácticamente inexistente. A mediados de los 80's apenas existían comisarías en Canto Rey, Canto Grande, La Huayrona y Zárate, que con el recrudecimiento de la violencia se refugiaron en sus muros evitando salir en las noches. En esos años se ejecutaron asesinatos selectivos de policías en la vía pública. Las dos comisarías que existían en la zona intermedia de Canto Grande fueron varias veces atacadas y voladas, motivo por el cual se cerraron. Se instaló en los 90's un local de la Policía Técnica (PIP), que se hallaba más cerca de la zona baja que de la intermedia. Los pobladores afirman que la nula presencia policial permitió que las agrupaciones subversivas actuaran libremente en la zona,

mediante marchas nocturnas, visitas a mercados, volanteos e irrupciones armadas en las reuniones vecinales.

En el proceso electoral de 1989-1990, Alan García perdió popularidad, llegando su desprestigio a niveles críticos. Su popularidad, de 40% en julio de 1988 cayó hasta el 11.4% en julio de 1989. Diversos sectores pidieron la renuncia del presidente. A ello se suma el avance de las acciones del PCP-SL y el MRTA tanto en la ciudad como en otras zonas del país.

Como resultado de este avance se instalaron bases militares en Bayóvar, Juan Pablo II y, posteriormente, en Santa María. Es significativo que en Huáscar no se llegó a instalar una base militar, principalmente por la resistencia de la población.

En 1990, antes de la instalación de bases militares en San Juan de Lurigancho, predominaban las «acciones cívicas», mediante actividades de servicio a la población, como el reparto de víveres, corte de pelo y atención médica. Con el gobierno fujimorista la tendencia represiva se acentuó, por ello, nadie sabía si los asesinatos de dirigentes eran obra del PCP-SL o del gobierno. En las zonas altas de Canto Grande (Motupe, Mariátegui, Montenegro, Bayóvar, Santa María), las patrullas del Ejército aparecían de madrugada y, sin ningún comunicado, arremetían contra las casas de los pobladores. Si era la casa de un dirigente, éste era golpeado acusado de subversivo. Llegaban con una relación e intervenían sus casas, a menudo llevándose objetos de valor. Frente a estos abusos, en Huáscar se nombró una Comisión contra los rastrillajes, pero su presidente fue encarcelado junto con otros dirigentes.

En este contexto el Comando Rodrigo Franco, vinculado a personajes del Ministerio del Interior y de la Policía, comenzó a intensificar sus acciones. Muchas de sus actos fueron, precisamente, dirigidos contra los dirigentes opuestos al régimen. Así, a fines de 1989, se encubrieron los asesinatos de líderes mineros en Canto Grande atribuyéndoselos al PCP-SL cuando en realidad respondían a ese grupo paramilitar. El asesinato de Saúl Cantoral, presidente de la Federación Minera, en San Juan de Lurigancho a manos del Comando Rodrigo Franco, fue denunciado por El Diario como una muestra del genocidio del gobierno aprista, aunque aludiendo principalmente a la matanza de los penales de 1986. Los sindicatos mineros, en respuesta a los asesinatos de Cantoral, Consuelo García y Víctor López, convocaron a un paro de 24 horas, planteando la autodefensa de sus organizaciones. Pero en general el Comando Rodrigo Franco mantuvo en la práctica poca presencia operativa en el distrito, realizando pintas o enviando amenazas a dirigentes barriales y autoridades de izquierda que denunciaban la corrupción del gobierno aprista y el programa del PAIT.

1.5.7. Zona III: Norte de Lima Metropolitana

La Zona Norte de Lima Metropolitana está conformada por la mayoría de los distritos pertenecientes al denominado «Cono Norte»: Comas, Independencia, Carabayllo, San Martín de

Porres, Los Olivos, Callao Puente Piedra, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, cuya población en 1990 representaba el 21% de la población del área metropolitana..

Para la comprensión del proceso de violencia política, se ha convenido en destacar, a manera de tendencias, la evolución demográfica y la heterogeneidad socioeconómica de los distritos de la Zona. Luego se presenta el contexto local existente a inicios de los 80's, para seguidamente analizar la dinámica particular de la guerra interna en esta zona de la capital.

1.5.7.1. Datos generales

1.5.7.1.1. Concentración y crecimiento poblacional

Según el censo de 1993, el Cono Norte era el más poblado de los conos de Lima Metropolitana, siendo el tamaño de su población (1'524,252 habitantes) equivalente a la suma de las tres ciudades con mayor población del Perú después de Lima (Arequipa, Trujillo y Chiclayo). Además, el Cono Norte ocupaba la menor área urbana, siendo por ello la zona más densa de Lima Metropolitana.

Dentro de esta mayor concentración y densificación destacan distritos como San Martín de Porres y Comas. Según el censo de 1981 el distrito más poblado de Lima era San Martín de Porres, con 404,856 habitantes, mientras que el Cono Norte agrupaba en 1992 a 355 nuevos asentamientos humanos, correspondiendo a Comas e Independencia el mayor número, con 93 y 74 asentamientos respectivamente.

El promedio anual de crecimiento de la población aumentó significativamente en el último período censal: desde 1961 hasta 1981 su población representaba al 30% de toda la capital, con un crecimiento promedio de 39 mil personas al año. En cambio, entre 1981 y 1993, el Cono Norte registró un crecimiento de 48,605 personas al año, representado el 41.5% del crecimiento anual de la metrópoli en ese mismo período. En resumen, su ritmo de crecimiento ha sido muy acelerado, observándose que mientras la población del área metropolitana se multiplicaba por 11 veces entre 1940 y 1998, el Cono Norte multiplicaba su población 110 veces en ese lapso.

La tendencia de mayor crecimiento del Cono Norte es hacia los distritos más alejados del centro, que son también los menos densos. Sin embargo, San Martín de Porres y Comas (junto con San Juan de Lurigancho, como vimos en el capítulo anterior), fueron distritos que mantuvieron altas tasas de crecimiento poblacional, registrándose durante el período de 1981 a 1990, una tasa media anual de 4.4% en San Martín de Porres y 3.4% en Comas.

1.5.7.1.2. Situación política

Durante el gobierno de las fuerzas armadas se consolidó la presencia de la izquierda en la organización y movilización barrial, lo cual influyó en la consolidación de una identidad clasista en

los pobladores movilizados de los sectores populares. Con la apertura de un nuevo ciclo electoral en 1978, se observó que las mayores votaciones que logró Izquierda Unida en la zona fueron en Independencia, 63.8% de los votos en 1978 y el 24.09 % en 1980, en las elecciones municipales, y 49.39% en las presidenciales. Fue así que a lo largo del período 1978-1986, el voto se expresó en una distribución territorial que estuvo en función de las diferentes opciones políticas presentes en dicho período.

Votación de los partidos en los distritos más pobres de la Zona Norte
Primer lugar por distrito (1978-1998)

<i>DISTRITO</i>	<i>1978</i>	<i>1980</i>	<i>1980</i>	<i>1983</i>	<i>1985</i>	<i>1986</i>	<i>1990</i>	<i>1998</i>
Carabaillo	IU	AP	IU	IU	APRA	APRA	IU	Vamos Vecino
Comas	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	IU	Somos Perú
Independencia	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	IU	Listas Independientes
San Martín de Porres	IU	AP	IU	IU	APRA	IU	Fredemo	Somos Perú

Fuente: Tuesta (1989), Alternativa (2002), Cuánto (2002)

Las orientaciones políticas experimentaron un giro a mediados de los 90's, lo cual se expresó en los resultados de las elecciones municipales de 1998, donde prácticamente desaparecen de escena los partidos de izquierda. El desplazamiento de las orientaciones de izquierda en el contexto de la guerra interna, constituye así una tendencia que se convertirá, a medida que los grupos subversivos demuestren un alto grado de influencia y una mayor presencia distrital, en medio del vacío político y del incremento de la crisis económica.

1.5.7.1.3. Contexto local

Durante los años 80's hubo una mayoritaria presencia de autoridades de izquierda en la zona, en un contexto atravesado por tres factores fundamentales: la profundización de la crisis económica; la informalización de la economía y la agudización del conflicto armado interno.

Como respuestas a la crisis económica, las organizaciones barriales conformaron Coordinadoras de carácter distrital, integrándose en Centrales de ámbito metropolitano y nacional. Se inició un proceso de politización partidaria, por el cual se desgastaron las organizaciones territoriales y cobraron auge las organizaciones de supervivencia, como el Vaso de Leche y los Comedores Populares. A su vez, la violencia política desatada con mayor intensidad en el campo, produjo nuevas olas de inmigrantes en la capital, quienes invadieron las faldas de los cerros aledaños, ocupando territorios eriazos y aprovechando los servicios existentes, ocasionando su progresivo deterioro.

A esto se suma la importancia demográfica de distritos como Independencia y San Martín de Porres, con lo cual tenemos un contexto local comercialmente dinámico y políticamente estratégico, por la densidad poblacional existente y su repercusión en las ofertas electorales de los partidos, que durante los 80's serán uno de los actores más afectados por el accionar de los grupos subversivos, registrándose un incremento de asesinatos de alcaldes de distintas tendencias, así como de dirigentes de izquierda. No hay que olvidar que el MOTC (Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas) creado por el PCP-SL, tuvo una de sus primeras incursiones en San Martín de Porres, provocando el incendio de la municipalidad el 13 de junio de 1980.

1.5.7.2. Historia del conflicto armado interno

Aunque el PCP-SL no fue el único actor, destacó notablemente en el desarrollo de la historia del conflicto armado interno en la zona, principalmente frente a su principal rival, el MRTA. El PCP-SL desarrolló básicamente una estrategia de infiltración y amedrentamiento, a través del sabotaje y ataque sistemático a las autoridades locales y a los representantes del Estado, accionar que se intensificó a mediados de la década de 1980, cuando se preparaba el cerco a la ciudad (1985-87). Los asesinatos selectivos se expandieron a inicios de la década de 1990, abarcando dirigentes barriales y vecinales, combinando los grupos subversivos estrategias de tipo persuasorio con otras propiamente coercitivas (1991-93). Con este tipo de atentados, el PCP-SL buscaba debilitar políticamente la presencia del Estado, creando un clima de terror y zozobra en la población civil, todo esto en el marco de su concepción de «equilibrio estratégico». A la vez, el PCP-SL iba construyendo un frente de apoyo en la zona, a partir de organismos generados como el MOTC, y de aparatos centrales como Socorro Popular y el Comité Zonal Norte del «Metro». Por otra parte, los agentes del Estado se concentraron en reprimir duramente a la población, principalmente los desplazados por la violencia en el espacio rural. Por circunstancias de ubicación geográfica, en este escenario ocurrió la muerte de Pedro Huilca, de por sí un caso complejo que trasciende el ámbito zonal y remite a un análisis metropolitano y nacional de la violencia. Finalmente, veremos que el rechazo a la violencia por parte de los pobladores se manifestó desde diversos frentes y a través de marchas por la paz, aunque sin un apoyo sostenido, optándose por una salida pragmática, en medio del declive de las propuestas de izquierda y de los grupos subversivos. En este escenario el fujimorismo se presentó en los 90's como la única opción de orden frente a la inestabilidad política y la incertidumbre social (1992-2000).

1.5.7.2.1. Las estrategias subversivas

Se puede afirmar que desde mediados de los 80's la presencia del PCP-SL en los distritos del Cono Norte se empezó a consolidar a través de las nuevas invasiones, utilizadas como lugares de refugio

por los senderistas, los cuales se presentan como parejas o familiares en un intento de mimetizarse con la población. Los problemas de titulación entre los distritos de la Zona Norte facilitaron la invasión de las zonas altas de Comas e Independencia, y con ello esta primera forma de infiltración. Otra modalidad de ingreso fue priorizando los espacios que le pudieran permitir la expresión de un discurso radicalizado, con miras a la captación de cuadros universitarios, como fueron los distritos de Independencia o Comas.

Sin embargo, la primera acción conocida del PCP- SL en los distritos populares de Lima tuvo lugar en San Martín de Porres, cuando integrantes del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC) incendiaron la municipalidad el 13 de junio de 1980. Este distrito fue uno de los puntos urbanos en que el PCP-SL alcanzó mayor fuerza y presencia en los años anteriores a la guerra. Sin embargo, no fue únicamente el PCP-SL quien tuvo mayor presencia en una zona caracterizada por la gran predominancia de grupos de izquierda desde los años setenta, pero a través de diferentes mecanismos de captación (escuelas populares, grupos musicales, academias preuniversitarias y organismos de fachada) el PCP-SL destacará sobre los demás grupos, sobre todo a fines de los 80's e inicios de los 90's, durante las convocatorias a «paros armados» y a través de acciones de sabotaje y asesinatos selectivos, estos últimos con mayor fuerza en los 90's.

A fines de los 80's la lógica subversiva se orienta al copamiento de las dirigencias barriales de los asentamientos humanos, aniquilando a los dirigentes que se oponían a su presencia. Por su parte, las acciones del MRTA se centraron en las tomas de emisoras radiales, locales escolares y camiones distribuidores de víveres, que eran repartidos entre la población. Por ejemplo, el 8 de octubre de 1984, un grupo del MRTA tomó «Radio Comas» y propaló un mensaje por el 17º aniversario de la muerte del Ernesto «Che» Guevara. Asimismo, el MRTA tomó en dos oportunidades el mercado de Collique y de Comas. Incluso en mayo de 1984 utilizó el sistema radial del mercado de Comas para emitir proclamas subversivas durante 20 minutos, asaltando al mismo tiempo un camión de reparto de leche que fue regalada al interior del mercado. A partir de los 90's tanto el MRTA como el PCP-SL intensificaron los saqueos en los mercados de la zona, así como los asaltos a camiones repartidores.

Recordemos, por último, que en el Cono Norte hubo desde los setenta una gran predominancia de grupos de izquierda radical (Puka Llacta, UNIR Bolchevique, el Frente Patriótico de Liberación, etc), muchos de cuyos militantes se aglutinaron alrededor del Frente de Defensa de Carabayllo, movimiento territorial que buscaba resolver las reivindicaciones del distrito, y que fue saludado por El Diario, como una nueva forma de lucha barrial.

1.5.7.2.2. Ataques a municipios y autoridades

Las acciones de sabotaje y amedrentamiento de los grupos subversivos tuvieron distintos objetivos. Por un lado, los establecimientos públicos como las comisarías; y por otro, las instalaciones

municipales. En efecto, el incendio de la municipalidad de San Martín de Porres en junio de 1980, constituyó apenas el inicio del accionar subversivo en la Zona Norte. El 23 de octubre de ese año una turba de sujetos provoca el incendio del municipio de Comas bajo una granizada de bombas molotov. Posteriormente, fueron atacados los locales municipales de Comas y el Rímac (1983), la municipalidad de San Martín de Porres nuevamente (1984), el municipio de Carmen de la Legua (1989) y la municipalidad de Carabayllo (1991), además del atentado realizado por el MRTA a la municipalidad de San Martín de Porres (1990).

En Independencia también ocurrieron situaciones que afectaron la posición de las autoridades de izquierda. En dicho distrito, durante la gestión de Esther Moreno, alcaldesa de IU, fue asesinado el gobernador aprista Pedro Moreno el 19 de febrero de 1987. Dicho asesinato exacerbó la conflictividad existente en el distrito, que se remontaba a los litigios por la lotización en el asentamiento humano «Víctor Raúl Haya de la Torre», de fuerte presencia aprista. Las disputas internas desencadenaron que, a partir de 1986, cuando Izquierda Unida logró la alcaldía de Independencia, se manifestase una fuerte tensión entre apristas e izquierdistas sobre los lotes, polarizándose las opciones alrededor de la propuesta del Ministerio de la Vivienda, promovido por el gobierno de Alan García, y la propuesta del municipio aprobada por la población.

También se registra que el 28 de setiembre de 1989 un grupo de desconocidos intentó secuestrar a Humberto Paredes, militante del PUM y candidato de IU a la alcaldía de Comas, presumiéndose que hayan sido paramilitares. En 1990 el PCP-SL asesinó a José Gálvez, candidato del FREDEMO, en aquel entonces director del colegio Carlos Wiese de Comas. Vemos entonces que el PCP-SL aparece compitiendo con la izquierda y el APRA por el control de los sectores populares, pero utiliza métodos violentos que obligan al repliegue de los grupos políticos.

1.5.7.2.3. Ataques y copamiento de dirigencias barriales

Desde la segunda mitad de la década de 1980, El PCP-SL cambió su estrategia en la ciudad, pasando de los sabotajes a los asesinatos selectivos, y de la infiltración en organizaciones y movimientos sindicales y barriales a una mayor presión por el copamiento de las dirigencias. En efecto, durante el gobierno aprista el accionar subversivo se orientó contra los locales del APRA, los trabajadores del PAIT (programa de empleo temporal creado por el gobierno) y los dirigentes apristas de las organizaciones barriales, situación que se intensificó tras la matanza de los penales de 1986. A fines de 1985, subversivos del PCP-SL dinamitaron los locales PAP de Comas y San Martín de Porres, y en 1987 atacaron el local del PAIT de San Martín de Porres. En noviembre del mismo año, es asesinado Samuel Colca, un dirigente aprista del pueblo joven Micaela Bastidas. Pero los senderistas no sólo se concentraron en atacar a dirigentes ligados al partido de gobierno, pues durante 1989, asesinaron a dos dirigentes de IU, Elías Corcuera, dirigente sindical en San Martín de Porres y Raúl Santiago, dirigente de Independencia.

En el distrito de Carabayllo, desde mediados de los 80's, comienzan a llegar a la zona diversas personas desplazadas por la violencia en el campo, que se instalan en las casas de sus familiares, o comienzan a invadir terrenos o a alquilar las zonas rurales. En el Frente de Defensa de Carabayllo, que empezó a funcionar a partir de 1987, y en donde se formaba políticamente a la población hubo personas ligadas tanto al PCP-SL como al MRTA, quienes repartían volantes y daban discursos.

La estrategia subversiva en Carabayllo estuvo dirigida a convertir las dirigencias barriales en portavoces de los subversivos, buscando para ello amedrentar a otros dirigentes. Los subversivos llegaron a organizar células en El Progreso y Raúl Porras, manifestándose en las organizaciones vecinales como dirigentes radicales. En esta situación, la gente distinguía su afiliación ideológica por el lenguaje que usaban, pues no se manifestaban públicamente como miembros del PCP-SL. Sin embargo, en Comas e Independencia la presencia subversiva fue más fuerte, tal es así que casi en cada reunión se informaba de nuevas actividades.

En los 90's se registra un ataque del PCP-SL al local de Cambio 90 en Comas, así como violentos enfrentamientos con armas de fuego entre grupos de pobladores durante las últimas invasiones, unidas al creciente asesinato de policías. Con esto se incrementaba la necesidad de orden y la sensación de inseguridad de las poblaciones de la zona. Si bien desde 1987 el PCP-SL buscó con mayor intensidad lograr el control de las barriadas, fue tras el «fujishock» de agosto de 1990 que estableció una tensa disputa por copar las dirigencias de los barrios populares de Boca Negra y Los Olivos. En este contexto, el PCP-SL asesinó a diversos dirigentes populares, como la coordinadora del Programa del vaso de Leche en Néstor Gambeta, Callao. Como dijimos en el capítulo introductorio, el PCP-SL estimaba que los asesinatos en la capital generaban amplia resonancia, pero la situación empeoró en 1991, cuando las amenazas se hicieron extensivas a pobladores sin cargos dirigenciales, por negarse a acatar directivas.

1.5.7.2.4. Características del accionar subversivo

Para entender las características del accionar subversivo, hay que destacar que no se generó una confrontación abierta entre los dirigentes de izquierda y el PCP-SL en la zona. Además, el PCP-SL tuvo una marcada predominancia sobre el MRTA, manifiesta principalmente con la organización de un aparato militar y político operando en diferentes distritos del espacio metropolitano.

La construcción de la presencia subversiva en la Zona Norte fue lenta pero efectiva a mediano plazo. En lo que respecta a Carabayllo, los pobladores manifiestan que en la dirigencia barrial del asentamiento humano Héroes de la Guerra del Pacífico hubo miembros senderistas, que si bien en 1991 ya no ocupaban la dirigencia continuaban residiendo en esa zona. En los 90's, con la captura de dirigentes tanto del PCP-SL como del MRTA, se percibió que las zonas de San Martín de Porres, Rímac, Comas y El Progreso, eran «dormitorios» para los cuadros medios de

Socorro Popular o el MRDP. A partir de la lectura de El Diario de 1988 a 1991, el Informativo Desco N° 6 señala que los asentamientos humanos más mencionados del Cono Norte corresponden a San Juan Bautista III (Mz. «D») en Comas, Jesús Alberto Páez, Año Nuevo, Carmen Alto, II, III, IV y V zonas de Collique, Los Olivos Pro, III sector de El Progreso de Carabayllo, Raúl Porras Barrenechea, La Flor; Néstor Gambeta, Bocanegra en el Callao; Oasis, las Esteritas I, Los Rosales en Ancón y Laderas del Chillón. Estos eran los puntos de residencia de los senderistas, mientras que otros sectores de infiltración senderista fueron el AH Cerro Camote, Villa Sol, y los sectores colindantes con la Avenida Universitaria.

1.5.7.2.5. Aparato partidario del PCP-SL

Según el Informativo DESCO N° 7, en una casa de Comas se habrían inhumado los restos de Augusta La Torre («camarada Norah»), esposa de Abimael Guzmán, aunque no se precisan fechas. Por otra parte, la captura de un comando de aniquilamiento en el Callao, en octubre de 1991, permitió acceder a una zonificación de los comandos de aniquilamiento senderista. Cada zona tenía su comando propio, con miembros que normalmente vivían en otras zonas. En la Zona Norte senderista, excepcionalmente, operaron dos comandos de aniquilamiento independientes, uno de los cuales era precisamente el que residía en la casa intervenida en el Callao.

De acuerdo a Benedicto Jiménez (2002), en lo que respecta al accionar del Comité Metropolitano en la zona, el PCP-SL conformó un destacamento conocido como «Comité Zonal Norte», que abarcaba los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos, etc. Para inicios de 1992, la célula de dirección de esta zonal fue recompuesta en una reunión en Zárate a cargo de Juan Francisco Tulich Morales (mando político) y Remigio Mercado Sangama (mando militar). La célula de dirección de la sub zonal de Comas sólo llegó a funcionar un mes, por problemas de seguridad. Sus miembros conformaron otra célula de dirección, centrando sus actividades proselitistas en el asentamiento humano Laura Caller Iberico, en Los Olivos. También realizaron incursiones dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería, en campañas de propaganda y agitación con el propósito de captar nuevos adeptos. En junio de 1992, la zonal norte entró nuevamente en reorganización, suprimiendo el cargo de mando militar, y organizando dos destacamentos y una milicia.

Muy distinto fue el accionar de Socorro Popular, aunque finalmente tuvo un destino idéntico. Con respecto a la Zona Norte de Lima, sólo en el Callao llegaron a operar 4 células obreras, 2 Movimientos Clasistas Barriales, un Movimiento Juvenil y un Movimiento Intelectual Popular, a cargo de un profesor en Ventanilla. El responsable de la sección de Obreros, Barrios y Trabajadores (OBT) y miembro de la célula de dirección de Socorro Popular, Carlos Ríos Fernández, mando político de todo OBT, fue detenido por la Marina el 22 de julio de 1992, en el asentamiento humano Bocanegra.

Por su parte, el «Ejército Guerrillero Popular» (EGP) concentró su accionar en la Zona Norte de Lima, en la Panamericana Norte, avenida Túpac Amaru, Los Olivos, etc. Los cuadros que conformaban sus destacamentos eran en su mayoría estudiantes universitarios, pero también habían obreros, desocupados, canillitas, etc. Estos últimos habían sido captados por los mismos estudiantes o por los médicos que eran parte de Apoyo Salud de Socorro Popular, para formar el aparato militar. Las acciones de esta fuerza militar abarcaban desde la propaganda y la agitación armada, hasta los asesinatos selectivos, estando siempre vinculados a la rama de medicina.

En 1993, cuando se detuvo al mando político del EGP de la Zona Norte, se tuvo conocimiento de que en dicha zona actuaban tres destacamentos del Departamento de Apoyo, en la Avenida Túpac Amaru, Panamericana Norte y Avenida Universitaria, con un total de 14 combatientes, 7 milicias populares permanentes (en el AH Barrio Nuevo, La Balanza en Comas, Cerro San Albino en Independencia, Km. 24 de la Av. Túpac Amaru, AH Ramón Castilla, Puente Piedra y Ancón) y 12 milicias populares transitorias o «en forja», lo que hacía un total de 44 integrantes.

1.5.7.2.6. Incursión de las fuerzas del orden y los grupos paramilitares

En el difícil escenario abierto por la guerra interna, las dirigencias barriales de los sectores populares se hallaron entrampadas entre la acción subversiva, la represión de las fuerzas del orden y los operativos de grupos paramilitares, cuyas acciones comenzaron a manifestarse con mayor frecuencia desde 1990. En el caso de Carabaylo, por ejemplo, se efectuaron constantes rastrellajes y operativos policiales en las zonas altas, donde se presumía de la existencia de elementos subversivos entre la población. En diciembre de 1991, en dos operativos de la Marina y uno de las fuerzas policiales, se capturaron 20 presuntos senderistas en la zona ubicada entre el aeropuerto internacional y el distrito de Ventanilla, en el Callao. En respuesta a la presencia militar y policial, en enero de 1992 los senderistas lanzaron un explosivo en una casa que la policía iba a usar para repartir alimentos entre la población, y también destruyeron un reservorio de lona para agua en un pueblo joven de Ventanilla, mientras que a fines de mes un dirigente del asentamiento Fraternidad quedó herido, tras un segundo atentado senderista contra su vida.

Es importante destacar que uno de los principales «depósitos de salud» del PCP- SL fue intervenido en la Asociación de Vivienda 2 de agosto, en la operación «Hipócrates» de la Dircote, el 26 de febrero de 1992, con el cual capturaron a diversos miembros de la célula de dirección de salud del PCP-SL, muchos de ellos estudiantes de San Marcos, capturas que fueron posibles a partir de la detención de Tito Valle Travesano, Yovanka Pardavé y Víctor Zavala Cataño, integrantes de la célula de dirección de Socorro Popular del Perú, el 22 de junio de 1991.

Los 90's, como vimos en capítulos anteriores, también fueron el escenario en que reaparecieron los grupos paramilitares en el país, responsables en la Zona Norte de cuatro

asesinatos en Carabayllo en noviembre de 1991 y otros cuatro en Comas el 6 de febrero de 1992. Es probable que el asesinato de Pedro Huilca, en diciembre de 1992, fuera ejecutado por miembros del grupo Colina. En esos días la violencia parecía declinar en lo que respecta a la cantidad de atentados, pero se intensificaban las víctimas, en medio de condiciones que muchos denunciaron como el traslado de «la guerra sucia» del campo a la ciudad, particularmente a los conos populares, con una creciente militarización del conflicto.

Como vemos, el trabajo efectivo de inteligencia de la policía no descartaba el accionar indiscriminado de las FFAA ni las operaciones selectivas del grupo Colina, pero a pesar de esta respuesta contrainsurgente, en febrero de 1992 Lima Metropolitana concentraba el 65% de las acciones subversivas en todo el país, de las cuales casi el 28% se realizaron en la Zona Norte, es decir, el segundo lugar en intensidad de actos terroristas, en momentos en que el PCP-SL convocaba a un Paro Armado para el 14 de febrero, día en que se llevaron a cabo 25 atentados, siendo el más espectacular la voladura de un camión portatropa de la policía en Comas.

1.5.7.2.7. La población frente a la intensificación de la violencia

Frente a la violencia surgieron diferentes respuestas por parte de los partidos, la Iglesia, las ONG's locales y la población. Los comités locales partidarios se manifestaron en los denominados Foros por la Vida y la Paz. La ONG CIPEP, que operaba en Independencia y Carabayllo, organizó charlas sobre la violencia conjuntamente con las parroquias y el Foro Perú Vida y Paz, en 1987. Para entonces, el recrudecimiento de la violencia también intensificó el temor en la población, tal es así que durante el Segundo Foro organizado en 1990 con el apoyo de la Conferencia Episcopal, la concurrencia fue muy limitada.

El 1 de diciembre de 1991 varias organizaciones barriales de los distritos del Cono Norte realizaron una Marcha por la paz, en rechazo de la violencia, en momentos en que el gobierno de Fujimori establecía duras medidas represivas contra la población con «rastrillajes» y operativos policiales selectivos. Fueron momentos de suma tensión para los dirigentes barriales, así como para los alcaldes distritales, ubicados en una difícil situación, entre la presión de los grupos subversivos, la necesidad de autodefensa, y una difícil convivencia con las fuerzas del orden. Al reducirse la presencia subversiva en la zona se establecieron relaciones clientelares entre los dirigentes y el fujimorismo, mientras que los partidos de izquierda perdieron influencia en la zona, y los programas de proyección social de la Iglesia no alcanzaron capacidad suficiente para abarcar toda la comunidad. La ONG Alternativa promovió Comités de Derechos Humanos en Condevilla, Naranjal y el asentamiento humano Bocanegra en el Callao. Dichas actividades buscaban reforzar las organizaciones concebidas como mecanismos de defensa frente a la violencia. También se organizaron eventos y denuncias frente a las levas forzosas, pues se generaba el temor de la población, en especial de los pobladores de Bocanegra, quienes rechazaron tanto las medidas de los

grupos subversivos como de las fuerzas del orden, aunque finalmente el grupo tuvo que retirarse frente a las crecientes amenazas contra los dirigentes de la directiva central.

Las propuestas de paz estaban orientadas a la mejora de las condiciones de vida y a la mayor participación de los jóvenes. En Los Olivos, la Pastoral Juvenil tuvo en esa medida la función de muro de contención frente al radicalismo de algunos jóvenes que acusaban a las instituciones de derechos humanos de servir de «colchón» al gobierno.

Por el lado de los dirigentes de organismos de supervivencia, no hubo en general una amenaza directa contra sus actividades, pero en los 90's la Presidenta de la Comisión Nacional de Comedores, Rosa Landaberry, se vio obligada a salir del país, en la misma época en que se capturaron diversos líderes senderistas, y se desarticuló el Frente de Defensa de Carabayllo.

Antes del autogolpe del 5 de abril de 1992, apareció un pronunciamiento de los alcaldes de Carabayllo, Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. En dicho pronunciamiento plantearon la formación de «Consejos distritales de pacificación y desarrollo con mando de poder civil».

1.5.8. Zona IV: Villa El Salvador

Este capítulo resume la investigación realizada por la CVR en Villa El Salvador (VES), incluida en los Estudios en Profundidad (Ver Estudio VES de la CVR). La historia reciente de VES representa uno de los capítulos importantes del conflicto armado interno en el Perú durante 1980 y 2000 pues se trata de un distrito especialmente reconocido por su nivel organizativo, su capacidad de autogestión y la participación de sus pobladores en la toma de decisiones locales. En este contexto, VES representó un espacio particular disputado por los grupos alzados en armas y los partidos de Izquierda Unida (IU). Para las fuerzas del orden, VES fue tempranamente designado como «zona roja», en consecuencia los pobladores soportaron operativos de rastillaje que frecuentemente significaron la detención arbitraria de cientos de personas.

1.5.8.1. Datos generales

VES fue fundada en 1971, como respuesta del gobierno militar reformista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) a una invasión de tierras organizada por migrantes recientes y pobladores de los tugurios y callejones de Lima. La invasión original de terrenos estatales fue organizada por unas doscientas familias, pero en sólo unos días, unas nueve mil familias más se plegaron a la invasión. Miles de familias recibieron tierras del gobierno en este nuevo asentamiento, que se convertiría en la vitrina urbana de la «revolución» velasquista. Los funcionarios del Estado tuvieron la tarea de transformar esta invasión en la primera comunidad urbana planificada en el Perú. Mientras los planificadores estatales supervisaban las iniciativas comunales a través del Sistema Nacional de

Movilización Social-SINAMOS, el modelo autogestionario promovido por el régimen velasquista ayudó a nutrir una red dinámica de organizaciones sociales que buscaron movilizar los esfuerzos colectivos para así mejorar la comunidad local. Se creó un organismo dirigencial central, llamado Comunidad Urbana Autogestionaria de VES (CUAVES), que supervisaría el desarrollo de la comunidad y la representaría ante el gobierno y los demás agencias externas. La Asamblea General de la CUAVES estaba conformada por los sectores de los grupos residenciales, entre los cuales se elegía un consejo ejecutivo conformado por diez dirigentes.

El derrocamiento de Velasco marcó un viraje del gobierno militar, y significó para VES la pérdida de apoyo y recursos estatales. Durante este período, VES dependía administrativamente del distrito de Villa María del Triunfo, pero no recibió los recursos o el apoyo necesario para resolver sus problemas elementales. Para llenar el vacío dejado por la ausencia de la ayuda estatal y en respuesta a la crisis económica las mujeres, por ejemplo, comenzaron a organizarse después de 1979 para satisfacer las necesidades alimenticias de sus familias a través de los comedores populares, mientras que la CUAVES, perdió su principal fuente de recursos y muchos de sus proyectos comunales se desmoronaron, como fue el caso, por ejemplo, de la caja comunal. A ello se suman las disputas faccionales entre los partidos de izquierda al interior de la CUAVES. En el contexto de la retirada del apoyo estatal, el descuido municipal por parte de las autoridades de Villa María del Triunfo y la crisis de la CUAVES, surgió un movimiento amplio por convertir a VES como distrito municipal independiente, lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional en 1983.

1.5.8.2. Historia de la violencia

1.5.8.2.1. El inicio de la violencia: 1986-1988

El conflicto más significativo se origina en la competencia política entre IU y el APRA, algo que sucedió a lo largo y ancho del país a mediados de los años ochenta. La competencia y conflictividad se acrecentó luego de que Alan García fuese elegido presidente en 1985. Mediante programas sociales como el Programa de Ayuda al Ingreso Temporal (PAIT) y Programa de Ayuda Directa (PAD), el gobierno buscó generar simpatía para el APRA, llegando según algunos observadores a obligar a los beneficiarios a carnetizarse como miembros del APRA para seguir recibiendo sus beneficios. Aún así, la IU dominó la política local en VES durante los años ochenta, estableciéndose una suerte de hegemonía, pero una hegemonía en disputa.

Fue en este contexto que el PCP-SL y el MRTA comenzaron a actuar más intensamente en el distrito. El PCP-SL manipuló rivalidades con astucia, forjando alianzas con algunos sectores dentro de la CUAVES que veían a los otros sectores vinculados al municipio con mucho recelo. Establecer una alianza con los «cuavistas» (a pesar de sus simpatías con el MRTA, otro grupo que el PCP-SL repudiaba por su «revisionismo») contra un enemigo común -los «revisionistas» de la

municipalidad- permitiría al PCP-SL «agudizar» las «contradicciones principales» dentro del distrito, deslegimitar a IU y destruir el modelo de ciudad alternativa que Villa representaba para la izquierda legal peruana. Michel Azcueta de IU, alcalde elegido en VES en 1983 y 1986, lideró la campaña para establecer a VES como distrito independiente en 1983. La hegemonía de IU no terminó con el segundo periodo de Azcueta. IU ganó fácilmente las elecciones municipales en el distrito en 1989. Johny Rodríguez fue elegido alcalde y María Elena Moyano -ex-presidenta de la Federación de Mujeres- teniente alcaldesa. Para esa época, la IU se había dividido, creando niveles adicionales de tensiones y conflictos en el distrito. A su vez, la situación a nivel nacional se había deteriorado seriamente. La hiperinflación de 1988-90 diezmó los presupuestos estatales y municipales. VES seguía creciendo, pero la organización social ya no era suficiente para resolver los problemas de los habitantes de las nuevas invasiones en la periferia del distrito, y el gobierno municipal carecía de recursos para responder a las demandas de infraestructura básica en esas zonas.

El debilitamiento de los mecanismos tradicionales de representación de intereses como los partidos políticos y los sindicatos significó que los sectores con menos recursos tuvieran menos posibilidades de encontrar solución a sus problemas básicos; si agregamos a ello el debilitamiento de la autoridad del Estado y su repliegue en importantes zonas del país, podremos entender como los grupos subversivos, en especial el PCP-SL, lograron actuar en VES, contra la predicción de muchos.

La violencia política también jugó un papel importantísimo en ese sentido, ya que el miedo y el terror contribuyeron a disuadir a los pobladores de participar en la política y/o en las organizaciones sociales. Por ello, es importante señalar el rol del Estado: al no poder asegurar condiciones mínimas de seguridad ciudadana, el Estado tiene una responsabilidad particular en el desarrollo de ese proceso. Las condiciones estructurales indudablemente favorecieron el ingreso del PCP-SL a la capital y su pase al llamado «equilibrio estratégico». Por su parte, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) igualmente tuvo presencia en VES. Sin embargo, su accionar se distinguía del PCP-SL tanto por su forma de relacionarse con las organizaciones populares y la izquierda electoral, como por su metodología de guerra. En primer lugar, el MRTA concebía su accionar como el brazo armado de la izquierda electoral, su defensor y representante, aunque la izquierda no hubiera apoyado tal tesis, y por lo tanto buscaba generar simpatía entre el sector organizado de la población. En segundo lugar, los métodos del MRTA (reparto de víveres, actos de propaganda armada, etc.) no incluían el terror de asesinatos y atentados contra la infraestructura pública ni el acoso a los dirigentes y las organizaciones, aspectos centrales de la estrategia senderista

Mientras el accionar del PCP-SL se concentró en las zonas rurales del país durante buena parte de los años 80, hacia finales de esa década la organización maoísta realizó un viraje en su estrategia, incorporando a las ciudades —principalmente Lima— como un complemento a su

estrategia rural. Según documentos del PCP, la «guerra popular prolongada» en el campo se había desarrollado a tal punto que ya era hora de preparar el terreno para la insurrección urbana, que los llevaría a la toma del poder. Como hemos visto en capítulos anteriores, un elemento clave sería controlar los enormes «pueblos jóvenes» que rodean la capital como un «cinturón de hierro» y albergan casi la mitad de su población.

El PCP-SL comenzó su actuación en VES a inicios de los años ochenta de manera clandestina y subterránea. En efecto, registramos un número relativamente pequeño de incursiones armadas en VES entre 1981 y 1986, dirigidas contra entidades gubernamentales, la única comisaría del distrito, los bancos y las torres de electricidad. El PCP-SL realizó ocasionales actividades de agitación y propaganda, como la iluminación de inmensas fogatas con el símbolo de la hoz y el martillo en los cerros que rodean al distrito. Reproduciendo su estrategia de circuito educativo, un pequeño núcleo de estudiantes sanmarquinos del PCP-SL organizó grupos de estudio en VES para reclutar nuevos militantes. Desde los colegios, el PCP-SL buscaba ganar jóvenes estudiantes a la causa revolucionaria del PCP-SL. Maestros como Nelly Evans, por ejemplo, quien enseñó en el Colegio Fe y Alegría a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, fueron ganados a la causa senderista.

De 1987 hacia adelante, hubo ciertas evidencias de la intención senderista de establecer una presencia más orgánica en VES. Mientras que las actividades de sabotaje proseguían, había señales de un activismo político de base. Por ejemplo, se crearon grupos de estudio y asociaciones culturales que servían como para reclutar militantes. También se establecieron academias técnicas, un lugar propicio donde reclutar a jóvenes recién egresados del colegio que tenían pocas posibilidades de ingresar a la universidad y buscaban prepararse para un mercado laboral poco prometedor.

A partir de 1988, las actividades senderistas de agitación y propaganda se hicieron más visibles. Por ejemplo, pequeños contingentes senderistas participaron en actividades y marchas de protesta organizadas por grupos vinculados a la IU en VES. Tales actividades y movilizaciones fueron dirigidas a cuestionar las medidas económicas del gobierno o violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad.

1.5.8.2.2. Todos los actores, la mayor resonancia posible: 1989 –1992

En el marco del anuncio de la llegada al «equilibrio estratégico» en el año 1989, la estrategia del PCP-SL en VES cambió de perfil buscando disputar la hegemonía de la izquierda en el distrito y «desenmascarando» así la supuesta inutilidad de su opción pacífica de cambio social. Así comenzó una frontal confrontación con la izquierda legal en el distrito buscando desprestigiar su liderazgo político y social, amenazando y en algunos casos asesinando también a quienes se opusieron a su «guerra popular».

En ese contexto surgieron una serie de conflictos con las estructuras de poder local que la izquierda dominaba -como el municipio, la CUAVES y FEPOMUVES- para demostrar la supuesta inviabilidad del modelo autogestionario y de cambio social por la vía pacífica.

A su vez, al radicalizar y exacerbar el conflicto social en el distrito, el PCP-SL también buscó provocar la represión militar -una estrategia que había seguido en el campo y en otras zonas de la capital como Raucana- creyendo que la polarización obligaría a la población a tomar posiciones y que la población se uniría a la guerra popular. Sin embargo, el grueso de la población miraba al PCP-SL a la distancia y con cierto temor. El PCP-SL buscó imponer sus propios métodos y liderazgo sin tener una relación dialéctica con la población local más allá de lo que concebía necesario para avanzar en la «guerra popular». El autoritarismo extremo del comportamiento senderista, al fin y al cabo, minó su posibilidad de obtener apoyo popular masivo.

A lo largo de 1989 y 1990 el PCP-SL incrementó su accionar en el distrito con actos de sabotaje y de propaganda, como quema de buses, atentados contra infraestructura de luz y agua, la comisaría y el local del partido de gobierno, Cambio 90. También asaltó hospitales en el distrito, presumiblemente para llevar medicinas y otros bienes para atender a sus heridos. Otras acciones se puedan definir como actos de agitación y propaganda, como la distribución de volantes en mercados y colegios, la intercepción de camiones y la repartición de los comestibles que llevaban, como sucedió el 24 de enero de 1991 cuando una columna del PCP-SL secuestró un camión cargado con más de 300 cajas de aceite vegetal que repartieron entre las amas de casa que realizaban compras en un mercado en VES. Exactamente lo mismo que el MRTA hacía. En otra ocasión, el 10 de abril de 1991, se registró un intento de parte del PCP-SL de incitar a la población a saquear un camión que distribuía bebidas gaseosas.

En 1991 los dirigentes del distrito comprueban que el PCP-SL tenía claras intenciones políticas de descabezar las organizaciones sociales más importantes y destruir el proyecto de VES, pues a mediados de ese año se puede detectar una escalada de violencia en el marco de la estrategia de crear vacío de poder intimidando y eliminando a las autoridades y líderes locales. El primer acto en ese sentido se registra el 23 de junio de 1991, cuando el PCP-SL asesinó a Alejandro Magno Gómez, prefecto del distrito y miembro de Cambio 90, el partido de gobierno. En septiembre de 1991, una bomba explotó y destrozó uno de los centros de acopio de la FEPOMUVES, donde la organización almacenaba alimentos que distribuían a los comedores populares. María Elena Moyano acusó al PCP-SL del atentado y se convirtió en una crítica abierta e implacable de la organización maoísta.

A finales de 1991, el alcalde Johny Rodríguez, intentó crear un frente amplio contra el PCP-SL en el distrito desde el municipio promoviendo la formación de la Mesa por la Paz y el Desarrollo, que pretendió ser un espacio de concertación que unía a las organizaciones populares, grupos de derechos humanos, la Iglesia Católica, y el gobierno municipal. El objetivo de la Mesa por la Paz era desarrollar estrategias alternativas para responder a los problemas sociales de Villa y

detener la creciente influencia senderista en la comunidad. Las estrategias de la Mesa por la Paz no fueron suficientes para enfrentar un enemigo dispuesto a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos.

A inicios de 1992, se registran una serie de atentados, asesinatos e intentos de asesinato, cometidos por el PCP-SL. El 13 de enero de 1992, una columna de once senderistas atacó a tres suboficiales de la Policía General que hacían vigilancia cerca al mercado central de VES. Un policía murió en el atentado, y el hecho infundió mucho temor en la población. El 13 de enero de 1992, un obrero del primer sector fue baleado en la puerta de su domicilio. El 10 de febrero, un anciano vigilante fue asesinado y un cartel fue colocado sobre su cuerpo: «Así mueren los soplones», con el símbolo de la hoz y el martillo. Dos días después, Juan Huamán Valle, un dirigente vecinal de 52 años, fue baleado por supuestos senderistas en la puerta de su casa. La escalada de violencia política era cada vez más evidente.

Los esfuerzos nacientes por organizar rondas se desarmaron luego de que el PCP-SL visitara a los organizadores, casa por casa, amenazándoles y advirtiéndoles que desistieran de organizar rondas, pues ellos se encargarían de los problemas de delincuencia y droga.

1.5.8.2.2.1. La lucha por el Parque Industrial

El 9 de febrero de 1992 marcó un momento decisivo en VES. Se llevaron acabo elecciones en la APEMIVES, y un microempresario de la zona, Máximo Huarcaya, fue elegido presidente de la asociación, supuestamente con el respaldo del PCP-SL. La APEMIVES era una de las instituciones que conformaban la Autoridad Autónoma (AA), el cuerpo rector del Parque Industrial de VES. Los otros actores que participaban en la AA eran el alcalde distrital y un representante del gobierno central, de la industria privada, y el presidente de la CUAVES.

Huarcaya lideró un grupo de pequeños empresarios que exigían que ningún empresario fuese expulsado del Parque Industrial y que el control de los recursos de ese Parque fuera transferido exclusivamente a la APEMIVES.

Cuatro días después de la victoria de Huarcaya hubo una reunión de emergencia en el Parque Industrial para discutir la situación. María Elena Moyano exigió a Huarcaya y a Filadelfo Roa, el presidente de la CUAVES y quien apoyó a la candidatura de Huarcaya, que firmaran un documento de deslinde con el PCP-SL, a lo cual ambos se rehusaron. Según Huarcaya, había consultado con las bases de la APEMIVES, quienes votaron en contra de firmar el documento.

Pero para los que estaban en el municipio, la relación con el PCP-SL era clara. María Elena Moyano decidió que el momento había llegado para desafiar al PCP-SL de manera directa. El PCP-SL había decretado un paro armado en Lima para el día siguiente, el 14 de febrero; Moyano planteó que Villa y sus organizaciones debían protestar contra el paro en una manifestación pública, la «Marcha por la Paz». La marcha se realizó, pero sólo participaron unas 50 personas, portando

banderas blancas en símbolo de la paz. Ese mismo día, el 14 de febrero de 1992, un paquete de 500 gramos de dinamita fue colocado en la puerta de la casa del ex-alcalde del distrito, Michel Azcueta. Al día siguiente, el 15 de febrero de 1992, un comando de aniquilamiento senderista asesinó a María Elena Moyano a balazos en una pollada en el primer sector del distrito. Después de matarla, llevaron su cuerpo a la puerta del local comunal y le colocaron una carga explosiva de unos cinco kilos de dinamita que destrozó el cuerpo de la dirigente.

En los días siguientes, volantes del PCP-SL circularon por todo el distrito revindicando la autoría del atentado y justificando el asesinato de Moyano por sus supuestas fechorías: corrupción, favoritismo, «soplona». Dirigentas como María Elena Moyano se encontraron solas frente a un grupo dispuesto a utilizar la violencia en contra de quienes consideraban sus enemigos.

Hubo una procesión funeraria masiva para María Elena Moyano que fue señalada por muchos como muestra del rechazo popular al PCP-SL. Ciertamente numerosos dirigentes indignados por el brutal asesinato de Moyano participaron en el acto a pesar del clima de miedo y terror que acrecentaba sobre VES. Sin embargo, numerosos observadores comentaron que la participación de dirigentes y pobladores de VES fue reducida, y que la mayoría de los que participaron en el evento llegaron de fuera de VES, incluyendo el ex-presidente Fernando Belaunde Terry.

Los testimonios recogidos sugieren que había dos interpretaciones y reacciones en ese momento que no son necesariamente contradictorias, sino que muestran la complejidad de la situación. Por un lado, el asesinato de María Elena Moyano generó rechazo a nivel de los dirigentes nacionales y locales que ya habían definido una posición en contra del PCP-SL y sus actos violentos. También hizo que otros dirigentes y pobladores que vieron al PCP-SL con cierta simpatía cambiaran de opinión.

Pero, igualmente, ciertos sectores aprobaron el «castigo» que había recibido a manos del PCP-SL. Las acusaciones de favoritismo político, de corrupción, y de haberse alejado de las bases fueron citados como elementos que «justificaron» el atentado en contra de ella.

El objetivo principal del PCP-SL al asesinar a Moyano, había sido logrado: generar miedo e inhibir cualquier acto de resistencia en VES (y en el país en general). Las dirigentas de FEPOMUVES se replegaron por presión de sus familias y por miedo de ser la próxima víctima. Y frente a ese repliegue, dirigentes aparentemente cercanos al PCP-SL tomaron las riendas de la organización femenina.

Poco después de la muerte de María Elena Moyano, la presidenta de la FEPOMUVES, Ester Flores, sufrió un colapso nervioso y salió del país. Según ella, parte de su decisión de retirarse del país tuvo que ver con la forma en que los medios de comunicación buscaron levantarle a ella luego de la desaparición de María Elena Moyano para señalarla como la que seguiría su camino de liderar la resistencia al PCP-SL. Algunas dirigentas renunciaron a sus cargos, mientras otras

seguían trabajando pero evitaban todo discurso político. En ese sentido, el PCP-SL había logrado un objetivo clave para sus fines: la desarticulación de la FEPOMUVES.

La muerte de María Elena Moyano tuvo fuertes repercusiones en todo el distrito. La Mesa por la Paz y Desarrollo se desarticuló, aunque Johnny Rodríguez y sus aliados cercanos continuaron denunciando al PCP-SL y a los grupos dentro de VES que supuestamente se habían aliado con ellos. Criticaban en particular a la dirigencia de la CUAVES por su «complicidad» con el PCP-SL y por su negativa en denunciar al PCP-SL por el asesinato de María Elena Moyano, mostrando así su desacuerdo con lo que consideraban una toma de la CUAVES por los sectores radicalizados en alianza con el PCP-SL y el MRTA.

Esta alianza táctica se hizo evidente poco después de la muerte de Moyano, en marzo de 1992, cuando el comité ejecutivo de la CUAVES y el «Comité de Lucha Distrital» —un grupo de fachada senderista— movilizó a cientos de personas para que protestaran exigiendo la destitución del Alcalde Johnny Rodríguez «por promover la militarización de VES».

1.5.8.2.2.2. La VI Convención de la CUAVES

El nivel de influencia que había logrado tener el PCP-SL en VES era cada vez más evidente, pero el control que ejerció sobre la VI Convención de la CUAVES, realizada a finales de agosto de 1992, sorprendió a todos los observadores. La influencia del PCP-SL en la CUAVES ya era evidente en 1991, cuando un sector de los llamados «cuavistas» —mucho de ellos simpatizantes del MRTA— forjaron una alianza táctica con los dirigentes simpatizantes con el PCP-SL para remover al secretario general de la organización, Roque Quispe. En esta reunión, los grupos radicales —los «cuavistas», con el apoyo implícito de los dirigentes del MRTA y del PCP-SL— presentaron una moción afirmando que dada la situación económica el municipio no debería cobrar el impuesto, propuesta que fue aprobada. Una semana después mediante votación se destituyó a Quispe de su cargo, y Roa asumió el cargo de secretario general de la CUAVES.

Como vemos, al igual que en todas las regiones del país, la violencia política se impuso en VES sobre conflictos ya existentes y algunos grupos aprovecharon el contexto de miedo y consternación para avanzar sus intereses políticos y personales, estableciendo alianzas con el MRTA y con el PCP-SL.

La Sexta Convención de la CUAVES, llevada a cabo en agosto de 1992, fue esencialmente copada por el PCP-SL, tal como se demuestra al leer el documento final de esa reunión. El documento original incluía una lista de nombres de varios dirigentes a ser «liquidados», pero esta lista no fue incluida en el documento final. De hecho la Convención carecía de legitimidad y para muchos en VES la CUAVES dejó de tener resonancia política, aunque seguía siendo una referencia simbólicamente significativa para el distrito. Por ello el copamiento de la CUAVES y de la sexta

convención era una victoria simbólica para el PCP-SL ya que demostraba que habían logrado cierto nivel de influencia dentro de VES e iba extendiendo su influencia en las barriadas de Lima.

Concluida la sexta convención, el gobierno municipal denunció públicamente a la dirigencia de la CUAVES por estar coludida con el PCP-SL, y rehusó reconocer la legitimidad de la VI Convención y a la dirigencia de la CUAVES. A su vez, unos cuarenta miembros de base de la CUAVES emitieron un comunicado conjunto, señalando su negativa de reconocer la dirigencia de la organización comunal y su intención de renovar la organización desde las base. Esto en particular fue un acto de resistencia importante.

1.5.8.2.3. El declive de la violencia: 1993 - 2000

Los actos brutales del PCP-SL y su presencia creciente en organizaciones locales obligaron a las Fuerzas Armadas a establecer una Base Militar dentro de VES, cerca al Parque Zonal y Pachacamac, intentando aliarse con las autoridades del distrito y con ciertos dirigentes amenazados por el PCP-SL con el supuesto fin de protegerlos. Varios dirigentes señalan, sin embargo, que en lugar de sentirse protegidos, sentían temor de ser motivo de represalia de parte del PCP-SL. Esto evidencia la fuerte presencia que tuvo el PCP-SL en la zona y la sensación de absoluta desprotección que sentían los pobladores y sobre todo los dirigentes.

La presencia del Ejército en VES y el mayor despliegue de agentes de seguridad y de inteligencia, combinado con el avance senderista y el miedo que ello, y su violencia contra dirigentes de la zona, despertaba, infundió temor en la población. Muchos activistas de base comenzaron a alejarse de la vida pública y evitar participar en cualquier actividad que pudiera comprometerlos. A eso contribuyó también el autogolpe del 5 de abril de 1992, con el cual el presidente Alberto Fujimori cerró en Congreso y suspendió la Constitución con el apoyo de las fuerzas militares. Unos días después del autogolpe, el PCP-SL lanzó una fuerte ofensiva en Lima. Un potente ómnibus-bomba fue lanzado contra la fachada de la municipalidad de VES, destruyendo parte de ella, la comisaría, el Centro de Comunicación Popular y decenas de casas colindantes. Un oficial de la policía murió en el atentado y varios otros resultaron heridos.

El panorama cambió radicalmente en los meses que siguieron a la captura de Abimael Guzmán. Las fuerzas de seguridad toman la ofensiva, el PCP-SL se retrae y el distrito comienza a afrontar nuevos desafíos. En su lógica de «profundizar las contradicciones», el PCP-SL buscó agudizar los conflictos sociales y así generar mayor polarización para acelerar el supuesto triunfo de su «guerra popular», pero tanto la represión militar como el rechazo de la mayoría de la población a los asesinatos y actos violentos, así como la detención de su principal líder y la suscripción de los acuerdos de paz posteriores desbarataron el avance de sus propuestas.

1.5.9. Zona V: Centro de Lima Metropolitana

El centro de Lima es el centro del poder en el país, por ende blanco privilegiado para realizar atentados contra todo tipo de institución pública, empresas privadas, delegaciones internacionales, centros fabriles, etc. Los distritos céntricos de la metrópoli en la concepción senderista de la guerra popular fueron concebidos centralmente como caja de resonancia, tal como hemos señalado en el capítulo introductorio. Para poder precisar el impacto del conflicto armado interno en las diferentes realidades distritales existentes en esta zona durante el lapso 1980-2000, distinguimos 3 áreas o centros específicos: el centro antiguo, el centro industrial y el centro financiero-comercial.

1.5.9.1. Datos generales

La Zona Centro de Lima Metropolitana se ha configurado como espacio nuclear dentro de un modelo de modernización subdesarrollado, lo cual implicó que la concentración de población y actividades económicas, en un crecimiento urbano acelerado y desordenado, terminó desbordando cualquier gestión urbana eficiente. La crisis económica experimentada desde mediados de los 70's, se profundiza entre 1981 y 1990, aumentando el desempleo, mientras la población se terciariza sin haberse alcanzado una industrialización significativa.

Por otra parte, el centralismo de la capital se manifiesta fundamentalmente por la desigual distribución del ingreso a nivel nacional. Mientras en Lima el ingreso promedio es el doble que en el resto de otras regiones, los gastos públicos de los gobiernos centrales estuvieron en clara vinculación con la diferenciación existente a nivel metropolitano. Por ejemplo, se registra que entre 1964 y 1970, el Paseo de la República absorbió la mitad de la inversión total del municipio de Lima, constituyendo la ampliación de la vía expresa en los setenta el proyecto municipal más importante de esos años. Para 1980, la Zona Centro concentraba cerca del 50% de establecimientos ligados al sector terciario. Hay que destacar además que la concentración de capital existente en el centro financiero (principalmente San Isidro), tiene como característica principal el hecho de que las decisiones financieras de la banca comercial, estatal y privada se realizan en la Zona Centro.

1.5.9.2. Historia del conflicto armado interno

1.5.9.2.1. Inicio y expansión de la violencia: 1980-1988

Durante el ciclo de violencia política en la capital, podemos percibir hasta tres espacios o centros particulares en la Zona Centro, cada uno con una relevancia específica:

Centro antiguo: Correspondiente a los distritos más antiguos de la capital, como La Victoria, el Cercado, Breña y el Rímac. En este escenario se ubican principalmente los

monumentos históricos y el poder político, por lo que estuvo en la mira de los atentados subversivos desde principios de la insurgencia senderista y emerretista, a través de actos simbólicos y de una serie de atentados de diversa magnitud contra instituciones y autoridades estatales, e incluso contra instituciones vinculadas a gobiernos internacionales (embajadas, institutos, ONG's).

Centro industrial: Conformado por la parte industrial del Cercado de Lima alrededor del eje vial de la avenida Argentina, este espacio concentra gran parte de las industrias existentes en la Zona Centro. Hay que advertir que si bien el proceso de informalización de los noventa llegó a convertir el Cercado Antiguo en un eje dinámico del comercio ciudadano, gran parte del comercio formal y de la pequeña y mediana industria se localiza en esta sub zona, siendo también objeto de un temprano interés por parte de los grupos subversivos, a través de acciones de sabotaje, amedrentamientos y por medio de la convocatoria a paros armados, en estrecha vinculación con el accionar de la Carretera Central.

Centro financiero-comercial: Distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y La Molina pueden ser ubicados como parte del eje financiero y residencial de la metrópoli, ubicados alrededor del eje vial conformado por la Vía Expresa, la avenida Javier Prado y las avenidas adyacentes, mientras Surquillo, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, y San Luis destacan como sedes de diversas instituciones ligadas al sector terciario. Durante el período de la violencia también tenían un significativo peso comercial y a la vez estos distritos servían de residencia de la clase media urbana limeña.

Aunque el PCP-SL había iniciado su accionar en esta zona mediante el ataque de agencias bancarias, centros comerciales, y una sucesión de apagones y coches bomba, lo cierto es que había concebido estos distritos como área de operaciones para su dirigencia. En efecto, los principales aparatos senderistas (como el DAO, GAP, GTE) funcionaban en la zona residencial del centro de la capital, lugar en donde además se desarrolló de manera clandestina el I Congreso partidario del PCP-SL. Este Congreso senderista se realizó durante tres sesiones, en una zona que era residencia de militares (Monterrico Norte), en el inmueble donde funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) a cargo de la abogada Elvia Nila Zanabria Pacheco, quien además era miembro del Comité Central. Los principales aparatos senderistas funcionaban en la Zona Centro de la capital. No sólo el local del Departamento de Apoyo Organizativo, también las redes del Grupo de Apoyo Partidario y el Grupo de Trabajo Especial vinculado a las Academias «Aduni» y «César Vallejo», constituían importantes aparatos del PCP-SL activos en la Zona Centro, a los cuales se agregaban las acciones de los organismos generados vinculados a Socorro Popular.

1.5.9.2.1.1. La estrategia subversiva

Al iniciar sus acciones, la directiva senderista tenía una concepción unitaria de la guerra popular siendo el campo el escenario principal y la ciudad el complemento necesario, que se expresó en el hecho de que, casi paralelamente al atentado en Chuschi de 1980, en Lima se producía el incendio de la municipalidad de San Martín de Porres, mientras aparecieron en diferentes distritos del centro antiguo una serie de actos simbólicos e intimidatorios (perros colgados injuriando al «revisonismo», cerros colindantes iluminados con la hoz y el martillo, voladura de torres eléctricas). Estos actos no llegaron a llamar la atención de la población citadina ni de la clase política, a excepción del apagón general producido en noviembre de 1981. Una hora antes, una turba de manifestantes provocó una serie de disturbios en la zona financiera y residencial, destruyendo las lunas de dos bancos en pleno centro de Miraflores y lanzando proclamas a favor de la lucha popular, con consignas como «la guerrilla es el camino».

A partir de 1982, el PCP-SL incrementó su accionar en la Zona Centro, atacando centros comerciales durante los apagones, así como realizando una serie de atentados y asaltos a policías, intensificándose la violencia a partir de mediados de los 80's.

1.5.9.2.1.2. La capital como caja de resonancia

Por su condición de capital nacional, y por el centralismo político y económico existente en el país, los atentados y acciones ejercidas en los distritos céntricos llegaron a tener un impacto mayor que los que ocurrían paralelamente en otros sectores del país. Es por ello que adquiere una relevancia específica la percepción del centro de Lima como caja de resonancia del accionar subversivo, tanto para el PCP-SL como para el MRTA. Aunque los planes militares del PCP-SL estaban enfocados en el desarrollo de sus bases de apoyo en el campo, existió una marcada orientación política por el accionar urbano y por los atentados en la capital, a pesar de la desigualdad de fuerzas existentes con respecto a las fuerzas del orden. En ese sentido, una aproximación a la «resonancia» del accionar subversivo se puede obtener a partir de las opiniones que se expresaron sobre el PCP-SL al inicio de la guerra interna; otra entrada se puede establecer en el tratamiento que distintos organismos internacionales asumieron frente al tema de los derechos humanos ; y finalmente podemos aproximarnos a la resonancia de los actos subversivos a partir de las imágenes que construyeron los medios de comunicación con respecto a la violencia política en Lima.

Las imágenes que los medios oficiales proyectaron sobre la violencia senderista fueron pasando de un enfoque criminológico a otro de carácter sensacionalista y nacionalista. A su vez, la concepción de Lima como caja de resonancia se puede extrapolar para entender el accionar del MRTA en la capital. Aunque el MRTA nunca proclamó haber llegado a un «equilibrio estratégico»

de las fuerzas en lucha, utilizó también la centralidad capitalina para obtener un mayor impacto de sus actividades subversivas.

Para el caso específico de la violencia en Lima, a nivel metropolitano existió un trato desigual entre lo que podemos denominar centro y periferia. Esto era expresión de otra tendencia dominante, como fue la indiferencia frente a la violencia en el contexto rural durante los ochenta. Pese a que en todo el país se declaró el Estado de Emergencia y se implantaron sucesivos toques de queda en la ciudad, los atentados en provincias no tuvieron la resonancia ni el impacto que obtuvieron los atentados en el centro de la capital.

Así, el caso más sonado ocurrido al interior del país a inicios de los ochenta fue la matanza de 8 periodistas de tres diarios limeños en la localidad de Uchuraccay, el 26 de enero de 1983. En contraste, las incursiones senderistas en Lucanamarca y Huancasancos (que juntas llegaban a los 80 muertos) en abril del mismo año, o la masacre de Socos por parte de las fuerzas policiales en noviembre de 1983, con un saldo de 34 campesinos asesinados, no recibieron mayor cobertura por parte de los medios. Por el contrario, sirvieron para cimentar una imagen delincencial del PCP-SL y fueron muestra del interés del gobierno en una estrategia represiva hacia la población campesina, que se suponía apoyaba al PCP-SL. La política contra subversiva estuvo centrada en censurar y distorsionar los hechos de violencia, y esto tuvo su impacto en la cobertura que la prensa otorgaba a la violencia política.

Sin embargo, desde el Estado se comenzaba a dictaminar una serie de dispositivos legales contra el terrorismo, mientras las Fuerzas Armadas afirmaban tener controlados a los grupos subversivos en las zonas de emergencias. Pero en Lima, e incluso en la Zona Centro, ya se había desatado una serie de atentados simbólicos, iniciados con perros colgados de postes en el centro de la ciudad. En la noche del 24 de noviembre de 1981, cerca de un centenar de personas protagonizaron una asonada en pleno centro de Miraflores, causando daños materiales en las sucursales de los bancos de Crédito y Continental de ese distrito. El grupo hizo estallar varias bombas molotov a los gritos de «abajo el gobierno», «la guerrilla es el camino» y «la guerrilla contra el hambre». Unas horas más tarde, aproximadamente a las 11 de la noche, se produjo un apagón que cortó el fluido eléctrico en toda la ciudad. El apagón se debió a la voladura de una torre de alta tensión en Chongos Bajo, Junín, que produjo un apagón general en Huancayo, Lima, Callao y otras ciudades. Al día siguiente, grupos identificados como subversivos intentaron transmitir proclamas tomando 2 radios en Lima. Los apagones se convertirán, en los años siguientes, en elemento central de la estrategia senderista, modificando incluso la rutina cotidiana de los millones de habitantes de la capital.

Luego de que en algunos lugares del interior del país se decretara el Estado de Emergencia, el 20 de agosto de 1982 fue declarado en Lima y Callao. Comenzaba así una serie de atentados en la capital, que a partir de mediados de los ochenta empezó a incluir de manera predominante asesinatos selectivos, así como una mayor infiltración dentro del movimiento barrial y sindical,

sumamente debilitado por la crisis económica y por la desarticulación gremial que esta conllevó. El avance del PCP-SL se expresa en la convocatoria a un paro el 8 de enero de 1983 en Lima Metropolitana, casi sin efecto alguno, pero a partir de 1985 el PCP-SL se infiltró en las huelgas convocadas por el CITE, central de trabajadores públicos.

Por parte del MRTA se inició una ola de secuestros y extorsiones, y en menor medida coches bombas y ataques de artefactos «instalaza» contra las sedes gubernamentales y contra sedes estadounidenses, así como la toma de medios y agencias noticiosas para relevar su accionar en el extranjero.

El 22 de enero de 1985, Amnistía Internacional distribuyó en Londres un comunicado manifestando que más de mil personas habían desaparecido en los últimos dos años en la zona declarada de emergencia en el Perú. El informe agregaba que cientos de otras personas fueron asesinadas durante su detención, a menudo tras ser torturadas. Responsabilizó al PCP-SL por el asesinato y la tortura de centenares de personas. A pesar de estas afirmaciones, los medios oficiales consideraban a esta organización de derechos humanos como fachada del terrorismo internacional, aunque ya no se podía negar la existencia de una «guerra sucia» en el interior del país. En efecto, en días anteriores, los diarios limeños daban cuenta de nuevos hallazgos de fosas con cadáveres de desaparecidos, así como de las incursiones criminales del PCP-SL en diversos puntos de la serranía peruana. Además, el 16 de julio de 1985 llegó a Lima la Comisión de Trabajo de Desapariciones Forzadas Involuntarias, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 16 de agosto de aquel año, el MRTA realizó una conferencia de prensa clandestina, señalando que «no realizará acciones militares contra el APRA, mientras éste no ataque al pueblo».

Durante el gobierno de Alan García, el caso de mayor resonancia fue la matanza de presos senderistas amotinados en los penales limeños en 1986, que conllevó a una ruptura con la línea oficial del gobierno y a un intento por comprender las causas del conflicto armado interno, por parte principalmente de opositores a la estrategia contra subversiva y de los organismos de derechos humanos. El amotinamiento de subversivos, los días 18 y 19 de junio de 1986 en el CRAS Lurigancho (124 muertos), en el CRAS El Frontón (más de 100 muertos), y en el CRAS «Santa Bárbara» (3 reclusas muertas), originó la mayor matanza colectiva de la historia de nuestro país.

Poco antes, el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes (IU) insistía en la necesidad de formar un frente común contra el terrorismo, iniciativa que contó con el respaldo de la Iglesia Católica y el 14 de junio de ese año, el senador Javier Diez Canseco (PUM), manifestó que la posición del frente antiterrorista era de Alfonso Barrantes pero no de IU. Al día siguiente, un comunicado firmado por el PC del P (Patria Roja), PUM y FOCEP, planteaba «una salida de paz con justicia social, rechazando el terrorismo de cualquier signo» y pedía el fin del estado de emergencia en Lima y Callao. En diciembre de 1987 se convocó a una Jornada Cívica por la Paz y por la Vida, con la participación de una amplia variedad de instituciones, autoridades y partidos políticos y un año

después la municipalidad de Lima convocó a una Jornada por la Paz. En el marco de la sesión solemne celebrada en el Consejo Provincial de Lima, el alcalde de Lima, Jorge del Castillo (APRA), propuso instituir 1988 como el Año de la Paz Nacional, con el nombramiento de una comisión que recomendaría las acciones conducentes a esta tarea. Villa El Salvador, la «Ciudad Mensajera de la Paz», guardó un minuto de silencio por la paz y por el cese de toda forma de violencia en el territorio patrio bajo el lema «Sin justicia no hay paz». Por su parte, el regidor Henry Pease (IU) recordó que más de diez mil peruanos habían sido víctimas de la violencia, la cual, remarcó, era preciso detener. Reclamó, en ese sentido, la supremacía de las instituciones civiles en las zonas de emergencia como un paso adelante en la defensa de los derechos humanos.

Pero estos esfuerzos por cohesionar la sociedad civil en un frente único por la paz, no tuvieron éxito y la violencia mantuvo su intensidad en Lima. En medio del paro nacional convocado por la CGTP, un grupo de 40 senderistas se enfrentó con los manifestantes en plena Plaza Dos de mayo, en un intento de atentar contra Jorge del Prado, senador líder de la Izquierda Unida, el 28 de enero de 1988. Era evidente que no existía una colusión entre los huelguistas y los senderistas, ni siquiera en las marchas infiltradas por grupos pro senderistas, como quiso atribuirlo en un primer momento el gobierno, que pretendía minimizar la presencia de los grupos subversivos en la capital.

En mayo de 1988, con motivo de la segunda visita de Juan Pablo II a Lima, también se registró un incremento de la violencia en la capital. Familiares de presos del MRTA tomaron diversas iglesias, mientras elementos senderistas colocaron dinamita cerca al Campo Eucarístico de San Miguel. Poco antes se había desactivado un coche bomba cerca de la Base Aérea N° 8.

1.5.9.2.2. La escalada de la violencia del PCP-SL: 1989-1992

Hasta 1989, los apagones y paros armados eran considerados como acciones alejadas de los distritos céntrico-residenciales, pero el aparente avance de la lucha armada frente a la ineficacia de la política contra subversiva llevó a que la directiva senderista considere propicio expandir y desarrollar el «Quinto Plan» teniendo como objetivo impulsar el desarrollo de bases de apoyo, centrándose en la construcción del nuevo poder. Es decir, se buscaba destruir el aparato estatal y generar un vacío de poder, incluso mediante el asesinato de dirigentes vecinales, mientras se pretendía demostrar a la población el avance de la guerra popular incrementando las acciones terroristas a través de coches bombas y atentados localizados primordialmente en el centro comercial y financiero de Lima. Este repunte tuvo lugar desde agosto de 1989, y alcanzó su mayor intensidad entre abril de 1991 y julio de 1992.

A fines del régimen de Alan García (1985-1990), la situación económica se caracterizó por una hiperinflación de 60% mensual, una reducción de los salarios reales en 50% respecto a julio de 1985, y apenas 107 millones de dólares en reservas internacionales. El sistema financiero había

visto reducir sus niveles de intermediación a la tercera parte del nivel alcanzado en 1982, mientras la presión tributaria llegó apenas al 4% del PBI, y el déficit fiscal representaba el 12% del PBI. En este escenario, el accionar de los grupos subversivos se recrudece notablemente, afectando de manera desproporcionada al centro económico y político del país, con una resonancia insospechada, en su mayor parte debido al enfoque sensacionalista por parte de los medios de comunicación, en medio del cambio de régimen presidencial y modificaciones en la estrategia contra subversiva.

En vísperas de las elecciones presidenciales de 1990, el MRTA secuestró al empresario Héctor Delgado Parker, lo que le permitió tener una tribuna momentánea a través del canal 5. En enero de 1990, el mismo grupo asesinó al General Enrique López Albújar en San Isidro, ex ministro de Defensa. Mientras tanto, el PCP-SL multiplicaba sus asesinatos de funcionarios vinculados con el gobierno aprista, como fue el caso de Felipe Santiago Salaverry, ex Presidente del IPSS. Todos estos actos fueron generando una percepción de caos e incertidumbre generalizada asociada, en medio de apagones continuos, a la crisis económica que alcanzó, como dijimos, niveles hiperinflacionarios sin antecedentes. El impacto que tuvieron los atentados subversivos a las instalaciones comerciales y la infraestructura estatal agravó esta percepción, sin que la declaración de estados de emergencia y la creación de comandos político-militares mejorase la situación. Por el contrario, se empezaron a manifestar amenazas al periodismo de investigación, uno de cuyos precedentes fue el cierre del programa televisivo Encuentros, conducido por César Hildebrandt, suspendido en vista de las presiones que venían afectando las informaciones sobre el caso de Jaime Ayala. Hildebrandt denunció que las Fuerzas Armadas habían obligado a los directivos de todos los canales de televisión para evitar que se informe sobre cualquiera de los militares involucrados en algún tipo de delito.

A partir de octubre de 1989 las acciones subversivas se incrementaron en más del 100%, con miras a las acciones a realizarse a partir de marzo de 1990 en el objetivo de impedir las elecciones presidenciales. Esta etapa de ascenso se prolongó hasta agosto de 1990, siendo principales objetos de atentados los centros comerciales y las unidades de transporte en la capital. Se inició un proceso de racionamiento eléctrico que afectó la actividad comercial e industrial. Con el nuevo gobierno de Alberto Fujimori, se reactivaron las acciones subversivas en la capital, registrándose en abril de 1991 desde voladuras de torres y atentados a agencias bancarias, hasta un atentado contra el local del Instituto Libertad y Democracia, que dirigía Hernando de Soto, en ese entonces asesor de Fujimori.

La modalidad de los coches bomba sufrió un repliegue entre agosto y septiembre de 1992, para luego volver a ascender, llegando a 14 en noviembre y a 10 en diciembre de ese año, aunque el número de víctimas se redujo considerablemente. En el balance de cientos de atentados, se observa que Lima fue el escenario de mayores acciones subversivas en 1992, registrando más de la mitad de los actos subversivos de todo el país. En cuanto a víctimas, el PCP-SL aparecía en el

tercer lugar, siendo los meses de su mayor actividad subversiva febrero, julio y noviembre, con el despliegue de una oleada de acciones en la capital que buscaban garantizar los paros armados que había convocado. Una de las acciones más sanguinarias en esos paros fue el asesinato de taxistas, muchos de los cuales eran quemados vivos en sus vehículos. En el ámbito metropolitano, la mayor cantidad de civiles muertos pertenecía al sector de los dirigentes populares, con un total de 27 dirigentes vecinales muertos, 5 dirigentes políticos locales, 7 ex dirigentes, 3 sindicalistas y 73 pobladores de distinta ocupación. Como se ha recalcado en otras zonas de Lima Metropolitana, estas acciones y procedimientos subversivos se enmarcaban dentro del plan del PCP-SL de lograr el llamado «equilibrio estratégico».

1.5.9.2.2.1. Los aparatos centrales del PCP- SL

La Dirección Central del PCP-SL, desarticulada con la captura de Guzmán en setiembre de 1992, estaba conformada por el Buró Político y el Comité Permanente (Ver Estudio de la CVR sobre el PCP-SL). Era responsable de elaborar las directivas del partido que llegaban a los comités y aparatos centrales a través del Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) que funcionó hasta junio de 1990 en Monterrico Norte, fecha en que fue allanado por la policía. La Dirección Central, dirigida por Guzmán, estuvo ubicada en Chacarilla del Estanque. Ambos inmuebles estaban a sólo cinco minutos de distancia. Como resultado del allanamiento del DAO, recién se llegó a conocer la verdadera presencia del estado mayor senderista en Lima. Entre los documentos incautados se halló información que permitió la detención de miembros operativos en el Grupo de Trabajo Especial (GTE) y del Grupo de Apoyo Partidario (GAP).

El GAP empezó a actuar con grupos que dependían directamente de la Dirección Central. A mediados de 1985 se conformó un organismo que se desarrolló en la ciudad como parte del Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP). Al caer el DAO, el GAP contaba con una organización muy compleja, clandestina, y con tres redes de trabajo en la ciudad: una red de locales, la red de recojo, almacenamiento y distribución de propaganda, y la red de economía e inteligencia. Algunos analistas aseguran que el manejo de los depósitos de propaganda del PCP-SL era más importante que manejar el Ejército Guerrillero Popular.

Por su parte, Socorro Popular (llamado SoPo en documentos de PCP-SL) contaba con una estructura muy compleja y, a partir de su militarización desde 1986, llegó a desplazar al Comité Metropolitano en importancia, logrando expandirse sin dejar de cumplir sus funciones iniciales abocadas a las áreas de salud y defensa. Casi siempre actuaba a través de sus «organismos grises» o «de fachada», como la Asociación de Abogados Democráticos y el Comité de familiares de presos políticos. En cinco años, bajo la jefatura de Yovanka Pardavé, esta organización se convirtió en uno de los aparatos centrales claves del PCP-SL en Lima. Con la captura de esta dirigente, conjuntamente con Tito Valle Travesano y Víctor Zavala Cataño, en junio de 1991, la célula fue

recompuesta, asumiendo la dirección la abogada Martha Huatay, quien finalmente fue capturada en octubre de 1992, obligando a SoPo a nuevas pero frágiles recomposiciones.

1.5.9.2.2.2. La estrategia *contrasubversiva*

Es necesario destacar que en Lima Metropolitana, entre 1980 y 1990, se llegó a declarar el Estado de Emergencia 6 veces a nivel departamental, desde la primera vez el 9 de marzo de 1983, y hasta 29 veces a nivel metropolitano, instaurándose el toque de queda sucesivas veces, desde febrero de 1986, casi simultáneamente con los estados de excepción.

En marzo de 1981, se había promulgado el DL N° 046, que tipificaba el delito de terrorismo y establecía penas contra quienes incurrieran en él. Varios dirigentes populares fueron detenidos merced a este dispositivo legal. Sin embargo, es recién en los 90's cuando, a través de una serie de decretos que estableció el régimen de Fujimori y por los cuales se establecía la centralidad de los trabajos de inteligencia, fueron posibles las capturas de los mandos subversivos del PCP-SL y el MRTA,. De otra parte, con dicho gobierno se inició un proceso de control y militarización de los espacios universitarios, con dispositivos que violentaban flagrantemente la autonomía universitaria, mientras se consideraba a los penales como escuelas de formación de terroristas.

Para algunos mandos militares y policiales, estos mecanismos de represión contra subversiva no eran suficientes pues se ceñían, a pesar de los abusos, a la legislación antiterrorista lo cual impedía una represión selectiva más brutal. Aunque sus operaciones datan de algún tiempo atrás, el Grupo Colina recién es conocido por la opinión pública el 3 de noviembre de 1991, cuando asesina, en Barrios Altos, a 16 personas que participaban de una pollada, dejando a otras cuatro gravemente heridas.

El incremento desbordante de la acción subversiva fue uno de los factores del elevado margen de aprobación al golpe de estado del 5 de abril de 1992, el mismo mes en que un enfrentamiento en Raucana murieron 3 pobladores y Peter Cárdenas Schultz, uno de los líderes del MRTA, es capturado. La polarización militar influyó en las matanzas del penal de Canto Grande y en el secuestro y desaparición de un profesor y nueve estudiantes de La Cantuta, ejecutados por el Grupo Colina en julio de 1992 y conocido públicamente un año después. Señalemos que el 9 de mayo de 1992 una intervención policial, denominada «Mudanza Uno», en los pabellones senderistas del penal de Canto Grande con motivo de trasladar a más de 100 mujeres hacia la cárcel de Chorrillos, originó el asesinato de 35 reclusos acusados por terrorismo, entre los cuales se encontraban Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del Buró Político del PCP-SL, y los responsables de Socorro Popular, Yovanka Pardavé Trujillo y Tito Valle Travesano. Junto con esta represión sangrienta, el gobierno concibió normas que pretendían desactivar los grupos

subversivos, es así que el 12 de mayo, cuando la matanza del penal de Canto Grande aún repercutía en la opinión pública, promulga la que se conoce como Ley de Arrepentimiento-

Año particularmente violento, en 1992 se registró más de la mitad de los atentados subversivos en todo el país, con el despliegue de una oleada de acciones en la capital que buscaba garantizar los paros armados que el PCP-SL convocaba. Tal vez el mayor impacto logrado por el PCP-SL en este período fue el estallido de coches-bomba en Lima, que llegaron a sumar un total de 46 en el período 1991-1992. Aunque la mayoría estaban dirigidos contra comisarías o agencias bancarias, formando parte de una estrategia central en la escalada de violencia, particularmente impactantes fueron los que estallaron el 5 de junio de 1992 en la sede del Canal 2, que causó la muerte de tres trabajadores y, sobre todo, la del 16 de julio en la calle Tarata, en pleno centro comercial de Miraflores, donde murieron 23 personas y más de 100 quedaron heridas.

El éxito mayor del trabajo de inteligencia policial desemboca en la captura de dos principales dirigentes de las organizaciones subversivas ese mismo año: el 9 de junio de 1992 es recapturado el dirigente del MRTA Víctor Polay Campos, «camarada Rolando», en San Borja y el 12 de setiembre el GEIN de la policía captura a Abimael Guzmán y a una parte de la cúpula senderista.

1.5.9.2.3. El final de la violencia: 1993-2000

Estas capturas fueron quizás más determinantes en la derrota de los grupos subversivos que las iniciativas de la sociedad civil de consolidar un frente por la paz, prácticamente desaparecidas en los 90's, a excepción de la reacción frente a los atentados simultáneos que se desarrollaron durante la escalada senderista de julio de 1992, que motivaron el 19 de julio de 1992 una Marcha por la Paz en Miraflores, convocada por el municipio mirafloresino y que contó con la presencia del ministro de Economía, miembros del Ejecutivo y ex parlamentarios. A pesar del grado de vulnerabilidad de las organizaciones y las autoridades periféricas frente a la violencia, las muertes y detenciones no implicaron que el discurso de la pacificación se tornara hegemónico, algo que recién ocurrió al sentirse directamente agredidas las clases dirigentes y los residentes de los distritos financieros residenciales del centro capitalino. Como parte de las manifestaciones simbólicas, se consolidó una imagen que externalizaba al PCP-SL, como el enemigo que atacaba al corazón de la nación, imagen que se alimentaba del prejuicio y de la indiferencia que durante años se manifestaron en el manejo de la información por parte de los medios oficiales.

El repunte de la violencia en 1991 y 1992 correspondió, sin embargo, con la simultánea derrota de la estrategia subversiva, gracias a la captura de sus principales cuadros, como fue el caso de Abimael Guzmán y Víctor Polay. La resonancia política de estos hechos fue capitalizada por el gobierno fujimorista, que logró la reelección presidencial para el período 1995-2000 con un discurso que apelaba a la pacificación nacional frente a la amenaza de la violencia subversiva, que

para entonces estuvo notablemente replegada en el interior del país. Desde 1993 podemos decir, siguiendo nuestra periodización, que hay un declive de las acciones subversivas en la capital fruto de la captura de sus principales líderes y luego, en el caso del PCP-SL, merced a la suscripción de las cartas de paz por sus principales líderes presos. En efecto, en noviembre de 1993 se conoce la división surgida al interior del PCP-SL entre los seguidores de Abimael Guzmán y su acuerdo de Paz, y aquellos de «Feliciano» que pretenden seguir desarrollando la lucha armada. En diciembre, trescientos presos senderistas de Canto Grande se adhieren a las cartas de Abimael Guzmán.

Con la captura de Guzmán las acciones del PCP-SL no cesaron, pero paulatinamente fueron decreciendo los atentados en la ciudad. Este periodo se enmarca en el contexto de consolidación del régimen de Fujimori que ganó credibilidad en los sectores populares de Lima. Las cartas de Guzmán por un Acuerdo de Paz, la captura de los principales dirigentes nacionales del PCP-SL y el MRTA, el viraje de la estrategia contra subversiva de las FFAA hacia acciones de inteligencia y asesinatos selectivos como los realizados por el grupo Colina, además de la legislación antiterrorista, hicieron que se despejara la certidumbre en la opinión pública que el PCP-SL iba ganando la partida.

De otra parte, el MRTA sufre otro golpe rotundo el 30 de noviembre de 1995 con la detención de Miguel Rincón Rincón, importante miembro de la cúpula del MRTA.

Una de las últimas acciones ejecutadas por el PCP-SL en Lima ocurre el 6 de marzo de 1996 cuando tres de sus militantes, entre ellos una mujer, asesinan a Pascuala Rosado, dirigente popular y lideresa de Huaycán. El final del ciclo de violencia, y además el acto de mayor repercusión internacional, ocurrirá a fines de ese año, el 17 de diciembre, día en el cual un comando de 14 miembros del MRTA toma por asalto la residencia del embajador japonés, reteniendo 74 rehenes por varios meses hasta el 22 de abril de 1997, cuando la llamada «crisis de los rehenes» termina con la intervención militar y un saldo de 17 víctimas: el vocal de la Corte Suprema Carlos Giusti, dos oficiales del Ejército y los 14 emerretistas que asaltaron la residencia, algunos asesinados luego de su rendición.

1.5.9.2.4. Resumen

En 1980, los distritos que conformaban la Zona Centro de Lima Metropolitana experimentaron de manera diferenciada el proceso de la guerra interna. Mientras el centro histórico era escenario de las primeras incursiones simbólicas de los grupos subversivos, a partir de mediados de los ochenta esta situación se expandió, con fuertes atentados explosivos en el centro comercial, llegando a declararse en sucesivos momentos el Estado de Emergencia en la capital desde agosto de 1982. Con el cambio de gobierno y de la estrategia contra subversiva, la violencia en la ciudad se tornó más selectiva, a través de asesinatos a dirigentes populares, altos mandos de las fuerzas armadas y funcionarios estatales, adquiriendo resonancia los secuestros y atentados contra personalidades

políticas o empresariales del centro de la capital, la principal caja de resonancia de los grupos alzados en armas.

La diversidad de ataques y mecanismos de propaganda, actos intimidatorios y coerción de los dirigentes llegaron al paroxismo con la violencia desatada entre 1989-1992, en donde la batalla final por el poder pasaba por la conquista de la Zona Centro, como centro económico y político de la nación. La Zona Centro de Lima concentró, en 1992, la mayor cantidad de atentados de todo el país.

A pesar de la sucesión de actos de violencia de años anteriores, los medios de comunicación generan una percepción distante y estereotipada de la guerra interna. Sin embargo, esta situación cambió con el progresivo ataque sistemático al centro financiero, fomentándose la imagen de una posible conquista del poder por parte del PCP-SL, cuya dirigencia central residía en esta Zona Centro. Lejos de estar cercano al triunfo, alcanzando el pico de violencia más alto en 1992, el PCP-SL de modo simultáneo empezaba su caída y el Estado asumía plenamente la iniciativa con la captura de los principales cuadros del PCP-SL y el MRTA en los distritos céntricos.

Fujimori pudo capitalizar los logros de la estrategia contra subversiva y logró la reelección por un nuevo mandato, consolidando sus redes clientelares y de corrupción. Esto generó un malestar social, que fue momentáneamente opacado por la solución militar que se dio a la denominada «crisis de los rehenes», en abril de 1997, y en el tratamiento noticioso que se dio a la captura de Oscar Ramírez Durand «Feliciano», en julio de 1999, mediante lo cual Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos llegaron a presentarse como los artífices de la pacificación nacional.

1.6. LOS EJES COMPLEMENTARIOS

La CVR tiene entre sus objetivos la reconstrucción histórica del proceso nacional de violencia, lo cual incluye la preparación de cinco historias regionales, en las cinco regiones establecidas por la CVR, concebidas como tales en función del mayor índice del conflicto armado interno que se puede constatar entre 1980 y el 2000. Evidentemente, algunos otros espacios quedan fuera de esta reconstrucción, por lo cual la CVR creyó pertinente completar su indagación histórica con el estudio de dos ejes complementarios donde la violencia adquirió niveles importantes, recordando que el concepto de «eje» fue propuesto por el PCP-SL para zonificar, a partir de sus intereses y estrategias, el territorio nacional.

El primer eje que presentaremos incluye las provincias del norte del departamento de Lima y dos provincias del sur del departamento de Ancash. El otro eje está conformado por las provincias de la sierra norte de la Libertad y del sur del departamento de Cajamarca, teniendo la provincia de Huamachuco la mayor importancia. En ambos espacios, los grupos subversivos establecieron corredores, con gran movilidad de destacamentos armados y apoyo inicial de algunos pobladores rurales y algunas comunidades rurales.

1.6.1. Las provincias de la zona norte de Lima y del sur del departamento de Ancash

1.6.1.1. Datos generales

Las provincias de Bolognesi y Ocros, al sur del departamento de Ancash, tienen ciudades capitales que se ubican sobre los 3,553 y 3,230 msnm, respectivamente, en medio de una orografía sumamente accidentada. Como muchas otras provincias serranas del país en el mismo período, la provincia de Bolognesi apenas duplicó su población en un siglo. Más aún, si sumamos las provincias de Bolognesi y Ocros, creada de una fragmentación de la anterior en 1990, según el Censo de 1993 la población es menor (35,600 hab.) a la existente veinte años atrás. El terremoto de 1970 aceleró la fuerte emigración tradicional de las provincias ancashinas hacia espacios y ciudades de la costa, especialmente del «norte chico» y Lima.

Perú 1981-1993: Población del sur de Ancash

Población	1981	1993
Bolognesi	30,868	28,029
Ocros		7,039
Total		35,068

La existencia de latifundios y de formas de trabajo arcaicas, incluso serviles, convivían con las formas de propiedad comunitaria hasta la aplicación de la reforma agraria. La principal actividad económica de esta provincia es la agricultura, con tenencia de la tierra privada o comunal. De 23,125 hectáreas de tierras de cultivo sólo son potencialmente agrícolas 16,280, de las cuales el 5% es cultivable y el 95% no es apto para el sembrío. A la actividad agrícola se suma la pecuaria, con mala calidad de pastos y del ganado, enfermedades, falta de apoyo técnico y carencia de vías de comunicación. La minería, en los últimos años, ha crecido en importancia, impactando en los pueblos aledaños a cada mina

El panorama socioeconómico es casi el mismo en las provincias de Cajatambo y Oyón, del departamento de Lima. La provincia de Cajatambo fue creada al momento de nacer la república, en 1821, en la parte occidental de la cordillera. En un primer momento perteneció al departamento de Ancash y posteriormente al departamento de Junín; finalmente el Congreso de 1916 la incorporó como provincia de Lima. La ciudad capital se ubica a 3376 msnm, en el centro de un territorio de superficie accidentada, con grandes elevaciones, que reúne una continuidad de características con Bolognesi y Ocos, las provincias colindantes. Por su parte, la provincia de Oyón fue creada en medio del proceso del conflicto armado interno, en 1990. Zona minera de vieja data, la economía provincial se complementa con actividades agropecuarias. Antes de la aplicación de la Reforma Agraria, existieron algunos latifundios en la provincia, sobre todo ganaderos, coexistentes con territorios comunales.

Configurando un escenario productivo bastante similar al existente en toda la sierra peruana, la cercanía a la capital del país y a la zona costera requerida de mano de obra, ha signado sin embargo el sostenido flujo de emigración de la población de estas cuatro provincias serranas colindantes, el cual produce como resultado el abandono de extensas áreas de cultivo.

Perú 1981-1993: Población del norte de Lima

Población	1981	1993
Cajatambo	28,555	9,475
Oyón		17,279
Barranca		114,051
Huaura		163,174

La realidad es diferente en el caso de las provincias de Barranca y Huaura, activos centros comerciales, agrícolas e industriales. Creada también en pleno proceso del conflicto armado interno, en 1984, con la incorporación de cinco distritos (Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto), la provincia de Barranca tiene como capital la ciudad del mismo nombre, uno de los centros económicos —el otro es Huacho— de todas las provincias que hemos reunido en el estudio de este eje, cuyo crecimiento costero está en relación directa con el despoblamiento de las

provincias serranas. En el espacio provincial de Barranca se identifica la importante producción agropecuaria en el complejo industrial de Paramonga, además de modernos establos lecheros con ganado de raza y diversas granjas avícolas. Supe, por otro lado, en un importante núcleo de pesca industrial y artesanal. Como dijimos, Barranca es el centro comercial de los pueblos del interior como Ocros, Cajatambo, Bolognesi y Oyón, cuyos pobladores viajan permanentemente para adquirir allí productos industriales y alimenticios de diversa índole.

Por ley de 1988, la antigua provincia de Chancay cambió su denominación por la de Huaura, que cuenta con 12 distritos. Después de Lima, la provincia de Huaura es la más poblada del departamento, con un crecimiento demográfico sostenido que ha llevado de 112694 habitantes en 1972 a 164,704 habitantes en 1993. Las dos actividades primarias principales en las cuales se sustenta la actividad económica de la provincia son la agropecuaria y la pesquera, pero cabe destacar la dinámica que impulsa el conglomerado urbano Huacho-Huaura, que reúne casi la mitad de la población provincial y alberga importantes centros fabriles.

1.6.1.1. Historia de la violencia

1.6.1.2.1. El circuito educativo, inicio de la violencia: 1980-1984

Según diversos testimonios recogidos por la CVR, la presencia de los primeros militantes senderistas en la sierra norte de Lima, nos remite al mismo «circuito educativo» verificable en cualquier región del país, que incluye el reclutamiento de militantes en las Universidades, así como de profesores de colegios públicos y escuelas rurales, base partidaria sobre la cual el PCP-SL construye su propuesta político-militar.

La Universidad Faustino Sánchez Carrión (FSC), cuya sede principal está en Huacho es el principal centro universitario de la zona. Las pugnas entre los grupos más radicales se centran no sólo en asuntos ideológicos o de estrategia política, sino sobre todo en el control de instancias claves para el manejo de servicios y recursos que permitan la reproducción del grupo que los controla. Los debates a fines de los años 70 entre el FER, UNIR, Bandera Roja, Vanguardia Revolucionaria, Estrella Roja, MIR Perú, PC-Unidad, el PCP-SL, son los mismos que en cualquier universidad pública peruana de aquella época. A partir de algunos docentes ubicados estratégicamente el objetivo del PCP-SL fue capturar la administración del comedor universitario, de vital importancia para captar a sus usuarios, de procedencia centralmente rural. Al control del comedor se suma en la estrategia inicial senderista el manejo del Centro de Arte de la Universidad, que permitió también captar y adoctrinar miembros del PCP-SL. Por último, el PCP-SL también llegó a administrar la casa editora de la Universidad, puesta al servicio clandestino de su aparato de prensa.

1.6.1.2.1.1. Bases locales con mil ojos y mil oídos

A partir de 1980, el PCP-SL desplazó miembros de su agrupación política en forma sistemática en diferentes comunidades y algunas instituciones de la provincia de Cajatambo (Paca, Nunumia, Cochash, Suro, Gorgor, Manás, Huancapón, Copa, entre otros), lugares que se encuentran en las zonas más altas y alejadas de la capital de la provincia, pero son hitos de comunicación entre las provincias de Barranca, Huaura, Oyón, por la parte sur, por la zona norte con Ocos y Bolognesi y hacia el este con Cerro de Pasco. En la memoria de los pobladores queda el recuerdo, además por supuesto de los primeros maestros senderistas, de algunos vendedores ambulantes, compradores de jumentos, pequeños comerciantes y empleados públicos, a quienes se pudo reconocer luego como integrantes del PCP-SL, y que cumplían en aquel entonces labores de reconocimiento de la realidad, identificación de problemas prioritarios de las comunidades, ubicación de personas y registro del comportamiento de la población en diferentes actividades. Este trabajo le fue ganando ascendencia y liderazgo en el espacio formal en que actuaban, algunos por corto tiempo, rotando a otra comunidad, mientras otros se establecían por más tiempo y eran los encargados de captar nuevos simpatizantes.

1.6.1.2.2. La violencia se instala: 1985-1988

Todo este proceso de «acumulación de simpatizantes» duró aproximadamente hasta 1985, cuando se registran en Cajatambo las primeras incursiones de una columna senderista, sumamente móvil, en la parte alto andina. El asesinato del Teniente Alcalde de Gorgor, es la primera muerte registrada de autoridades en todas las provincias consideradas en el presente estudio. La constitución de esta Fuerza Principal (que es el nombre que el PCP-SL asigna a sus columnas armadas) encargada de las acciones militares, se hace con algunos cuadros de experiencia provenientes de otras zonas, pero contando con militantes locales que permiten la relación de la columna con los grupos locales organizados. Entre 1985 y 1986, la columna armada senderista ejecuta en Pacllón, Bolognesi, a Máximo Ibarra Paucar, director del C.E, al Juez Abelardo Duran Carrera, al profesor Zósimo Mendoza Huaranga y al agricultor Joel Mendoza Huaranga, todos ellos acusados por el PCP-SL de haber denunciado ante la Policía sus actividades de organización. También en Bolognesi, en la localidad de Corpanqui, el mismo grupo armado del PCP-SL asesina al enfermero Flores Laurente, con el mismo argumento de delación. La actuación de esta columna armada nos recuerda una doble estrategia: de anclaje en la población. En primer lugar, de manera similar a lo sucedido en otras partes del país, el PCP-SL asesina o sanciona a personas de conducta no aceptada por la población, y en segundo lugar aprovecha los conflictos locales para asentar su presencia.

Entre 1987 y 1988 se registra, en las cuencas de Nunumia, Cochash, Paca, Colpa, de las provincias de Bolognesi y Ocos, el asesinato por el PCP-SL de personas de «conducta antisocial»

(abigeos, mujeriegos, etc.), como una campesina y un abigeo asesinados en 1987 en Huayllacayán, en la provincia de Bolognesi. Ese mismo año, Janio García Herbozo es ajusticiado por el PCP-SL en la plaza principal del pueblo de Gorgor, en Cajatambo, previo «juicio popular», acusado de extorsionar a los habitantes de Cochas, mientras que en 1988 son asesinados en Nunumia los hermanos Maza, acusados de abigeato. Uno de los hermanos sufrió el apuñalamiento sistemático de la columna senderista y de algunos asistentes a la asamblea hasta morir; mientras que el otro hermano fue desnucado con un bozal de caballo en presencia de los asambleístas.

El «ajusticiamiento» era el corolario ya conocido del ritual senderista de «juicio popular» en una «asamblea popular». Es evidente que estos asesinatos de «indeseables» generaron una amplia simpatía en las comunidades, que entendían que estas acciones hacían verdadera justicia a diferencia de la inoperancia del sistema de justicia legal y la policía.

La otra estrategia implementada por el PCP-SL es la utilización de conflictos locales para fortalecer su organización partidaria realizando acciones vinculadas a reivindicaciones locales justas. Un ejemplo lo encontramos en la provincia de Oyon, específicamente en la localidad de Yarucaya, donde nuestros entrevistados señalan que, sobre la base de los antiguos problemas por linderos de tierras entre Cochamarca y Yarucaya, integrantes del PCP-SL se dedicaron a realizar su trabajo organizativo hasta conformar un Comité Popular en estos años.

El objetivo central de la estrategia senderista es la generación de un vacío de poder, buscado a través de la eliminación o el retiro de autoridades de diversa índole, a lo cual se suma el sabotaje permanente de instalaciones y locales públicos. Así, en estos años, aumentan las amenazas a dirigentes y a quienes postulaban a los municipios y concejalías. Comienza en ese momento el éxodo de dirigentes y jóvenes que no quieren involucrarse en las actividades subversivas.

Por su parte, evidenciando que también disponía de un trabajo de inteligencia en la zona, en 1985 la Policía mata a un cuadro senderista, «Puli», en la localidad de Rajanya. En los años siguientes, las fuerzas policiales llevan adelante su estrategia de respuesta, en la cual un objetivo central eran estudiantes universitarios, supuestos integrantes del PCP-SL. En 1987, En Huaura, las fuerzas policiales asesinaron al estudiante universitario Robinsón Silva Mori, acusado de terrorismo.

En las partes altas, sin embargo, el PCP-SL se desplaza con facilidad, casi sin encontrar resistencia. En 1988, en las provincias de Bolognesi y Ocros, la «visita» de los senderistas se vuelve más continua. Según nuestros entrevistados, se trataba de un grupo armado de 7 personas como mínimo y 11 como máximo, mayoritariamente hombres. Visitaban primero a los responsables de los Comités Populares ya constituidos para informarse de su actuación. El grado de aceptación que el PCP-SL tenía en algunas comunidades se puede medir, entre otras variables, por la actuación de los integrantes de la columna con el rostro descubierto en las localidades donde han instalado Comités Populares o tienen bases de apoyo. Como en todos los escenarios de violencia, los Comités Populares también servían para ajustar cuentas de conflictos lugareños: «Canis es un

pueblo que llegó a ser comité popular abierto, el más avanzado de todos, fue el corazón de la base de apoyo de esa zona, del cual también formaba parte Huanri y toda la vasta zona de la provincia de Bolognesi (Ocros), allí las masas han vivido el nuevo estado...» (Texto del senderista «Rólan», «Huyendo de las garras negras»).

La ampliación de las operaciones de las bases de las fuerzas principales del PCP-SL, en relación directa esos años con la ampliación de su base social, se expresa en 1987 en el atentado al Puesto Policial del distrito de Gorgor, en Cajatambo, que ocasionó dos víctimas, los policías Medina y Dávila. El incremento de la violencia se expresa en 1988 en la ejecución del comunero Abraham Victorio Herrera, «Trucha», en la localidad de Tuntur - Tocanca – Cajatambo, mientras que en Raquia en 1989 son asesinados el Alcalde Emiliano Díaz, el Juez Sabino Aguirre y el Secretario de CORDE Ancash. En el mismo distrito, en la localidad de Colca, el año de 1988, el PCP-SL asesina a dos abigeos. Por su parte, aquel año, un destacamento del ejército asesina en Chasquitambo a Juan Gamarra, acusándolo de terrorista.

La adhesión de algunas localidades, o de algunos pobladores de estas localidades, se puede matizar con el sometimiento temeroso a las propuestas senderistas, que genera estrategias de supervivencia. Así rescatamos, a partir de entrevistas realizadas en Ocros, el comportamiento de algunos «comisarios» designados por el PCP-SL, que actuaban estratégicamente frente a los senderistas pues cada vez que retornaban los jefes y la base armada del PCP-SL a pedir informes sobre la marcha de la comunidad, para de acuerdo a ello aplicar sanciones, estas autoridades informaban que todo estaba en orden y que las disposiciones se estaban cumpliendo normalmente, aunque la realidad era diferente a lo informado. Ejemplos nítidos de este comportamiento, los encontramos en Ocros en los pueblos de Pimachi, Aco, Huanri, Llipa y Cajamarquilla. Incluso, en el distrito de Llipa cuando en una ocasión llegaron las fuerzas militares a aprehender a los comisarios designados por el PCP-SL, la comunidad en pleno se presentó ante las fuerzas del orden para informar que su actitud de apoyo a los subversivos se debió a la presión que éstos impusieron bajo amenaza de muerte, y como prueba de ello mostraron y entregaron todos los apuntes de las clases que recibían.

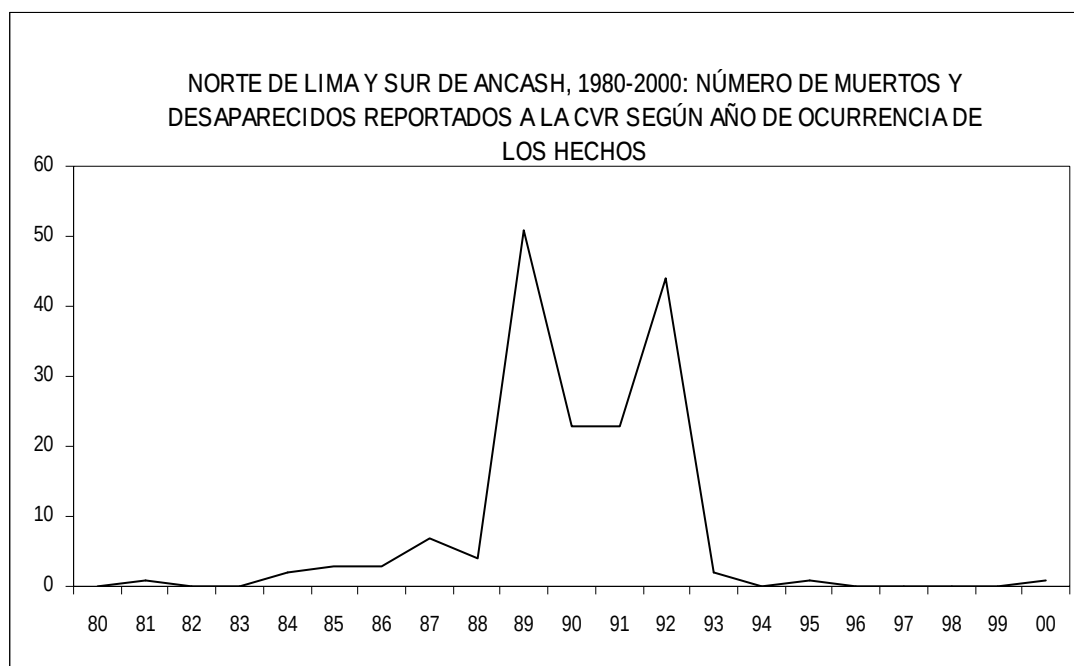
El espacio de operación militar de los senderistas era básicamente el ámbito rural, evitando incursionar en las capitales provinciales no sólo por su escasa capacidad de fuego, sino posiblemente porque las consideraban estratégicas por dos razones: como un lugar de aprovisionamiento de víveres y otras necesidades, y porque eran puntos claves de acceso a diferentes lugares y pueblos en su ámbito inmediato.

1.6.1.2.3. La mayor violencia; de la sierra a la costa: 1989-1993

La mayor intensidad de la violencia se registra, en espacios distintos, entre 1989 y 1993. En un primer momento, 1989-90, el escenario es principalmente serrano, y entre 1990 y 1993, los muertos se concentran en localidades costañas.

NORTE DE LIMA Y SUR DE ANCASH 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	164	-	1	-	-	2	3	3	7	4	51	23	22	44	2	-	1	-	-	-	-	1
BOLOGNESI	47	-	-	-	-	2	3	3	3	3	20	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1
OCROS	28	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BARRANCA	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-
CAJATAMBO	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	5	9	-	-	1	-	-	-	-	-
HUAURA	38	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	26	2	-	-	-	-	-	-	-
OYON	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-



La lista de asesinados por el PCP-SL en 1988 es extensa. En Llaclla, Bolognesi, el PCP-SL mata a la señora Sevine Cotrina Retuerto, «por dar posada a un desconocido», y a su hijo Edis Moreno Cotrina por reclamar por su madre. En el mismo pueblo de Llaclla en 1990, es muerto Ángel Ayala, ingeniero de la Micro región de Bolognesi. En 1989 en Raján, Ocros, son asesinados Rosario Rojas, Vice Presidente de la Comunidad, y Abraham Castillo, Alcalde, además de Martín Rojas, Samuray Rojas y Hitler Rojas, estos últimos al parecer por pedir cupos a nombre del PCP-SL. Los muertos en Raján aumentan en 1991 con los asesinatos de Eva Higinio y Benito Calisto, y luego del Sr. Ventocilla y su conviviente por pedir cupos en las diferentes tiendas aduciendo ser

senderistas. En Llipa, Ocros, aquel año el PCP-SL asesinó a Ibar Arteaga acusándolo de ser espía de las fuerzas policiales.

Igualmente en 1989, en Bolognesi, los senderistas incendiaron el ómnibus de la empresa TRANVICSA en el trayecto de Chiquián y Aquia, asesinando al dueño Isaac Carmen por no haber acatado el paro armado convocado en la región.

En la provincia vecina de Cajatambo, el PCP-SL asesinó en la comunidad de Nunumia en 1989, a resultas de un «juicio popular», a Marcelino Mendoza Dávila, Presidente de la comunidad de Cochas, Agustín Chavarría Rojas, secretario de la misma comunidad, al profesor Raúl Chavarría Rosales, y a Antonio Vega Busish, comunero evangélico.

La agresión a las autoridades resistentes y profesores no simpatizantes continuó en el distrito de Huacapón, Cajatambo, con el asesinato de tres autoridades, el Alcalde Juan Lizzetti Torres, el Juez de Paz Willy Lizzetti Salazar y el Teniente Gobernador Inocente Cabanillas Rosales, junto con dos profesores, Ángeles Concepción Chávez y Solís. Esta ejecución en el distrito de Huancapón coincidió en fecha y hora con la ejecución del Alcalde Provincial de Cajatambo, Prof. Felipe Vergara, en la localidad de Astobamba, en las cercanías de la capital provincial, en el mes de octubre. En Gorgor, ese año, los senderistas asesinaron a Armengol Arce Gamarra, Pablo Reynaldo Arce Gamarra y Dominga Arce Ventosilla, y en Chiquián, capital de Bolognesi terminó con la vida del profesor Luis Jaimes.

Una prueba rotunda de la movilidad de los grupos armados senderistas se encuentra en Oyon, donde los integrantes de la «Fuerza Principal», entre 6 y 9 personas comandadas por el «Negro», establecen un corredor desde Cochas bajando por Andajes, Naván, Cochamarca, Yarucaya, Ambar, Aynaca para cerrar el círculo volviendo por Oyón. En este itinerario se incluye Santa Cruz, a donde incursionaron por primera vez asesinando al Alcalde Máximo León Pacheco, a Natalio Gonzáles Presidente de la comunidad, a Alfredo Torres Pacheco Presidente de la APAFA, a Luis Salazar Córdor por abigeo, llevándose como rehenes a tres comuneros, Emilio Torres, Zenón Torres, Marcelo Torres Pacheco. El viaje de la fuerza principal senderista continúa hacia el anexo de Auquimarca, donde destruyen un tractor, para luego dirigirse a la comunidad de Ihuarí, donde convocaron a toda la población en la plaza y asesinaron a Víctor Fernández, Teniente Gobernador, y Pablo Carrasco, Presidente de Vigilancia de la comunidad. En esta reconstrucción, se confirma que en la localidad de Otec, bajo el mismo esquema de un «juicio popular» teniendo como testigo a toda la población, los senderistas asesinaron a Raúl Rojas, Presidente de la comunidad, y a Isidoro Gómez Rivera, Teniente gobernador, reclutando por la fuerza a 4 jóvenes.

Pero los ataques más osados y de repercusiones mayores fueron, en primer lugar, la emboscada en Cajatambo a un carro porta tropa de la Policía Nacional en la localidad de Rajanya (Gorgor), donde murieron 6 policías, y de otra parte la retención del ómnibus del Concejo Provincial de Cajatambo en la localidad de Cami, en la subida a Cajatambo, donde luego de

apresar a todos los pasajeros, los senderistas procedieron a asesinar a siete personas, dos civiles y cinco Guardias Republicanos.

La ofensiva senderista se extendió entre 1989 y 1990 a blancos situados en localidades costeñas, asesinando a Edgardo Reyes, Alcalde de Supe Pueblo. En Ambar, cerca de Huacho, se produjo el atentado al Puesto Policial y Palacio Municipal en Ámbar, del cual resultaron muertos el Teniente Alcalde, un Regidor y dos campesinos.

La respuesta policial incrementa la lista de muertos y desaparecidos pues en Raján, Ocros, son aprehendidas y desaparecidas por las fuerzas policiales, en distintos momentos, Mamerta Patricio y Norma Higinio Requena, mientras que es ejecutado Aider De la Cruz, acusado de pertenecer a las filas del PCP-SL.

Las desapariciones ocurren también en Oyón, en la localidad de Colcapampa, donde nueve comuneros detenidos por las fuerzas militares, acusados de terrorismo, nunca volvieron a aparecer. Habiendo extendido las acciones de las fuerzas principales del PCP-SL a localidades de la costa, allí también se genera la respuesta de las fuerzas policiales, que en 1989 detienen en Aynaca-Ámbar y asesinan luego a Jorge Napoleón, Goñe León López y Vibiana López Collazos, acusados de terroristas, mientras que en San José de Manzanares, en Huacho, la policía detiene y desaparece a Antonio Osoreo De la Cruz, igualmente sospechoso de terrorista.

Quizás el hecho más brutal de la contraofensiva de la policía ocurrió en 1990 en algunos poblados de la provincia de Bolognesi. El 9 de mayo de 1990, en las comunidades de Pimachi, Aco y Huanri, fueron detenidos por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional los pobladores José Chávez Loli, José Beltrán, Cornelio Abad Ediolino, Elfer Abad Casimiro, Roberto Loli Marzano, Ambrosio Surco Cama, Celestino Martínez Gavino y Orlando Anastasio Soberan. Los detenidos fueron conducidos a la localidad de Cahua, en Cajatambo, en donde se encontraba ubicado un puesto policial. De esta localidad la policía especializada se retiró conjuntamente con los detenidos el 12 de mayo de 1990 pero el destino y situación de los detenidos resultó un misterio para los familiares de las víctimas, más aún cuando el hecho fue negado en reiteradas oportunidades por las autoridades civiles, policiales y militares. Según algunos de sus coterráneos, los detenidos habrían sido conducidos en una mina abandonada en el paraje de Chinchis, entre Raján y Llipa.

Desvirtuando definitivamente esa versión, a fines de 1990 fue descubierta una fosa clandestina en un paraje desolado conocido como Chontapunta, a 4500 msnm, en el distrito de Corpanqui. Alertados los familiares de este hallazgo se dirigieron a la zona y lograron identificar los cadáveres de sus familiares, los mismos que se encontraban en avanzado estado de descomposición. Los cuerpos mostraban las manos maniatadas con sogas y un orificio de bala en la sien. Hasta ese momento la policía impidió el levantamiento de los cadáveres y su formal identificación. Tanto el Fiscal provincial de Bolognesi como el Juez Instructor de la zona se negaron a constituirse al lugar, alegando absoluta falta de garantías. Frente a este comportamiento

de las autoridades los familiares presentaron sus quejas a la oficina de los Derechos Humanos en Huacho y Lima. Estas instituciones solicitaron garantías para los familiares de las víctimas frente a posibles represalias que pudiera tomar los militares, quienes patrullaban la zona constantemente, e incluso llegaron a quemar los cadáveres para que no sean reconocidos.

A esta desaparición grupal, se suma la detención en Llaclla del campesino Esau Moreno Cotrina, de Nilton Loli Mauricio, Director del C.E., y del profesor Saturnino Cerrate, acusados de senderistas y cuyos cuerpos nunca han sido hallados.

Lejos de allí, las fuerzas policiales asesinan en Huacho a Aldo Alvarado Ramírez y Alberto Farromeque Cano, acusándolos de terroristas y en Humaya hacen lo mismo con Ernesto Raúl Castillo Blas.

1.6.1.2.4. Desde 1990, golpes a las fuerzas principales del PCP-SL, respuesta del PCP- SL y fin de la violencia en 1993

La mayor cantidad de muertos, 51 en total, se registra en 1989, pero las detenciones y asesinatos arbitrarios no deben ocultar la acción militar-policial eficiente que asesta golpes decisivos a las fuerzas combatientes senderistas es mismo año. Alertados por los comuneros de Cochamarca, Oyón, un destacamento militar se enfrenta a la columna senderista, que es diezmada con la muerte de tres profesores, «Raúl», de Yarucaya, Porfirio Jiménez y Wagner Huamán Jiménez, el estudiante Ángel Jiménez León, el promotor de salud Jacinto Ramírez Jiménez, y los comuneros Rolando Reyes Tena de Cochamarca, y Sergio Gaytan Jiménez.

Otro enfrentamiento, esta vez con las fuerzas policiales, se produce en Ambar, Huaura, con el saldo de dos subversivos muertos. En el mismo distrito de Ambar, el mismo año de 1990, se produce un tercer enfrentamiento en Aynaca con un total de 5 muertos, algunos de los cuales según parece eran importantes cuadros militares.

La estrategia contrasubversiva había impulsado la constitución de Comités de Autodefensa para complementar las acciones militares y policiales. Así, la acción meramente policial y la actividad de las rondas en gestación, se combinan exitosamente para frenar la ofensiva senderista.

... hacia los años 89 y 90 el campesinado que antes era dominado por Sendero Luminoso entran a organizarse en las rondas campesinas por eso nosotros por ejemplo en el ámbito de esta zona vamos a encontrar como en Cochapampa, Cochamarca, como en Ambar dentro de la provincia de Huaura, como en Cochaspatha, como en la provincia de Cajatambo como en Aquia o Ocros, en la provincia de Ocros, una reacción propia de los campesinos en comités de autodefensa y aptitud bien tomada puesto que se rebelaron inclusive obligaron a la retirada a la subversión...(Prof. JLP, Huacho).

Reagrupados y posiblemente replanteando su estrategia, las senderistas responden recién en 1992, cuando el 5 de marzo, en los caseríos de Pihuan, Jurau-Cochas, en Cajatambo, asesinan a 10 personas por apoyar la formación de rondas: Máximo Herbozo Tolentino, Cristina Morales Blas,

Elena Herbozo Morales, Eusebio Tolentino Navarro, Cirilo Tolentino Medina, Jorge Estrada Mendoza, Perpetua Chavarría López, Máximo Herbozo Morales, Oscar Tolentino Medina, Pedro Chevarria.

Eso de las seis y media de la tarde, en plena lluvia, una lluvia torrencial, teníamos que escapar, todos teníamos que escapar, todos los que podíamos. Pero algunos no pudieron. Esa fecha fue muerto don Máximo Herbozo Tolentino, que es el hermano de mi esposa, degollado él, su esposa degollado, su hija, degollado, su hijo de catorce años también degollado así, todos degollados como un carnerito. Llegó a Cochas, mató a mi sobrino Jorge Estrada Mendoza... y este, su esposa recién había dado a luz un bebito de, recién de tres días que estuvo postrada en la cama, la esposa al cuidado de ella, no pudo escapar el esposo Jorge Estrada Mendoza. Entonces, fue degollado también Jorge Estrada. Su esposa también fue degollada. Sólo el bebito lo encontramos, ese bebito de tres, cuatro días, estaba llorando sobre su cama. Y los restos estaban degollados. Igual, también ese día degollaron a mi tío Eusebio Tolentino Navarro, a mis primos Cirilo Tolentino Medina, a mi primo este Oscar Tolentino Medina, también lo degollaron. Todos fueron degollados así como carne, no tenían cabeza. O sea, perdí parte de mi familia (FTR)

En Oyon, el golpe decisivo contra los senderistas parece ser el originado por una emboscada en Paran, en 1992, a un destacamento del Ejército. La respuesta inmediata de las fuerzas militares logra cerrar el cerco sobre los senderistas, quienes pierden sus mejores cuadros, entre ellos Dante, conocido como «el sanguinario». Los hechos posteriores confirman que estas muertes marcaron el declive definitivo de las acciones armadas del PCP-SL en esta provincia. Desde 1992, año de la captura de Abimael Guzmán, las acciones senderistas, aunque frenadas por el accionar de militares y policías, se concentrarán sobre todo en las provincias costeñas, donde también se registra en los hechos la respuesta de las fuerzas contrasubversivas. Se trata, para ambos actores, de asesinatos selectivos en función de sus estrategias.

En Barranca, en 1992, militantes senderistas asesinan al candidato a la Alcaldía provincial Orlando Tapia, de Acción Popular y al dueño de Radio Fortaleza, Santiago Jau. En Huaura cae abatida Irene Gonzáles Camones, Secretaria General de Cambio 90 de la Provincia, así como el Alcalde del Distrito de Huaura, Jesús Morales Bermúdez, y el empleado Róger Huerta

A estos asesinatos se suman los atentados dinamiteros contra los locales del Banco de Materiales, Banco de la Nación y la Garita de Control del Distrito de Huaura, donde muere el policía Osvaldo Alvarado Solís. La destrucción de la Panadería San Francisco de Huaura añade un dato inexplicable a nuestra historia.

También en las provincias que ahora reseñamos, quedaron sin explicar algunos asesinatos que la población asigna a «grupos paramilitares», o al «Grupo Colina». Si bien los autores no han sido identificados, la lista de muertos y desaparecidos es conocida. En Barranca, en 1992, seis encapuchados asesinaron a Marco Antonio Martínez Morales, mientras que en Caraqueño, también en Barranca, otro grupo signado como paramilitar asesinó a Ernesto Arias Velásquez (profesor), César Rodríguez Esquivel (campesino), Felandro Castillo Manrique (campesino), John Calderón Ríos (estudiante), Toribio Aponte Ortiz (campesino), Pedro Agüero Rivera (chofer).

En Huacho se registró el secuestro y desaparición del periodista Pedro Yauri Bustamante, crimen cuya autoría se presume fue del grupo «Colina». En Huaura desaparece Gualberto Rodríguez Paucar tildado de senderista. El asesinato más notorio ocurre en la campiña del valle de Huaura, al parecer cometido por el grupo Colina, que asesina a 5 integrantes de la familia Ventocilla, por brindar apoyo a grupos senderistas itinerantes.

Entre 1992 y 1993 el PCP-SL convocó a tres paros armados en la provincia de Barranca, los mismos que fueron acatados por la población atemorizada por los probables atentados. El incremento de la propaganda y las acciones del PCP-SL en Barranca obligó a la instalación de tres bases militares en la provincia en Puerto Supe, Barranca y Chilcal (Huayto) en Paramonga.

La agresividad de los senderistas contra algunos poblados que rechazaban su propuesta político-militar está ejemplificada en el pueblo de Andajes, atacado en 1990 para asesinar selectivamente a: Alejandro Torres, Heracleo Segundo, Juan Segundo, Cornejo y Tito, autoridades de la localidad. Cuatro años después, en 1994, el PCP-SL incursiona nuevamente en Andajes asesinando a seis personas. A raíz de este hecho sangriento se establece el funcionamiento de un destacamento Policial de 50 efectivos.

Los acuerdos suscritos por Abimael Guzmán con el gobierno, las acciones de los destacamentos militares y policiales, y sobre todo la pérdida de su base social, en buena medida convertida en Comités de Autodefensa luego de varios años de violencia indiscriminada contra autoridades comunales o pobladores, implican desde 1996 el final de la actividad senderista en nuestras provincias

Como hemos explicado, entre 1985 y 1993 se desarrolló, en las provincias del norte del departamento de Lima y el sur de Ancash, un ciclo del conflicto armado interno que alteró significativamente la vida de los pobladores urbanos y rurales. Para los dirigentes máximos del PCP-SL, la estrategia de cercar Lima impulsando una guerra campesina, liquidando autoridades del «viejo orden», y realizando acciones de sabotaje y emboscadas, implicó que aquellas provincias, articuladas en un «eje de acción», fueran privilegiadas en la expansión de su trabajo político y militar. La estrategia de «estrangulamiento» de Lima implicaba cortar la vía de acceso de los pueblos a la capital en la fase de la toma definitiva de Lima obligaría, en el designio senderista, a la desconcentración y salida de las fuerzas militares del estado de Lima hacia las provincias, facilitando a largo plazo el ingreso a la capital.

En esta parte del país, al igual que en las demás, el desencadenamiento de la violencia fue justificado por el PCP-SL en la desocupación, la marginación, la pobreza extrema y la práctica de la moral. En base a una instalación inicial a través de maestros y estudiantes, utilizando conflictos locales de vieja data, proponiendo un discurso de justicia y un nuevo orden social, el PCP-SL logró el apoyo de algunas comunidades que fueron organizadas como bases de apoyo y Comités Populares. Esta estrategia de guerra del PCP-SL, combinada con el trabajo político de organización de bases de apoyo, generó una respuesta estatal que parecía no haber aprendido mucho después de

cinco años de guerra, priorizando así inicialmente la represión militar, la cual afectó indiscriminadamente a la población y al movimiento gremial, tratando por igual de sospechosos de terrorismo a muchos pobladores aunque sus actividades eran de mera protesta o simplemente de expresión de descontento ante la situación económica. El deterioro del gobierno aprista y la represión indiscriminada facilitaron la presencia cada vez mayor de los grupos senderistas, pero éstos ofrecían, de manera creciente, un escenario de guerra sin alternativas para el futuro. Los pueblos, en muchos casos colocados en el fuego cruzado del PCP-SL y el de las fuerzas represivas, decidieron retirar su apoyo inicial a la propuesta senderista que, con sus acciones armadas, había generado las secuelas inevitables de desconfianza, descontento y temor generalizado entre los pobladores que optaron por apoyar la conformación de Comités de Autodefensa.

1.6.1.3. Cronología Ancash-Lima

Junio 1985	Miembros de las fuerzas militares del PCP-SL ejecuta en Pacllón (Bolognesi) a Máximo Ibarra Paucar, Director del C.E, al Juez Abelardo Duran Padilla, al Profesor Sósimo Mendoza Huaranga (Profesor) y al agricultor Joel Mendoza Huaranga, acusados de haber denunciado al PCP-SL.
Agosto 1987	El PCP-SL asesina a personas por «conductas inmorales» en las cuencas de Nunumia, Cochas, Paca, Colpa, de las provincias de Bolognesi y Ocros.
Agosto 1987	Ejecución de personas de conducta inmoral (abigeos, mujeriegos, etc.) en las cuencas Nunumia, Cochas, Paca, Colpa, etc., por el PCP-SL.
Febrero 1987	Atentado al Puesto Policial del distrito de Gorgor, dos policías víctimas
11/8/1987	En Huaura, las fuerzas policiales asesinan al estudiante universitario Robinsón Silva Mori, acusado de terrorismo.
1987	El PCP-SL atenta contra el Puesto Policial del distrito de Gorgor, en Cajatambo.
Junio 1988	Son asesinados por el PCP-SL en Nunumia los hermanos Maza, acusados de abigeato
1989	El PCP-SL asesina en Cochaspaca, Cajatambo, a Marcelino Mendoza Dávila (Presidente de la comunidad, Agustín Chavarría Rojas, secretario; Raúl Cavaría Rosales, profesor; y Antonio Vega Busich, comunero evangélico.
Setiembre 1989	El PCP-SL asesina 5 personas en el distrito de Huancapón: el Alcalde Juan Lizzetti Torres, el Juez de Paz Willy Lizzetti Salazar, el Teniente Gobernador Inocente Cabanillas Rosales y dos profesores: Ángeles Concepción Chávez y Solís. Estos asesinatos coinciden en fecha y hora con el asesinato del Alcalde de Cajatambo.
Octubre 1989	Emboscada del ómnibus del Concejo Provincial de Cajatambo en la localidad de Cami, Cajatambo y asesinato de siete personas, dos civiles y cinco guardias republicanos.
26/7/1989	En Colcapampa, Maní, Oyón, 9 comuneros son detenidos y desaparecidos por las fuerzas militares acusados de terrorismo.
9/5/1990	En las comunidades de Pimachi, Aco y Huanri (Bolognesi), son detenidos y desaparecidos por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional: José Chávez Loli, José Beltrán, Cornelio Abad Ediolino, Elfer Abad Casimiro, Roberto Loli Marzano, Ambrosio Surco Cama, Celestino Martínez Gavino, Anastasio Soberanis Orlando.
12/7/1990	El PCP-SL se enfrenta en Cochamarca, Oyón, con los militares. Mueren Raúl (profesor de Yarucaya), Porfirio Jiménez (profesor), Wagner Huamán Jiménez

	(profesor), Ángel Jiménez León (alumno), Jacinto Ramírez Jiménez (promotor de Salud), Rolando Reyes Tena (vecino de Cochamarca), Sergio Gaytan Jiménez (vecino de Cochamarca).
Noviembre 1990	El PCP-SL incursiona en Andajes y asesina a: Alejandro Torres, Heracleo Segundo, Juan Segundo, Cornejo y Tito, La mayoría de ellos eran autoridades de la localidad.
5/3/1992	En los caseríos de Pihuan, Jurau-Cochas (Cajatambo), PCP-SL mata a 9 personas por apoyar la formación de ronderos: Máximo Herbozo Tolentino, Cristina Morales Blas, María Herbozo Morales, Eusebio Tolentino Navarro, Alejandro Tolentino Medina, Jorge Estrada Mendoza, Perpetua Cavaría López, Máximo Herbozo Morales, Oscar Tolentino Medina.
24/6/1992	El grupo paramilitar «Colina» asesina a 5 integrantes de la familia Ventocilla Castillo en el valle de Huaura, acusándolos de ser integrante del PCP-SL.
1992	En Caraqueño (Barranca) el grupo para-militar asesinó a: Ernesto Arias Velásquez (profesor), César Rodríguez Esquivel (campesino), Felandro Castillo Manrique (campesino), John Calderón Ríos (estudiante), Toribio Aponte Ortiz (campesino), Pedro Agüero Rivera (chofer).
1993	Debido a la violencia intensa en esta zona se produce la militarización de la provincia por parte del ejército instalándose tres bases en Puerto Supe, Barranca y Paramonga.
12/4/1994	El PCP-SL ejecuta en Andajes (Huaura) a 6 personas. A raíz de este hecho sangriento se establece el funcionamiento de un destacamento Policial de 50 efectivos.

1.6.2. El Eje La Libertad-Cajamarca: Santiago De Chuco, Huamachuco, Cajabamba y San Marcos

Las siguientes páginas resumen la historia de la violencia en el corredor utilizado por el PCP-SL desde el sur del departamento de Cajamarca hasta el norte del departamento de La Libertad, lo cual implica a las provincias de Santiago de Chuco, Huamachuco, Cajabamba y San Marcos, corredor que permite al PCP-SL conectarse con la ceja de selva, así como con los importantes centros regionales de Trujillo y Cajamarca. La realidad socio económica de la zona al comenzar la década de 1980, se caracteriza por la presencia de Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social, las cuales después de un periodo relativo de apogeo habían entrado en crisis económica y administrativa, de la cual se aprovechó hábilmente el PCP-SL para construir su organización en la región. En efecto, el PCP-SL logró consolidarse en Huamachuco, Santiago de Chuco y Cajabamba precisamente por el aprovechamiento de la crisis por la que atravesaban las Cooperativas y SAIS aunque la captación inicial de militantes, sin embargo, tuvo como centro los Institutos Superiores Pedagógicos. Es preciso destacar que el PCP-SL encuentra un trabajo previo en las distintas provincias, realizado por partidos de izquierda como Vanguardia Revolucionaria, la UDP, Patria Roja, etc. que también fue muy bien aprovechado. La importancia que el PCP-SL asignó a esta región queda demostrada en la presencia de dirigentes del más alto nivel, destacando entre ellos Osman Morote Barrionuevo, además de otros dirigentes procedentes de diferentes lugares como Cajamarca, Puno, Ayacucho y Trujillo.

1.6.2.1. Datos generales

El PCP-SL estableció un corredor estratégico dentro de la zona andina norte, orientado a ocupar la sierra liberteña y parte de la sierra de Cajamarca, en las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Cajabamba y San Marcos; con fácil interconexión a las ciudades de Trujillo y Cajamarca y a la ceja de la selva de San Martín. La principal actividad económica de este espacio es la agricultura, básicamente de secano con un porcentaje muy reducido bajo riego permanente. A pesar de esa limitación, tanto la zona de Huamachuco y Santiago de Chuco, como la de Cajabamba y San Marcos se han convertido en graneros de las ciudades costeñas inmediatas, sus principales mercados.

Eje La Libertad-Cajamarca 1981-1993: Población

	1981	1993
Cajabamba	69,589	69,236
San Marcos		48,632
S. Carrión	84,740	108,300
Sgo. Chuco	64,324	52,991

La disminución poblacional en Santiago de Chuco contrasta con el crecimiento de la provincia de Sánchez Carrión, sobre todo de Huamachuco, la capital provincial, importante centro urbano en el eje carretero entre San Marcos y Trujillo. En todas las provincias, sin embargo, la emigración es significativa.

Hasta el inicio de la década de 1980, la actividad política regional incluía a tres fuerzas principales, el APRA, Acción Popular e Izquierda Unida, que desplegaban su trabajo político principalmente en los centros urbanos y en momentos electorales. Otro actor social importante es el SUTEP, que en 1978 y 1979 desarrolla grandes huelgas nacionales, llegando a movilizar incluso a padres de familia, contribuyendo con ello a la politización de la población. La adhesión de profesores a la propuesta del PCP-SL es un hecho conocido en todo el país. Por su parte, los sindicatos mineros, como el de Quiruvilca, no tuvieron mayor importancia en el ciclo de violencia.

1.6.2.1.1. Tenencia de la tierra: Sociedades Agrícolas de Interés social y Cooperativas Agrarias de Producción

La pobreza, el atraso, la diferenciación campesina, la corrupción de autoridades, la falta de organizaciones sólidas, las injusticias contra campesinos y el olvido por parte del Estado podrían considerarse como factores que alentaron el desarrollo del PCP-SL, pero los principales conflictos

y tensiones que el proyecto senderista utilizará en esta región para ampliar su base social, derivan del sistema de tenencia de tierra en estas zonas, configurado a partir del proceso de reforma agraria. La gestación de tensiones, conflictos, contradicciones, en las Cooperativas y SAIS en La Libertad y Cajamarca se asemeja a la de otras regiones como la Sierra Central y el norte del departamento de Puno. En todas, la creación de Empresas agrícolas por la Reforma Agraria dejó irresueltas las demandas por tierra de amplios sectores campesinos y generó nuevos conflictos que sirvieron de sustento para la expansión del discurso radical del PCP-SL.

En el caso de Santiago de Chuco fueron 184 los Predios, fundos o haciendas afectados y expropiados, con una superficie total de 305,786 Has, aunque el 97.42% de este total correspondió a 9 extensas haciendas, que reunían 297,993 has:

Con estas tierras expropiadas se organizaron cuatro Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS):

SAIS	Has.	Familias
Libertad	115,194	900
Revolución	60,056	780
César Vallejo	61,694	1,400
José de San Martín	51,382	1,000
Total	288,326	

Es decir un total de 4,080 familias recibieron 288,326 has. De igual modo 18 grupos campesinos se convirtieron en propietarios de 7,574.22 has. beneficiando a 827 familias y una comunidad campesina «San Nicolás», en Ticapampa. 6,000 has. quedaron pendientes, constituyendo áreas reservadas

Un nuevo sector surgió al calificarse los beneficiarios en la condición de conductores de parcelas o partidarios, colonos, arrendatarios y otros, asentados en los predios afectados, además de los trabajadores estables y eventuales que laboraban en las grandes haciendas con estructura empresarial como Calipuy, Angasmarca, Unigambal, Sangual, Llaray, el Hospital, etc.

El Censo Nacional Agropecuario de 1984 arrojó la existencia de 9,763 unidades agropecuarias en la provincia de Santiago de Chuco conducidas por igual número de familias campesinas, de las cuales el 60% se ubican en las áreas afectadas por la Reforma Agraria.

En la provincia de Sánchez Carrión, cuyo centro es la ciudad de Huamachuco, el proceso es prácticamente el mismo que en Santiago de Chuco, habiendo constituido algunas SAIS en las antiguas haciendas, entre las cuales destaca Serpaquino, convertida en SAIS «3 de Octubre», punto de partida de la organización del PCP-SL en el espacio rural de la región.

En la provincia de San Marcos, la Reforma Agraria dio origen a 9 SAIS y Cooperativas que posteriormente el PCP-SL liquidó. En Cajabamba, aunque el proceso es similar, muchos latifundios fueron afectados en un proceso muy lento y tardío de certificación y titulación a favor de los beneficiarios, lo cual creó una serie de problemas.

Precisamente el lento proceso de adjudicación y titulación generó entre los beneficiarios una serie de reclamos. En el caso de las comunidades campesinas consideradas beneficiarias, éstas en realidad nunca funcionaron como tal, manteniéndose las reivindicaciones de cada unidad doméstica.

Este modelo empresarial impuesto, administrado por funcionarios que comprendieron mal el grado de autonomía en su gestión, generó la descapitalización y el desgobierno de las empresas, y sirvió como argumento central a las propuestas de llegó el PCP-SL que, desde 1982, propugnó su liquidación.

Después de un corto período de funcionamiento aceptable, entre 1972-1978, prácticamente todas las empresas asociativas ingresan a un proceso de crisis financiera y organizativa generada por las contradicciones internas. Los dirigentes y funcionarios de las empresas eran acusados de corruptos y de enriquecerse a costa del trabajo de los socios, a quienes mantenían impagos durante meses mientras los préstamos obtenidos no eran invertidos. Esta situación insostenible llevó a muchos socios a solicitar y reclamar la disolución de muchas de las empresas, contexto en el cual aparecen los integrantes del PCP-SL, cuyo primer objetivo fue, precisamente, «ajusticiar a dirigentes corruptos», ganando con ello adeptos.

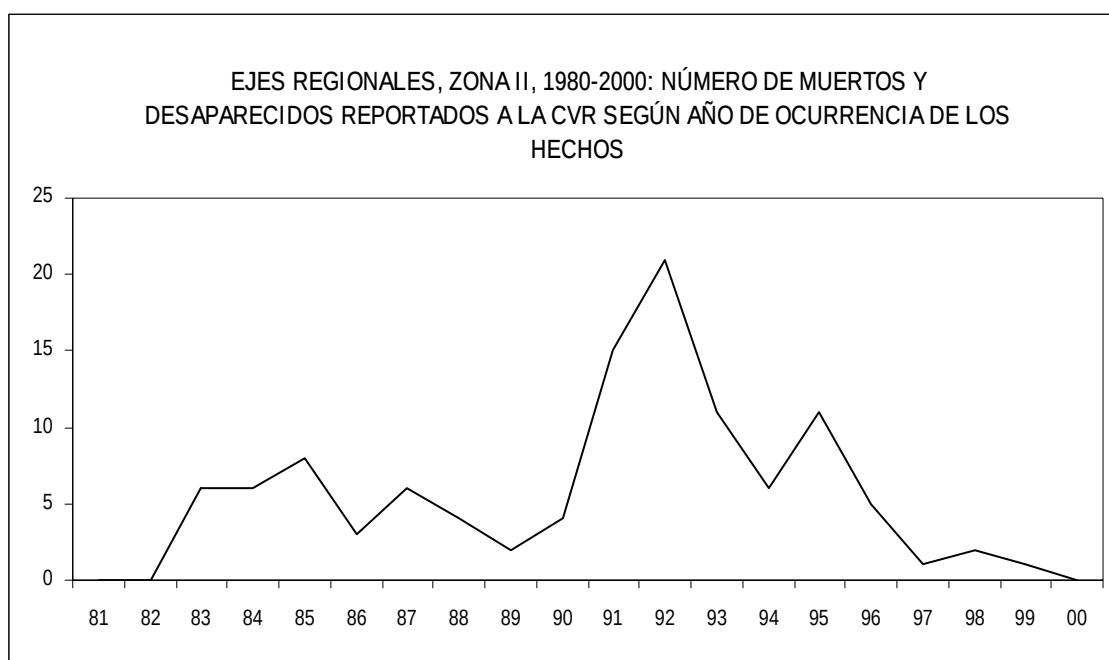
Por otra parte, los pobladores que habían sido víctimas de injusticias, robos, pérdida de sus tierras, y también aquellos que no habían accedido a más tierras, vieron en el PCP-SL a un «grupo» que viene a «poner orden» a «hacer justicia», «castigar a los explotadores, a los corruptos y ladrones»; visión que permitió en un principio estar de acuerdo con su actividad. Muchos comentaban que «ya era tiempo que alguien ponga orden» o «Dios tarda pero no olvida», justificando de esta manera las primeras acciones del grupo senderista, pero que cuando la violencia tocó a sus puertas esta imagen se esfumó y se convirtió en terror.

1.6.2.2. Historia de la violencia

1.6.2.2.1. Primera oleada de violencia: 1980-1988

LA LIBERTAD Y CAJAMARCA 1980-2000: NÚMERO DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN PROVINCIAS POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS

PROVINCIAS	TOTAL	AÑO EN EL QUE OCURRIERON LOS HECHOS																				
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
TOTAL	110	-	-	-	6	6	7	3	6	4	2	4	14	21	11	6	11	5	1	2	1	-
CAJABAMBA	36	-	-	-	-	1	1	3	5	-	-	3	7	8	5	-	-	2	-	1	-	-
SAN MARCOS	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	1	-	-
SÁNCHEZ CARRIÓN	42	-	-	-	6	-	6	-	-	3	-	1	2	3	5	5	8	2	-	-	1	-
SANTIAGO DE CHUCO	24	-	-	-	-	5	-	-	-	1	2	-	5	7	-	1	3	-	-	-	-	-



1.6.2.2.1.1. Los conflictos por la tierra: argumento ideal para el discurso del PCP-SL

El Comité Regional Norte del PCP-SL incluía los departamentos de Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes. Ocupar las provincias de Huamachuco, Santiago de Chuco, Cajabamba, San Marcos y Cajamarca era parte de su estrategia política y militar, y la importancia que el PCP-SL asignó al corredor Santiago de Chuco-Huamachuco-Cajabamba-San Marcos, queda demostrada en la presencia de altos dirigentes que llegaron para hacer labor proselitista y de organización

La política del PCP-SL consistió en alentar las parcelaciones y destruir las empresas, tal como afirma su líder máximo:

La política del Partido se ha ido desarrollando en este problema (de la tierra); una de las cuestiones importantes que hemos hecho ha sido el impulsar un movimiento de invasión de tierras, muy importante, en el departamento de La Libertad, ahí han sido repartidas más de 300.000 has. y se han movilizado 160.000 campesinos; viendo el conjunto de movilizaciones que hemos tenido ésa es la que más masa ha logrado mover (A. Guzmán, Entrevista del siglo).

Los lugares donde el PCP-SL logró mayormente ganar adeptos, en la Provincia de Santiago de Chuco, fueron San José de Porcón, El Hospital y Angasmarca, zonas donde el PCP-SL, por mucho tiempo, mantuvo bases de apoyo. Precisamente en 1981 se registra la primera incursión senderista a Angasmarca, que destruye totalmente la cooperativa. Angasmarca fue uno de sus lugares priorizados por los destacamentos subversivos, que tuvieron allí un centro de operaciones importante. Recordemos que Angasmarca fue una de las haciendas más extensas de Santiago de Chuco, convertida en 1972 en la SAIS «José de San Martín Limitada N° 19.

El PCP-SL había iniciado sus acciones en Angasmarca con presencia del mismo Osman Morote, teniendo como base un trabajo realizado anteriormente por la CNA y algunos estudiantes de Vanguardia Revolucionaria venidos de Trujillo. En su primera incursión en 1981, el grupo del PCP-SL, además de destruir las instalaciones de la SAIS y saquear y repartir los bienes, asesinó a un Policía y vejó a otros dos.

En esta misma zona, posteriormente, será emboscado un convoy del Ejército causando la muerte de cuatro soldados. Los entrevistados coinciden en señalar que Angasmarca era una «zona liberada donde hacían formar a los niños, a los Profesores, y pobladores».

Desde Angasmarca el PCP-SL irradió su accionar a todo Santiago de Chuco logrando asentarse en San José de Porcón, Llaray, Santa Cruz de Chuca, la ex hacienda El Hospital, Tulpo, Conachugo, la SAIS Tahuantinsuyo, César Vallejo, zonas ganaderas que tenían una importante producción de leche, mantequilla y queso. Destruir las cooperativas implicó, para el PCP-SL, una serie de asesinatos selectivos; así por ejemplo en la SAIS San José mataron al administrador y a otra persona; además del Alcalde Miguel Miñano.

En esa misma dirección, en Cajabamba la política del PCP-SL consistió en alentar las parcelaciones desde su primera aparición pública. Según nuestros entrevistados, en las CAPs «los dirigentes daban leche a sus perros, mientras los hijos de los socios tomaban caldo» (Entrevista).

1.6.2.2.1.2. Los primeros mandos

Inicialmente, los principales mandos del PCP-SL eran, según los testimonios recogidos, procedentes de otros lugares. Los pobladores mencionan entre esos mandos al «Tuerto», muerto en el ataque al convoy militar en Cochapampa; «El número 41», que murió en el asalto a Cachicadan; «la Camarada Andrea»; «el Camarada Antonio»; «La Gringa», etc. Lo que no admite dudas es la presencia de Osman Morote, integrante del Comité Central del PCP-SL, destacado como responsable regional y capturado en Lima en 1988 con otros cuadros regionales poco antes de una reunión convocada por la dirigencia nacional de esa organización.

Posiblemente desde sus primeras acciones armadas, los destacamentos senderistas incorporaron militantes locales, distinguidos como oriundos por participar en las acciones cubiertos con pasamontañas para evitar ser reconocidos, mientras que dos o tres integrantes de la columna actuaban con el rostro descubierto, porque eran desconocidos para la población. En Huamachuco, un habitante recuerda así a Osman Morote: «Él se presentaba como un comerciante ambulante; en esa época él vendía condimentos; pero después cuando fue capturado sacamos las conclusiones de que nosotros estábamos reunidos con este señor; incluso leímos en los Diarios de Lima que tenía el croquis de Huamachuco y nombres de personajes...» (Entrevista Lezcano - Huamachuco).

1.6.2.2.1.3. El circuito educativo

El rol que en otras regiones cumplieron las universidades públicas en el proyecto del PCP-SL fue asumido en nuestra región por los Institutos Superiores Pedagógicos de Cajabamba y Huamachuco. Muchos de sus estudiantes se incorporaron a los grupos senderistas, algunos murieron, otros figuran como desaparecidos y otros están purgando cárcel. Existen numerosos ejemplos del compromiso de estos estudiantes con el PCP-SL, como «Aguedita», egresada en 1986 del I.S.P. «José Faustino Sánchez Carrión» de Huamachuco, apresada en Huamachuco y conducida a la cárcel de Cajabamba de donde fugó, desconociéndose su paradero; o el grupo de ocho estudiantes del Pedagógico de Cajabamba, que presumiblemente tenían contacto con el PCP-SL, detenidos en 1989 como presuntos senderistas, entre ellos Estanlei Valera López, Presidente del Consejo de estudiantes, sentenciado por jueces «sin rostro» a 20 años de prisión. en la cárcel de «El Milagro». Los Institutos Superiores Pedagógicos (I.S.P.) se convirtieron en el semillero del PCP-SL, y algunos de sus estudiantes o egresados se convirtieron incluso en mandos regionales importantes, como es el caso de Luis Vigo, Avalos Ponce; Gregorio López Rodríguez, todos ellos sentenciados, y César Rodríguez, muerto en enfrentamiento en Tabacal. Estos cuadros lugareños, utilizando sus relaciones personales, permitirán la primera expansión del PCP-SL.

Además de los I.S.P., el PCP-SL gana algunos adeptos al interior de la Universidad Nacional de Cajamarca desde fines de la década de 1970, cuando el movimiento estudiantil universitario estaba dominado por diversos grupos políticos de izquierda. Posteriormente, hacia 1986-1988 el PCP-SL nuevamente realizará actividades de proselitismo en la Universidad. Igual que en otras regiones del país, los Colegios secundarios también fueron centros de captación de militantes para el PCP-SL. En San Marcos, en el Colegio «Rafael Puga Estrada» y en el Centro Educativo 82918 «Totorá Nueva», profesores y alumnos recibían charlas y aprendían canciones; según un testificante, los niños estaban tan adiestrados que incluso «jugaban» a los «Juicios Populares», es decir jugaban a la guerra.

1.6.2.2.1.4. Las bases de apoyo

La guerra campesina propugnada por el PCP-SL, buscando «cercar las ciudades desde el campo», encontró, como vimos anteriormente, argumentos sólidos en el contexto de conflicto de la población rural con las empresas asociativas.

Como hemos visto el PCP-SL, ubicó su accionar en el área rural organizando Bases de Apoyo iniciales en Hualay, Serpaquino y otros poblados de las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. El terreno estaba libre de cualquier fuerza represiva policial o militar, y las columnas senderistas se encargaron de «eliminar» a dirigentes y funcionarios de las empresas, así como a las autoridades que no se plegaron a su prédica.

La formación de Bases de Apoyo permitía la instalación de Comités Populares, con responsables designados por el PCP-SL. Comunidades enteras como Chorobamba en Cajabamba, la Florida, Serpaquino, en Huamachuco, San José de Porcón en Santiago de Chuco, representan ejemplos organizativos de la propuesta de construcción del «nuevo estado» de parte del PCP-SL. De las bases de apoyo surgía «la masa», que apoyaba a la «fuerza principal», pequeño grupo armado móvil de cuadros senderistas, en operativos y atentados diversos, realizados fundamentalmente de noche.

Hualay, importante SAIS de la zona de Huamachuco, productora de leche, queso, mantequilla y poseedora de valiosos bosques, es un ejemplo de Base de Apoyo, organizada a partir de los problemas generados al interior de la comunidad y la crisis de la SAIS. Asesinado el presidente de las Rondas Campesinas, éstas muy pronto se desorganizaron y la liquidación total de la SAIS por el PCP-SL fue el corolario de su etapa de instalación. La fuerza del PCP-SL en Hualay explica su calificación de «zona liberada».

También en la provincia de Sánchez Carrión, la cooperativa Serpaquino, una rica ex hacienda, fue destruida totalmente hasta lograr su disolución, repartiendo el ganado y la tierra entre los lugareños. En Serpaquino los destacamentos senderistas asesinaron a varios campesinos, a dos ingenieros de PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos), al Presidente de la comunidad, etc.

Como vemos, la red de bases de apoyo senderistas fue avanzando conforme se fueron liquidando las empresas agrarias. Al igual que Hualay o Serpaquino, también se identifican bases de apoyo en Casgabamba, El Suro, Chugurbamba.

1.6.2.2.1.5. La movilidad y los golpes de la fuerza principal

La limitación en su armamento obligaba a la fuerza principal senderista a desplazarse permanentemente para ejecutar sus acciones, pero después de cada acción ésta se movilizaba a otras zonas, dejando a la «masa» de sus bases de apoyo a merced de la policía y el Ejército, de allí que los capturados fueron mayormente gente inocente y/o simpatizantes locales.

El grupo propiamente armado del PCP-SL, su fuerza principal, estaba conformado aproximadamente por 12 a 15 personas, a los cuales se agregaba «la masa» hasta sumar 30 a 50 personas: «ellos se paseaban tranquilamente por las calles y obligaban a la población a reunirse en la plaza, los sacaban de casa en casa» (Entrevista a poblador de Serpaquino).

En la provincia de Sánchez Carrión, punto de partida de la organización senderista, la primera acción armada fue registrada en el distrito de Curgos, donde en 1983 fueron asesinados el Alcalde y el Gobernador en plena Plaza de Armas.

Al año siguiente, en el Distrito de Sanagoran cercano a la ciudad de Huamachuco, el PCP-SL asesina el 15 de mayo al Alcalde Alejandro Polo Baca y al Gobernador Teodoro Salvatierra. En

dicha oportunidad, la columna senderista había tomado el pueblo ingresando por las cuatro esquinas de la Plaza, y luego de victimar a las autoridades, saqueó la tienda de la Sra. Benites, distribuyendo productos a los pobladores, menos los cigarros y licor que no fueron tocados.

A partir de esa fecha Sanagoran se fue convirtiendo, como afirma un poblador, en «tierra de nadie». El asesinato de las autoridades o su renuncia continuaron hasta quedar el pueblo sin ninguno de ellos. Al igual que en Curgos, la Municipalidad fue cerrada y sus servicios fueron trasladados a la Municipalidad de Huamachuco: «... Cuando ingresaba Sendero Luminoso a Sanagoran reclutaba la gente a la Plaza de Armas, para dar sus discursos y arengos; saqueaban tiendas, pintaban paredes, embanderaban los cerros cercanos; y, los paros, se realizaban en su aniversario colocando a la población entre la espada y la pared...» (Entrevista a Víctor Benites, Sanagorán).

Los ataques senderistas obligaron a la policía a replegarse hacia los mayores centros poblados, pero su imagen, ya deteriorada ante la población rural, se agravó en Huamachuco en 1985 con el asesinato de dos niños acusados de ladrones, hecho que ha quedado grabado en la memoria de los pobladores de la ciudad de Huamachuco a tal punto que se ha erigido un monumento recordatorio de «los hermanitos García», de 12 y 13 años aproximadamente, acusados de robar a la esposa de un policía, detenidos y asesinados cerca de la laguna El Toro, en la carretera a Trujillo. Este hecho aumentó el rechazo a la Policía y evidentemente provocó simpatías de algunos hacia el PCP-SL. La placa del monumento lo dice con claridad:

La Asociación de Residentes huamachuquinos en Lima, en homenaje al heroico pueblo huamachuquino que supo defender una vez más sus derechos, revelándose contra los abusos cometidos cobardemente y vilmente en perjuicio de los hijos de nuestro pueblo». En memoria de los hermanos García, Jorge y Eduardo García Ruiz, ¡Viva los Mártires! Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, entonces todos los homenajes de la tierra. Lima mayo de 1986
--

Sin haberse podido confirmar, la población de Huamachuco menciona la existencia, desde 1983, de una fosa común donde estarían enterradas 13 personas, entre ellas una niña de 15 años, víctimas de los excesos policiales. El 5 de enero de 1988, a las 6 de la mañana, es asesinado en Huamachuco el señor Sotomayor, Sub Prefecto de la Provincia. Según sus familiares, hasta la fecha no se sabe quién lo hizo, existiendo la duda si la ejecución lo realizó el PCP-SL o la Policía. Muchos pobladores afirman que la Policía cometió asesinatos culpando al PCP-SL de sus actos.

En Cajabamba el inicio del movimiento rondero alentado por partidos de izquierda que pretenden expandir la experiencia rondera de Chota y Bambamarca, provoca desde el primer momento el rechazo de los grupos armados del PCP-SL.

La primera acción violenta del PCP-SL en Cajabamba data del 18 de mayo de 1980, cuando atenta con dinamita contra el local del Banco Agrario. Ese mismo año también ocurre la

primera incursión pública del PCP-SL en Cajabamba, en la comunidad de Higosbamba, donde una columna de Senderistas toma por dos días la comunidad, pero al llegar la Policía, los subversivos fugan y los policías toman presos aproximadamente a 40 pobladores del lugar que son liberados posteriormente.

Los senderistas completan en Chorobamba la toma de tierras iniciada por la UDP, organizando una comunidad que hasta ahora se mantiene con relativo éxito empresarial. En esta comunidad fueron muchos los capturados y encarcelados acusados de presuntos senderistas, entre ellos Sixto Nicacio, natural de Sanagorán, muerto en Lima en las matanzas de los penales de 1986. En la zona de Araqueda se realizaron una serie de «ejecuciones», como el asesinato en Corralpampa de Victorino Mora Villanueva, del hermano evangélico Cirilo Ponce, del Sr. Simón, y de un «soplón».

En Algamarca, además de dinamitar el Puesto Policial y robar armamento, el grupo del PCP-SL asesinó a una familia completa compuesta por ocho personas por «enemiga», mientras que en Chunquibamba fueron asesinados cuatro jóvenes.

A partir de 1982 hasta 1985, la presencia del PCP-SL se extiende hacia San Marcos y los distritos de Sitacocha, Condebamba y Cachachi, en Cajabamba. Podemos hablar, entre 1982 y 1985, de una fase de expansión del PCP-SL en distritos como Cachachi, Sitacocha y Condebamba. En Cachachi, el accionar senderista incluye el asesinato de dirigentes cooperativistas y la destrucción de la infraestructura, amenazando a las autoridades para que renuncien, y presionando a los docentes lugareños:

Era crítico trabajar en Calluán, teníamos que asistir calladitos a las reuniones, no podíamos dictar inglés, religión, educación cívica; nos dijeron que acaso vamos a formar profesionales; muchos docentes optaron por retirarse del lugar, eran los que tenían la posibilidad de trasladarse, pero los que no podíamos salir tuvimos que soportar y trabajar, utilizando nuestros alumnos como espías para que avisen la llegada de los «compañeros» (docente del Colegio de Calluán).

Existen múltiples ejemplos que muestran como el PCP-SL aprovechó la mala actitud y conducción de los directivos de las cooperativas para disolverlas y ganar simpatizantes y adeptos, parcelando las tierras entre las familias de cada zona. Un ejemplo bien documentado de esta época nos remite a la Cooperativa Jocos, en Cachachi, donde el 10 de mayo de 1987 el PCP-SL convoca a una asamblea general, con la presencia del Presidente de la Cooperativa, aprovechando la celebración de San Isidro. En ella se acordó repartir la tierra entre los socios, vender el ganado y otras propiedades, para pagar los salarios adeudados. Se sacrificaron tres toros y tres vacas, cuya carne fue repartida entre los asistentes. Asimismo se incendió la documentación de la cooperativa, un tractor; y el laboratorio de inseminación artificial fue totalmente destruido. Dos meses después, en julio, Luis Paredes asumió la dirección de la cooperativa al parecer cumpliendo las directivas del PCP-SL, por ello parceló las tierras incluyendo como beneficiarios a empleados, ex – dirigentes e

hijos de éstos que vivían en la ciudad de Cajabamba y otros lugares. Pero un año después, el 10 de julio de 1988, Luis Paredes y Eloy Robles, ex dirigente, fueron «ejecutados» por el PCP-SL, con lo cual se sella la disolución definitiva de la empresa.

La liquidación de las empresas asociativa es igualmente una constante en la provincia de San Marcos desde 1989, cuando un grupo armado de senderistas destruye la planta quesera de Huagal, repartiendo el ganado y la tierra entre los socios, incendiando la maquinaria, etc. San Marcos representa el límite norteño del corredor que estamos presentando, en el cual, desde la ciudad de Cajamarca, el MRTA intenta, entre 1988 y 1989, organizar algunas células, visitando caseríos como La Pauca, Camish, el Distrito de José Gálvez, Tinyayoc y otros, tratando en algunos casos de infiltrarse en las Rondas Campesinas, pero la captura de algunos de sus militantes, que purgaron cárcel por varios años, los desaparece de la región.

Cuando hoy en día preguntamos a los campesinos si aprueban o desaprueban las acciones generadas por los grupos senderistas, las opiniones están divididas; unos dicen que los dirigentes de la CAP fueron «muy injustos, ladrones, holgazanes y sólo se aprovechaban del trabajo de los demás socios». Otros remarcan la crueldad del PCP-SL, «fueron muy crueles» señalan.

El despliegue creciente del PCP-SL sufre sin embargo algunos reveses iniciales, como sucede en 1986 en Curgos, Huamachuco, donde 12 senderistas fueron sorprendidos mientras descansaban en la casa de Carmen Sandoval Loayza, muriendo tres senderistas en el ataque, mientras la hija de Carmen Sandoval es muerta en el arco de la entrada a la ciudad y otro senderista cae cerca al lugar. Todos los muertos fueron enterrados en Huamachuco en una fosa común. En la misma oportunidad son capturadas «Julia» y Carmen Sandoval, encarcelada en Lima, donde posteriormente falleció.

Otro golpe a las columnas senderistas ocurrió el 26 de julio de 1987, cuando un grupo de aproximadamente 12 militantes tomó la Cooperativa Tabacal, en el distrito de Cachachi, repartiendo víveres saqueados entre los pobladores; a los pocos minutos arribó un escuadrón de la policía, que tiene su cuartel en Chaquicocha, a escasos 30 minutos de Tabacal, produciéndose un enfrentamiento entre ambos grupos que dejó como saldo cinco muertos: dos senderistas (Alberto Paredes y César Rodríguez, profesor y alumno del Pedagógico, respectivamente), un efectivo de la Guardia Civil, el Gerente y un niño.

El 23 de agosto de 1987 mueren asesinados en El Montón, distrito de Cachachi, el Teniente Gobernador, el ex Juez de paz, un trabajador local y su hijo, mientras que una profesora es rapada por los senderistas. Esta acción se hace con la arenga de «Viva la heroicidad del 26 de julio», en referencia a los cuadros senderistas muertos en la incursión a Tabacal que mencionamos anteriormente.

En marzo de 1987 es dinamitado el puesto de la Guardia Civil de Luchubamba, en el distrito de Sitacocha, donde muere un policía y uno de los atacantes, pero nuevamente en octubre de 1987 un grupo de quince senderistas ingresa a Luchubamba, pero antes, en el camino que

conduce a Cushuro y Huacra, asesina a Bartolo Meza, secretario del partido aprista, luego toma el pueblo, incendia y saquea la Municipalidad.

Además de estos reveses, el golpe más importante que el PCP-SL recibe por entonces es la captura del responsable del Comité Regional de Norte, Osmán Morote, junto con otros cuadros regionales en Lima, en junio de 1988.

1.6.2.2.2. El terror y la violencia aumentan: 1989 - 1995

A pesar de estos reveses importantes y como prueba de su importante inserción en la región, las columnas del PCP-SL incrementan su accionar a partir de 1989. El 46% de los 112 muertos registrados en las cuatro provincias en el período de violencia se concentran en los años 1990-1993, como vimos en el cuadro anterior. En mayo de 1989, en la estrategia de eliminación de las autoridades locales, es asesinado al Alcalde del distrito sanmarquino de Cachachi junto con su esposa, mientras el local municipal es dinamitado. En mayo de 1989 es incendiada la importante SAIS «La Pauca», una de las últimas en la estrategia senderista de liquidación de las empresas asociativas. En el campo, la móvil fuerza principal senderista presiona sobre las autoridades comunales para que «colaboren» con ellos y cumplan con sus órdenes. El 1 de mayo de 1991, en Quillispampa, Cajabamba, el Presidente de la Comunidad Campesina es «ajusticiado» por no colaborar. Ante la presencia del PCP-SL y la muerte del presidente, los demás dirigentes huyen o renuncian.

Podemos deducir que, habiéndose asentado en algunos sectores rurales, disponiendo de una red organizativa y logística consolidada, construida sobre todo a partir de la destrucción de las empresas asociativas, la estrategia del PCP-SL lleva a sus integrantes a presionar sobre los centros provinciales, especialmente la ciudad de Huamachuco, donde entre 1990 y 1993 los dinamitazos, apagones y convocatorias a paros armados se suceden, mientras la policía se mantiene a la defensiva.

Como prueba de esta intención decidida, en 1989 los destacamentos senderistas asesinaron sucesivamente, en la ciudad de Huamachuco, a los Alcaldes Ricardo Woolcott Morales, del APRA, y su reemplazante Víctor Espinoza Luna. El vacío de gobierno local se acentúa en 1990 cuando en la Municipalidad provincial de Huamachuco, que había asumido las funciones de algunos distritos rurales (Curgos, Marcabal, Sanagorán y otros) cerrados los años anteriores debido a la muerte y renuncia de sus autoridades, renuncian todos los Regidores del APRA quedando un solo Regidor en la Municipalidad, de las filas de la Izquierda Unida.

Si bien en la misma ciudad de San Marcos el PCP-SL no tuvo mayor presencia, excepto algunos embanderamientos, distribución de propaganda y destrucción de una parte de la Posta Médica, en las zonas rurales colindantes con Cajabamba las acciones subversivas continuaron con

relativa intensidad. En febrero de 1990, en pleno día y en la carretera que conduce a Cajabamba, es asesinado el Alcalde de Cachachi.

A diferencia de la ciudad de San Marcos, entre 1990 y 1993 el temor se instala definitivamente entre los pobladores de la capital provincial de Sánchez Carrión, y los dinamitazos y apagones empiezan igualmente a sucederse ininterrumpidamente. El embanderamiento de los cerros Cacañán, el Perolito, Tupupino, Santa Bárbara, que rodean a la ciudad de Huamachuco, era permanente, e incluso un Policía pierde la vida al pretender sacar una bandera dejada por el PCP-SL en el lugar denominado Agua de los Pajaritos, cerca de la ciudad. Más aún, en 1991 se sustrae armamento del propio puesto policial, siendo acusado el policía Fernando Baca, quien sufrió prisión por 4 años, luego de los cuales fue declarado inocente.

Durante un «paro armado», en 1993, los subversivos realizan una de sus principales acciones militares en todo el período de la violencia, emboscando una caravana combinada del ejército y la policía, en Los Frailones, en Huamachuco, donde murieron nueve policías y nueve soldados.

El 18 de Julio de 1993, un atentado dinamitero destruye la hidroeléctrica de Yamobamba que dota de energía a la ciudad de Huamachuco; dejando en oscuras a todo el pueblo más de 8 meses.

Pero aunque en 1993 el temor entre la población urbana es de tal magnitud que permite que los paros convocados por el PCP-SL paralicen todas las actividades, el temor en el campo es aún mayor, incrementando la migración hacia las ciudades. En Huamachuco, por primera vez en su historia, más de 300 familias procedentes de Pijobamba, La Florida, Santiago de Chuco, Quiruvilca, Sanagorán, etc., invadieron la parte baja de la ciudad formando asentamientos humanos con los nombres de Pilar Nores, Alan García, Javier Heraud, etc.

En 1993, habiendo prácticamente culminado la destrucción de todas las empresas agrarias, las presiones sobre la población que inicialmente apoyó a la fuerza principal son de tal envergadura y los asesinatos y la estrategia del PCP-SL han generado tal inseguridad y temor, que los grupos de autodefensa comienzan a gestarse, tal como sucedió en la ex-SAIS de Tabacal en 1993.

El 4 de abril de 1995 una columna subversiva formada por unas 20 personas interceptó un ómnibus de la Empresa «Sánchez López», que cubre el itinerario Huamachuco – Trujillo, a la altura de la laguna «El Toro», cerca del lugar donde diez años antes habían sido asesinados por dos oficiales de la GC los niños García. Después de registrar a cada uno de los pasajeros, identificaron al comandante de la PNP, José Figueroa Cacho, quien fue muerto a balazos. El grupo senderista estaba comandado por una mujer, identificada como Juana Pérez, «La Gringa», e incluía niños como parte de la «masa» de apoyo a la fuerza principal.

La presencia de niños en los grupos de apoyo al PCP-SL se explica sólo parcialmente por la coacción. En realidad, sus padres, como hemos afirmado anteriormente, simpatizaban con las propuestas del PCP-SL, que había venido a «poner orden», a «hacer justicia». Los conflictos pre-

existentes alimentaron estas afiliaciones de muchos a los grupos senderistas, aunque debemos reconocer igualmente que en zonas donde se había legitimado y ganado el apoyo de la población, esta actitud pronto cambió por la del miedo y el terror, al ver que los muertos eran amigos o familiares suyos.

Buena parte de la población se vio así envuelta entre dos fuegos: por un lado el PCP-SL pedía colaboración y apoyo, y por otro la policía la acusaba de ser colaboradora de terroristas. El mejor indicador es el índice de emigración rural de la región hacia las ciudades de Cajamarca, Trujillo, Chimbote, incluso Huamachuco como hemos visto. Pero hubo otro grupo mayoritario que no pudo migrar teniendo que soportar las consecuencias de la guerra provocada por el PCP-SL. De las entrevistas realizadas extraemos las siguientes reflexiones:

«Contra las armas no podíamos hacer nada»
¿Qué mal hizo el PCP-SL?
«Corrió la gente», «mató», «sembró terror».
¿Por qué cree que mataron a las autoridades?
«Porque eran injustas», «robaron», «no sabemos».
¿Por qué algunos se unieron al PCP-SL?
«Por ociosos», «por engaño», «por tener armas», «por miedo», «Para vengarse de sus enemigos».

Otros comentarios de los pobladores completan la visión que tienen de los senderistas y de su violencia:

«Llegaron de frente a matar y destruir, sin hablar».
«Todas las autoridades renunciaban de miedo».
«No se comía tranquilo, muchos dormíamos en cuevas».
«Teníamos miedo que lleguen los «compañeros» y luego la policía y el Ejército».
«Los compañeros ofrecieron arreglar todo lo malo, nombrar nuevas autoridades, formar comités y luego se largaban dejándonos solos».
«Muchos se aprovechaban y ponían amenazas a nombre de los compañeros».
«Todos asistíamos a las reuniones porque amenazaban».
«La policía creía que todos éramos terroristas».

1.6.2.2.3. Declive de la violencia: 1996-2000

Es obvio que la captura del jefe máximo del PCP-SL en 1992 tuvo impacto en su organización que priorizó, en respuesta al duro golpe recibido, las acciones armadas sobre el trabajo político de largo aliento. El mismo año de la captura de Guzmán se registra la mayor cantidad de muertos en la región. Los «acuerdos de paz» suscritos posteriormente por Guzmán deben agregarse a otras variables para explicar el declive de la violencia, entre las cuales destacamos las siguientes:

1.6.2.2.3.1. Comités de Autodefensa

Las Rondas Campesinas nacieron en Chota, en 1977, con la finalidad de combatir el abigeato y otros delitos. A partir de 1985 las rondas van irradiando su organización a las Provincias de San Marcos y Cajabamba, pero su acción se ve rápidamente mellada por la persecución de sus dirigentes desde el aparato judicial y, sobre todo, por el accionar creciente del PCP-SL, que busca su desactivación. En general, en su primer momento, las Rondas Campesinas no enfrentaron al PCP-SL; más bien realizan un trabajo cauteloso, tratando de evitar cualquier confrontación. El PCP-SL, por su parte, hostigó permanentemente a sus dirigentes, amenazándolos de muerte e incluso asesinandolos como por ejemplo en Sartibamba, donde asesina a un rondero o en Hualay, donde ajusticia al presidente de Rondas y su esposa 1987. Las acciones del PCP-SL logran no sólo la desactivación de las rondas sino también el retiro de los partidos políticos que las organizaron inicialmente, especialmente Izquierda Unida.

Estas rondas campesinas autónomas, dominantes en las provincias del norte del departamento de Cajamarca, son reemplazadas en el campo por la estructura organizada por el PCP-SL en el espacio regional, con sus bases de apoyo y comités populares. Desde 1992, sin embargo, el Ejército Peruano impulsa, en su nueva concepción estratégica, la creación de Comités de Autodefensa promovidos y apoyados por el Gobierno con apoyo y dependencia del mismo Ejército, entregando incluso armas en algunos casos.

Hacia 1995 en las provincias de Santiago de Chuco, Huamachuco, Pataz, Bolívar y Gran Chimú existían alrededor de 260 Comités de Autodefensa, de las cuales el 60% estaban «armadas» y recibían un mínimo de instrucción militar de parte del Ejército;

En el caso de Cajabamba y San Marcos, los Comités de Autodefensa se originan en el Distrito de Cachachi, sin antecedente alguno de Rondas Campesinas. Cansados de las presiones senderistas y venciendo el miedo, el 17 de agosto de 1992 en el caserío de Rodiobamba, los pobladores organizan la primera «Ronda Campesina, Pacífica, Solidaria, Democrática y Autónoma», a sugerencia de un Coronel de la Policía Nacional del Perú de Cajamarca en visita de trabajo a dicho lugar. En su inicio, la organización contó con 180 ronderos, lo que muestra la decisiva acción de la población por terminar con la violencia subversiva. Se canaliza con ello la reacción ciudadana ante tantos años de hostilidad por parte del PCP-SL y, en algunos casos, también de la Policía.

El dirigente de una de estas rondas nos explica que:

Respetos guardan respetos y nunca nosotros nos hemos metido a su política de ellos y más bien nosotros declaramos una guerra frontal contra ellos...ellos nunca nos dieron cara, porque nosotros no éramos ni dos ni tres, éramos 40 y 60, cuando nos desplazábamos de un lugar a otro, obligándolo a retirarse de nuestra jurisdicción, decíamos aquí no entra nadie y nadie entraba

1.6.2.2.3.2. Bases *antisubversivas* y bases policiales: nuevas estrategias

El otro factor fundamental que acelera la derrota de los grupos senderistas es la instalación de Bases contrasubversivas del Ejército Peruano en zonas estratégicas, que en coordinación con la policía, asesta golpes rotundos a las columnas senderistas. A inicios de la década de 1980, en las provincias que conforman el corredor de Huamachuco a San Marcos, los puestos policiales existentes contaban con tres o cuatro policías, mal preparados, sin armamento, sin medios logísticos para luchar contra un enemigo como el PCP-SL que atacaba por la noche, utilizando el factor sorpresa, dinamitando los locales, muchas veces con grupos que sobrepasaban las 30 personas que, después de cada acto, desaparecían en los cerros y montes. Los Puestos de la Policía en su mayoría no contaban con luz eléctrica, ni teléfono, ni carros, ni caballos. En las zonas rurales, allí donde los había, los puestos estaban totalmente desprotegidos, incomunicados, lejos de las ciudades y, lo que es más importante, deslegitimados ante la población por abusos y actos de corrupción convertidos en práctica cotidiana. Por todo ello, fueron presas fáciles para el PCP-SL, por lo cual a partir de 1988 el Gobierno optó por retirar sus efectivos de casi todos los Puestos Policiales rurales, como por ejemplo en Angasmarcha en Santiago de Chuco; Sanagorán, Curgos, Marcabán en Huamachuco; Cachachi, Algamarcha, Luchubamba en Cajabamba. Atrincherada en los principales centros urbanos, la policía fue colocada a la defensiva, aunque logró, conforme hemos visto, asestar algunos golpes importantes a las fuerzas senderistas. El retiro de los pequeños puestos permitió la concentración de efectivos en centros mayores, como sucedió en el Puesto Policial de Chaquicocha, ubicado en el valle de Condebamba, aproximadamente a una hora de Cajabamba, con fácil comunicación terrestre a La Grana, Cajabamba, San Marcos, que llegó a contar con más de 50 efectivos encargados de perseguir a los sediciosos.

Aunque podemos afirmar que en un inicio las acciones contrasubversivas a cargo de la policía no tenían ninguna estrategia orientada a ganar el apoyo de la población afectada, algunos golpes importantes mellaron a los grupos senderistas. Mencionamos anteriormente la muerte de militantes senderistas en un enfrentamiento con la policía en Curgos, Huamachuco, en 1986, y la destrucción de otra columna senderista en julio de 1987, en la Cooperativa Tabacal. A estos golpes contra los grupos armados sucede otro importante, en Hierba Buena, caserío ubicado a una hora de Calluán, en la provincia de San Marcos, en diciembre de 1989, donde un destacamento de el PCP-SL que se encontraba reunido en la casa de un lugareño, es rodeado por un pelotón de la Policía Nacional del Perú, produciéndose un enfrentamiento donde el PCP-SL pierde -aunque no se tiene un dato preciso- más de siete cuadros importantes, entre los cuales estaba «Patty». Fue el golpe más duro propinado al PCP-SL, por las fuerzas policiales en esa provincia.

De otra parte, si bien existían en la región algunos cuarteles antes de 1980, como el batallón de El Pallar en la zona de Huamachuco, su presencia estaba más bien vinculada a obras de ingeniería. En 1984 se crea el BIM N° 323 «Oscar la Barrera» en la ciudad de Huamachuco, que instala progresivamente bases en puntos estratégicos para la lucha antisubversiva. Esta temprana

presencia del Ejército para enfrentar a los subversivos armados no disponía sin embargo de una estrategia definida y diferente a la implementada por la policía, es decir patrullajes, rastrillajes, operativos puntuales, respuesta a ataques, etc. Como hemos visto líneas arriba, la situación empieza a cambiar a inicio de la década de 1990 cuando la estrategia de los militares incorpora a la población a través de los Comités de Autodefensa.

1.6.2.2.3.3. Trabajo de inteligencia policial

Afinar el trabajo de inteligencia fue igualmente importante para la derrota del PCP-SL, como lo prueba la captura de Abimael Guzmán. Así, un golpe decisivo contra la estructura senderista en la región ocurrió el 5 de Junio de 1995, cuando la DINCOTE capturó en Trujillo a 14 integrantes del Comité Regional Norte del PCP-SL, entre los cuales destacan Juana Pérez, «La Gringa», de 28 años, líder del Comando Regional, la misma que dirigió el asesinato al Comandante de la policía José Figueroa Cacho en abril de ese año, como reseñamos anteriormente; Cleofé Tineo Berna, de 29 años, representante de la Base de Jaén; Julio César Moreno Cruz de 28 años representante de Otuzco, Pedro Ganoza Acevedo de 28 años y Fluvencio Carrasco Pechaco de 28 años, delegados de Chiclayo; José Farfán Silva y Manuel Antonio Flores Corde, del Mando Militar de Piura; Remigio Sánchez Valdez, representante de Amazonas, además de Gregorio Lavado Valverde («Richard») y Wilfredo Campo Quispe de 39 años, responsable de economía. Otra captura importante lograda por el trabajo de inteligencia policial ocurre en Cajabamba, donde es detenido Camilo Santos Vera o Pedro Sánchez Flores, «Camilo», en agosto de 1996, intervención que al parecer termina de desbaratar al Comando Regional del Norte del PCP-SL. Tanto en la captura de los dirigentes senderistas en Trujillo como en esta última en Cajabamba, la información proporcionada por algunos arrepentidos resultó crucial.

1.6.2.2.3.4. Ley de Arrepentimiento

En efecto, otro factor importante en el declive de la violencia se deriva del impacto de la llamada Ley de Arrepentimiento, que rindió sus mayores frutos entre noviembre de 1993 y mayo de 1994, cuando se acogieron a ella decenas de campesinos sobre quienes pesaba, con razón o sin ella, la sospecha de apoyar o integrar los grupos senderistas. La Sub Región policial IV de Cajamarca tiene registrados 153 varones y 22 mujeres arrepentidos, pero casi el total proviene de las provincias y distritos de Cajabamba y San Marcos.

No disponemos de cifras para las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, pero en ellas fue también importante el número de personas que se acogieron a la propuesta normada de arrepentimiento.

En resumen, en este corredor de Santiago de Chuco hasta San Marcos, el PCP-SL logró captar muchos adeptos, organizando bases de apoyo en numerosos poblados, como Tulpa, San José de Porcón, Angasmarca, El Hospital, en Santiago de Chuco; Hualay, Sarín, Serpaquino, Sanagorán en Huamachuco; Chorobamba, Quillispampa, Higosbamba, Luchubamba, parte del Marañón, en Cajabamba, y algunos pequeños lugares de San Marcos. Más de mil acciones terroristas en las provincias de Huamachuco y Santiago de Chuco, así como en Cajabamba y San Marcos, y la respuesta contrasubversiva, trajeron como consecuencia 112 muertos registrados por la CVR, de los cuales 45 pertenecen a Cajabamba y San Marcos, y 67 a Huamachuco y Santiago de Chuco. Además de la disolución de todas la SAIS y Cooperativas Agrarias de las cuatro provincias, otra secuela de la violencia es el registro de más de 800 detenidos, muchos de ellos inocentes, y una alta emigración en los pueblos más afectados. La derrota definitiva senderista se explica por la captura de mandos importantes, como las que se producen en la Rinconada de la ciudad de Trujillo en junio de 1995, o la muerte de otros, pero también es consecuencia de la captura de Abimael Guzmán, de la dación de la Ley de Arrepentimiento y de la ofensiva del Ejército y la Policía desde 1992.

1.6.2.3. Cronología La Libertad-Cajamarca

1979-1981	Se trata de organizar Rondas campesinas en Cajabamba orientadas por Izquierda Unida.
1979	EL SUTEP Cajamarca moviliza a todos sus agremiados regionales a la huelga nacional.
1981	El PCP-SL con 30 efectivos realiza la primera incursión a la SAIS Angasmarca, en Santiago de Chuco saqueando y repartiendo bienes. Destruyen la infraestructura y asesinan a un policía. Angasmarca llega a ser zona liberada del PCP-SL.
1981	En la SAIS Tahuantinsuyo (Santiago de Chuco) el PCP-SL asesinó a más de 6 personas.
18-05-1981	El PCP-SL hace explotar petardo de dinamita en el Banco Agrario de Cajabamba.
14-01-1982	El PCP-SL se presenta en la Cooperativa Chingol, Chuquibamba Cachachi (Cajabamba) destruyendo infraestructura.
1983	El PCP-SL quiso frustrar elecciones en Marcabalito (Huamachuco). Mueren un soldado y un senderista.
28-11-1984	Se organizan rondas campesinas en Cajamarca en los caseríos de Puruay, Perolitos, El Grauro, etc.
1985	Se produce enfrentamiento entre el PCP-SL y la policía en planta de energía eléctrica en Cajabamba.
1985	Se disuelven la mayor parte de SAIS y CAP en pequeñas parcelas.
1986	Enfrentamientos en la ex-hacienda Cochabamba (SAIS Tahuantinsuyo-Huamachuco). Mueren 8 personas.
1986	Se organizan rondas campesinas en San Marcos, aproximadamente 80 comités para combatir el abigeato, apoyados por la Izquierda Unida.
23-04-1987	El PCP-SL ingresa a Shirac (Cajabamba) y asesinan al alcalde dejando pintas y banderas en la localidad.
08-1987	Senderistas ingresan al caserío El Montón (Cajabamba), dando muerte a tres personas: el teniente gobernador, el administrador y su hijo.
1987	En Hualay (Huamachuco) un grupo de senderistas asesinan al presidente de Rondas, a su esposa y el Teniente Gobernador.

1987	Se organizan rondas Autónomas en le provincia de San Marcos, llegando a formarse 112 comités.
11-1987	Policía Nacional detiene a varios estudiantes de la UNC y otros presuntos senderistas.
10-05-1988	En Araqueda, Cachachi (Cajabamba) es dinamitado el puesto de la Guardia Civil.
07-1988	En Jocos (Cajabamba) son ejecutados los dirigentes de Cooperativa, Eloy Robles y Luis Paredes. La cooperativa se disuelve.
1988	En el Collpín (Santiago de Chuco) el Ejército habría dado muerte a varios campesinos.
08-12-1989	El PCP-SL recibe un duro golpe por parte de la Policía en el caserío de Hierba Buena (Cajabamba). Mueren seis senderistas.
05-02-1990	En Tambería Cachachi (Cajabamba) es asesinado el alcalde Eleuterio Roncal.
04-10-1990	En Sanagorán (Huamachuco) el PCP-SL asesina al Teniente alcalde.
04-1991	El PCP-SL asesina a 9 policías en una emboscada tendida a una patrulla de la III Región, en Quebrada Honda, distrito de Sayapullo (Cajabamba).
1991	Asesinan en Santiago de Chuco al alcalde, al subprefecto, a un dirigente aprista y un trabajador del hospital.
12-06-1992	El PCP-SL toma los pueblos de Chuquibamba, Carrizal, Chingol y Huanza en Cachachi, Shirac en el distrito José Manuel Quiróz de San Marcos (Cajabamba).
05-11-1992	Un grupo de senderistas ingresan por la noche a Zarín (Huamachuco) asesinando al Juez, al gobernador y al alcalde.
08-03-1992	El PCP-SL ataca puesto policial de Angasmarcha (Santiago de Chuco) matando a cinco policías.
09-1992	En Campo Alegre La Grama (San Marcos) es asesinado Alipio Arroyo, padre del entonces alcalde Cajamarca.
10-06-1993	Las rondas campesinas de Rodiobamba Cachachi (Cajabamba), reciben armas en Cajamarca de parte del ejército peruano.
1993	El PCP-SL celebra sus 10 años de lucha armada con la detonación de bombas y balazos en los caseríos cercanos a Araqueda (Cajabamba).
02-05-1993	En Huamansalla (Huamachuco), la Policía da muerte a 6 senderistas.
1994	Se instala una base del ejército en Chiquibamba, Cachachi (Cajabamba).
09-1994	En La Libertad existen 32 bases antisubversivas.
18-09-1994	Atentado del PCP-SL deja en escombros el puesto policial de Quiruvilca, Santiago de Chuco, intentando liberar a 5 de sus camaradas.
25-12-1994	En Muyoc (San Marcos) la policía mata a tres senderistas.
27-05-1995	Cae Leodoro Guevara Flores, jefe del PCP-SL en Santiago de Chuco.
06-1995	La DINCOTE da duro golpe al PCP-SL al capturar a 13 integrantes de la cúpula del Comité Regional del Norte. La captura se produjo en la Rinconada (Trujillo).
14-05-1996	Mueren dos senderistas en enfrentamiento con rondas campesinas en Santo Domingo en Conchucos.
1996	En La Libertad se reducen a 17 las bases antisubversivas; crean otra en Yaguada (Santiago de Chuco)
23-04-1998	En Curgos (Santiago de Chuco) detienen a Carmen Marcelino Sandoval Loayza, presunto senderista, en cuya casa se enfrentó la PNP con 5 integrantes del PCP-SL.